CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

2000

LDA. MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
PRESIDENTA

SALA PRIMERA (CIVIL)

LDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK
PRESIDENTE

DR. ELIGIO A. SALAS **LDO. JOSÉ A. TROYANO**

LDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

LCDO. CÉSAR PEREIRA BURGOS
PRESIDENTE

LDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES **LDA. GRACIELA J. DIXON C.**

LDO. MARIANO E. HERRERA E.
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

LDA. MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
PRESIDENTA

DR. ARTURO HOYOS **LDO. ADAN ARNULFO ARJONA L.**

LDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

LDA. MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
PRESIDENTA

LDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK **LCDO. CÉSAR PEREIRA BURGOS**

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

ÍNDICE

ÍNDICE I

PLENO 1

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA LICENCIADA MAGALY L. DE MURGAS, EN REPRESENTACIÓN DE MANUEL AGUILAR VARGAS, CONTRA LA JUEZ SEXTA DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 2

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. RAFAEL SOLANO, EN REPRESENTACION DE HSIEH CHUN PIAO, CONTRA LA SENTENCIA PJ-005-2000, DE 18 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION NO. 9 DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 4

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO FLORENCIO BARBA HART, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 5

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. CARLOS R. AYALA M., EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE JOSE VICENTE RODRIGUEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCION N° 42 DE 28 DE FEBRERO DE 2000, EMITIDA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 7

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LIC. LUIS A. CARRASCO MORENO, EN REPRESENTACIÓN DE ANNETTE MARÍA CRISTINA ZELLER DE MANGRAVITA CONTRA EL TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DE FAMILIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 8

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL DOCTOR RONALD MARTIN HURLEY NOVILLE, EN REPRESENTACIÓN DE GLOBAL BANK CORPORATION CONTRA LA SENTENCIA DE 17 DE FEBRERO DE 2,000, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000). 9

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICDO. SIDNEY SITTON URETA EN NOMBRE DE RAUL ALBERTO DOMINGUEZ Y ARIADNE MARIETA DIAZ HIH, CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 11

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICDO. RAFAEL PONCE, EN REPRESENTACION DE EMPRESAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE CHIRIQUI, S. A., CONTRA EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE CHIRIQUI, APELACION. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 15

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO PEDRO VÁSQUEZ ARROCHA, EN NOMBRE Y REPRENTACIÓN DEL SEÑOR FRANCISCO TUÑÓN QUIROZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AVISO NO. 159 (MIXTO), EMITIDA POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL ORGANO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 18

AMPARO DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR BERRIOS & BERRIOS, EN REPRESENATCIÓN DE CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A., CONTRA LA ORDEN DE

HACER CONTENIDA EN EL AUTO N 1878 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE COLÓN , RAMO CIVIL, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 19

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA CORREA, BORACE & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE ROSAURA GONZALEZ DE BORACE, EN CONTRA DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO COMMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 21

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO ISMAEL RODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE ADRIANA I. ARAUZ DE CAMARGO CONTRA LA ORDEN DE HACER EMITIDA POR EL MINISTRO DE SALUD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N° 005/DAL DE 20 DE ENERO DE 2,000. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 22

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LCDO. LUIS R. ARMSTRONG EN REPRESENTACIÓN DE BONNIE JO BISHOP, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 525 DE 3 DE MAYO DE 1999, DICTADA POR LA JUEZ SEGUNDA SECCIONAL DE FAMILIA DE LA PRIMERA SECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 23

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA LCDA. FATIMA STELLA TUDISCO VILLARREAL, EN REPRESENTACIÓN DE GERTRUDIS VARGAS DE CEDEÑO, CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE ARRENDAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 25

RECURSO DE HABEAS CORPUS 27

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARIA ENGRACIA BENITEZ GARCIA CONTRA DEL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 27

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE ALBERTO VITERI RUEDA CONTRA EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN POLICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 30

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE CARMELITA ERCILIA CAIN Y AURELIO A. HOWARD CAIN CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 31

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN ANTONIO FRANCO PALOMINO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000). 33

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSE EDUARDO POTE MORENO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 34

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LEONARDO ABEGO, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 37

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PROPUESTA POR LA LICENCIADA AIDA JURADO ZAMORA EN FAVOR DE BOLÍVAR ANTONIO BECERRA MORALES CONTRA EL FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DE

SAN MIGUELITO. APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 39

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR LA LICENCIADA TERESA IBÁÑEZ EN FAVOR DE JORGE JARAMILLO, CONTRA EL FISCAL OCTAVO DE CIRCUITO DE PANAMÁ. APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 41

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE TOMAS NORIEL ESPINOZA VALDESPINO CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 42

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RAUL HERNANDEZ ARIAS CONTRA EL FISCAL NOVENO DE CIRCUITO DE CHIRIQUI. "APELACION" MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000). 44

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARCOS ANTONIO VILLALBA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 45

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OSVALDO ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 48

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE WILSON OMAR MOSQUERA MENA CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 49

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OMAR MUTIS ROMERO CONTRA LA JUEZ UNDECIMA DE CIRCUITO DE PANAMA. APELACION. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 56

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GUILLERMO GAYTAN CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 57

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE LEYKA LILIBETH GONZALEZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, 13 DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 58

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN CARLOS GODOY CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 60

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO ELIGIO SEGURA PALACIOS Y CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 61

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBEN DARIO QUIROZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS (2000). . . 62

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ERIC ESTEBAN MC FARLANE LANG CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMA, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 63

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OSCAR AUGUSTO MAYERS LOPEZ SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA JUEZ UNDECIMA DE CIRCUITO PENAL DE PANAMA, APELACION. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000). 67

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS HUMBERTO SINGH TORRES CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000). . 70

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VANDERBITH WELLINGTON BOWIE CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 70

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DIÓGENES DELGADO ASPRILLA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 71

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JULIO CÉSAR MOSQUERA VALENCIA Y EN CONTRA DEL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. (DESISTIMIENTO). MAGISTRADO PONENTE CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 73

CONFLICTO DE COMPETENCIA DENTRO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADA EN FAVOR DE RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ, ENTRE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). . . 74

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DAVID VITERI RUEDAS, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000). 77

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS HUMBERTO SINGH TORRES CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000). 78

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE WALSON MOSQUERA MOSQUERA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000). 79

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 80

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDO POR RODARI, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, CONTENIDA EN LA RESOLUCION DE 15 DE JUNIO DE 1989, VIOLATORIA DE LA CONSTITUCION NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 80

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL DR. AURELIO CORREA, EN REPRESENTACION DE MAYRA CHANG DE BOUZA, CONTRA EL ARTICULO 28-A DE LA LEY ORGANICA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 83

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO NELSON CARREYO CONTRA LA SENTENCIA N° 038-JCD-2-98 DE 28 DE JULIO DE 1998, EMITIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION N° 2 Y LA SENTENCIA DE 5 DE MARZO DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000). . . . 85

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. JUAN MATERNO VASQUEZ DE LEON EN CONTRA DE LA RESOLUCION NO. 161-93 DE 22 DE OCTUBRE DE 1993 DEL TRIBUNAL ELECTORAL- SALA DE ACUERDOS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 87

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. FERNANDO BASURTO EN REPRESENTACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 23 DE AGOSTO DE 1999, DICTADA POR LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 90

ONSULTA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA MAGDA. MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA DE LA FRASE "EL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACION", CONSAGRADA EN EL ARTICULO 370 DEL CODIGO JUDICIAL. (DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACION, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL ORGANO EJECUTIVO, PARA QUE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS RESULTADOS N 51 DE 19 DE ABRIL, N 171 DE 21 DE SEPTIEMBRE, N 190 Y N 191 DE 18 DE NOVIEMBRE, TODOS EXPEDIDOS EN 1993). MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 91

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RUBÉN MONCADA LUNA, CONTRA LA SENTENCIA N° 15 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADA POR LA JUEZA CUARTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000). 95

TRIBUNAL DE INSTANCIA 100

DENTRO DEL AMPARO DE GARANTIAS PRESENTADO POR EL LIC. EMILIO EFFIO T., EN REPRESENTACION DEL GRAN HOYEL SOLOY, S. A., CONTRA EL DIRECTOR GRAL. DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL. IMPEDIMENTO MAGISTRADO ADAN A. ARJONA L. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 100

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 102

APELACIONES 103

APELACION AL RESTO DE LA SALA INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS POLACK AYALA CONTRA EL AUTO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1999 DICTADO POR EL MAGISTRADO SUSTANCIADOR EN EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR MIGUEL ANGEL SANCHEZ ARAICA CONTRA LA SENTENCIA N° 3 F-T. DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES POR LA CUAL SE CONFIRMA LA SENTENCIA N° 057 S. F., DEL 7 DE JULIO DE 1999 DICTADA EN EL PROCESO DE FILIACION INCOADO POR MARIA MARIBEL TREJOS CHAVEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIEZ (10) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 103

APELACION INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS CARRILLO CONTRA EL AUTO DE 19 DE FEBRERO DE 2000 DICTADA POR EL REGISTRO PUBLICO, RELACIONADO CON EL ASIENTO DE INSCRIPCION 17206 DEL TOMO 2000 (GESTOR OFICIOSO DE LA SOCIEDAD CAMPELO, S. A. CONTRATO DE COMPRAVENTA POR MEDIO DEL CUAL LA SOCIEDAD DENOMINADA CAMPELO, S. A. COMPRA A LA SOCIEDAD DENOMINADA INVERSIONES KATY, S. A. LAS FINCAS 4209, 5424 Y 3669 DE SU PROPIEDAD). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, DOCE (12) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 104

APELACION INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS CARRILLO CONTRA EL AUTO DE 23 DE FEBRERO DE 2000 DICTADO POR EL REGISTRO PUBLICO, RELACIONADO CON EL ASIENTO DE INSCRIPCION 10638 DEL TOMO 2000 (GESTOR OFICIOSO DE LA SOCIEDAD ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A. -INVERSIONES KATY, S. A. CELEBRA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON LA SOCIEDAD ADMINISTRACIÓN Y GESTION HOSTELERA, S. A. SOBRE LAS FINCAS 4209, 5424, 8960 Y 7079. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, DOCE (12) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 106

APELACION INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS CARRILLO CONTRA EL AUTO DEL 19 DE

FEBRERO DE 2000, RELACIONADO CON EL ASIENTO DE INSCRIPCION 17202 DEL TOMO 2000 (GESTOR OFICIOSO DE AIDA DIAZ - CONTRATO DE COMPRA VENTA POR MEDIO DEL CUAL AIDA DIAZ COMPRA A LA SOCIEDAD DENOMINADA GONZALEZ Y PAZ, S. A. LAS FINCAS 34711 Y 7597 DE SU PROPIEDAD.) MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). . . . 108

APELACION INTERPUESTA POR CARLOS CARRILLO CONTRA EL AUTO DEL 22 DE FEBRERO DE 2,000 DICTADO POR EL REGISTRO PUBLICO, RELACIONADO CON EL ASIENTO DE INSCRIPCION 10211 DEL TOMO 2,000 (GESTION OFICIOSA DE ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A. -CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE LAS SOCIEDADES ANONIMAS DENOMINADAS GONZALEZ Y PAZ, S. A. Y ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A.). MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 110

APELACION INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS CARRILLO CONTRA EL AUTO DEL 23 DE FEBRERO DE 2000 DICTADO POR EL REGISTRO PUBLICO, RELACIONADO CON EL ASIENTO DE INSCRIPCION 10628 DEL TOMO 2,000 (GESTOR OFICIOSO DE ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A. -CONTRA DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE LAS SOCIEDADES ANONIMAS DENOMINADAS INMOBILIARIA VASQUEZ LOPEZ, S. A. Y ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A.). MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 111

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 113

PRIMERA AGENCIA DE SEGURIDAD, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO INTERPUESTO POR SOFIA PUELLO DE IGLESIAS CONTRA PRIMERA AGENCIA DE SEGURIDAD, S. A. Y/O JUAN MANUEL GODOY HERNÁNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 113

EUFEMIA BARRIOS VDA. DE BRANDAO, ROBERT HENRY BRANDAO BARRIOS Y GLADYS AMAYA DE BRANDAO RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE EDUARDO A. CASTRO CASTILLERO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 114

VIDA PANAMA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ORCON, S. A. E IMPORTADORA PANAMA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000). 115

ALEJANDRO A. DUQUE VILLARREAL, TOMÁS GERARDO DUQUE VILLARREAL, GABRIELLA DUQUE DE MITCHELL, SONYA DUQUE DE GREEN, DORA DUQUE DE SPUTO, RITA BALBINA DUQUE DE GARCÍA, CARMEN LORENA DUQUE DE OROZCO Y DYANE ALICE DUQUE DE LÓPEZ RECURREN EN CASACIÓN EN LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA DE CARMINA DUQUE GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 116

EDISA FLORES DE DE LA ROSA RECURRE EN CASACION EN EL INCIDENTE DE TASACION DE HONORARIOS PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR LAMINADOS MON DE CHEPO, S. A. CONTRA DISTRIBUIDORA MERCATEC, S. A. Y PEDRO PABLO CASTRELLON CEDEÑO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIEZ (10) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 120

COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A FRITZ COMPANIES (PANAMA), INC. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIEZ (10) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 123

MAYA CHANDRU NATHANI RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, DIEZ (10) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 123

PHARMED GROUP PANAMA, S. A. Y PHAR MED SALES PANAMA, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR PHARMED GROUP PANAMA, S. A. CONTRA PHAR MED SALES PANAMA, S. A. Y QUALITY SUPPLY DE PANAMA, S. A. MAGISTRADO

PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 124

CHILE HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED RECURRE EN CASACIÓN EN LAS MEDIDAS CONSERVATORIAS O DE PROTECCIÓN EN GENERAL PRESENTADAS CONTRA LAITH TRADING AND CONTRACTING COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 125

ANA JULIA DE VELARDE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD INTERNATIONAL MACHINERY AND EQUIPMENT TRADING CORPORATION. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 125

CARLOS GUARAGNA RIVERA RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE PEDAL INTERNATIONAL CORP. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 126

RODOLFO ALEJANDRO TROETSCH ESPINO RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A PETROLERA DEL CARIBE, S. A. Y FRANCISCO SAMUDIO T. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CATORCE (14) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 130

RHONE DEVELOPMENT, S. A. RECURRE EN CASACION EN LA MEDIDA CONSERVATORIA O DE PROTECCION QUE LE SIGUE A BUENOS AIRES HOTEL CORPORATION Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CATORCE (14) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 131

WICO COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A., RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, CATORCE (14) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 131

LION INTERNATIONAL BANK & TRUST LTD. RECURRE EN CASACION EN LA MEDIDA DE PROTECCION Y CONSERVACION EN GENERAL QUE LE SIGUE A BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA (BANAICO) EN LIQUIDACION. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). . . 137

RECURSO DE HECHO 137

EL LICENCIADO LEOVIGILDO ATENCIO DIAZ INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCION DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 1999 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTIA INCOADO POR ESTELA HERRERA BARRIA CONTRA AGROINDUSTRIAL LOPEZ ORTEGA, S. A. Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 138

EL LICENCIADO JULIO ERNESTO ESPINAL RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 11 DE FEBRERO DE 2000 DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR ADELINA CÁRDENAS Y ANTONIA CÁRDENAS CONTRA VÍCTOR CÁRDENAS ESPINO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 139

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 141

AUTO APELADO 142

AUTO APELADO EN EL PROCESO QUE SE LE SIGUE A MANUEL ANTONIO BATISTA POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL COMETIDO EN PERJUICIO DE ERISON CAICEDO VIVEROS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 142

RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE CARLOS YAÑEZ ALVAREZ,

SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE RAFAEL CLEMENTE ABREGO GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 144

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO 145

PROCESO SEGUIDO A MOISES OBANDO MOREIRA, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000). 145

AUTO DE PROCEDER APELADO A FAVOR DE DANNY SOSA VERGARA, POR LA COMISIÓN DEL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MIGUEL POSADA JIMÉNEZ. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 148

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 150

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FRANCISCO REYNA JEANNETTE, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 150

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JULIO CESAR HINSTROZA DA COSTA, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 151

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A MAGNA ESTHER VALDESPINO AGRAZAL, SINDICADA POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 152

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RAMON GAITAN SOLIS, SINDICADO POR DELITO DE HURTO DE AUTO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 154

RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE HUG GEORGE OWENS, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). . . 156

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALEJANDRO GONZÁLEZ FLETCHER, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ABRIL DE 2000. 157

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A YUKIO KAIVANO MURILLO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ABRIL DE 2000. 159

SE ADMITE RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A REYNALDO XAVIER MCLEAN MAXWELL Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 160

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JULIO ENRIQUE BARRIA SINDICADO POR EL DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL EN PERJUICIO DE DALHAIRA FUENTES CORONADO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). . 161

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALONSO E. TETE DUTARY SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000). 163

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MARCOS AURELIO MENDIETA OSORIO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000). 164

RECURSO DE CASACION DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JAIME ADRIAN MARTINEZ Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000). 172

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JOSE JORGE AGUIRRE SALDAÑA Y OTRO, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000). 173

INCIDENTE 175

INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, PRESENTADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE VIRGILIO OLMOS APARICIO, INVESTIGADO POR EL DELITO DE INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDOR PÚBLICO COMETIDO EN PERJUICIO DE EVANGELINA GONZÁLEZ DE MARÍN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 175

RECURSO DE REVISIÓN 175

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR ALBERTO RODRÍGUEZ SANCIONADO POR DELITO DE ROBO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 176

RECURSO DE REVISION SOLICITADO POR VICTOR JAVIER PINO, SANCIONADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGIASTRADA P0NENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000) 176

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR SAMUEL PÉREZ MONTERO CONDENADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 179

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO EDILBERTO KOOCSSY P. EN FAVOR DE SAÚL ABEL DELGADO RODRÍGUEZ CONDENADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 180

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR WILLIAM GONZÁLEZ VIVEROS CONDENADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEITICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 181

PROCESO SEGUIDO A DENIS JOSE MONTENEGRO CHAVARRIA Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000). 182

PROCESO SEGUIDO A ROY ALCIDES ARIAS CASTAÑEDAS POR DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO Y A MICHAEL ALBERT SPEARS BULGIN POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO, EN PERJUICIO DE ROBERT L. MESSMER. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 186

SUSTRACCIÓN DE MATERIA 190

SUSTRACCIÓN DE MATERIA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A NANCY SAAVEDRA POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA Y CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000). 190

TRIBUNAL DE INSTANCIA 191

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN SEGUIDAS POR LA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, COMETIDO EN PERJUICIO DE PEDRO AÑINO AGRAZAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 191

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL 193

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 194

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS MOORE EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES LOS ACUERDOS NOS. 16 DE 14 DE ABRIL DE 1998, EL N° 21 DE 16 DE JUNIO DE 1998, AMBOS EXPEDIDOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA, (APROBACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN ENTRE LA EMPRESA SUFI INTERNACIONAL (PANAMA) Y EL MUNICIPIO DE LA CHORRERA). MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 194

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE, EN REPRESENTACIÓN DE EXPANSIÓN EXTERIOR, S. A. Y DE ICASUR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 03772 DE 26 DE JULIO DE 1999, DICTADA POR LA MINISTRA DE SALUD, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 195

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA PATTÓN, MORENO & ASVAT, EN REPRESENTACIÓN DE COMUNIDAD ARABE DE PANAMA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 201-2142 DE 31 DE DICIEMBRE DE 1996, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 197

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA EL LCDO. ELIECER PRADO EN REPRESENTACIÓN DE MARCOS DOMINGUEZ URRIOLA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA ACCIÓN DE PERSONAL N° 1498 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1997, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 200

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDWIN A. SALAMÍN EN REPRESENTACIÓN DE MANUEL JAEN SORIANO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA S/N DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 203

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ GÓMEZ EN REPRESENTACIÓN DE MOISÉS QUINTERO SANTANA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 1060 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADO POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 204

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO NELSON ROJAS, EN REPRESENTACIÓN DE GILBERTO PARILLÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 28-99 D. DE 4 DE OCTUBRE DE

1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 205

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALBERTO BARRÍA, EN REPRESENTACIÓN DE JOSE JERONIMO HUC CASTILLO, PARA QUE SE DECLAREN NULAS, POR ILEGALES, LAS RESOLCUIONES NO. 468-D-136 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1999 Y LA NO. 519-R-157 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1999, AMBAS DICTADAS POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL 2000. 206

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARISTIDES COLLAZOS, EN REPRESENTACIÓN DEL CLUB DE BOTES DE PEDRO MIGUEL, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLCUIÓN NO. 378-98 DE 22 DE JUNIO DE 1998, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 207

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO LUQUE GARAY, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MARINE RECOVERY INC., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 135, DE 19 DE AGOSTO DE 1998, EXPEDIDA POR EL ENTONCES MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 208

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALVARO MUÑOZ FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE DAYSI FLORES AROSEMENA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 15-872-J.D. DE 2 DE MARZO DE 1998, DICTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 213

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JAIME FRANCO PÉREZ, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS VILLAMIL, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 067 DE 7 DE ABRIL DE 1997, EXPEDIDO POR EL GERENTE DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 220

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINSTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FERNANDO SOLORZANO EN REPRESENTACIÓN DE MARGARITA ESILDA SOLORZANO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA DECISIÓN DE 22 DE MAYO DE 1998, DE LA COMISIÓN DE FONDO COMPLEMENTARIO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 226

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR POR LA FIRMA BARRANCOS & HENRIQUEZ S.P.C., EN REPRESENTACIÓN DE DIMAS DIAZ Y DANIEL J. PEREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN D.E. N° 02/98 DE 19 DE ENERO DE 1998, DICTADA POR EL INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 234

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA

FIRMA TILE Y ROSAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA MARQUETING SERVICES AND PRODUCTS, INC, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 213-1802, DE 19 DE MAYO DE 1997, EXPEDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 237

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMETERIO MILLER EN REPRESENTACIÓN DE D & N ASOCIADOS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° GG-27-97 DE 18 DE ABRIL DE 1997, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 244

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ EN REPRESENTACIÓN DE FERNANDO LEWIS PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 213-3528 DE 6 DE AGOSTO DE 1996 DICTADA POR EL ADMINITRADOR REGIONAL DE INGRESOS, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 251

DEMANDA CONTECIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BENEDICTO DE LEÓN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ALVARO MUÑOZ FUENTES, PARA QUE EL ESTADO LE CANCELE LA SUMA DE B/.5,000.00, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO, PRESTADOS AL ESTADO A SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS DE LA ÉPOCA, LICENCIADO RODRIGO AROSEMENA DE ROUX. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 257

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE GERALDA DE RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL RESUELTO N° R. D. 001-2000 DE 5 DE ENERO DE 2000, DICTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 262

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CÉSAR RUILOBA, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN ALFONSO LÓPEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 77-99 DE 6 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL COMANDANTE PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). . 262

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO JOVANÉ DEL CID, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN S/N DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL MINISTRO DE ASUNTOS DEL CANAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 264

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA EDILIA CEDEÑO DE MONTÚFAR, EN REPRESENTACIÓN DE MIRKA MORÁN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN N° 262-99 (D) DE 8 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ASÍ COMO SU ACTO CONFIRMATORIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE (2000). 264

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROLANDO PALACIOS EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 29-97 "D" DE 14 DE FEBRERO DE 1997, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 265

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE DONADO RAMOS EN REPRESENTACIÓN DE DEYANIRA CHANIS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 65-00 DE 14 DE ENERO DE 2000, DICTADO POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000). 270

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE DONADO RAMOS EN REPRESENTACIÓN DE EMERITA MORENO DE DE LEÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 01-00 DE 3 DE ENERO DE 2000, DICTADO POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000). 271

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ GUTIÉRREZ EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS ALVAREZ FRANCO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO N° 149 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1999, EXPEDIDO POR LA SUBJEFA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000). 272

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA MONCADA & MONCADA, EN REPRESENTACIÓN DE JACOBO WRIGTH, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 37-99 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, VEINTISEIS (26) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 273

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA VIOLA MENDIETA DE DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE AILEEN BAYLESS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 286-99 (D) DE 15 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 274

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ-RUÍZ & ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DRP NO. 348-98, DE 18 DE AGOSTO DE 1998, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 275

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA VIRGINIA SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE RUBÉN REYNA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL DECRETO EJECUTIVO NO. 200, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADO POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DE LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 281

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LIC. RAÚL E. RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ALFREDO MACHARAVIALLA Y CÉSAR ZEBEDE MACHARAVIALLA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 05-99 DE 19 DE FEBRERO DE 1999, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 283

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. EMETERIO MILLER, EN REPRESENTACIÓN DE GRAVA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA CERTIFICACIÓN DE 21 DE JUNIO DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MINIERALES DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 285

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS CARRILLO EN REPRESENTACIÓN DE ORCILA VEGA DE CONSTABLE, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL DECRETO EJECUTIVO N° 200 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DE LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000). 286

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA ARCIA, VARGAS & VELÁSQUEZ EN REPRESENTACIÓN DE SUSANA MELAIS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 10 DE 14 DE ENERO DE 2000, DICTADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000). 287

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD 288

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OLMEDO ARROCHA EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 190-C.CI DE 29 DE MAYO DE 1993, DICTADA POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, Y EL ACUERDO MUNICIPAL N° 12 DE 17 DE ENERO DE 1995, DICTADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 288

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS EN REPRESENTACIÓN DE DIANA ROSAS CARLES ROVIRA Y RUBY CARLOS RIBA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO NO. 205 DE 9 DE JUNIO DE 1999, DICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 294

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ALMA L. CORTÉS A., EN REPRESENTACIÓN DE PRODUCTOS SONAEÑOS, S. A., SERVICIOS DE CARNES DE PANAMA, S. A. Y MATADERO CHIRIQUÍ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 223 DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DE LA MINISTRA DE SALUD. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 295

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARNULFO A. PEÑALBA, EN REPRESENTACIÓN DE RODRIGO HERNAN AROSEMENA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° D.N.8-5-0403 DE 11 DE MARZO DE 1997, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

. 302

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA IRENE ABREGO, EN REPRESENTACIÓN DEL INGENIERO ROBERTO BARRAZA BENITEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL ACTA DE PROCLAMACIÓN DEL INGENIERO HÉCTOR MONTEMAYOR, COMO RECTOR ELECTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ PARA EL PERÍODO 1998-2003, EMITIDA POR EL GRAN JURADO DE ELECCIONES Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 310

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICDO. GABRIEL MARTINEZ GARCES, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES LOS ARTÍCULOS PRIMERO, TERCERO, QUINTO Y SEXTO DEL DECRETO N 194-LEG DE17 DE SEPTIEMBRE DE 1999, EXPEDIDO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 310

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEJANDRO FERRER, EN REPRESENTACIÓN DE CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS LITERALES "D" Y "E" DEL ARTÍCULO PRIMERO Y EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ACUERDO N° 7 DE 26 DE AGOSTO DE 1999, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHAME. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 312

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ZULAY L. ROSRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACION AMIGOS DE LOS ANIMALES, PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 Y 14 DE LA RESOLCUIÓN NO. 022 DE 28 DE ENERO DE 2000, DICTADA POR EL MINISTRO DE SALUD. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 314

IMPEDIMENTO 317

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FÁBREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO EN REPRESENTACIÓN DEL PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. PRIBANCO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILECNCIO ADMINISTRATIVO, INCURRIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, AL NO CONTESTAR LA PETICIÓN POR ESCRITO DE 4 DE FEBRERO DE 1999, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 317

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACION, INTERPUESTA POR EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR LA JUNTA DE APELACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 319

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTO POR LA FIRMA ESKILDSEN & ESKILDSEN EN REPRESENTACIÓN DE CAFE SITTON, S. A, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA NOTIFICACIÓN N° 3554 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1998, EXPEDIDA POR LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 320

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL DOCTOR AURELIO CORREA ESTRIBÍ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDO POR LA COMISIÓN DE FONDO COMPLEMENTARIO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL,

AL NO CONTESTAR LA SOLICITUD FORMULADA EL 16 DE AGOSTO DE 1999 Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 321

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. GABRIEL MARTINEZ GARCES, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES LOS ARTÍCULOS PRIMERO, TRERCERO, QUINTO Y SEXTO DEL DECRETO N° 194-LEG DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1999, EXPEDIDO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 322

INCIDENTE 323

INCIDENTE DE RECUSACIÓN PROMOVIDO POR EL DOCTOR DIÓGENES AROSEMENA, CONTRA EL MAGISTRADO ARTURO HOYOS, DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTO POR AQUÉL, CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 99-15-D DEL 20 DE JULIO DE 1999, DICTADA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 324

JURISDICCIÓN COACTIVA 325

EXCEPCION DE PRESCRIPCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA GÓMEZ, GIRALDO & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA DISCOTESCA J & J, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL JUZGADO EJECUTOR DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ LE SIGUE. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 325

EXCEPCION DE PRESCRIPCION, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARISOL MARÍN, EN REPRESENTACIÓN DE EDILMA CASTILLO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 327

EXCEPCION DE PRESCRIPCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ DEL CARMEN MURGAS, EN REPRESENTACIÓN DE MARITZA ESTELA DE BROWN, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 329

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 330

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. SIXTO ABREGO EN REPRESENTACIÓN DE LUIS MENDEZ O LUIS MENDEZ NAJERA, CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE JULIO DE 1998 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: LUIS MARIA MENDEZ ESPINOSA -VS- OCCIDENTAL LIFE COMPANY OF NORTH CAROLINA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 331

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA CARREIRA PITTI P. C. ABOGADOS, EN REPRESENTACIÓN DE EMILY DIOCADES QUIEN ACTUA EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO ENALD DIOCADES, CONTRA LA SENTENCIA DE 10 DE MARZO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: EMILY DIOCADES -VS- MITSUI O. S. K. LINES LTD. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 332

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ANÍBAL HERRERA PEÑA EN REPRESENTACIÓN DE EPIFANIO PALACIOS, CONTRA LA SENTENCIA DE 28 DE ENERO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S. A. -VS- EPIFANIO PALACIOS. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ,

VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 333

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO SANTANA GONZALEZ ATENCIO, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE ENRIQUE SAMUDIO CONTRA LA SENTENCIA DE 20 DE AGOSTO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JORGE ENRIQUE SAMUDIO -VS- SEGURIDAD INDUSTRIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 337

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ALVARO MUÑOZ FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE AMELIA DEL CARMEN ORTEGA, CONTRA LA SENTENCIA DE 16 DE MARZO DE 2,000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: EMPRESAS ROMERO INC. -VS- AMELIA DEL C. ORTEGA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000). 340

TRIBUNAL DE INSTANCIA 345

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD, EN REPRESENTACIÓN DE MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-0956-99 DE 14 DE JULIO DE 1999, EXPEDIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 345

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 347

CARTA ROGATORIA 348

CARTA ROGATORIA EMITIDA POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL BANCARIO, REFERENTE AL JUICIO POR COBRO DE BOLÍVARES SIGUE LA SOCIEDAD FINANCIERA BANCOR, C. A. Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA CONTRA FIELD REAL STATE CORPORATION. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000). 348

TRIBUNAL DE INSTANCIA 349

INCIDENTE DE RECUSACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ALEJANDRO MONCADA CONTRA EL MAGISTRADO HUMBERTO COLLADO, DENTRO DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, PARA QUE LA SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES LE OTORGUE CONCEPTO FAVORABLE PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS AL DIRECTOR GENERAL Y AL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13 DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 349

DENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA ROSA ARAÚZ DE DELGADO CONTRA EL LICENCIADO LEONEL URRIOLA CASTILLO, POR FALTAS A LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000). 351

SOLICITUD FORMULADA POR EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO SOSSA, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, A FIN DE QUE LA SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LE OTORGUE CONCEPTO FAVORABLE PARA REMOVER DE SUS CARGOS DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, A LOS LICENCIADOS ALEJANDRO MONCADA Y RAMIRO JARVIS, RESPECTIVAMENTE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000). 355

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

ABRIL DE 2000

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA LICENCIADA MAGALY L. DE MURGAS, EN REPRESENTACIÓN DE MANUEL AGUILAR VARGAS, CONTRA LA JUEZ SEXTA DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce esta Superioridad de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por la licenciada Magaly L. de Murgas en representación de MANUEL AGUILAR VARGAS contra la supuesta orden de hacer contenida en la Providencia de 10 de febrero de 2000, proferida por la Juez Sexta de Circuito de Chiriquí dado que, según la amparista, ha quebrantado varias disposiciones constitucionales como lo son los artículos 17, 18, 32, y 231.

DECISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL

La alzada en estudio ha sido dirigida a enervar la Resolución con data de 10 de febrero de 2000 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual no se admitió la acción de amparo presentada por la licenciada Magaly L. de Murgas aduciéndose como motivación fundamental lo siguiente:

> "Ahora bien, el artículo 2606 del Código Judicial señala que los amparos de garantía constitucionales serán interpuestos contra orden de hacer y no hacer y como manifestamos anteriormente la resolución atacada es de aquella de mero obedecimiento ...
>
> Podemos concluir entonces, que lo que el funcionario demandado hizo fue cumplir una orden emanada por esta corporación de justicia, la cual se encontraba ejecutoriada (f. 15), y no estaba ordenando hacer una cosa, sino obedeciendo lo dispuesto por este ente jurisdiccional en auto del 3 de junio de 1998". (Subrayado es del Pleno)

SUSTENTACION DEL RECURSO DE APELACION

Por su parte, la licenciada MURGAS al sustentar la alzada incoada, ha vertido conceptos en cuanto a la procedencia de la viabilidad de la acción, en estos términos:

> "1. La resolución judicial que es objeto de la presente acción constitucional. contiene una real y efectiva orden de hacer al disponer de modo expreso que el ganado secuestrado por la Fiscalía Segunda del Circuito de Chiriquí, en garantía de los resultados del Proceso Penal seguido a LILIA ELIZABETH CEDEÑO, FELIPE CEDEÑO y ALBERTO CEDEÑO, fueran entregados a NOEMÍ AGUILAR CORELLA y no a su verdadero dueño, MANUEL AGUILAR VARGAS.
>
> 2. El Auto recurrido es, según analiza el Tribunal Superior, un proveído de mero obedecimiento y sobre el cual deduce, no es procedente la acción constitucional, y por ello, se ha decretado la inadmisibilidad de la demanda de amparo, sin que se haya contemplado que el fondo del Proceso Penal al cual accede el secuestro, fue decidido mediante Auto Penal de 11 de noviembre de 1999, que reconoce el derecho de propiedad de mi representado, MANUEL AGUILAR VARGAS sobre las reses que se pretenden entregar a un tercero.
>
> 3. Para arribar a esta decisión, el auto recurrido cita conceptos de EDGARDO MOLINO MOLA, quien estima que no es posible admitir un Amparo contra un proveído de mero obedecimiento, porque de lo

contrario se desvirtuaría su naturaleza de este último al aceptar un medio de impugnación en su contra y por otro lado se le estará brindando la oportunidad de acceder a una instancia que ya precluyó. Este criterio que no comparto, equipara el Amparo a un medio común de impugnación y procura establecer la Acción Extraordinaria Constitucional de Amparo Constitucional, como si fuera otra instancia del proceso, de lo cual existen numerosos pronunciamientos contrarios a este concepto.

4. La orden contenida en la Resolución de 10 de febrero de 2000, entra en abierta contradicción con el pronunciamiento de fondo contenido en el Auto Penal de 11 de noviembre de 1999, que reconoce al señor MANUEL AGUILAR VARGAS como dueño del ganado que se le pretende entregar a un tercero, como lo es NOEMÍ AGUILAR CORELLA y también, entra en incompatibilidad jurídica con respecto al claro pronunciamiento vertido en la Sentencia Civil de 20 de agosto de 1999, que resuelve el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por NOEMÍ AGUILAR CORELLA contra el Alcalde Municipal del Distrito de Boquerón, proferido por el propio Tribunal Superior, cuando al calificar el Auto de restitución indicado, advirtió que esta pieza procesal es `un auto interlocutorio para concluir sentenciando que dicha resolución no le otorga a NOEMÍ AGUILAR CORELLA en forma inequívoca derecho de propiedad alguno sobre el ganado que ahora pretende recibir. De allí, la inconsistencia del prponunciamiento que motiva el presente Recurso y la violación del derecho de propiedad que ostenta mi representado, quien ha acreditado ser el legítimo dueño del ferrete CA, mediante sendas certificaciones de la autoridad administrativa competente, como lo es el Alcalde Municipal de Boquerón y en virtud de los claros pronunciamientos posteriores que le han conferido la `condidción de dueño del ganado del cual se le pretende despojar".

Encontrándose el recurso en este estado los Magistrados del Pleno proceden a resolver la presenta controversia.

DECISION DEL PLENO

Esta Superioridad procede al análisis de la resolución apelada y de los argumentos esbozados por la parte actora, y sobre el particular debe expresar lo siguiente:

De acuerdo a las constancias procesales que reposan en este proceso constitucional, estima esta Corporación Judicial que es importante puntualizar que la orden de hacer que se estima ha quebrantado el contenido mandatorio de normas de garantias constitucionales, es corolario de una decisión emanada del propio Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en tiempo anterior, y contenida en el Auto de 3 de junio de 1998 dentro de un incidente de restitución de bienes interpuesto por el licenciado Alvaro Muñoz Fuentes, en representación de Noemí Aguilar Corella, incoado a su vez dentro del sumario seguido contra Lilia Elizabeth Cedeño por el delito de hurto pecuario (ver de foja 49 a 50). Esta situación se traduce a que realmente la orden de hacer impugnada, caracterizada por la Resolución de 10 de febrero de 20000, no es el resultado de una decisión autónoma y particular de la Juez Sexta de Circuito de Chiriquí, sino mas bien constituye el acatamiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado del Tercer Distrito Judicial, que es el superior jerárquico de la precitada funcionaria judicial (ver foja 15 del expediente). Estas situación se corrobora con la siguiente transcripción:

"Vista la solicitud que antecede, presentada por el Licenciado Alvaro Muñoz Fuentes, apoderado judicial de Noemí Aguilar Corella y de conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial mediante Auto Penal fechado 3 de junio de 1998, en el cual Declara Probado el Incidente de Restitución de Bienes

presentado por el letrado Muñoz Fuentes y Dispone que los bienes secuestrados por la Fiscalía Segunda del Circuito de Chiriquí sean restituidos a Noemí Aguilar Corella, este Tribunal advierte que dentro del presente negocio penal ya se encuentran agotados todos los recursos legales, en consecuencia debe cumplirse lo dispuesto por el Tribunal Superior". (Subrayado es del Pleno)

En todo caso, frente a la disconformidad que plantea el amparista, éste debió recurrir contra la decisión emanada del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, es decir contra el Auto de 3 de junio de 1998 en su momento, pues es evidente que a la parte interesada en este proceso constitucional de amparo, le precluyó el término para oponerse a dicha resolución judicial.

En atención a todo lo explicado este Pleno no le queda otra alternativa que confirmar la decisión del Tribunal Ad-Quem, en el sentido de que la demanda de amparo no debe ser admitida, dado que no se trata de una orden de hacer propiamente tal.

Por las consideraciones expuestas, los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMAN la Resolución con data de 10 de febrero de 2000 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual no se admitió la acción de amparo presentada por la licenciada Magaly L. de Murgas.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. RAFAEL SOLANO, EN REPRESENTACION DE HSIEH CHUN PIAO, CONTRA LA SENTENCIA PJ-005-2000, DE 18 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION NO. 9 DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor HSIEH CHUN PIAO, representante legal de la sociedad TAIYORK OVERSEAS METAL PANAMA, S. A., ha promovido mediante su apoderado judicial especial el Lcdo. Rafael Solano G., proceso de amparo de garantías constitucionales contra la sentencia PJ-9-005-2000 de 18 de febrero de 2000, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión No. 9 de Colón, dentro del proceso laboral Alexis Antonio Moreno contra TAIYORK OVERSEAS METAL PANAMA, S. A.

El recurrente pretende a través del presente recurso, que el Pleno revoque y deje sin efecto la orden de hacer contenida en la sentencia aludida. En ésta se declara injustificado el despido de que fue objeto el trabajador ALEXIS ANTONIO MORENO, y en consecuencia, se condena a la empresa TAIYORK OVERSEAS METAL PANAMA, S. A., al pago de B/.900.00 en concepto de salarios; B/.224.00, B/.128.00, B/.56.58 en concepto de prima de antigüedad; y B/.189.96, más costas.

El amparista fundamento su demanda en los siguientes hechos:

"PRIMERO: El pasado 25 de enero de 2000, el Lcdo. Jorge Velez Valdez, en representación del trabajador Alexis Antonio Moreno, presentó formal demanda laboral contra la sociedad TAIYORK OVERSEAS METAL PANAMA, S. A. "por despido injustificado y Pago de indemnización y otras prestaciones" ante la Secretaría de la Junta de conciliación y Decisión No. 9 de colón.

SEGUNDO: La demanda que fué presentada ante la Secretaría de la Junta de Conciliación y Decisión por el propio Lic. Vélez Valdés, aducía como pruebas "Acta de Conciliación del 15 de diciembre de 1999, Contrato de Trabajo por tiempo definido" entre otras.

TERCERO: Que en el acto de presentación, la funcionaria que recibe la demanda deja constancia en la página donde imprime el sello de presentación y en presencia del Lic. VELEZ VALDES a través de una nota que "Nota: Las pruebas presentadas que se aportaron junto con la demanda todas son fotocopias".

CUARTO: Que en representación de la sociedad TAIYORK OVERSEAS METAL PANAMA, S. A. fue notificado con fecha 11 de febrero de 2000 el señor ROY HSIEH, ciudadano Chino que no habla, lee ni escribe español, sin que se le permitiera hacerse acompañar de un intérprete o persona alguna que le explicara de manera comprensible el contenido del acto o diligencia de la que se notificaba.

La parte actora afirma que la sentencia recurrida viola de manera directa por comisión los artículos 17 y 32 de la Constitución Política.

En cuanto al artículo 17, la Corte ha señalado en múltiples ocasiones que esta norma es de carácter programático, por lo que se descarta la atinencia de la infracción de esta disposición en apoyo de una acción de amparo.

Dentro de este contexto, esta Superioridad observa que la pretensión formulada en la presente acción se ubica fundamentalmente en el plano de la legalidad, toda vez que si bien se invoca como infringida la garantía constitucional del debido proceso legal prevista en el artículo 32 de nuestra Carta Magna, dicha transgresión se hace consistir en violaciones a normas legales (artículos 227, 228, 766 y 965 del Código de Trabajo) que no constituyen un desarrollo legal de los elementos esenciales de la garantía constitucional mencionada; por lo que se considera, que no se ha formulado correctamente la demanda ya que el proceso de amparo no es el medio impugnativo idóneo para considerar si la interpretación de las normas jurídicas ordinarias y valoración de pruebas hechas por el juez de la causa ha sido correcta o no.

Dentro de este orden de ideas, el Pleno ha sido reiterativo al señalar que no le es dable a la Corte Suprema entrar a analizar las posibles transgresiones a normas legales, sino únicamente a preceptos constitucionales, así como tampoco le compete a esta entidad la ponderación de las normas interpretativas o las pruebas evaluadas por el juzgador a-quo dentro de un proceso de amparo de garantías constitucionales. En ese sentido, la Corte debe abstenerse de entrar a efectuar este tipo de análisis, de lo contrario, el proceso constitucional de amparo de garantías se convertiría en una tercera instancia dentro de los procesos laborales en los que se debaten despidos y así se podría desnaturalizar el objeto del proceso de amparo de garantías constitucionales.

Ante este escenario jurídico se desprende que, independientemente de que esta Corporación comparta o no la decisión adoptada en este proceso por la Junta de Conciliación y Decisión No. 9, no puede entrar a conocer el fondo de la pretensión porque, como hemos expresado, ésta se aparta del ámbito de un proceso de amparo.

Como corolario de lo antes expuesto, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO

ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales propuesto, por HSIEH CHUN PIAO contra la JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION NO. 9.

Notifíquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO FLORENCIO BARBA HART, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Florencio Barba Hart en su propio nombre y representación ha propuesto amparo de garantías individuales contra la orden de hacer dictada por la Junta Directiva de la Autoridad de la Región Interoceánica consistente en la elaboración de una terna de candidatos propuestos para el cargo de Administrador General y Sub Administrador General y presentada a la consideración de la Presidenta de la República.

Se procede en primer término, al examen del escrito contentivo de la acción incoada, a fin de determinar si el mismo ha cumplido con los requisitos legales que hacen viable su admisión.

En este punto se percata el Tribunal, que la acción instaurada no cumple una serie de exigencias técnico formales que impiden darle curso legal a la misma.

En primer lugar, la parte actora no ha aportado la presunta orden de hacer proferida por la Junta Directiva de la Autoridad de La Región Interoceánica, cuyo contenido, según el amparista, es la elaboración de una terna de candidatos propuestos para el cargo de Administrador.

El anterior requisito exigido para imprimirle el trámite a la acción de amparo, tiene respaldo en la copiosa y reiterada jurisprudencia sentada por el Pleno, con arreglo a la cual, en estos casos, debe aplicarse el contenido del artículo 2610 del Código Judicial en su parte final, en asocio con el artículo 820 de la misma excerta legal. En este sentido se ha insistido en la imperatividad de acompañar las acciones de Amparo de Garantías Constitucionales, con la copia debidamente autenticada del acto acusado. Veámos que dicen los preceptos comentados:

> "Artículo 2610. Además de los requisitos comunes a todas las demandas, la de amparo deberá contener.
>
> 1. Mención expresa de la orden impugnada;
>
> 2. Nombre del servidor público, funcionario, institución o corporación que la impartió;
>
> 3. Los hechos en que funda su pretensión; y,

> 4. Las garantías fundamentales que se estimen infringidas y el concepto en que lo han sido.
>
> Con la demanda se presentará laprueba de la orden impartida, si fuere posible o manifestación expresa, de no haberla podido obtener." (Subrayado es nuestro)
>
> "Artículo 820. Los documentos se aportarán al proceso en originales o en copias, de conformidad con lo dispuesto en este Código. Las copias podrán consistir en transcripción o reproducción mecánica, química o por cualquier otro medio científico. Las reproducciones deberán ser autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original, a menos que sean compulsadas del original o en copia auténtica en inspección judicial y salvo que la ley disponga otra cosa." (Subrayado es nuestro)

En efecto, en Resolución de 31 de octubre de 1991 esta Sala Plena, al conocer de una acción de Amparo presentada en condiciones similares a la que nos ocupa, señaló de manera específica lo siguiente:

> "El amparista ha presentado unas fotocopias sin autenticar y a pesar de que a mano se lee `fiel copia de su original', no tiene el respaldo de ninguna firma y menos de persona que, en desempeño de cargo alguno, certifique lo expresado. Es condición de admisibilidad de la demanda presentar autenticadas copias de los documentos que se aportan para sustentar la acción de amparo."

En relación a este mismo punto, son consultables las resoluciones proferidas por esta Superioridad, calendadas 27 de mayo de 1991, 17 de junio de 1992 y 7 de abril de 1995.

En segundo lugar, otro defecto que observa esta Superioridad Judicial en el escrito de amparo es que se colige que lo que persigue el licenciado Florencio Barba, es que se declare inconstitucional la supuesta actuación de la Junta Directiva de la Autoridad de la Región Interoceánica en relación a la elaboración de una terna de candidatos propuestos para el cargo de Administrador en la Autoridad de la Región Interoceánica, que según el amparista es violatoria a la Constitución. Esta pretensión a todas luces resulta improcedente en una acción de amparo de garantías, dado que la vía idónea para tales objetivos es una demanda de inconstitucionalidad.

La acción de Amparo de Garantías Constitucionales, por la especialidad de la materia que tutela, está diseñada para reparar violaciones directas a la Constitución, principalmente cuando se trata de actos que por su gravedad e inminencia requieren su revocación inmediata, lo cual impide manifiestamente al Juzgador decidir sobre puntos que no estén relacionados con el tema de las garantías constitucionales.

Por último y no menos importante, de lo manifestado por el licenciado Florencio Barba Hart en el libelo de demanda, se desprende que la actuación que pretende confrontar el precitado con la Constitución Política, no es una orden de hacer. Al respecto el doctor EDGARDO MOLINO MOLA ha definido orden de hacer, que es el "mandato imperativo para que se haga algo" (MOLINO MOLA, Edgardo. La Jurisdicción Constitucional en Panamá en un Estudio de Derecho Comparado. Primera Edición 1998. Bibilioteca Jurídica DIKE. Pág. 560). Este concepto, trasladado al acto que se pretende anular vía amparo, trae como conclusión que, la elaboración de una terna de candidatos no es precisamente un mandato imperativo, sino, es una actuación administrativa preparatoria que está sujeta a la decisión posterior de la autoridad pública encargada, que en este caso es la Presidenta de la República, de escoger a la persona que cumpla con los requisitos para ocupar el cargo para lo cual se ha elaborado esa nómina de aspirantes.

En estas circunstancias, y en vista de las deficiencias que se advierten

en la acción presentada, la Corte se ve precisada a reiterar su negativa de imprimirle el curso legal.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por el licenciado Florencio Barba Hurt en su propio nombre y representación.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. CARLOS R. AYALA M., EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE JOSE VICENTE RODRIGUEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCION N° 42 DE 28 DE FEBRERO DE 2000, EMITIDA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos R. Ayala M., actuando en nombre y representación de JOSE VICENTE RODRIGUEZ, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la resolución N° 42 de 28 de febrero de 2000, emitida por el Ministro de Vivienda.

En la demanda se le solicita a la Corte que revoque la orden de hacer contenida en la resolución N° 42 de 28 de febrero de 2000, emitida por el Ministro de Vivienda, por medio de la cual se resuelve destituir al señor José V. Rodríguez del puesto de Jefe del "DEPTO. DE MANT.INTERNO con la posición N° 1-58 en la Unidad Administrativa de "LA DIRECCION ADMINISTRATIVA-DEPTO. DE MANT. INTERNO".

Observa el Pleno que el problema planteado se ubica en el plano de la legalidad, toda vez que la destitución de los servidores públicos se encuentra regulada en diversas leyes y no en la Constitución.

En razón de lo anteriormente expuesto, no procede la acción de amparo de garantías constitucionales, pues la resolución impugnada es un acto administrativo el cual es susceptible de ser impugnado en la vía contencioso administrativa ante la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, previo agotamiento de la vía gubernativa. Cabe señalar que la Corte ha sostenido en reiteradas ocasiones que el amparo de garantías constitucionales no es la vía procesal adecuada para impugnar el mencionado acto administrativo.

Por otra parte, la Corte advierte que la demanda infringe el artículo 2610 del Código Judicial, pues se aprecia que la resolución contentiva de la orden de hacer impugnada consiste en una copia simple que no ha sido autenticada por el ente administrativo a cuyo cargo corresponde la custodia del documento original, es decir, el Ministerio de Vivienda.

Por las razones expuestas la demanda es manifiestamente improcedente y no debe admitirse, conforme a lo dispuesto en el artículo 2611 del Código Judicial.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesto por el licenciado Carlos R. Ayala M., actuando en nombre y representación de JOSE VICENTE RODRIGUEZ, contra la orden de hacer contenida en la resolución N° 42 de 28 de febrero de 2000, emitida por el Ministro de Vivienda.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LIC. LUIS A. CARRASCO MORENO, EN REPRESENTACIÓN DE ANNETTE MARÍA CRISTINA ZELLER DE MANGRAVITA CONTRA EL TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DE FAMILIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el Licenciado LUIS A. CARRASCO, actuando en representación de ANETTE MARÍA CRISTINA ZELLER MANGRAVITA contra la supuesta orden de hacer contenida en el Auto No. 45, de 2 de diciembre de 1999, proferida por el TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DE FAMILIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA.

La alzada se dirige contra el Auto de 21 de febrero del 2000, dictado por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual no se acogió la demanda de amparo propuesta.

Por anunciado y sustentado se tiene el recurso de apelación en tiempo oportuno, por lo que procede la Corte a decidir lo que en derecho corresponde.

El Primer Tribunal Superior expresó la opinión de que la acción de amparo no se encuentra dirigida contra una orden de hacer o de no hacer, tal como lo exige la Constitución y la Ley. En ese sentido considera que el acto impugnado, por cuanto es una resolución que decide un incidente de nulidad, no es susceptible de ser atacado por la vía de la acción de amparo de derechos fundamentales, según lo ha señalado la doctrina jurisprudencial

Según se aprecia, el Auto No. 45 de 2 de diciembre de 1999, proferido por el Tribunal de Apelaciones y Consultas de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, resolvió revocar el Auto No. 16 de 21 de julio de 1999, dictado por el Juzgado Segundo Municipal de Familia, y en su lugar, decretó la nulidad de todo lo actuado, a partir de la fojas 24 inclusive del expediente; lo que indica que el acto atacado mediante la presente acción constitucional, decide un Incidente.

Esta Corporación de Justicia se ha pronunciado repetidamente en el sentido de que las órdenes de hacer aparecen en aquellos pronunciamientos jurisdiccionales o administrativos, que en su parte resolutiva contienen un mandato, dirigido a un particular o a una autoridad, cuyo cumplimiento afecta derechos constitucionales fundamentales, mientras que es orden de no hacer la

prohibición decretada por las mismas autoridades que lesiona derechos subjetivos del mismo rango.

En la presente causa constitucional la Corte comparte el criterio del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que es conforme a reiteradas decisiones en las que se han dejado de admitir acciones de amparo contra resoluciones que deciden un incidente de nulidad por no contener éstas, en su parte dispositiva, una orden de hacer o de no hacer.

Visto lo anterior, el ejercicio de la presente iniciativa constitucional resulta a todas luces improcedente.

Por las razones anteriores, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 21 de febrero del 2000, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, llegada en grado de apelación.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL DOCTOR RONALD MARTIN HURLEY NOVILLE, EN REPRESENTACIÓN DE GLOBAL BANK CORPORATION CONTRA LA SENTENCIA DE 17 DE FEBRERO DE 2,000, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Doctor Ronald Martin Hurley, actuando en su calidad de apoderado judicial sustituto de la entidad bancaria GLOBAL BANK CORPORATION (fusionado con el BANCO CONFEDERADO DE AMERICA LATINA, S. A. (COLABANCO), ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la Sentencia s/n dictada el 17 de febrero de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía instaurado por el BANCO CONFEDERADO DE AMÉRICA LATINA, S. A. (COLABANCO) contra el señor MOHD HUSSEIN MUSTAFA DAOUD.

Corresponde al Pleno determinar si la acción interpuesta cumple con los requisitos formales establecidos en los artículos 626, 2608, 2609 y 2610 del Código Judicial.

Una detenida revisión de las piezas del cuaderno de amparo permite advertir que el recurrente presenta, a foja 11 del expediente, un poder otorgado personalmente ante el Notario Público Tercero para actuar en nombre y representación de la parte actora, donde se indica que OTTO OSWALD WOLFSCHOON HORNA, en su calidad de apoderado general de la entidad bancaria GLOBAL BANK CORPORATION, sociedad legalmente inscrita en el Registro Público a la ficha 281810, Rollo 40979, Imagen 0025, sección mercantil, confiere poder al abogado Dr.Ronald Martin Hurley Noville como abogado sustituto para que, en su nombre y representación, promueva demanda de amparo de garantías constitucionales. No obstante, el recurrente no aporta copia de la Escritura Pública donde la sociedad demandante otorgó el poder general al señor OTTO OSWALD WOLFSCHOON HORNA ni la

certificación correspondiente del Registro Público, por lo que se incumple con los requisitos contemplados en el artículo 625 del Código Judicial que señala:

> "Artículo 625: El apoderado general para procesos podrá presentar, para acreditar su carácter, copia de la escritura pública en que se otorga el poder, con la respectiva anotación del Registro Público o mediante la presentación de un certificado de dicho registro en el cual conste el número y fecha de la escritura con que se otorgó el poder, que éste no ha sido revocado, y qué facultades le han sido concedidas al apoderado, de las enumeradas en el artículo 623."

En ese mismo orden, al no acompañar con la demanda la certificación del Registro Público no se ha podido acreditar la existencia legal de la entidad que se representa, y, por tanto, no hay constancia de la personería que dice ostentar la entidad bancaria y que es la prueba fundamental para acreditar la legitimación procesal activa de la parte demandante.

El artículo 626 del Código Judicial señala: "Para comprobar la existencia legal de una sociedad, quién tiene su representación en proceso, o que éste no consta en el Registro, hará fe el certificado expedido por el Registro dentro de un año inmediatamente anterior a su presentación".

No consta en el expediente la certificación del Registro Público acreditando la existencia jurídica de la sociedad demandante y, en el caso de que ésta se encontrase registrada, no existe certeza sobre si quien otorgó el poder para acudir ante el Pleno de la Corte tenía efectivamente facultades para ello.

Por las anteriores consideraciones la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por el Doctor Ronald Martin Hurley, actuando en su calidad de apoderado judicial sustituto de la entidad bancaria GLOBAL BANK CORPORATION, (fusionado con el BANCO CONFEDERADO DE AMERICA LATINA, S. A. (COLABANCO), contra la sentencia s/n dictada el 17 de febrero de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICDO. SIDNEY SITTON URETA EN NOMBRE DE RAUL ALBERTO DOMINGUEZ Y ARIADNE MARIETA DIAZ HIH, CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado RICAUTE MARTÍN ESCUDERO BARRIOS, actuando en nombre y representación de los señores ARIADNE MARIETA DÍAZ HIH Y RAÚL ALBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 1 S. P. P. A. G. de 13 de enero de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, que revocó la Resolución N° 204-99 del 2 de agosto de 1999 emitida por la Juez Seccional de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Veraguas.

La acción de amparo fue presentada el día 18 de febrero de 2000, y dado que reunía los requisitos formales exigidos por la ley, fue admitida y sometida a las reglas establecidas para este tipo de acciones.

Los antecedentes revelan que el proceso se inicia con un caso de Protección (Situación de Riesgo Social) de la menor CARLA PINEDA, quien ingresa a la Jurisdicción Especial de Menores cuando tenía tan sólo un (1) mes de nacida ya que su madre biológica, señora Octavia Pineda presentaba problemas emocionales. Ante esta situación el Juzgado de Niñez y Adolescencia de Veraguas ordenó como medida de protección el ingreso de la recién nacida a Nutre Hogar, para que recibiera la atención especializada por el problema de desnutrición que padecía.

Posteriormente, después de tres (3) meses, la menor CARLA PINEDA fue ubicada en un Hogar Sustituto conformado por los señores RAÚL ALBERTO DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ y ARIADNE MARIETA DÍAZ HIH, a fin de que recibiera todas la atenciones físicas, morales y psicológicas, apropiadas para su desarrollo emocional y lograr que la misma superase las deficiencias generadas de su medio familiar de origen, generadas por causas económicas, problemas familiares conflictivos, entre otros.

Ante estas circunstancias, el Juzgado Seccional de Menores de Veraguas, mediante Resolución N° 204-99 de 2 de agosto de 1999, suspende la Patria Potestad de la menor CARLA PINEDA, a su madre biológica, señora Octavia Pineda.

Al momento de notificarse de dicha decisión, la señora Octavia Pineda anunció apelación, recurso este que fue sustentado en tiempo oportuno por su apoderada judicial, Licenciada MARÍA ESTENIA DE GRACIA MORALES, quien manifestó que su representada no descuidó a su hija ni tampoco la entregó a Nutre Hogar, que la perturbación emocional de su mandante al momento de ubicarse a la menor en protección, ya la había superado, por lo que no era justo privarle de la patria potestad de su hija. Además arguyó la Defensora que no se puede justificar para la adopción de tal decisión la pobreza de su representada, toda vez que entonces el Estado despojaría de cada uno de sus hijos a las familias pobres de este país y que jamas se puede suspender de manera definitiva la Patria Potestad, si no más bien de manera simple, provisional o temporal. (Fs. 153-154 del expediente)

Se le corrió traslado del negocio a la Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial, Licenciada Guillermina Mc Donald de Ottey, quien al respecto conceptúa que la falta de posibilidad económica que atraviesa la señora Octavia Pineda para asumir la responsabilidad de la manutención de su hija CARLA PINEDA constituye un flagelo que agobia a muchos padres y madres de este país, por lo que no se puede alegar esta situación para despojar del seno materno a la menor.

La representante del Ministerio Público también señala que en ningún momento se ha demostrado algún estado de abandono que haya sufrido la menor como se ha dejado plasmado en el expediente, por lo que considera que no hay asidero jurídico para suspender la patria potestad a la señora Octavia Pineda, ya que luego de la crisis ésta puede hacerse cargo de su hija. (Fs. 164-167 del expediente)

Posteriormente el expediente fue remitido al Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia para la alzada, quien al resolver el recurso de apelación revoca la decisión de la Juez de Primer Grado, mediante la Resolución N° 1 S. P. P. A.G de 13 de enero de 2000. Esta Resolución revocatoria por parte del A-Quem consistió en la decisión de reintegrar la Patria Potestad de la niña CARLA PINEDA a su madre biológica, señora Octavia Pineda. (Fs. 170-175 del expediente). El Tribunal arribó a esta decisión en virtud de que no se puede condenar a una madre por el solo hecho de ser pobre, además porque ha quedado demostrado en el expediente que la madre biológica de la menor no da cuenta de ningún abuso de bebidas alcohólicas, hay mejoría en su conducta y consta certificación de la evaluación psicológica realizada por el Instituto de Medicina Legal en la que se determina las óptimas condiciones mentales de la señora Octavia Pineda. (Fs. 133-135 del expediente)

Es en virtud de esta Resolución, que el representante legal de los amparistas interpone la presente acción constitucional, la que fundamenta en los siguientes aspectos:

Que el criterio adoptado por el Tribunal Ad-Que es a todas luces peligroso y contrario al verdadero Interés Superior de la Niña, toda vez que entrega a la niña a su madre biológica para que posteriormente se formalice la adopción con sus mandante, siempre y cuando no medie recompensa económica, situación que -a juicio del actor- es de alto riesgo para la salud, desarrollo emocional y psicológico de la menor CARLA PINEDA.

Considera el Representante Legal de los amparistas que la Resolución refutada en amparo, viola de manera directa el artículo 17 de la Constitución Nacional al omitirse el cumplimiento de lo establecido en dicha norma, que a la letra expresa lo siguiente:

> "Las Autoridades de la República de Panamá, están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quieran que se encuentren y a los extranjeros que están bajo su jurisdicción, asegurarle la efectividad de sus derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley."

Respecto a la citada norma, el apoderado judicial de los amparistas señaló que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia con su fallo desprotege a la niña CARLA PINEDA, porque la expone a sufrir circunstancias especialmente difíciles de riesgo social y maltrato por parte de su madre biológica, y la priva de un ambiente lleno de felicidad, amor, atenciones, futuro y bienestar como el que le prodigan sus mandantes los señores Domínguez Díaz.

Otra de las normas constitucionales que el actor cita como infringida por parte del Juez Ad-Quem es el artículo 52, cuyo contenido señala lo siguiente:

> "El estado protege al matrimonio, la maternidad y la familia. La Ley determinará lo relativo al estado civil.
>
> El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales. Igualmente tendrá derecho a esta protección los ancianos y enfermos desvalidos."

Estima el actor que la orden de hacer contenida en la Resolución N° 1 S. P. P A. G. del 13 de enero de 2000 igualmente viola los artículos 3, 6, 21 y 24 de la Convención de los Derechos del Niño, los cuales tienen rango constitucional según la doctrina del bloque de la constitucionalidad.

Considera también el actor, que la Resolución impugnada es incongruente con la realidad procesal, violatoria del Interés Superior de la menor CARLA PINEDA, quien ha vivido con sus mandantes desde que tenía tres (3) meses de edad a la fecha, gozando de un hogar lleno de atenciones extremas (por sus delicados problemas de salud), oportunidades escolares, buenas relaciones sociales y aceptación por los esposos Domínguez Díaz como una verdadera hija.

Finalmente, solicita a esta Alta Magistratura que suspenda, revoque y en consecuencia deje sin efecto con el carácter de urgencia que el caso amerita, la orden de hacer contenida en la Resolución N° 1 del 13 de enero de 2000, emitida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, por que considera que es violatoria del Interés Superior de la niña CARLA PINEDA.

Luego del análisis de la presente acción constitucional procede el Pleno de la Corte ha resolver en el fondo, previa las siguientes consideraciones:

Primeramente, observa esta Corporación de Justicia que se ha cumplido con

el requisito formal del agotamiento de los medios ordinarios que hacen viable este tipo de acción contra resoluciones judiciales.

Así, pues, nos encontramos ante un amparo de garantías constitucionales contra la Resolución N° 1 S. P. P. A. G. de 13 de enero de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia que en virtud de un recurso de apelación decidió revocar la Resolución dictada por el Juzgado Seccional de Menores de Veraguas, por medio de la cual se suspende la patria potestad de la niña CARLA PINEDA, a su madre Octavia Pineda. Contraria a esta decisión, el Tribunal A-Que devuelve la custodia de la menor a su madre biológica.

Si bien es cierto que la acción de amparo tiene por objeto reparar una violación directa a los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política, el Pleno de la Corte considera que en el caso en comento, no se ha comprobado donde reside la violación directa de las normas constitucionales alegadas por el recurrente.

Por ello, esta Corporación de Justicia comparte plenamente la decisión del Tribunal de Segunda Instancia de reintegrar la custodia de la menor CARLA PINEDA a su madre biológica, más aún cuando ha quedado demostrado en el expediente la voluntad de la señora Octavia Pineda de hacerse responsable de su hija, lo cual indica que no se ha producido abandono efectivo o definitivo como argumenta el recurrente.

Un hecho cierto y que no podemos negar es el estado emocional que en un principio padeció la señora Octavia Pineda, situación esta que le impidió desenvolver su verdadero rol de madre que de acuerdo a las constancias procesales hoy la ponen en capacidad de llevar a cabo.

Por otra parte, la Corte también comparte el criterio plasmado por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia en el sentido de que no podemos castigar a los padres por el solo hecho de ser pobres o de carecer de las mejores condiciones económicas, ya que si así fuera el Estado tendría que hacerse cargo de todos los niños de familias pobres de este país o arrancarlos del seno de sus padres biológicos para entregarlos a otros más pudientes y ello no es velar por el mejor interés del menor.

Consta a fojas 46-52 del expediente, el informe social elaborado por el Trabajador Social Licenciado Felipe González en el que pone de manifiesto que la señora Octavia Pineda ingresó al hospital regional de la provincia de veraguas por trauma leve por caída de cabello, estrés y trauma social grave, producto de una entrevista que mantuvo con el padre de su hija, a quien le solicitó ayuda económica, pero éste se negó, la agredió y la trató de loca. También señala que la señora Octavia Pineda sufrió trauma post- partum, motivo por el cual agentes de la Policía de Menores llevaron a la menor a las autoridades, quienes posteriormente la entregaron a Nutre Hogar para su debida protección.

En el mes de abril de 1999, la señora Octavia Pineda fue evaluada psicológicamente por los galenos del Instituto de Medicina Legal de veraguas, quienes certificaron que la evaluada estaba consciente y que además no evidenciaba trastorno alguno de personalidad tipo psicótico o de retardo mental, por lo que se encontraba en plena capacidad para cuidar a su hija CARLA PINEDA.

Lo anterior demuestra que la señora Octavia Pineda en ningún momento entregó voluntariamente a su menor hija a la Institución de Nutre Hogar, pues era obvio que en ese momento, por su estado de salud, no podía hacerse cargo de la niña.

Considera esta Superioridad, que en el presente caso no se ha producido abandono absoluto por parte de la madre biológica de la menor, por lo que su conducta no se enmarca dentro del artículo 300 del Código de la Familia.

Por otro lado, ha quedado acreditado en el expediente que tanto la señora

Octavia Pineda como sus familiares han demostrado apego emocional e interés en cuidar a la niña, a pesar que no ofrecen las mejores condiciones económicas.

Es importante señalar que uno de los principios básicos en materia de menores se traduce en que todo menor no será separado de su familia, salvo circunstancias excepcionales establecidas en la ley con la finalidad de protegerlo. En este sentido, la Corte no encuentra el mérito para desconocer los derechos de la señora Octavia Pineda ya que si en algún momento existió esa circunstancia excepcional, en el expediente ha quedado acreditado, que en la actualidad esa circunstancia ya desapareció.

Esta Sala Plena comprende la emoción que despierta un conflicto como el que hoy nos ocupa, de quienes deben estar al mejor cuidado de la menor Carla Pineda, sin embargo el cariño y el amor que ambas partes sienten por la niña no las debe colocar en un plano de incapacidad para poder entender armónicamente y sin excluirse que primero está el Interés Superior de la niña. No dudamos en ningún momento el cariño, el amor, el apoyo y la protección que hoy le puedan brindar a la niña, ambas partes.

En síntesis, el Pleno considera que no se ha producido violación al Principio del Interés Superior del Menor por parte del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia ni tampoco de las normas constitucionales y de la Convención de los Derechos del Niño alegadas por los amparistas.

No obstante, ante las circunstancias que rodean el presente caso y en especial la separación prolongada entre madre e hija, esta Superioridad sugiere que para asegurar la protección, la integridad emocional, mental y física que comprende el bienestar de la menor CARLA PINEDA, se ubique a la misma en un hogar distinto al de su madre biológica Octavia Pineda, sin perjuicio de los derechos que esta mantiene respecto a su hija, y consecuentemente se establezca un régimen de visitas el cual deberá ser regulado por el Juez de la causa en atención al interés superior de la niña, de manera que se logre la comunicación, el afecto y la unidad de la relación materno-filial.

En virtud de lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DENIEGA la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el Licenciado RICAUTE MARTÍN ESCUDERO BARRIOS en representación de los señores ARIADNE MARIETA DÍAZ HIH Y RAÚL ALBERTO DOMÍNGUEZ ALVAREZ, contra la Resolución N° 1 S. P. P. .A. G. del 13 de enero de 2000 proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA y en consecuencia DISPONE se realicen las actuaciones correspondientes a fin de que se establezca la relación entre madre e hija, en los términos sugeridos en la parte motiva de esta sentencia.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(CON SALVAMENTO DE VOTO) (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (CON SALVAMENTO DE VOTO)
(CON SALVAMENTO DE VOTO) (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS ADAN ARNULFO ARJONA L., ROGELIO A. FABREGA Z., HUMBERTO A. COLLADO T., Y CESAR PEREIRA BURGOS.

Con todo respeto deseamos expresar que disentimos de la decisión adoptada por la mayoría en este caso, puesto que, consideramos que existen una serie de hechos que, en nuestra opinión, justifican la concesión del Amparo propuesto, en aras de preservar el interés superior de la menor Karla Pineda:

1. En el expediente existe abundante material probatorio que aparentemente evidencia que la madre biológica de la niña tiene un historial de vida poco edificante y favorable al bienestar de la menor (Vgr. consta en Autos que la señora Octavia Pineda estuvo recluída por alteraciones emocionales en la Sala de Psiquiatría del Hospital Regional de Santiago; se dedicó a la prostitución y presentó problemas con abuso de alcohol, Véanse fojas 68, 74, 79, 81 y 82 de los antecedentes).

2. La señora Octavia Pineda vivía y vive en la actualidad en condiciones de extrema pobreza, su casa es de dos cuartos y está hecha con materiales de corta duración, piso de tierra, sin agua ni luz eléctrica y una letrina en estado deplorable (Véase reporte de la visita domiciliaria que realizó la Trabajadora Social el 14 de junio de 1999, fojas 139 y 140 de los antecedentes). En el mencionado informe técnico se observó lo siguiente en cuanto al ambiente familiar en que vive la madre biológica de la niña "La situación económica de la familia es precaria, no hay los recursos para que tengan una alimentación adecuada, no hay acceso a los servicios de salud, la vivienda carece de las condiciones propicias para el desenvolvimiento familiar" (Ver foja 142 de los antecedentes).

3. Hay constancia en el expediente de que los padres sustitutos de la menor le han brindado y le brindan un esmerado cuidado y atención (Veánse fojas 71, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 105, 106 del expediente de Amparo). Igualmente, le han ofrecido adecuadas condiciones de bienestar en el año y medio que tienen de estar al cuidado de la menor (Veánse fojas 102 a 104 de los antecedentes). El Psiquiatra Ramiro Díaz Cabal en certificación que aparece a foja 107 del expediente de Amparo señala:

> "Damos fe de una adecuada relación marital, ambiente familiar y social.
>
> Su hija adoptiva, Karla Pineda sin lugar a dudas ha formado un nexo psicológico fuerte y saludable con los padres, pariente y núcleo social adoptivo.
>
> Raúl y Marieta Domínguez son los padres psicológicos de Karla".

4. Las circunstancias que exhibe el expediente razonablemente hacen prever que la entrega de la niña a su madre biológica, señora Octavia Pineda, expondrá a la primera a un entorno socio-económico y moral ciertamente desfavorable al interés superior de la menor, razón por la cual, estimamos que existen fundados motivos para salvaguardar mediante este Amparo dicho interés superior como lo ha hecho la Corporación en anteriores decisiones.

5. Las encomiables atemperaciones que se le introdujeron a la decisión de mayoría desafortunadamente no tienen, a nuestro juicio, la fuerza vinculante que las circunstancias del presente caso ameritan, pues ellas aparecen sólo en la parte motiva y no en la resolutiva.

Con apoyo en los motivos precedentemente expuestos, respetuosamente manifestamos que, SALVAMOS EL VOTO.

Fecha ut supra.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICDO. RAFAEL PONCE, EN REPRESENTACION DE EMPRESAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE CHIRIQUI, S. A., CONTRA EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE CHIRIQUI, APELACION. MAGISTRADO PONENTE: JOSE

A. TROYANO. PANAMA, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Rafael Ponce González, representante judicial de la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE CHIRIQUÍ, S. A. presentó recurso de apelación contra el Auto Civil de 29 de febrero de 2000, emitido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que no admitió la acción de amparo de garantías constitucionales que propuso contra las órdenes contenidas en las Providencias N° 008 de 4 de febrero, y la Nota N° 12SJ-DRTCH-2000, de 22 de febrero de 2000, emitidas por el Director Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí.

A través de la primera, dicho funcionario dejó constancia de la recepción de un pliego de peticiones entregado por un grupo de "supuestos" trabajadores de la demandante, y corrió el pliego en traslado por el término de cinco -5- días; mediante la segunda, designó al conciliador regional de trabajo para que atendiera la negociación correspondiente.

La resolución del Tribunal Superior no admitió el amparo, en base a la jurisprudencia nacional que ha señalado que no procede la acción de amparo de garantías constitucionales para impugnar la admisión o traslado de un pliego de peticiones, y que ellos -el Tribunal Superior- ya la habían utilizado antes, y reprodujo un extracto de un fallo, en ese sentido.

En el recurso de apelación que nos ocupa, el actor difiere del argumento planteado por el Tribunal, toda vez que un fallo de esta Corporación de Justicia, de 22 de diciembre de 1999, concedió un amparo de garantías constitucionales en iguales circunstancias.

En el presente caso, la Providencia y la Nota mencionadas fueron objeto de la acción original de amparo, porque el pliego de peticiones presentado por un grupo de trabajadores de la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S. A. no cumplió con el requisito contenido en el artículo 430 del Código de Trabajo, de la necesidad de que el pliego de peticiones sea respaldado con la firma del 30% de los trabajadores de la empresa cuando constituyen un grupo no organizado, ni cumplió con el artículo 428 de la misma excerta, que establece los requisitos que debe contener el pliego de peticiones, exigencias éstas que son mínimas para que el Director de Trabajo pueda ordenar el traslado del pliego a la empresa, y que ésta pueda replicarlo.

Consideró el actor que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial debió admitir la acción de amparo, y conocer el fondo del asunto, en base a la jurisprudencia de la Corte, ya mencionada; que los 69 trabajadores que firmaron el pliego, que forman parte de los 274 que forman la totalidad de los empleados de la empresa, no alcanza el 30% que exige el Código de Trabajo, lo cual -explica el actor- consta en el expediente.

El representante de la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE CHIRIQUÍ, S. A. consideró que los actos impugnados violaron los artículos 17, 18 y 32 de la Constitución Nacional.

El primero -deberes de los funcionarios públicos-, fue infringido por omisión -a juicio de la amparista- porque al ordenar el funcionario acusado el traslado del pliego de peticiones a la empresa sin verificar el cumplimiento de los artículos 428 y 430 del Código de Trabajo, dejó desprotegidos los bienes de la empresa al obligarla a negociar el pliego con un grupo minoritario de trabajadores que no cumple los requisitos legales para ello.

El artículo 18 Constitucional -responsabilidad de los particulares por violación a la Constitución y la Ley, y los funcionarios públicos por lo mismo y por extralimitación u omisión en el ejercicio de sus funciones-, fue infringido

según el actor, porque el Director Regional de Trabajo de Chiriquí es responsable por ordenar el traslado del pliego de peticiones a la empresa, sin verificar que los petentes alcanzaran el 30% de los trabajadores que allí laboraban, según lo manda la ley.

Que el artículo 433 del Código Laboral ordena al Director de Trabajo señalar los defectos del pliego al recibirlo, y los trabajadores tienen la obligación de subsanarlo, y el funcionario acusado no verificó que el grupo de trabajadores que presentó el pliego, alcanzara el 30% legal.

Finalmente, el artículo 32 íbidem -principio del debido proceso- fue violado según la amparista, porque al ordenar el funcionario acusado el traslado del pliego de manera indebida, obligó a la empresa a incorporarse a un proceso de negociación de un pliego de peticiones por parte de un grupo minoritario de trabajadores, dejando en "estado de indefensión" a la actora, porque tiene que negociar condiciones de trabajo que de no acordarse, permiten el ejercicio del derecho de huelga por parte de dicho grupo minoritario.

Es decir, que el Director Regional de Trabajo de Chiriquí ha obligado a EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE CHIRIQUÍ, S. A., sin que el pliego de peticiones presentado cumpliera con lo establecido en los artículos 428 y 430 del Código Laboral, y con el peligro de que los trabadores se acojan al derecho de huelga; con ello, el debido proceso fue violado -según la amparista- porque se violó el derecho de EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE CHIRIQUÍ, S. A. de que su oponente en el proceso -los trabajadores- esté debidamente legitimado.

Vertidas las principales consideraciones del problema planteado, se avoca el Pleno a emitir su decisión, previas las siguientes consideraciones.

En síntesis, el recurso de apelación contra la Resolución emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, estriba en la inconformidad contra la misma, que consideró que la corrida en traslado del pliego de peticiones defectuoso y la designación del mediador de la Dirección Regional de Trabajo, no son materia de amparo, en virtud del fallo de 22 de diciembre de 1999, proferido por esta Corporación de Justicia, que concedió un amparo de garantías constitucionales en similares circunstancias.

Por lo tanto, la esencia de la controversia se funda en que si las circunstancias expuestas son materia de amparo.

En primer lugar, advierte el Pleno que el libelo cumple los requisitos contenidos en el artículo 2610 del Código de Judicial; también cumplió el requerimiento de agotamiento de los medios impugnativos, establecido por el artículo 2606.

Considera el Pleno que la pretensión de esta iniciativa impugnativa, cual es que se admita el recurso de apelación y se ordene al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial que resuelva el fondo de la controversia, implica resolver en el fondo el amparo de garantías constitucionales propuesto, pues la base de la apelación, cual es el fallo de 22 de diciembre de 1999 emitido por esta Corporación de Justicia, resolvió el fondo de la controversia allí planteada, pues concedió el amparo, en aquella oportunidad.

Como mencionamos, el libelo cumplió con las formalidades establecidas por la ley, para ser admitido.

Sin involucrarnos en un análisis de fondo de la materia, es ostensible que, en similares circunstancias, la Corte ventiló el fondo del problema, con el resultado deseado por el apelante.

Por lo tanto, es nuestro criterio que el caso debe ser decidido en el fondo, y por ello, hay que conceder este recurso de apelación.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el Auto Civil de 29 de febrero de 2000, dictado por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que no admitió el recurso de amparo de garantías constitucionales interpuesto por la EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE CHIRIQUÍ, S. A. contra las órdenes contenidas en la Providencia N° 008, y la Nota N° SJ-DRTCH-2000, ambas de 22 de febrero de 2000, proferidas por el Director Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí, y; ORDENA al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial resolver el fondo del negocio.

Cópiese, Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO PEDRO VÁSQUEZ ARROCHA, EN NOMBRE Y REPRENTACIÓN DEL SEÑOR FRANCISCO TUÑÓN QUIROZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AVISO NO. 159 (MIXTO), EMITIDA POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL ORGANO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Pedro Vásquez Arrocha, actuando en nombre y representación del señor Francisco Tuñón Quiroz, ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia demanda de amparo de garantías contitucionales, contra la supuesta orden de hacer contenida en el Aviso No. 59 (Mixto), de 28 de enero de 2000, mediante la que se somete a concurso una posición de oficial mayor II, en el Juzgado Primero de Circuito Penal, del Tercer Circuito Judicial. La orden identificada fue emitida por la licenciada Maruquel Arosemena, en su calidad de Directora de la Dirección de Recursos Humanos del Organo Judicial.

El amparista funda su demanda en una serie de hechos y consideraciones entre los cuales afirma que tiene derecho a permenecer en su puesto de trabajo, por la estabilidad que le otorga el artículo 271 del Código Judicial. Además, cita el artículo 119 del Acuerdo No. 46, de 27 de septiembre de 1991, reglamentario de la carrera judicial, según el que los funcionarios a que se refieren los artículos 190 y 271 del Código Judicial, conforme a las reformas introducidas por la Ley 19 de 1991, permanecerán en sus cargos pero sólo tendrán derechos a los otros beneficios de la Carrera Judicial si ingresan a ella mediante concurso (Ver fojas 4-5).

Según el demandante, la orden de hacer reprochada ha violado el artículo 32 de la Constitución Política que establece el principio del debido proceso legal; afirma que se "evidencia su quebrantamiento" y que conforme al "debido trámite legal", el señor Francisco Tuñón Quiroz tiene "derecho a permanecer en el cargo, lo que resultaría vulnerado si ese cargo se abre a concurso, desconocimiento que se traduce en infracción de la norma Constitucional" (foja 6).

Este Máximo Tribunal de Amparo estima que la presente acción especial de tutela de garantías fundamentales no debe ser admitida, por cuanto la supuesta orden de hacer es un acto administrativo cuyos medios ipugnativos previstos en

el ordenamiento jurídico no existe prueba en el expediente de amparo que hayan sido utilizados, en la vía administrativa, por el ahora amparista, contra el acto que estima viola su alegado derecho a permancer en el cargo que actualmente ocupa desde 1986 en el Juzgado Primero de Circuito Penal del Tercer Circuito Judicial, con sede en el Distrito de La Chorrera.

Al respecto es clara la jurisprudencia de esta Superioridad que con fundamento en el artículo 2606 del Código Judicial requiere que se hayan agotado los recursos ordinarios que el ordendamiento jurídico otorga al particular para atacar un acto administrativo como el que se impugna, además que, una vez agotada la vía administrativa, la esfera preferente para revisar la legalidad del acto administrativo respectivo es la contencioso administrativa, ejercida por la Sala Tercera de esta Corporación de Justicia.

Tampoco observa el Pleno el requisito de "gravedad e inminencia del daño" que la orden de hacer en referencia puede irrogar al demandante, ya que el Aviso No. 59 en cuestión sólo anuncia el sometimiento de la posición o cargo a concurso público, convocatoria en la cual incluso puede participar el impugnante, si cumple con los requisitos para aspirar a la posición; de ahí que lo apropiado es denegar, por improcedente, la admisión de esta petición de amparo.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia, en nombre de la República de Panamá y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales incoada por el señor Francisco Tuñón Quiroz, a través de apoderado judicial, contra la supuesta orden de hacer contenida en el Aviso No. 59 (Mixto) dictada por la Directora de Recursos Humanos del Organo Judicial.

Notifíquese,

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR BERRIOS & BERRIOS, EN REPRESENATCIÓN DE CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N 1878 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE COLÓN , RAMO CIVIL, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia del Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la firma forense BERRIOS & BERRIOS, en nombre y representación de la sociedad CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A. contra la orden de hacer contenida en el Auto 1878 de 29 de diciembre de 1999, emitido por el Juez Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Colón.

El recurso fue anunciado y sustentado dentro del término otorgado por el artículo 2616 del Código Judicial, tal como se observa a foja 159 y 160 del expediente que se examina.

LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

La Sentencia de 3 de febrero del 2000, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, declaró no viable el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la firma forense BERRIOS & BERRIOS, en nombre y representación de la sociedad CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A., contra el Auto No. 1878 de 29 de diciembre de 1999, a través del cual se declara en estado de quiebra a la sociedad Centro Médico del Caribe, S. A., dentro del Proceso de Quiebra promovido por Corporación Financiera Nacional (COFINA).

La decisión del Primer Tribunal obedeció a que el amparista incumplió con el requisito que exige el agotamiento de los medios de impugnación establecido en el artículo 2606 numeral 2 del Código Judicial, y así lo señaló el Tribunal en su parte pertinente:

> "A pesar que contra el auto de quiebra no tiene cabida los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, la Ley ha determinado para el mismo uno especialísimo de reposición, que en reiterada jurisprudencia se ha indicado por los tribunales de amparo es necesario agotar para que puede acogerse un amparo contra dicho auto de quiebra. (ver Sentencia de 7 de Septiembre de 1998 del Primer Tribunal Superior dentro del Amparo propuesto por PAN-AGRO, S. A., TRANS-AGRO, S. A. y otras contra el Juez Sexto de Circuito Civil de Panamá)
>
> Estando pendiente este remedio impugnativo, no es viable continuar con el trámite del presente amparo de garantías constitucionales; especialmente, porque las razones que motivan la acción constitucional por parte del amparista son de naturaleza legal y no constitucional, y que deben ser objeto de revisión al decidirse la demanda de reposición." (fs. 156).

Finalmente el Tribunal primario aceptó como tercerista interviniente en el presente amparo, a CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA), contraparte en el proceso de quiebra donde se dictó la resolución judicial que contiene la orden que se impugna, dentro del límites establecidos por la Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 18 de abril de 1999.

LA APELACIÓN

La amparista al sustentar la alzada esgrime los siguientes argumentos:

> "a- La exigencia del numeral 2, del Artículo 2606, es aplicable cuando la quiebra cumple con la existencia de una obligación líquida , cierta y exigible; ya que, someter al supuesto fallido a los rigores de un proceso de reposición tomaría demasiado tiempo para reparar una acción injusta y violatoria de la garantía constitucional del debido proceso.
>
> b.- La declaratoria de quiebra es inaceptable, en el caso sub judice, debido a que la entidad estatal remató el inmueble de propiedad de nuestra representada por el crédito después de haber administrado judicialmente el negocio hospitalario de la misma por más de trece (13) años, con lo cual la quiebra seria imputable a los administradores judiciales y no a los propietarios y directivos de la sociedad demandada por la entidad estatal antes mencionada." (fs. 160).

DECISIÓN DEL PLENO

Sobre el recurso objeto de estudio, el Pleno coincide con lo expresado por el tribunal de primera instancia, toda vez que el sólo hecho de no agotar los recursos procesales estatuídos para impugnar una resolución determinada es suficiente motivo para no darle curso a la acción de amparo, como reiteradamente ha señalado el Pleno de esta Corporación Judicial.

La Corte Suprema ha sostenido este criterio, debido a que de existir una vía procesal más idónea, puede revisarse la actuación impugnada de manera amplia y profunda, practicándose pruebas y realizándose todos los trámites pertinentes para satisfacer la pretensión del demandante según sea el caso, o de lo contrario se permitiría una situación de desventaja contra el mismo recurrente.

En el caso que nos ocupa, la declaratoria de quiebra, el artículo 1549 del Código de Comercio establece específicamente lo siguiente:

> "El auto que declare la quiebra quedará ejecutoriado de pleno derecho; pero el quebrado, sus representantes o herederos podrán reclamar contra el con tal de que pidan la reposición dentro de ocho días siguientes a dicha declaratoria.
>
> La demanda de reposición no suspenderá los procedimientos de la quiebra mientras no se haya resuelto en favor del quebrado por sentencia firme que deberá dictarse dentro de los veinte días siguientes.
>
> Contra la Sentencia que declare infundada la oposición del deudor, no cabrá recurso alguno."

Consta de fojas 60 a 63 del proceso de quiebra, la presentación por parte del amparista de su demanda de reposición de la quiebra decretada a solicitud de Corporación Financiera Nacional (COFINA).

En virtud de lo anterior, el Pleno de la Corte coincide con los planteamientos vertidos por el Primer Tribunal Superior en la Resolución que se apela y por tanto se procede a confirmarla.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia de 3 de febrero del 2000, emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON T. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA CORREA, BORACE & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE ROSAURA GONZALEZ DE BORACE, EN CONTRA DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO COMMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense CORREA, BORACE & ASOCIADOS, actuando en nombre y representación de ROSAURA GONZÁLEZ DE BORACE, ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales en contra de "la orden tácita de NO ENTREGAR los cheques de la I y II quincena del mes de febrero y la I quincena de marzo del presente año, a la Licenciada Borace, quién tiene derecho a su remuneración", proferida por la DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS.

Para determinar sobre la admisibilidad de la demanda de amparo de garantías constitucionales, la misma ha de atenerse a los requisitos consignados en el artículo 2610 del Código Judicial, en concordancia de los presupuestos para su procedencia, según lo establecido en el artículo 2611 del citado Código.

En ese orden de ideas, advierte el Pleno que la demanda no cumple en este caso con el requisito de procedencia para la instauración de la acción de ampro de garantías constitucionales, es decir, el amparista no ha agotado la vía administrativa, sino que directamente utilizó el mecanismo constitucional del amparo de garantías.

Como se observa, se reclama contra un acto administrativo, "la orden tácita de NO ENTREGAR, los cheques de la I y II quincena del mes de febrero y la I quincena de marzo del presente año, a la Licenciada Borace, quien tiene derecho a su remuneración", y se procedió a interponer la presente acción constitucional, que no consideramos sea la vía idónea para reclamar un supuesto derecho.

La Jurisprudencia Constitucional, ha expresado que el amparo de garantías constitucionales es una acción extraordinaria que sólo procede cuando se han agotado todas las vías ordinarias de reclamación, lo cual a nuestro juicio no ha ocurrido en este caso. También ha señalado la vigencia del principio de preferencia de la vía contencioso-administrativa sobre la vía constitucional, cuando se trata de impugnación de actos u omisiones administrativas. De este manera, la esfera natural para conocer de acciones de personal, es la jurisdicción contencioso administrativa, por medio de la acción de plena jurisdicción, previo agotamiento de la vía administrativa, y existe también el silencio administrativo, mecanismo procesal que se debe acudir dentro de los dos meses posteriores a la configuración del silencio administrativo. A través de esta jurisdicción, se puede obtener un restablecimiento de derechos subjetivos vulnerados por la omisión, objetivo que no logra con la acción de amparo presentado.

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales propuesta por la firma forense CORREA, BORACE & ASOCIADOS, en representación de ROSAURA GONZÁLEZ DE BORACE, y en contra de la DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD.

Notifíquese.

(fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO ISMAEL RODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE ADRIANA I. ARAUZ DE CAMARGO CONTRA LA ORDEN DE HACER EMITIDA POR EL MINISTRO DE SALUD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N° 005/DAL DE 20 DE ENERO DE 2,000. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ISMAEL RODRIGUEZ, en representación de ADRIANA I. ARAUZ DE CAMARGO, ha interpuesto Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de

hacer contenida en la Resolución No.005/DAL de 20 de enero de 2000 dictada por el Ministro de Salud.

La resolución objeto de amparo confirmó la Nota 118/SD/SDPS/SRSSM de 22 de julio de 1999 expedida por el Departamento de Promoción de Salud de San Miguelito y en su parte resolutiva convoca a la realización de elecciones para escoger la nueva Junta Directiva de dicho Comité de Salud.

Le corresponde al Pleno resolver, en primer lugar, la admisibilidad o no de la presente acción, a la luz de las disposiciones legales que regulan esta materia y de la doctrina que en sede de admisibilidad del recurso de amparo ha sentado esta Corporación de Justicia.

En este sentido se observa que el libelo adolece de algunos requisitos formales que impiden que la demanda pueda ser admitida y que se detallan a continuación:

Se observa que el amparista al hacer mención de la orden impugnada pretende enervar un acto confirmatorio a través de la interposición de esta acción extraordinaria. A estos efectos, la Corte ha señalado en numerosas oportunidades que lo procedente en estos casos es dirigir la acción de amparo contra el funcionario que expidió el acto original en que consta la orden y no contra el cual la confirma. Es así, porque en el evento de que el acto confirmatorio fuese revocado, seguiría manteniendo vigencia y surtiría todos sus efectos legales la orden original. De allí que la demanda de amparo debe presentarse contra la resolución que contiene la orden de hacer original y que simplemente fue confirmada por el superior. (Fallos de 3-8-98; 12-10-98 y 28-1-99).

Por otra parte, con base en el principio de definitividad, no es admisible demandar a través del amparo actos o resoluciones que puedan ser impugnados mediante otras vías procesales. En este caso en particular se observa de manera concreta que la resolución impugnada, además de ser un acto confirmatorio, es un acto administrativo susceptible de ser enervado a través de gestión ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con fundamento en el artículo 98 del Código Judicial. Si bien es cierto que la resolución impugnada, visible a foja 6, señala en el artículo tercero de la parte resolutiva que "la presente resolución agota la vía gubernativa", el amparista quedaba facultado para instaurar el proceso contencioso administrativo correspondiente ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

En fallo del 18 de noviembre de 1991, la Corte Suprema señaló al respecto lo siguiente:

> "En relación con el cuarto requisito de los actos sujetos a amparo, de que se hayan agotado todos los medios de impugnación que exige la ley, conocido como el principio de definitividad, es la propia legislación la que lo establece en el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, que dice lo siguiente:
>
> Solo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate.
>
> Esta misma posición se ha mantenido en relación con los actos administrativos, que requieren igualmente agotar todos los medios de impugnación, incluido el contencioso administrativo, para poder ejercer la acción de amparo."

Por otro lado, se observa que la demanda se dirigió a los "HONORABLES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA" y no a la Presidente de la Corte Suprema de Justicia, como lo dispone el artículo 102 del Código Judicial.

Por las anteriores consideraciones, el Pleno de la Corte, estima

improcedente la acción de amparo formulada en este caso por lo que no debe ser admitida.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la presente demanda de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el licenciado ISMAEL RODRIGUEZ en representación de la señora ADRIANA I. ARAUZ DE CAMARGO.

Notifíquese,

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA PONCE (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LCDO. LUIS R. ARMSTRONG EN REPRESENTACIÓN DE BONNIE JO BISHOP, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 525 DE 3 DE MAYO DE 1999, DICTADA POR LA JUEZ SEGUNDA SECCIONAL DE FAMILIA DE LA PRIMERA SECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado LUIS R. ARMSTRONG, en representación de BONNIE JO BISHOP, interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución dictada el 21 de febrero del 2000, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, en la que se deniega la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por BONNIE JO BISHOP contra la orden dictada por la Juez Segunda Seccional de Familia de la Primera Sección, mediante Auto N° 525 de 3 de mayo de 1999.

El auto atacado fue dictado por la Juez Segunda Seccional de Familia, dentro del Proceso de Divorcio instaurado por ALVIN EDWARD BEASLEY contra JOAN STONE REEVES DE BEASLEY, en donde decide declarar en desacato a la señora BONNIE BISHOP DE STEINER por, supuestamente, rehusarse sin causa legal a comparecer a la citación que le hiciera ese Tribunal a través de Oficio, fechado 12 de febrero de 1999 e impone sanción pecuniaria compulsiva y progresiva por la suma de cincuenta balboas (B/.50.00) cuyo importe será a favor de la señora JOAN STONE.

Al interponer la demanda de amparo de garantías constitucionales, el amparista señaló que se violó el artículo 32 de la Constitución Nacional, por el hecho de que el Procurador Militar de la Armada de Los Estados Unidos, Dr. Marcos Ostrander, nunca efectuó la citación a la señora BONNIE JO BISHOP como testigo, y por lo tanto el informe remitido por el Dr. Ostarnder a la Juez Segunda Seccional de Familia no refleja la realidad.

El Tribunal Superior mediante resolución de 21 de febrero del 2000 denegó la acción de amparo propuesta contra la orden de hacer contenida en el Auto N° 525 de 3 de mayo de 1999, fundamentando su decisión así:

"...
Corroborado tal informe con la actuación enviada como antecedente, en efecto se cerciora el Tribunal de que la amparista fue realmente citada en varias ocasiones, resultando infructuosa su comparecencia al Tribunal.

> La parte amparista alega que se violó el debido proceso porque la citación fue hecha por persona ajena al Tribunal, tal como lo exige el artículo 916 del Código de Procedimiento Civil que se alega infringido, a pesar de que reconoce que en virtud de tales citaciones, concurrió al Tribunal (notificación del auto impugnado con el Amparo).
>
> Sin embargo, el artículo 918 del Código Judicial (que se encuentra ubicado en la misma Sección 5a relativa a la Citación de los Testigos) dice que -Si el proponente de la prueba lo solicitare, se podrá citar a los testigos por correspondencia recomendada, por telegrama o por cualquier otro medio viable, a juicio del Secretario" (Subrayó este Tribunal).
>
> En el caso que se examina, la parte proponente de la prueba testimonial solicitó la citación de la amparista, en su calidad de testigo, a través del Procurador de Derecho Internacional Comisionado, Doctor Marcos Ostrander (fs. 27, 561, 673, 723, 807, 819 de los antecedentes); solicitud que fue aceptada y practicada por el Tribunal a cargo de la Juez demandada en este amparo.
>
> Luego entonces, este era el medio viable para lograr la citación de la amparista, cumpliéndose así con lo dispuesto en el artículo 618 de la excerta legal citada."

En el libelo de apelación del amparista vemos que se acusa al Tribunal Superior de la siguiente violación:

> "1. A pesar de que, el medio utilizado para efectuar la citación, a través del PROCURADOR MILITAR, es un medio idóneo para este efecto, el Procurador Militar NO CUMPLIÓ CON EFECTUAR TAL CITACIÓN.
>
> 2. Basta con comparar en el expediente la forma en que se llevaron a cabo las citaciones realizadas, a fin de que compareciera BONNIE BISHOP a rendir su testimonio en las dos (2) ocasiones, en que efectivamente, se le comunica la citación a saber:
>
> a) La citación que se le hizo para el 3o de abril 1997 (a FS. 40)
>
> b) La citación que se le hizo para el 30 de junio de 1998 (a FS. 735 y 736 y 774, 775).
>
> 3. Contrario a dicho procedimiento, la citación que se intentó efectuar (Mediante nota fechada 12 de febrero de 1999), a fin de que acudiera al Tribunal el día 23 de febrero de 1999, NUNCA SE HIZO EFECTIVA O SEA NO SE PRESENTÓ LA BOLETA DE CITACIÓN A LA CITADA BONNIE BISHOP. (Contrario a lo establecido en el Artículo 916 del Código Judicial)."

La Corte al examinar la resolución atacada, observa que el Juzgador se percató que a la señora BONNIE JO BISHOP DE STEINER se le citó en diferentes oportunidades a concurrir al Juez de la causa; sin embargo, no lo hizo a pesar de tener conocimiento de ello, y en ese sentido el Doctor Marcos Ostrander, Procurador de Derecho Internacional Comisionado, contestó a la Juez Segunda Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Nota UNIT 7104 SOJA-IL (550-51a) de 6 de abril de 1999, expresando que la señora STEINER fue notificada de su deber de presentarse ante el Juzgado Segundo Seccional de Familia el día 23 de febrero de 1999. (Véase foja 912), además de ser este el medio viable e idóneo que se utilizó para las personas que laboraban en las bases militares existentes en Panamá hasta el 31 de diciembre de 1999.

Como corolario a lo anterior, y de conformidad con el artículo 1956, 1957 del Código Judicial y 746 del Código de la Familia, a la persona responsable de

desacato, el Juez podrá imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas, tal como lo decidió la Juez Segunda Seccional de Familia en Auto N° 525 de 3 de mayo de 1999. (Véase foja 915-916)

A juicio del Pleno de la Corte se debe confirmar la decisión apelada, porque tal como lo indicó el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, el Auto N° 525 de 3 de mayo de 1999 proferido por la Juez Segunda Seccional de Familia, impugnado mediante la demanda de amparo, no ha producido violación alguna al debido proceso de divorcio instaurado por ALVIN EDWARD BEASLEY contra JOAN STONE REEVES DE BEASLEY, así como no viola algún derecho o garantía constitucional, como lo exige el artículo 2606 del Código Judicial

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, el 21 de febrero del 2000, en la demanda de amparo de garantías constitucionales promovida por el Licenciado LUIS R. ARMSTRONG, en representación de BONNIE JO BISHOP contra la Juez Segunda Seccional de Familia de la Primera Sección, por haber emitido el Auto N° 525 de 3 de mayo de 1999.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA P. (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA LCDA. FATIMA STELLA TUDISCO VILLARREAL, EN REPRESENTACIÓN DE GERTRUDIS VARGAS DE CEDEÑO, CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE ARRENDAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada FÁTIMA STELLA TUDISCO VILLARREAL, actuando en nombre y representación de GERTRUDIS VARGAS DE CEDEÑO, ha interpuesto demanda de amparo de garantías constitucionales contra la Orden de Hacer contenida en la Nota N° 14-700-2023-99, fechada 22 de diciembre de 1999, proferida por el Director General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda.

La orden de hacer objeto de amparo expresa lo siguiente:

> "En vista de haberse extendido en exceso el plazo de noventa (90) días concedido mediante la resolución de condena No. 06-97, del 17 de marzo de 1997, proferida por esta Dirección, ordenamos se ejecute el lanzamiento de los comercios establecidos en el edificio No. 17-25, conocido "EL VATICANO" y los cuales son: Cantina Siete Vida, representada por María Vásquez; Bodega Plaza, representada por Sergio Mock Rodríguez/Gertrudis Vargas y Restaurante León, cuyo representante desconocemos"

Seguidamente se procede a examinar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigibles para estos procesos conforme lo establecen los artículos 2610 y 654 del Código Judicial.

En este sentido se observa que el libelo cumple con las exigencias normadas por el artículo 2610 del Código Judicial, ya que hace mención expresa de la orden impugnada; señala el nombre del servidor público que la impartió; así como la Institución a la que pertenece; establece los hechos en que fundamenta su pretensión; y las garantías fundamentales que considera violadas y el concepto en que lo han sido.

Pero se advierte una omisión que impide admitir la acción; al expresar el amparista los hechos en que fundamenta su acción, revela que no agotó la vía gubernativa para que se concediera su pretensión, es decir, que no se observa que hayan presentado los Recurso de Reconsideración y Apelación, el primero ante la Dirección General de Arrendamiento y el segundo ante el Ministro de Vivienda, tal como lo señala la Resolución de Condena N° 06-97 de 17 de marzo de 1997, proferida por el Director General de Arrendamiento.

Ya esta Colegiatura ha señalado innumerables veces, conforme al numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, que "sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos para la impugnación de la resolución judicial de que se trate". El Pleno de esta Corporación ha sido reiterativo al señalar, con fundamento en la norma antes citada, que no cabe el recurso de amparo contra resoluciones que admiten medios ordinarios de impugnación. De modo pues, que sólo es admisible la presente acción de amparo, cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate. Véase sentencias del Pleno de la Corte de fechas 10 de junio de 1998,11 de mayo de 1999 y 2 de junio de 1999.

El tipo de carácter administrativo que nos ocupa, en todo caso podría ser atacado por la vía de lo contencioso administrativo (acción de Plena jurisdicción), que es un proceso en el cual las partes cuentan con medios de defensa, y se pueden examinar con más profundidad el texto legal, que en este caso, es lo que realmente se estima vulnerado, ya que así lo hace notar el accionante al señalar que se viola el debido proceso, por razón que no se aplicado debidamente.

Además, esta Superioridad observa en el estudio de la presente acción constitucional que dicha acción pretende enervar una resolución dictada hace más de dos (2) años. Ha dicho la Corte en diversas ocasiones que la acción de amparo, según el artículo 2606 del Código Judicial, persigue revocar una orden que, por la gravedad e inminencia del daño que representa, requiere de una revocación inmediata. Esto quiere decir que el elemento fundamental del amparo es la urgencia en la protección del derecho constitucional que se estima conculcado. La inminencia del daño significa que se trate de un perjuicio actual, no pasado u ocurrido hace mucho tiempo. Inminente quiere decir que amenaza o está por suceder prontamente, y lo antónimo de inminente es remoto, lejano, como ocurre en el presente caso, en que la orden carece de actualidad, de inminencia y, por tanto, falta el elemento de urgencia que requiere una revocación inmediata.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales interpuesto por la Licenciada FÁTIMA STELLA TUDISCO VILLARREAL en nombre y representación de GERTRUDIS VARGAS DE CEDEÑO.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA P. (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARIA ENGRACIA BENITEZ GARCIA CONTRA DEL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha recibido procedente de la Secretaría General, la Acción de Hábeas Corpus interpuesta por el Licenciado JAIME CHOY GARCIA a favor de la ciudadana española MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA, contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, a fin de que se declare ilegal la orden de detención aplicada a su representada y en su lugar se ordene su inmediata libertad.

La defensa técnica fundamentó su pretensión principalmente en el hecho de que su representada la señora MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA, en horas de la noche del día 10 de febrero de 2000 se encontraba de visita en la residencia de los señores Boris Foguel y Suengas y Susi de Foguel, ubicada en calle 65 San Francisco, cuarto piso del Edificio Lía, cuando fue detenida por unidades de la Policía Técnica Judicial y de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, sin que existiera orden que justificara tal medida. (Fs. 1-3)

Acogida la demanda el 11 de febrero de 2000, el Magistrado Sustanciador giró mandamiento de Hábeas Corpus a favor de la demandante y contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, solicitándole el informe de conducta correspondiente, el cual remitió manifestando que el Despacho a su cargo no ordenó la detención de la recurrente; que al no haberse decretado su detención no existen fundamentos de hecho y de derecho, informa además que la ciudadana BENITEZ GARCÍA fue aprehendida en diligencia de allanamiento realizada el 10 de febrero de 2000, y fue puesta a órdenes de la Dirección de Migración, mediante oficio N° FD-DS-01-43-2000 de 11 de febrero de 2000.

Ante esta información, se libró con fecha de 21 de febrero de 2000, nuevo mandamiento de Hábeas Corpus contra el Director de Migración, a fin de que remitiese el informe de conducta. La referida autoridad, mediante oficio N° DNMYN-161-2000 de 22 de febrero de 2000, remitió el informe que en su parte medular es del tenor siguiente:

> "a) No es cierto que se ordenó la detención de la ciudadana MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA.
>
> b) No se ha ordenado la detención, por tanto no existen fundamentos de hecho ni de derecho para la misma.
>
> c) La señora MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA, fue puesta a nuestras órdenes según oficio FD-DS 01 43-2000, del 11 de febrero de 2000 por el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, recibido en nuestro despacho el 14 de Febrero de 2000, por lo que se encuentra a nuestras órdenes, bajo la custodia de la Policía Técnica Judicial, pero la misma a la fecha no ha sido trasladada a nuestras instalaciones por lo que no se ha evaluado la situación migratoria de la misma." (Fs. 21)

No obstante, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia en virtud de la falta de información obtenida para resolver la presente acción, a solicitud de la defensa técnica y por instrucciones del Magistrado Sustanciador remite oficio N° SGP-451-2000 del 23 de febrero de 2000 a la Directora del Centro

Femenino de Rehabilitación a fin de que informe si la investigada MARÍA ENGRACIA BENITEZ se encuentra en dicho Centro Carcelario y, en caso afirmativo, a órdenes de qué autoridad; informe este que contesta a través de la Nota-602-S. J. del 24 de febrero del 2000, en la que manifiesta que la prenombrada se encuentra a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, sindicada por el supuesto delito Contra la Salud Pública y en espera de cumplimiento de trámite de extradición. (Fs. 23)

Finalmente, ante esta nueva afirmación se libra mandamiento al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que rinda un informe sobre la detención de la ciudadana de nacionalidad española MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA el cual remite manifestando entre otras cosas, lo siguiente:

Que la Honorable Embajada de la República de Perú, mediante Nota Nr. 5-20-M/029 de 11 de febrero de 2000, presentada en el Despacho a su cargo en esa misma fecha, en alcance a la Nota Nr. 5-20-M/024 de 9 de febrero de 2000, solicitó al Gobierno de Panamá, con carácter de urgencia, la detención preventiva con fines de extradición, entre otros, de la ciudadana española MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA, quien viene siendo procesada ante los Tribunales de Justicia de Perú por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Dinero proveniente de dicho actividad delictiva.

Que como fundamento jurídico invocaron la CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, realizada en Viena el 20 de diciembre de 1988, instrumento jurídico internacional que tanto la República de Panamá, como la de Perú son partes contratantes.

Que para sustentar la solicitud de detención preventiva con fines de extradición de la referida señora, la Honorable Embajada de la República de Perú anexó a su petición copia del Oficio 474-99-WAL de 11 de febrero de 2000, por la cual la Jueza Penal (P) Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, Dra. MARÍA E. CASTRO CHUMPITAZ de Lima, República de Perú pone en conocimiento de la Señora Fiscal Especializada en lo Penal de la República de Panamá, que la Judicatura a su cargo por resolución dictada ese mismo día dispuso el arresto preventivo con fines de una ulterior extradición de la señora MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA entre otros procesados, debido a que los mismos fueron puestos a disposición de su Despacho a mérito de la orden de detención a nivel internacional ordenado por la Judicatura peruana a cargo de la Jueza, Dra. MARÍA E, CASTRO CHUMPITAZ y difundida por OCN INTERPOL con sede en Lima, Perú. Asimismo, hizo del conocimiento del Señor Fiscal Especializado en lo Penal de la República de Panamá que en esa misma fecha se dispuso que se forme el cuaderno de extradición, a efectos de que ese Despacho lo admita a trámite en su oportunidad.

Señala el Viceministro de Relaciones Exteriores Encargado que el Despacho a su cargo, mediante Nota A. J. N° 340 de 11 de febrero de 2000, presentada en la Procuraduría General de la Nación en esa misma fecha, remitió dicha solicitud de detención preventiva con fines de extradición, acompañada con toda la documentación.

Que la Procuraduría General de la Nación, a través de Oficio de 14 de febrero de 2000 dispuso ordenar la detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana española MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA, entre otros, a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores por el término de sesenta (60) días dentro de los cuales el Estado requiriente deberá formalizar la solicitud de extradición anunciada.

Que la Honorable Embajada de la República de Perú en alcance a su atenta Nota Nr. 5-20-M/029 de 11 de febrero, mediante la Nota Nr. 5-20-M/034 de 15 de febrero de 2000, recibida en esa Cancillería el día 16 de febrero de febrero de 2000, remitió cuadernos de arresto preventivo debidamente legalizados por el Consulado General de Panamá en la República de Perú de la señora MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA. Además se envió cuatro (4) tomos en total, de los cuales dos corresponden a la señora BENITEZ GARCÍA y en los mismos se da fe de que en

efecto, existen en su contra fuertes elementos que la vinculan a la comisión de los ilícitos investigados en el Estado peruano que guardan relación con los delitos con drogas (Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Dinero, proveniente de dicha actividad delictiva). Asimismo, señala el aludido funcionario que en la mencionada Nota, la Honorable Embajada de la República de Perú reitera su solicitud de detención preventiva con fines de extradición por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Dinero, de los cuales está siendo procesada la señora BENITEZ GARCÍA.

En cuanto al Fundamento de Hecho, el Viceministro Encargado manifiesta, que el mismo se encuentra contenido en las Notas Nr. 5-20-M/029 de 11 de febrero de 2000 y en la Nr. 5-20-M/034 de 15 de febrero de 2000, ambas suscritas por la Honorable Embajada de la República de Perú en donde se señala que la señora MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA, entre otros, está siendo procesada ante los Tribunales de Justicia de Perú por delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Dinero, proveniente de dicha actividad.

El Fundamento de Derecho lo constituye la CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, realizada en Viena el 20 de diciembre de 1988, instrumento jurídico internacional en donde la República de Panamá y el Perú son partes contratantes. Asimismo se invoca la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, reformada y modificada por la Ley 13 de 27 de julio de 1994.

Finalmente, el Viceministro Encargado señaló que la detenida se encontraba a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores en base a lo establecido en el Oficio de 14 de febrero de 2000, expedido por la Procuraduría General de la Nación, hasta ese momento, en el cual, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la pone a órdenes de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en virtud de la Presente acción de Hábeas Corpus. Agrega que la señora MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA fue aprehendida el 10 de febrero de 2000 por la Policía Técnica Judicial, División de Estupefacientes, según copia de la Nota N° P. T. J.-DE-183-00 de 21 de febrero de 2000 suscrita por el Jefe de la División de Estupefacientes de la P. T. J. y dirigida al Procurador General de la Nación. De allí que los sesenta (60) días que establece la Ley 23 de julio de 1994 para formalizar la solicitud de extradición, han empezado a correr a partir de esa fecha.

Ahora bien, para resolver acerca de la legalidad de la orden de detención con fines de extradición, el Pleno de la Corte Suprema debe determinar, si ésta ha sido encausada por los canales diplomáticos idóneos y si está fundamentada en la Ley.

En el expediente reposa la copia de la Nota Nr. 5-20-M/029 del 11 de febrero de 2000 expedida por la Embajada de Perú, recibida ese mismo día por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la cual utilizó la vía diplomática idónea para este tipo de requerimiento, solicitando con carácter de urgencia la detención provisional de la ciudadana de nacionalidad española MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA, con fines de extradición tal como lo establece la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, y el artículo 40 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986. (Fs. 34)

Consta de fojas 36 a 37 del expediente, copia del Auto por medio del cual el Juzgado Especializado en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de la República de Perú dispone el arresto preventivo con fines de ulterior extradición de la señora MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA y otros, así como los elementos de prueba en que se basó dicha decisión.

Asimismo, reposa a fojas 32 y 33 del expediente, la Nota A. J. N° 340 emitida el día 11 de febrero de 2000 por la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la cual solicitó al Procurador General de la Nación, la detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana española MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA.

Con fundamento a esta petición, el Procurador general de la Nación ordenó la detención provisional con fines de extradición de la ciudadana española MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA, poniéndola a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores por el término de sesenta (60) días dentro de los cuales el Estado requiriente deberá formalizar la solicitud de extradición requerida. (Fs. 39-40)

Es importante señalar, que la señora MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA fue arrestada el día 10 de febrero de 2000, mediante un operativo realizado por la Policía Técnica Judicial y la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por lo que no ha vencido el término señalado en el artículo 41 ordinal 2 del Texto Único de la Ley 23 de 1986, para presentar los documentos a que se refiere el artículo 42 ibídem.

De las diligencias allegadas a este cuadernillo surgen pruebas de que la señora MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA es natural de España y, por tanto, el Pleno de esta Alta Corporación de Justicia llega a la conclusión de que la detención con fines de extradición que sufre la prenombrada no viola las normas constitucionales y legales que garantizan la libertad personal, ya que fue solicitada por los canales diplomáticos correspondientes con fundamento en los artículos 40,41 y 42 del Texto Único de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, reformada, modificada y adicionada por la Ley 13 de 27 de julio de 1994 y en una Convención Internacional de la cual tanto la República de Panamá y de Perú son partes signatarias.

En virtud de lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana española MARÍA ENGRACIA BENITEZ GARCÍA Y, en consecuencia ORDENA que sea puesta nuevamente a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE ALBERTO VITERI RUEDA CONTRA EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN POLICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce la Acción de Hábeas Corpus presentada a favor de ALBERTO VITERI RUEDA contra el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN POLICIAL.

Acogido el recurso, se libró mandamiento contra la autoridad demandada, quien mediante Oficio No. AL/848/00 de 15 de marzo del 2000, contestó lo siguiente:

"...

C. El ciudadano ALBERTO VITERI RUEDA, estuvo bajo custodia en nuestras instalaciones a solicitud del Juez Nocturno de Policía a través de Boleta preventiva No. 15 de 2 de marzo de 2000, y el día 3 de marzo del 2000 fue puesto a órdenes de la Gobernación de la Provincia de Panamá por Posesión de armas de fuego y municiones,

mediante Nota No. 035 de 3 de marzo del año en curso." (fs. 8).

De la parte del informe transcrito se colige que el beneficiario de la presente acción constitucional se encuentra a órdenes de la Gobernación de la Provincia de Panamá.

Observado lo anterior, esta Corporación considera que la presente acción de hábeas corpus escapa de nuestra competencia, correspondiendo su estudio al Segundo Tribunal Superior de Justicia, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2602 del Código Judicial, por lo que procede inhibirse del conocimiento de la presente acción y declinar el conocimiento de la misma al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

En mérito de lo anterior, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE del conocimiento de la presente acción de Hábeas Corpus presentada a favor de ALBERTO VITERI RUEDA y DECLINA el conocimiento de la misma al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, para los fines legales correspondientes.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE CARMELITA ERCILIA CAIN Y AURELIO A. HOWARD CAIN CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Acción de Hábeas Corpus presentada por el Licenciado JORGE E. GUERRA a favor de los señores CARMELINA ERCILIA CAIN y AURELIO AUGUSTO HOWARD CAIN contra el FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS.

EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS

El accionante fundamenta la acción de Hábeas Corpus básicamente en lo siguientes términos:

> "PRIMERO: La detención de CARMELITA E. CAIN y de AURELIO HOWARD es a todas luces ilegal, esto se desprende del mismo INFORME DE NOVEDAD redactado por la Policía en donde se detalla que la droga fue encontrada en la parte de abajo del cuarto, debajo del piso, en la parte de afuera, no dentro del cuarto de ellos.
>
> SEGUNDO: La finalidad de practicar allanamiento a la casa 2183 C-cuarto 16 era la de buscar "armas" tal como se relata en el informe, sin embargo no se encuentra dichas armas, ni drogas, dinero ni ninguna evidencia que hiciera deducir siquiera por indicios que allí se vendía droga.
>
> TERCERO: La detención de mis dos defendidos no es producto de

llamadas telefónicas (supuestos informantes), operativos encubiertos, venta simulada etc., sino de una droga que fue encontrada en la parte de abajo del cuarto y que de todas maneras se quiere atribuir a ellos.

CUARTO: EL INFORME DE POLICÍA no señala que se vio arrojar dicha droga a CARMELITA CAIN ni a AURELIO HOWARD, si dice que se encontró en la parte de abajo del cuarto de ellos, y que fueron aprehendidos y llevados al D.I.I.P. de Parque Lefebre por sospecha y después conducidos a la Fiscalía de Drogas.

QUINTO: "La Boca Town" son una serie de barracas, en donde los pisos y las paredes de cada cuarto de madera ya podrida, sostenidas algunas por pilotes de madera. Decir "debajo del piso" o "en la parte de abajo del cuarto" significa el suelo, la tierra, porqué atribuirle la propiedad de la droga encontrada a mis defendidos, si cualquiera la pudo haber tirado en el momento del operativo.

SEXTO: La CONSTITUCIÓN NACIONAL consagra el PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, si en este caso dentro del cuarto no se encontró droga, armas ni dinero y el INFORME DE POLICÍA señala que se encuentra la sustancia ilícita en la parte de abajo, porque presumir que la misma es de mis representados, si tampoco se afirma que ellos fueron sorprendidos tirando la droga, y si dice que fueron conducidos "por sospecha", lo que indica que los mismos policías dudan a quién pertenezca. Si el FISCAL DE DROGAS no estuvo en el lugar de los hechos porqué ordenar la detención preventiva si los policías manifiestan que fueron llevados "por sospecha". (fs. 1 a 2).

ADMISIÓN DEL HÁBEAS CORPUS E INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

Acogida la presente acción constitucional el primero (1°) de marzo del 2000, se giró mandamiento de Hábeas Corpus a favor de los señores CARMELITA ERCILIA CAIN y AURELIO A. HOWARD CAIN y contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, solicitándose el informe de conducta correspondiente.

El señor Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, en su informe que remitiera el 3 de marzo del 2000, aceptó que ese despacho expidió la orden de detención preventiva de los señores CARMELITA ERCILIA CAIN y AURELIO A. HOWARD CAIN, mediante Resolución de 23 de febrero del 2000, por la supuesta comisión de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA relacionados con drogas.

Agrega además, que los hechos tienen sus inicios cuando las unidades de la Policía Nacional solicitaron la colaboración del Corregidor de Río Abajo para realizar una diligencia de allanamiento y registro en Calle Cuarta, Río Abajo, casa 2183, cuarto 16, toda vez que se tenía información que en ese inmueble se encontraban armas de fuego.

Señala que, al realizarse la diligencia de allanamiento y registro se encontró en el piso del inmueble en un hueco, un cartucho de plástico que contenía sesenta y cinco sobres plásticos trasparentes contentivos en su interior de un polvo de color blanco, también se encontró dentro del mismo cartucho una bolsa plástica transparente de la misma sustancia, que en ese momento se presumió cocaína.

La evidencia incautada fue sometida a la correspondiente prueba de campo, dando como resultado positivo para la determinación de la droga conocida como COCAÍNA.

Posteriormente, se procedió a la declaración de indagatoria de los señores

CARMELITA ERCILIA CAIN, quien manifestó que no aceptaba los cargos formulados, ya que la droga incautada no es de ella; por su parte, AURELIO AUGUSTO HOWARD CAIN señaló que no reconoce la droga que los agentes de la Policía incautaron al momento de su detención.

El señor Fiscal concluye que, "nos encontramos en presencia de un delito Contra la Salud Pública relacionado con drogas del cual emerge como elemento subjetivo la existencia de indicios de presencia y oportunidad aunado a los señalamientos directos que hacen los agentes captores en contra de los sumariados por lo que este Despacho dispuso ordenar su detención preventiva con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2148, 2159 del Código Judicial".

CONSIDERACIONES PREVIAS

Tiene como objetivo que la Institución del Hábeas Corpus regule en estricto derecho la libertad corporal, ambulatoria o de locomoción del individuo, por lo que la interposición de una acción de esta naturaleza demanda la atención inmediata por parte del funcionario judicial, quien debe entrar a determinar si esa privación de libertad cumple con los requisitos previstos en la Constitución y las Leyes; por lo que corresponde entrar a decidir sobre la legalidad o no de la privación de la libertad del imputado.

En el presente caso, observa esta Corporación que de fojas 26 a 27 del sumario aparece la resolución de 23 de febrero del 2000, dictada por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas en la que establece, razonadamente, los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron al agente instructor a ordenar la detención preventiva de los señores AURELIO AUGUSTO HOWARD CAIN y CARMELITA ERCILIA CAIN LAMBERT; en ella se recogen todas las exigencias del artículo 2159 del Código Judicial, por lo que no encontramos incumplimiento de los requisitos contenidos en la referida norma procesal por parte del Fiscal.

Realizadas las pruebas correspondientes por el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas del Ministerio Público, a las sustancias incautadas se obtuvo resultado positivo para la determinación de la droga conocida como COCAÍNA, según se certifica a foja 13 del expediente.

El Pleno no comparte las consideraciones de ilegalidad aducidas por el Licenciado JORGE ELIECER GUERRA, toda vez que la presencia de sus representados en el lugar del allanamiento no es casual, porque como ya se manifestó, la sustancia incautada se encontraba debajo del piso de la cocina del Cuarto No. 16, Casa 2183, donde viven CARMELITA ERCILIA CAIN y AURELIO A. HOWARD CAIN

Al revisar los antecedentes que integran el presente caso, confrontados con los presupuestos señalados por el artículo 2159 , en relación con el artículo 2148 del Código Judicial, tenemos que se encuentran acreditados en autos indicios graves suficientes para vincular a los detenidos con el hecho que se les imputa, que es de aquellos que atentan contra la salud pública relacionado con drogas, además de que el mismo amerita medida cautelar de detención preventiva.

Por lo tanto, las consideraciones que anteceden llevan al Pleno a determinar que en la detención preventiva de los señores AURELIO A. HOWARD CAIN y ERCILIA CAIN, no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en la Leyes de la República ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, por lo que procede es pues, declarar legal la detención.

DECISIÓN DEL PLENO

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de los señores AURELIO AUGUSTO HOWARD CAIN y CARMELITA ERCILIA CAIN LAMBERT, y por lo tanto, DISPONE que los detenidos sean puesto nuevamente a órdenes del Fiscal

Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN ANTONIO FRANCO PALOMINO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS

El licenciado EDILBERTO VASQUEZ ATENCIO ha presentado ante el Pleno de esta Corporación de Justicia acción de habeas corpus preventivo a favor del señor JUAN ANTONIO FRANCO PALOMINO, contra la orden de detención dictada por el Director General de la Policía Nacional.

Acogida esta acción constitucional, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad demandada. Esta remitió el informe de rigor mediante nota de 27 de marzo de 2,000 en la que señaló lo siguiente:

"...
A. No es cierto que haya ordenado la detención del ciudadano Juan Antonio Franco Palomino, ni por escrito ni verbalmente.

B. Queda explicado en el literal anterior.

C. No tengo bajo mi custodia ni a mis órdenes a la persona que ha mandado a presentar. El mismo no ha estado en nuestras instalaciones ni ha sido perseguido por delito alguno. ... (Fs. 5).

Del informe transcrito se infiere que, contrario a lo expresado en la demanda, el Director General de la Policía Nacional no ha ordenado la detención del favorecido con esta acción. Por tanto, no es procedente una acción de habeas corpus preventivo como lo ha pretendido el accionante, ya que en nuestro medio su utilización sólo cabría si existiera una orden de detención que aún no haya sido hecha efectiva.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EL CESE, de la continuación de la acción de habeas corpus interpuesto a favor del señor JUAN ANTONIO FRANCO PALOMINO.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSE EDUARDO POTE MORENO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Saraí Isabel Blaisdell Nuñez en nombre y representación de JOSE EDUARDO POTE MORENO, ha interpuesto acción de habeas corpus contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, por considerar que la privación de libertad que sufre es ilegal.

ARGUMENTOS A FAVOR DEL DETENIDO

Manifiesta la proponente de la acción reparadora básicamente que el día 4 de febrero de 2000, miembros de la Fuerza Pública encontraron en Veracruz, específicamente Puente Camarón, el automóvil Mitzubishi L-300, tipo panel, color blanco, con matrícula de cartón N° 074483, con presunta sustancias ilícitas, es decir 444 paquetes de marihuana y cocaína. Que dichos agentes de la Fuerza Pública, visualizaron a distancia a dos sujetos que se daban a la fuga, y que no pudieron ser reconocidos, ni capturados.

Continúa exponiendo la representante judicial el encartado, que el propietario del vehículo antes descrito era en principio el señor Alberto Antonio Pérez, quien permuta al señor Gustavo Jiménez dicho Panel y este a su vez traspasa el vehículo a Leonidas Pérez, cubano de nacionalidad, y éste a un tal Moc, pero que dichos traspasos no se realizaron de manera formal.

Manifiesta la parte recurrente que se efectuaron diligencias de allanamiento a casa del señor Alberto Pérez Urrutia, Leonidas Pérez entre otros y al Taller Deyanira y no se encontraron sustancias ilícitas que vincularan a las personas antes mencionadas. También señala que a fojas 101 a 104 se encuentra la declaración jurada del señor Miguel de los Santos González y manifiesta que el propietario del vehículo Mitzubishi L-30, tipo panel, color blanco es de propiedad de un sujeto que fue a retirarlo y que lo describen como hombre blanco, delgado, cabello liso, y de acento colombiano. Que el señor Pote Moreno y Miguel Santos González arreglaron mecánicamente dicho panel y se le hizo cambio de anillos, pistones, calentadores y alternador, y que por este trabajo le pagaron B/.250.00, y retiraron el vehículo 3 de febrero a las 6:00 de la tarde.

Para concluir, que la Fiscalía de Droga mantiene detenido al señor POTE MORENO, por el único hecho de no dar factura a los propietarios por el arreglo del vehículo Mitzubishi. También agrega, que no existen pruebas documentales, ni materiales, testimoniales o señalamiento alguno en contra del detenido, que de paso es analfabeta, es decir no sabe leer ni escribir. Que las facturas las hace su hermano Luis Pote, y en ese momento no se encontraba en el taller cuando se entregaba el vehículo.

Una vez acogida la acción y librado el mandamiento de Habeas Corpus respectivo el 17 de marzo de los corrientes (ver foja 8 del expediente), el funcionario judicial acusado lo contesta mediante Oficio N° FDO2-TO2-773 de 20 de marzo de 2000 (ver de fojas 6 a 11 del cuadernillo de hábeas corpus).

CONTESTACION AL MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS

El Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Droga indicó esencialmente lo siguiente:

> **"El Despacho procedió a recibirle declaración indagatoria al señor PEREZ URRUTIA, quien señaló que el mencionado automóvil fue**

entregado al señor GUSTAVO JIMENEZ, de quien recibió un vehículo Nissan Pulsar, sin embargo, no le entregó la tarjeta de traspaso de propietario en razón de que éste (Jiménez) no le hacía llegar el traspaso el auto Nissan Pulsar, que entre ambos existía un contrato de permuta sobre dichos bienes. El indagado agrega lo que nos eprmitimos transcribir seguidamente así:

`Quiero agregar que desde septiembre de año pasado 1999, trabajando en la compañía que queda avenida Franquipani y Avenida Nacional, a un costado del Juna Demóstenes Arosemena, veía pasar el panel y cundo me iba para mi casa hacia Panamá Viejo o cundo salía hacer diligencias de la empresa, lo veía estacionado en un taller que queda al frente de Cabo Verde, donde les señalé a la Policía y un Secretario de la Fiscalía esta mañana y ellos fueron al taller. ... (SIC) (ver folios30)

De igual forma resultó indagado el señor GUSTAVO JIMENEZ ARIZA, quien indicó que efectivamente el mencionado automóvil tipo panel, color blanco, el cual le fue cambiado por PEREZ URRUTIA, a su vez se lo vendió a un cubano de nombre LEO RAMON PEREZ. (122-129)

Ofreció declaración jurada el señor RAMON LEONIDAS PEREZ GARCES, quien señala que el auto tipo panel color blanco que le fuera comprado al señor GUSTAVO JIMENEZ, se lo vendió a un sujeto de origen colombiano de apodo o nombre MAO.
...
Al ser ubicado el Taller en donde según ALBERTO ANTONIO PEREZ URRUTIA, observó en reiteradas ocasiones el vehículo que nos ocupa, fue retenido el señor JOSE EDUARDO POTE MORENO, ciudadano de nacionalidad colombiana, a quien se le recibió declaración indagatoria. Veámos seguidamente lo declarado por el sindicado POTE MORENO;

Indica que unos sujetos a los cuales no conoce llevaron el auto al taller, que el mismo tenía daños en su máquina, que llamó al señor MIGUEL quien es mecánico diesel y éste (Miguel) llegó al Taller pero ya los sujetos se habían retirado, que Miguel se encargó de las reparaciones del vehículo desde que fue llevado al taller, el mismo tenía tres semanas de estar en el taller.

Por lo anterior le fue recibida declaración jurada al señor MIGUEL DE LOS SANTOS GONZALEZ AVILA, quien señaló ser mecánico de profesión, sobre los hechos manifestó que el día 2 de febrero del año en curso el señor POTES `quien ya trabajaba en el carro, pero el mismo no queria arrancar ... luego el día jueves 3 de febrero terminaron de reparar el auto, pero habían fallas en el alternador, por lo que fue hasta el sector de San José (San Miguelito) con un sujeto que dijo ser dueño del auto, se hicieron las reparaciones necesarias, le entregó el auto al señor POTE y éste (POTE) le pagó la suma de cien dólares, quedando en el lugar el supuesto dueño del auto y otros señores libando licor con el señor POTE. (ver folios 101-104)

Como se puede apreciar en el cumulo de declaracioners hasta ahora incorporadas al expediente, existen una serie de hechos que nos demuestran el grado de vinculación del señor JOSE EDUARDO POTE MORENO con el hecho criminal bajo examen".

ANTECEDENTES

Esta Superioridad procede al análisis de las constancias procesales contenidas en el cuadernillo de instrucción remitido por el Ministerio Público, en vías de determinar si la medida cautelar personal aplicada al señor JOSE

EDUARDO POTE MORENO se ha dado con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos para la detención preventiva.

Tal como se desprende del informe de actuación que antecede, la encuesta penal que mantiene privado de libertad al prenombrado ciudadano, tiene su origen en un Informe de Novedad de 4 de febrero de 2000, suscrito por el Sargento Iro. 8997 Oscar Guardia, de la Facción en el Grupo D, Zona de Policía del Canal, en el cual se indica, sucintamente, que en recorrido por la carretera de Veracruz, antiguo Puente Camarón, observaron un panel de color blanco, el cual mantenía las dos puertas de adelante abiertas, y en cada una había un sujeto, quienes se dieron a la fuga cuando el patrulla encendió las luces de persecución. Que al revisarse el interior del automóvil, encontraron gran cantidad de bultos de dudosa procedencia. Se menciona en el escrito de novedad que, luego de que al lugar de los hechos se apersonaran refuerzos de la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP), se condujo el panel blanco a la Estación de Policía de Balboa.

Horas más tarde el Secretario de la Fiscalía de Drogas procedió a bajar los bultos, los cuales contenían en su interior 25 paquetes forrados en cinta adhesiva de color chocolate que en su interior tenía polvo blanco que se supuestamente era cocaína y 444 paquetes que en su interior contenía una sustancia en forma de hierba seca que se presumía era marihuana.

Luego al procederse con la investigación pertinente, la misma arrojó que el panel blanco Mitsubhi había sido traspasado en varias ocasiones a diferentes personas, y a algunas de ellas se les tomó declaración en relación a dicho auto.

Uno de los declarantes afirmó haber visto el panel en un taller cerca de Cabo Verde, que resultó ser el Taller Deyanira, cuyo propietario es la señora Edilsa Ramos concubina del encartado. Esta circunstancia comentada trajo como resultado de que el Ministerio Público procediera al allanamiento del precitado negocio el día viernes 4 de febrero de 2000, y la diligencia judicial de registro del taller no aportó pruebas conducentes que apuntaran a la relación del señor POTE con el ilícito investigado, sólo encontraron facturas.

El ciudadano JOSE EDUARDO POTE MORENO aceptó en su declaración que el panel blanco marca Mitsubishi lo arregló en el Taller Deyanira, junto con el señor Miguel González, éste último especialista en carros de diesel y que el auto se quedó en el lugar allanado aproximadamente tres semanas. El señor Miguel Gonzáles señaló que el panel lo habían retirado el día anterior, en horas de la tarde, o sea el 3 de febrero del mismo año (ver foja 23, 102, 103, 104, 107 108, 109 y 110 de los antecedentes).

DECISION DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

Esta Máxima Corporación Judicial, una vez realizado un minucioso análisis de las piezas que componen esta encuesta penal, y de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean la detención preventiva del señor JOSE EDUARDO POTE observa que, en este caso, el agente de instrucción no menciona categóricamente de qué manera se vincula al sumariado con el delito que se le imputa, por lo que considera que la detención que sufre el actor es ilegal.

El hecho de que no se haya encontrado facturas del arreglo del automóvil, y que el señor POTE tratara con los presuntamente dueños del panel en relación al arreglo del mismo, no constituye indicio grave y suficiente para sospechar del mismo, hasta el punto de ordenar su detención (ver contestación al mandamiento de habeas corpus).

En Sentencia de 13 de octubre de 1995, este Pleno indicó, en relación al vínculo del imputado con el delito, que "el respeto que merece el bien de la libertad individual, elevado a categoría jurídica tanto por la Constitución como por la ley, no permite sustentar su afectación sobre la base de meras sospechas. La no acreditación en forma clara del vínculo tantas veces aludido da lugar al

surgimiento de duda, la que constituye un grado de conocimiento con respecto a la ocurriencia de un hecho determinado que no puede valorarse en perjuicio del imputado sino, en todo caso, en su favor". (Lo resaltado es de la Corte)

La detención preventiva debe ser el resultado de una vinculación personal del sumariado con el hecho o con los hechos delictivos, pues nuestro ordenamiento así lo exige como garantía en favor del imputado y un deber del funcionario que ordena la detención.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN QUE ES ILEGAL la detención de JOSE EDUARDO POTE MORENO, decretada por el Fiscal Segundo Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LEONARDO ABEGO, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado JORGE GÓMEZ, ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de LEONARDO ABREGO y contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

EL ACCIONANTE

Sostiene el recurrente, que su patrocinado, señor ABREGO DÍAZ, al momento de ser detenido se le incautó la cantidad de nueve (9) carrizos contentivos de sustancia ilícita y nueve (9) dólares en efectivo, y que en el expediente no se encuentran otros elementos que sugieran que se haya estado dedicando a la venta de sustancias ilícitas, razón por la cual debe encuadrar dicha conducta dentro del primer párrafo del artículo 260 del Código Penal, es decir, Posesión simple de droga, que conlleva una penalidad inferior a los dos años de prisión y por tanto no admite detención preventiva.

Agrega, que si bien no existe un examen de laboratorio que indique el peso de la sustancia incautada, la valoración de las constancias procesales a la luz del principio de la sana crítica le permite observar, que la cantidad de droga incautada es escasa y muy inferior a la que usualmente poseen los consumidores para uso personal.

Por último señala, que la orden de detención emitida contra su defendido se fundamentó en una supuesta llamada anónima recibida por los agentes captores, por lo que considera, que tal circunstancia no constituye un señalamiento directo, por lo que reconocerle valor probatorio al mismo lesionaría los principios de Seguridad Jurídica y Debido Proceso.

Por lo expuesto, solicita, se declare ilegal la medida de detención

preventiva impuesta a LEONARDO ABREGO DÍAZ y en consecuencia se le otorgue su inmediata libertad. (fs. 1-3)

SUSTANCIACIÓN

Recibido el negocio en la Secretaria General de esta Corporación Judicial, se libró mandamiento contra la autoridad demandada, quien mediante Oficio FD01 T02-1137 de 24 de marzo de 2000, señaló, que a través de resolución de 10 de marzo de los corrientes, ordenó la detención preventiva del prenombrado ABREGO DÍAZ.

Como fundamentos de hecho y de derecho señaló lo siguiente:

> "La presente causa se inicia, en razón de que personal de la Sub-Dirección de Información e Investigación Policial del Area "G" (Alcalde Díaz), recibieron informaciones de parte de una persona anónima, mediante llamada telefónica, en el sentido de que en la entrada de la Calle Las Tablas, se mantenía un sujeto el cual se encontraba recostado a la pared del Mini super NADIA, y el mismo concordaba con la descripción proporcionada por el informante anónimo, dicha persona mantenía en uno de sus bolsillos de su pantalón, una bolsita que contenía cinco (5) carrizos con supuesta drogas, además una cajetilla de goma de mascar en donde mantenía cuatro (4)(carrizos plásticos transparentes contentivos de posible sustancia ilícita y nueve dólares en efectivo. (fs. 6-9)

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Corresponde examinar al Pleno de la Corte Suprema, las constancias procesales que dieron origen a la detención preventiva de LEONARDO ABREGO DÍAZ por la supuesta comisión de Delito Contra La Salud Pública, a objeto de determinar si dicha medida cautelar de privación de libertad se ajusta a las normas constitucionales y legales.

La génesis de este proceso tiene lugar el día cinco (5) de marzo de dos mil (2000), cuando unidades de policía del Sub-D. I. I. P. del Área "G" de Alcalde Díaz, fueron informados a través de una llamada anónima, que en la entrada de Calle Las Tablas de Alcalde Díaz, se encontraba un sujeto vendiendo drogas. Al llegar al lugar indicado, observaron a un sujeto que coincidía con la descripción dada por el informante, y el cual respondió al nombre de LEONARDO ABREGO DÍAZ, por lo que las unidades de policía procedieron a la revisión de dicho sujeto, logrando encontrar dentro de una bolsita plástica de rayas blanca con rojas, cinco (5) carrizos contentivos de polvo color crema y nueve balboas en billetes de a uno.

Posteriormente, ABREGO DÍAZ fue llevado a la Sub-Estación de Policía para efectuarle un registro minucioso, lográndose encontrar dentro del bolsillo pequeño del pantalón, una cajetita de goma de mascar de dos pastillas (marca clorets), cuatro (4) carrizos contentivos de polvo color crema que se presume sea droga (cocaína). (f. 2)

Al efectuarse la prueba de campo, visible a foja 6, arrojó resultados positivos para la determinación de droga conocida como cocaína, en la cantidad de 0.81 gramos, según reveló el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas del Ministerio Público. (f. 15)

LEONARDO ABREGO DÍAZ, al momento de rendir su indagatoria, manifestó, que la droga encontrada en su poder, la iba utilizar para consumo personal, ya que desde los quince (15) años de edad consume droga.

De lo anterior, se observa, que si bien existe un informe de novedad en donde se narra la forma en que se dieron los hechos, no menos cierto es, que dicho informe policial no ha sido ratificado ante funcionario de instrucción, por

lo que no puede ser tomado como plena prueba. Además, en dicho informe, no se describe al sujeto denunciado mediante llamada anónima, sin embargo, llama la atención, que las unidades de policía al momento de hacer el recorrido señalaron, que LEONARDO ABREGO DÍAZ, coincide con la descripción dada por el informante anónimo.

Además, si bien al señor ABREGO DÍAZ, se le encontró en su poder la cantidad de nueve (9) carrizos contentivos de cocaína y nueve balboas, también existe un informe de laboratorio visible a foja 15 del cuadernillo, que reveló, que el peso total de la sustancia incautada era 0.81 gramos, lo cual está por debajo de la cantidad posológica del consumo de droga, que oscila entre 1 a 1.5 gramos.

Por tanto, en contraposición con los señalamientos hechos por la autoridad demandada, en la orden de detención fechada 19 de marzo de 2000, este Pleno considera, que las pruebas aportadas en la incipiente investigación, demuestran, que nos encontramos frente a la supuesta comisión de un delito de posesión simple de droga, que tiene una penalidad que oscila entre uno (1) a tres (3) años de prisión, y por tanto no admite detención preventiva.

En consecuencia, dado que el delito investigado reviste una pena mínima inferior a los dos años de prisión, procede decretar la ilegalidad de dicha medida cautelar impuesta contra LEONARDO ABREGO DÍAZ, por la supuesta comisión de Delito Contra La Salud Pública.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención de LEONARDO ABREGO DÍAZ, y en consecuencia se ordena sea puesto en inmediata libertad de no tener otra causa pendiente en su contra.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA (fdo.) ARTURO HOYOSFRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN A. ARJONA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PROPUESTA POR LA LICENCIADA AIDA JURADO ZAMORA EN FAVOR DE BOLÍVAR ANTONIO BECERRA MORALES CONTRA EL FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DE SAN MIGUELITO. APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, recurso de apelación presentado por el licenciado Daniel Henderson Mora, dentro del proceso de habeas corpus en favor de Bolívar Becerra, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario La Joyita por el supuesto delito de robo cometido en perjuicio de Rafael Hidalgo, el 31 de octubre de 1999.

La alzada se dirige contra la resolución de 22 de febrero de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que resuelve declarar legal la detención del imputado.

El recurrente fundamenta su apelación en que el a-quo "... al valorar las evidencias que recoge el expediente seguido contra BOLIVAR BECERRA sólo se limita a examinar las que sirvieron para disponer la detención preventiva de mi representado...", desconociendo otros elementos de convicción incorporados posteriormente al sumario (f. 15).

Adicionalmente, hace referencia a la declaración indagatoria rendida por Juan Valencia, de quien afirma fue visto en el lugar de los hechos y ha aceptado su participación en el ilícito investigado, y que en ningún momento hace cargo alguno contra Bolívar Becerra (Cfr. cuaderno de habeas corpus, f. 15).

DECISION DE LA CORTE

El examen de las evidencias que pone de manifiesto la encuesta sumarial, permite establecer que la detención preventiva de Bolívar Becerra, cumple fielmente con los requisitos que establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En efecto, como elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible, se observan la denuncia presentada por Manuel Alvarado Hidalgo en el Centro de Recepción de Denuncias de la Policía Técnica Judicial de San Miguelito (Cfr. antecedentes, fs. 1-3); el Informe de Novedad suscrito por el agente de la Policía Nacional Carlos Justavino (Cfr. antecedentes, fs. 26-27) y el Informe del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público que le otorga una incapacidad provisional de 45 días (Cfr. antecedentes, f. 63).

En lo concerniente a los medios de convicción que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena, aparecen en las sumarias el señalamiento directo que hace José Rafael Hidalgo quien asegura que pudo reconocer entre sus agresores a un sujeto de nombre Bolívar, que se encontraba con pantalón corto y sin camisa y tenía un tatuaje en el pecho y era quien lo golpeaba con un pedazo de madera "... y fue el que en el momento del robo se me tiró encima y me sacó el reloj ..."(Cfr. antecedentes, f. 60 y 278). La descripción anterior coincide plenamente con lo expresado por Anselmo Hidalgo al ser interrogado por el abogado defensor (Cfr. f. 258). Consta además, la diligencia de reconocimiento en rueda de presos, en la que José Rafael Hidalgo reconoce a Bolívar Becerra como uno de los agresores (vid. fs. 199-202), así como siete fotografías tomadas a Becerra por la Policía Técnica Judicial de San Miguelito, que muestran la existencia de un tatuaje en el pecho del imputado (Cfr. fs. 289-292).

De otra parte, pese a que el imputado al rendir declaración indagatoria niega su participación en los hechos, reconoce que se encontraba en el área donde tuvo lugar la agresión en compañía de Juan José Valencia y que, efectivamente, se había quitado la camiseta que vestía (Cfr. fs. 160-166), por lo que resulta evidente la existencia de graves indicios de presencia y oportunidad en su contra.

En cuanto a los señalamientos de la recurrente en el sentido de que el Segundo Tribunal Superior debió considerar otros elementos probatorios allegados al expediente, ha sido criterio reiterado por esta Corporación de Justicia que el conocimiento y valoración de los elementos probatorios que constan en el sumario, no son materia que puedan ser examinada mediante la institución procesal de habeas corpus, ya que ello implicaría una invasión de la competencia propia de la jurisdicción penal (Cfr. Sentencias del Pleno de 3 de mayo de 1994, 20 de septiembre de 1996 y 11 de mayo de 1999).

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 22 de febrero de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que resuelve declarar legal la detención preventiva de Bolívar Antonio Becerra.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR LA LICENCIADA TERESA IBÁÑEZ EN FAVOR DE JORGE JARAMILLO, CONTRA EL FISCAL OCTAVO DE CIRCUITO DE PANAMÁ. APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus presentada por la licenciada Teresa Ibáñez en favor de Jorge Jaramillo, contra el Fiscal Octavo de Circuito de Panamá.

Al sumariado se le atribuye la comisión de los delitos de corrupción, proxenetismo y rufianismo en perjuicio de Yessica Magdalena Valdés.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, conoció de este proceso constitucional subjetivo en primera instancia, declarando legal la detención preventiva del imputado mediante sentencia de habeas corpus N° 15 de 23 de febrero de 2000. Según el a-quo, la orden de detención librada contra Jorge Jaramillo cumplió con las formalidades consagradas tanto a nivel constitucional como legal, para decretar dicha medida cautelar.

Por interpuesta la apelación en tiempo oportuno, procede la Corte a resolver lo que en derecho corresponde.

DECISION DE LA CORTE

La Corte comparte el criterio externado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en el sentido que la diligencia de 28 de mayo de 1999, mediante la cual se decreta la restricción preventiva de la libertad corporal del imputado, reúne todos los requisitos que establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial y el artículo 21 de la Norma Fundamental (vid. antecedentes, fs. 117-118).

En primer lugar, se observa que la privación de libertad, fue decretada por autoridad competente para ello, por la supuesta comisión del delito de proxenetismo, contemplado en el artículo 228 del Capítulo III del Libro Segundo del Código Penal (Contra el Pudor y la Libertad Sexual), en perjuicio de Yessica Magdalena Valdés Torres.

Respecto a los elementos probatorios allegados para la comprobación del ilícito y los elementos que vinculan al imputado al hecho punible, constan las declaraciones de la ofendida, quien afirma que el imputado la obligaba a prostituirse (f. 61). Se cuenta además con las declaraciones de Eneida Torres (f. 47), Marcos González Jaramillo (fs. 70 y 206) y Lilia Esther Trejos de Sibaja (f. 210), quienes coinciden en señalar que el imputado instaba a la ofendida a prostituirse y cobraba por esos favores.

En cuanto a la exigencia del artículo 2148 del Código Judicial, se observa que el ilícito que se le imputa a Jorge Jaramillo tiene contemplada una penalidad

mínima de dos años de prisión (vid. art. 228 del Código Penal).

De allí que, por comprobado que la orden de detención bajo examen cumple con las formalidades que exigen la Constitución y la excerta procesal y no existiendo ninguna otra circunstancia sobreviniente que desvirtúe los graves indicios existentes contra Jaramillo, debe este Tribunal de alzada confirmar la resolución recurrida.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de habeas corpus N° 15 de 23 de febrero del 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE TOMAS NORIEL ESPINOZA VALDESPINO CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor TOMAS NORIEL ESPINOZA VALDESPINO en su propio nombre y a su favor a propuesto acción de habeas corpus contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia, por considerar que la detención que sufre es ilegal.

ARGUMENTOS DEL DETENIDO

De foja 1 a 7 del expediente de habeas corpus milita la acción constitucional protectora de la libertad individual propuesta por el propio afectado, TOMAS NORIEL ESPINOZA VALDESPINO, quien destaca el hecho de que su detención es injusta por varias razones:

En primer lugar, que el proyectil que le quitó la vida a al joven Jonathan Maure, no era del calibre de la pistola incautada, pues la bala era calibre 22 y el arma calibre 25. Que esta misma arma fue disparada una sola vez tal y como lo señaló el señor Mauricio Lane, quien es el dueño de la misma y que confesó que llevó a cabo la detonación.

En segundo lugar, que las declaraciones en su contra son contradictorias, además de que el licor y la desesperación pudo influir en las afirmaciones acusadoras que perjudicaron a su persona.

Por último, asegura el recurrente que jamás tuvo contacto con el arma incautada, y ni siquiera sabía, al momento de los hechos, de qué calibre era.

Una vez acogida la acción y librado el mandamiento de Habeas Corpus respectivo el 16 de marzo de los corrientes (ver foja 8 del expediente), el funcionario judicial acusado lo contesta mediante Oficio N° 74-STS-BS de 17 de marzo de 2000 (ver fojas 9 y 10 del cuadernillo de hábeas corpus).

CONTESTACION AL MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS

La Magistrada Sustanciadora del Segundo Tribunal Superior señaló en su informe lo siguiente:

> "A) No ordené la detención preventiva del ciudadano TOMAS NORIEL ESPINOZA VALDESPINO, la misma fue decretada por la Fiscalía Auxiliar de la República, mediante resolución de fecha de 7 de agosto de 1998 (fs. 102-105); no obstante, pese a ello, esta Sal sí mantuvo, su detención preventiva, al encausarlo penalmente por delito de HOMICIDIO, mediante resolución de tres (3) de mayo de 1999 (fs. 469-487), auto que fue apelado y confirmado por esa máxima corporación de justicia (fs. 558-562).
>
> B) El fundamento para ello consiste en que le delito imputado conlleva aparejada una pena mínima de (5) años de prisión. y además, porque él es señalado como la persona que disparó directamente sobre la anatomía del menor MAURE SERRANO (q. e. p. d.), tal como lo describen los testigos presenciales del hecho, Sheron Morrel de Hope (fs. 76-77) y Gerardo Gutiérrez (fs. 79-80), declaraciones que coinciden con las conclusiones a las que llegan los peritos de balística que participaron en la diligencia de Inspección Ocular y Reconstrucción de los Hechos (fs. 191-228).
>
> C) Mantenemos bajo nuestra órdenes al mencionado ciudadano, el cual a partir de este momento y en virtud de la presente demanda de hábeas corpus, queda filiado a vuestras órdenes".

EXAMEN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA

Esta Superioridad procede al análisis de las constancias procesales contenidas en el cuadernillo del recurso constitucional en vías de determinar si la medida cautelar personal aplicada al ciudadano TOMAS NORIEL ESPINOZA VALDESPINO, se ha dado con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos para la detención preventiva, o si por el contrario, la misma se ajusta enteramente a las exigencias legales correspondientes.

Según consta en autos, la encuesta penal que lo mantiene privado de libertad se origina a raíz de que el seis de agosto de 1998, aproximadamente a las cuatro (4) de la mañana, en las inmediaciones de la Discoteca Patatus 2 Caribe fue ultimado por un tiro de bala el menor Jonathan Maure (q. e. p. d.).

Según versiones de los testigos presenciales, estos observaron claramente cuando el señor TOMAS NORIEL ESPINOZA VALDESPINO apuntaba con un arma de fuego directamente al cuerpo del hoy occiso el menor Jonathan Maure (q. e. p. d.) y que fue disparada causándole la muerte.

Las declaraciones a que hemos hecho referencia son de Sheron Natalia Morrel de Hope (fs. 76 y 77 del antecedente), Gerardo Gutierrez Meneses (fs. 79 y 80 del antecedente), Mario Francisco Jordan Cañizales (fs. 81 y 82 del antecedente), y Carlos Luis Chifundo (fs. 83 y 84 del antecedente).

Cabe destacar que la señora Sheron Natalia Morrel de Hope manifestó en una ampliación de su testimonio, que ella se le tiró encima a TOMAS NORIEL ESPINOZA y forcejeó el arma para evitar la tragedia. Veámos lo que manifestó textualmente la precitada:

> "El que me golpeó en el estómago fue NORIEL, porque en ese momento el le pidió el arma al otro amigo grandote moreno robusto, negrito, cuando el se dio yo me le tiré encima y estábamos forcejeando el arma ...
>
> ... y el corrió con el arma al grupo de muchachos que le estaban pegando al grupo donde estaba Chifundo y el occiso que era el mismo, el llevaba el arma en la mano, y lo vi como que buscaba dentro del

grupo" ...

DECISION DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

Esta Corporación advierte, que la detención preventiva ordenada se sustenta en elementos que hasta el momento presuntamente vinculan a TOMAS NORIEL ESPINOZA con la muerte del menor Jonathan Maure (q. e. p. d.), pues en principio las pruebas testimoniales apuntan en ese sentido, esto sin dejar de un lado que, las autoridades judiciales competentes en su momento podrán determinar lo contrario si así lo estimaran luego de que, producto del examen de manera pormenorizada de todas y cada una de las declaraciones, testimonios, peritajes y otras circunstacias probatorias, emerjan otros hechos que puedan favorecer al encartado. No es a esta instancia la que le corresponde llevar a cabo los juicios valorativos de las actuaciones y omisiones del detenido; nuestra apreciación sólo se circunscribe a los elementos formales, consignados en la Ley, que debe reunir la detención ordenada por el funcionario autorizado para ello.

Para concluir, y de acuerdo a lo expresado en líneas anteriores, en lo que respecta a la formalidad de la adopción de la medida cautelar corporal, se ha dictado orden de detención preventiva a través autoridad competente y por resolución debidamente motivada (ver de foja 102 a 105 del expediente del Ministerio Público), y con la indicación de los elementos objetivos y subjetivos que evidencian en esta etapa, el vínculo entre TOMAS NORIEL ESPINOZA y el delito investigado.

De consiguiente, el Pleno conceptúa que la detención que se ataca de ilegal ha sido ordenada de conformidad con los requerimientos de la Constitución y la Ley, razón por la cual es de lugar reconocer la legitimidad de la misma.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de TOMAS NORIEL ESPINOZA.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RAUL HERNANDEZ ARIAS CONTRA EL FISCAL NOVENO DE CIRCUITO DE CHIRIQUI. "APELACION" MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a esta Corporación de Justicia, la acción de Habeas Corpus interpuesta por el licenciado ELIAS N. SANJUR MARCUCCI, a favor de RAUL HERNANDEZ ARIAS contra EL FISCAL NOVENO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, el cual se encuentra actualmente detenido en el Centro Penitenciario la Joyita.

Según la resolución apelada, de 15 de febrero de 2,000, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la investigación se inicia debido a la denuncia presentada por el señor GILBERTO ATENCIO BARBA, respecto a hurto realizado en horas de la noche cuando se encontraba esperando

un autobús en la esquina de la calle colindante con la Avenida Ancón, cerca del bar El Refugio. Según él, dos sujetos lo abordaron, le pusieron una arma en el lado izquierdo del hombro, lo despojaron del maletín y trece balboas en efectivo pero, debido a la intervención de las personas que estaban en el sector, salieron huyendo. El conoció, porque los vio de frente, a uno lo apodan Garrapata y al otro Salpullido (fs.15-16).

Posteriormente, hace referencia a la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos en que la víctima identificó al señor RAUL HERNANDEZ ARIAS como uno de los responsables del hecho punible cometido en su contra.

Finalmente, el Tribunal explica que la conducta reprochable consiste en el apoderamiento en forma arbitraria de bienes ajenos, realizada por dos personas utilizando un arma de fuego, lo que constituye el hecho punible, el cual está tipificado como delito en el artículo 186 ordinales 1 y 3 del Código Penal; cuya pena va de 5 a 7 años de prisión. Refiere el Tribunal que, para acreditar tanto la pre-existencia y propiedad de los bienes objetos del delito como el hecho punible, existen en el presente proceso varias pruebas como son el informe de comisión del inspector Milton Mclau y el Detective Orlando M. Lewis; el testimonio de Isaías Aristides Moreno Estribí, de la Fuerza Pública que aprehendió al imputado; el informe de investigación suscrito por Orlando M Lewis; y la manifestación de la víctima.

Al revisar las constancias procesales de las sumarias seguidas contra el imputado, la Corte considera que le asiste razón al Tribunal Superior al mantener la detención preventiva de RAUL HERNANDEZ ARIAS decretada por el Ministerio Público, ya que existen suficientes elementos en su contra que son debidamente detallados en la respectiva resolución, visible de fojas 15 a la 16, por lo que la misma cumple con los presupuestos que determina el artículo 2159 en concordancia con el 2148 del Código Judicial, siendo que, en cuanto a esta última norma, se observa que el delito está tipificado en el Capítulo Segundo, Título Cuarto, Libro Segundo, específicamente los artículos 185 y 186 del Código Penal y por las condiciones agravantes relativas a su comisión (como se cometió de noche y con violencia e intimidación, utilizando arma de fuego) conlleva una pena mínima de 5 a 7 años de prisión.

Para esta corporación, la precisión con que el denunciante GILBERTO ATENCIO BARBA formula, bajo la gravedad del juramento, los cargos que hace a HERNANDEZ, y la inconsistencia de la declaración de éste, sobre todo cuando se confronta con la de su concubina, constituyen los graves indicios de responsabilidad en su contra, que justifican su detención preventiva, hasta tanto no se aclaren los hechos, con base en que dispone el artículo 2147- A del Código Judicial.

Por lo que se deja expuesto, lo procedente es confirmar la resolución apelada, sin perjuicio de que posteriormente surjan otros elementos probatorios que varíen la condición del sindicado y conlleven la emisión de otro pronunciamiento jurisdiccional.

En virtud de lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 15 de febrero de 2,000, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARCOS ANTONIO VILLALBA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado VICTOR OROBIO presentó el 14 de marzo de 2000, ante el Pleno de esta Alta Corporación de Justicia, acción de Hábeas Corpus a favor de MARCOS ANTONIO VILLALBA RAMOS y contra el Fiscal Auxiliar de la República.

ANTECEDENTES DEL CASO

La presente investigación sumarial nace a la vida jurídica con la diligencia de reconocimiento y levantamiento de un cadáver, efectuada por funcionarios de la Fiscalía Auxiliar de la República, en la Vía España, frente a la Discoteca Dreams, aproximadamente a la una y tres minutos de la madrugada del día 5 de marzo.

Mediante informe preliminar de investigación de la División de Delitos Contra La Vida e Integridad Personal de la Policía Técnica Judicial, se confirma que el nombre de la víctima del presente caso penal, responde al nombre de JAVIER SANTIMATEO, además de que los supuestos autores del ilícito son apodados MARQUITO Y PURRO.

Consta a fojas 20 del sumario, el Informe de Necropsia en el cual se indica que el hoy occiso presentaba herida causada por el impacto de proyectil balístico en el área occipital izquierda a una altura de un metro con cincuenta y nueve centímetros y que la causa de la muerte fue la herida penetrante por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Entre los testimonios acopiados en el expediente penal tenemos en primer lugar la declaración jurada de la joven YAMILKA SANTIMATEO URRIOLA, hermana del occiso y quien entre otras cosas expuso que el día de los hechos ella llegó a su residencia aproximadamente a la una y treinta de la madrugada y su hermana de nombre Nixia le informó que unos sujetos del área de San Miguel, apodados MARQUITO Y PURRO habían matado a su hermano Javier, ambos pertenecientes a la banda "TOCA Y MUERE". (Fs. 17-19)

Asimismo se lee la declaración jurada del joven JOSÉ LUIS RENTERÍA, quien entre otras cosas señaló que el día en que ocurrieron los hechos él se encontraba en la Vía España en compañía del occiso y otros amigos viendo el desfile de los carnavales, cuando a la altura de la Discoteca Dreams se toparon con un grupo de personas que pertenecen a la banda de los "TOCA Y MUERE", de los cuales pudo reconocer a Purro, MARQUITO, CHOLO, KIMBLA y RODERICK, y al momento en que el hoy occiso se puso a conversar con CHOLO observó como Kimbla y Purro empezaron hacerse señas en contra del difunto y de repente se escuchó una detonación, por lo que las personas que estaban allí comenzaron a correr y fue entonces que se percató que JAVIER SANTIMATEO se encontraba tirado en la calle. (Fs. 31-34)

JOSÉ DE LA CRUZ GUTIÉRREZ rinde declaración bajo la gravedad del juramento y manifiesta que el día de los hechos él regresaba de la Tarima de Vía Brasil en compañía del hoy occiso y otros sujetos apodados Orito, Wiwi, Luis, cuando de repente el difunto se detuvo para conversar con un sujeto apodado CHOLO de la banda los "TOCA Y MUERE" y entonces otro sujeto de esa misma banda apodado Purro empezó a murmurar en compañía de otro sujeto apodado Kimbla e inmediatamente se escuchó un disparo y pudo ver tirado en el piso a JAVIER SANTIMATEO. Continúa señalando, que escuchó que JAVIER supuestamente había tenido una rencilla con Purro. (Fs. 29, 30, 115 y 116)

A folio 66 del sumario, figura el Récord Policivo Penal del beneficiario de la presente acción en el que se infiere que no registra antecedentes penales.

MARCO ANTONIO VILLALBA RAMOS al momento de rendir sus descargos, niega la comisión del ilícito que se le imputa, argumentando en su defensa, que el día de los hechos él se encontraba en compañía de unas amigas de nombre Naomi Judith Pereira Sosa y Yamileth. (Fs. 90-92)

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS

Por su parte, el accionante del Hábeas Corpus fundamentó su pretensión principalmente en las siguientes consideraciones jurídicas:

La Defensa Técnica argumenta que los requisitos que el Legislador Patrio ha establecido para que proceda la aplicación de medidas cautelares personales incluyendo la detención preventiva, se encuentran en esencia en el artículo 2147 A, 2148 y 2159 del Código Judicial, y que en el caso que nos ocupa, la medida personal aplicada a su representado, a su juicio, no cumple con las normas señaladas, es decir, que no existen graves indicios de responsabilidad en contra de su representado MARCOS ANTONIO VILLALBA RAMOS; que el mismo no fue detenido en la escena del crimen, por lo que no existe el indicio de presencia ni de oportunidad y; que tampoco existen los elementos probatorios en su contra, toda vez que las personas que han declarado no fueron testigos oculares del hecho.

Finalmente, el accionante señala a que en esta etapa de la investigación no se justifica mantener a una persona detenida cuando lo que pudiera existir en su contra son meras sospechas, que a la luz del derecho, no sirven para afectar la libertad de un individuo, por lo que solicita a esta Alta Magistratura se declare ilegal la detención preventiva que padece su representado MARCOS ANTONIO VILLALBA RAMOS.

ADMISIÓN DEL RECURSO E INFORME DE CONDUCTA

Librado el mandamiento correspondiente, el Fiscal Auxiliar de la República rindió su informe de conducta, mediante oficio N° 3781 de 17 de marzo de 2000, en el que manifestó que es cierto que el Despacho a su cargo ordenó la detención preventiva de MARCOS ANTONIO VILLALBA RAMOS e informa que mediante oficio N° 3600 de 15 de marzo de 2000 se remitió las sumarias a la Fiscalía Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, por lo que el prenombrado se encuentra en estos momentos a órdenes de esa autoridad. (Fs. 7-8)

Ante esta información, el Magistrado Sustanciador libró con fecha de 21 de marzo de 2000, nuevo mandamiento de Hábeas Corpus contra la Fiscalía Segunda Superior, a fin de que remitiese el informe de conducta, así como la actuación correspondiente.

La autoridad demandada, mediante oficio N° 341 de 21 de marzo de 2000, remitió junto con copia autenticada del expediente principal, el informe de conducta que en su parte medular es del tenor siguiente:

> "A-No ordenamos la detención preventiva de MARCOS ANTONIO VILLALBA. La Fiscalía Auxiliar de la República la ordenó mediante providencia del 15 de marzo del año en curso, consultable de fojas 117 a 120.
>
> B-Los motivos o fundamentos de hecho que expuso en la citada providencia la Fiscalía Auxiliar de la República, son en primera instancia, el elemento objetivo o comprobación del hecho punible con el informe de necropsia, visible a fojas 20, donde indica que el hoy finado JAVIER SANTIMATEO, presentaba herida por proyectil balístico en el área occipital y como causa de la muerte la herida penetrante por proyectil de arma de fuego en la cabeza. En cuanto al aspecto subjetivo de vinculación se tiene el señalamiento de YAMILKA SANTIMATEO URRIOLA (fojas 17 a 19), JOSÉ LUIS RENTERÍA (31-34) y

JOSÉ DE LA CRUZ GUTIÉRREZ (29 Y 39), estos últimos que acompañaban al hoy finado, y vieron al imputado MARCOS ANTONIO VILLALBA, acercarse en forma maliciosa al hoy occiso, en el momento que se produjo el disparo.

Los fundamentos de Derecho de la providencia que ordena la medida restrictiva de libertad, son los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial."

CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DE LA CORTE

Esta Corporación de Justicia pasa a exponer algunos de los aspectos más relevantes contenidos en el proceso penal en estudio.

Desea aclarar en primer lugar que a ella no le corresponde examinar el fondo del sumario, ya que la responsabilidad de determinar la culpabilidad recae en el juez de la causa. Al Tribunal de Hábeas Corpus le corresponde verificar la legalidad o no de una detención, por lo que las consideraciones que efectúa el peticionario relativas a la exclusión de responsabilidad deberán ser atendidas en el plenario.

Un examen minucioso de las sumarias revelan que la orden de detención preventiva contra MARCOS ANTONIO VILLALBA RAMOS fue ordenada formalmente, mediante providencia de 15 de marzo de 2000, decretada por la Fiscalía Auxiliar de la República. (Fs. 117-120, antecedentes)

El Tribunal de Hábeas Corpus advierte que en el caso que nos ocupa, estamos ante la posible comisión de un delito Contra la Vida y la Integridad Personal (Homicidio) el cual se encuentra contemplado en el Capítulo I, Título II, Libro II del Código Penal que tiene aparejada pena mínima de cinco (5) años de prisión, conducta punible señalada en la Resolución motivada que ordena la medida restrictiva de la libertad corporal de MARCOS ANTONIO VILLALBA RAMOS.

Como elementos probatorios allegados a las sumarias para la comprobación del hecho punible, tenemos la Diligencia de Reconocimiento y Levantamiento de un Cadáver (fs. 2-3) y el Informe de Necropsia practicado en el cuerpo de JAVIER SANTIMATEO. (fs. 20)

El Pleno de la Corte observa que en la encuesta penal constan medios de convicción que vinculan al sumariado con la conducta antijurídica que se le atribuye. Así, tenemos los testimonios de JOSÉ DE LA CRUZ GUTIÉRREZ (fs. 29, 30, 115 y 116); y JOSÉ LUIS RENTERÍA (fs. 31-34), quienes ubican al imputado en el lugar donde se escenificó el hecho de sangre; por lo cual se deduce el serio indicio de presencia y oportunidad que hace presumir su participación criminal, a pesar de que en su indagatoria niega la misma.

En este sentido, considera esta Sala Plena que la Resolución que ordena la detención cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2159 del Código Judicial, además se trata de la supuesta comisión de un hecho punible cuya pena mínima rebasa los dos (2) años de prisión establecidos en el artículo 2148 ibídem.

En fin, las probanzas establecidas en el infolio penal, inducen a esta Corporación de Justicia que existen suficientes elementos para considerar que MARCOS ANTONIO VILLALBA RAMOS está involucrado en el homicidio de JAVIER SANTIMATEO, independientemente de como termine su situación jurídica para la conclusión del sumario.

Por las consideraciones expuestas, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor MARCOS ANTONIO VILLALBA RAMOS y; en consecuencia DISPONE que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la FISCALÍA SEGUNDA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OSVALDO ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Acción de Hábeas Corpus preventivo a favor del señor OSVALDO ANTONIO PADILLA RODRÍGUEZ y en contra del Director General de la Policía Nacional, a fin de que se deje sin efecto la orden de detención, de hecho, emitida por el referido funcionario.

El accionante fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:

Que contra su representado el señor OSVALDO ANTONIO PADILLA RODRÍGUEZ pesa en la actualidad supuesta orden de detención emitida por el Director de la Policía Nacional y esto debido a que miembros del Departamento de Investigación e Información Policial de Ancón mantienen persecución en contra del prenombrado en virtud de imaginaciones, creencias y suposiciones de que su cliente se encuentra involucrado en algún delito del cual ellos desconocen.

Que el día 20 de marzo del presente año, miembros del Departamento de Investigación e Información Policial de Ancón allanaron la residencia de familiares de su representado, porque existía según los agentes orden de detención en contra del mismo, por encontrarse involucrado en un delito de robo.

Que tras investigaciones verdaderas y fundamentada en elementos jurídicos, no existe hasta la fecha, en contra de su representado orden de detención emitida por autoridad competente por delito alguno.

Finalmente, el demandante solicita a esta Honorable Magistratura se declare ilegal la orden de detención decretada en contra de OSVALDO ANTONIO PADILLA RODRÍGUEZ y de no existir la misma que se suspenda la orden de detención de hecho.

Acogida la acción se libró mandamiento de Hábeas Corpus contra el Director de la Policía Nacional, quien remitió su informe de conducta, mediante oficio AL-1004-00 de 27 de marzo de 2000, en los siguientes términos:

> "A. No es cierto que haya ordenado la detención del ciudadano Osvaldo Antonio Padilla Rodríguez, ni por escrito ni verbalmente.
>
> B. Queda explicado en el literal anterior.
>
> C. No tengo bajo mi custodia ni a mis órdenes a la persona que se ha mandado a presentar." (Fs. 5)

Del informe transcrito se desprende que contra el beneficiario de la presente acción constitucional, el funcionario demandado no ha ordenado su

detención, que no lo tiene bajo sus órdenes ni custodia.

Sobre el particular, la Corte en reiterada jurisprudencia, ha admitido el hábeas corpus preventivo por considerar que el espíritu del artículo 32 de la Constitución Política de la República no se limita simplemente a proteger los derechos fundamentales de toda persona, a través del recurso de Hábeas Corpus como una acción reparadora, sino que su alcance es más amplio como un mecanismo preventivo, a objeto de evitar una detención cuando exista una orden en ese sentido que no se haya ejecutado.

En el presente caso, queda claro que no existe una orden de detención preventiva contra OSVALDO ANTONIO PADILLA RODRÍGUEZ, por lo que en consecuencia, no procede la acción de Hábeas Corpus.

En mérito de lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE DEL PROCEDIMIENTO de la Acción de Hábeas Corpus interpuesta a favor de OSVALDO ANTONIO PADILLA RODRÍGUEZ y, en consecuencia DISPONE el Archivo del Sumario.

Cópiese, Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE WILSON OMAR MOSQUERA MENA CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Wilson Omar Mosquera Mena ha solicitado a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia "Amparo de Garantía" en vista que el Pleno de esta Corporación de Justicia en sentencia de 22 de diciembre de 1999, declaró legal su detención al resolver las acciones de habeas corpus presentadas por su esposa, señora Eduvigis de Mosquera y por la doctora Nivia Angela Abrego Muñoz, contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

El manuscrito presentado por el señor Wilson Omar Mosquera Mena fue tramitado como una acción de habeas corpus a su favor. Señala el demandante, entre otras cosas, que su detención es ilegal por las siguientes razones:

> "Quien escribe WILSON OMAR MOSQUERA MENA varón panameño con C. I. P. 8-353-673 detenido en condición de detención ilegal, me dirijo a ustedes ya que son ustedes las autoridades gubernamentales de instrucciones, encargadas de hacer valer la justicia y respetar las leyes, ya q' todos los ciudadanos tenemos derechos a q' se nos (sic) establesca un orden en q' los derechos y libertades sean respetadas y se haga verdaderamente efectivas en cualquier (sic) proseso, como lo enmarca nuestra constitución, y en este (sic) proseso no se han respetado mis derechos y mi libertad.
>
> A- Estoy claro de q' no fue el tribunal q' ordenó mi detención.
>
> 1) Pero son ustedes el Organo Judicial encargado de q' se haga

Justicia ...

2) Son ustedes los q' califican las sumarias.

3) Son ustedes los q' (sic) desidierón abrir causa criminal en contra de un inocente (Wilson Omar Mosquera Mena apodado 'MAY')

B- Según este Organo la orden de detención adoptada por el Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial, no violan las exigencias (sic) establesidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial

1) Todo ciudadano tiene derecho a q' se le respete la presunción de (sic) inosencia (NO FUE RESPETADA)

a) El 15 de Octubre de 1998 fue publicada en primera y en la sección de 'HOMICIDIO' mi foto y un escrito en letras mayúsculas '(CACTURAN AL HOMICIDA DE GABRIEL SAUL CORDOBA ACHITO, WILSON MOSQUERA (a) CHOMBERA)'

2) El licenciado 'SIXTO ABREGO' defensor de oficio en representación del encartado ORNASIS OLIVARREN por medio de los archivos de la Joya, consigue mi nombre completo, el cual es Wilson Omar Mosquera Mena y en vista q' no (sic) aparesco con apodo ni seudónimo, me imputa un 'ALIAS' el cual es 'CHOMBERA' (sic) (Leace los espediente), 'NO' se sindica a Wilson Omar Mosquera Mena, a quien sindican es a un tal CHOMBERA q' supuestamente se llama Wilson Mosquera y estaba preso en la Joya en 1996 ¿No se violan las normas legales q' regulan la Materia?

C- Según este Organo, la Fiscalía Primera Superior cumple con los requisitos señalados por la ley ...

1) En este homicidio, (sic) ningunos de los testigos reconocedores los cuales brindaron sus declaraciones 'NO'(sic) mensionan como autor del hecho de sangre a Wilson Omar Mosquera Mena, sino a un tal 'Chombera o Chombi Chombi, sin mayor detalles q' reside en el sector de 'COCO BOLO' y la declaración de Ornasis Olibarren q' habla por si sola a foja 215 a 217 en la cual señala, no vi quien me disparó, sin embargo a estas alturas, por los rumores q' se han dado dentro de la misma cárcel en q' me (sic) incuentro, ha llegado a mis oidos q' la persona principal de tal lesión a mi persona y q' cometió el homicidio es el Joven apodado 'CHOMBERA' de nombre Wilson Mosquera quien se (sic) incuentra detenido en la cárcel la 'Joya' por otro caso, ver (fojas 301, 302 y 318)

a) Nota N° 328-SSJ-CPLJ-96 del 12 de agosto de 1996 (foja 232) donde señala q' Wilson Omar Mosquera Mena, sale en libertad el 2 de Dic. de 1994 e indica su dirección ...

2) No se me (sic) a tomado declaración, y no porque no (sic) ahigan dado con mi localización ya q' así como el abogado de oficio 'SIXTO ABREGO' por medios de los archivos de la Joya consiguió mi nombre completo y número de cédula a (foja 232) aparece mi dirección actual
...
...
En vista q' se nota claramente q' ustedes no han revisado (sic) minuisiosamente, dichos (sic) espedientes, ya q' todo lo escrito o (sic) espresado por mi persona en este mano escrito, (sic) aparesen en los (sic) espedientes y en el escrito de incidente de nulidad, presentado por mi abogado más fotocopias de familiares muy (sic) sercanos (primos) del hoy occiso GABRIEL SAUL CORDOBA ACHITO' donde con sus propias manos hace (sic) alución a diferentes (sic)

estancias del (sic) Ministerios Públicos, aclarándole en pocas palabras y (sic) consisas, el evidente 'error' q' se está cometiendo con (sic) mis persona ...

... estudiemos las pruebas presentadas por el Licenciado Reynaldo Alberto Loré, en el escrito de incidente de nulidad.

Donde le presenta el informe de (sic) comición relacionado con el (sic) espediente N° 481-97 del homicidio q' hace relación del hoy occiso ROBERTO CUESTA RIVAS, quien supuestamente había sido ultimado por 'WILSON MOSQUERA' alias 'CHOMBERA' y DOMINGO SALAS RENGIFO alias 'MINGO' en este hecho de sangre existía el mismo error en cuanto a la persona, puede (sic) apreciarce en auto a foja 48 quien investigan señalan como dirección del investigado, el Distrito de San Miguelito sector de 'COCOBOLO' la q' corresponde a 'WALSON MOSQUERA MOSQUERA' y no a Wilson Mosquera Mena (ver foja 51 del expediente N° 6997) ver a foja 117 de este expediente, es (sic) desir el q' se refiere al homicidio del hoy occiso Roberto Cuesta Rivas (ver foja 126) (fojas 152-153) (foja 159 a 168 de la sumaria en cuestión, siendo reforzada con el contenido a foja 170 a donde la sección de identificación criminal y civil informa q' el señor WILSON OMAR MOSQUERA MENA, poseedor de la cédula de identidad personal N° 8-353-673, fue buscado debidamente en nuestros archivos de identificación obteniendo resultado 'NEGATIVO'. A foja 181 foja 51) y (foja 188 a foja 233.)

A pesar de todo lo anterior, la Fiscalía Segunda Superior, jamás envió nota aclaratoria a la Fiscalía Primera Superior en el q' se dejase constancia del descubrimiento hecho luego del reconocimiento, más aún nunca en el expediente reseñado se aclararon las diligencias realizadas a mi persona y q' me señalara como el tal 'CHOMBERA'. ..." (fs. 1 a 8).

Acogida la acción de habeas corpus y librado el mandamiento respectivo, el Magistrado Luis Mario Carrasco, en su calidad de sustanciador, constestó en su Oficio N° 73-C de 18 de febrero de 2000, lo siguiente:

"A- Este Tribunal no ordenó la detención del señor WILSON OMAR MOSQUERA MENA, tal disposición fue adoptada por el señor Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, en diligencia fechada 19 de julio de 1996, dentro de las sumarias instruidas por razón de la muerte de GABRIEL SAUL CÓRDOBA ACHITO y las lesiones sufridas por ORNASIS OLIVARREN. El Segundo Tribunal Superior de Justicia al calificar la ya referida sumaria, en resolución de 12 de octubre de 1998, resolvió abrir causa criminal contra WILSON OMAR MOSQUERA MENA por los delitos genéricos de Homicidio en perjuicio de GABRIEL SAUL CÓRDOBA ACHITO y por el Homicidio Tentado en perjuicio de ORNASIS OLIVARREN. En esta misma resolución se dispuso prohijar la orden de detención dispuesta por el señor Fiscal Primero Superior. La anterior resolución ha sido apelada por el señor MOSQUERA MENA y su apoderado judicial, razón por la cual se procederá a la tramitación propia conducente para la remisión de lo actuado hasta la Sala Segunda de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

B- Los motivos justificativos de la medida privativa de libertad dictada en perjuicio de WILSON OMAR MOSQUERA MENA, son explicados por el funcionario que la adoptó de fojas 223 a 228 del expediente instruido en razón de los hechos punibles arriba detallados.

C- El señor WILSON OMAR MOSQUERA MENA se encuentra a órdenes de este Tribunal Superior desde el 14 de octubre de 1998, por haberlo así dispuesto el Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial,

en oficio N° 2141 de 14 de octubre de 1998, inserto a fojas 440 del expediente.

Nos permitimos añadir que, el problema planteado en la acción de hábeas corpus que ahora se ventila ante esa augusta Corporación, fue presentado a la consideración de este Tribunal por disponer de oficio la práctica de diligencias de reconocimiento en rueda de detenidos, con el objeto de que los testigos presenciales del hecho determinasen de manera individual si podían identificar al detenido WILSON OMAR MOSQUERA como el ejecutor de los hechos punibles investigados no obstante, las diligencias no lograron concretarse en razón de la dificultad en lograr la comparecencia de los testigos reconocedores; por ello, se dispuso en resolución de 11 de febrero de 2000, declarar no probado el incidente propuesto." (fs. 14 y 15).

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, había resuelto el 22 de diciembre de 1999, sendos habeas corpus interpuestos a favor del señor Wilson Omar Mosquera por su apoderada judicial y por su esposa de la siguiente manera:

"... la detención del señor Wilson Omar Mosquera Mena es legal, porque fue dictada por autoridad competente, o sea el señor Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá el 29 de julio de 1996 y permanece detenido bajo órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia en virtud de que abrió causa criminal en su contra mediante el auto dictado el 12 de octubre de 1998, ordenando la notificación al imputado por edicto, por no encontrarse su paradero al momento de dictarse dicho auto.
...
Así las cosas, procede la declaratoria de legalidad de la detención ordenada y mantenida sobre el señor Wilson Mosquera Mena y con relación a la aseveración de que el mismo permanece detenido por el error en su identificación y la confusión de su nombre con el de Walson Mosquera Mosquera, esta Superioridad debe señalar que ya el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial adelanta las diligencias pertinentes para esclarecer, a través de la identificación en una rueda de detenidos (fs. 476 a 478 del expediente del proceso penal), las dudas en este sentido y así resolver el incidente de nulidad presentado por la defensa del señor Mosquera Mena dirigido a ello.

Por tanto, corresponde al Segundo Tribunal Superior al resolver el incidente de nulidad promovido por la defensa del procesado determinar la verdadera identidad de éste, previo la diligencia de reconocimiento ordenada.

Al respecto es importante recalcar, que en las acciones de habeas corpus se examina si la detención preventiva ordenada cumple con los requisitos señalados en la ley y en el presente caso, tal como ya se indicó, la detención preventiva decretada contra Wilson Omar Mosquera Mena no viola las normas legales que regulan la materia y así debe declararse." (fs. 466 a 469 del expediente del proceso penal)

En vista que el Magistrado sutanciador del Segundo Tribunal Superior resolvió el 11 de febrero de 2000 declarar no probado el incidente de nulidad, porque no logró practicar la diligencia que ordenó y ante los reiterados señalamientos del señor Wilson Omar Mosquera Mena de que él no es "Chombera", que fue quien cometió los hechos ilícitos investigados, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia consideró indispensable ordenar, mediante la providencia dictada el 1° de marzo de 2,000, la celebración de una audiencia para la práctica de una diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos con la presencia de los señores Wilson Omar Mosquera Mena con cédula 8-353-673 y Walson Mosquera Mosquera con cédula 5-18-284.

Fueron citados como testigos Andrés Eloy Valdés Alain, Cecilio Díaz Gutiérrez, Arturo González y Gisela Yasmín Andrade, porque dichas personas declararon que un sujeto llamado "Chombera" fue quien disparó a Gabriel Saúl Córdoba Achito y a Ornasis Olivarren. Estos testigos durante la investigación rindieron declaración jurada sobre los hechos ilícitos investigados y al referirse al autor de dichos hechos, lo hacen así:

Gisela Yasmin Andrade Garcés declaró que no vió quién disparó a Gabriel, pero en una ampliación de su declaración jurada señaló que el que disparó debió ser un amigo de Nene para salvarlo y posteriormente indicó que: "Me encuentro aquí para comunicar al despacho que he logrado averiguar el nombre de 'Chombera' es Wilson Mosquera", pero que ella no lo conocía y que había escuchado que lo mataron en una balacera en Curundú (fs. 24, 99 y 118 del expediente del proceso penal).

Andrés Eloy Valdés Alain declaró que: "salió un muchacho al que conozco como WILSON, pero todos le dicen CHOMBERA y realizó dos (2) disparos, y le dió a GABRIEL CORDOBA y al de la capucha ... Ni NENE ni el de la capucha dispararon el que disparó fue CHOMBERA. El de la capucha que tenía el arma salió herido cuando amenazaba a NENE con el arma que tenía y dejó caer esa arma. Y así fue que NENE agarró el arma después, pero quien disparó fue CHOMBERA, porque yo ví clarito lo que pasó." (fs. 250 y 251 del expediente del proceso penal).

Cecilio Díaz Gutiérrez señaló en su declaración jurada que, aunque él no vió quien disparó contra Ornasis Olivarren y Gabriel Córdoba, sabe que Chombera es amigo de Nene y que los había visto juntos pero no tiene amistad con aquél, y describió a Chombera de la siguiente manera: "Es moreno de contextura normal, se pela bajito, es bastante moreno, no tiene ninguna seña particular es un moreno normal, Nene puede darle más detalles, porque es amigo de él y puede saber dónde vive.", agregó que quizás sí reconocería a Chombera si lo vuelve a ver. (fs. 170 y 171 del expediente del proceso penal).

Arturo González Muñoz indicó que fue Chombera el que disparó contra Gabriel Córdoba Achito y contra Ornasis Olivarren, que desconoce el nombre de Chombera y su domicilio, porque él no lo conoce, sino que lo veía porque siempre andaba con Nene (fs. 106 y 107 del expediente del proceso penal).

Tomando en consideración lo declarado por estas personas, fueron citadas el miércoles 15 de marzo de 2000 en las instalaciones de la Policía Técnica Judicial para que identificaran si alguno de los detenidos, entre los que se encontraban Wilson Omar Mosquera Mena y Walson Mosquera Mosquera, era Chombera. Este fue el resultado:

Gisela Yasmín Andrade indicó: "No conozco a ninguna persona, solamente de lo que pasó en el homicidio conocía al que me salió con un revólver en el baile, pero no al que mató. No lo conozco de persona a Chombera, solamente me dijeron el nombre." (f. 44).

Cecilio Díaz Gutiérrez señaló: "Aparentemente ahí no está, no está Chombera, ahí no está Chombera."

La audiencia fue suspendida y reanudada el 22 de marzo de 2000, porque fue necesario ordenar la conducción de los dos testigos restantes que se habían negado a concurrir.

Andrés E. Valdés Alain observó a los detenidos en la fila y dijo: "No ahí no está, lo que yo vi fue que el occiso y otro llevaban a otro por la camisa y lo tenían acostado en una alcantarilla y el occiso decía mátalo, luego salió otro de una vereda y le disparó a los dos que tenían agarrado al de la cuneta y cayeron. Yo vi a esa persona de espalda, era morena y todos decían que era Chombera; al que tenían en el piso era a NENE, del cual no sé su nombre. Cuando yo fui a la Fiscalía declaré voluntariamente, pues una persona estaba presa. Yo no quería que se me mal interpretara, yo declaré lo que la gente decía, que había

sido CHOMBERA, pero lo vi fue de espalda ... no lo reconozco han pasado 5 años, el nombre que yo di era lo que la gente decía; la verdad no recuerdo al que disparó pues lo vi de lado, era morenito, de tamaño regular, fornido, por el tiempo que ha pasado no lo puedo reconocer (fs. 56 y 57).

Arturo González Muñoz manifestó que él no conocía a Chombera, "nunca lo he visto, cuando yo fui a declarar ya había declarado una muchacha que se llama ICELA, ella fue la que dijo que fue CHOMBERA, yo vi al que disparó encapuchado, yo no lo conozco a él, la gente dice que fue CHOMBERA, yo vi a un hombre con arma y suéter con capucha, de rayas el suéter. Yo estaba parado a un lado de la bodega, se formó un problema, y vi cuando un man venía bajando la loma y disparó, a esta persona no lo conozco, yo dije que fue CHOMBERA ya que el Fiscal me estaba diciendo lo que pasaba, le decía que no conocía a CHOMBERA que era un man moreno alto encapuchado, creo que tenía el arma en la mano derecha, nunca he visto a CHOMBERA hasta ese día." (fs. 57 y 58).

El Magistrado sustanciador del Segundo Tribunal Superior de Justicia, al abrir causa criminal contra Wilson Omar Mosquera Mena, por homicidio en perjuicio de quien en vida se llamara Gabriel Saúl Córdoba Achito y por homicidio tentado en perjuicio de Ornasis Olivarren, expuso las siguientes consideraciones en el referido auto de enjuiciamiento fechado 12 de octubre de 1998:

> "PRIMERO: Resulta inobjetable la demostración del óbito de quien en vida se llamó GABRIEL SAÚL CÓRDOBA ACHITO, cotejable con la diligencia de reconocimiento y levantamiento del cadáver del infortunado (fs. 2-3), el protocolo de necropsia, cual determina como causa de la muerte un '... traumatismo cráneo-encefálico ...' (fs. 151), en tanto que la certificación expedida por el Registro Civil, oficializa la defunción de CÓRDOBA ACHITO, mientras que la evaluación médica practicada a ORNASIS OLIVARREN, reveló herida en la parte parietal derecha de la cabeza compatible con proyectil de arma de fuego (fs. 289), con todo lo cual se configura el llamado aspecto objetivo de los hechos punibles endilgados a MOSQUERA MENA.
>
> SEGUNDO: Ahora bien, en cuanto a la presunta responsabilidad o vinculación, la misma recae en la persona del sindicado WILSON OMAR MOSQUERA MENA (A) "CHOMBERA", toda vez que los declarantes CARMEN EDITH CARRASQUILLA (fs. 14-17), GISELA YASMíN ANDRADE GARCÉS (fs. 20-24, 96-99 y 108), ARTURO GONZÁLEZ MUÑOZ (fs. 105-108), ALFONSO AGRAZAL VALENZUELA (fs. 112-113), LUIS ALBERTO YIRALDO ORTIZ (fs. 158-160), CECILIO DÍAZ GUIÉRREZ (fs. 169-171), ALCIBIADES LÓPEZ MORENO (fs. 172-174) y ANDRÉS ELOY VALDÉS ALAIN (fs. 248-251), convienen sin dubitación alguna en que fue éste quien disparó mortalmente contra CÓRDOBA ACHITO y además hirió a ORNASIS OLIVARREN (fs. 297-300) con el claro propósito de suprimir la vida de éste, toda vez que si bien la lesión no puso en peligro la vida, la ubicación de la herida (cabeza) conduce a discernir que ese era su manifiesto ánimo, comportamiento por el cual también habrá de responder.
>
> TERCERO: Siendo las cosas como se dejan, se impone el enjuiciamiento criminal contra MOSQUERA MENA (A) "CHOMBERA", por el delito de homicidio en perjuicio de ORNASIS OLIVARREN, por cuanto si bien es cierto que a la fecha no ha rendido indagatoria, mediante resolución calendada 29 de julio de 1997, el Fiscal de grado, dispuso formalmente su indagatoria (ver fojas 223-228) ..." (fs. 430 a 431 del expediente del proceso penal).

Estas son las razones de hecho y derecho que mantienen detenido al señor Wilson Omar Mosquera Mena, y que según la Fiscalía Primera Superior y el Segundo Tribunal Superior de Justicia ha sido identificado como el "Chombera" que perpetró los delitos citados en el auto de enjuiciamiento, en el que también se sobresee definitivamente a Ornasis Olivarren y Carlos Manuel Ledezma Gutiérrez

(fs. 427 a 433 del expediente del proceso penal), pero el Pleno observa que de los ocho testigos que cita el Segundo Tribunal Superior de Justicia, ninguno ha identificado plenamente al señor Wilson Omar Mosquera Mena como "Chombera".

Para identificar a "Chombera" comparecieron a la audiencia de habeas corpus los testigos Gisela Yasmín Andrade, Arturo González Muñoz, Cecilia Díaz Gutiérrez y Andrés Eloy Valdés Alain quienes no reconocieron, en la fila de detenidos a "Chombera", tal como ya se ha expuesto.

Por su parte las otras cuatro personas citadas en el auto de enjuiciamiento, tampoco han identificado en sus declaraciones a Wilson Omar Mosquera Mena como el hombre que disparó en perjuicio de Gabriel Saúl Córdoba Achito y Ornasis Olivarren, supuestamente alias "Chombera", puesto que los mismos declararon lo siguiente (lo acentuado es del Pleno):

Carmen Edith Carrasquilla: "Señor Inspector, NENE en el baile estaba con un pelao que le dicen CHOMBERA o CHOMBI CHOMBI y según los rumores él fue el que disparó para salvar a NENE, también dice que CHOMBERA es prófugo de Coiba" (f. 16 del expediente del proceso penal).

Alfonso Agrazal Valenzuela: "Yo sí estaba en el lugar de la fiesta, pero aparte de donde fue el problema, yo no ví lo que pasó, cuando sentí fue el disparo y no sé que fue lo que pasó entre el muerto y el que lo mató. PREGUNTADO: Ha llegado usted a saber qué persona o personas fue el que disparó contra GABRIEL CORDOBA ACHITO? CONTESTÓ: No." (f. 113 del expediente del proceso penal).

Luis Alberto Yiraldo Ortíz: "PREGUNTADO: Llegó usted a saber quién o quiénes dispararon contra GABRIEL SAUL CORDOBA ACHITO? CONTESTÓ: No sé exactamente, yo no ví, sólo sentí los dos (2) disparos, cuando yo llegué ya estaban los dos (2) sobre el suelo, GABRIEL, encima del que tenía la capucha ... Se rumora que NENE no fue el que mató a GABRIEL CORDOBA ACHITO, pero no se sabe quién fue, eso está confuso, pero sí se comenta que NENE no fue el que disparó contra ellos." (f. 160 del expediente del proceso penal).

Alcibiades López Moreno: "... Del problema en sí no sé mucho, yo estaba en el baile, cuando sentí dos (2) disparos, allí gritaban 'LO MATARON, LO MATARON', yo me asomé y pude ver a GABRIEL CORDOBA ACHITO y a un muchacho que tenía un suéter tirados en el suelo y pude ver a CARLOS MANUEL LEDEZMA (a) NENE y a otros dos (2) que no conozco que salieron corriendo. PREGUNTADO: Vió usted el momento de los hechos de sangre en que resultó muerto GABRIEL SAUL CORDOBA ACHITO? CONTESTO: No lo ví ..." (fs. 173 del expediente del proceso penal).

Tal como lo contempla el artículo 2147-A del Código Judicial, nadie será sometido a medidas cautelares personales si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra y aunque el auto de enjuiciamiento contiene todos los elementos formales exigidos por el artículo 2224 del Código Judicial, incluyendo el nombre del imputado, se observa que el caudal probatorio vincula a "Chombera" como autor del ilícito pero hasta ahora, con las diligencias de investigación y las pruebas practicadas no ha podido determinarse quién es la persona conocida con el alias o sobrenombre de "Chombera", ni que esa persona sea o no Wilson Omar Mosquera Mena, por lo que su detención no cumple la exigencia contenida en el artículo 2147-A del Código Judicial que se refiere a la vinculación del investigado con los hechos que se le imputa.

En el presente caso existe la prueba fechaciente de la comisión de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en perjuicio de Gabriel Saúl Córdoba Achito y Ornasis Olivarren respectivamente, pero no existe la vinculación del detenido con los hechos, porque no se ha identificado claramente el nombre completo del infractor de las normas penales, sino tan sólo su alias o sobrenombre, mismo que no ha podido ser hasta ahora atribuido, por las pruebas que obran en autos, a Wilson Omar Mosquera Mena.

La duda o falta de certeza en la identificación positiva del señor Wilson

Omar Mosquera Mena surge, no sólo de la identificación negativa que hicieron los testigos que participaron en la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos, sino de otra serie de pruebas que fueron presentadas por el propio Mosquera Mena en el incidente de nulidad. Una testigo, Yamileth Murillo Urrutia, prima del occiso, señaló en su declaración jurada que "Chombera" vive en Cocobolo, en la parte de atrás en la Barriada Mano de Piedra Durán y en el incidente de nulidad se presentan copias autenticadas de un informe de comisión y de un allanamiento (fs. 48 y 49 del cuadernillo del incidente de nulidad) que forman parte de las investigaciones que la Fiscalía Segunda Superior adelantó en el homicidio de Roberto Cuesta Rivas alias "Jamer", en los que se hace constar que los presuntos homicidas son Domingo Salas Reginfo alias "Mingo" y Wilson Mosquera alias "Chombera", éste último con residencia en Cerro Cocobolo. En el allanamiento se determinó que allí vivía su esposa de nombre Juana Morales, y al concluir el proceso, se encontró a Walson Mosquera Mosquera, con cédula 5-18-284, culpable de homicidio en perjuicio de Roberto Cuesta Rivas.

El detenido Wilson Omar Mosquera Mena reside en El Valle de San Isidro, casa N° A-23 y su esposa se llama Eduvigis Mosquera, tal como se observa otra falta de identificación entre los hechos y las pruebas necesarias para vincular, hasta esta etapa del proceso, a Wilson Omar Mosquera Mena con los delitos endilgados en el auto de llamamiento a juicio.

Como no existen en el caso en estudio los indicios graves de responsabilidad contra el señor Mosquera Mena, que de conformidad con los artículos 2147-A y 2159 del Código Judicial, son requisitos necesarios para decretar la detención preventiva, debe declararse ilegal esta medida cautelar decretada contra el señor Wilson Mosquera Mena.

De consiguiente, la Corte Suprema, Pleno, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva de WILSON OMAR MOSQUERA MENA, quien se encuentra a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá desde el 14 de octubre de 1998 y ORDENA que sea puesto en libertad, si no tiene otras causas pendientes.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OMAR MUTIS ROMERO CONTRA LA JUEZ UNDECIMA DE CIRCUITO DE PANAMA. APELACION. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a esta Corporación de Justicia la acción de Habeas Corpus interpuesta por el licenciado GERARDO CARRILLO GONZALEZ, a favor del señor OMAR MUTIS ROMERO contra el Juez Décimo Primero del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Según la resolución apelada, de 28 de febrero de 2,000, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, que corre de foja 10 a la 17, la investigación se inicia debido a la denuncia presentada por

el señor DIOGENES GUSTAVO TAPIA CAMPOS ante la Policía Técnica Judicial en el mes de enero de 1997, en razón de que varias personas le dijeron que había un supuesto programa de la Primera Dama de la República y el F. E. S., para dar cupos de taxis de autos nuevos, por lo que le entregó al señor HERACLIO GOMEZ CASTILLO (a) TITO GOMEZ la suma de B/4,400.00 balboas el día 28 de enero de 1997 en la Notaría Décima Primera de Circuito de Panamá, y posteriormente fue llamado por HERACLIO GOMEZ CASTILLO y OMAR MUTIS para supuestamente entregarle los cupos, lo cual resultó falso (fs.12-14).

En contra de MUTIS ROMERO fueron decretadas, originalmente, las medidas cautelares personales contempladas en los literales a y b del artículo 2147 B del Código Judicial: la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad. Como quiera que el imputado no cumplió con tales medidas, el juez de la causa ordenó su detención, la cual fue hecha efectiva.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia resolvió declarar legal la detención del imputado MUTIS ROMERO por considerar que, a pesar de que tratándose de los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir no cabe la aplicación de la detención preventiva, existen situaciones excepcionales que permiten ordenar la privación de la libertad en caso de que se produzca el incumplimiento de las medidas cautelares personales que hubiesen sido fijadas con antelación.

Sin embargo, luego de estudiar las constancias de autos, la Corte considera que no existen elementos suficientes para que se mantenga la detención preventiva del señor OMAR BOLIVAR MUTIS, con base en los razonamientos que se exponen a continuación.

Observa el Pleno, primero, que los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir investigados en este proceso son sancionados con penas menores a dos años de prisión por lo que, en principio, su gravedad no es de las que amerita la detención preventiva. En segundo lugar, no pareciera ser lo más aconsejable que se le aplique al imputado en este caso la medida cautelar extrema de privación de la libertad, estando contempladas en el artículo 2147 B del Código Judicial otras medidas cautelares que bien pueden ser adoptadas. Así mismo, el Pleno ha podido constatar que el señor OMAR BOLIVAR MUTIS ROMERO incumplió su obligación de presentarse al tribunal dos veces por mes, tal como fuera señalado por el Juez Undécimo del Circuito de lo Penal en su informe de foja 7; pero, en relación a la medida de no salir del país sin la debida autorización, no existe evidencia alguna de que se haya producido esta infracción

A juicio del Pleno, el juzgador debió aplicar otra medida cautelar de las que se encuentran contempladas en el artículo 2147 B sin necesidad de extremarse en los términos en que lo hizo. Si el señor MUTIS ROMERO violó la medida prevista en el literal a) de la norma, lo conducente era que se le impusieran las contempladas en los literales c) o d) de la disposición, o sea, la obligación de residir en un determinado lugar de la jurisdicción correspondiente o la de mantenerlo recluido en su propia casa o habitación.

Por las consideraciones expuestas, a juicio del Pleno, los elementos que constan en el presente expediente no demuestran la necesidad de aplicar la detención preventiva prevista por la infracción de una de las medidas cautelares aplicadas al imputado OMAR BOLIVAR MUTIS.

Consecuentemente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la resolución de 28 de febrero de 2000, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en su lugar DECLARA ILEGAL la detención preventiva de OMAR BOLIVAR MUTIS y ORDENA que sea puesto inmediatamente en libertad si no existe otra causa penal en su contra, pero SUSTITUYE esta medida por las que se establecen en los literales a, b y c del artículo 2147 B del Código Judicial con la obligación de que resida, mientras se tramite el proceso, en la ciudad de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA PONCE (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GUILLERMO GAYTAN CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor CÉSAR VILLAMONTE D. ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de GUILLERMO GAYTÁN, contra la Fiscalía Auxiliar de la República.

Acogida la presente acción constitucional, mediante providencia de diez (10) de abril, se libró mandamiento de habeas corpus contra dicha autoridad, quien mediante Oficio No. 4833 de 12 de abril de 2000, señaló lo siguiente:

> "a) No es cierto. Este Despacho no ha ordenado la detención preventiva de GUILLERMO GAYTÁN.-
>
> b) Esta agencia del Ministerio Público instruyó sumarias contra GUILLERMO GAYTÁN, por delito CONTRA EL PATRIMONIO, según denuncia de ALBERTO DANIEL B TESH TUSSIE, otorgándole al imputado la medida cautelar personal que consagra el artículo 2147-B, literal b del Código Judicial, consistente en presentarse periódicamente ante la autoridad los días quince (15) y treinta (30) de cada mes.-
>
> c) El señor GUILLERMO GAYTÁN no ha sido detenido, por lo cual no tenemos a nuestras órdenes a esta persona, ni bajo nuestra custodia."

Del informe anterior se colige que el señor GUILLERMO GAYTÁN, no se encuentra detenido, por lo que procede ordenar el cese del procedimiento, conforme a lo estipulado en el artículo 2572 del Código Judicial, que señala:

> "El procedimiento de Habeas Corpus cesa una vez que el detenido haya recuperado, por cualquier causa, su libertad corporal".

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en vista de que no existe fundamento legal para continuar con los trámites de la acción de Habeas Corpus interpuesto a favor de GUILLERMO GAYTÁN, y por lo tanto DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN A. ARJONA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE LEYKA LILIBETH GONZALEZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, 13 DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, presentó el licenciado RUBEN E. PECCHIO OSPINO acción de habeas corpus a favor de LEYKA LILIBETH GONZALEZ contra la Fiscal Decimotercera del Circuito de Panamá, a fin que se declare ILEGAL la detención que sufría su representada, como sindicada de supuesto delito contra el Patrimonio. El Segundo Tribunal Superior de Justicia libró el mandamiento correspondiente y la funcionaria acusada informó que la procesada se encontraba a órdenes de la Fiscalía Primera Delegada, por lo que el Segundo Tribunal Superior se inhibió del conocimiento del recurso presentado y declinó por razones de competencia privativa, el negocio al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, correspondiéndole a esta máxima Corporación conocer de la situación jurídica de LEIKA LILIBETH GONZALEZ.

Librado el mandamiento de habeas corpus, la Fiscal Primera Delegada de la Procuraduría General de la Nación, Licenciada Cecilia R. López, rindió su informe de conducta mediante oficio No. 714-FPD de 29 de marzo de 2000, en los siguientes términos:

> "1) Este Despacho no ordenó la detención, dicha medida fue dispuesta por la Fiscalía Auxiliar de la República mediante resolución de 2 de febrero de 2000, ordenó la detención preventiva de LEYKA LILIBETH GONZALEZ por presunta infractora de las normas contenidas en el Título II, Capítulo IV del Libro II del Código Penal y dentro del sumario por delito de Contra el Patrimonio en perjuicio de la Policía Nacional hecho denunciado por GILBERTO ORTEGA.
>
> 2) La Fiscalía Auxiliar de la República en la resolución de 2 de febrero de 2000 mediante la cual dispuso la orden de detención de LEIKA LILIBETH GONZALEZ, fundamentó la medida en virtud de los señalamientos hechos por el denunciante GILBERTO ORTEGA, víctima del delito, delito contemplado en el Título II, Capítulo IV del Libro II del Código Penal y dentro del sumario por delito de Contra el Patrimonio en perjuicio de la Policía Nacional, y considerando lo dispuesto en el artículo 2148 del Código Judicial, toda vez que el tipo penal superaba la pena mínima de los dos años de prisión.
>
> 3) La señora LEIKA LILIBETH GONZALEZ, actualmente no se encuentra detenida a órdenes de este Despacho, ya que mediante resolución de 17 de marzo de 200, este Despacho, le sustituyó la detención preventiva que pesaba en su contra, por la medida cautelar consistente en el deber de presentarse periódicamente los díoas treinta (30) de cada mes ante la autoridad que tenga conocimiento del presente proceso penal así como la obligación de no abandonar su residencia después de las 12:00 medianoche con excepción de casos de emergencia o por motivos de trabajo. Dicha medida cautelar fue notificada y/o informada al Centro Femenino de Rehabilitación mediante Oficio N° 605 de 17 de marzo de 2000, fecha en que se solicitó fuera puesta en libertad de no mediar otra causa pendiente en contra de la misma, que ameritara su detención."

Ahora bien, mientras se surtía el trámite de la lectura del proyecto de

resolución del presente negocio, se presentó ante la Secretaría de la Corte escrito mediante el cual se desiste de la acción que se presentara a favor de la señora LEIKA LILIBETH GONZALEZ contra la Fiscal Primera Delegada de la Procuraduría de la Nación.

A este respecto, la Corte ha sostenido en materia de habeas corpus que es factible el desistimiento siempre y cuando quien lo manifieste sea el detenido, su defensor o la persona que interpuso la acción. En este caso, la expresión del desistimiento proviene del defensor de la imputada, quien es también la persona que promovió el habeas corpus a su favor, razón por la cual el Pleno de esta Corporación nada tiene que objetar y en consecuencia, procede la admisión del desistimiento solicitado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por Rubén E. Pecchio Ospino dentro del recurso de habeas corpus a favor de LEIKA LILIBETH GONZALEZ contra la Fiscal Primera Delegada de la Procuraduría de la Nación y en consecuencia, DISPONE EL ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI AGUILERA (fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO FABREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN CARLOS GODOY CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ante la Secretaría General de esta Corporación, la señora Kiria Gutiérrez presentó acción de Habeas Corpus en favor de JUAN CARLOS GODOY GUERRA contra el Segundo Tribunal Superior y una vez librado el mandamiento correspondiente, se recibió la contestación respectiva, a través del Magistrado Ponente, quien expresó lo siguiente:

> "A) No ordenamos la detención preventiva del señor JUAN CARLOS GODOY GUERRA.
>
> B) Reiteramos que no fue este Tribunal quien dispuso la detención del señor GODOY GUERRA. Ese acto dispositivo emanó del Ministerio Público durante la etapa de instrucción del sumario relacionado con el delito de homicidio en perjuicio de CARLOS ANTONIO ROUSE LOZANO y ESTON AURELIO GUILES DELGADO.
>
> C) A la fecha, el prenombrado JUAN CARLOS GODOY GUERRA se encuentra a órdenes de este Tribunal jurisdiccional, porque así lo dispuso la Fiscalía Segunda Superior del Primer Distrito Judicial mediante oficio N° 2118 de fecha 30 de noviembre de 1998, por habernos remitido el sumario para la valoración legal correspondiente.
>
> Respecto a lo anterior es bueno señalar que el proceso en mención ingresó a esta colegiatura el 4 de diciembre de 1998, se abrió causa criminal contra GODOY GUERRA Y OTROS, el 21 de diciembre del mismo

> año; y en la actualidad el sumario se encuentra pendiente de fijar fecha de audiencia, ya que la etapa de lectura, tal como lo consigna el artículo 2346 del Código Judicial, culminó el 14 de los corrientes ...".

De acuerdo a las constancias procesales, la señora Kiria Gutiérrez estima que la detención preventiva de la cual es objeto el señor JUAN CARLOS GODOY GUERRA es ilegal, pues considera que de acuerdo al principio de in dubio pro reo, la ley es certeza y no presunción.

Señala además, que los testigos que incriminan a JUAN CARLOS GODOY son: 1) JOSE CARRERA, quien según la recurrente, pertenece a la banda "Toca y Muere" de la cual también formaban parte los occisos; y 2) JUANA LISBETH ALVAREZ MONTENEGRO, cuya declaración se refiere a que supuestamente el vehículo que se utilizó el día de los homicidios era conducido por Mayra Murillo. Esta versión según la Sra. Gutierrez, fue desmentida por el propietario del vehículo de nacionalidad estadounidense.

Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra JUAN CARLOS GODOY GUERRA, cuya detención se ordena y que constituyen el aspecto subjetivo o vinculación, consta en las sumarias la declaración jurada de JOSE AMADO CARRERA, de fojas 46 a 49, quien identifica plenamente al sindicado, conjuntamente con sus otros dos hermanos. El testigo al rendir su declaración jurada manifiesta que los tres hermanos Godoy llevaban pelucas puestas. Al ser interrogado sobre la seguridad de sus señalamientos, el declarante manifestó que aunque se disfracen él los conoce, pues tiene 12 años de vivir en el área.

De la misma forma, avanzada la investigación se aprecia de fojas 402 a 406 que el mismo testigo al ser interrogado sobre el cuestionario presentado por la defensa técnica del Señor Juan Carlos Godoy, se expresa en los siguientes términos:

> "... Cuando se pararon frente a mi, los ví a los tres los cuales tenían pelucas, pero en sus caras no tenían nada, recuerdo clarito que vi a JUAN, era el último ...".

Por otra parte consta en el expediente, informe de comisión de la Policía Técnica Judicial, así como copia del contrato de alquiler del vehículo que presumiblemente fue utilizado por el sindicado y otros el día del hecho delictivo. A este respecto, se observa que el hecho de sangre ocurrió el día 30 de mayo en altas horas de la noche y el vehículo Mitsubishi rojo vino, fue entregado en la Agencia de Alquiler al día siguiente, es decir, el día 31 de mayo a las 10:58 de la mañana, tiempo suficiente para borrar cualquier rastro del ilícito.

La lectura del cuaderno de antecedentes da cuenta que el hecho de sangre ocurrió como se ha indicado, el 30 de mayo de 1999, en el sector de San Miguel cuando tres sujetos, presumiblemente los hermanos Godoy, disfrazados con pelucas y armados, iniciaron un tiroteo contra los señores Carlos Rouse y Estone Aurelio Guiles Delgado, quienes resultaron muertos a consecuencia de los impactos de bala.

La Fiscalía Auxiliar de la República mediante providencia de 4 de junio de 1998, ordena la detención de Juan Carlos Godoy, pues a su criterio existen en su contra señalamientos directos de personas que se encontraban en el área al momento del tiroteo, entre estas, Juana Alvarez y José Carrera Valdivia. La Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial a su vez, mantuvo la orden de detención (fs. 192 a 193), continuando con las sumarias por lo que se cumple de esta forma con lo previsto en el artículo 2148 del Código Judicial.

En lo que respecta al aspecto objetivo de la conducta punible, la resolución que ordena la detención señala, expresamente el hecho imputado, el cual aparece debidamente comprobado a fojas 2-8 del expediente, donde reposa la

diligencia de reconocimiento de los cadáveres.

Tal como se señala en el informe, el Segundo Tribunal Superior, en resolución de 21 de diciembre de 1999, decidió abrir causa criminal contra JUAN CARLOS GODOY GUERRA Y OTROS por el delito de homicidio en perjuicio de CARLOS ROUSE Y ESTONE AURELIO GUILES DELGADO, la cual está pendiente de fijar la fecha de audiencia.

Dado que el delito de homicidio por el cual es sindicado el señor JUAN CARLOS GODOY GUERRA tiene fijada pena de prisión mínima superior de 2 años, la Corte estima que en la detención preventiva del sindicado no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, por lo que es procedente declarar legal la detención, pues la Corte considera que sin lugar a dudas, existen fuertes indicios que el sindicado se encontraba en el lugar de los hechos el día y a la hora en que los mismos ocurrieron.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor JUAN CARLOS GODOY GUERRA y por los tanto DISPONE que el detenido sea puesto de inmediato a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA JORGE FABREGA P.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO FABREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO ELIGIO SEGURA PALACIOS Y CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EDILBERTO VÁZQUEZ A., ha interpuesto habeas corpus preventivo a favor de EDUARDO ELIGIO SEGURA PALACIOS y contra el DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL.

Recibido el negocio por esta Corporación de Justicia, se libró mandamiento de habeas corpus correspondiente, el día 17 de marzo de 2000 y se requirió al funcionario demandado, que informara si había ordenado la detención de EDUARDO ELIGIO SEGURA PALACIOS, los motivos o fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello y si el mismo está detenido a sus órdenes o a órdenes de otra autoridad.

El Director de la Policía Nacional, CARLOS BARÉS WEEDEN contestó el mandamiento de habeas corpus librado, mediante Nota No. AL-897-00 de 20 de marzo de 2000, en el cual informó lo siguiente:

"...
A. No es cierto que haya ordenado la detención del recurrente ni por escrito ni verbalmente.
B. Queda explicado en el literal anterior.
C. No tengo bajo mi custodia, ni a mis órdenes, ni he transferido a

ningún otro lugar a la persona que ha mandado a presentar ..."

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que debe ordenarse el cese de este procedimiento de conformidad con el artículo 2572 del Código Judicial, ya que se trata de una acción de habeas corpus preventivo que requiere, según constante jurisprudencia de este Pleno la existencia de una orden de detención y, no existe dicha orden de privación de libertad girada contra el señor EDUARDO ELIGIO SEGURA PALACIOS, ni ha sido detenido.

Por todo lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del presente proceso de habeas corpus promovido a favor de EDUARDO ELIGIO SEGURA PALACIOS y ORDENA el archivo del expediente.

Notifiquese y Archivese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA P. (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBEN DARIO QUIROZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada ASUNCION ALONSO DE MONTALVO, en calidad de defensora de oficio de RUBEN DARIO QUIROZ, ha formulado acción de habeas corpus a favor de su representado contra la FISCALIA SEGUNDA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS.

Admitida la acción constitucional, se libró mandamiento mediante providencia de 5 de abril de 2000 contra el funcionario acusado.

Consta a foja 5 del expediente, el Oficio FD-IC.596-2000, por el cual rinde el informe de conducta el señor FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS y cuyo texto nos permitimos reproducir:

> "De conformidad con el traslado correspondiente a la acción de Habeas Corpus interpuesta a favor del ciudadano RUBEN DARIO QUIROZ, sindicado por el supuesto delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, le manifestamos que la presente instrucción fue remitida la esfera de Circuito Penal con vista fiscal No. 107 de 27 de marzo de 2000; y oficio 589 de 5 de abril de 2000.
>
> Lo cual nos imposibilita contestar el recurso de arriba señalado.
>
> Atentamente,
>
> (Fdo.)
> LICDO. ARTURO GONZALEZ BASO.
> Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas."
> (F. 5)

Del informe transcrito se colige que las sumarias seguidas al beneficiado

con la acción de habeas corpus, fueron remitidas a la esfera circuital penal, por lo que se hace necesario declinar competencia en el presente caso, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2° del artículo 2602 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA al SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMNER DISTRITO JUDICIAL, para que asuma el conocimiento de la solicitud de habeas cospus a favor de RUBEN DARIO QUIROZ.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA P. (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ERIC ESTEBAN MC FARLANE LANG CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMA, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En nombre y representación del señor ERIC ESTEBAN MC FARLANE, interpuso el licenciado ELIECER A. PÉREZ, acción constitucional de habeas corpus contra el Fiscal Segundo de la Fiscalía Especializada de Drogas.

Repartida la acción, ordenó el sustanciador que se librase el correspondiente mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada en el término que concede la Ley. Mediante Oficio FD-O-1210-00, de 15 de marzo de 2000, contestó el Fiscal Segundo de la Fiscalía Especializada de Drogas el mandamiento en los términos que a continuación se transcriben:

> "PRIMERO: Este Despacho sí ordenó la detención preventiva del señor ERIC ESTEBAN MC FARLANE, mediante resolución motivada fechada 3 de marzo del año en curso por encontrarse vinculado con la comisión de un delito Contra la Salud Pública Relacionado con Drogas.
>
> SEGUNDO: Los fundamentos de hecho y de derecho que motivan dicha detención preventiva surgen de la incautación de seis (6) paquetes forrados con cinta adhesiva contentivos de polvo blanco que al ser sometido a la prueba de campo arrojaron resultado positivo para la presencia de la droga conocida como Cocaína. Los hechos inician el pasado martes veintinueve (29) de febrero del año en curso a las cuatro y veinte de la tarde (4:20p.m.), cuando unidades de la Policía Nacional efectuaban un retén vehicular en la calle El Ingenio con intersección en el Camino Real y el semáforo de Bethania.
>
> En dicho Lugar se retuvo al vehículo Nissan Pathfinder rojo con matrícula 177905 cuyo conductor quedó identificado como ERIC ESTEBAN MC FARLANE LANG y su acompañante era el ciudadano colombiano WILFRIDO ALEJANDRO RENTERIA CÓRDOBA. A continuación, las unidades policiales procedieron a revisar el vehículo y lograron detectar seis (6) paquetes semi cuadrados forrados con cinta adhesiva color chocolate cuyo contenido se presumió fuera de droga (cocaína). Estos paquetes fueron encontrados debajo de cierta cantidad de pescado

guardado en una hielera de foam que se encontraba en la parte trasera del vehículo.

La evidencia incautada fue sometida a la prueba de campo de rigor y se obtuvo resultado positivo para la presencia de la droga conocida como Cocaína.

Al ser sometido a los rigores de la indagatoria, el precitado RENTERIA CÓRDOBA explicó que un conocido suyo, de nombre FERNANDO GUTIÉRREZ, le hizo la oferta de pagarle por traer de Colón hacia Panamá cierta cantidad de droga y que le pagaría cien dólares ($100.00) por cada paquete.

Según su relato, el día de los hechos recogió e cooler en Cativá, Colón, sin saber la cantidad de paquetes que llevaría, se quedó en la parada de buses y, como a las tres de la tarde (3:00 p.m.) pasó el señor ERIC MC FARLANE, quien le había sido presentado como cinco (5) meses atrás por un paisano suyo de nombre JAVIER, en el restaurante del Hotel Acapulco.

Manifestó que le pidió un aventón a MC FARLANE, al momento de rendir declaración indagatoria, se acogió al derecho que le concede el artículo 22 de la Constitución Nacional.

Posteriormente, amplió su declaración y expuso que venía del Puerto de Coco Solo con destino hacia la ciudad de Panamá cuando, a la altura de Cativá, observó a WILFRIDO quien le pidió un aventón por lo que le dio acceso a la puerta trasera del vehículo para que colocara un cooler que aquél traía y tomaron por el corredor ya que WILFRIDO se ofreció a pagar el peaje.

Luego de evaluar las constancias procesales recabadas el suscrito arribó a la conclusión de que nos encontramos en presencia de la presunta comisión de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, Relacionada con Drogas, y que existen indicios de presencia que vinculan a ambos imputados con su comisión.

Así tenemos, ambos fueron sorprendidos en flagrante comisión del ilícito y que, al rendir indagatoria, RENTERIA CÓRDOBA aceptó haber transportado, a cambio de un pago, cierta cantidad de droga desde la provincia de Colón hasta la ciudad de Panamá, utilizando para ello el vehículo de MC FARLANE LANG quien lo conocía.

Por otro lado, se aprecia que si bien RENTERIA CÓRDOBA trató de exonerar de responsabilidad a MC FARLANE LANG, al decir que el mismo desconocía lo que él llevaba en la hielera, lo cierto es que éste prestó un medio de transporte idóneo para trasladar la sustancia ilícita hasta esta ciudad sin que, hasta el momento existan elementos probatorios que respalden la excepción invocada por ambos.

Aunado a lo anterior, resulta curiosa la casualidad de encontrarse ambos en Cativá, luego de no haber tenido contacto por espacio de un mes, según declaración de RENTERIA CÓRDOBA. Igualmente, resulta ilógico lo que deja entrever este último al insinuar que transportaría la droga utilizando un vehículo de transporte colectivo. En base a tales consideraciones y valorando los elementos probatorios recabados, procedimos a ordenar su detención preventiva con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2148 2159 del Código Judicial.

TERCERO: el prenombrado ERIC ESTEBAN MC FARLANE se encuentra en las instalaciones de la Policía Nacional y es puesto a órdenes de su Despacho en virtud de oficio N° FDO-1211-00 de esta misma fecha."

(fs. 9-11).

Por su parte, el apoderado legal del detenido fundamenta la acción constitucional que se examina, en términos generales, en la falta de elementos probatorios para la comprobación de la participación del señor MC FARLANE en el ilícito cuya comisión se le imputa, esto es, "Contra la Salud Pública".

Advierte el Pleno, que al beneficiado con la acción constitucional que se examina se le instruye el sumario por la presunta comisión del delito denominado genéricamente, "Contra la Salud Pública". De conformidad con los hechos que constan en el expediente instruido en la presente causa criminal, al señor MC FARLANE se le detuvo el día 29 de febrero de 2,000 en compañía del señor WILFRIDO RENTERIA, de nacionalidad colombiana este último, a la altura del Corregimiento El Ingenio, en un operativo policial, porque al proceder las unidades policiales al registro del vehículo en el que viajaban, marca Nissan Pathfinder, color rojo vino, matrícula 177905, encontraron en el maletero del mismo una nevera en cuyo interior se hallaron seis paquetes con cocaína.

A foja 290-296, rinde declaración indagatoria el señor ERIC MC FARLANE, quien manifiesta trabajar como comisionista de venta de la Compañía Detro Cumings, la cual se dedica a la venta de motores marinos, bombas de agua, entre otras piezas. Aduce haber conocido al señor WILFRIDO RENTERIA desde hace, aproximadamente, cinco o seis meses, por intermedio de un cliente suyo de nombre JAVIER, y que posteriormente RENTERIA le compró repuestos en dos ocasiones.

De acuerdo al indagado, MC FARLANE, el día de los hechos, viajaba de Coco Solo, Colón a Panamá, donde se hallaba visitando a un cliente, cuando se encontró a la altura de Cativá al señor WILFRIDO RENTERIA, a quien le sonó la bocina de su vehículo. Que el señor WILFRIDO le hizo señas para que le diera un "bote", por lo que detuvo su vehículo, entonces el prenombrado WILFRIDO RENTERIA se acercó al carro y le pidió que le diera un "bote" hasta Panamá. Asegura MC FARLANE que RENTERIA llevaba consigo una nevera que subió al maletero del vehículo y que no tenía conocimiento que el señor RENTERIA, transportase en dicha nevera los paquetes de cocaína encontrados por la Policía. Al respecto se transcribe parte medular de la respectiva declaración indagatoria:

> "yo venía de la provincia de Colón, de visitar en el Puerto de Coco Solo a un cliente JORGE ELIECER, dueño de la nave PROSEGUIR, quien no se encontraba ..., en vista de que no lo conseguí, como a las dos y media, tres de la tarde me retiré a Panamá para hacer unas cotizaciones al Servicio Marítimo Nacional, ya que tenía que mandárselas por fax y se me había pasado hacerlo en la mañana. Al venir por los lados de Cativá, ya siendo las tres y quince, había un tranque ..., al frente me pareció ver al señor WILFRIDO y le pité y el me hizo señas, ya que el es un señor conocido, el me hizo señas de que le diera un aventón o bote, yo eché a un lado el vehículo y el corrió hacia el vehículo, le bajé el vidrio del lado derecho y le pregunté hacia donde iba, el me contestó que hacia Panamá y que si lo podía llevar y le dije que si, en eso me dijo que mantenía un cooler y le dije que no había problema y le quité el seguro de la puerta trasera del carro, el la abrió y metió el cooler. ... Al llegar a la vía que va hacia la 12 de octubre había un retén una calle antes, ... inocentemente saqué mi licencia y cédula la entregué a uno de los policías, a él le pidieron su pasaporte y el Policía se le quedó viendo y me dijo que me estacionara a un lado que nos iba a revisar. Quiero hacer constar que si yo hubiese sabido lo que ese cooler traía, me hubiese ido por otra calle." (fs. 292-293)

Por su parte, el otro implicado WILFRIDO ALEJANDRO RENTERIA, al rendir declaración indagatoria de foja 33-38, manifiesta que la droga incautada le había sido entregada por una persona de nombre FERNANDO GUTIERREZ, en Cativá, provincia de Colón, para que la transportara hasta Panamá, por lo cual iba a recibir un

pago; y que, encontrándose en una parada en Cativá con la nevera que contenía la droga, pasó el señor MC FARLANE en su vehículo y paró, por lo que pidió que le diera un "aventón" hasta Panamá, lo cual aceptó el señor MC FARLANE, de manera que subió la nevera con la droga al maletero del vehículo. En los términos que se citan, parte medular de lo expresado por indagado WILFRIDO RENTERIA:

> "Señor Fiscal, hace tres días FERNANDO GUTIÉRREZ me hizo la oferta de traer de Colón un encargo que se supone que contiene tóxico o drogas y que me iban a pagar cien dólares por paquete, pero no me dijeron cuantos eran y yo le dije que estaba bien; el día de hoy mas o menos a las nueve de la mañana volví a hablar con FERNADO que me llamó a mi celular 633-6449 y me dijo que fuera a Colón por el encargo, ... De ahí me quedé en la parada de buses por un espacio de seis minutos, ya eran como las tres de la tarde y en eso pasó el señor ERIC MC FARLANE y me vio, paró su vehículo y le dije que si me daba un aventón a la ciudad y el aceptó, en eso me abrió la parte de atrás de la camioneta y yo metí el cooler o nevera, que mantenía pescados arriba. De ahí no paramos hasta llegar al corredor, seguimos el camino hacia su oficina que es donde me iba a dejar, la cual no se donde queda, hasta que llegamos al retén y fue donde la Policía revisó el carro y encontró los seis paquetes con droga." (f. 35)

Al proceder el Pleno de esta Corporación de Justicia a resolver la acción constitucional propuesta, considera conveniente dejar establecido previamente respecto a la privación de la libertad, que la misma constituye una medida cautelar de carácter personal, sujeta al cumplimiento de determinados requisitos dispuestos en la Constitución y la Ley para su validez, dentro de las cuales destaca el artículo 21 de la Constitución, la existencia de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales. Tales formalidades legales vienen establecidas en el artículo 2159 del Código Judicial, en el que se indica que en la diligencia en la que se decrete la detención preventiva, deberá constar:

1. El hecho imputado;
2. Los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible;
3. Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena.

De lo expuesto, se advierte que la disconformidad con la legalidad de la medida cautelar ordenada por el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, estriba en la falta de cumplimiento del requisito establecido en el numeral tercero de la norma arriba citada, es decir, en cuanto a la existencia en la instrucción sumarial de elementos probatorios que vinculen al detenido con el delito que se le imputa.

El Código Judicial en su artículo 2147-A, pauta expresamente, en relación con el requisito señalado, que para la aplicación de las medidas cautelares establecida en la Ley, resulta necesaria la existencia de graves indicios de responsabilidad en contra del afectado; lo que para la Corte no se producen en el presente caso. Ello es así, toda vez que, de las constancias probatorias que reposan en la presente causa criminal no se desprende de manera fehaciente la vinculación del beneficiado con la acción con el ilícito que se le imputa.

A la conclusión anterior llega esta Superioridad, toda vez que, si bien la droga incautada, se encontró en el interior del vehículo de propiedad del detenido MC FARLANE, de la declaración indagatoria, tanto del propio MC FARLANE como de la del otro imputado, WILFRIDO RENTERIA, se advierte fácilmente, en primera instancia que la misma le pertenecía al señor RENTERIA y, además, que el beneficiado con la acción que se examina, no tenía conocimiento que el prenombrado RENTERIA, a quien le hizo el favor de transportarlo desde Cativá hasta Panamá, trajera en el interior de una nevera que introdujo en el maletero

de su vehículo, un cargamento de cocaína.

No existe en el expediente otro medio probatorio, que ofrezca indicio cierto de la participación del detenido con el delito cuya comisión se le atribuye, y no considera este Pleno que resulte suficiente para mantener la detención preventiva cuya legalidad se examina, la duda expresada por la Fiscalía Segunda, acerca de la coincidencia de que los procesados, MC FARLANE y RENTERIA, se encontraran en el mismo lugar el día de los hechos.

Reitera, en consecuencia, esta Superioridad que de los medios probatorios aportados al sumario instruido, no se derivan indicios suficientes que revelen la participación del imputado con el delito cuya comisión se le atribuye, por lo que procede decretar la ilegalidad de la detención preventiva ordenada contra el señor ERIC MC FARLANE por la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en la causa criminal que se le sigue al prenombrado MC FARLANE y al señor WILFRIDO ALEJANDRO RENTERIA CÓRDOBA, por la supuesta comisión del delito, genéricamente denominado, "Contra la Salud Pública", sin perjuicio que, de aparecer nuevos elementos probatorios que vinculen al detenido con el delito que se le imputa, pueda ordenarse su detención preventiva.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva del señor ERIC MC FARLANE LANG, decretada por la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por lo que se ORDENA su inmediata libertad, de no existir otras órdenes de detención en su contra.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO DE AGUILERA (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI
(fdo.) JORGE FABREGA P. (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OSCAR AUGUSTO MAYERS LOPEZ SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA JUEZ UNDECIMA DE CIRCUITO PENAL DE PANAMA, APELACION. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce en grado de apelación de la acción de habeas corpus interpuesta por la Licda. BRUNEQUILDA LÓPEZ SOUSA a favor de OSCAR AUGUSTO MAYERS CERCEÑO, sindicado por delito contra la salud pública, contra la Juez Undécima de Circuito Penal de Panamá.

EL ACCIONANTE

La abogada defensora del beneficiado con la presente acción expresa en lo medular del escrito, que si éste estaba cumpliendo con funciones propias de su cargo, el hecho de que confeccionara una guía o documentación que viene descrita por el Bodeguero donde se detalla el peso y el kilo de la carga, máxime a que hace la advertencia que la misma "está pendiente de pago" por ende no se puede enviar a su destino, ello no significa que sea conocedor del contenido de dicha carga, ya que ni siquiera tiene acceso a ella.

Agrega que si bien es cierto que a MAYERS CERCEÑO le correspondió confeccionar la guía perteneciente a la mercancía que resultó ser ilícita, ese

hecho fue circunstancial, toda vez que se intuye que ignoraba cuál era el contenido de la carga. (F. 2 del cuadernillo de habeas corpus)

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL A-QUO

El Segundo Tribunal Superior señaló que OSCAR AUGUSTO MAYERS CERCEÑO resultó vinculado con la investigación al quedar identificado como el funcionario de la empresa COPA que realizó el corte de la guía de la mercancía que resultó ilícita.

La investigación ha acreditado que el señor MAYERS CERCEÑO violentó los procedimientos usuales de la empresa al utilizar el nombre de otro funcionario de COPA, CARLOS GUERRERO, para refrendar el corte de guía y, que además, intervino de manera directa ante otro funcionario de la empresa COPA, RONY VEGA DE ICAZA, al señalarle que la carga no iba para San José de Costa Rica sino para Puerto Príncipe de Haití. (F. 8)

La orden de detención que dispone la privación de libertad de OSCAR MAYERS CERCEÑO fue elaborada el 26 de agosto de 1998, por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Droga. En el contenido de esta resolución se enumeran los elementos acreditativos del hecho punible y se establecen los puntos que vinculan al señor MAYERS con el evento. Lo anterior, a la luz del intervalo penal previsto para la conducta sancionada permite patrocinar la legalidad de la medida cautelar. (F. 9)

FUNDAMENTACIÓN DEL PLENO

En primer lugar, el objetivo de la acción de habeas corpus es determinar si la detención que sufre una persona es contraria a los casos que señala la Constitución Política y la Ley.

El caso en estudio tiene su génesis el 14 de marzo de 1998, en la zona de carga de la Compañía Panameña de Aviación (COPA), donde el señor CARLOS JIMÉNEZ, supervisor de carga de dicha empresa, solicitó a la Autoridad del Aeropuerto Internacional de Tocumen la revisión de dos (2) cajas de cartón que fueron llevadas al depósito de COPA para ser embarcadas hacia la República de Haití, Puerto Príncipe. Las cajas contenían ropa usada y en cada una se encontró 8 paquetes. Al momento de perforar uno de los bultos arrojó una sustancia de color blanco que se presumía era droga.

La guía aérea que autorizaba el transporte de la carga estaba identificada por el número 230-13108082, fechada 13 de marzo de 1998, cuyo remitente es ANDRÉS GONZÁLEZ con teléfono n° 221-3566 sin domicilio en Panamá y estaba consignada a Tabernat Evangelic De Delmas de Puerto Príncipe. (F. 2 del cuadernillo de habeas corpus)

Los 16 paquetes, de tamaño regular y contentivos de polvo blanco, fueron enviados al Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, en donde se determinó que los bultos tenían un peso total de 16.489.00 gramos, resultando la sustancia incautada positiva para la determinación de cocaína. (F. 21)

Se tiene que la persona vinculada al ilícito es OSCAR AUGUSTO MAYERS LÓPEZ, lo que se desprende de las siguientes declaraciones:

CARLOS HUMBERTO GUERRERO FERNÁNDEZ, quien desempeña el cargo de servicio al cliente en las Oficinas de Importación de COPA, indica en declaración jurada que si bien en la guía aérea N° 230-13108082 aparece su nombre, esta no fue suscrita por él ya que el código de emisión de la guía no es el suyo sino que le corresponde a MAYERS CERCEÑO y la hora en que se hizo el corte de guía corresponde al horario de 5:10 p. m. de la tarde del 12 de marzo, y él laboró ese día en horario de 6:00 a.m a 2:00 p. m.

El declarante explicó que las guías deben ser firmadas por la persona que las elabora y por quien envía la carga, pero la guía en cuestión, no tiene la firma de la persona que la elaboró, solo tiene una firma ilegible que supone es de la persona que remitió la carga en cuestión. (Fs. 17-18)

LUZ MARÍA HURTADO FAJARDO funcionaria del Departamento de Carga de COPA, es conteste en lo externado por GUERRERO FERNÁNDEZ y agrega que MAYER CERCEÑO le solicitó a ella que dejara la oficina abierta para atender a un cliente que solicitaba un corte de guía y que luego él se lo informaría al supervisor, para que cerrara la puerta. Una semana después, el supervisor se dirigió a GUERRERO FERNÁNDEZ y le preguntó si él había realizado la guía en mención, pues en la carga se había encontrado droga. (Fs. 25-26)

ROSEMERY MAYDEE DELGADO GONZÁLEZ funcionaria de la Sección de Carga de COPA, indicó que CARLOS GUERRERO laboró el 13 de marzo de 1998 en horario de 6:00 a. m. a 2:00 p. m. (F. 29)

RONNY VEGA DE ICAZA quien fungía como Oficial de Bodega, manifestó que el día de los hechos un sujeto de características del interior se presentó en recibo de carga y le solicitó que le pesara dos (2) bultos para mandarlos a San José de Costa Rica. Luego de esto le entregó el recibo de carga para que le cortaran la guía para dicho destino. Como a los 30 minutos, regresó el dueño de la carga junto con OSCAR MAYERS y este último le dijo que la carga no iba para San José sino para Puerto Príncipe, Haití, lo que le pareció extraño a VEGA DE ICAZA porque el remitente, que había solicitado otro destino, no le dijo nada. (F. 50)

DOMINGO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, quien es Supervisor de Carga de COPA y tiene a su mando los oficiales de bodega, agentes de carga y estibadores, manifestó que no es regular que un funcionario corte la guía y la ponga a nombre de otro, el procedimiento correcto a seguir es que la persona que confeccione la guía tiene que poner su nombre, firmar la guía y poner su propio código. Si se corta una guía de persona no conocida, se tiene que solicitar al remitente una documentación que lo identifique.

Indica el Supervisor que MAYER CERCEÑO nunca le dijo que había cortado la guía a nombre de GUERRERO FERNÁNDEZ, sino que los administrativos se percataron de ello por medio de la computadora y después de lo ocurrido el 13 de marzo de 1998, MAYERS CERCEÑO no fue a laborar más, no se supo más nada de él. (F. 59-60)

Agrega el declarante que siempre que salga carga hacia Puerto Príncipe, entre otros destinos, deben registrar a los remitentes con algún documento de identidad de las personas que llevan la carga. F. 60)

Por su parte, OSCAR AUGUSTO MAYERS CERCEÑO admitió que fue la persona que cortó la guía aérea y señala que la puso a nombre de GUERRERO FERNÁNDEZ porque el señor que trajo la craga llegó preguntando por éste para que le hiciera un corte de guía y traía los documentos que le entregó el bodeguero, consistentes en una hoja que detalla el peso, piezas y aveces el contenido que informe el cliente.

Según MAYERS CERCEÑO, el señor dijo que habló con GUERRERO FERNÁNDEZ por teléfono y que éste le había dado una tarifa de B/.50.00 para pagar la guía. Sin embargo, al momento de hacer el corte salió por B/.101.00, y el señor le presentó un cheque por B/.50.00, le preguntó si podía dejarlo y traer el restante después, pero MAYERS CERCEÑO le dijo que no, que el cheque debía ser por el total de la guía o que pagara el total en efectivo y le informó que podía dejar la guía pendiente de pago para después venir a pagarla pero le hizo la salvedad que sino la pagaba no volaba.

MAYERS CERCEÑO le entregó al señor el papel blanco y el amarillo, para que el bodeguero marcara el bulto luego le puso a la guía un papel blanco donde decía "pendiente de pago". Indica que el señor ROGELIO BENETT AROSEMENA Sub-gerente del Departamento de Carga, tenía conocimiento de esta situación, ya que habló con el

Sub-gerente sobre ese pago, pero a él no le pagaron, por esa razón no firmó la guía. (F. 39-40)

Se le preguntó al indagado porque motivo dejó de laborar en la empresa COPA y éste contestó que fue para buscar un mejor trabajo y superación, que laboraba en la empresa Cargo Three, ubicada en el Aeropuerto de Tocumen, donde gana B/.400.00 mientras que en la otra compañía ganaba B/.320.00. (F. 41)

Examinadas las declaraciones juradas, se advierte que existen indicios de presencia y oportunidad que vinculan al señor MAYERS CERCEÑO en la comisión de delito contra la salud pública, cuya pena mínima es superior a los dos años de prisión.

En cuanto a la orden de detención preventiva, ésta fue decretada mediante resolución fechada 26 de agosto de 1998 (Fs. 43-45), por la autoridad competente que es el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Droga, Licdo. PATRICIO ELÍAS CANDANEDO. La resolución está debidamente motivada y detalla los elementos de prueba que vinculan al imputado con la presunta comisión del ilícito, por lo que en el caso en examen se cumple con los requisitos de los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial que regulan la materia.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 3 de marzo de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS HUMBERTO SINGH TORRES CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José Miguel Navarrete promovió el día 7 de abril del presente año, acción de habeas corpus a favor de LUIS HUMBERTO SINGH TORRES y contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Mediante auto dictado el 10 de febrero de 2000 se libró mandamiento de habeas corpus y se le requirió al funcionario demandado que, en el término de la Ley, rindiera un informe sobre las causas de la detención. Sin embargo, ese mismo día, el licenciado José Miguel Navarrete desistió de la acción de habeas corpus promovida mediante escrito que fue presentado en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Como quiera que toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que debe acogerse al desistimiento

presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado José Miguel Navarrete dentro de la acción de habeas corpus promovida a favor de LUIS HUMBERTO SINGH TORRES contra el Fiscal Auxiliar de la República y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VANDERBITH WELLINGTON BOWIE CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado HILARIO RODRÍGUEZ UREÑA ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Acción de Hábeas Corpus a favor de VANDERBITH WELLINGTON BOWIE DAVIS, con la finalidad de que se declare ilegal la orden de detención preventiva, emitida por el PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, mediante resolución de 8 de septiembre de 1999.

Acogida la demanda el primero (1°) de marzo del 2000, el Magistrado Sustanciador giró mandamiento de Hábeas Corpus a favor del demandante y contra el Procurador General de República, solicitándole el informe de conducta correspondiente.

Como respuesta al mandamiento de hábeas corpus que se libró en su contra, el Procurador General de la Nación remitió a este despacho el oficio No. PGN-A1-168-00, de 2 de marzo del 2000, que aparece de fojas 11 a 12 del expediente.

Por otro lado, consta en el expediente que en vista de que el Procurador General de la Nación informó que el peticionario de la presenta acción se encuentra a órdenes de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, se libró mandamiento de hábeas corpus contra esa Autoridad.

No obstante, encontrándose en lectura de proyecto de resolución, el Licenciado HILARIO RODRÍGUEZ UREÑA, apoderado judicial del señor VANDERBITH WELLINGTON BOWIE DAVIS, desistió de la acción de hábeas corpus propuesta. Dicho escrito fue recibido el 28 de marzo del 2000, en la Secretaría de la Corte (cf. fs. 28).

Como quiera que toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente, conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno considera que debe acogerse el desistimiento presentado.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el Licenciado HILARIO RODRÍGUEZ UREÑA dentro de la Acción de Hábeas Corpus promovida a favor de VANDERBITH WELLINGTON BOWIE DAVIS.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TRAYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DIÓGENES DELGADO ASPRILLA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de acción de habeas corpus presentado por el licenciado Ricardo E. Duncán H., a favor de Diógenes Delgado Asprilla quien se encuentra sindicado, por el delito contra la salud pública y en contra del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Afirma el recurrente que de las declaraciones vertidas por Diógenes Delgado Asprilla y Felipe Webb "... no está ligeramente demostrado en el expediente que Asprilla tuviera conocimiento de la droga que poseía Felipe Webb ..." (Vid. f. 2 cuaderno de habeas corpus).

Agrega el activador procesal que el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas fundamenta la detención preventiva por el hecho de que Diógenes Asprilla asegurara que "... Felipe Webb vestía un suéter negro, cuando la policía dijo que era blanco lo que lo lleva a la conclusión de que ... Por qué el taxista no dijo esto ... será que era para ocultar la droga ..." (Cfr. f. 3 cuaderno de habeas corpus).

Por admitida la presente acción constitucional, se libró mandamiento de habeas corpus de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2582 del Código Judicial. La autoridad requerida contestó mediante oficio FD02 T02-1140 del 27 de marzo de 2000, en la cual admite que ordenó la detención de Diógenes Delgado Asprilla, y expone las circunstancias de hecho y las razones de derecho para mantener la orden de privación de libertad.

BREVE HISTORIA DEL CASO

Los antecedentes dan cuenta que el presente negocio tiene sus orígenes en la llamada telefónica que hiciera personal del McDonalds de Parador, a la Policía Nacional informando sobre la presencia de dos sospechosos indicando la descripción de los sujetos así como el número del taxi en el cual circulaban, los cuales preguntaron la hora de cierre del local (f. 84).

La Policía logró detenerlos a la altura del Comisariato Víctor y Cristina frente al Nazareno, inmediatamente fueron trasladados a la base (Area F), donde se les hizo la revisión encontrándosele a Felipe Rogelio Webb en el pantalón "... una especie de bolsa de plástico transparente, la cual era del largo de la pretina y la mantenía en todo alrededor (sic) de la cintura, tenía dos bultos de regular tamaño los cuales mantenía en la parte trasera del pantalón, eso estaba cosido a máquina igual que el de la pretina ..." (Cfr. f. 90).

De otra parte se encontró en el "... maletero del taxi un maletín que contenía un par de zapatillas FILA, la cual mantenía cada una en su interior, dos envoltorios envueltos (sic) con cinta adhesiva, iguales a los que mantenía (sic)

en la parte trasera del pantalón de Felipe Rogelio Webb ..." (vid. f. 90).

DECISION DE LA CORTE

Procede la Corte a determinar si la medida de privación de la libertad cumple con los requisitos exigidos a la luz del artículo 2566 del Código Judicial.

Según la resolución de 25 de enero de 2000, que ordena la detención preventiva Delgado Asprilla, la medida restrictiva de libertad se fundamenta en la presunta comisión del delito contra la salud pública concretamente tráfico de droga, que lleva aparejada pena mínima superior a los dos años de prisión.

Como elemento probatorio allegado al expediente para la comprobación del hecho punible se tiene la diligencia de captura del vehículo 3T-332, conducido por Diógenes Delgado Asprilla en el cual se encontró la presunta droga y la que llevaba consigo Felipe Webb (vid. f. 9)

Sometida a la determinación de las pruebas técnicas de rigor resultó positiva para la determinación de Cocaína con un peso equivalente a 915.60 g. (Cfr. f. 105).

Con relación a los elementos de prueba que figuran en las sumarias contra el imputado consta su propia declaración cuando al momento de sus descargos manifiesta que estando parado en el McDonalds de Parador en espera del pasajero "... en ese momento llegó una muchacha que la conocía ya de vista de nombre Mary y ... le pedí que me acompañara para después irnos a comer por ahí..." (Cfr. f. 37).

De otra parte la mencionada joven de nombre Maryxenia Morales manifestó que se encontraba en el McDonalds en "... compañía de una amiga Kadin y su novio, luego este le dijo que deseaba estar a solas con su novia por lo que le pidió que se fuera en el taxi, del hermano ..." (Cfr. f. 34).

Agrega que "... antes de llegar al McDonalds el novio de su amiga estaba en el taxi junto a los otros, el estaba afuera del taxi esperándonos, el Taxista estaba dentro del carro y el otro que tenía la droga venía saliendo del McDonalds, y se metió en el taxi, como si antes estuviera en el mismo y me monte en el taxi, porque el novio de amiga me dijo vete con ellos y nosotros nos vamos atrás ..."(Cfr. f. 34).

Por otro lado al rendir declaración Isis Kadhine Morales Lasso, manifiesta "... que estaba en casa de otra amiga (Thelma), cuando el Papá la llamó para que lo fueran a sacar y fue cuando avisó que Mary estaba detenida ahí mismo en Don Bosco y fue cuando me enteré que era por droga ..." (Cfr. f. 57).

De otra parte consta la declaración de Juan Delgado Asprilla hermano del beneficiario de esta acción constitucional quien afirma que conoce a Kadhin Morales desde hace tres meses, por teléfono, lo que evidencia vínculos existentes entre los implicados en este hecho (f. 61).

Observa esta Corporación de Justicia que de las declaraciones vertidas por los imputados así como por el esposo de Isis Khadin Morales, Juan Delgado Asprilla hermano de Diógenes Delgado Asprilla, presentan serias contradicciones que dejan ver elementos de presencia, oportunidad y participación de Delgado Asprilla en la comisión del ilícito.

Por otro lado el hecho de que al momento de ser detenido por las autoridades de Policía Delgado Asprilla, mintiera sobre su nombre manifestando llamarse Casimiro Delgado Asprilla y posteriormente al llegar a las instalaciones de la Policía Técnica Judicial dijo llamarse Diógenes Delgado Asprilla (f. 4-85).

En reiterada jurisprudencia esta Corte ha señalado que "en materia de

delitos contra la salud pública, los indicios antes mencionados revisten gravedad para la adopción de la medida cautelar de privación de la libertad, sin perjuicio de que en el curso de las investigación se incorporen otros medios probatorios que acrediten lo contrario y confirmen la versión de Diógenes Delgado Asprilla (Cfr. Sentencias del Pleno de 9 de mayo de 1997 y 22 de febrero de 2000).

Como quiera que la providencia que decreta la detención preventiva cumple con lo preceptuado por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, corresponde entonces mantener la medida cautelar atacada.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de Diógenes Delgado Asprilla y en consecuencia ORDENA que sea puesto a órdenes del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Devuélvase

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FABREGA PONCE
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JULIO CÉSAR MOSQUERA VALENCIA Y EN CONTRA DEL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. (DESISTIMIENTO). MAGISTRADO PONENTE CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Natividad C. Cruz N., interpuso acción de habeas corpus a favor de Julio César Mosquera Valencia y en contra del Director Nacional de Migración y Naturalización.

Encontrándose el negocio en trámite, se recibió por Secretaría General, escrito de desistimiento de la pretensión constitucional presentada por la activadora procesal (f. 70).

El artículo 1073 del Código Judicial reconoce al demandante el derecho a desistir de su iniciativa procesal, expresa o tácitamente, lo que da lugar a la suspensión del trámite.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento de la acción de habeas corpus presentada por la licenciada Natividad C. Cruz N. y, en consecuencia, ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONFLICTO DE COMPETENCIA DENTRO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADA EN FAVOR DE RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ, ENTRE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de competencia surgido entre el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, dentro de la acción de habeas corpus presentada por la Licenciada Leonor Samudio a favor de RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ y en contra de la Juez Segunda de la Niñez y la Adolescencia de Panamá, quien mediante resolución de 27 de mayo de 1997, ordenó su internamiento por un período de doce (12) años, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Menores en resolución de 22 de agosto de 1997.

En el presente caso, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, mediante resolución de 22 de noviembre de 1999 (fs. 9-12), se inhibió del conocimiento de la acción constitucional interpuesta , remitiendo la actuación al Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial para que procediera en derecho, fundamentando su resolución en lo siguiente:

> "... en la actualidad el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia sólo tiene competencia para conocer de los habeas corpus a favor de personas que aún no han cumplido dieciocho años, tal como lo establece el artículo 25, numeral 7 de la Ley 40 de 199. A contrario sensu, este Tribunal colegiado no tiene jurisdicción ni competencia para conocer de habeas corpus a favor de personas mayores de edad".

Por su parte, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante resolución de 2 de diciembre de 1999 (fs. 16-18), también se inhibió de conocer de la acción promovida y declinó su conocimiento ante el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial por considerar que:

> "... como quiera que en la ciudad de Penonomé, existe el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, Despacho Judicial que ejerce las mismas funciones en materia penal, que el actual, que por razón de competencia funcional, toda vez que el hecho ilícito se cometió en otra provincia en la cual este Tribunal no tiene competencia y que por razón de territorio de acuerdo a los artículos 233, 234, el despacho se inhibe de conocer el presente recurso de habeas corpus ...".

Remitido el expediente al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante auto de 14 de diciembre de 1999 se inhibió de conocer de la acción de habeas corpus motivo de este conflicto, fundaméntandose básicamente en lo siguiente:

> "Independientemente que el hecho ocurrió en Penonomé, sede de este Tribunal Superior, y que además RODRÍGUEZ CASTILLO se encuentra recluido en la Cárcel Pública de Aguadulce, estimamos que no nos corresponde conocer de la acción de habeas corpus porque la detención que sufre este joven fue emitida por una funcionaria con sede en la Provincia de Panamá y cuyo superior para conocer esta acción no somos los Magistrados de este Tribunal Superior si no (sic), por el contrario, los Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá".

Ante el conflicto de competencia surgido, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial ordenó remitir el expediente al Pleno de la Corte Suprema, a fin de que ésta dirimiera el conflicto de competencia planteado.

Cumpliendo con lo normado por el artículo 2288 ibídem, se le dio traslado de este negocio al Señor Procurador General de la Nación para que emitiera concepto y este funcionario, mediante la vista correspondiente (fs. 30-46), sostiene que:

> "Un pormenorizado análisis de las normas que fijan la competencia, el RERPA, (Régimen de Responsabilidad Penal para la Adolescencia) así como los fundamentos establecidos en la Doctrina de la Protección Integral, me llevan a opinar que es el Tribunal Superior de la Niñez y la Adolescencia, el competente para conocer el habeas corpus presentado a favor de RUBÉN RODRÍGUEZ.
> ...
> En el RERPA también se crearon una serie de instituciones del sistema de justicia penal para la adolescencia, entre ellos: el Tribunal Superior de la Niñez y la Adolescencia, con jurisdicción en todo el territorio nacional, estableciéndose, según los dispone el numeral 7 del artículo 23, la competencia para conocer de los procesos de habeas corpus a favor de todas las personas que aún no hayan cumplido los dieciocho años de edad.
>
> Pese a que, de la interpretación individual de esta norma, se pudiese concluir que este Tribunal Superior no es competente para conocer de la acción de habeas corpus formulada a favor de RUBÉN RODRÍGUEZ, pues, el mismo es mayor de edad, existen principios científicos de competencia que me hacen llegar a una conclusión distinta, dado que, el artículo 12 del RERPA señala que dicha ley deberá ser interpretada y aplicada de forma que garantice los derechos fundamentales que reconocen la Constitución Política y los tratados suscritos por la República de Panamá en favor de los adolescentes.
>
> En este sentido, el artículo 7 del RERPA establece el ámbito subjetivo de aplicación, señalando que la misma es aplicable a todas las personas que hayan cumplido los catorce años y no hayan cumplido los dieciocho años de edad, al momento de cometer el acto infractor que se le imputa. RUBÉN RODRÍGUEZ, al momento de la comisión del acto infractor, contaba con 14 años de edad, por lo que se encuentra dentro del intervalo de edad en el cual se aplica el RERPA".

Concluye su vista el señor Procurador, citando fallo del Pleno de esta Corporación, pronunciado al resolver consulta de constitucionalidad que formulara el Magistrado Presidente de la Sala Primera, de la frase "de lo Civil", contenida en el artículo 756 del Código de la Familia y que establecía la competencia a la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia para conocer de recursos de casación civil por hechos tipificados por la ley penal. En lo medular de ese fallo se expresó:

> "El Código Judicial, al asignar competencia para conocer de recursos extraordinarios de Casación y Revisión a la Sala Civil o Penal de la Corte Suprema, dependiendo de la materia, sigue un criterio racional y de lógica jurídica que tiene plena base constitucional, asignando tales competencias de acuerdo a la materia sobre la cual recae el derecho sustancial. En el caso del artículo 756 y las materias sobre las cuales resulta viable la interposición de estos recursos extraordinarios, se desconoció parcialmente este criterio racional y científico, con base al cual la norma censurada debió haber organizado las materias atendiendo a su naturaleza, el derecho sustancial que recogen y sus aspectos procesales o adjetivos, asegurando de esta forma la efectiva tutela del derecho reclamado".

(Corte Suprema de Justicia, Pleno. Sentencia de 25 de enero de 1999, p.41, 42, 46).

La controversia que se ha suscitado en esta causa penal consiste en un conflicto de competencia negativa, donde tres (3) diferentes tribunales superiores niegan tener competencia para conocer de la acción de habeas corpus presentada.

Analizada la situación planteada, el Pleno comparte el criterio exteriorizado por el Señor Procurador General de la Nación, en cuanto a la adjudicación de la competencia para conocer del presente negocio, en el Tribunal Superior de Niñez y la Adolescencia y para ello se indica lo siguiente.

El origen de este conflicto se encuentra, como ya se ha visto, en la acción de habeas corpus presentada por la Licenciada Leonor Samudio, a favor de RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ, quien fuera responsable del acto infractor de homicidio y violación carnal cometido en perjuicio de LORENZA SOLÍS GUERREL, hecho ocurrido en la comunidad de Vista Hermosa, Distrito de Penonomé, el 24 de septiembre de 1990, acción constitucional presentada contra de la Juez Segunda de Niñez y la Adolescencia de Panamá quien, mediante resolución de 27 de mayo de 1997, ordenó su internamiento por un período de 12 años, decisión que en su momento fue confirmada por el Tribunal Superior de Menores (hoy Tribunal Superior de Niñez y la Adolescencia), mediante resolución de 22 de agosto de 1997.

Tal como se aprecia, la autoridad demandada en la acción de habeas corpus lo constituye la Juez Segunda de Niñez y la Adolescencia de Panamá, juzgado que forma parte de la jurisdicción especial de menores, la que tiene su fundamento en el artículo 59 de la Constitución Nacional y que en materia de responsabilidad penal de los adolescentes es regulada por la Ley 40 de 1999, "Del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia". Esta ley asigna, en su artículo 23 numeral 7, al Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia la competencia para "conocer de los procesos de habeas corpus a favor de todas las personas que aún no han cumplido los dieciocho años de edad". A primera vista y según se desprende de la redacción del mencionado numeral, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia no sería el tribunal competente para conocer de la presente acción de habeas corpus, pues consta en el expediente que hoy en día RUBÉN DARÍO RODRIGUEZ cuenta con edad superior a los dieciocho (18) años . Sin embargo, dicha disposición no puede ser interpretada aisladamente sino en armonía con los principios rectores de la Ley 40 y el resto de sus disposiciones.

En ese sentido, el artículo 7 de la Ley 40 inserto en el Capítulo I, Título I que se denomina "Disposiciones Generales", se refiere al ámbito subjetivo de aplicación de dicha ley y preceptúa lo siguiente:

> "Esta Ley es aplicable a todas las personas que hayan cumplido los catorce y no hayan cumplido los dieciocho años de edad al momento de cometer el acto infractor que se les imputa.
>
> Igualmente se aplica a los procesados que cumplen los dieciocho años durante los trámites del proceso, así como a las personas mayores de edad acusadas por actos cometidos luego de haber cumplido los catorce y antes de cumplir los dieciocho años". (el subrayado es nuestro).

Tal como se aprecia del artículo transcrito, la Ley 40 de 1999 resulta aplicable en el presente caso, dado que si bien es cierto que RUBEN DARIO RODRÍGUEZ es hoy día mayor de edad, cuando cometió el acto infractor tenía una edad mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho (18) años, situación que se encuentra dentro de lo que se dispone en el segundo párrafo de la disposición legal que se deja arriba transcrita.

En ese orden, es del caso señalar que no se puede soslayar el principio de especialidad que informa todo nuestro derecho y que está consagrado como

principio rector en la Ley 40 de 1999, en el numeral 6to de su artículo 16. En ese sentido y tal como lo señaló el Pleno de esta Superioridad en el fallo citado por el señor Procurador, si seguimos un criterio de lógica jurídica debemos fijar la competencia de acuerdo a la materia sobre la cual recae el derecho sustancial y en el presente caso, si bien es cierto que el beneficiario de la acción constitucional es hoy día un adulto, se reitera que no lo era al momento en que ocurre el acto infractor que motivó su internamiento, del que tuvo conocimiento las autoridades competentes de ese entonces, es decir, el Juzgado de Menores (hoy Juzgado de Niñez y Adolescencia) y cuyo superior jerárquico lo es el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, tribunal a quien esta Superioridad estima por las razones que se dejan vertidas, como el competente para conocer de la acción de habeas corpus que originó el presente conflicto de competencia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE fijar la competencia para conocer de la acción de habeas corpus presentada a favor de RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ en el Tribunal Superior de Niñez y la Adolescencia, donde se procederá a remitirlo para el trámite correspondiente.

Notifíquese y Envíese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DAVID VITERI RUEDAS, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Herrera M. Morán en representación de DAVID VITERI RUEDAS, ha interpuesto acción de habeas corpus a su favor y contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Acogido el recurso y librado el mandamiento de Habeas Corpus, el funcionario demandado rindió el informe que se le solicitó por medio del Oficio N° AL-1136-00, fechado el 10 de abril de 2000. En el mencionado informe el señor Carlos Barés Weeden, Director de la Policía Nacional, expresó lo siguiente:

> "...
> A. No es cierto que haya ordenado la detención del ciudadano David Viteri Ruedas, ni por escrito ni verbalmente.
>
> B. Queda explicado en el literal anterior.
>
> C. No tenemos bajo nuestras órdenes al señor David Viteri Ruedas. Este ciudadano fue aprehendido en posesión de un arma de fuego registrada a nombre de otra persona por lo cual fue remitido a la Gobernación de la provincia de Panamá mediante oficio de 3 de abril de 2000." (f. 6)

Como el detenido se encuentra a órdenes de la Gobernación de la Provincia de Panamá, el Pleno de la Corte Suprema carece de competencia para conocer de la acción de habeas corpus interpuesta a su favor y debe declinar su conocimiento

al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, de conformidad con los artículos 2602, numeral 2 y 2588 del Código Judicial.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la acción de habeas corpus promovida por el licenciado Carlos M. Herrera Morán a favor de DAVID VITTERI RUEDAS en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS HUMBERTO SINGH TORRES CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José Miguel Navarrete promovió el día 7 de abril del presente año, acción de habeas corpus a favor de LUIS HUMBERTO SINGH TORRES y contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Mediante auto dictado el 10 de febrero de 2000 se libró mandamiento de habeas corpus y se le requirió al funcionario demandado que, en el término de la Ley, rindiera un informe sobre las causas de la detención. Sin embargo, ese mismo día, el licenciado José Miguel Navarrete desistió de la acción de habeas corpus promovida mediante escrito que fue presentado en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Como quiera que toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que debe acogerse al desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado José Miguel Navarrete dentro de la acción de habeas corpus promovida a favor de LUIS HUMBERTO SINGH TORRES contra el Fiscal Auxiliar de la República y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese,

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE WALSON MOSQUERA MOSQUERA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Walson Mosquera Mosquera, ha interpuesto la presente acción de habeas corpus a su favor y contra la señora Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial.

En su escrito de habeas corpus el detenido expresó, entre otras cosas, lo siguiente:

> **"Ezequiela Cáceres y su Hija Mariela Cáceres, presentaron una denuncia en contra de Wilson Mosquera por el supuesto delito contra la vida y la integridad física (homicidio) en perjuicio de quien en vida se llamó: Roberto Rivas Cuesta, hecho este ocurrido el día 13 de diciembre del año 1997.**
>
> **En una rueda fotográfica se me señaló a mi como a Wilson Mosquera quién es a quien se sindicaba directamente de este hecho punible y posterior a esa temeraria equivocación se me privó de mi libertad física.**
>
> **La Fiscalía Segunda Superior solicitó que se me realizara una diligencia de rueda de detenidos, la cual yo no acepté ...**
>
> **Hoy en día se dice que esta prueba se me realizó y que fui identificado ... en vista a esta anómala situación dirigí una carta a la Consultoría Jurídica de la Procuraduría General de la Nación, quejándome y solicitando a la vez que se me realizara una diligencia de careo con la persona acusadora ... En respuesta a mi carta se remitió a la Fiscalía Segunda Superior el día 23 de junio de 1998 por orden de la consultoría para que se me realizara el careo con la parte acusadora. En respuesta la licenciada Geomara Guerra de Jones, Fiscal Segunda Superior, emitió un comunicado el cual negaba la realización de esta prueba alegando que la víctima manifiesta que eran víctimas de amenazas y que yo había sido reconocido en rueda de detenidos y que desde el día 30 de junio de 1998 se había remitido mi proceso al Segundo Tribunal Superior de Justicia para su calificación. ...**
>
> **Este entredicho dudoso y confuso por la falta de aclaración de todo lo dicho por la sra. Ezequiela Cáceres y su hija Mariela Cáceres, por lo que pido que se estudie y analice minuiciosamente este expediente y se decrete ilegal esta prueba aportada por las personas acusadoras ya que no se procedió a agotar hasta el último recurso para comprobar la veracidad de esta prueba para sí depurar no sólo la prueba sino también al culpable de la persona a la cual se le vincula erróneamente al proceso sumarial por la casi similitud de nombres parecidos." (fs. 1 a 7).**

Mediante auto de 29 de marzo de 2000 se libró el mandamiento de habeas corpus correspondiente y se le requirió a la funcionaria demandada que informara si había ordenado la detención del señor Walson Mosquera Mosquera, los motivos y fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello y si el mismo está detenido a sus órdenes o a órdenes de otra autoridad (f. 5).

La funcionaria demandada contestó el mandamiento de habeas corpus librado mediante el Oficio N° 414 de 30 de marzo de 2000, recibido en la Secretaría

General de la Corte Suprema el 31 de marzo de 2000, en la cual informó lo siguiente:

> "A) Esta Agencia de Instrucción ordenó la detención preventiva, al señor WALSON MOSQUERA MOSQUERA, en providencia fechada, 13 de abril de 1998.
>
> B) Los motivos de hecho y de derecho se encuentran consignados en la citada resolución, esto es el hecho punible y su vinculación directa con el ilícito, toda vez que se incorporó testimonios y diligencias evacuadas en torno al hecho punible, aunado a la diligencia de reconocimiento fotográficos por carpeta y en Rueda de Detenidos efecutuada por EZEQUIELA CACERES RIVAS y MARIELA ASPRILLA CACERES, quienes los señalaron como uno de los partícipes en la muerte violenta de ROBERTO CUESTA RIVAS.
>
> C) No tenemos a nuestras órdenes al interno WALSON MOSQUERA MOSQUERA, toda vez que el mismo fue declarado culpable por un jurado de conciencia, luego de haberse celebrado la audiencia oral el día primero (1°) de noviembre de 1999, encontrándose en la actualidad a disposición de la Dirección de Corrección, quien es la Institución encargada de designar el Centro Carcelario, donde el señor MOSQUERA, cumplirá su condena de 15 años de prisión según auto fechado 9 de febrero del presente año, y dos años de inhabilitación para el ejercicio de Funciones Públicas, en calidad de autor del delito de HOMICIDIO agravado en perjuicio de ROBERTO CUESTAS RIVAS." (fs. 11 y 12).

Como la funcionaria demandada, informó que el detenido no está a sus órdenes, sino de la Dirección de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, por haber sido condenado mediante resolución dictada dentro de un proceso penal por el delito de homicidio en perjuicio de Roberto Cuestas Rivas, corresponde al Pleno de esta Corporación de Justicia declarar legal su privación de libertad, puesto que la misma no es una medida cautelar precautoria, sino el resultado o consecuencia de la condena dictada en su contra.

El habeas corpus es una garantía constitucional cuya finalidad es establecer si la detención sufrida se ajusta o no a la Constitución y a la ley, por lo que no procede en los casos de personas condenadas legalmente por la autoridad competente y que se encuentran cumpliendo la pena impuesta. La excepción la constituye el habeas corpus rectificador, en los casos en que se mantiene al condenado privado de libertad aún después de haber cumplido íntegramente la pena impuesta, situación que no se da en el presente caso.

Por lo antes expuesto, corresponde a esta Superioridad declarar la legalidad de la privación de libertad del señor Walson Mosquera Mosquera con cédula de identidad personal N° 5-18-284.

De consiguiente, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la privación de libertad del señor WALSON MOSQUERA MOSQUERA, impugnada mediante la presente acción de habeas corpus en contra de la señora Fiscal Segunda Superior, y ORDENA que sea nuevamente puesto a órdenes de la Dirección de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDO POR RODARI, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, CONTENIDA EN LA RESOLUCION DE 15 DE JUNIO DE 1989, VIOLATORIA DE LA CONSTITUCION NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Ernesto Castillo Almengor, en representación de la sociedad RODARI, S. A., interpuso demanda de inconstitucionalidad contra la sentencia de 15 de junio de 1989, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, que revocó el fallo PJ-1 de 31 de marzo de 1988, emitido por la Junta de Conciliación y Decisión N° 1.

Lo anterior ocurrió en el proceso que por despido injustificado promovió LUÍS ORLANDO LOZANO SOSA contra la demandada RODARI, S. A., ante la Junta de Conciliación y Decisión N° 1.

La sentencia impugnada -del ad-quem- condenó a la demandada RODARI, S. A. a pagarle al demandante indemnización por despido injustificado por el período laborado de 4 de marzo de 1971 a 29 de mayo de 1987, más salarios caídos desde esa fecha hasta la interposición del recurso de apelación, más las costas que fueron calculadas en el 20% de la condena; el fallo de primer grado había exonerado a la demandada del cargo en su contra.

La demandante constitucional, RODARI, S. A., fundó su demanda en una serie de hechos, de los que resaltan que LUÍS ORLANDO LOZANO SOSA laboraba para un supermercado de propiedad de la demandada; que incurrió en la causal determinada en el numeral 11° del acápite A, del artículo 213 del Código de Trabajo, al faltar más de un mes al trabajo, bajo la excusa de que tenía que renovar a tiempo su carnet de manipulador de alimentos en el Centro de Salud.

Según el demandante constitucional, el trabajador había incurrido en otras faltas, como oponerse a pasar los exámenes para renovar el mencionado carnet, que necesitaba por su tipo de trabajo; también incurrió -según la actora- en consumo de licor en el centro de trabajo y en horas laborables, etc.

Consideró infringidos los artículos 32, 70 y 73 de la Constitución Nacional.

El artículo 32 -contentivo del principio del debido proceso- fue infringido según el demandante, de manera directa por omisión, toda vez que la demandante cumplió con las formalidades legales establecidas para el despido con causa justificada, porque le entregó a LOZANO SOSA su carta de despido, negándose éste a recibirla, teniendo que recurrir a testigos; este hecho -dice el letrado- quedó demostrado en la audiencia laboral, pues el propio representante del trabajador presentó la carta como prueba de despido.

Por lo tanto, RODARI, S. A. cumplió con las formalidades establecidas en el artículo 213 del Código de Trabajo.

El artículo 70 Constitucional -establece el principio de estabilidad y de despido por justa causa- fue infringido de forma directa por omisión, ya que no lo aplicó, teniendo el deber de hacerlo, porque el despido se hizo mediante la correspondiente carta de despido al incurrir en la causal contenida en el numeral 11, acápite A, del artículo 213 del Código de Trabajo, faltar injustificadamente

por más de un mes, pretextando la gestión de su carnet de salud.

Según la demandante, la violación del artículo 73 íbidem -las controversias laborales quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo que se ejercerá conforme a la ley- ocurrió de forma directa por comisión, porque la controversia no fue resuelta por el Tribunal Superior de Trabajo en base a la ley laboral, sino según situaciones "no contempladas en ella", ya que, de haberlo hecho hubiera confirmado la sentencia de la Junta de Conciliación y Decisión.

Admitido el negocio, se le dio traslado al señor Procurador General de la Nación, quien en su Vista N°24 de 18 de septiembre de 1989, consideró que la sentencia demandada no infringe ninguna norma constitucional.

Para arribar a ese criterio, dijo el Procurador no comprender en qué consiste la violación del artículo 32 Constitucional, ya que el proceso se desarrolló conforme los trámites legales, ante un juez competente; en caso de que la valoración de las pruebas haya sido errónea, o que haya habido desconocimiento de elementos que se debieron estimar, ello no constituye violación al debido proceso, ni es materia constitucional, porque entonces se convertiría la Corte en un Tribunal de tercera instancia.

En cuanto a la violación del artículo 70, el señor Procurador señaló que la Corte había dicho que los cargos de incorrecta aplicación a la ley sustancial no pueden ser revisados en un recurso de inconstitucionalidad, más si la sentencia fue dictada por un Tribunal competente, como acto conclusivo de un trámite propio del proceso laboral común.

En base a la jurisprudencia de esta Colegiatura, afirmó el Jefe del Ministerio Público que una resolución no es inconstitucional porque se considere incorrecta la valoración del Tribunal, desde el punto de vista de la ley sustancial, por lo que la valoración de las pruebas es un asunto de legalidad y no de constitucionalidad, no violando fallo impugnado el artículo 70 de la Constitución Nacional.

Finalmente, el artículo 73 íbidem -las controversias laborales se deciden por la jurisdicción de Trabajo según lo dispuesto en la ley-, tampoco es violado, a juicio del Procurador, ya que el actor no negó que el fallo fue dictado por un Tribunal establecido para ello, en la ley; que las consideraciones subjetivas que plantea, sobre la apreciación del tribunal, de los elementos existentes en el proceso, no tienen nada que ver con el principio constitucional contenido en la norma en comento, la cual es de carácter general, considerando con ello, la no violación del artículo 73 ni de ningún otro, de la Carta Magna, por lo que la sentencia demandada no es inconstitucional.

Cumplidas las formalidades establecidas por la ley para esta clase de procesos, se propone la Corte resolver el fondo del negocio, previas las siguientes consideraciones.

En esta oportunidad, el criterio de la Corte es coincidente con el del Ministerio Público, por las siguientes razones.

El demandante constitucional sustenta la infracción del principio del debido proceso -art. 32- en que RODARI, S. A. cumplió las formalidades para despedir a LUÍS LOZANO con causa justificada, porque le entregó su carta de despido, lo cual -según la demandante- se demostró en la audiencia, acatando así el artículo 214 del Código de Trabajo, sin perjuicio de que el Tribunal Superior de Trabajo incumplió la norma constitucional en estudio por omisión, ya que desconoció la eficacia de la carta de despido entregada al trabajador mediante testigos, y que se negó a firmar.

De lo anterior, se desprende que la problemática planteada, más que un asunto debatible a nivel del principio constitucional, es un asunto que gravita en la esfera de la legalidad, toda vez que lo que impugna, es el criterio del

Tribunal Laboral, en cuanto a la valoración de la carta de despido, que pudiera considerarse ilegal, más no inconstitucional.

Además -como lo mencionó el representante del Ministerio Público- el proceso se desarrolló ante Tribunal competente y conforme a los trámites legales.

Por ende, no fue violado el artículo 32 Constitucional.

A juicio de la actora, la infracción del artículo 70, íbidem, de forma directa por omisión, ya que el Tribunal omitió su deber de aplicarla porque el despido se realizó por medio de la carta correspondiente, y porque el trabajador incurrió en la falta prevista en el numeral 11° del acápite A, del artículo 213 del Código de Trabajo, al ausentarse excesivamente del trabajo, so pretexto de tramitar su carnet de salud; además, "desconoció la voluntad del Legislador de sancionar con despido a todo trabajador que abandone su trabajo o no se reporte a él, con causa justificada, por un tiempo prolongado."

Es decir, que no consideró que el despido cumplió los requisitos legales, y se hizo con causa justa.

Le asiste la razón al Funcionario Opinante, toda vez que no tienen rango constitucional los cargos hechos de incorrecta aplicación de la Ley sustancial, como lo es éste caso, que se trata de una actividad valorativa por parte el Juzgador, y ello no puede ser debatido en el presente proceso.

Por lo tanto, no prospera este cargo de inconstitucionalidad contra la sentencia.

Finalmente, el artículo 73 de la Carta Política fue infringido por la sentencia de 15 de junio de 1989, según la actora, porque la controversia no la resolvió el ad-quem según la ley laboral, sino mediante "situaciones no contempladas en ella".

La norma en comento establece la jurisdicción laboral, sujetándola a la ley, de lo que se deduce que la misma se desarrolla a través de los Tribunales laborales; la afirmación de la demandante constitucional, en el sentido de que la sentencia de marras no fue vertida según la ley laboral, es una consideración eminentemente subjetiva y carente de todo fundamento, ya que se cumplió el procedimiento establecido para esos procesos, y el mismo fue ventilado en un Tribunal laboral establecido por la ley, por lo que dicho argumento no tiene valor.

Además, el proceso fue ventilado en las Juntas de Conciliación y Decisión, así como en el Tribunal Superior de Trabajo, lo que demuestra que la controversia que nos ocupa, fue ventilada en la jurisdicción especial del trabajo, según lo norma el artículo 73 Constitucional.

Por lo tanto, concluye la Corte que la sentencia objeto de este negocio, no infringe los artículos constitucionales denunciados, ni ninguno otro de la Carta Magna, y así ha de declararse.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la sentencia de 15 de junio de 1989, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL DR. AURELIO CORREA, EN REPRESENTACION DE MAYRA CHANG DE BOUZA, CONTRA EL ARTICULO 28-A DE LA LEY ORGANICA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El doctor Aurelio Correa, en nombre y representación de MAYRA CHANG DE BOUZA, ha propuesto advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 28-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, dentro del recurso de apelación propuesto en el procedimiento administrativo que se surte en esa Entidad Autónoma Estatal.

Esta Superioridad, al proceder con el análisis del escrito contentivo de la advertencia, se percata que la misma adolece de serios defectos de orden formal que impiden su admisión.

Observa la Corte prima facie, que la advertencia de inconstitucionalidad visible a foja 2 del cuadernillo remitido al Pleno, no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 2551 del Código Judicial que textualmente dice lo siguiente:

> "ARTICULO 2551. Además de los requisitos comunes a toda demanda, la de inconstitucionalidad debe contener:
>
> 1. Transcripción literal de la disposición, norma o acto acusados de inconstitucionales; y,
>
> 2. Indicación de las disposiciones constitucionales que se estimen infringidas y el concepto de la infracción." (Subrayado es del Pleno)

En reiteradas ocasiones esta Corte ha manifestado que la advertencia, como incidente constitucional, debe cumplir con los mismos requisitos formales que se exigen para las demandas de inconstitucionalidad, en los cuales están incluidos los hechos y omisiones del caso. En este sentido, el incidentista no explica de manera clara y exhaustiva las razones por las cuales el artículo 28-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social supuestamente viola el artículo 295 de la Constitución. No basta transcribir las normas que presuntamente se encuentran en contradicción, sino también es imperante que el que formula la advertencia sea explícito en su planteamiento incidental.

Por otro lado, es necesario que el advertidor haga un recuento pormenorizado de los hechos que giran en torno a la advertencia incoada, para que así este Tribunal Pleno tenga una idea completa de las circusntancias fácticas acaecidas y que dieron como resultado el presente incidente constitucional.

En Auto de 13 de marzo de 1998 (Ver también Resoluciones posteriores de 18 de noviembre y 17 de diciembre, ambas de 1998), este Pleno indicó la importancia de cumplir con todos los requerimientos que por Ley se exigían para formalización de la advertencia de inconstitucionalidad, enfatizando lo pertinente:

> "Sin embargo, no se transcribe la norma que se estima inconstitucional; tampoco se indica ni transcribe la disposición o disposiciones constitucionales que se estiman infringidas, ni en qué concepto se produce la supuesta infracción constitucional.

> Por otra parte la advertencia tampoco cumple con los requisitos comunes a toda demanda, formalidades similarmente exigibles a este proceso". (Subrayado es del Pleno)

Los defectos que vician el escrito bajo examen imposibilitan a este Tribunal Colegiado conocer de la Advertencia de Inconstitucionalidad propuesta, tal como lo precisa el artículo 2552 del Código Judicial en su parte final:

> "Artículo 2552.
> ...
> La inobservancia de los requisitos a los que se refieren los artículos anteriores producirá la inadmisibilidad de la demanda". (El subrarado es de la Corte).

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el doctor Aurelio Correa, en nombre y representación de MAYRA CHANG DE BOUZA dentro del recurso de apelación propuesto en el procedimiento administrativo que se surte en la Caja de Seguro Social.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO NELSON CARREYO CONTRA LA SENTENCIA N° 038-JCD-2-98 DE 28 DE JULIO DE 1998, EMITIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION N° 2 Y LA SENTENCIA DE 5 DE MARZO DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado LEONARDO PINEDA, en carácter de apoderado judicial del señor NELSON CARREYO, ha promovido demanda de Inconstitucionalidad contra la Sentencia N° 038-JCD-2-98 de 28 de julio de 1998 emitida por la Junta de Conciliación y Decisión No. 2 y la Sentencia de 5 de marzo de 1999 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo.

El presente negocio constitucional se encuentra pendiente de decidir sobre su admisibilidad, en atención a lo dispuesto por los artículos 2551 y 654 del Código Judicial que consagran los requisitos procesales que debe contener el libelo de demanda de inconstitucionalidad, así como los que ha establecido la jurisprudencia del Pleno.

Se aprecia que la demanda se encuentra dirigida a la Presidenta del Pleno de esta Corporación; se deduce la pretermisión planteada, es decir la inconstitucionalidad del acto acusado; se identifica la autoridad demandada, en este caso la Junta de Conciliación y Decisión No.2 y el Tribunal Superior de Trabajo; se transcriben literalmente los actos acusados; se consignan los hechos y se invocan como disposiciones constitucionales violadas los artículos 32; 67; 70 y 73 de la Constitución Nacional.

No obstante, el análisis de las constancias procesales pone de manifiesto

que, tanto los hechos de la demanda como las pruebas aportadas en su respaldo, dan cuenta de que la pretensión está dirigida a que se revise, en sede extraordinaria, por medio de una acción constitucional objetiva, un asunto cuyo conocimiento correspondió a la jurisdicción especial de trabajo, según lo preceptúa el artículo 73 de la Constitución Nacional, y que la materia ya fue decidida por los tribunales laborales competentes.

Las resoluciones demandadas como inconstitucionales fueron dictadas en primera y segunda instancia con motivo de un proceso laboral, donde se declaró el despido injustificado, se admitió el allanamiento a la pretensión y se condenó a la empresa demandada UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA (ULACIT), al pago de B/.17,153.47 en concepto de indemnización, recargo y salarios caídos.

Estima la Corte pertinente citar el criterio vertido en sentencia de 28 de agosto de 1996 que resuelve una situación similar a la que ahora se examina:

> "Conviene reiterar lo ya sostenido en profusa jurisprudencia de este tribunal, en el sentido de que la acción de inconstitucionalidad no es un mecanismo procesal idóneo o una vía abierta para promover una tercera instancia, como manera de obtener que el tribunal constitucional examine nuevamente el caudal probatorio de un proceso, como tampoco para que se adentre en consideraciones sobre interpretación de la ley, tareas que corresponden únicamente al juez de la causa y al tribunal de alzada. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como interprete operador de la ley fundamental, no puede pasar entonces a la verificación de supuestos errores in iudicando, tal como se desprende de esta iniciativa procesal."

Adicionalmente, el Pleno observa que el Licenciado Nelson Carreyó, en su propio nombre y representación, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de no hacer emitida por la Junta de Conciliación y Decisión No.2 mediante sentencia No. 038-JCD-2-98 de 8 de julio de 1998, confirmada por el Tribunal Superior de Trabajo, decisión jurisdiccional que es la misma que por vía de la demanda de inconstitucionalidad pretende sea analizada nuevamente.

Dicha acción fue decidida en el fondo y se confrontaron con la Constitución Nacional los mismos artículos que el recurrente aduce como violados en la presente demanda de inconstitucionalidad, específicamente los artículos 32,70 y 73 de nuestro Estatuto Fundamental. Mediante sentencia de 30 de junio de 1999 el Pleno de la Corte Suprema de Justicia denegó el mencionado amparo de garantías constitucionales interpuesto.

Esta Corte en fallo del 21 de diciembre de 1990, en un caso similar al que se presenta en esta oportunidad, al respecto señaló lo siguiente:

> "Al enfrentar la Corte el auto de 15 de octubre de 1990, dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, con las normas constitucionales que el amparista consideró infringidas, el Pleno en sentencia de 30 de noviembre de 1990, desestima la acusación de que las garantías consagradas en ellas hubieren sufrido merma alguna. Concluye en que la decisión impugnada se ajusta a derecho por lo que, en manera alguna, infringe los artículos 17,21,22 y 32 de la Constitución.
>
> Ahora, en la acción de inconstitucionalidad, se pretende confrontar nuevamente el auto de 15 de octubre de 1990, dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, con los artículos 32,22,21 y 17 de la Constitución. Se tiende a que nuevamente la Corte se pronuncie sobre una materia que ya fue objeto de decisión cuando se promovió el amparo de garantías constitucionales.

> El artículo 2551 del Código Judicial, imperativamente dispone que la demanda de inconstitucionalidad debe contener las disposiciones constitucionales que se estimen infringidas y el concepto de la infracción. Si, como ya hemos visto, las normas constitucionales que dice el demandante han sido infringidas por el auto dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, fueron materia de pronunciamiento en el amparo de garantías constitucionales, la demanda promovida por el licenciado Hipólito Martínez Medina ha quedado sin contener ninguna disposición constitucional violada, careciendo de un requisito indispensable que no permite su admisibilidad.
>
> La Corte no pasa inadvertido el mandato del artículo 2557 del Código Judicial, el cual obliga que, en caso de demanda de esta naturaleza, se debe confrontar la disposición tachada de inconstitucionalidad con todos los preceptos de la Constitución pertinentes. Sin embargo, esta obligatoriedad se dirige específicamente a las demandas que se interpongan contra una disposición, entendiéndose, como tal, el precepto legal y, en manera alguna, una resolución judicial."

Las anteriores consideraciones llevan al Pleno de la Corte a decidir que la presente demanda no debe ser admitida.

De consiguiente, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de Inconstitucionalidad presentada por el licenciado LEONARDO PINEDA en representación del licenciado NELSON CARREYO contra la Sentencia proferida por la Junta de Conciliación y Decisión No.2 y la Sentencia confirmatoria expedida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO.

Notifiquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. JUAN MATERNO VASQUEZ DE LEON EN CONTRA DE LA RESOLUCION NO. 161-93 DE 22 DE OCTUBRE DE 1993 DEL TRIBUNAL ELECTORAL- SALA DE ACUERDOS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Juan Materno Vásquez De León (q.e.p.d.), en representación de la Sra. MAYÍN CORREA DELGADO, presentó demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución denominada Reparto 161-94 de 22 de octubre de 1993, emitida por el Tribunal Electoral, que negó elevar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el letrado contra el artículo 340 del Código Electoral, dentro del proceso penal electoral que se le seguía a la Sra. CORREA DELGADO.

Según el litigante, la Resolución objeto de la presente demanda, infringe "flagrantemente" el artículo 203, ordinal 1°, párrafo 2°, de la Constitución Nacional, atinente a que las consultas que hagan los funcionarios públicos por sí o por advertencia de alguna de las partes en un proceso que se desarrolle bajo

su dirección, por razón de la posible inconstitucionalidad de alguna norma a aplicar, deberá elevar el asunto al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema, salvo que la cuestión haya sido objeto de pronunciamiento por parte de ésta, y continuará el proceso hasta colocarlo en estado de decidir.

Dijo el actor que la infracción a la norma mencionada "es de carácter absoluto, omnicomprensivo e imperativo", ya que el acatamiento de la misma no exceptúa al Tribunal Electoral, ni cuando actúen sus Magistrados en un proceso como sustanciadores, ni como Pleno, por lo que la decisión recurrida infringe de manera directa por comisión, el artículo constitucional expuesto.

En cuanto al concepto de la infracción, consideró el actor -en resumen- que es inaceptable el criterio vertido por el Tribunal Electoral en la Resolución de marras, ya que la consulta de inconstitucionalidad no recae sobre una decisión sino que es una de las dos vías disponibles para que el Pleno de la Corte Suprema ejerza la guarda de la integridad de la Constitución. Señaló también que ningún funcionario o servidor público está exento de someter al Pleno de la Corte toda cuestión sobre constitucionalidad por advertencia.

Opinó que la autonomía que le otorga el artículo 136 Constitucional al Tribunal Electoral, "no sitúa a ese Tribunal fuera de jerarquía institucional judicial, la cual se agota en la Corte Suprema."

Admitida la demanda, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien, mediante su Vista N° 7 de 8 de febrero de 1995, consideró que la Resolución objeto de este negocio, no infringe el artículo 203 ni ninguno otro, de la Constitución Nacional.

Apreció que el problema "jurídico-constitucional" se funda principalmente en dos aspectos:

1. Si le correspondía al Tribunal Electoral elevar a la Corte Suprema de Justicia, conforme el artículo 203 de la Constitución, la advertencia de inconstitucionalidad propuesta dentro del proceso penal-electoral contra la Sra. MAYÍN CORREA DELGADO, y; 2. Si al Tribunal Electoral le está vedado admitir la advertencia de inconstitucionalidad y elevarla a consulta, por tratarse de un proceso electoral de única instancia, y por ser las decisiones del Tribunal Electoral definitivas, irrevocables, obligatorias y sólo revocables por dicho Tribunal, según lo señala el numeral 8° del artículo 137 de la Excerta Máxima.

Consideró el representante del Ministerio Público que "prima facie", la segunda postura es jurídicamente correcta, toda vez que el artículo 137 de la Constitución Nacional establece que las decisiones del Tribunal Electoral sólo son recurribles ante dicha Institución, lo que significa que sus procesos son de única instancia, exceptuando sólo el recurso de inconstitucionalidad, omitiendo la consulta de inconstitucionalidad, que es una modalidad de custodia y guarda de la integridad de la Constitución, y que para los efectos de este negocio, no puede equipararse al recurso de inconstitucionalidad.

Planteó el principio jurídico en materia de interpretación y aplicación de la ley, de que "donde la ley no distingue, no le es dado al hombre distinguir", basándolo en el artículo 9 del Código Civil, para señalar que la Carta Magna estipuló, como único recurso viable ante los Tribunales de Justicia diferentes al Tribunal Electoral, el recurso de inconstitucionalidad -art. 137-; atendiendo al principio interpretativo aquí planteado, le corresponde al Juzgador aplicar la distinción planteada.

Dijo el señor Procurador que "Bajo ningún concepto, ..., puede asimilarse al recurso de inconstitucionalidad (...) la consulta de constitucionalidad".

Consideró que ambas son dos instituciones distintas jurídicamente en su estructuración y aplicación, aunque sus fines sean los mismos, es decir, la guarda de la integridad de la Constitución; que son dos instituciones de garantía

jurídicos procesales, completamente disímiles, que reciben tratamiento normativo dentro de capítulos separados, aunque bajo el mismo título de "guarda de la integridad de la Constitución".

La consulta de inconstitucionalidad se surte cuando el servidor público encargado de administrar justicia -durante la litis- en uso de sus funciones, advirtiere o se le advirtiere alguno de los interesados, que la norma legal o reglamentaria a aplicar -no aplicada aún- es inconstitucional, siendo en ese momento, en la que debe elevar la consulta al Pleno de la Corte Suprema; y debe plantearse la consulta antes de la aplicación de la norma, porque de proponer luego de aplicada, la consulta devendría extemporánea -según su propia reglamentación- ya que la finalidad de la misma, es evitar la aplicación de una norma inconstitucional.

Por lo tanto, el momento adecuado para interponer la advertencia o la consulta de inconstitucionalidad es cuando el funcionario público o la parte interesada consideran que la norma a atacar será usada como fundamento jurídico de la resolución que todavía no se ha emitido, y que concluya la respectiva instancia.

Agregó el Funcionario Opinador, jurisprudencia de esta Colegiatura, en ese sentido.

Que, a diferencia de la consulta de inconstitucionalidad, el recurso de inconstitucionalidad es propuesto por cualquier persona en ejercicio de la acción popular, por medio de apoderado legal, para impugnar ante la Corte Suprema, leyes, decretos de gabinete, etc., actos provenientes de autoridad, que considere inconstitucionales; se propone cuando la norma ha sido aplicada, y por lo tanto, la decisión de instancia ha sido emitida, pero considerada inconstitucional por cualquier persona.

En cuanto al segundo aspecto a tratar -según el Procurador-, atinente a si el Tribunal Electoral debía elevar la advertencia de inconstitucionalidad al Pleno de la Corte Suprema de Justicia conforme a lo normado por el párrafo final del numeral 8° del artículo 137 Constitucional, presentó el Opinador un fallo con número de entrada 764-93, de 31 de diciembre de 1993, que reproduce parcialmente, y que parece apoyar su criterio, en el sentido de que no deben confundirse las instituciones instrumentales de la consulta y advertencia de inconstitucionalidad contenidas en el numeral 1° del artículo 203 de la Constitución, con el recurso autónomo de inconstitucionalidad, contenido en el artículo 137 íbidem, considerando que ésta última norma no puede ser interpretada de manera que incluya la advertencia y la consulta en comento.

Por todo lo anterior, concluyó el Jefe del Ministerio Público que la Resolución impugnada vía inconstitucionalidad no infringe ni el ordinal 1° del artículo 203, ni ninguno otro de la Constitución Nacional.

Devuelto el expediente, se fijó en lista por el término de diez (10) días luego de la última publicación del Edicto, para que los interesados presentasen sus argumentos por escrito sobre el caso, término que no fue utilizado por ningún interesado.

Surtidas entonces todas las formalidades legales establecidas para este tipo de negocios, se dispone este Pleno a resolver el fondo del debate, previas las siguientes consideraciones.

Advierte el Pleno con claridad meridiana, que la esencia de la controversia estriba en si le era dable o no, al Tribunal Electoral, elevar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la advertencia de inconstitucionalidad planteada por el Licdo. Juan Materno Vásquez De León (q.e.p.d.) contra el artículo 340 del Código Electoral, negada por el Tribunal en cuestión mediante la Resolución objeto de esta recurso constitucional, y por ende, aplicable el artículo 203, numeral 1° Constitucional; o, si por el contrario, es adecuada la aplicación

textual del numeral 8° del artículo 137 íbidem.

En esta etapa de la decisión, la Secretaría General de esta Colegiatura libró al Tribunal Electoral el Oficio N° SGP-447-2000 de 23 de febrero de 2000, por orden del Magistrado Sustanciador, para que informara sobre el estado del proceso penal en que se procesa a la Sra. MAYÍN CORREA DELGADO, distinguido con el Reparto N° 161-90.

Dicha entidad respondió mediante el Oficio N° 24-S.G. de 23 de febrero de 2000, en el que señaló que la Sra. MAYÍN CORREA DELGADO fue condenada a ciento ochenta y siete (187) días de prisión, suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el lapso de un (1) año, como autora de la conducta punible contenida en el numeral 10° del artículo 320 del Código Electoral a la fecha de la comisión del delito, numeral 6° del artículo 330 de la misma excerta.

También señaló el informe que la citada sentencia condenatoria de 4 de abril de 1994, confirmada mediante la resolución de 11 de julio del mismo año, se ejecutorió el 14 de julio de 1994, razón por la que el proceso distinguido con el N° 161-93, está extinguido y archivado.

Por otra parte, informó también el Tribunal Electoral que esa sentencia condenatoria en perjuicio de la Sra. CORREA, fue demandada de inconstitucional, siendo que la Corte Suprema, mediante fallo de 5 de diciembre de 1994, declaró que no era inconstitucional.

Finalmente, apuntó el informe que, mediante fallo de 3 de enero de 1994, la Corte decidió que los procesos ante la jurisdicción electoral no son susceptibles de advertencia de inconstitucionalidad, adjuntando copia de dichos fallos.

Luego entonces, en el presente nos encontramos ante la situación en que la Corte debe decidir la inconstitucionalidad de un resolución del Tribunal Electoral, que no admitió una advertencia de inconstitucionalidad contra una norma del Código Electoral.

Sin perjuicio de que el numeral 8° del artículo 137 de la Constitución estatuye que las decisiones del Tribunal Electoral sólo son recurribles ante dicha Entidad, que únicamente son recurribles mediante demanda de inconstitucionalidad, y de que lo que se advirtió de inconstitucional fue una norma del Código Electoral -artículo 340-, la oportunidad de demandar la inconstitucionalidad de esa advertencia se extinguió cuando el Tribunal Electoral emitió su decisión final sobre el caso, que -como señaló el Secretario del Tribunal Electoral en su informe- fue confirmada en virtud de recurso de reconsideración.

De haber sido admitida la advertencia de inconstitucionalidad, el proceso penal electoral hubiera avanzado hasta quedar en etapa de decidir, quedando detenido allí; pero, como no fue admitida y el proceso llegó a su fin, esta demanda de inconstitucionalidad perdió su objeto, por lo que se ha originado el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia, y sólo queda ordenar el cese del procedimiento y el archivo del expediente.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que en el presente proceso constitucional se ha producido el fenómeno jurídico denominado SUSTRACCIÓN DE MATERIA; en consecuencia, ORDENA el cese del procedimiento y el archivo del expediente.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. FERNANDO BASURTO EN REPRESENTACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 23 DE AGOSTO DE 1999, DICTADA POR LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ante el Pleno de esta Corporación de Justicia interpuso el Licenciado FERNANDO BASURTO, en representación de la POLICÍA NACIONAL, demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución de 23 de agosto de 1999 dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Corresponde a esta etapa, determinar si la demanda de inconstitucionalidad cumple con los requisitos procesales, a los efectos de que se determine si la misma es admisible, por cumplir los mismos o, por el contrario, no admitir la demanda, si ésta no cumple con los aludidos requisitos. Como es sabido, dichos requisitos vienen consignados en los artículos 2551 y 2552 del Código Judicial, y consisten en la transcripción del acto cuya declaratoria se pide, las disposiciones constitucionales que se entienden infringidas, el concepto en que lo han sido y los requisitos exigidos para toda demanda, señalados en el artículo 654 del Código Judicial, entre otros.

El Pleno advierte que existen, al menos, dos defectos que tiene la demanda. En primer lugar, la demanda va dirigida a "Los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Pleno", desatendiendo el mandato contenido en el artículo 102 del Código Judicial, que señala perceptivamente que los negocios judiciales para los cuales es competente el Pleno deben dirigirse al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de que, además, desee incluir a todos los integrantes de esta Corporación de Justicia. De otro lado, el poder otorgado estaba dirigido a la Sala Segunda de la Corte, siendo así que debió ser dirigido al Presidente de esta Máxima Corporación de Justicia.

No obstante, tales anomalías procesales, con ser importantes, no constituyen la razón de la decisión del Pleno. La acción ha sido presentada contra una resolución proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, violando así el artículo 204 de la Constitución Nacional, que a la letra dice:

> **"ARTÍCULO 204: No se admitirán recursos de inconstitucionalidad ni de amparo de garantías constitucionales contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia o sus Salas."**

Desde otra perspectiva, advierte el Pleno que la sentencia recurrida condena a la Policía Nacional al pago de una indemnización por parte de la Policía Nacional, cuya declaratoria es competente la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, jurisdicción ésta que tiene preferencia sobre la vía constitucional, como tiene declarado este Pleno en un número muy reiterado de ocasiones. De lo dicho, se desprende la necesidad de no admitir esta demanda de inconstitucionalidad.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE, la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Licenciado FERNANDO BASURTO contra la

Resolución de 23 de agosto de 1999 dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) ROBERTO GONZALEZ R.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONSULTA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA MAGDA. MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA DE LA FRASE "EL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACION", CONSAGRADA EN EL ARTICULO 370 DEL CODIGO JUDICIAL. (DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACION, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL ORGANO EJECUTIVO, PARA QUE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS RESULTADOS N 51 DE 19 DE ABRIL, N 171 DE 21 DE SEPTIEMBRE, N 190 Y N 191 DE 18 DE NOVIEMBRE, TODOS EXPEDIDOS EN 1993). MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera ha consultado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la inconstitucionalidad de la frase "el Procurador de la Administración" contenida en el artículo 370 del Código Judicial.

Dicha consulta fue formulada a raíz de la demanda contencioso-administrativa de nulidad interpuesta por la Procuradora de la Administración -en etapa de admisibilidad-, a través de la Vista N° 165 de 16 de abril de 1996, contra los Resueltos N° 189, 190 y 191 del 18 de noviembre de 1993, N° 51 del 19 de abril y N° 172 de 21 de septiembre, todos de 1993.

La Funcionaria presentó la referida demanda en virtud de instrucción recibida por el Órgano Ejecutivo, a través de la Resolución Ejecutiva N° 4 de 15 de diciembre de 1995, emitida por el Ministerio de Hacienda y Tesoro.

En síntesis, la consulta se fundamenta en que la Magistrada Sustanciadora consideró que la frase "el Procurador de la Administración" contenida en el artículo 370 del Código Judicial, que faculta a la Procuradora de la Administración para presentar acciones de esta naturaleza ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, es contraria al numeral 2° del artículo 203 de la Constitución Nacional.

El citado artículo 370 establece que el Procurador General de la Nación, el de la Administración, y los Fiscales Superiores pueden promover acciones civiles o contencioso administrativas en que sea parte la Nación, mediante orden o instrucción del Órgano Ejecutivo.

Por su parte, el artículo presuntamente infringido en su numeral segundo, establece como atribución de la Corte Suprema de Justicia la jurisdicción contencioso-administrativa, señalando que ésta decidirá con audiencia del Procurador de la Administración, los casos que ella resuelva.

El numeral 2° del artículo 203 constitucional es infringido -a juicio de la Magistrada Franceschi de Aguilera- por la frase en estudio, porque esta norma establece una "función específica" al Procurador de la Administración dentro de

los procesos contencioso-administrativos, distinta de la de promover demandas ante la Sala Tercera.

A juicio de la Consultante, la frase "con audiencia del Procurador de la Administración" quiere decir que en los procesos contencioso-administrativos que conoce la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, debe escucharse la opinión del representante del Ministerio Público.

Afirma que, si bien el numeral 1° del artículo 217 Constitucional faculta al Procurador de la Administración para que, como Agente del Ministerio Público defienda los intereses del Estado y el Municipio, no es factible el cumplimiento de esa función interponiendo demandas contencioso-administrativas, porque la Sala Tercera debe decidirlas con el concepto u opinión previa de dicho funcionario. Añade que al emitir concepto, el Procurador de la Administración "realiza también una tarea verdaderamente orientadora e ilustrativa para la Sala Tercera, pues aporta razones o juicios jurídicos sobre la legalidad o no del acto administrativo o de la disposición que se acusa."

Por otra parte, advierte la Consultante que, de aceptarse la función que el artículo 370 le asigna al Procurador de la Administración, se desnaturalizaría esta clase de procesos, ya que luego no podría emitir concepto; es decir, que no podría ser acusador y defensor del acto impugnado, o demandante del acto o acusador de la ley.

Para sustentar su postura, citó la Magistrada Franceschi de Aguilera un fallo de la Corte Suprema, de 1953.

Por lo tanto, la atribución que el artículo 370 del Código Judicial le otorga al Procurador de la Administración, no puede ser ejercida en los procesos contencioso-administrativos, pues la misma Constitución le señala a éste Funcionario una función especial.

Luego de admitida la consulta, se corrió traslado al Procurador General de la Nación por el término de diez -10- días a partir del recibo del expediente, quien en tiempo oportuno emitió la Vista N° 25 de 3 de septiembre de 1996.

Como ya se señaló, el señor Procurador General de la Nación emitió su Vista N° 25 de 3 de septiembre de 1996, en la que consideró que la frase "la Procuradora de la Administración", contenida en el artículo 370 del Código Judicial no infringe el numeral 2° del artículo 203 de la Carta Magna.

En lo medular de dicha opinión, el representante del Ministerio Público expuso los supuestos constitucionales y legales de viabilidad de la consulta de inconstitucionalidad, resaltando que la norma en examen sea aplicable al caso, y que no se haya aplicado aún, al momento de consultar su constitucionalidad.

En este sentido, añade que -en su opinión- la norma ya ha sido aplicada, toda vez que "ya agotó su eficacia jurídica desde el momento en que lo que en ella se dispone se cumplió, al presentar o promover la Procuradora de la Administración, la demanda contencioso-administrativa de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia."

Señala que el artículo 370 de la excerta procedimental establece la necesidad de orden o instrucción del Órgano Ejecutivo para que uno de los Procuradores o los Fiscales de Distrito puedan promover acciones civiles o contencioso-administrativas en que sea parte la Nación; sin dicha orden o instrucción, estos funcionarios no pueden actuar.

Luego entonces, por haberse aplicado la disposición -al interponer la Procuradora de la Administración la demanda de nulidad previa autorización del Ejecutivo-, la consulta devendría no viable.

Por otra parte, si se considerara que se presentó la consulta pero aún no

ha sido admitida, significaría que no se ha entablado la relación procesal, por lo que no existiría todavía el proceso, haciendo entonces improcedente la consulta en la medida en que la misma se instaura en un proceso ya en marcha.

Otro reparo que hace el Procurador a la admisibilidad de la consulta es que la frase consultada, no constituye "una disposición legal que ha de servir de sustento al fallo que habrá de proferirse en su oportunidad, ..., pues, como ya se indicó, el artículo en el que ésta se regula, ya agotó su contenido jurídico."

Entonces se refirió el señor Procurador al fondo del caso, conceptuando que no se logró acreditar la violación del numeral 2° del artículo 203 constitucional.

Al contrario, afirmó que, lo que hace la frase criticada es desarrollar lo que dispone el numeral 1° del artículo 217 Constitucional, contentivo de la función atribuida al Ministerio Público -del cual forma parte el Procurador de la Administración, como lo señala el artículo 216- de defender los intereses del Estado y el Municipio.

Por lo tanto, la argumentación de la Magistrada Consultante, "es efectuar una interpretación introduciendo una distinción que no hace la norma constitucional" que le asigna la defensa de los intereses del Estado y de los Municipios al Ministerio Público, y que el Legislador desarrolló mediante el artículo 370 del Código Judicial, pero condicionándola a la expedición de instrucciones por parte del Órgano Ejecutivo; de esta función no se puede marginar al Procurador de la Administración, independientemente de la función que le asigna el artículo 203 Constitucional.

Por otra parte, manifestó el representante del Ministerio Público que el hecho de que el Procurador de la Administración promueva demanda contencioso-administrativa de nulidad, no significa que se convierta "simultáneamente en acusador y defensor del acto impugnado", al funcionario en comento se le aplicarían las causales de impedimento para Magistrados y Jueces, contenidas en el artículo 388 del Código Judicial, lo que -a su juicio- implicaría que le correspondería a su suplente emitir el concepto correspondiente.

Utilizando el mismo fallo invocado por la Magistrada Franceschi de Aguilera -de 20 de agosto de 1953-, conceptuó el Procurador General de la Nación que la Corte Suprema dejó establecido que el Órgano Ejecutivo puede recurrir "en defensa de los altos intereses que representa, cuando éstos se ven perjudicados por un acto administrativo no revocable", como lo son las Resoluciones por las cuales la Procuradora de la Administración interpuso la demanda de nulidad.

También consideró que ese fallo declaró la inconstitucionalidad porque se atribuyó al entonces "Fiscal de lo Contencioso-Administrativo", una función de competencia de los agentes del Ministerio Público, al cual -en ese tiempo- no pertenecía, circunstancia que ha cambiado, porque el artículo 216 de la Carta Magna incorpora como funcionario del Ministerio Público al Procurador de la Administración.

Por todo lo anterior, no existe contradicción o inconstitucionalidad por parte de la frase aludida del artículo 370 del Código Judicial, y así solicitó que se declare.

Vertidos los elementos sobresalientes de este negocio, se apresta la Corte a emitir su decisión de fondo, no sin antes exponer las siguientes consideraciones.

La esencia de la consulta estriba en que el artículo 370 del Código Judicial faculta al Procurador de la Administración -junto al Procurador General de la Nación y a los Fiscales de Distrito- para interponer, previa orden e instrucción del Órgano Ejecutivo, acciones civiles o contencioso-administrativas en que sea parte la Nación, porque ello desvirtúa el numeral 2° del artículo 203

de la Constitución Nacional, que establece las facultades legales de la Corte Suprema de Justicia, la jurisdicción contencioso-administrativa respecto a los diversos tipos de actos administrativos, que conocerá con audiencia del Procurador de la Administración, siendo que ésta función del Procurador implica emitir concepto sobre este tipo de procesos.

Esto significa -según la Consultante- que el Procurador de la Administración tendría una doble función, pues por un lado sería demandante, y por el otro sería opinador; ésta es la esencia de la consulta de inconstitucionalidad.

En esta ocasión, el criterio del Pleno coincide con el del Procurador General de la Nación, toda vez que la función de ser promotor de acciones la consagra la Carta Fundamental, pues el artículo 217 de la Constitución Nacional, que dice:

"Artículo 217: Son atribuciones del Ministerio Público:

1. Defender los intereses del Estado o del Municipio.
..."

La realización de esta atribución constitucional involucra tomar iniciativas legales para representar al Estado o a los Municipios con el propósito de cumplir la finalidad de esta norma.

Estas iniciativas están reguladas por el artículo 370 del Código Judicial, del que transcribimos el párrafo correspondiente:

> "ARTICULO 370. El Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración y los Fiscales de Distrito, no podrán promover acciones civiles o contencioso-administrativas en que sea parte la Nación, sin orden e instrucciones del Organo Ejecutivo." (Negrilla de la Corte)

Y para asegurar que la actuación de los tres funcionarios que dicta la norma -dentro de los que se encuentra el Procurador de la Administración- sea en genuina representación del Estado o los Municipios, establece como requisito sine qua non, que medie orden e instrucción del Órgano Ejecutivo.

Por lo tanto, esta norma -a juicio del Pleno- desarrolla el contenido del numeral 1° del artículo 217 Constitucional.

En este sentido, el artículo 216 dice que el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Fiscales y Personeros; es decir, que el funcionario que nos ocupa es parte integrante del Ministerio Público, y por tanto, partícipe de la defensa de los intereses del Estado o del Municipio, cuyo ejercicio ya hemos mencionado.

En este punto, debemos hacer una interpretación integral de la norma constitucional, a la luz de lo preceptuado por el artículo 2557 del Código Judicial, que ordena al Pleno considerar el precepto denunciado respecto a todas las normas de la Constitución que se consideren procedentes.

En este sentido, la infracción del numeral 2° del artículo 203 de la misma excerta no se produce, ya que existen mecanismos para cumplir ésta norma.

Es correcto el aserto de que el mismo funcionario no puede ser demandante y opinador a la vez; entonces, cabría la declaratoria de impedimento por parte del Procurador de la Administración, para respetar la integridad normativa del numeral 2° del artículo 203 de la Constitución; por lo tanto, le correspondería la opinión del caso al Suplente del Procurador de la Administración; además, el artículo 388 del Código Judicial estatuye que le serán aplicados a los agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones,

aplicables a los Magistrados y Jueces.

Por lo tanto, no se da la "simultaneidad" de funciones que arguye la Magistrada Consultante, en el sentido de que el Procurador de la Administración funge como demandante, y también como opinador.

De esta manera se salvaguarda la integridad del numeral 2° del artículo 203 de la Constitución Nacional, razón por la que la expresión consultada no es inconstitucional, y así ha de declararlo la Corte.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la frase "el Procurador de la Administración" contenida en el primer párrafo del artículo 370 del Código Judicial.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FABREGA PONCE
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RUBÉN MONCADA LUNA, CONTRA LA SENTENCIA N° 15 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADA POR LA JUEZA CUARTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Rubén Moncada Luna, en representación de la señora FELICIDAD SIERO DE NORIEGA, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de inconstitucionalidad contra la Sentencia N° 15 de 12 de septiembre de 1996, dictada por la Jueza Cuarta Municipal del Distrito de Panamá.

Una lectura exhaustiva de la aludida demanda permite apreciar que, aun cuando se pide en forma genérica la declaratoria de inconstitucionalidad de toda la sentencia en mención, en el apartado relativo a la "TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ACUSADO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Cfr. 73), que se refiere en esencia al "petitum de la demanda", el licenciado Moncada únicamente alude al contenido de la parte resolutiva "que declara responsable penalmente a la señora FELICIDAD SIERO DE NORIEGA" y que dice lo siguiente:

> En mérito de lo expuesto, la suscrita JUEZ CUARTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMA RAMO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA RESPONSABLE PENALMENTE A ...
>
> ... y a FELICIDAD SIERO DE NORIEGA, mujer, panameña, casada, cedulada N° 2-63-567, nacida el 17 de febrero de 1946, hija de Manuel Siero Gómez y Mélida Murgas de Siero, residente en Altos del Golf, Avenida 3-C Sur, casa N° 7; ...
>
> y LAS CONDENA a la PENA DE DOCE (12) MESES DE PRISION Y A SESENTA Y CINCO (65) DIAS MULTA a razón de CINCUENTA BALBOAS (B/.50.00) diario, lo que hace un total de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

(B/.3250.00); y se les INHABILITA para el ejercicio de funciones públicas por el término de DIEZ (10) AÑOS.

Asimismo SE ORDENA EL COMISO DE TODOS LOS BIENES DE LA FAMILIA NORIEGA-SIERO." (fs. 52-53)

Asimismo, en la exposición del concepto de la infracción de los preceptos que se estiman violados, el licenciado Moncada cuestiona exclusivamente la constitucionalidad de la parte de la sentencia antes mencionada, alegando, fundamentalmente, que los bienes muebles e inmuebles de la señora de la señora FELICIDAD SIERO DE NORIEGA que se mencionan en los hechos 5° y 6° de la demanda, fueron adquiridos con arreglo a la Ley. Con relación a este punto, aporta copias autenticadas de diversas escrituras públicas que se refieren a Fincas adquiridas por la señora FELICIDAD SIERO DE NORIEGA (Cfr. fs. 8-21).

Los hechos anotados llevan al Pleno de la Corte a concluir que en el presente caso el licenciado Moncada ha delimitado el objeto de su pretensión constitucional a la parte resolutiva de la sentencia parcialmente impugnada que alude a la señora FELICIDAD SIERO DE NORIEGA. Siendo ésta la realidad procesal y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2151 del Código Judicial, el Pleno se pronunciará exclusivamente sobre la constitucionalidad de la parte de la sentencia impugnada.

Hechas estas aclaraciones, pasa el Pleno al examen de fondo.

I. LAS NORMAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS Y EL CONCEPTO EN QUE SUPUESTAMENTE LO HAN SIDO

El primer precepto que se estima violado por la sentencia parcialmente impugnada es el artículo 31 de la Constitución Política, que establece que "Sólo serán penados los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración y exactamente aplicable al acto imputado". El apoderado judicial de la actora expuso el concepto de la infracción en los siguientes términos:

"La violación de esta norma se da en el concepto de violación directa por comisión.

Al aplicar la Resolución impugnada el artículo 364 del Código Penal, calificando la conducta de la señora FELICIDAD SIERO DE NORIEGA, en el sentido de haber adquirido inmuebles como si éstos provinieran de un hecho punible, juzga con una norma que no es exactamente aplicable al acto imputado.

En primer lugar, la norma se refiere a dineros, valores u objetos, pero no menciona la calidad de inmuebles puesto que el Capítulo V del Código Penal, que preceptúa esa norma tipificada en el artículo número 364, refiere a APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO.

...

... en la presente causa, se relaciona a la señora FELICIDAD SIERO DE NORIEGA con el acto que se dice cometido por el Ex-General MANUEL ANTONIO NORIEGA, la tipificación aplicable al acto cometido por el Ex-General MANUEL ANTONIO NORIEGA, quedó expuesta en el Auto de Enjuiciamiento N° 49 de 7 de noviembre de 1994. Así, la denominación de esa conducta llevada a cabo, la definió la Sentencia dictada por el mismo Juzgado Cuarto Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal el 12 de septiembre de 1996, como el sujeto activo del delito comprendido en el artículo 335, ordinal 4 del Código Penal, que a la letra señala lo siguiente:

"Artículo 335. Será sancionado con prisión de 6 a 18 meses y de 25 a 75 días-multa el servidor público que sin incurrir en un hecho punible más severamente penado:

1.
2.
3.
4. No justifique, al ser debidamente requerido, la procedencia de un incremento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo público.

En el caso del ordinal cuarto de este artículo, la persona interpuesta para disimular el enriquecimiento, será sancionada con 25 a 75 días-multa."

Ante la presencia de esta norma penal, según lo expone, su numeral 4, que es indispensable que se justifique la procedencia del incremento Patrimonial del acusado o de la persona interpuesta para disimularlo.

En el presente caso, cada uno de los inmuebles señalados en el hecho Sexto, en que se funda esta demanda, demuestran una procedencia legal cuya adquisición se justifica mediante la historia, que para cada una de esas fincas expone el Registro Público de la Propiedad.

En consecuencia, si la adquisición de dichos inmuebles tiene una procedencia justificada, la norma penal aplicada por la Sentencia, esto es, el artículo 364 del Código Penal, no es exactamente aplicable al caso.

Para reforzar sus argumentos, el licenciado Moncada hizo una explicación acerca de la forma en que la señora FELICIDAD SIERO DE NORIEGA adquirió las fincas que se mencionan en el hecho sexto de la demanda y que fueron comisadas mediante la sentencia parcialmente impugnada, a saber: Finca 12393 (T 353, Folio 238, Panamá), Finca 73511 (Tomo 1751, Folio 378, Panamá), Finca 9600 (Tomo 1155, Folio 234, Coclé), Finca 1 (Tomo 10 I.V.U., Folio 2, Chiriquí) y Finca 13149 (Tomo 1219, Folio 188, Chiriquí).

El licenciado Moncada también estima violado el artículo 32 de la Constitución Política, el cual consagra el llamado principio del "debido proceso legal". El concepto de la infracción de esta norma se expuso de la forma siguiente:

"El debido proceso, ha sido vulnerado por cuanto que, el juzgamiento que trajo como consecuencia la imposición de una pena, no se conformó con el trámite legal correspondiente, habida cuenta de que, al no haberse juzgado con una norma exactamente aplicable al acto imputado, se trastocaron los trámites legales, toda vez que, si la orden de condena y de comiso, subyace en la relación conyugal entre la señora FELICIDAD SIERO DE NORIEGA y el Ex-General MANUEL ANTONIO NORIEGA MORENO, siendo que éste es considerado como actor principal en el delito subsumido en el numeral 4 del artículo 335 del Código Penal, la sanción que debió subsumir el hecho por el cual se dictó Llamamiento a Juicio del señor NORIEGA, excluye cualquier otra conducta que se refiere a los delitos contra El Patrimonio, actos únicamente subsumibles en el artículo 364 del Código Penal, que define y tipifica el Aprovechamiento de cosas provenientes del delito.

Ello es así, por cuanto que, este artículo 364 del Código Penal, está inserto en el Capítulo V del Título XI, que se refiere a los delitos contra La Administración de Justicia, no así la conducta a la cual se relaciona a la señora FELICIDAD SIERO DE NORIEGA, que debe quedar subsumida como copartícipe o persona interpuesta para disimular el enriquecimiento ilícito.

Esta conducta se subsume en el Título X del Código Penal que se

refiere a los delitos contra la Administración Publica.

La norma penal que excluye la aplicación del artículo 364 del Código Penal lo es el artículo 335 del mismo Código, que dice lo siguiente:

"Artículo 335. Será sancionado con prisión de 6 a 18 meses y de 25 a 75 días-multa el servidor público que sin incurrir en un hecho punible más severamente penado:

1.
2.
3.
4. No justifique, al ser debidamente requerido, la procedencia de un incremento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo público.

En el caso del ordinal cuarto de este artículo, la persona interpuesta para disimular el enriquecimiento, será sancionada con 25 a 75 días-multa." (Subraya la actora).

En consecuencia, el trámite que debió seguirse es el concerniente al de los Delitos contra la Administración Pública y no al de los Delitos contra la Administración de Justicia.

Si la Sentencia tuvo su base en el Auto de Enjuiciamiento, ésta da por sentada la circunstancia de que no existe otro hecho punible que no fuera el del llamado incremento patrimonial injustificado, lo cual excluye el trámite que se sigue en el aprovechamiento de cosas provenientes del delito.

Finalmente, el licenciado Moncada considera que la sentencia parcialmente impugnada violó el artículo 44 de la Constitución Política porque "si se hubiese atenido a la consecuencia jurídica obtenida de la génesis de la causa penal con la aplicación de la norma debida, que se relaciona con la justificación de la procedencia de un incremento Patrimonial suyo o de persona interpuesta, no se hubiese decretado ni la mencionada sanción penal ni el comiso de unos bienes inmuebles que fueron adquiridos con arreglo a la Ley y cuyo acto de adquisición de su propiedad, no fue generado por el acusado principal, sino que, tienen procedencia de una relación contractual adquirida con arreglo a la ley, con personas que no tienen que ver con delito alguno (fs. 76-84).

II. EL CONCEPTO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración emitió concepto mediante Vista N° 134 del 15 de marzo de 1999. Según la representante del Ministerio Público, la sentencia parcialmente impugnada no vulnera el artículo 31 de la Constitución Política porque en el expediente penal quedó plenamente acreditado que parte de los bienes, así como el status de vida que llevaba la demandante, jamás lo hubiera podido disfrutar de no ser la esposa del Ex-General Manuel Antonio Noriega, quien llegó a poseer una fortuna de 24 millones de dólares.

La señora Procuradora de la Administración considera, asimismo, que el artículo 32 constitucional ha sido infringido parcialmente, toda vez que no se debió decretar el comiso de las Fincas N° 12393 (Tomo 353, Folio 238), 73511 (Tomo 1751, Folio 378), 9600 (Tomo 1155, Folio 234), 1 (Tomo 10 I.V.U., Folio 2) y 13149 (Tomo 1219, Folio 188) fueron adquiridos legalmente por la familia Noriega-Siero, con las remuneraciones que en concepto de salario percibía Manuel Antonio Noriega.

Por iguales motivos, la representante del Ministerio Público considera violado el artículo 44 de la Constitución Política y pide al Pleno de la Corte que sólo declare inconstitucional el comiso de las fincas "N° 12,393, 56,365, 9,600, 1 y 13,149, decretado en la sentencia parcialmente impugnada (fs. 91-101).

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA TERCERA

En opinión del licenciado Moncada, el artículo 364 del Código Penal, que se refiere al "aprovechamiento de cosas provenientes del delito", no es exactamente aplicable al hecho que se le imputa a la señora SIERO DE NORIEGA porque los bienes inmuebles que se describen en el hecho sexto, al igual que los bienes muebles mencionados en el hecho quinto de la demanda, no provienen de un hecho punible, sino que fueron adquiridos con arreglo a la Ley por la demandante. Al calificarse en la sentencia a dichos bienes como provenientes de un delito, se violó el artículo 31 de la Constitución Política.

A juicio del Pleno, no le asiste razón al apoderado judicial de la demandante. Para comprender la opinión del Pleno es necesario partir del hecho de que el señor Manuel Antonio Noriega, por medio de la Sentencia de 15 de septiembre de 1996, fue declarado penalmente responsable por la comisión del delito de corrupción de servidores públicos y sancionado con 18 meses de prisión y 175 días-multa.

La señora FELICIDAD SIERO DE NORIEGA, por su parte, fue sancionada con la pena de 12 meses de prisión y 65 días-multa por el delito de "aprovechamiento de cosas provenientes del delito". La decisión de la Jueza Cuarta Municipal del Distrito de Panamá se fundamentó en dos hechos fundamentales: por un lado, que la señora DE NORIEGA poseía una gran cantidad de bienes (inmuebles, muebles, cuentas bancarias, tarjetas de crédito con límites de cargos elevados, prendas, etc.) y, por otro, que tales bienes fueron adquiridos con dineros provenientes o aportados por el sindicado Manuel Antonio Noriega, de quien dependía económicamente por razón de su vínculo de "esposa". La sentencia en mención expresa sobre este particular lo siguiente:

> "En lo que respecta a FELICIDAD SIERO DE NORIEGA, LORENA DEL CARMEN SIERO NORIEGA Y SANDRA IBERIA NORIEGA DE BEAUCHAMPS, se advierte a lo largo del caso en estudio que las imputadas mantenían bienes inmuebles conforme a la información del Registro Público, además las tres imputadas mantenían a su favor tarjetas de crédito Visa y Master Card en The Chase Manhatan Bank, N. A., con límites de cargos elevados, cuentas bancarias; de la diligencia de Inspección Ocular y Avalúo de las prendas se observan una gran cantidad de tales valores con el nombre de FELICIDAD, como de SANDRA Y LORENA y el movimiento migratorio aportado por el Departamento de Migración demuestran que también realizaban continuos viajes a diferentes países.
>
> Acontece sin embargo que a pesar de que FELICIDAD SIERO DE NORIEGA, aceptó que no había laborado ni a nivel privado, no en el sector público, información corroborada a través de la Contraloría General, mantenía a su nombre propiedades tales como la finca N° 12.373 ubicada en San Francisco, la cual si bien es cierto luego de la compra de dicho inmueble la plusvalía del terreno ha aumentado el valor del terreno, empero las mejoras y los bienes que se encontraron dentro de la casa evidencia no sólo (sic) la plusvalía hizo elevar el valor sino que existió posteriormente una inversión económica elevada a la misma. También se advierten otro cúmulo de bienes inmuebles en los cuales aparece SIERO DE NORIEGA, como propietaria."
>
> En otro orden de ideas reposan en autos el certificado de matrimonio de MANUEL ANTONIO NORIEGA Y FELICIDAD SIERO DE NORIEGA y los de nacimiento d SANDRA NORIEGA SIERO Y LORENA NORIEGA SIERO, los cuales establecen el nexo familiar con MANUEL ANTONIO NORIEGA MORENO.
>
> En la declaración indagatoria de las procesadas aceptan ser dependientes de NORIEGA MORENO por vínculos familiares.

> Si bien, se infiere por parte de la Contraloría General de la República, que tanto LORENA NORIEGA SIERO como SANDRA NORIEGA SIERO, laboraron los ingresos; obran en el cuaderno penal (sic), rebasan con creces los haberes de las mismas, incluyendo cuentas bancarias de miles de dólares.
> ...
> Todo lo anterior nos lleva a considerar que FELICIDAD SIERO DE NORIEGA, LORENA NORIEGA SIERO Y SANDRA NORIEGA SIERO DE BEAUCHAMPS, son infractoras del artículo 364 del Código Penal, ..." (fs. 48-50)

En opinión de la Corte, la sentencia parcialmente censurada aplicó correctamente el artículo 364 del Código Penal a la imputada FELICIDAD SIERO DE NORIEGA, quien, a sabiendas de que el señor Noriega Moreno era funcionario público (desde 1962 a 1989), aprovechó el incremento millonario e injustificado que éste manejaba para hacerse así su propia fortuna. No se trata aquí, de que la sindicada simplemente actuó como "interpuesta persona" para ocultar bienes adquiridos injustificadamente por NORIEGA MORENO, sino de que se aprovechó o usufructuó en beneficio propio el caudal pecunario obtenido ilícitamente por el precitado NORIEGA MORENO.

Estos razonamientos conducen al Pleno a la conclusión de que las pruebas aportadas en este negocio constitucional por la señora SIERO DE NORIEGA para justificar la lícita procedencia de las Fincas que se mencionan en el hecho sexto de la demanda son insuficientes porque según ella misma acepta, nunca trabajó ni como funcionaria pública ni como empleada de alguna empresa privada, sino que, por el contrario, siempre dependió económicamente de su esposo. Tampoco consta que haya declarado renta proveniente de algún negocio o actividad del cual percibía ingresos propios. La Sentencia de 1° de septiembre de 1992, dictada en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Primer Distrito Judicial, Ramo Penal, examina este extremo en los siguientes términos:

> En cuanto a Felicidad Siero de Noriega, se observa a fojas 20 a 27 del sumario, que a su nombre aparecen inscritas un total de cinco (5) Fincas, ubicadas en las provincias de Panamá, Coclé y Chiriquí, las cuales tienen un valor actual por el orden de los cientos siete mil trescientos cuarenta y ocho balboas con sesenta y siete centésimos (B/.107,348.67), según consta de fojas 20 a 22 del proceso. Aunado a esto podemos sumarle el valor de los bienes muebles que ocupaban la residencia ubicada en el Sector de Altos del Golf, que de acuerdo al dictamen de los peritos ascienden a un valor de setecientos cincuenta y tres mil trescientos dos balboas (B/.753,302.00). Todo estos nos lleva a concluir que la señora Felicidad Siero de Noriega, tuvo un incremento patrimonial considerable, a pesar de ser una mujer que dependía única y exclusivamente de su esposo, quien cubría todos los gastos; así lo ha reconocido la precitada Siero de Noriega, lo que indica que obtuvo provecho directo de la posición que en ese entonces ocupaba su consorte, como jefe de las extintas Fuerzas de Defensa." (fs. 65-66)

En lo que concierne a los bienes muebles que se mencionan en el hecho quinto de la demanda (colecciones de monedas nacionales y extranjeras), el Pleno considera que la actora tampoco ha probado la procedencia lícita de los mismos, porque aun cuando afirma que tales bienes son producto de "donaciones justificadas", no aporta al presente negocio constitucional pruebas que corroboren tal afirmación.

Las constancias procesales reflejan claramente, pues, que ni en el proceso penal dentro del cual se dictó la sentencia parcialmente impugnada, ni en el presente negocio constitucional, la señora FELICIDAD SIERO DE NORIEGA probó que adquirió los bienes muebles e inmuebles comisados con dinero propio, porque, como se ha dicho, ella siempre dependió económicamente del señor Noriega Moreno, quien laboró como funcionario público en las Fuerzas de Defensa (antes Guardia

Nacional) desde el año 1962 a 1989. La conclusión obvia es, entonces, que el considerable incremento patrimonial de la señora SIERO DE NORIEGA fue consecuencia directa del enriquecimiento ilícito experimentado por su esposo, Manuel Antonio Noriega.

Todas estas consideraciones conducen al Pleno de la Corte a descartar la infracción del artículo 31 de la Constitución Política. Consecuentemente, resultan infundados los cargos de inconstitucionalidad planteados respecto de los artículos 32 y 44 del mismo cuerpo de normas supralegales.

Por los motivos expuestos, el Pleno considera que debe negar la pretensión constitucional de la demandante.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la parte resolutiva de la Sentencia N° 15 de 12 de septiembre de 1996, mediante la cual, la Jueza Cuarta Municipal del Distrito de Panamá, declaró penalmente responsable a la señora FELICIDAD SIERO DE NORIEGA por el delito de "aprovechamiento de cosas provenientes del delito" y se le condenó a la pena de 12 meses de prisión y a 65 días-multa; así como al comiso de todos su bienes y a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de diez 10 años.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

DENTRO DEL AMPARO DE GARANTIAS PRESENTADO POR EL LIC. EMILIO EFFIO T., EN REPRESENTACION DEL GRAN HOYEL SOLOY, S. A., CONTRA EL DIRECTOR GRAL. DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL. IMPEDIMENTO MAGISTRADO ADAN A. ARJONA L. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado ADÁN ARNULFO ARJONA, ha manifestado ante los demás Magistrados que conformamos el Pleno de esta Corporación de Justicia, escrito mediante la cual solicita se le declare impedido a fin de tomar todas las medidas legales para separarlo del conocimiento de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por el licenciado EMILIO EFFIO en representación del GRAN HOTEL SOLOY, S. A., contra la orden de hacer contenida en la Resolución de 13 de marzo de 2000, expedida por el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Expone el Magistrado ADÁN A. ARJONA en su manifestación de impedimento, que hasta hace dos meses y medio fue socio de la firma forense ALFARO, FERRER, RAMÍREZ Y ALEMÁN (AFRA), quienes representan a la empresa proponente del amparo; además, dicha empresa aparece registrada entre los clientes de AFRA, brindándole asesoría jurídica en materia laboral. En tales circunstancias se fundamenta lo preceptuado en los numerales 4 y 13 del artículo 749 del Código Judicial que expresa lo siguiente:

"Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:
...
4. Ser el Juez o Magistrado, su cónyuge o algún pariente de éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, socio de alguna de las partes;
...
13. Estar vinculado el Juez o Magistrado con una de las partes por relaciones jurídicas susceptibles de ser afectadas por la decisión;"

Visto y considerado lo expresado por el Magistrado ADÁN ARJONA, observamos que procede la declaratoria de impedimento, según lo preceptuado en los numerales 4 y 13 del artículo 749 del Código Judicial que se refiere a los impedimentos de los magistrados.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado ADÁN ARNULFO ARJONA, en la acción de amparo de garantías constitucionales propuesto por el licenciado EMILIO EFFIO en representación del GRAN HOTEL SOLOY, S. A., contra la orden de hacer contenida en la Resolución de 13 de marzo de 2000, expedida por el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, DISPONE separarlo del conocimiento del presente negocio y CONVOCA a sorteo entre los magistrados suplentes que integran el Pleno, a fin que se reemplace al Magistrado impedido.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN A. ARJONA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

ABRIL DE 2000

APELACIONES

APELACION AL RESTO DE LA SALA INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS POLACK AYALA CONTRA EL AUTO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1999 DICTADO POR EL MAGISTRADO SUSTANCIADOR EN EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR MIGUEL ANGEL SANCHEZ ARAICA CONTRA LA SENTENCIA N° 3 F-T. DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES POR LA CUAL SE CONFIRMA LA SENTENCIA N° 057 S. F., DEL 7 DE JULIO DE 1999 DICTADA EN EL PROCESO DE FILIACION INCOADO POR MARIA MARIBEL TREJOS CHAVEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIEZ (10) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado CARLOS POLACK AYALA, actuando en nombre y representación del señor MIGUEL ANGEL SANCHEZ ARAICA, ha interpuesto recurso de revisión contra la Sentencia N° 3-F-T dictada por el Tribunal Superior de Menores el 10 de junio de 1999, la cual confirma la Sentencia N° 057 S. F. de 7 de julio de 1998, proferida por el Juzgado Seccional de Menores de la Provincia de Herrera, dentro del proceso de filiación de la menor YAXURY NAZARETH TREJOS, instaurado por la señora MARIA MARIBEL TREJOS CHAVEZ contra el recurrente.

Una vez ingresado el negocio a esta corporación judicial, el Magistrado Sustanciador lo rechazó de plano mediante resolución fechada 29 de diciembre de 1999; la cual fue apelada ante el resto de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en atención a lo dispuesto en el artículo 1197 del Código Judicial; impugnación que se procede a decidir.

En la decisión atacada el Magistrado Ponente consideró que el presente recurso de revisión era manifiestamente improcedente, porque la situación de hecho descrita por el recurrente no configura la causal en la que fundamenta su recurso, la cual se encuentra consagrada en el ordinal 2 del artículo 1189 que a la letra dice:

> **"ARTICULO 1189. Habrá lugar a la revisión de una sentencia dictada por la Corte Suprema, por un Tribunal Superior, o por un Juez de Circuito, cuando se trate de procesos de única instancia o cuando aún existiendo el recurso de apelación, éste no se haya surtido por cualquiera de los siguientes motivos:**
> **1. ...**
> **2. Si después de pronunciada la sentencia, se encuentren documentos decisivos que la parte no hubiere podido aportar o introducir en proceso por causa de fuerza mayor, o por obra de la parte favorecida;**
> **...".**

La Sala observa que la causal contenida en el ordinal 2 del artículo 1189 del Código Judicial se refiere a la posibilidad de que la parte afectada con la sentencia interponga recurso de revisión, cuando luego de pronunciada la misma "se encuentren documentos decisivos que la parte no hubiere podido aportar o introducir en el proceso por causa de fuerza mayor o por obra de la parte favorecida".

En el caso que nos ocupa la prueba a la que se refiere el recurrente es la del ADN, argumentando que dicha prueba era decisiva para el resultado del proceso y que no se pudo practicar en el momento oportuno porque "se encontraba atravesando una precaria situación económica que le imposibilitaba sufragar la misma o parte de ella"; situación que, a su juicio, constituye un motivo de fuerza mayor que configura la causal de revisión anteriormente señalada.

Esta corporación judicial considera que, como acertadamente concluyó el Magistrado Sustanciador en la resolución apelada, la prueba a la que se refiere el recurrente no se practicó debido a su falta de diligencia y no por un caso de

fuerza mayor; razón por la cual el recurso debe ser rechazado, en vista de que no se funda en los hechos o motivos a que se refiere el ordinal 2 del artículo 1189 del Código Judicial.

Además, como también se indicó en la decisión impugnada, es preciso reiterar lo señalado por la jurisprudencia de esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que el recurso de revisión no es una instancia más sino un medio de impugnación extraordinario y excepcional, que sólo tiene cabida cuando dentro del respectivo proceso se ha producido alguno de los casos que taxativamente consagra la ley.

En estas circunstancias, se debe confirmar la resolución apelada, porque se ajusta a derecho.

Por las razones expuestas, el resto de los Magistrados que integran la SALA DE LO CIVIL de la Corte Suprema, constituidos en Tribunal de Instancia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la resolución proferida por el Magistrado Sustanciador el 29 de diciembre de 1999, que rechazó de plano el recurso de revisión interpuesto por MIGUEL ANGEL SANCHEZ ARAICA contra la Sentencia N° 3-F-T, proferida por el Tribunal Superior de Menores el 10 de junio de 1999, dentro del proceso de filiación de la menor YAXURY NAZARETH TREJOS, instaurado por la señora MARIA MARIBEL TREJOS contra el recurrente.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACION INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS CARRILLO CONTRA EL AUTO DE 19 DE FEBRERO DE 2000 DICTADA POR EL REGISTRO PUBLICO, RELACIONADO CON EL ASIENTO DE INSCRIPCION 17206 DEL TOMO 2000 (GESTOR OFICIOSO DE LA SOCIEDAD CAMPELO, S. A. CONTRATO DE COMPRAVENTA POR MEDIO DEL CUAL LA SOCIEDAD DENOMINADA CAMPELO, S. A. COMPRA A LA SOCIEDAD DENOMINADA INVERSIONES KATY, S. A. LAS FINCAS 4209, 5424 Y 3669 DE SU PROPIEDAD). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, DOCE (12) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA, en carácter de GESTOR OFICIOSO de la sociedad CAMPELO, S. A., ha promovido recurso de apelación contra el Auto de 19 de febrero de 2000, "mediante el cual la Sub-Directora General del Registro Público niega la inscripción de la Escritura Pública Número 960 de 11 de Febrero de 2000". (f. 34)

Una vez asignado el expediente, mediante reparto de rigor, el Magistrado Sustanciador concedió el término previsto por ley para que las partes aleguen. Consta de fojas 22 a 33 escrito de la firma forense MAUAD & MAUAD, en representación de la sociedad INVERSIONES KATY, S. A.; y de fojas 34 a 38 el escrito del recurrente.

La negativa por parte del Registro Público para la inscripción de la escritura pública antes mencionada, tuvo como fundamento fáctico lo siguiente:

> "Registro Público: Panamá, diecinueve de febrero de 2000. Asiento 17206 del tomo 2000 del Diario.

Al presente documento se le hace el siguiente reparo:

Se trata de la Escritura Pública No. 960 de 11 de febrero de 2000 de la Notaría Primera del Circuito de Panamá por la cual se protocoliza contrato de compraventa por medio del cual la sociedad Campelo, S. A., compra a la sociedad denominada Inversiones Katy, S. A. las fincas 4209, 5424 y 3669 de su propiedad.Pero es el caso que es requisito indispensable para la inscripción de la compraventa el que sea otorgada ante Notario, leído y firmado por los otorgantes en presencia de dos testigos hábiles, haciendo constar en la misma el cumplimiento de estas formalidades.

Por tal motivo expuesto se NIEGA su inscripción. Fundamento legal: artículos 1131, 1728, 1745 y 1795 del Código Civil, artículo 47 del Decreto 9 de 1920 modificado por el Decreto 106 de 1999. NOTIFIQUESE.

(Fdo.)
Mayra Rodríguez de López
Subdirectora General." (F.)

El recurrente solicitó a la SUB-DIRECTORA del Registro Público, se le tuviera como Gestor Oficioso para ejercer los recursos de reconsideración con apelación en subsidio contra el Auto de 19 de febrero de 2000 dictado por ese Despacho, en escrito visible de fojas 7 a 9. Dicho recurso fue resuelto mediante Auto de 25 de febrero de 2000, cuya parte resolutiva se lee a continuación:

"REGISTRO PUBLICO: Panamá, veinticinco de febrero de dos mil.

Visto el informe de secretaría que antecede y la solicitud del Licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila a fin de que se le tenga como gestor oficioso de CAMPELO, S. A. con fundamento en el artículo 631 del Código Judicial, éste interpone recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra el auto de fecha 19 de febrero de 2000. Sin embargo, el artículo 22 del Decreto 106 de 30 de agosto de 1999 estipula quiénes pueden presentar estos recursos que reconoce el artículo 21 del mismo decreto. Al no existir en el procedimiento registral la gestión oficiosa ni la presentación de caución que la misma conlleva, no procede reconsiderar ni conceder la apelación del auto de 19 de febrero de 2000. Por tanto se mantiene el auto antes citado que niega la inscripción del asiento 17206 del tomo 2000 del Diario corriendo los plazos de que trata el artículo 42 del Decreto 62 de 1980 modificado por el artículo 58 del Decreto 106 de 30 de agosto de 1999. NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE.

(Fdo.)
Mayra Rodríguez de López
Subdirectora General." (F. 4 vuelta)

Observa la SALA el Informe Secretarial, de fecha 3 de marzo de 2000, en donde se comunica la desfijación del edicto que notifica la Resolución de 19 de febrero antes mencionada. En esa misma fecha, 3 de marzo de 2000, la Sub-Directora General del Registro Público, dicta el auto por el cual concede la apelación en subsidio formulada por el licenciado CARRILLO GOMILA, cuya parte medular nos permitimos transcribir:

"REGISTRO PUBLICO: Panamá, tres de marzo de dos mil.

Visto el informe de secretaría que antecede y de una nueva revisión a la solicitud del licenciado Carlos Carrillo a fin de que se le tenga como gestor oficioso de la sociedad Campelo, S. A. este Despacho mantiene el auto de 19 de febrero de 2000 que niega la inscripción del asiento 17206 del tomo 2000, Ordena desfijar el

> Edicto de dicho asiento y Concede la Apelación en subsidio interpuesta, a fin de que sea la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia la que decida en este grado. De ser admitido este recurso, solicita este Despacho a la Honorable Sala Civil de la Corte Suprema, fije la cuantía y se preste la caución que exige el artículo 631 del Código Judicial por la actuación del Gestor Oficioso. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
>
> (Fdo.)
> Mayra Rodríguez de López
> Subdirectora General." (F. 4 vuelta)

Al analizar la SALA cada auto dictado por el Registro Público, advierte que dicho funcionario no ha cumplido con la formalidad prevista en el artículo 631 del Código Judicial, que taxativamente señala:

> "ARTICULO 631. Por regla general, ninguno puede representar a otro en proceso, sino con poder otorgado con las formalidades legales; pero para notificarse de una demanda, contestarla, y para proponer o contestar alguna acción, incidente o recurso, cuando de no hacerlo pueda la parte sufrir gran perjuicio, no se necesita poder.
>
> Cualquiera puede hacerlo, dando caución a satisfacción del Juez de que la parte por quien habla lo aprobará como hecho por ella misma en el término hasta de dos meses, prorrogables por causa justificada hasta por un mes más a prudente arbitrio del Juez."

Como consecuencia de lo anterior, procede la declaratoria de nulidad de todo lo actuado por dicho funcionario, quien deberá dar cumplimiento a lo ordenado en la norma citada, señalando la caución que deberá consignar el GESTOR OFICIOSO.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO por el Registro Público, y ORDENA la devolución del expediente, a fin que se de cumplimiento con lo preceptuado en el artículo 631 del Código Judicial.

Devuelvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACION INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS CARRILLO CONTRA EL AUTO DE 23 DE FEBRERO DE 2000 DICTADO POR EL REGISTRO PUBLICO, RELACIONADO CON EL ASIENTO DE INSCRIPCION 10638 DEL TOMO 2000 (GESTOR OFICIOSO DE LA SOCIEDAD ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A. -INVERSIONES KATY, S. A. CELEBRA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON LA SOCIEDAD ADMINISTRACIÓN Y GESTION HOSTELERA, S. A. SOBRE LAS FINCAS 4209, 5424, 8960 Y 7079. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, DOCE (12) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA, como GESTOR OFICIOSO de la sociedad ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A., ha promovido recurso de apelación contra el Auto de 23 de febrero de 2000, dictado por la Sub-Directora General del Registro Público, "mediante el cual se NIEGA la inscripción de la

Escritura Pública Número 476 de 21 de Enero de 2000 de la Notaría Primera del Circuito de Panamá, por considerar que ésta no cumple con las formalidades legales" (f. 7).

El Registro Público fundamentó la negativa de inscripción de la escritura antes descrita, en base a lo siguiente:

> "Registro Público: Panamá, veintitrés de Febrero de dos mil. Asiento 10638 del tomo 2000 del Diario.
>
> Al presente documento se el (sic) hace el siguiente reparo:
>
> se trata de la Escritura Pública No. 476 de 21 de enero de 2000 de la Notaría Primera del Circuito de Panamá por la cual la sociedad Inversiones Katy, S. A. celebra contrato de arrendamiento con la sociedad Administración y Gestión Hostelera, S. A., sobre las fincas 4209, 5424, 3669 ubicadas en la Provincia de Panamá y sobre las fincas 8960 y 7079 ubicadas en la provincia de Colón. Es el caso que en este documento se protocoliza contrato de arrendamiento. Este tipo de contrato que recae sobre bienes inmuebles puede ser o no inscrito, pero es requisito indispensable para su inscripción que sea otorgado ante Notario, leído y firmado por los otorgantes en presencia de dos testigos hábiles, haciendo constar en el mismo el cumplimiento de estas formalidades.
>
> Por los motivos expuestos se NIEGA su inscripción. Fundamento Legal artículos 1131, 1728, 1764 y 1795 del Código Civil, artículo 47 del Decreto 9 de 1920 modificado por el Decreto 106 de 1999. NOTIFIQUESE.
>
> (FDO.)
> Mayra Rodríguez de López
> Sub-Directora General". (f. 4 vuelta)

Contra el Auto de 23 de febrero de 2000, dictado por el Registro Público, el recurrente formuló recurso de reconsideración con apelación en subsidio (fs. 8-9), siendo resuelto el mismo mediante Auto de 28 de febrero de 2000, cuya parte resolutiva se lee a continuación:

> "REGISTRO PUBLICO: Panamá, veintiocho de febrero de dos mil.
>
> Visto el informe de secretaria que antecede y la solicitud del licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila a fin de que se le tenga como gestor oficioso de ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A. con fundamento en el artículo 631 del Código Judicial, éste interpone recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra el auto de fecha 23 de Febrero de 2000. Sin embargo, el artículo 22 del Decreto 106 de 30 de agosto de 1999 estipula quiénes pueden presentar estos recursos que reconoce el artículo 21 del mismo Decreto.
>
> Al no existir en el procedimiento registral la gestión oficiosa ni la prestación de caución que la misma conlleva, no procede reconsiderar ni conceder la apelación del auto de 23 de febrero de 2000. Por tanto se mantiene el auto antes citado que niega la inscripción del asiento 10638 del tomo 2000 del Diario corriendo los plazos de que trata el artículo 42 del Decreto 62 de 1980 modificado por el artículo 58 del Decreto 106 de 30 de agosto de 1999. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
>
> (Fdo.)
> Mayra Rodríguez de López
> Subdirectora General." (Fs. 5)

Observa la SALA el Informe Secretarial, de fecha 3 de marzo de 2000, en donde se comunica la desfijación del edicto que notifica la Resolución de 28 de febrero antes mencionada. En esa misma fecha, 3 de marzo de 2000, la Sub-Directora General del Registro Público, dicta el auto por el cual concede la apelación en subsidio formulada por el licenciado CARRILLO GOMILA, cuya parte medular nos permitimos transcribir:

"REGISTRO PUBLICO: Panamá, tres de marzo de dos mil.

Visto el informe de secretaría que antecede y de una nueva revisión a la solicitud del Licenciado Carlos Carrillo a fin de que se le tenga como gestor oficioso de Administración y Gestión Hostelera, S. A., este Despacho mantiene el auto de 23 de febrero de 2000 que niega la inscripción del asiento 10638 del tomo 2000, Ordena desfijar el Edicto de dicho asiento y Concede la Apelación en subsidio interpuesta, a fin de que sea la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia la que decida en este grado. De ser admitido este recurso, solicita este Despacho a la Honorable Sala Civil de la Corte Suprema, fije la cuantía y se preste la caución que exige el artículo 631 del Código Judicial por la actuación del Gestor Oficioso. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

(Fdo.)
Mayra Rodríguez de López
Subdirectora General." (F. 5 vuelta)

Una vez desglosados los autos dictados por el Registro Público, la SALA advierte la nulidad de todo lo actuado, por dicho funcionario, en virtud de que se pretermitío la fijación de la caución que deberá consignar el GESTOR OFICIOSO, como así lo exige el ordenamiento jurídico, en el artículo 631 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO por el Registro Público, y ORDENA la devolución del expediente a fin que se de cumplimiento con lo preceptuado en el artículo 631 del Código Judicial.

Devuelvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACION INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS CARRILLO CONTRA EL AUTO DEL 19 DE FEBRERO DE 2000, RELACIONADO CON EL ASIENTO DE INSCRIPCION 17202 DEL TOMO 2000 (GESTOR OFICIOSO DE AIDA DIAZ - CONTRATO DE COMPRA VENTA POR MEDIO DEL CUAL AIDA DIAZ COMPRA A LA SOCIEDAD DENOMINADA GONZALEZ Y PAZ, S. A. LAS FINCAS 34711 Y 7597 DE SU PROPIEDAD.) MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado CARLOS CARRILLO GOMILA, quien ha solicitado que se le tenga como gestor oficioso de la señora AIDA DIAZ, ha interpuesto recurso de apelación contra el Auto dictado por la Subdirectora del Registro Público el 19 de febrero de 2000, en el que se niega la inscripción de la Escritura Pública N° 964 fechada 11 de febrero de 2000, de la Notaría Primera del Circuito de Panamá, en la que

se protocoliza contrato de compraventa mediante el cual la señora AIDA DIAZ compra a la sociedad GONZALEZ Y PAZ, S. A. las fincas N° 34711 y 7597.

La Subdirectora del Registro Público negó la inscripción de dicha Escritura Pública por las razones que se transcriben a continuación:

> "Se trata de la Escritura Pública No. 964 de 11 de Febrero de 2000 de la Notaría Primera del Circuito de Panamá por la cual se protocoliza contrato de compraventa por medio del cual Aida Díaz compra a la sociedad denominada González y Paz, S. A. las fincas 34711 y 7597 de su propiedad.
>
> Pero es el caso que es requisito indispensable para la inscripción de la compraventa el que sea otorgada ante Notario, leído y firmado por los otorgantes en presencia de dos testigos hábiles, haciendo constar en la misma el cumplimiento de estas formalidades. Por el motivo expuesto se NIEGA su inscripción." (F. 4)

Contra dicho Auto el Licenciado Carlos Carrillo Gomila interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio, solicitando que se le reconociera como gestor oficioso de la señora AIDA DIAZ, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 631 del Código Judicial.

El recurso de reconsideración fue resuelto por la Subdirección del Registro Público, mediante resolución fechada 25 de febrero de 2000, en la que se decide lo siguiente:

> "Visto el informe de secretaría que antecede y la solicitud del Licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila a fin de que se le tenga como gestor oficioso de la señora AIDA DIAZ con fundamento en el artículo 631 del Código Judicial, éste interpone recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra el auto de fecha 19 de Febrero de 2000. Sin embargo, el artículo 22 del Decreto 106 de 30 de Agosto de 1999 estipula quiénes pueden presentar estos recursos que reconoce el artículo 21 del mismo Decreto.
>
> Al no existir en el procedimiento registral la gestión oficiosa ni la presentación de caución que la misma conlleva, no procede reconsiderar ni conceder la apelación del auto de 19 de febrero de 2000. Por tanto se mantiene el auto antes citado que niega la inscripción del asiento 17202 del tomo 2000 del Diario corriendo los plazos de que trata el artículo 42 del Decreto 62 de 1980 modificado por el artículo 58 del Decreto 106 de 30 de Agosto de 1999." (F. 4)
>
> No obstante lo anterior, una vez notificada la resolución anterior en la que se mantiene el auto que niega la inscripción de la Escritura Pública N° 964 de 11 de febrero de 2000, la Subdirectora del Registro Público dicta resolución fechada 3 de marzo de 2000 en los siguientes términos:
>
> "Visto el informe de secretaría que antecede y de una nueva revisión a la solicitud del Licenciado Carlos Carrillo a fin de que se le tenga como gestor oficioso de Aida Díaz, este Despacho mantiene el auto de 19 de Febrero de 2000 que niega la inscripción del asiento 17202 del tomo 2000, Ordena desfijar el Edicto de dicho asiento y Concede la Apelación en subsidio interpuesta, a fin de que sea la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia la que decida en este grado. De ser admitido este recurso, solicita este Despacho a la Honorable Sala Civil de la Corte Suprema, fije la cuantía y se preste la caución que exige el artículo 631 del Código Judicial por la actuación del Gestor Oficioso." (F. 4 vuelta)

Luego de haberse presentado el escrito que sustenta la apelación y también

el de oposición a la misma, la Sala advierte que existe nulidad de todo lo actuado por la Subdirectora del Registro Público a partir de la resolución fechada 25 de febrero de 2000, en vista de que dicha funcionaria omitió fijar la caución del gestor oficioso en atención a lo dispuesto por el artículo 631 del Código Judicial, que a la letra dice:

> "ARTICULO 631. Por regla general, ninguno puede representar a otro en proceso, sino con poder otorgado con las formalidades legales; pero para notificarse de una demanda, contestarla, y para proponer o contestar alguna acción, incidente o recurso, cuando de no hacerlo pueda la parte sufrir gran perjuicio, no se necesita poder.
>
> Cualquiera puede hacerlo, dando caución a satisfacción del Juez de que la parte por quien habla lo aprobará como hecho por ella misma en el término hasta de dos meses, prorrogables hasta por un mes más a prudente arbitrio del Juez." (Enfasis de la Sala)

De lo anterior se desprende que sin haber sido legalmente constituido como gestor oficioso, pues el Registro Público no procedió a señalar la caución para actuar como tal, dicha institución procedió a conceder el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Carrillo, lo que es contrario a la norma en comento, incurriéndose así en causal de nulidad de lo actuado.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO por el Registro Público a partir de la resolución fechada 25 de febrero de 2000 y, en consecuencia, ORDENA la devolución del presente negocio con el fin de que se le dé cumplimiento a lo que establece el artículo 631 del Código Judicial.

Cópiese, Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACION INTERPUESTA POR CARLOS CARRILLO CONTRA EL AUTO DEL 22 DE FEBRERO DE 2,000 DICTADO POR EL REGISTRO PUBLICO, RELACIONADO CON EL ASIENTO DE INSCRIPCION 10211 DEL TOMO 2,000 (GESTION OFICIOSA DE ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A. -CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE LAS SOCIEDADES ANONIMAS DENOMINADAS GONZALEZ Y PAZ, S. A. Y ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A.). MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado CARLOS CARRILLO GOMILA, quien ha solicitado que se le tenga como gestor oficioso de la sociedad ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A., ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución proferida por la Subdirectora del Registro Público el 22 de febrero de 2000, en la que se niega la inscripción de la Escritura Pública N° 21876 de 5 de octubre de 1999 de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, en la cual se protocoliza contrato de arrendamiento celebrado entre las sociedades GONZALEZ Y PAZ, S. A. y ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A.

La Subdirectora del Registro Público negó la inscripción de la citada Escritura Pública por las siguientes razones:

> "Se trata de la Escritura Pública No. 21876 de 5 de Octubre de 1999

> de la Notaría Décima del Circuito de Panamá por la cual se protocoliza contrato de arrendamiento celebrado entre las sociedades anónimas denominadas González y Paz, S. A. y Administración y Gestión Hostelera, S. A. --------- Es el caso que el contrato de arrendamiento sobre bienes inmuebles puede ser o no inscrito, pero es requisito indispensable para su inscripción que sea otorgado ante Notario, leído y firmado por los otorgantes en presencia de dos testigos hábiles, haciendo constar en el mismo el cumplimiento de estas formalidades." (F. 4, reverso)

Contra dicho Auto el Licenciado Carlos Carrillo Gomila interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio, solicitando que se le reconociera como gestor oficioso de la sociedad ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A., con fundamento en lo dispuesto en el artículo 631 del Código Judicial.

El recurso de reconsideración fue resuelto por la Subdirección del Registro Público, mediante resolución fechada 25 de febrero de 2000, en los siguientes términos:

> "Visto el informe de secretaria que antecede y la solicitud del Licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila a fin de que se le tenga como gestor oficioso de ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A. con fundamento en el artículo 631 del Código Judicial, éste interpone recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra el auto de fecha 22 de Febrero de 2000. Sin embargo, el artículo 22 del Decreto 106 de 30 de agosto de 1999 estipula quiénes pueden presentar estos recursos que reconoce el artículo 21 del mismo Decreto.
>
> Al no existir en el procedimiento registral la gestión oficiosa ni la prestación de caución que la misma conlleva, no procede reconsiderar ni conceder la apelación del auto de 22 de Febrero de 2000. Por tanto se mantiene el auto antes citado que niega la inscripción del asiento 10211 del tomo 2000 del Diario corriendo los plazos de que trata el artículo 42 del Decreto 62 de 1980 modificado por el artículo 58 del Decreto 106 de 30 de Agosto de 1999." (F. 5)

No obstante lo anterior, una vez notificada la resolución anteriormente transcrita en la que se mantiene el auto que niega la inscripción de la Escritura Pública N° 21876 de 5 de octubre de 1999, la Subdirectora dicta resolución fechada 3 de marzo de 2000 en la que resuelve lo siguiente:

> "Visto el informe de secretaria que antecede y de una nueva revisión a la solicitud del Licenciado Carlos Carrillo a fin de que se le tenga como gestor oficioso de Administración y Gestión Hostelera, S. A., este Despacho mantiene el auto de 22 de Febrero de 2000 que niega la inscripción del asiento 10211 del tomo 2000, Ordena desfijar el Edicto de dicho asiento y Concede la Apelación en subsidio interpuesta, a fin de que sea la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia la que decida en este grado. De ser admitido este recurso, solicita este Despacho a la Honorable Sala Civil de la Corte Suprema, fije la cuantía y se preste la caución que exige el artículo 631 del Código Judicial por la actuación del Gestor Oficioso." (F. 5)

Ingresado el negocio a la Corte y luego de haberse presentado el escrito que sustenta la apelación y también el de oposición a la misma, la Sala advierte que existe nulidad de todo lo actuado por la Subdirectora del Registro Público a partir de la resolución de 25 de febrero de 2000, en vista de que dicha funcionaria omitió fijar la caución del gestor oficioso en atención a lo dispuesto por el artículo 631 del Código Judicial, que a la letra dice:

> "ARTICULO 631. Por regla general, ninguno puede representar a otro

> en proceso, sino con poder otorgado con las formalidades legales; pero para notificarse de una demanda, contestarla, y para proponer o contestar alguna acción, incidente o recurso, cuando de no hacerlo pueda la parte sufrir gran perjuicio, no se necesita poder.

Cualquiera puede hacerlo, dando caución a satisfacción del Juez de que la parte por quien habla lo aprobará como hecho por ella misma en el término hasta de dos meses, prorrogables hasta por un mes más a prudente arbitrio del Juez." (Enfasis de la Sala)

De lo anterior se desprende que sin haber sido legalmente constituido como gestor oficioso, pues el Registro Público no procedió a señalar la caución para actuar como tal, dicha institución procedió a conceder el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Carrillo, lo que es contrario a la norma en comento, incurriéndose así en causal de nulidad de lo actuado.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO por el Registro Público a partir de la resolución fechada 25 de febrero de 2000 y, en consecuencia, ORDENA la devolución del presente negocio con el fin de que se le dé cumplimiento a lo que establece el artículo 631 del Código Judicial.

Cópiese, Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACION INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS CARRILLO CONTRA EL AUTO DEL 23 DE FEBRERO DE 2000 DICTADO POR EL REGISTRO PUBLICO, RELACIONADO CON EL ASIENTO DE INSCRIPCION 10628 DEL TOMO 2,000 (GESTOR OFICIOSO DE ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A. -CONTRA DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE LAS SOCIEDADES ANONIMAS DENOMINADAS INMOBILIARIA VASQUEZ LOPEZ, S. A. Y ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A.). MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado CARLOS CARRILLO GOMILA, quien ha solicitado que se le tenga como gestor oficioso de la sociedad ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A., ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución proferida por la Subdirectora del Registro Público el 23 de febrero de 2000, en la que se niega la inscripción de la Escritura Pública N° 21877 de 5 de octubre de 1999 de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, en la cual se protocoliza contrato de arrendamiento celebrado entre las sociedades INMOBILIARIA VAZQUEZ LOPEZ, S. A. y ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A.

La Subdirectora del Registro Público negó la inscripción de la citada Escritura Pública por las siguientes razones:

> "Se trata de la Escritura Pública No. 21877 de 5 de Octubre de 1999 de la Notaría Décima del Circuito de Panamá por la cual se protocoliza contrato de arrendamiento celebrado entre las sociedades anónimas denominadas Inmobiliaria Vázques López, S. A. y Administración y Gestión Hostelera, S. A. --------- Es el caso que el contrato de arrendamiento sobre bienes inmuebles puede ser o no inscrito, pero es requisito indispensable para su inscripción que

sea otorgado ante Notario, leído y firmado por los otorgantes en presencia de dos testigos hábiles, haciendo constar en el mismo el cumplimiento de estas formalidades." (F. 4, reverso)

Contra dicho Auto el Licenciado Carlos Carrillo Gomila interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio, solicitando que se le reconociera como gestor oficioso de la sociedad ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A., con fundamento en lo dispuesto en el artículo 631 del Código Judicial.

El recurso de reconsideración fue resuelto por la Subdirección del Registro Público, mediante resolución fechada 28 de febrero de 2000, en los siguientes términos:

"Visto el informe de secretaria que antecede y la solicitud del Licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila a fin de que se le tenga como gestor oficioso de ADMINISTRACION Y GESTION HOSTELERA, S. A. con fundamento en el artículo 631 del Código Judicial, éste interpone recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra el auto de fecha 23 de Febrero de 2000. Sin embargo, el artículo 22 del Decreto 106 de 30 de agosto de 1999 estipula quiénes pueden presentar estos recursos que reconoce el artículo 21 del mismo Decreto.

Al no existir en el procedimiento registral la gestión oficiosa ni la prestación de caución que la misma conlleva, no procede reconsiderar ni conceder la apelación del auto de 23 de Febrero de 2000. Por tanto se mantiene el auto antes citado que niega la inscripción del asiento 10628 del tomo 2000 del Diario corriendo los plazos de que trata el artículo 42 del Decreto 62 de 1980 modificado por el artículo 58 del Decreto 106 de 30 de Agosto de 1999." (F. 5)

No obstante lo anterior, una vez notificada la resolución anteriormente transcrita en la que se mantiene el auto que niega la inscripción de la Escritura Pública N° 21877 de 5 de octubre de 1999, la Subdirectora dicta resolución fechada 3 de marzo de 2000 en la que resuelve lo siguiente:

"Visto el informe de secretaria que antecede y de una nueva revisión a la solicitud del Licenciado Carlos Carrillo a fin de que se le tenga como gestor oficioso de Administración y Gestión Hostelera, S. A., este Despacho mantiene el auto de 23 de Febrero de 2000 que niega la inscripción del asiento 10628 del tomo 2000, Ordena desfijar el Edicto de dicho asiento y Concede la Apelación en subsidio interpuesta, a fin de que sea la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia la que decida en este grado. De ser admitido este recurso, solicita este Despacho a la Honorable Sala Civil de la Corte Suprema, fije la cuantía y se preste la caución que exige el artículo 631 del Código Judicial por la actuación del Gestor Oficioso." (F. 5, reverso)

Ingresado el negocio a la Corte y luego de haberse presentado el escrito que sustenta la apelación y también el de oposición a la misma, la Sala advierte que existe nulidad de todo lo actuado por la Subdirectora del Registro Público a partir de la resolución de 28 de febrero de 2000, en vista de que dicha funcionaria omitió fijar la caución del gestor oficioso en atención a lo dispuesto por el artículo 631 del Código Judicial, que a la letra dice:

"ARTICULO 631. Por regla general, ninguno puede representar a otro en proceso, sino con poder otorgado con las formalidades legales; pero para notificarse de una demanda, contestarla, y para proponer o contestar alguna acción, incidente o recurso, cuando de no hacerlo pueda la parte sufrir gran perjuicio, no se necesita poder.

Cualquiera puede hacerlo, dando caución a satisfacción del Juez de

que la parte por quien habla lo aprobará como hecho por ella misma en el término hasta de dos meses, prorrogables hasta por un mes más a prudente arbitrio del Juez." (Enfasis de la Sala)

De lo anterior se desprende que sin haber sido legalmente constituido como gestor oficioso, pues el Registro Público no procedió a señalar la caución para actuar como tal, dicha institución procedió a conceder el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Carrillo, lo que es contrario a la norma en comento, incurriéndose así en causal de nulidad de lo actuado.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO por el Registro Público a partir de la resolución fechada 28 de febrero de 2000 y, en consecuencia, ORDENA la devolución del presente negocio con el fin de que se le dé cumplimiento a lo que establece el artículo 631 del Código Judicial.

Cópiese, Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

PRIMERA AGENCIA DE SEGURIDAD, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO INTERPUESTO POR SOFIA PUELLO DE IGLESIAS CONTRA PRIMERA AGENCIA DE SEGURIDAD, S. A. Y/O JUAN MANUEL GODOY HERNÁNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, apoderados judiciales de la sociedad anónima denominada PRIMERA AGENCIA DE SEGURIDAD, S. A., han interpuesto recurso de casación contra la Resolución de 2 de julio de 1999 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante el cual se confirma el Auto N° 4483, de 14 de diciembre de 1998, pronunciado por el Juzgado Tercero de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

El recurso se encuentra pendiente de decidir sobre su admisibilidad, a lo que procede la Sala, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

En primer lugar, se observa que se trata de una resolución recurrible en casación, tanto por su naturaleza como por la cuantía del negocio.

En segundo lugar, el recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno y por persona hábil.

Y en tercer lugar, el recurrente presenta dos causales de casación en el fondo. La primera causal invocada por el recurrente es: "infracción de normas sustantivas de derecho, por el concepto de interpretación errónea de la norma de derecho, que ha influido sustancialmente en la resolución recurrida". La causal está correctamente invocada, y los motivos que sirven como fundamento a la misma, reúnen de manera general, los requisitos contemplados por la ley.

La segunda causal invocada es: "infracción de normas sustantivas de derecho, por el concepto de violación directa, que ha influido sustancialmente

en lo dispositivo de la resolución recurrida". La causal se encuentra invocada de manera correcta, y de acuerdo a lo exigido por nuestro Código de Procedimiento Civil.

Con respecto a los motivos y a la citación de las normas de derecho infringidas con su debida explicación de cómo lo han sido, la Sala considera que los mismos reúnen, de manera general, los requisitos establecidos en la Ley.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo, interpuesto por PRIMERA AGENCIA DE SEGURIDAD, S. A., mediante apoderados judiciales.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EUFEMIA BARRIOS VDA. DE BRANDAO, ROBERT HENRY BRANDAO BARRIOS Y GLADYS AMAYA DE BRANDAO RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE EDUARDO A. CASTRO CASTILLERO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Raúl Cárdenas y Asociados, apoderada judicial de los señores EUFEMIA BARRIOS VIUDA DE BRANDAO, ROBERT HENRY BRANDAO y GLADYS AMAYA DE BRANDAO, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial el 24 de noviembre de 1999, dentro del proceso ordinario instaurado por el señor EDUARDO CASTRO CASTILLERO contra la parte recurrente.

El recurso se encuentra en etapa de admisibilidad, razón por la cual la Sala procede a determinar si cumple con los requisitos que establecen los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

Así, se ha podido constatar que el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno, por persona hábil y, además, que la resolución que se pretende impugnar es recurrible en casación, tanto por su naturaleza como por la cuantía del negocio.

La casación es en el fondo y consta de dos causales. La primera es infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Al revisar los cuatro motivos que le sirven de fundamento se observa que los mismos no sustentan la causal invocada, puesto que se limitan a enumerar las conclusiones a las que llegó la sentencia impugnada. En otras palabras, los planteamientos del recurrente atacan los hechos que el Tribunal Superior dio por probados en dicha resolución, lo cual es incongruente con la causal de violación directa, como ya lo ha señalado esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en varias ocasiones.

En relación con este punto resulta pertinente lo señalado por el Doctor JORGE FABREGA P. en su obra "Casación" (Imprenta Varitec, S. A., Panamá, 1995):

"Cada vez que se aspira a impugnar un fallo porque se está en

> desacuerdo con la actitud que asume el fallo respecto a los hechos de la controversia, sólo se puede lograr a través de una causal probatoria. No es viable -al invocar una (sic) de los tres primeros conceptos del Art. 1154- partir de hechos, contrarios a los reconocidos en el fallo de instancia; o expresado en otra forma, si no se ataca la prueba que reconoce los hechos sólo puede promoverse fundado en una de las tres primeras modalidades. Tal situación la aclara el Código al disponer en el Art. 1154, que "en concepto de violación directa o en la interpretación errónea no puede invocarse errores de hecho o de derecho en cuanto a la prueba"." (Págs. 137-138)

En vista de que la causal invocada es incongruente con los motivos que la acompañan, la misma resulta ininteligible y debe declararse inadmisible, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1167 del Código Judicial.

La segunda causal consiste en la infracción de normas sustantivas de derecho por interpretación errónea, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Al igual que la causal primera, los motivos que sustentan esta segunda causal tampoco contienen cargos congruentes con ella; puesto que una vez más el recurrente comete el error de atacar, mediante una causal no probatoria, los hechos que dio por probados la resolución que se impugna en casación.

En estas circunstancias la segunda causal también debe ser rechazada, en vista de que no existe la debida unidad entre los elementos que la conforman.

Por las razones anteriormente expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto por la representación judicial de los señores EUFEMIA BARRIOS VIUDA DE BRANDAO, ROBERT HENRY BRANDAO y GLADYS AMAYA DE BRANDAO, dentro del proceso ordinario que les sigue el señor EDUARDO CASTRO CASTILLERO.

Las costas de casación se fijan en setenta y cinco balboas (B/75.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

VIDA PANAMA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ORCON, S. A. E IMPORTADORA PANAMA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución de 17 de marzo de 2,000 la Sala Civil de la Corte ordenó la corrección del recurso de casación en el fondo propuesto por la firma de abogados LUQUE, CORONEL Y ASOCIADOS en representación de la sociedad VIDA PANAMA, S. A., contra la Sentencia de 23 de noviembre de 1999 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Vencido el término para la corrección del recurso y habiéndose efectuado la misma en tiempo oportuno, se procede a resolver en forma definitiva su admisibilidad.

En la respectiva resolución la Corte le señaló al casacionista que debía corregir casi todos los motivos planteados en el recurso, pues los mismos no habían sido desarrollados conforme a la técnica que se requiere para ese apartado, por no haber sido formulados en términos concretos, de modo que en cada uno quedara expuesta la infracción de la ley sustantiva, siempre en apoyo de la causal invocada.

En ese sentido se especificó que, en el motivo primero se debía formular el cargo de injuricidad y que en los motivos segundo, cuarto, quinto y séptimo, se debían corregir los términos utilizados en el recurso para expresar los cargos de injuricidad, ya que se confundía la causal invocada de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba con la de error de hecho sobre la existencia de la prueba. (fs. 654-657).

Al confrontar el escrito del recurso de casación corregido con el anterior, se puede apreciar que se hicieron las correcciones de los motivos primero, segundo, cuarto y quinto. Sin embargo, el motivo séptimo no fue corregido, sino eliminado.

En cuanto a las normas citadas y explicadas como infringidas, se mandó a corregir el orden en que fueron citadas las normas, debido a que se aludía inicialmente a una norma sustantiva para luego mencionar las probatorias, y es en forma contraria como debe hacerse. También se ordenó corregir el concepto de la infracción de los artículos 974 del Código Civil, 822 y 1057 del Código Judicial, ya que al desarrollarse se hacía una explicación que no era congruente con la causal invocada de error de derecho, sino con la de error de hecho. Por último, se le advirtió al recurrente que había transcrito y desarrollado el concepto en que se infringían los artículos 978 y 988, pero sin mencionar el código al que pertenecen esas disposiciones, por lo que se debía aclarar lo pertinente.

Observa la Sala que, con relación al orden en que el casacionista tenía que citar las disposiciones legales infringidas, se cumplió con la corrección. Pero no ocurrió así con los artículos 822 y 1057 del Código Judicial, ya que en vez de corregirlos los eliminó.

Por tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 1166 del Código Judicial, al no haber sido corregido el recurso conforme lo ordenado por la Corte, éste tendrá que ser declarado inadmisible.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación de fondo propuesto por VIDA PANAMA, S. A. contra la Sentencia de 23 de noviembre de 1999, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Las obligantes costas se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/ 75.00).

Notifíquese,

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE. A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ALEJANDRO A. DUQUE VILLARREAL, TOMÁS GERARDO DUQUE VILLARREAL, GABRIELLA DUQUE DE MITCHELL, SONYA DUQUE DE GREEN, DORA DUQUE DE SPUTO, RITA BALBINA DUQUE DE GARCÍA, CARMEN LORENA DUQUE DE OROZCO Y DYANE ALICE DUQUE DE LÓPEZ RECURREN EN CASACIÓN EN LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA DE CARMINA DUQUE GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra el Auto de segunda instancia proferido por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, de fecha 14 de junio de 1999, en el cual se confirma el Auto N° 1035, de 18 de mayo de 1998, emitido por el Juzgado Segundo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, donde se resolvió ordenar la suspensión del juicio de sucesión intestada de CARMINA ADELA DUQUE GOMEZ (Q. E. P. D.), y se ordena que se proceda a darle curso a la Sucesión Testada presentada de CARMINA ADELA DUQUE por la firma GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, los apoderados judiciales de los señores TOMÁS GABRIEL ALTAMIRANO DUQUE, GABRIELLA ALTAMIRANO DUQUE, MARÍA ISABEL KODAT DE BAZÁN, GLORIA ALTAMIRANO DUQUE (Q. E. P. D.), ARISTIDES TYPALDOS VALENCIA, IRENE MARCELA TYPALDOS VALENCIA DE ANGUIZOLA, MARIALENA TYPALDOS LASSO DE LA VEGA, ALVARO GABRIEL GORMAZ TYPALDOS, EDUARDO ENRIQUE GORMAZ TYPALDOS Y RODRIGO GERARDO GORMAZ TYPALDOS, firma forense ROSAS Y ROSAS, así como el apoderado judicial de los demandantes de la sucesión intestada de Carmina Adela Duque Gómez (q. e. p. d.), señores ALEJANDRO A. DUQUE VILLARREAL, TOMÁS GERARDO DUQUE VILLARREAL, GABRIELLA DUQUE DE MITCHELL, SONYA DUQUE DE GREEN, DORA DUQUE DE SAPUTO, RITA BALBINA DUQUE DE GARCÍA, CARMEN LORENA DUQUE DE OROZCO Y DYANE ALICE DUQUE DE LÓPEZ, licenciado RODRIGO A. VIVES RUÍZ; han presentado recurso de CASACIÓN en el FONDO, visible a fojas 107-116 y 119-126, respectivamente.

Transcurrido el término señalado por ley, la Sala procedió a dictar resolución de tres de enero del 2000, en la cual declaró admisible los recursos de casación en el fondo, propuestos por la firma forense ROSAS Y ROSAS y el licenciado RODRIGO A. VIVES RUÍZ, respectivamente.

La Corte, al declarar admisible los recursos formulados, lo fijó en lista, a fin de que las partes alegaran por escrito sobre el fondo, término que fue aprovechado por las partes.

El caso se encuentra en estado de fallar y a ello se procede, previa una breve sinopsis, si bien de manera escueta y esquemática, del proceso que trae causa el recurso de casación promovidos por las partes.

ANTECEDENTES

Los señores TOMÁS GABRIEL ALTAMIRANO DUQUE, GABRIELLA ALTAMIRANO DUQUE, MARÍA ISABEL KODAT DE BAZÁN, GLORIA ALTAMIRANO DUQUE (Q. E. P. D.), ARISTIDES TYPALDOS VALENCIA, IRENE MARCELA TYPALDOS VALENCIA DE ANGUIZOLA, MARIALENA TYPALDOS LASSO DE LA VEGA, ALVARO GABRIEL GORMAZ TYPALDOS, EDUARDO ENRIQUE GORMAZ TYPALDOS, RODRIGO GERARDO GORMAZ TYPALDOS, ALEJANDRO A. DUQUE VILLARREAL, TOMÁS GERARDO DUQUE VILLARREAL, GABRIELLA DUQUE DE MITCHELL, SONYA DUQUE DE GREEN, DORA DUQUE DE SAPUTO, RITA BALBINA DUQUE DE GARCÍA, CARMEN LORENA DUQUE DE OROZCO Y DYANE ALICE DUQUE DE LÓPEZ, solicitaron la Sucesión Intestada de CARMINA ADELA DUQUE GÓMEZ (Q. E. P. D.).

Radicado en el Juzgado Segundo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá el mencionado proceso de sucesión intestada, la firma GALINDO, ARIAS & LÓPEZ solicitó la suspensión del Juicio de Sucesión Intestada de CARMINA ADELA DUQUE GÓMEZ, y se proceda a darle curso de Sucesión Testada, por lo que el Juez mediante Auto N° 1035, de 18 de mayo de 1998, resolvió:

> "1. ORDENAR LA SUSPENSIÓN del JUICIO DE SUCESIÓN INTESTADA DE: CARMINA ADELA DUQUE GÓMEZ que se tramita en este Tribunal.
>
> 2. ORDENA que se proceda a darle curso a la SUCESIÓN TESTADA presentada de CARMINA ADELA DUQUE por la firma GALINDO, ARIAS & LÓPEZ".

En grado de apelación, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito

Judicial profirió la resolución de 14 de junio de 1999, mediante la cual CONFIRMA el Auto N° 1035, de 18 de mayo de 1998, dictado por el Juzgado Segundo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

POSICIÓN DE LA SALA

Procede la Sala a resolver los recursos extraordinarios de casación, en virtud de que han recurrido la firma ROSAS Y ROSAS y el licenciado RODRIGO A. VIVES, en nombre y representación de sus respectivos poderdantes, por lo que resultaría procedente analizar separadamente los recursos de casación interpuestos y, como lo expusimos anteriormente, han sido admitidos; sin embargo, esta Superioridad se percata que los escritos de casación presentados por ambos apoderados judiciales, son idénticos, por lo que se resolverá en conjunto, en aras del principio de economía procesal.

Ambos recursos de casación son en el fondo, donde fueron admitidas la única causal, consistente en infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. La violación de normas sustantivas de derecho se producen, en apreciación del recurrente, en virtud de los cargos que le formula a la resolución recurrida, que aparecen expuestos en los siguientes motivos:

> "PRIMERO: Ese Tribunal Superior en la resolución recurrida en casación confirmó el Auto N° 1035 de 10 de mayo de 1998, proferido por el Juzgado Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, mediante el cual se ordenó la suspensión del juicio de Sucesión intestada de la señora CARMINA ADELA DUQUE GÓMEZ (q. e. p. d.) y se ordenó darle curso a la sucesión testada de la referida señora.
>
> SEGUNDO: La decisión anterior se adoptó con base a solicitud presentada por GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, "actuando en nombre y representación de la señora RITA IRENE TYPALDOS DE OZORES" (fs. 3 del cuaderno correspondiente a la solicitud de suspensión de la sucesión intestada), con base en un supuesto testamento ológrafo encontrado, según se dice, por una de las enfermeras que atiende a la señora MARÍA XENIA ESTHER DUQUE GÓMEZ, hermana de la nombrada (CARMINA ADELA DUQUE GÓMEZ).
>
> TERCERO: Sin embargo, el Tribunal recurrido no tomó en consideración documentos que ponen en evidencia omisiones y deficiencias graves contenidas en documentos relacionados con el supuesto testamento ológrafo en referencia y su presentación ante los tribunales, que se mencionarán en los motivos siguientes.
>
> CUARTO: En la fotocopia de la Escritura Pública N° 2597 de 17 de marzo de 1998, de la Notaría Octava del Circuito de Panamá, consta que la señora LEONOR MURILLO DE LÓPEZ (nombre usual) o LEONOR DÍAZ DE LÓPEZ (nombre legal), quien supuestamente encontró "por pura casualidad" el citado documento, nunca dijo que ese es el testamento de CARMINA ADELA DUQUE GÓMEZ (fs. 1 y vuelta y 2 del cuaderno correspondiente a la solicitud de suspensión del proceso de sucesión intestada).
>
> QUINTO: En el documento mencionado en el motivo anterior consta que quien lo presentó para su protocolización fue la referida señora DÍAZ DE LÓPEZ o MURILLO DE LÓPEZ, persona que no era depositaria ni tenía interés en el testamento como herederos, legataria, albacea o en cualquier otro concepto. Ella manifestó que el documento en referencia se lo mandó a la sobrina de la señorita MARÍA XENIA DUQUE GÓMEZ.

SEXTO: La supuesta firma de la causante que figura en el citado documento no corresponde a la de aquélla, tal como ha sido comprobado en la Fiscalía Primera del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, en donde cursan sumarias tendientes a esclarecer la posible falsedad del referido documento.

SÉPTIMO: En el escrito de 25 de marzo de 1998, con el que GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ presentó el supuesto testamento ológrafo y solicitó la suspensión de la sucesión intestada, manifiesta que CARMINA ADELA DUQUE GÓMEZ es su tía carnal (hecho primero), lo que no comprobó en el proceso, puesto que no aportó prueba alguna sobre esa relación de parentesco.

OCTAVO: En los escritos de la sustentación de la apelación, los apoderados de los herederos declarados en la sucesión intestada, solicitamos que el Tribunal pidiese a la Fiscalía Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá, copia autenticada de documentos que ponen en evidencia que el documento mencionado no es el testamento de la señora DUQUE GÓMEZ, (petición) desestimada por el Tribunal.

NOVENO: A pesar de todas estas deficiencias en los documentos mencionados, y a pesar de habérsele advertido al Primer Tribunal Superior de Justicia tales deficiencias (fs. 49-55 y 56-62), éste les asignó un mérito probatorio que no corresponde, y debido a ello, confirmó la decisión primaria, que suspendió el juicio de sucesión intestada y ordenó a darle curso a la sucesión testada de CARMINA ADELA DUQUE GÓMEZ".

En apoyo a los cargos atribuidos a la sentencia de segundo grado, el recurrente estima que la sentencia en referencia ha violado los artículos 823, 782, incisos primero y final, y 1567 del Código Judicial, y los artículos 720, 723, 655 y 677 del Código Civil.

Como ya ha quedado reproducido, los cargos que se le imputan a la resolución del Tribunal Superior en esta causal, dicen relación a que el Tribunal le dio pleno valor de testamento ológrafo auténtico al documento supuestamente encontrado por la señora DÍAZ DE LÓPEZ o MURILLO DE LÓPEZ, es decir, que dicha señora nunca manifestó que ese era el documento de la señora DUQUE GÓMEZ, que ella manifestó que no era depositaria del mismo y tampoco tenía interés personal en el supuesto testamento ológrafo. Tampoco tomó en cuenta que, ya en la Fiscalía Primera del Primer Circuito Judicial, en dos peritajes caligráficos realizados por expertos de la Policía Técnica Judicial a solicitud del Ministerio Público, se había comprobado que la firma que allí aparece no corresponde a la de la causante, señora CARMINA ADELA DUQUE GÓMEZ.

Además, la escritura pública donde se protocolizó el supuesto testamento ológrafo fue presentado ante el Juzgado para su autenticación y orden de protocolización por la señora MURILLO DE LÓPEZ o DÍAZ DE LÓPEZ, quien no era depositaria del supuesto testamento y tampoco tenía interés en él como heredera, legataria, albacea o en cualquier otro concepto, violándose así en forma directa por omisión el artículo 723 del Código Civil, ya que de haberlo aplicado habría tenido que considerar ilegítima la solicitud de autenticación y protocolización de dicho supuesto testamento ológrafo.

La lectura de los motivos revela que el error probatorio que le imputa la parte recurrente al fallo de segundo grado, se refiere a las supuestas deficiencias en la Escritura Pública N° 2537, de 17 de marzo de 1998, de la Notaría Octava de Circuito de Panamá y el escrito de fecha 25 de marzo de 1998, con el cual GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ presentó supuesto testamento ológrafo y solicitó la suspensión de la sucesión intestada, toda vez que, según los recurrentes en casación, la señora LEONOR DÍAZ DE LÓPEZ o MURILLO DE LÓPEZ no era depositaria, ni tenía interés en el testamento como heredera, legataria, albacea o en cualquier otro concepto, y que no se ha comprobado en el proceso la relación

de parentesco que tiene la señora RITA IRENE OZORES DE TYPALDOS con CARMINA ADELA DUQUE GÓMEZ.

Específicamente, el recurrente sostiene que no se le debe dar validez al testamento ológrafo en cuestión porque, se ha comprobado en la Fiscalía Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante peritos caligráficos que la supuesta firma de la causante que figura en el citado documento no corresponde a la de aquélla (señora CARMINA ADELA DUQUE GÓMEZ), informe pericial este que no ha sido aportado al proceso, lo que bien pudo haberse hecho como prueba trasladada.

La resolución recurrida se refiere a los aspectos impugnados, de la forma que resulta conveniente dejar transcritos:

> "El Juzgador de grado, al momento de fallar, ponderó cumplido el artículo 722 del Código Civil, pues la señora CARMINA ADELA DUQUE GÓMEZ falleció el 9 de octubre de 1993, y su testamento ológrafo, protocolizado, se aportó ante el Juez de Circuito dentro de los cinco años contados a partir de la fecha anotada, es decir, el 25 de marzo de 1998.
>
> Como se ha podido observar, los recurrentes sustentan su alzada en la denuncia del testamento que se tramita ante el Ministerio Público. Sin embargo, tal circunstancia no constituye un hecho que abrigue certeza contundente para desconocer el contexto del mentado documento.
>
> Es decir, los recurrentes refieren a la investigación sumarial seguida en este sentido; empero, a criterio de esta Superioridad, lo acotado no detenta una decisión o pronunciamiento categórico que pondere o endilgue, como apócrifo, el testamento que nos ocupa."

Un examen de la escritura pública refleja que se trata de la protocolización de un acto jurisdiccional, de presentación de un testamento ológrafo por su tenedor, para la validación del mismo, cuya protocolización surge por determinación de la autoridad jurisdiccional que llevó a cabo la diligencia de presentación del documento ológrafo de la fallecida, la señora CARMELA ADELA DUQUE LOPEZ (q. e. p. d.), todo ello de conformidad con los artículos 722 y 723 del Código civil.

La Sala, por ello, no le encuentra reparos a las argumentaciones de la sentencia recurrida, toda vez que el informe pericial que dejaba dudas sobre la validez o regularidad del testamento ológrafo protocolizado por orden de la autoridad jurisdiccional competente, debió ser aportado en las instancias probatorias por la parte interesada en la prueba pericial mencionada. No obstante, siendo así que el informe pericial podría incidir en la determinación de la validez o regularidad del testamento ológrafo, debió decretar, como prueba de oficio, con fundamento en el artículo 1270 del Código Judicial, dichas pruebas periciales, toda vez que consisten en "pruebas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o para aclarar puntos dudosos", como reza la norma procesal citada. La prueba que debe la Sala, actuando como tribunal de instancia, decretar, previa casación del auto recurrido, es la diligencia pericial elaborada por el Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, que fue adjuntado a la Fiscalía Primera del Primer Circuito Judicial.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la Resolución de 14 de junio de 1999 dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, y, actuando como tribunal de instancia, antes de dictar la sentencia de reemplazo, DECRETA, con fundamento en el artículo 1270 Código Judicial, prueba oficiosa consistente en copia autenticada del expediente contentivo de la denuncia que se instruye en la FISCALÍA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, sobre la posible falsedad del supuesto testamento

ológrafo de CARMINA ADELA DUQUE GOMEZ y, en consecuencia, SE ORDENA, que por Secretaría se solicite a la FISCALÍA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA el envió del expediente respectivo.

Cumplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EDISA FLORES DE DE LA ROSA RECURRE EN CASACION EN EL INCIDENTE DE TASACION DE HONORARIOS PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR LAMINADOS MON DE CHEPO, S. A. CONTRA DISTRIBUIDORA MERCATEC, S. A. Y PEDRO PABLO CASTRELLON CEDEÑO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIEZ (10) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Licenciada EDISA FLORES DE DE LA ROSA interpuso, en su propio nombre y representación, recurso de casación contra la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 5 de septiembre de 1997, la cual decidió en segunda instancia el incidente de tasación de honorarios profesionales propuesto por la recurrente, dentro del proceso ordinario instaurado por LAMINADOS MON DE CHEPO, S. A. contra DISTRIBUIDORA MERCATEC, S. A. y PEDRO PABLO CASTREJON CEDEÑO.

De acuerdo con las constancias procesales, dicho incidente fue negado en primera instancia por el Juzgado Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, mediante Auto N° 1408 de 21 de mayo de 1997 y en vista de su inconformidad con dicha decisión, la Licenciada FLORES DE DE LA ROSA apeló de ella ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, quien la confirmó en la resolución fechada 5 de septiembre de 1997 que ahora se impugna en casación.

El recurso es en el fondo y se invoca como única causal, la infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Los motivos que le sirven de fundamento son los siguientes:

"PRIMERO: El Primer Tribunal Superior de Justicia, a fojas 148 del expediente, sostiene que si bien la incidentista alega la inexistencia de convenio bilateral escrito de honorarios y costas válido entre las partes, el documento consignado a fojas No. 107 y 108 demuestra la existencia del pacto previo entre las partes respecto a los honorarios profesionales; sin embargo, siendo un documento supuestamente de carácter bilateral debía constar la firma de ambas partes, así como el reconocimiento de firma, o la petición de reconocimiento de firma por parte de la contraparte, lo que no se hizo por lo que el documento que consta a fojas 107 y 108 carece de validez.

Por tanto, el Primer Tribunal Superior de Justicia incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba lo cual influyó en lo sustancial del pleito.

SEGUNDO: El Primer Tribunal Superior de Justicia no sólo le dio fuerza probatoria al documento de fojas 107 y 108 sin que reuniera los requisitos esenciales para la validez de todo contrato bilateral, como son la firma por ambas partes debidamente

reconocidas judicialmente, sino que tampoco analizó dicho documento conforme a las reglas de la SANA CRITICA y en concordancia con las otras pruebas del proceso, como lo son los documentos que corren de fojas 8 a 15, que son los pagos efectuados por la demandada sobre distintas acciones realizadas por la suscrita; y de fojas 36 a 100 que demuestran que los pagos efectuados por la demandada corresponden a distintas acciones realizadas con independencia de esta reclamacióne específica.

Por tanto el AD QUEM incurrió en ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA al englobar los pagos recibidos por las distintas acciones como si fuera la reclamación que hoy nos ocupa.

TERCERO: Como consecuencia de ese error probatorio, de derecho, el Primer Tribunal Superior no aplicó las normas sustantivas sobre Honorarios Profesionales contemplados en la Tarifa Legal aprobado (sic) por la Honorable Corte Suprema de Justicia." (Fs. 162-163)

Las disposiciones legales que se estiman infringidas como consecuencia de los cargos planteados en los motivos anteriormente transcritos, son los artículos 770, 845, 849, 872 y 873 del Código Judicial; artículo 1420 del Código Civil; y artículo 4° de la Tarifa de Honorarios Profesionales Mínimos de los Abogados en la República de Panamá.

En primer lugar, la recurrente alega que el Tribunal Superior apreció erróneamente el documento consultable a fojas 107 y 108, al concluir que el mismo contiene un convenio bilateral de costas y honorarios profesionales pactado entre la Licenciada EDISA FLORES DE DE LA ROSA y el representante legal de LAMINADOS MON DE CHEPO, S. A.; sin tomar en consideración que no tiene la firma de ambas partes; además de que la contraparte tampoco solicitó el reconocimiento de la firma, razón por la cual estima que carece de validez probatoria.

La Sala ha podido constatar que el documento señalado anteriormente es una copia del que aparece a fojas 6 y 7 del expediente, y que fuera aportado como prueba por la propia recurrente cuando interpuso el presente incidente.

Consecuentemente, le asiste razón al Tribunal Superior cuando sostiene en la resolución atacada que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 859 del Código Judicial, "las pruebas que presentara la parte incidentista-recurrente, no requieren del reconocimiento de que trata el artículo 848 ejúsdem géneris; habida cuenta que, el solo hecho de haber presentado dichos documentos, reconoce con ello su autenticidad, por lo que a las mismas se les debe reconocer pleno valor probatorio". (F. 147)

Por otra parte, cabe señalar que tampoco se presentó ningún otro documento que demostrara la existencia de alguna modificación o variación al convenio de honorarios al que nos venimos refiriendo, razón por la cual la Sala concluye que el fallo impugnado no incurrió en error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba consultable a fojas 107 y 108, al considerar que la misma contenía los honorarios profesionales que se habían pactado entre las partes.

En segundo lugar la recurrente alega que el juzgador de segundo grado tampoco analizó el documento anteriormente señalado, de acuerdo con los principios de la sana crítica y en concordancia con la prueba documental que consta de fojas 8 a 15 y de la 36 a la 100, la cual, en su opinión, "demuestra que los pagos efectuados por la demandada corresponden a distintas acciones realizadas con independencia de esta reclamación específica". (Fs. 162-163)

Al revisar la resolución atacada la Sala observa, en primer lugar, que el Tribunal Superior aclaró que únicamente consideraría los honorarios profesionales causados dentro del proceso ordinario propuesto por LAMINADOS MON DE CHEPO, S. A. contra DISTRIBUIDORA MERCATEC, S. A. y PEDRO CASTREJON CEDEÑO; por lo que no fundamentó su decisión en la prueba documental que consta de fojas 36-100, puesto

que la misma guarda relación con los gastos causados dentro de acciones judiciales distintas a la que nos ocupa. Consecuentemente, dichos documentos no pudieron ser valorados erróneamente como se alega en el recurso, ya que como se señalara anteriormente, no fueron objeto de examen en la resolución atacada.

Ahora bien, en cuanto a los otros documentos atacados, los que van de fojas 8 a 15, la Sala ha podido constatar que el Tribunal Superior tomó en consideración para tasar los honorarios profesionales de la Licenciada FLORES DE DE LA ROSA, únicamente los que constan a fojas 8, 10, 11, 12, 13 y 14; los cuales corresponden exclusivamente al trabajo en derecho realizado por ella dentro del presente negocio y no a otras acciones legales como argumenta la incidentista recurrente.

Por tanto, la Corte concluye que el fallo atacado tampoco valoró erróneamente las pruebas indicadas y al no existir otros cargos que considerar contra dicha decisión, debe descartarse el presente recurso; en vista de que no se ha incurrido en error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba ni, por ende, en la violación de los artículos 770, 845, 849, 872 y 873 del Código Judicial; 1420 del Código Civil; y 4° de la Tarifa de Honorarios Profesionales Mínimos de los Abogados en la República de Panamá.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 5 de septiembre de 1997, dentro del incidente de tasación de honorarios profesionales interpuesto por la Licenciada EDISA FLORES DE DE LA ROSA, dentro del proceso ordinario instaurado por LAMINADOS MON DE CHEPO, S. A. contra DISTRIBUIDORA MERCATEC, S. A. y PEDRO PABLO CASTREJON CEDEÑO.

Las costas de casación se fijan en doscientos balboas (B/200.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A FRITZ COMPANIES (PANAMA), INC. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIEZ (10) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó la corrección del recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 28 de octubre de 1999, dentro del proceso ordinario instaurado por COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A. contra FRITZ COMPANIES (PANAMA), INC.

Esta corporación de justicia observa que la sociedad recurrente presentó el nuevo escrito de casación dentro del término que establece la ley y al analizarlo, ha podido constatar que los defectos que se le habían señalado fueron debidamente corregidos. Consecuentemente, el recurso cumple ahora con los requisitos necesarios para su admisibilidad.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A., dentro del proceso ordinario

que le sigue a FRITZ COMPANIES (PANAMA), INC.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MAYA CHANDRU NATHANI RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, DIEZ (10) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala de lo Civil, mediante resolución de 22 de marzo de 2000, ordenó la corrección del recurso de casación, en el fondo, propuesto por MAYA CHANDRU NATHANI, mediante apoderado judicial, contra la sentencia de 9 de noviembre de 1999, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante la cual CONFIRMA la sentencia N°. 39 de 31 de mayo de 1999, dictada por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Dentro del término establecido en el artículo 1166 del Código Judicial, el recurrente presentó el escrito respectivo ante la Secretaría de la Sala, tal como se aprecia de fojas 661 a 672, por lo que procede la Sala al examen pertinente, a fin de resolver en forma definitiva la admisibilidad.

Las causales alegadas en el fondo son: Infracción de las normas sustantivas de derecho, en el concepto de error de hecho en la existencia de la pruebas y la causal de Infracción de las normas sustantivas de derecho, en el concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba, y que han influído ambas en lo dispositivo de la resolución recurrida.

La SALA estima que el recurrente ha cumplido en el escrito de corrección con lo ordenado en ambas causales y, al haber subsanado, de manera general, los defectos señalados por la Corte, es procedente la admisión de las causales antes mencionadas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación propuesto por MAYA CHANDRU NATHANI, mediante apoderado judicial.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PHARMED GROUP PANAMA, S. A. Y PHAR MED SALES PANAMA, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR PHARMED GROUP PANAMA, S. A. CONTRA PHAR MED SALES PANAMA, S. A. Y QUALITY SUPPLY DE PANAMA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense MORGAN Y MORGAN, actuando en nombre y representación de PHARMED GROUP PANAMA DEVELOPMENT, S. A., y el licenciado ARISTIDES FIGUEROA, actuando en nombre y representación de PHARMED SALES (PANAMA),S. A., intepusieron sendos Recursos de Casación contra el auto de 30 de noviembre de 1999 dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario que le sigue PHARMED GROUP PANAMA DEVELOPMENT, S. A., a PHARMED SALES (PANAMA),S. A. y a QUALITY SUPPLY DE PANAMA, S. A. (fs.405-411 y 415-421).

Encontrándose el expediente en el despacho sustanciador pendiente de resolver su admisibilidad, los apoderados judiciales recurrentes presentaron sendos escritos de desistimiento ante la Secretaría de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, los cuales son del tenor siguiente:

"HONORABLES MAGISTRADOS DE LA SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Nosotros, MORGAN Y MORGAN, apoderados judiciales de los actores en las acciones arriba enunciadas, de generales que constan en autos, respetuosamente acudimos ante Ustedes a fin de expresarles que desistimos del Recurso de Casación que propusiéramos contra la resolución calendada 30 de noviembre de 1999, por medio de la cual no se accedió a reconsiderar un auto que revocó, a su vez, transacción realizada en el proceso.
(fdo.) MORGAN Y MORGAN
Aníbal Tejeira Araúz". (f. 447).

"HONORABLES MAGISTRADOS DE LA SALA PRIMERA DE LA CORTE SPREMA DE JUSTICIA:

Yo, ARISTIDES BOLIVAR FIGUEROA, apoderado judicial de PHARMED SALES-PANAMA,S. A., de generales que constan en el expediente, acudo de una manera respetuosa ante ustedes a fin de expresar que desisto del recurso de casación que propusiéramos contra la resolución del 30 de noviembre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Justicia en el proceso civil enunciado en el margen superior.
(Fdo) Aristides Bolivar Figueroa" (f. 449).

En virtud de lo expuesto y siendo que en este caso se cumplen los presupuestos contemplados en los artículos 1073, 1075, 1076 y siguientes del Código de Procedimiento Civil que regulan este medio excepcional de terminación del proceso, la Sala considera procedente los DESISTIMIENTOS presentados.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de los recursos de casación presentados por las partes recurrentes contra el auto de 30 de noviembre de 1999 dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario que le sigue PHARMED GROUP PANAMA DEVELOPMENT, S. A., y a PHARMED SALES (PANAMA), S. A. y a QUALITY SUPPLY DE PANAMA, S. A.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE. A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CHILE HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED RECURRE EN CASACIÓN EN LAS MEDIDAS CONSERVATORIAS O DE PROTECCIÓN EN GENERAL PRESENTADAS CONTRA LAITH TRADING AND CONTRACTING COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE DOS

MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En la medida cautelar de conservación y protección propuesta dentro del Proceso Ordinario seguido por CHILE HOLDINGS (CAYMAN) contra LAITH TRADING AND CONTRACTING COMPANY LIMITED, actualmente en estado de resolver recurso de casación, los apoderados de ambas partes han presentado solicitud de suspensión del proceso.

Como observamos en el presente proceso la firma forense ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN, en representación de la parte demandante, y SUCRE, ARIAS, CASTRO & REYES, como apoderados de la parte demandada, respectivamente, solicitaron por tercera vez la suspensión del proceso por el plazo de tres meses, contados a partir del 11 de abril de 2,000.

La Sala estima que es viable la suspensión del proceso solicitada en este caso, pues se ajusta a lo normado por el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra dice:

> "ARTICULO 486: Las partes podrán solicitar, de común acuerdo, cuantas veces y por el tiempo que tengan a bien, la suspensión del proceso, siempre que no exceda de tres meses, y sin perjuicio de los derechos de aquellas personas que conforme a las leyes, tengan y puedan tener interés en el proceso o a quien pueda perjudicar la suspensión de él, cuyo consentimiento se requerirá para la suspensión."

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACCEDE A LA SOLICITUD DE SUSPENSION DEL PROCESO instaurado por CHILE HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED contra LAITH TRADING AND CONTRACTING COMPANY LTD., por el término de tres meses contados a partir del 11 de abril de 2,000.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE. A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ANA JULIA DE VELARDE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD INTERNATIONAL MACHINERY AND EQUIPMENT TRADING CORPORATION. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución fechada 27 de marzo de dos mil (2000) esta Sala de la Corte ordenó la corrección del recurso de casación presentado por la firma de abogados ROSAS Y ROSAS en representación de ANA JULIA DE VELARDE, contra la Resolución de 7 de diciembre de 1999, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del Proceso Sumario propuesto por ANA JULIA DE VELARDE contra LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD INTERNATIONAL MACHINERY AND EQUIPMENT TRADING CORPORATION.

Seguidamente se procede a determinar si la corrección realizada por la parte demandada se ajustó a los señalamientos de la Corte y, en consecuencia, a los presupuestos legales.

Del examen del nuevo escrito de casación, que corre de fojas 337 a la 347, se infiere que su presentación se efectuó dentro del término legal y fue restructurado siguiendo las indicaciones que al respecto le hiciera la Corte a la recurrente.

Por tanto, resulta procedente acceder a la admisión de este extraordinario recurso ya que satisface las exigencias que al efecto determina el artículo 1165 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 1160 del mismo texto legal.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por ANA JULIA DE VELARDE contra la Resolución de 7 de diciembre de 1999, dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE. A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CARLOS GUARAGNA RIVERA RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE PEDAL INTERNATIONAL CORP. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado FERNANDO ALEMAN, apoderado judicial del señor CARLOS GUARAGNA RIVERA, interpuso recurso de casación contra la sentencia de 16 de diciembre de 1999, expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en el proceso ordinario de mayor cuantía que al recurrente le sigue PEDAL INTERNATIONAL CORP.

Del recurso se cumplió la fase de admisibilidad, quedando admitida, solamente, la primera causal. En la etapa de alegatos de fondos ambas partes presentaron sus escritos, por lo que vencido dicho término, debe la Sala resolverlo.

ANTECEDENTES

Mediante el presente proceso pretende la demandante, PEDAL INTERNATIONAL CORP., la restitución de la suma de dinero pagada al demandado, CARLOS GUARAGNA RIVERA, en concepto de honorarios y comisiones por haber servido de intermediario en el contrato que PEDAL INTERNATIONAL CORP., suscribió con la sociedad anónima G. T. ENTERPRISES.

La pretensión de la demandante se basa en el hecho de que, habiéndose dejado sin efecto el contrato de préstamo mercantil mencionado, corresponde al demandado devolver las suma de dinero que le fue entregada, de lo contrario se estaría enriqueciendo sin causa.

En primera instancia correspondió la sustanciación del negocio al Juzgado Segundo del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá el cual, mediante sentencia N° 47, de 20 de agosto de 1998, negó las pretensiones de la demandante.

La sentencia anterior fue apelada por la demandante, correspondiéndole resolverla al Primer Tribunal Superior de Justicia. En resolución de 16 de diciembre de 1999 decidió el ad-quem revocar la decisión de primera instancia y, en consecuencia, condenar al demandado al pago de la suma reclamada por la demandante, en concepto de enriquecimiento sin causa. Es esta la resolución que se impugna mediante el recurso que se examina.

RECURSO DE CASACION
Y
DECISION DE LA SALA

El recurso se presenta en el fondo y se invoca una sola causal, la "infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de violación directa de la ley sustantiva."

Los motivos que sustentan la causal son dos, los que se dejan transcrito para ilustración de la Sala:

> "PRIMER MOTIVO: El Tribunal de Primera instancia absolvió al demandado CARLOS GUARAGNA RIVERA de la pretensión de la demandante PEDAL INTERNATIONAL CORP. de que se le devolviera los dineros pagados a nuestro representado en concepto de comisión por la consecución de un préstamo en beneficio de la demandante, con la empresa G. T. ENTERPRISES, S. A., el cual fue dejado sin efecto por causa imputable a la demandante y fue, en consecuencia, condenada al pago de las costas y gastos del proceso. El Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial al resolver la alzada determinó que se debía revocar la sentencia de primera instancia en el sentido de que tenía razón la demandante en su pretensión ya que consideraba que como el contrato de préstamo entre la demandante y el tercero G. T. ENTERPRISES, S. A., se había resuelto por mutuo acuerdo, tal y como consta en autos, el demandado debía restituir lo pagado en comisión, ya que se enriquecería sin justificación al desaparecer la causa del mismo, incurriendo, desde nuestro punto de vista, en una infracción de la ley sustantiva, que incidió sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia de segunda instancia, desconociendo derechos sustantivos que amparaban al demandado para justificar los pagos hechos a su favor por parte de la demandante.
>
> SEGUNDO MOTIVO: El fallo del TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO, al revocar la sentencia de primera instancia, incurre en el desconociendo de la naturaleza jurídica del negocio jurídico celebrado entre las partes de este proceso, el cual es un contrato comercial de comisión, el cual es oneroso independientemente de la duración o no de la obligación principal de donde deriva el contrato de comisión, o del cumplimiento o no de la misma. El Juez a-quo, basándose en un buen criterio, resolvió que no le asistía razón a la demandante en su pretensión, desestimando la pretensión de la demandante, por lo que el Tribunal Superior no podía desconocer el hecho de que demandado se había enriquecido con causa justificada, declarando que no era así, violando una norma sustantiva de derecho, que a nuestro juicio, causaba la infracción de la ley sustantiva, que incidió sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia de segunda instancia." (fs. 183-184)

La violación directa de la Ley sustantiva que le atribuye el recurrente en los motivos al ad-quem, consiste en haber condenado al recurrente a la devolución del dinero que le fuera pagado por la demandante en concepto de comisión por sus servicios como intermediario en la relación contractual de la demandante con G. T. ENTERPRISES, desconociendo de esa forma que el contrato comercial de comisión es oneroso, independientemente del cumplimiento o no de la obligación principal. Según el casacionista, la circunstancia alegada se haya dispuesta en los artículos 582 y 654 del Código de Comercio, los que, al no habérseles aplicado

al caso en cuestión, fueron infringidas por omisión.

Por su parte, el fallo del Primer Tribunal Superior que se impugna, condenó al recurrente a pagarle a la demandante PEDAL INTERNATIONAL CORP., la cantidad de dinero que recibió de la demandante en concepto de honorarios o comisiones por sus servicios como intermediario en el contrato de préstamo celebrado entre la demandante y G. T. ENTERPRISES, S. A., fundándose en que el pago de dichos dineros dependían de la efectividad del contrato principal, conforme lo había acreditado en autos la demandante. Al respecto se transcribe parte medular de la resolución aludida:

> "Como corolario a lo expuesto tenemos que la parte recurrente ha demostrado en autos que las sumas de dinero recibidas por el demandado dependían de la efectividad o eficacia del contrato principal celebrado entre PEDAL INTERNATIONAL CORP. y G. T. ENTERPRISES, S. A., por lo que las sumas de dinero recibidas por el demandado en ese concepto, vienen a constituir un enriquecimiento sin causa, razón por la cual se hace imperante la revocatoria de la resolución incursada," (f. 172)

De lo que viene expuesto se advierte que la discusión en el presente caso recae sobre la viabilidad o procedencia de la restitución, por parte del recurrente, de los dineros pagados por la empresa demandante, en concepto de honorarios, al demandado recurrente por los servicios prestados como comisionista en la relación contractual de la demandante con G. T. ENTERPRISES, S. A.. Ahora, no obstante, que la representación judicial de la demandada en su escrito de oposición al recurso (f. 212-215), niega que la relación jurídica entablada por su poderdante con el demandado, a propósito del contrato celebrado con G. T. ENTERPRISES, S. A., revestía el carácter de un contrato de comisión, resulta conveniente, como cuestión previa, precisar la naturaleza de la relación jurídica de la demandante con el demandado, para entrar a considerar luego si resultan aplicables las normas que regulan la comisión, citadas como infringidas y, en consecuencia, si procede la devolución del dinero ordenada por el ad-quem en la resolución que se impugna.

Respecto al contrato existente entre demandante y demandado, de las afirmaciones de las partes se entiende que el mismo era de carácter verbal. De los elementos probatorios que obran en el expediente, se advierte que el mismo consistía en que el demandado, a cambio del pago de una suma de dinero por parte de la demandante, se obligaba a servir de intermediario entre la demandante y G. T. ENTERPRISES, S. A., para la celebración de un contrato de préstamo, según lo expresa la propia demandante en el escrito de demanda, hecho segundo, que seguidamente se transcribe:

> SEGUNDO: Por razón de la ejecución del préstamo mencionado en el hecho anterior el señor CARLOS GUARAGNA, cobró la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO BALBOAS CON 18/100 (B/.134,274.18) por razón de honorarios y comisiones que PEDAL INTERNATIONAL CORP. le reconoció por su labor de intermediación en el contrato mencionado en el hecho primero de esta demanda. (f. 2)

De igual manera, de la declaración testimonial rendida por la representante legal de la demandante, PEDAL INTERNATIONAL, S. A., MARITZA RAQUEL DE LA ESPRIELLA JOVANE, en la declaración de foja 61 a 62 se advierte que los dineros pagados al recurrente fue en concepto de comisión.

En cuanto al contrato de comisión, el cual aparece regulado en el Código de Comercio, Capítulo III del Título IX, Libro I, cabe precisar que el mismo ha sido definido en la doctrina jurídica como un mandato, pero de naturaleza mercantil. Al respecto lo expone el jurista español Joaquin Garriges, el cual, al comentar el contrato referido en su obra Derecho Mercantil, Tomo II, señala:

> "... la comisión es, realmente, un mandato mercantil en la que

concurren circunstancias que le hacen perder su naturaleza civil." (pág. 103)

El Código de Comercio, inclusive, al regular el contrato de comisión remite a las reglas del mandato, estableciendo que éstas serán de aplicación supletoria. De lo anterior se sigue, por analogía, que la comisión viene a constituir un contrato mediante el cual se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra (artículo 1400 Código Civil)."

Del concepto contenido en el artículo citado no se desprende que la obligación atribuida al comisionista deba concretarse en la celebración de actos jurídicos; se establece en forma amplia que deben prestarse servicios, inclusive de forma amplia, señala que se realice alguna cosa. De manera, que no tiene cabida lo alegado por la parte opositora al recurso de que, la relación contractual de la demandante con el demandado no podía catalogarse de comisión, puesto que el demandado únicamente se había limitado a poner en relación de negocios a la demandante con la sociedad anónima, G. T. ENTERPRISES, sin contratar en su propio nombre, puesto que como se dejó expuesto, basta con que se realice alguna cosa por encargo de otra.

Respecto a la viabilidad o procedencia de la devolución de lo pagado por la demandante al recurrente en concepto de honorarios por sus servicios como comisionista, el artículo 582 del Código de Comercio citado como infringido por el recurrente, le concede el derecho al mandatario a cobrar una remuneración por su trabajo y dicho derecho no puede sujetarse a la suerte o eficacia del encargo, salvo pacto en contrario, conforme lo dispone el artículo 654, de esa misma ley, que libera al comisionista de responder del cumplimiento de las obligaciones contraídas por la persona con quien contrató."

No comparte, por tanto la Sala, la conclusión del ad-quem, cuando manifiesta en la sentencia impugnada, cuya parte medular se dejó transcrita arriba, que en autos aparece probado por la demandante que el cobro hecho por el demandado en concepto de comisión, dependía de la efectividad del contrato principal, es decir, el celebrado entre la demandante y G. T. ENTERPRISES, S. A., por lo que habiéndose finiquitado el mismo, debía devolver el demandado la suma cobrada en concepto de honorarios. El ad-quem no especifica cuales son la pruebas que acreditan la circunstancia señalada y esta Superioridad de las pruebas que obran en el expediente, no advierte que se establezca, fehacientemente, el supuesto acuerdo entre las partes en el sentido de que, el cobro del dinero reclamado dependiera de la efectividad del contrato principal.

Como consecuencia de lo anterior, valga destacar, la tesis del enriquecimiento sin causa ensayada por el demandante y acogida por el Tribunal ad-quem no tiene cabida en este proceso, porque contrario a lo sostenido en la sentencia recurrida, en el presente caso el enriquecimiento del recurrente tiene su causa en el contrato de comisión. Cabe decir, por tanto, que en el presente caso la causal legitimadora del acrecentamiento patrimonial experimentado por el recurrente lo constituye el contrato el cual, de acuerdo a la doctrina constituye título justificativo de desplazamiento patrimonial:

"Examinando la doctrina y la jurisprudencia de los países que mas han elaborado sobre la institución -Francia, Italia, España, etc. se puede concluir que por causa ha de entenderse:

Fundamento, título justificativo, la base de los desplazamientos patrimoniales. No es la causa de las obligaciones, sino la causa legitimadora, la base reconocida por el ordenamiento jurídico que permite la mutuación patrimonial sobrevenida, sea porque ella obedece al resultado deseado por la ley por razones, de política legislativa, sea porque proviene de la voluntad de las partes que la propia ley reconoce como fuente de derechos. Es la que nos interesa.

En la vida diaria ocurren numerosas transmisiones de valor,

> numerosos acrecentamientos de un patrimonio o expensas de otro, producidos por hechos de la naturaleza o del hombre. En ciertos casos, el derecho permite ese desplazamiento, lo deja subsistir; en otros, en cambio exige la restitución. Ello obedece a que en los primeros casos existe una base, esto es, una causa un antecedente legitimador, un título, que permite que el desplazamiento producido subsista; en otros casos, carentes de causas, el derecho ordena la restitución. Con arreglo a este criterio no se puede hablar de enriquecimiento sin causa en presencia de un beneficio derivado de un contrato -aunque sea desventajoso para uno de los contratantes; de una norma legal o una decisión jurisdiccional (o arbitral) o de un acto o negociojurídico. (Jurisprudencia francesa. Cas. Civ., febrero 21, 1944; marzo 17, 1904. Véase Bonet; 121)."
>
> (Anuario de Derecho, año XX, N° 22, 1995, pág 39-40).

En virtud de lo expuesto, se aprecia claramente que el Primer Tribunal Superior de Justicia al expedir el fallo censurado incurrió en la infracción de los artículos 582 y 654 del Código de Comercio, en los términos que se han dejado expuestos, por lo que debe la Sala casar la sentencia recurrida.

Por todo lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 16 de diciembre de 1999 expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en el proceso ordinario que al recurrente le sigue PEDAL INTERNATIONAL CORP.; y actuando en calidad de Tribunal de instancia, REVOCA la sentencia recurrida y en su lugar, CONFIRMA la sentencia N° 47, expedida en primera instancia por el Juzgado Segundo del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, el 20 de agosto de 1998.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RODOLFO ALEJANDRO TROETSCH ESPINO RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A PETROLERA DEL CARIBE, S. A. Y FRANCISCO SAMUDIO T. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CATORCE (14) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución fechada 29 de marzo de 2000, esta corporación de justicia ordenó la corrección del recurso de casación en el fondo interpuesto por la apoderada judicial del señor RODOLFO ALEJANDRO TROETSCH ESPINO, contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 14 de septiembre de 1999, dentro del proceso sumario que le sigue el recurrente a PETROLERA DEL CARIBE, S. A. y FRANCISCO SAMUDIO T.

En vista de que se ha presentado el nuevo escrito dentro del término que se le había concedido al recurrente con ese propósito, procede la Sala a decidir en forma definitiva sobre la admisibilidad del recurso.

En la resolución anterior se le señaló al recurrente que en cuanto a la primera causal, en el apartado correspondiente a las disposiciones legales infringidas se debía incluir la norma que establece la existencia de la prueba documental atacada y, también, la o las normas sustantivas que se consideraban violadas con los errores probatorios que se le imputan a la sentencia atacada.

No obstante, si bien se ha podido constatar que se cumplió con la primera parte de lo que se le había indicado, no ocurrió lo mismo con las disposiciones sustantivas que, una vez más, no fueron citadas.

Consecuentemente, la primera causal no puede ser admitida porque cuando se invoca una de las causales probatorias, es imprescindible que se mencionen las normas sustantivas que consagran los derechos y obligaciones en litigio, como lo ha señalado reiteradamente la Corte; requisito con el cual no se cumplió en esta oportunidad.

En cuanto a la segunda causal se observa que el recurrente corrigió satisfactoriamente los defectos formales que se le habían indicado, de manera que reúne ahora los requisitos que exige la ley para su admisibilidad.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la primera causal y ADMITE la segunda causal del recurso de casación interpuesto por el señor RODOLFO ALEJANDRO TROETSCH ESPINO, dentro del proceso sumario que le sigue a PETROLERA DEL CARIBE, S. A. y FRANCISCO SAMUDIO T.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RHONE DEVELOPMENT, S. A. RECURRE EN CASACION EN LA MEDIDA CONSERVATORIA O DE PROTECCION QUE LE SIGUE A BUENOS AIRES HOTEL CORPORATION Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CATORCE (14) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro de la solicitud de medida conservatoria o de protección interpuesta por RHONE DEVELOPMENT, S. A. contra BUENOS AIRES HOTEL CORPORATION y OTROS, la apoderada judicial de la parte actora presentó recurso de casación contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 7 de octubre de 1997.

Encontrándose dicho recurso pendiente de decisión en el fondo, los apoderados judiciales de ambas partes presentaron solicitud de suspensión del proceso por tres meses, la cual fue decretada mediante resolución de 19 de octubre de 1999. Vencido dicho plazo, las partes pidieron la suspensión del proceso por tres meses más; término que fue igualmente concedido mediante resolución fechada 17 de enero de 2000.

El 7 de abril de 2000, los apoderados judiciales de ambas partes presentaron escrito ante la Secretaría de la Sala Civil de la Corte Suprema, solicitando por tercera vez la suspensión del proceso, por un período de tres meses más, contados a partir del 11 de abril de 2000.

En relación con este punto, el artículo 486 del Código Judicial contempla la posibilidad de que las partes soliciten, de común acuerdo, cuantas veces y por el tiempo que tengan a bien, la suspensión del proceso, siempre que no exceda de tres meses.

En vista de que en el presente caso se ha cumplido con lo dispuesto en la citada disposición legal, se debe acceder a lo pedido.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA SUSPENSION del presente negocio por el término de tres (3) meses, contados a partir del día once (11) de abril de 2000.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

WICO COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A., RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, CATORCE (14) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra la resolución expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 9 de noviembre de 1999, en el proceso ordinario de mayor cuantía que a REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, S. A., le sigue WICO, COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A., interpuso el apoderado legal de la demandada recurso de casación.

Del recurso se cumplió la etapa de admisibilidad y por haberse admitido el mismo, pasa la Sala a resolverlo, previo a lo cual considera oportuno la Sala dejar establecidas los antecedentes fácticos que enmarcan el recurso formulado.

ANTECEDENTES

Consta en autos que, REPUESTO Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, S. A., por intermedio de su apoderado legal interpuso demanda ordinaria de mayor cuantía con secuestro contra WICO, COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A., por el supuesto incumplimiento en el pago de la póliza de seguros suscrita por ambas partes, más los daños y perjuicios ocasionados por la aseguradora a la demandante.

La demandante alega haber contratado una póliza de seguro con WESTERN INSURANCE COMPANY, INC., desde el 4 de abril de 1991, la cual cubría, entre otros riesgos, el Incendio sobre los bienes propios del negocio, de su propiedad o de terceros y sobre mobiliarios, equipos, instalaciones y mejoras propias del negocio asegurado. Que, el 1 de enero de 1995 tras haberse producido el riesgo cubierto, es decir, un incendio dentro del negocio asegurado que produjo la pérdida total del mismo, la demandante gestiona el cobro de la suma asegurada, negándose la Compañía de seguros demandada al pago de lo debido.

Por su parte la Compañía de seguro, responde los descargos hechos por la demandante, negando la obligación reclamada y excepciona la prescripción de la acción, en virtud de que, de acuerdo al apoderado legal de la demandada, la demandante no formuló la acción legal contra su poderdante dentro del término legal fijado en la ley de Comercio, que es la aplicable al caso, para el ejercicio de la misma.

Correspondió al Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, en primera instancia, sustanciar el proceso descrito, por lo que, una vez vencidas las etapas procesales inherentes a este tipo de proceso, profirió el a-quo la decisión de mérito, en Sentencia N° 86, de 3 de diciembre de 1998, en la cual se niega la excepción de prescripción de la acción a legada por los apoderados judiciales de WICO, COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. y, se le condena al pago, a favor de la demandante, de la indemnización por la destrucción o daño material a los bienes asegurados por la compañía demandada, por el incendio referido.

El apoderado judicial de la sociedad demandada formuló recurso de apelación contra la resolución arriba indicada, el cual le fue concedido. Mediante resolución de 9 de noviembre de 1999 decidió el Primer Tribunal Superior de Justicia la apelación presentada, confirmando en todas sus partes la sentencia de primera instancia. Contra dicha resolución anunció y formuló en tiempo la parte afectada, el recurso de casación que se examina.

RECURSO DE CASACION
Y
DECISION DE LA SALA

El recurso de casación se propone en el fondo y se invocan dos causales, siendo la primera de ellas, la "infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de interpretación errónea de la norma de derecho, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida."

Los motivos que sirven de sustento a la causal enunciada, son tres y los mismos se dejan transcritos para ilustración de la Sala:

> "PRIMERO: El Tribunal Superior, en la dictación de la sentencia impugnada, incurrió en error jurídico y este consistió en que le atribuyó a la norma que aplicó y que se refiere a la afectación que la Ley le impone a la indemnización por razón de la ocurrencia del siniestro a favor de terceros por los daños y perjuicios de que sea responsable el asegurado, un sentido y alcance que no tiene, en cuanto interpretó que el término de la prescripción de la reclamación del asegurado, se inicia con el Auto de Sobreseimiento que se había dictado, cuando la correcta interpretación no es esa en cuanto que el recto sentido y alcance de esa norma, es la de que el impedimento legal de pagar al asegurado, sólo tiene lugar dentro el plazo de 30 días hábiles y siempre que, dentro de ese plazo, no hubiese apertura de causa o reclamación por daños y perjuicios, puesto que transcurrido el plazo, el impedimento desaparece y la obligación de indemnizar al asegurado se hace exigible.
>
> SEGUNDO: El error de juicio en que incurrió el tribunal Superior, al interpretar la norma de derecho que aplicó, se produjo porque en esa labor interpretativa dejó de aplicar la norma sobre interpretación de la Ley, o regla interpretativa que exige que las palabras de la ley se entiendan en su sentido natural y obvio o por su significado legal cuando el legislador las haya definido expresamente, como es el caso de la apertura de causa y reclamación por daños y perjuicios, así como la de plazo legal.
>
> TERCERO: El error jurídico en que incurrió el Tribunal Superior, fue de influencia sustancial en la decisión, porque por ese error de interpretación de la norma de derecho, llegó a la conclusión equivocada de que el término de la prescripción se iniciaba con el Auto de Sobreseimiento dictado, cuando ello no es así, porque, según la norma ese término se inicio después de cumplido los treinta días hábiles, ya que durante ese plazo no hubo apertura de causa como lo entiende la ley, ni reclamación por los daños y perjuicios que hubiesen afectado a terceros."
> (fs. 645-646)

De los motivos transcrito se desprende que la interpretación errónea en la que supuestamente incurrió el ad-quem, recae sobre el artículo 1030 del Código de Comercio y consiste en haber interpretado el ad-quem que el término de la prescripción de la reclamación del asegurado, por razón del seguro, debe computarse a partir de la ejecutoria del Auto de sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado Tercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, cuando de acuerdo a la recurrente, dicho término debe empezar a contarse a partir de los treinta (30) días hábiles de ocurrido el siniestro, puesto que

asegura que durante ese plazo no hubo apertura de causa como lo entiende la ley ni reclamación por daños y perjuicios que hubiesen afectados a terceros.

Al darse la supuesta interpretación errónea que le atribuye el recurrente al juzgador ad-quem, asegura, se incurrió en la infracción de los artículos 1030 y 10 del Código de Comercio y Civil, respectivamente.

En cuanto al artículo 1030 citado, el cual se dice mal interpretado por el ad-quem, particularmente en cuanto al párrafo segundo, el mismo establece el momento a partir del cual las obligaciones surgidas de seguros, como consecuencias de incendios, se hacen exigibles. El tenor de la norma es el que se deja transcrito:

> "Artículo 1030. Salvo el privilegio hipotecario y cualquiera otro especial a que esté sujeta la finca asegurada, la cantidad que el asegurado deba recibir en virtud del seguro en caso de siniestro, se considerará afecta al pago de los daños y perjuicios de que resulte civilmente responsable el asegurado para con terceros con motivo del incendio o de las medidas pertinentes que se tomen por la autoridad para extinguirlo o detenerlo.
>
> El asegurador no podrá pagar al asegurado suma alguna por razón del seguro sino cuando, por resolución firme de autoridad judicial, se hubiere declarado no haber lugar a responsabilidad civil o penal contra este por razón del incendio, o cuando transcurridos treinta días hábiles de la fecha del siniestro no se hubiere abierto causa o no hubiere habido reclamación por daños y perjuicios." (resalta la Corte)

El ad-quem, al aplicar la disposición citada al presente caso determinó, contrario a lo alegado por la parte recurrente que, el momento a partir del cual la obligación de la asegurada, se hizo exigible desde la ejecutoria de la resolución que decreta el sobreseimiento provisional de la asegurada, expedido el 8 de julio de 1999, por el Juzgado Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá. De manera que de conformidad con el numeral 5° del artículo 1651, la demandante en el presente proceso tenía un año, contado a partir del momento que se ha indicado, para presentar la acción contra la aseguradora, lo que deja expuesto el ad-quem en el extracto de la resolución impugnada, que se transcribe:

> "De lo anterior, señalamos que la correcta interpretación de la norma es que el asegurado tiene un año para presentar su acción a partir de ejecutoriado el Auto N° 58 de 8 de julio de 1996 proferido por el Juzgado Tercero de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, donde se resuelve dictar un sobreseimiento provisional de carácter objetivo e impersonal, lo que debemos convenir que al momento de presentarse la reclamación, la acción no estaba prescrita; habida cuenta que ambos sucesos procesales (demanda y su respectiva notificación, ver art. 658 del Código Judicial) se produjeron con posterioridad al término dictado por el artículo 1651 numeral 5 del Código de Comercio, ya que la demanda fue presentada el día 16 de enero de 1997 y notificada al demandado el día 20 de marzo de 1997." (fs 632-633)

En relación con la argumentaciones de la parte recurrente, cabe precisar, en primera instancia, que el término de prescripción de las acciones surgidas de contrato de seguro es de un año, conforme lo dispone el artículo 1651, numeral 5° del Código de Comercio, el cual, de acuerdo a lo pautado por el artículo 1650 de la misma Ley, se empezará a contar desde del momento en que éstas se hagan exigible y, de acuerdo al artículo 1030 objeto de examen, la exigibilidad de acciones surgidas de contrato de seguro por razón de incendio, como en el presente caso, se da desde el instante en que se declare en resolución judicial no haber lugar a responsabilidad civil o penal o, después de haber transcurrido

treinta días hábiles desde la fecha del siniestro, si dentro de dicho término no se hubiere dado el encausamiento o reclamación por daños y perjuicios contra el asegurado.

Interpreta la Sala, en consecuencia, que el artículo 1030 del Código de Comercio en su segundo párrafo, recoge dos hipótesis para la exigibilidad de la obligaciones nacidas de contratos de seguros, por razón de incendios:

1. Que mediante resolución judicial firme se absuelva al afectado de la responsabilidad civil o penal por razón del incendio

2. Cuando hubieren transcurridos treinta días hábiles desde la fecha del siniestro, sin que se hubiere dictado auto de llamamiento a juicio o reclamación por daños y perjuicios contra el asegurado.

Advierte la Sala que en el presente caso, tiene aplicación el primero de los supuesto, en virtud de haberse decretado mediante Auto N° 58 de 8 de julio de 1996, expedido por el Juzgado Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, sobreseimiento provisionalmente de las sumarias en averiguación, por el supuesto delito "Contra la Seguridad Colectiva", en perjuicio de REPISA, S. A. (foja 485-488), lo que libera de responsabilidad penal al asegurado. Bajo tal circunstancia, la obligación que se reclama en el presente proceso se hizo exigible desde el momento en que quedó en firme la resolución antes indicada y no a partir de los treinta días hábiles que contempla el segundo supuesto de la norma en comento.

Tal como lo deja establecido el Primer Tribunal Superior en la resolución que se impugna, desde el momento en que quedó en firme el Auto de sobreseimiento, esto es 11 de julio de 1996, contaba el demandante con un año para interponer las acciones legales pertinentes contra la Compañía aseguradora, siendo presentada la demanda correspondiente en término, por haberse interpuesto el 16 de enero de 1997 y notificada al demandado, el 20 de marzo de 1997.

En razón de lo anterior, considera la Sala que la objeción de ilegalidad que le hace la parte recurrente a la sentencia de segundo grado no procede y en consecuencia debe desestimarse la causal invocada.

La segunda causal de fondo que se invoca es la "infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de violación directa de la norma de derecho", la cual se fundamenta en seis motivos cuyos textos se dejan expuestos:

> "Primero: La sentencia impugnada incurrió en error de juicio al interpretar las cláusulas del contrato y el error consistió en que no las interpretó las unas por las otras, dándoles el sentido que resultara del conjunto de todas.
>
> Segundo: El error de juicio en que incurrió el Tribunal Superior fue de influencia sustancial en lo dispositivo de la resolución recurrida porque, por ese error dejó de considerar que del conjunto de las cláusulas resulta que tanto el procedimiento en caso de siniestro, el momento en que se debe indemnizar, así como las condiciones que deben cumplirse, están sujetas a plazos que, por cumplidos, hacen exigible la obligación. Hubiese bastado que el Tribunal entendiera así las cláusulas del contrato para que su conclusión fuera distinta sobre la prescripción alegada por la demandada.
>
> Tercero: El Tribunal Superior en la sentencia que dictó incurrió en error jurídico y este error lo condujo a la infracción de la norma sustantiva según la cual el término para la prescripción de las acciones corre desde el día en que la obligación se hizo exigible.
>
> Cuarto: Ese error de juicio influyó sustancialmente en lo

dispositivo de la resolución recurrida por que por el, dejó de reconocer que la obligación de indemnizar a cargo de la aseguradora demandada, se hizo exigible desde que vencieron los plazos tanto legal como convencional y que por tanto desde ese vencimiento, empezó a correr el término para la prescripción. Lo adecuado era que el Tribunal Superior hubiera reconocido, conforme la norma, la exigibilidad de la obligación y el inicio del computo para la prescripción, para que la conclusión fuera otra, reconociendo el derecho que tiene nuestra patrocinada a la prescripción como fue alegada.

Quinto: De igual forma, en la sentencia impugnada se incurrió en error de juicio que consistió en que dejó de reconocer que el fenómeno extintivo de la prescripción había operado en el presente caso, a pesar de que conforme a la norma sustantiva que aplicó, la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro prescriben en un (1) año.

Sexto: El error de juicio en que incurrió el Tribunal Superior influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, porque, por ese error, dejó de reconocer que la prescripción había operado. Lo legal era que en la sentencia se hubiera reconocido que la prescripción estaba cumplida para que la decisión fuera otra y que reconociera el derecho de nuestra representada."
(f. 649-650)

El vicio de ilegalidad que se le imputa al ad-quem, hace relación a las cláusulas del contrato, las cuales señala la casacionista , fueron interpretadas de manera incorrecta, en la medida que el juzgador de la alzada no estimó que el procedimiento en caso de siniestro, el momento en que se debe indemnizar, así como las condiciones que deben cumplirse, están sujetos a plazos que, cumplidos, hacen la obligación exigible.

Al no interpretar el Primer Tribunal Superior las cláusulas de la manera que señala el casacionista, asegura, incurrió en la infracción de las normas contenidas en los artículos 1136 del Código Civil, 1650 y 1651 numeral 5° del Código de Comercio.

El artículo 1136 del Código Civil que establece que "las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas", según el casacionista no fue aplicado por el ad-quem, al atender únicamente a lo que dispone la cláusula 4°, literal d, para sostener que la obligación se hacía exigible desde la ejecución del Auto de sobreseimiento provisional. Según la recurrente, de las cláusulas 5° y 7° se advierte que tanto el procedimiento para el caso de siniestro como el plazo de indemnización estaban sujetos a plazos, los que cumplidos, hacen exigible la obligación.

La cláusula 5° de la Póliza de seguro, referente al procedimiento en caso de siniestro, (foja 60, reverso) establece que dentro de los treinta días calendarios subsiguientes a la fecha del siniestro, el asegurado deberá presentar a la Compañía de Seguros los documentos indicados en la misma. Por otro lado, la cláusula 7°, relativa al plazo para indemnizar, establece que "una vez que la Compañía y el asegurado hayan acordado por escrito la indemnización que corresponda al asegurado, y siempre que no exista ninguna acción judicial o investigación oficial en relación al siniestro ocurrido o a la responsabilidad civil o penal del asegurado, la Compañía deberá, dentro de los siguientes treinta (30) días calendarios, proceder a indemnizar al Asegurado según los términos de la Póliza".

Para la Sala, lo dispuesto en las cláusulas descritas en nada contradicen lo resuelto por el ad-quem, a la luz de las normas mercantiles aplicadas al caso

que se resuelve, sino que por el contrario, de dicha cláusula séptima, se advierte claramente que sólo en el evento de que no existiera acción judicial o investigación oficial en relación al siniestro, la obligación debía hacerse efectiva dentro de los treinta días calendarios siguientes al siniestro. Contrario sensu, habiéndose decretado que no había lugar a responsabilidad penal por razón del incendio, mediante el Auto de sobreseimiento decretado en la vía penal, la obligación reclamada se haría efectiva a partir de que dicho Auto quedara en firme, conforme lo previsto en el artículo 1030 del Código de Comercio, como ya ha dejado

No resultan infringidas, tampoco, las normas contenidas en los artículos 1650 y 1651, numeral 5° del Código de Comercio, previamente analizadas. Dichas disposiciones se refieren a la prescripción de las acciones de seguro y el computo de la misma, a partir de la exigibilidad de la obligación. Como se dejó expuesto, en el presente caso la exigibilidad de la acción reclamada, al tenor de lo pautado en el artículo 1030 tantas veces referido, se produce desde la ejecutoría de la resolución de sobreseimiento, por haberse abierto causa.

En razón de lo expuesto, estima la Sala que no se produce el violación directa de la Ley denunciada por la parte recurrente en esta segunda causal, por lo que debe también desestimársele y en consecuencia no casar la sentencia impugnada.

Por todo lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO CASA la sentencia de 9 de noviembre de 1999, recurrida en casación por el Licenciado PEDRO A. VASQUEZ ARROCHA, en representación de WICO COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A., en el proceso ordinario que a la recurrente le sigue REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, S. A..

Las costas obligatorias a cargo de la parte recurrente se fija en TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.350.00).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LION INTERNATIONAL BANK & TRUST LTD. RECURRE EN CASACION EN LA MEDIDA DE PROTECCION Y CONSERVACION EN GENERAL QUE LE SIGUE A BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA (BANAICO) EN LIQUIDACION. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Rubio, Alvarez, Solís & Abrego, en su condición de apoderada judicial de LION INTERNATIONAL BANK & TRUST LTD, ha interpuesto recurso de casación contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 9 de noviembre de 1999, que decidió en segunda instancia la medida de protección y conservación en general presentada por la parte recurrente contra BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA (BANAICO), S. A.

En vista de que el recurso se encuentra en etapa de admisibilidad, la Sala procede a determinar si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

Al respecto, se ha podido constatar que el recurso fue anunciado y

presentado en tiempo oportuno, por persona hábil; y que la resolución que se impugna es recurrible en casación, tanto por su naturaleza como por la cuantía del proceso.

En cuanto al escrito de formalización se observa que se trata de casación en el fondo en la que se invoca como causal única, la infracción de normas sustantivas de derecho por indebida aplicación, la cual se encuentra consagrada en el artículo 1154 del Código Judicial.

Al revisar los motivos que le sirven de fundamento, se advierte que el recurrente se limita a señalar que la resolución impugnada aplicó "... normas de derecho positivo contenidas en el Decreto Ley No. 238 de 2 de julio de 1970 ...", "... el cual prohíbe que los bienes de una institución en estado de intervención sus bienes sean o puedan ser objeto de medidas cautelares de secuestro embargo".

Los motivos así redactados no explican en qué consiste la situación de hecho que se pretende plantear; es decir, no indican cuáles son los defectos que se le imputan a la resolución atacada que en el presente caso se refieren a la indebida aplicación de la ley.

Por otra parte, si bien las disposiciones legales que se estiman infringidas son congruentes con la causal, en el concepto de la infracción de dichas normas el recurrente expone una serie de hechos; los cuales, como se señaló anteriormente, corresponden a los motivos y si se quieren hacer valer como cargos contra la decisión atacada, deben incluirse en dicho apartado y no donde aparecen. Consecuentemente, el recurrente debe corregir el recurso en atención a lo que se le ha señalado.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCION del recurso de casación en el fondo presentado por la apoderada judicial de LION INTERNATIONAL BANK & TRUST LTD., para lo cual se concede el término de cinco (5) días que establece el artículo 1166 del Código Judicial.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

EL LICENCIADO LEOVIGILDO ATENCIO DIAZ INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCION DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 1999 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTIA INCOADO POR ESTELA HERRERA BARRIA CONTRA AGROINDUSTRIAL LOPEZ ORTEGA, S. A. Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado LEOVIGILDO ATENCIO DIAZ, apoderado de la sociedad AGROINDUSTRIAL LOPEZ ORTEGA, S. A., ha interpuesto recurso de hecho contra la resolución proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 25 de noviembre de 1999, dentro del proceso ejecutivo instaurado por la señora ESTELA HERRERA BARRIA contra la empresa recurrente y los señores CAMILO LOPEZ CIGARRISTA y RAQUEL ORTEGA DE LOPEZ.

En la resolución que se recurre de hecho, el Tribunal Superior resolvió no admitir el recurso de casación anunciado por el apoderado judicial de AGROINDUSTRIAL LOPEZ ORTEGA, S. A. contra la resolución proferida por ese mismo Tribunal el 28 de octubre de 1999; la cual, a su vez, decidió en segunda instancia un incidente de nulidad de todo lo actuado dentro del citado proceso ejecutivo.

Al revisar las constancias procesales, la Sala ha podido constatar que el recurso de hecho cumple con los requisitos formales establecidos por el artículo 1141 del Código Judicial, por lo que debe decidir ahora el fondo del mismo; es decir, determinar si la resolución contra la cual se anunció el recurso de casación es susceptible de ser impugnada mediante ese recurso.

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial consideró que no debía conceder el término para la formalización del recurso anunciado contra la resolución dictada por ese mismo Tribunal el 28 de octubre de 1999, porque "... si bien es cierto el Proceso implica el ejercicio de pretensiones de una parte frente a otra; el mismo no califica, ni por la cuantía ni por la naturaleza, dentro de los parámetros estipulados en los artículos 1148 y 1149 del Código Judicial, para que pueda ser de modo alguno admitida en casación". (F. 9)

Por el contrario, la parte recurrente sostiene que el auto que se pretende recurrir en casación cumple con el requisito de la cuantía, puesto que el proceso ejecutivo dentro del cual ha sido dictado tiene una cuantía de sesenta y dos mil cuatrocientos balboas (B/ 62,400.00) como consta en el libelo de demanda consultable a foja 4 del expediente principal.

Además, afirma que la resolución dictada el 28 de octubre de 1999 también es recurrible por su naturaleza, puesto que "... al resolver cuestiones referentes a exclusiones de bienes en procedimiento cautelar (tercería) y además una causal de nulidad insubsanable, como es la falta de notificación como ordena la ley a todos los demandados, es indubitablemente una resolución, susceptible de ser recurrido (sic) en casación ...". (F. 3)

En primer lugar, la Sala observa que le asiste razón al recurrente cuando sostiene que el presente negocio cumple con el requisito de la cuantía que establece el ordinal 2 del artículo 1148 del Código Judicial, puesto que la misma es superior a los diez mil balboas. En segundo lugar, el análisis del contenido de la resolución que se pretende recurrir en casación revela que la misma resolvió un incidente de nulidad, confirmando la decisión del juzgador de primera instancia de no declarar nulo el presente proceso ejecutivo. No obstante, cabe aclarar que el citado auto no decidió ninguna tercería excluyente como alega en su escrito el recurrente de hecho.

Al revisar los nueve ordinales que constituyen el artículo 1149 del Código Judicial, en los que se enumeran taxativamente las resoluciones de segunda instancia contra las cuales tiene lugar el recurso de casación, esta corporación de justicia advierte que el auto dictado por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 28 de octubre de 1999, no es un auto que le pone término al proceso o que extingue o entraña la extinción de la pretensión o imposibilita la continuación del proceso. Tampoco corresponde a ninguno de los otros supuestos que consagra la citada disposición legal, razón por la cual la Sala concluye que una resolución que niega un incidente de nulidad como la que nos ocupa, no es, por su naturaleza, un auto susceptible de impugnación a través del recurso de casación.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de hecho interpuesto por el Licenciado LEOVIGILDO ATENCIO DIAZ, en representación de AGROINDUSTRIAL LOPEZ ORTEGA, S. A., contra la resolución proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 25 de noviembre de 1999, dentro del proceso ejecutivo instaurado por la señora ESTELA HERRERA BARRIA contra la recurrente y los señores CAMILO LOPEZ CIGARRISTA y RAQUEL ORTEGA DE

LOPEZ.

Las costas del recurso se fijan en setenta y cinco balboas (B/ 75.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EL LICENCIADO JULIO ERNESTO ESPINAL RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 11 DE FEBRERO DE 2000 DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR ADELINA CÁRDENAS Y ANTONIA CÁRDENAS CONTRA VÍCTOR CÁRDENAS ESPINO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado JULIO ERNESTO ESPINAL, actuando en nombre y representación de MARÍA DE JESÚS VIUDA DE CÁRDENAS, ha interpuesto recurso de hecho contra la resolución expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 11 de febrero del 2000, la cual confirma el Auto N° 2137 de 9 de septiembre de 1999, dictado por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, donde se niega el término para la formalización del recurso de casación de la parte demandada, dentro del proceso ordinario que ADELINA CÁRDENAS y ANTONIA CÁRDENAS le siguen a VÍCTOR CÁRDENAS ESPINO.

El recurrente expresa que la Resolución recurrida es la de 11 de febrero del 2000, por medio de la cual el Primer Tribunal Superior dictaminó que:

> "...
> CONFIRMA el auto 2137 proferido el día 9 de septiembre de 1999, por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá".

Posteriormente, en el libelo del presente recurso de hecho, se fundamentó en los siguientes hechos:

> "PRIMERO: Mediante Auto 2137 de 9 de septiembre de 1999, el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá profirió decisión en la cual se niega la caducidad de la instancia.
>
> SEGUNDO: En contra de dicha resolución y en término oportuno se interpuso recurso de apelación ante el Primer Tribunal del Primer Circuito Judicial de Panamá, el cual fuera decidido mediante resolución del 11 de febrero del 2000 se confirmó la resolución recurrida declarando que no accedían a la caducidad de la instancia, pero por otros motivos distintos a los alegados por la demandante y la demanda, resolvieron según ya se dijo.
>
> TERCERO: Dentro del término de ejecutoria, previa la notificación al apoderado de la demanda, que se hizo el 20 de febrero del 2000, se anunció recurso de casación en memorial del 22 de febrero del 2000 a fojas 89 del cuaderno principal del proceso, conforme lo establece el artículo 1158 del Código Judicial.
>
> CUARTO: En resolución del 19 de marzo del 2000 proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Circuito Judicial, se negó el

término contemplado por el artículo 1159 teniendo como fundamento que no se reunía el requisito de cuantía mínima contemplando por el ordinal 2 del artículo 1148 del Código Judicial, según quedó reformado por el artículo 7 de la ley 31 del 28 de mayo de 1998. ..."

Resulta evidente que el recurrente se equivocó al designar la resolución objeto del presente recurso de hecho, pues lo interpuso contra aquella mediante la cual el Tribunal Superior confirmó el auto 2137 proferido el día 9 de septiembre de 1999, por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, donde se NIEGA la solicitud presentada por la firma MORENO Y FÁBREGA en el sentido de que se decrete Caducidad de la Instancia en el Proceso Ordinario interpuesto por ADELINA CÁRDENAS ESPINO Y ANTONIA CÁRDENAS ESPINO contra VÍCTOR CÁRDENAS ESPINO, cuando debió interponer el recurso contra la resolución de 9 de marzo del 2000 proferida por el Primer Tribunal Superior, mediante la cual se "NIEGA el término para la formalización del recurso de casación promovido por al apoderado judicial de la parte demandada ...", cuya copia consta a fojas 12 y 13.

En ese sentido el artículo 1163 del Código Judicial claramente preceptúa que la parte interesada puede recurrir de hecho "a la Corte Suprema", contra la resolución que niegue la concesión del recurso de casación o que niegue el término para su formalización.

En fallos de la Corte Suprema de Justicia de fechas 4 de agosto de 1999 y 2 de diciembre de 1999, la Sala no admitió recurso de hecho en similares circunstancias, indicando que el Auto impugnado, no correspondía a ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 1163, ya que no guardaba relación con la concesión del recurso de casación.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de hecho propuesto por el Licenciado JULIO ERNESTO ESPINAL, en representación de MARÍA DE JESÚS VIUDA DE CÁRDENAS contra la resolución de 11 de febrero de 2000, expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario propuesto por ADELINA CÁRDENAS y ANTONIA CÁRDENAS contra VÍCTOR CÁRDENAS ESPINO.

Las obligantes costas se fijan en la suma de CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.50.00)

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

ABRIL DE 2000

AUTO APELADO

AUTO APELADO EN EL PROCESO QUE SE LE SIGUE A MANUEL ANTONIO BATISTA POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL COMETIDO EN PERJUICIO DE ERISON CAICEDO VIVEROS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación, ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el auto de 27 de octubre de 1999, proferido por el Segundo Tribunal Superior, mediante el cual se sobresee provisionalmente a MANUEL ANTONIO BATISTA GÓMEZ, sindicado por delito contra la vida e integridad personal cometido en perjuicio de ERISON CAICEDO VIVERO.

El Segundo Tribunal al fundamentar su decisión señaló que existen "dudas razonables" en cuanto a la vinculación del imputado con el hecho punible, refiriéndose básicamente a las siguientes:

> **"... 2.1 Durante todo el proceso, MANUEL ANTONIO BATISTA GÓMEZ mantiene su negativa frente a los cargos formulados en su contra, constando en autos, las declaraciones juradas de los señores CLAUDIO BRATHWAITE YEARWOOD (fs. 197-200) y HÉCTOR JAVIER GONZÁLEZ GUEVARA (fs. 233-238), quienes corroboran la versión rendida por el sindicado, al ser indagado (fs. 177-183), en el sentido de que para la fecha y hora de los hecho coincidían en la reparación de un automóvil (taxi), propiedad del señor GONZÁLEZ en el taller de BRATHWAITE.**
>
> **2.2 El sindicado no registra antecedentes penales ni policivos.**
>
> **2.3 Según el Informe Pericial Balístico Nª PB-263-99, los casquillos y proyectiles encontrados en las escena del crimen, no fueron percutados ni disparados por el arma de fuego calibre 380, marca Davis con el número de serie AP443901, cuyo cargador fue encontrado en la diligencia de allanamiento realizada a la residencia del procesado ...**
>
> **2.4 En contra de BATISTA GÓMEZ solo (sic) consta la versión brindada por la señora Yaneth Marlene Morales, quien asegura que el día de los hechos, su esposo ERISON CAICEDO VIVERO le había pedido que lo esperara unos minutos mientras se entrevistaba con "Manuelito", quien había incumplido la promesa de arreglarle un amplificador musical. Sin embargo, la prenombrada Morales nunca conoció físicamente al tal "Manuelito" y las descripciones aportadas durante su declaración jurada, visible de fojas 145 a 152, no coiniciden con el sindicado. ...". (fs. 511-517).**

Al momento de ser notificado de la resolución judicial, el Fiscal Cuarto Superior, Licenciado Dimas Guevara, anunció apelación que fue sustentada en tiempo oportuno y en la que solicita a esta Sala revoque el auto en cuestión y en su lugar "se llame a responder criminalmente al señor MANUEL ANTONIO BATISTA por el delito de homicidio en perjuicio de ERISON CAICEDO VIVERO ...", puesto que "... el Segundo Tribunal de Justicia del Primer Distrito Judicial no realiza una adecuada valoración del caudal probatorio que se incorporó a la presente encuesta penal, en especial de las pruebas que hemos examinado en este escrito, ya que incluso omitió valorar el testimonio de la señora IXOMARA RAQUEL CHÁVEZ APONTE, que resulta contundente en cuanto a los señalamientos que le formula al señor MANUEL ANTONIO BATISTA, ratificado a través de una Diligencia de Reconocimiento Fotográfico, lo cual aunado a los otros indicios que se han mencionado en el expediente demuestran certeza en cuanto a la vinculación del sindicado". (fs.

522-528).

Corrido el traslado respectivo, el Licenciado Valentín Jaén Cocherán, apoderado del sindicado, presentó escrito de oposición a la apelación en el cual, luego de hacer un análisis de las pruebas que supuestamente vinculan a su poderdante, solicita se confirme el fallo del Tribunal A-Quo.

Conocidos los argumentos del recurrente, la Sala pasa a resolver la alzada en los términos previstos por el artículo 2428 del Código Judicial, lo que indica que tendrá conocimiento únicamente sobre los puntos apelados.

La presente encuesta penal se inicia con la diligencia de reconocimiento y levantamiento de un cadáver que se encontraba en el cuarto de urgencias de la Policlínica María Valdés, el cual respondía al nombre de ERISON CAICEDO VIVERO, quien en horas de la tarde del día 18 de junio de 1998 fue muerto a causa de numerosas heridas de proyectil de arma de fuego en el sector de Los Quemados, Corregimiento José Domingo Espinar, Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá.

Tal como se ha expuesto en líneas anteriores, la disconformidad del representante del Ministerio Público radica, básicamente, en el aspecto subjetivo del delito, es decir en lo que respecta a la vinculación del imputado con el homicidio, pues considera que existen suficientes pruebas en el expediente para llamar a responder en juicio al señor MANUEL ANTONIO BATISTA GÓMEZ.

En primer lugar, en cuanto al testimonio de IXOMARA RAQUEL CHÁVEZ APONTE, la Sala advierte que la testigo no sólo se retractó, bajo la gravedad del juramento, de su primera declaración, sino que además existen serias contradicciones entre sus dichos y lo declarado por la concubina de CAICEDO VIVERO, quien también dice haber presenciado los hechos . En efecto, en su primera declaración, visible a fs. 21- 23 del expediente, señaló:

> "... alrededor de las tres y quince de la tarde estavamos (sic) viendo televisión cuando mi hijo me dijo que tenia (sic) mucho sueño y me puse en el sillón de la sala para darle pecho, posteriormente escuche (sic) un disparo que venia (sic) de la parte de afuera de mi casa, como de una arma de fuego corri (sic) y me asome (sic) a la puerta para ver que (sic) estaba pasando, al asamarme (sic) a la puerta pude ver a un muchacho que tenia (sic) entre sus manos un arma de fuego cromada, tirandole (sic) al otro muchacho que estaba en el piso, pude observar en los momento cuando este muchacho que le describo le estaba disparando al otro ... a este sujeto lo conozco porque es del barrio donde vive mi señora madre y al mismo le llaman MANUEL ...".

Por otro lado, la concubina del occiso, YANETH MARLENE MORALES, bajo la gravedad del juramento, expone su versión de los hechos de la siguiente manera:

> "... El día de los hechos 18 de junio de 1998, aproximadamente como a las tres de la tarde después que hicimos un mandado ERISON me dijo que él iba a ir a la casa de MANUELITIO nuevamente, en Los Quemaos (sic), yo me quedé en la parada ya que yo estaba embarazada para ese tiempo, y desde allí se veía la casa, yo vi a mi esposo cuando estaba hablando con un muchacho, vi cuando el (sic) regresaba y salieron dos muchachos, mi esposo iba caminando y ellos dos le salieron por detrás y uno le disparó a la pierna y volvió a tirar, yo al ver lo que ocurría me subí a una chiva y me fui para la casa ..." (fs. 145-151).

De las dos versiones expuestas, la Sala advierte que lo declarado por la concubina del occiso, YANETH MARLENE MORALES, es la que más se acerca a las pruebas que figuran en el proceso. En efecto, visible a fs. 359-360 del expediente se encuentra el informe pericial N° 317 y 322-98, confeccionado por

los peritos de la Sección de Balística Forense de la Policía Técnica Judicial en el cual se deja claramente establecido que los proyectiles que impactaron la anatomía del occiso fueron disparados por dos tipos de armas distintas: una pistola calibre .380 y un arma de fuego tipo fusil, lo que concuerda con lo declarado por MORALES en el sentido que CAICEDO VIVERO fue atacado por dos sujetos.

Por otra parte, consta también en autos y tal como lo señala el Tribunal A-Quo, las declaraciones de CLAUDIO BRATHWAITE YEARWOOD (fs. 197-200) y HÉCTOR JAVIER GONZÁLEZ GUEVARA (fs. 233-238), quienes coinciden en señalar que BATISTA GÓMEZ se encontraba en el taller de BRATHWAITE el día y la hora en que ocurrieron los hechos.

De las consideraciones que se dejan dicho, esta Superioridad considera que el auto venido en apelación debe ser confirmado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto de 27 de octubre de 1999, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.)MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE CARLOS YAÑEZ ALVAREZ, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE RAFAEL CLEMENTE ABREGO GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La defensa técnica de Carlos Yañez Navarrete, sindicado por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Rafael Clemente Abrego, ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución de 15 de noviembre de 1999, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que rechaza la petición de nulidad de la notificación efectuada mediante edicto del auto de 28 de mayo de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior, el cual, entre otras consideraciones, sobresee provisionalmente a su defendido.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

El recurrente solicita que se revoque el trámite de notificación por edicto del auto de sobreseimiento, toda vez que esa resolución debe notificarse personalmente de acuerdo a lo que prevé el numeral 4 del artículo 989 del Código Judicial, el cual es aplicable al proceso penal conforme al artículo 2308 de esa excerta legal (fs. 20-21).

LA DECISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR

El Tribunal Superior, entre otras consideraciones, rechazó el incidente de nulidad propuesto porque la norma legal que el apoderado legal exige su aplicación no es compatible con el proceso penal, "habida cuenta de que existe una disposición específica del procedimiento penal, el artículo 2304, que excluye el auto que dispone un sobreseimiento provisional del inventario de resoluciones cuya notificación debe mandatoriamente realizarse personalmente" (fs. 15-16 del cuaderno de incidente).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

La regla general es que las resoluciones judiciales se notifican por edicto a excepción de aquellas que la ley expresamente ordene lo contrario. (Art. 988 C. J). En principio, el auto de sobreseimiento se encuentra en esa regla general puesto que no figura en el catálogo de resoluciones judiciales que, por ley, deben notificarse personalmente en la etapa del plenario. Sin embargo, el procedimiento legal establece limites o condiciones para que el Tribunal pueda hacer uso de la notificación mediante edicto. Así observamos que el numeral 4 del artículo 989 del Código Judicial impone al Tribunal la obligación de notificar la primera resolución que se dicte en un proceso que se encuentre paralizado por más de dos meses. De esa manera se logra un equilibrio en el impulso del proceso, y las partes puedan utilizar cabalmente su derecho de defensa, mediante un mecanismo que reactiva la contradicción.

En consecuencia, el auto de sobreseimiento debe notificarse personalmente cuando sea la primera resolución judicial emitida por el juzgador en un proceso paralizado por más de dos meses. Hacer lo contrario, afectaría la garantía del contradictorio, impidiendo al imputado la efectiva defensa a través de la intervención personal o por representación de su apoderado judicial.

En conclusión, la Sala es del criterio de que los argumentos que expone el recurrente se adecúan a la causal de nulidad que consagra el numeral 2 del artículo 2298 del Código Judicial, por lo que procede revocar el auto apelado y, en su lugar, declarar la nulidad del trámite de notificación por edicto del auto de 28 de mayo de 1999 y procediéndose a la notificación personal.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley REVOCA la resolución de 15 de noviembre de 1999, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, DECLARA LA NULIDAD del trámite de notificación efectuado mediante edicto del auto de 28 de mayo de 1999, proferida por esa colegiatura, que sobresee provisionalmente a Carlos Yañez Navarrete, sindicado por delito de homicidio cometido en perjuicio de Rafael Clemente Abrego González, y ORDENA que se proceda a la notificación de dicha resolución mediante notificación personal.

Devuélvase y Notifíquese

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) MARIANO HERRERA

Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

PROCESO SEGUIDO A MOISES OBANDO MOREIRA, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en calidad de Tribunal de alzada, del recurso de apelación interpuesto por el Licdo. ABDIEL GONZÁLEZ ACOSTA, en calidad de apoderado judicial de MOISES EDUARDO OBANDO MOREIRA, contra el auto de 25 de septiembre de 1998, emitido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por el cual abre causa criminal en contra de su poderdante por la presunta transgresión de disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, es decir por el homicidio doloso en grado de tentativa.

Cabe señalar que se le dio traslado del recurso a la Fiscalía Tercera Superior pero no presentó escrito de oposición. (F. 428)

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El recurrente manifiesta que la conducta desplegada por OBANDO MOREIRA el día y la hora de los hechos que culmina con las lesiones causadas a JULISSA CASTILLO CASTILLO lo ubican como presunto transgresor del delito de lesiones personales contenido en el artículo 136 del Código Penal, compartiendo en esta forma el criterio del Ministerio Público, ya que OBANDO MOREIRA actuó sin intención o culpa, toda vez que nunca pretendió matar ni causar daño a JULISSA CASTILLO. (Fs. 425-426)

FUNDAMENTACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR

El Segundo Tribunal Superior, tras analizar las principales piezas procesales, señaló que nos encontramos frente a un homicidio en grado de tentativa y el hecho punible se comprobó con el certificado médico legal correspondiente a la lesionada, donde se señaló que la vida de ella estuvo en peligro.

El A-quo indicó que la participación del imputado ha quedado plenamente probada con la deposición de la ofendida y éste aceptó haber cometido el hecho. Aunado a ello, se ha demostrado la actitud dolosa del investigado, lo que infiere de lo manifestado por la lesionada quien desde un inicio indicó que su novio fue quien la hirió; no obstante, éste en un principio lo negó, luego la ofendida manifestó sentir miedo de su agresor, lo que demuestra la actitud agresiva de éste. Otro hecho de importancia es que el imputado declaró que el arma no disparaba, sin embargo técnicamente se probó que la misma era idónea para producir disparos. (F. 410)

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

Consta en la encuesta penal que el 11 de noviembre de 1997, a las 11:50 p.m. aproximadamente, JULISSA CASTILLO CASTILLO ingresó al cuarto de urgencia del Hospital Santo Tomás, presentando una herida por proyectil de arma de fuego a la altura del cuello y tórax anterior derecho, razón por la cual fue intervenida quirúrgicamente. La joven manifestó que MOISES EDUARDO OBANDO MOREIRA, quien la acompañó al hospital, fue el que le ocasionó las lesiones con un arma de fuego. (F. 3-4)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Le corresponde a esta Superioridad resolver la alzada, a lo que se procede, no sin antes indicar que la decisión tendrá en cuenta únicamente los reclamos que se formulan en el recurso, de conformidad con lo que establece el artículo 2428 del Código Judicial.

Se advierte que el punto medular de la controversia que nos ocupa es si el delito cometido por el señor OBANDO MOREIRA se ubica dentro del homicidio doloso en grado de tentativa o el delito de lesiones personales.

En la jurisprudencia de esta Corte se ha indicado que "el factor que determina la diferencia entre un delito de lesiones y un delito de tentativa de homicidio es la intención con la cual el actor comete el hecho punible, y dicha intencionalidad puede determinarse -con las obvias limitaciones inherentes al conocimiento de la mente humana- a partir de las circunstancias que rodean al hecho, el arma utilizada, el lugar y cantidad de los disparos, etc". (Fallo de 8 de enero de 1998, Registro Judicial, Enero, 1998. p. 222.)

Por tanto, entramos al examen de algunos elementos probatorios allegados al cuaderno penal, a efectos de determinar si le asiste la razón al recurrente.

MAGALY JANNETH CASTILLO CASTILLO, hermana de la afectada, declaró que ésta le manifestó por escrito que tenía miedo del señor MOISÉS OBANDO MOREIRA y que éste "TENIA QUE ESTAR PRESO" (F. 39)

Por su parte, JULISSA CASTILLO CASTILLO expresa que el día de los hechos se encontraba en la sala de la residencia de OBANDO MOREIRA. Éste se encontraba en el cuarto y ella entró, lo vio andando el arma y le preguntó qué estaba haciendo. OBANDO MOREIRA levantó el arma y ella se quitó pero sintió el empujón de la bala, cayó al suelo y le dijo a éste que le había disparado. Cuando él la revisó se percató que estaba sangrando por donde salió la bala, por lo que le dijo a su papá que llamara un taxi para trasladar a la lesionada al hospital.

Se le preguntó a la agraviada si OBANDO MOREIRA tenía algún motivo para lesionarla y contestó que esa noche no había discutido con él y no la celaba; que sí era de temperamento violento pero con ella no y, además, nunca la había amenazado. (F. 99-100)

En cuanto a lo manifestado por el imputado de que sacó el arma y era un relajo entre ellos, la ofendida indicó que tenía miedo porque no sabía que pensaba OBANDO MOREIRA porque nunca relajeó con el arma, la tenía en sus piernas, la levantó, apuntó y le disparó. (F. 101)

La lesionada también señaló que tenía conocimiento que el arma tenía un desperfecto y que alguien se la había dado a guardar a OBANDO MOREIRA dos semanas antes del incidente. Indica que anteriormente el imputado la había correteado con el arma, hasta cuando llegaron un lugar donde ella se pudo cubrir y éste le dijo "floja y no tiene balas". Dijo que él la correteaba de relajo pero ella le decía que no le gustaba ese relajo; esto ocurrió en dos ocasiones, siendo la última el día que la lesionó. (Fs. 101-102)

En cuanto a la versión del imputado OBANDO MOREIRA, éste manifestó que el día de los hechos estaba relajeando con su novia con el arma y supuestamente no funcionaba porque tenía el gatillo dañado, pero la sacó y se disparó.

Expresa el indagado que nunca había peleado con la joven CASTILLO CASTILLO pues se llevaban muy bien. Se le preguntó por qué si él estaba jugando con el arma, el disparo impacto en el cuerpo de la joven JULISSA y OBANDO MOREIRA contestó que supuestamente el arma no funcionaba, que se la ponía sobre el cuerpo y nunca se le había disparado. (F. 32)

OBANDO MOREIRA manifestó en ampliación de indagatoria que adquirió el arma calibre 38 en el Mercado Público y tenía la punta del martillo dañada. El día de los hechos, sacó el arma pensando que nunca se iba a disparar ya que estaba dañada y apuntó hacia un lado de JULISSA y se disparó el arma.

Agrega el imputado que tenía una relación de noviazgo con CASTILLO CASTILLO y eran buenos amigos; que a ella siempre le había gustado quedarse en su casa a dormir. (F. 56-57)

MOISÉS OBANDO AMADOR, padre del sindicado, señaló que estaba durmiendo cuando escuchó una detonación, salió de su recamara y encontró a su hijo con JULISSA que estaba herida y su hijo llamó a un taxi, se fueron a la Clínica Hospital de Río Abajo en donde la joven recibió los primeros auxilios y luego la trasladaron al Hospital Santo Tomás. (Fs. 45-46)

Agrega el declarante que hacía un mes que conocía a la joven CASTILLO, que ésta llevaba una buena relación con su hijo y tenía suficiente confianza para quedarse durmiendo en su casa. (F. 47)

En el examen médico legal practicado a JULISSA CASTILLO CASTILLO se dictaminó que las heridas que le fueron inferidas le corresponde incapacidad definitiva de 8 semanas y pusieron en peligro su vida. (F. 192)

Por su parte, en el peritaje de balística de la Policía Técnica Judicial, se determinó que el arma de fuego con la que se ocasionaron las lesiones que nos ocupan es un revólver calibre 38, marca Llama; presenta deterioro en su acabado (pavón) pero es idónea para producir disparos, está registrada a nombre de DARÍO RIVAS y existe denuncia de robo a mano armada, interpuesta por ALBERTO CABALLERO. (Fs. 229-231)

Con base en las piezas procesales que anteceden, el A-quo concluye que estamos ante un homicidio en grado de tentativa.

Sin embargo, al momento de emitir el auto de encausatorio no se había incorporado al sumario el resultado del peritaje del Departamento de Criminalística, Sección de Servicios Periciales y Laboratorios de Ciencias Forenses de la Policía Técnica Judicial, el cual fue realizado por el Detective I ROOSSEVELT PITTI, quien teniendo en cuenta la Diligencia de Inspección y Reconstrucción de los hechos, el protocolo de necropsia, las versiones del imputado y la afectada, emitió su concepto en los siguientes términos:

> "Lo expuesto por el médico forense y lo manifestado por el imputado; afectado el trayecto del proyectil fue de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda, el disparó se dio a larga distancia más de un (1) mts. Hay similitud entre las versiones expuestas.
>
> Consideramos que el sindicado no tiene conocimiento del uso y manejo del arma de fuego incriminada y que el disparo se produjo accidentalmente accionando el gatillo disparador". (F. 414)

Analizados los medios de prueba en su conjunto, la Sala concluye que, aun cuando el arma es idónea para causar la muerte y la herida inferida a la ofendida puso en peligro su vida, no se observa en el actuar de OBANDO MOREIRA la determinación de cometer el homicidio en perjuicio de CASTILLO CASTILLO. Así las cosas, no estamos ante un delito en grado de tentativa.

Como explica Hans Welzel "la tentativa es la realización de la decisión de llevar a efecto un crimen o simple delito, mediante acción que constituye un principio de delito. En la tentativa el tipo objetivo no está completo. Por el contrario, el tipo subjetivo debe darse íntegramente, y por cierto del mismo modo como tiene que aparecer en un delito consumado." (Derecho Penal Alemán, Tr. Por Juan Bustos Ramírez y Sergio Yáñez Pérez, Ediciones Jurídicas del Sur, Santiago de Chile, 1980. p 262.)

La acción del imputado más bien encuadra en la culpa regulada en el artículo 32 del Código Penal que a la letra dice "obra con culpa quien realiza el hecho legalmente descrito por inobservancia del deber de cuidado que le incumbe de acuerdo con las circunstancias y sus condiciones personales ..."; ello se infiere del peritaje de Criminalística donde se explica que OBANDO MOREIRA no tiene conocimiento del uso y manejo del arma de fuego y el disparo se produjo accidentalmente accionando el gatillo disparador, lo que corrobora la versión del imputado al manifestar que pensaba que el arma estaba dañada y que se le salió el tiro.

De estos elementos se desprende que hay ausencia de dolo en el actuar de OBANDO MOREIRA, pero sí se cometió el hecho legalmente descrito por inobservancia del deber de cuidado que le incumbe a toda persona que maneje un arma de fuego, razón por la cual la Sala es del criterio que la acción realizada por OBANDO MOREIRA por el momento se ubica en el delito de lesiones personales, que es de competencia de los jueces de circuito del ramo penal, motivo por el cual se procede a declinar la competencia.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA en todas sus

partes el auto de 25 de septiembre de 1998, emitido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y ORDENA la declinatoria del presente negocio al Juzgado de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial en Turno.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) ALBERTO H. GONZALEZ
Secretario Ad-Hoc

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE PROCEDER APELADO A FAVOR DE DANNY SOSA VERGARA, POR LA COMISIÓN DEL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MIGUEL POSADA JIMÉNEZ. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante auto calendado 24 de noviembre de 1999, abrió causa criminal contra Adalberto Vásquez Ruíz y Danny Sosa Vergara, por la comisión del supuesto delito de homicidio en perjuicio de Miguel Posada Jiménez. Contra esa decisión judicial, la defensa técnica de Sosa anunció y sustentó recurso de apelación en tiempo oportuno, el cual fue concedido en el efecto suspensivo.

El recurrente solicita que se dicte un sobreseimiento provisional a favor de su patrocinado, toda vez que los testigos que manifiestan que facilitó el cuchillo a Adalberto Vásquez son de oídas y presentan muchas contradicciones en sus declaraciones (fs. 308-314).

Conocidos los argumentos del apelante, corresponde a la Sala decidir la alzada, sólo sobre los aspectos objetados en la misma, de conformidad con al artículo 2428 del Código Judicial.

El cuaderno penal permite conocer que en la madrugada del 25 de diciembre de 1998, Adalberto Vásquez Ruíz caminaba en compañía de Danny Sosa Vergara, Héctor Sosa y Yitsi Edith Gómez por el sector No. 1 de Don Bosco, provincia de Panamá. Estas personas se encontraron con otro grupo, formado por Miguel Posada Jiménez, Jhon Posada, Francisco Mack, Franklin Ledezma, Gilberto Samaniego y de una persona de nombre Daniel. En ese momento, Posada golpeó a la joven Yitsi Edith Gómez porque ahora era la nujer de Adalberto Vásquez. Esa situación provocó una riña entre Posada y Vásquez. Este último, utilizó un cuchillo con el que hirió en dos ocasiones a Posada, quien murió camino al hospital. El protocolo de necropsia reveló que la causa de la muerte fue: -SHOCK HEMORRAGICO. -HERIDA DEL CORAZON. -HERIDA PUNZOCORTANTE EN TORAX (f. 111).

La Sala estima conveniente adentrarse en el examen de las piezas probatorias que obran en autos, a los efectos de comprobar si existen suficientes méritos idóneos para vincular al sindicado con la comisión del hecho punible que se le imputa.

Dany Sosa Vergara, al rendir declaración indagatoria, manifestó que todo se inició cuando Posada golpeó a la mujer del imputado Vásquez, Yitsi Edith Gómez. Explica el sindicado que Vásquez se despojó de sus prendas y de un cuchillo y los colocó en la capota de un vehículo. Durante la riña, una persona de apodo "Cutiti", sacó un arma de fuego para dársela a Miguel Posada y Vásquez tomó el cuchillo que había dejado encima del vehículo. El sindicado agregó que en ningún momento intervino en la pelea (fs. 95-101).

Por su parte, Adalberto Vásquez Ruíz señaló en su indagatoria que cuando Posada intentaba tomar el arma de fuego, "agarré el cuchillo de la capota del carro y le tiré a Miguelito la primera vez, de allí él intentó volver a agarrar la pistola, y yo nuevamente le tiré por segunda vez" (fs. 55-58). En ese orden de ideas, la testigo Virginia Cleotilde Ríos Martínez, manifestó que Posada intentaba tomar un arma de fuego, pero Vásquez tomó un cuchillo que estaba encima de un auto y lo hirió. La deponente agregó que cuando todo eso ocurría, Sosa estaba con Yitsi Edith Gómez (fs. 148-150).

En autos también consta la declaración de Virnia Videlia Valencia Quintanar, quien señala que el sumariado Vásquez tomó un cuchillo que estaba encima de un auto, que Dany Sosa no le pasó objeto alguno a Vásquez "porque DANY tenía agarrada a la muchacha Yinyi ..." (fs. 151-153) y por Héctor Sosa Vergara (fs. 158-160).

Ahora bien, el cuaderno penal permite conocer el testimonio de Yitsi Edith Gómez. Señala la deponente que en el momento en que Miguel Posada Jiménez y Adalberto Vásquez (a) Mono discutían, "DANY le decía a MONO COMPA COJALO, como que le estaba dando algo para que peleara ... después de escuchar lo antes dicho, ví que MONO tenía un cuchillo normal como de cocina ... con ese cuchillo se dirigió a donde Miguelito ... Mono le tiraba al cuerpo con el cuchillo ... luego Miguelito y Mono solitos se desapartaron, nosotros agarramos a Mono y ellos a Miguelito ..." (f. 35). La testigo concluye que "DANY le pasó el cuchillo a Beby o Mono ..." (f. 36).

En ese sentido, los testigos Franklin Ledezma y Gilberto Enrique Samaniego González coinciden en afirmar que el imputado Sosa sacó un cuchillo y se lo entregó a Vásquez para herir a Posada (fs. 14-17; fs. 18-20).

Luego de examinar los testimonios que obran en el cuaderno penal, la Corte considera que el argumento que expone el recurrente carece de apoyo probatorio. Contrario a lo dicho por Virginia Cleotilde Ríos Martínez y Virnia Videla Valencia Quintanar, Yitsi Edith Gómez en ningún momento afirmó que el imputado Dany Sosa estuvo a su lado durante la pelea entre Vásquez y Posada. A lo anterior se agrega que, por un lado, el imputado Sosa manifestó que en la noche de los hechos "se encontraban conmigo ... Héctor Sosa mi hermano y mi mujer Virginia Valencia ..." (f. 100), mientras que Valencia, al momento de rendir declaración jurada, señala que "A eso de un cuarto para las tres de la mañana yo venía de una fiesta con unas amigas de nombre Rudy Angélica ... al frente de la bodega Mama Yiya se suscitaba una discusión yo me detuve ... la discusión era entre Miguelito y Adalberto ..." (f. 151). Lo anterior indica que no existe certeza en el relato que expone la deponente Valencia, ya que presenta la imagen de una persona común que, por casualidad, fue testigo de un hecho punible, cuando en realidad estaba en el lugar de los hechos porque acompañaba a su marido, es decir, al imputado Sosa.

De la mano con lo anterior, la versión de Sosa tampoco encuentra apoyo en la declaración de Yitsi Edith Gómez, pese a que ella integraba el grupo en el que estaban los imputados Vásquez y Sosa. De manera muy particular, el relato de esta deponente coincide con la declaración de Franklin Ledezma y de Gilberto Samaniego, es decir, de dos personas que eran amigos de la víctima.

En síntesis, la Corte es del criterio que existen suficientes indicios de responsabilidad para proceder penalmente contra Sosa, ya que, hasta el momento, las sumarias revelan que Sosa intervino en la muerte de Miguel Posada Jiménez.

Como quiera que en autos está comprobado que existen suficientes indicios contra este, por lo que la petición de la defensa técnica carece en estos momentos de asidero legal. En consecuencia, lo que procede es confirmar el auto apelado, para que la situación jurídica del imputado sea decidida en la fase del plenario.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL,

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto de 24 de noviembre de 1999, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, por el cual se abrió causa criminal contra Adalberto Vásquez Ruíz y Danny Sosa Vergara, por la comisión del delito de homicidio cometido en detrimento de Miguel Posada Jiménez.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ALBERTO H. GONZALEZ H.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FRANCISCO REYNA JEANNETTE, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado BRUNO JUSTAVINO PERALTA recurre en casación contra la sentencia de 21 de octubre de 1999, mediante la cual el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial confirma la condena a 36 meses de prisión, como autor del delito de falsedad de documento, dispuesta por el Juzgado Cuarto de lo Penal del Primer Circuito Judicial, contra FRANCISCO REYNA JEANNETTE.

Habiéndose surtido el término de lista que establece el artículo 2443 del Código Judicial, la Sala pasa a examinar el escrito de formalización del recurso a objeto de decidir sobre su admisibilidad.

En este sentido, se advierte que en la sección destinada a la historia concisa del caso, el recurrente presenta un extenso recuento de los elementos probatorios incorporados al proceso e incluye transcripción de fragmentos de declaraciones de testigos, así como parte del contenido de un informe levantado por la sección de documentología forense de la Policía Técnica Judicial, todo lo cual resulta extraño al carácter de síntesis objetiva de los hechos que, según la doctrina jurisprudencial, debe caracterizar este apartado del libelo. Aunado a lo anterior, el casacionista transcribe en la historia concisa del caso, fragmentos de la sentencia de segunda instancia y desarrolla argumentos subjetivos en torno a las conclusiones que, a su juicio, debió arribar el ad quem, situación ésta que es contraria a los parámetros que gobiernan la técnica de formalización de la casación penal.

La causal aducida por el censor, que no enuncia con la debida separación, es la de error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial.

Con relación a la sección de los motivos que sustentan la causal, se observa que en el primer motivo el casacionista no precisa cargo de injuridicidad alguno congruente con el error de derecho en la apreciación de la prueba e incurre en el yerro de transcribir parte de la declaración del denunciante; en el segundo motivo, sólo se consignan alegaciones de las que no se extrae vicio de injuridicidad congruente con los supuestos en que se produce la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba y finalmente, en el tercer motivo se sostiene que el fallo impugnado concedió valor de plena prueba a las deposiciones del denunciante pero no se explica de qué modo ello representa un vicio de ilegalidad de la decisión impugnada.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, se advietrte que el recurrente cita el artículo 896 del Código Judicial, acusando su violación directa por omisión pero deja de transcribir la norma en su totalidad, como lo exige la técnica de formalización del recurso de casación penal.

Ante la comprobación de que la iniciativa procesal bajo examen, adolece de defectos formales que le privan de sustento lógico jurídico, es del caso declarar su inadmisibilidad.

Por consiguiente, la SALA DE LO PENAL de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el presente recurso de casación.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JULIO CESAR HINSTROZA DA COSTA, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado ABDIEL ARTEAGA TELLO formalizó recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 5 de octubre de 1999, pronunciada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que confirma la resolución mediante la cual el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Circuito Judicial de Colón condenó a JULIO CESAR HINESTROSA DA COSTA, a la pena de 40 meses de prisión como autor del delito de posesión ilícita de drogas, en su modalidad agravada.

Luego de evacuarse el término de lista que establece el artículo 2443 del Código Judicial, corresponde a la Sala confrontar la iniciativa procesal propuesta, con los requisitos formales que exige la ley, a objeto de decidir sobre su admisibilidad.

En este sentido, se observa que en la sección destinada a la historia concisa del caso, el casacionista relata el contenido de diversas declaraciones y hace referencia a situaciones accesorias, relativas a la devolución de bienes incautados al procesado, todo lo cual se aparta del propósito que, según la doctrina y la jurisprudencia, debe cumplir este apartado del libelo. Aunado a lo anterior, el censor omite referirse a la resolución de segunda instancia, lo que pone de relieve que la síntesis del proceso que presenta no recoge de manera integral los fundamentos que originaron la decisión impugnada.

La única causal invocada se refiere a la indebida aplicación de la ley sustancial penal al caso juzgado y ha sido enunciada conforme la denominación que establece el numeral primero del artículo 2434 del Código Judicial.

Con relación a los motivos que se aducen para sustentar la causal, se observa que en este epígrafe el recurrente incurre en los siguientes errores:

a) Incluye la cita del artículo 260 del Código Penal, lo que no se corresponde con la técnica del recurso y, b) la argumentación consignada bajo la denominación de "expresión de los motivos" esta redactada en forma de alegato de instancia, sin precisar con claridad, cuál es el cargo de injuridicidad que se le endilga

a la decisión impugnada, es decir, de qué modo el ad quem, en el contexto de la causal invocada, incurrió en un vicio de legalidad.

En lo relativo a las disposiciones legales infringidas, el censor cita el artículo 260 del Código Penal, aduciendo que fue infringido en concepto de "infracción de la ley sustantiva por indebida aplicación" expresión esta que no corresponde a la nominación de ninguna de las modalidades en que se produce, en el contexto de la técnica casacionista, la infracción de las normas legales. Aunado a lo anterior, cabe señalar que cuando se invoca la causal de indebida aplicación de la ley al caso juzgado, se parte de la premisa que el juzgado aplicó una norma sustantiva que no regula la situación controvertida enel juicio y correlativamente, se entiende que dejó de aplicar la disposición pertinente por lo cual es esencial que en la sección de las disposiciones legales infringidas se cita esta última. En el caso bajo examen el recurrente omite este requisito.

Las anteriores consideraciones demuestran que el recurso bajo examen carece de sustento lógico jurídico razón por la cual es del caso declarar su inadmisibilidad.

En consecuencia, la SALA DE LO PENAL de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no admite el presente recurso de casación.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A MAGNA ESTHER VALDESPINO AGRAZAL, SINDICADA POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Cumplidos los trámites de sustanciación y verificada la audiencia correspondiente, pasa la Sala Penal a pronunciarse sobre el recurso de casación en el fondo, presentado por la licenciada Rosario Granda de Brandao en representación de MAGNA ESTHER VALDESPINO AGRAZAL contra sentencia de segunda instancia dictada el 4 de septiembre de 1998, mediante la cual el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial confirma la sentencia proferida en primera instancia, en la que se le condenó a la pena de 5 años de prisión como autora del delito de Posesión Ilícita Agravada de Drogas.

LOS HECHOS

El presente proceso se inicia con el allanamiento practicado el día 16 de julio de 1996 en la residencia de la señora MAGNA VALDESPINO ubicada en las Mañanitas, Sector 14, casa número 41, lugar en donde al realizarse la revisión de rigor se encontró un envase de color lila el que contenía en su interior 269 carrizos transparentes contentivos de la sustancia ilícita denominada cocaína en la cantidad de 41.52 gramos. Además se encontraron B/.94.00 distribuidos en 3 billetes de B/.20.00, 3 de B/.10.00 y 4 de B/.1.00, motivo por el cual fue detenida la señora VALDESPINO, propietaria del inmueble. Al ser indagada niega la propiedad de la droga incautada y afirma que la misma fue introducida a su casa por el Corregidor AECIO MORENO y que el dinero que le encontraron era producto de ganancias de lotería. Surtidas las diligencias el Juzgado Sexto de

Circuito de lo Penal formuló cargos contra la imputada MAGNA ESTHER VALDESPINO y mediante sentencia de 2 de junio de 1998 la condenó a la pena de 5 años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término como autora del delito de posesión agravada de drogas; decisión contra la que se interpuso recurso de apelación y el Segundo Tribunal Superior confirma la sentencia de primera instancia que la condena a 5 años de prisión, recurriéndose en casación contra esta decisión.

EL RECURSO DE CASACION
CAUSAL

El recurrente invoca como causal al "Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia e implica infracción de la ley sustancial penal", la que está prevista en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial.

MOTIVOS ADUCIDOS

La recurrente señala un sólo motivo para sustentar la causal invocada.

Sostiene que el ad quem al evaluar las declaraciones de los Agentes captores JOSE RIOS GARCIA, AGUSTIN CARRERA MOJICA y MANUEL DE JESUS RAMOS PYNE, al igual que la del Corregidor AECIO MORENO, "comete error de derecho en su apreciación, porque a partir de las mismas da por acreditada la vinculación de nuestra representada MAGNA VALDESPINO con la droga supuestamente incautada en su residencia, a pesar de que en dichas declaraciones se evidencian contradicciones ...". La doctrina sostiene que "el Tribunal de Casación sólo puede conocer del error de derecho en la apreciación de la prueba cuando hubiere un error manifiesto del Tribunal ad quem en el proceso valorativo del medio probatorio, en forma tal que si no se hubiera cometido tal error, el mismo no habría influido en lo dispositivo de la sentencia impugnada" (Aura E. de Villaláz, CASACION PENAL, página 319). En otras palabras, el error debe ser manifiesto de tal manera que si no se hubiese cometido, el fallo sería distinto, porque el error de derecho es de esencia jurídica. En este motivo, la recurrente cuestiona la valoración que hizo el tribunal de las declaraciones del Corregidor y de los agentes captores porque considera que las de estos últimos son contradictorias en cuanto su participación al momento del allanamiento. Pero resulta que esas contradicciones, como bien afirma el Ministerio Público, no son trascendentales como para solicitar la invalidez del fallo. Lo relevante en este caso es el hecho de que en la residencia de la señora MAGNA VALDESPINO se llevó a cabo un allanamiento del que resultó el hallazgo de droga detrás de la puerta principal, una vasija plástica de color lila con 269 pedazos de carrizos plásticos transparentes que contenía en su interior cocaína en la cantidad de 41.52 gramos.

Este único motivo, además de ser extenso carece de cargos que demuestren que el tribunal ha incurrido en un error manifiesto el que de no haberse dado cambiaría el sentido de la sentencia. Por lo tanto, la recurrente no logró demostrar cargos de injuridicidad.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

En cuanto a las disposiciones legales aducidas como infringidas tenemos el artículo 972 del Código Judicial infringido en forma directa por omisión. En esta ocasión, estamos de acuerdo con el planteamiento del Ministerio Público porque a todas luces se desprende la incongruencia de este artículo con el motivo planteado por la recurrente en su escrito. Ella debió haber aducido el artículo 908 del Código Judicial que consagra que "no hará fe el testigo que se contradijo notablemente en una o mas declaraciones, en cuanto al modo, tiempo y lugar y demás circunstancias del hecho", argumento que plantea en el motivo presentado; pero por el contrario, aduce la violación de un artículo que regula los indicios. En todo caso, las declaraciones de los agentes captores concuerdan en cuanto a que se hizo un allanamiento en la residencia de la señora MAGNA VALDESPINO y que se encontró droga detrás de la puerta principal.

Con respecto a la violación del artículo 904 ibídem, tampoco le asiste razón a la recurrente porque el razonamiento utilizado por el juez se ajusta a derecho. El juzgador valoró el caudal probatorio de una manera lógica y de acuerdo a su experiencia con un correcto entendimiento humano. Dentro de los límites de la sana crítica, dio relevancia al hecho principal e inobjetable: el hallazgo de la droga en casa de la imputada MAGNA VALDESPINO, no a las aparentes incongruencias dadas en los testimonios de los agentes de la policía en cuanto a la ubicación de los mismos en el allanamiento.

La disposición sustantiva aducida es el artículo 260 del Código Penal. Como la violación de la misma se produciría a consecuencia de la violación de las normas adjetivas, al no prosperar la infracción de las normas procesales, tampoco se produce la de la norma sustantiva aducida.

Toda vez que el presente recurso no logra demostrar a través de su motivo cargo de injuridicidad alguno en que haya incurrido la sentencia de segunda instancia, no es del caso casarla.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo expuesto, la Corte Suprema, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial dentro del proceso seguido a MAGNA ESTHER VALDESPINO AGRAZAL, por delito de posesión ilícita de drogas.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RAMON GAITAN SOLIS, SINDICADO POR DELITO DE HURTO DE AUTO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Los licenciados MIRIAN JAEN DE SALINAS, del Instituto de Defensoría de Oficio y ELSO GONZALEZ MELENDEZ, como apoderados judiciales de RAMON GAITAN SOLIS y NELSON ABREGO ARIZA respectivamente, interpusieron sendos recursos de casación contra la sentencia expedida el 15 de octubre de 1999, por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial que confirma la resolución de 19 de julio de 1999, mediante la cual el Juzgado Décimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial condenó a los procesados a la pena de 12 meses de prisión (RAMON GAITAN SOLIS) y 24 meses de prisión (NELSON ABREGO ARIZA) como responsables del delito de hurto de automóviles.

Vencido el término de lista que establece el artículo 2443 del Código Judicial, la Sala pasa al examen de los escritos de formalización de los recursos, a objeto de verificar el cumplimiento de los presupuesto formales para su admisibilidad.

RECURSO DE CASACION PROMOVIDO A FAVOR DE RAMON GAITAN SOLIS.

El libelo presentado por la licenciada MIRIAN JAEN DE SALINAS, en el epígrafe relativo a la historia concisa del caso, recoge una síntesis objetiva de los hechos que dieron lugar al proceso, ajustándose a los parámetros que

establece la doctrina jurisprudencial.

La causal invocada es la de error de derecho en la apreciación de la prueba y su enunciado es adecuado a la denominación que sobre el particular, contiene el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial.

Con relación al único motivo que se aduce para sustentar la causal invocada, se observa que la casacionista cuestiona la valoración probatoria de las declaraciones de RAMON GAITAN SOLIS, JAVIER ENRIQUE PRECIADO, JESUS GRIMALDO SANCHEZ y ANEL ALVARADO, bajo la premisa que el ad quem da por acreditada, a partir de tales elementos, la vinculación del procesado con el ilícito, pero se aprecia que se trata de una argumentación abstracta, en la que no se advierte con claridad en que sentido valoró el juzgador de segunda instancia las citadas deposiciones y cuál es el valor que, de acuerdo con la censora, legalmente debió darse a tales deposiciones.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, se aduce la violación directa por omisión del artículo 970 del Código Judicial, como también la indebida aplicación del artículo 184 del Código Penal y se advierte que este apartado del libelo cumple con los parámetros que gobiernan la técnica de formalización del recurso de casación penal.

Ante la comprobación de que el escrito presentado por la licenciada MIRIAN JAEN DE SALINAS adolece de defectos formales que pueden ser subsanados, resulta viable ordenar su corrección, conforme lo establece el artículo 2444 del Código Judicial.

RECURSO PRESENTADO A FAVOR DE NELSON ABREGO ARIZA.

Al examinar el libelo presentado por el licenciado ELSO GONZALEZ MELENDEZ, se observa que en la sección destinada a la historia concisa del caso, en 7 folios el recurrente ha desarrollado un extenso y detallado recuento del contenido de los elementos probatorios incorporados a la causa, lo cual es contrario al carácter de síntesis de los hechos que exige la técnica de formalización del recurso, con relación a este apartado.

La causal invocada consiste en la indebida aplicación de la ley al caso juzgado y la denominación expresada por el censor se ajusta al numeral 1ero del artículo 2434 del Código Judicial.

Con relación al epígrafe relativo a los motivos que sustentan la causal, el casacionista presenta, bajo la denominación de "motivo que sustenta la causal", una extensa argumentación en la que se advierten los siguientes errores:

1. El recurrente transcribe fragmentos de la resolución impugnada, lo cual no es permitido por la técnica de formalización del recurso.

2. El extenso contenido de la sección bajo examen está redactado en forma de alegato y no cumple, en consecuencia, con el requisito de expresar concreta y objetivamente el vicio de injuridicidad que se atribuye a la decisión impugnada.

3. En el contexto de la argumentación sub júdice, el censo impugna la valoración probatoria realizada por el ad quem, lo que constituye un error grave, porque de acuerdo con la doctrina jurisprudencial, a través de la causal invocada, indebida aplicación de la ley sustancial al caso juzgado, la objeción de injuridicidad parte de la premisa que el aspecto probatorio de la causa fue atendido correctamente por la sentencia pero al momento de aplicar la ley sustancial se escoge una norma que no encaja en la situación del hecho juzgado. Partiendo de esta premisa, se aprecia que al desarrollar los motivos a través de una argumentación completamente ajena al alcance de la causal invocada, el recurso bajo examen queda sin sustento lógico jurídico.

A propósito de las disposiciones legales infringidas, el casacionista cita, uno a continuación del otro, los artículo 38 y 184 A del Código Penal, sin expresar el correspondiente concepto de infracción.

Por último, el recurrente incluye al final del libelo la transcripción del numeral 1ero del artículo 2434 del Código Judicial, lo cual es extraño a los requisitos formales que debe contener el escrito de formalización del recurso de casación.

Ante la comprobación de que el recurso presentado por el licenciado ELSO GONZALEZ MELENDEZ no cumple con los presupuestos que exige la ley y la doctrina jurisprudencial es viable declara su inadmisibilidad.

En mérito de lo expuesto, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve lo siguiente:

1. SE ORDENA la corrección del recurso presentado por la licenciada MIRIAN JAEN DE SALINAS, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta resolución y en consecuencia, se DISPONE que el expediente permanezca en Secretaría por el término de 5 días hábiles para este efecto.

2. NO SE ADMITE el recurso de casación presentado por el licenciado ELSO GONZALEZ MELENDEZ a favor de NELSON ABREGO ARIZA.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE HUG GEORGE OWENS, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La defensa técnica de Hugh George Owens, ha formalizado recurso de casación contra la sentencia de 6 de septiembre de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual confirma la pena de 8 años de prisión que el a-quo impuso al imputado, por ser responsable del delito de tráfico internacional de drogas.

El libelo de casación, a los efectos de decidir sobre su admisibilidad, invoca una causal de casación en el fondo, que se refiere al caso en que la sentencia impugnada incurre en error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. La causal en cuestión se apoya en cinco motivos. Pero la Corte tiene reservas sobre los primeros cuatro motivos. En tal sentido, el primero y segundo motivo hacen un resumen sobre la declaración indagatoria que rindiera Hugh George Owens y luego concluye que, al ser valorada, el Tribunal Superior cometió error de derecho en la apreciación de la prueba (f. 789). En idénticos términos se encuentra el tercer motivo, pues hace una síntesis de la declaración de Jessica Hudson Wilson y finaliza manifestando que esa prueba "no fue valorada con valor de convicción que la ley le otorga" (f. 790). El cuarto motivo expresa que hubo un error de apreciación entre la declaración de George Owens y la diligencia de reconocimiento en la cual Owens identificó a Jaime Miller Ibarra.

Como se observa, el casacionista ofrece los pormenores de una prueba

testimonial o sobre el resultado de una diligencia de reconocimiento, pero no explica con claridad de qué manera el Tribunal Superior erró en la valoración de las piezas probatorias a las que alude. A lo anterior se agrega el hecho de que el recurrente no indica las fojas en las que se encuentran las piezas de convicción que, según su parecer, fueron ponderadas de manera errónea.

> En cuanto al requisito concerniente a las disposiciones legales infringidas, tenemos que el recurrente omite señalar el concepto en el que ha sido infringido el artículo 770 del Código Judicial (f. 792). Alega vulnerado el artículo 904 del Código Judicial de manera directa por omisión (f. 792). No obstante, se encuentra ayuno de argumento, toda vez que solamente manifiesta que las declaraciones de Jessica Hudson Wilson, de Hugh Goerge Owens, Alfonso Tingle y la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos, "no fueron apreciadas según las reglas de la sana crítica". En otros términos, no explica cuales son las circunstancias que corroboran o disminuyen la fuerza probatoria de esas piezas de convicción.

Finalmente, el casacionista advierte que la sentencia atacada infringe el artículo 255 del Código Penal "de manera directa por comisión" (f. 792). Si el recurrente solicita que se case la sentencia atacada a los efectos de que su patrocinado sea absuelto de los cargos, a juicio de la Corte, ese concepto no es apropiado para sustentar la violación de esa norma legal, ya que con ese concepto no se discute la aplicación de esa norma legal a la situación jurídica del imputado; lo que se dirime es la incompleta aplicación de la disposición legal, la cual menoscaba los derechos del sentenciado.

En síntesis, esta Superioridad es del criterio que los motivos examinados no contienen cargos concretos de injuridicidad, ya que, como se ha visto, no establecen con claridad de qué manera el Tribunal Superior erró en la valoración de determinada prueba testimonial o pericial.

> De la misma manera, los argumentos que apoyan la vulneración de las disposiciones legales que se dicen infringidas, no son congruentes con la causal probatoria que se invoca. Por esas razones, la Sala es del criterio que el libelo de casación no puede ser admitido ante las deficnecias formales ya citadas.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE el recurso de casación, formalizado por la defensa técnica de Hugh George Owens, contra la sentencia de 6 de septiembre de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual confirma la pena de 8 años de prisión que el a-quo impuso al imputado, por ser responsable del delito de tráfico internacional de drogas.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) MARIANO HERRERA

Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALEJANDRO GONZÁLEZ FLETCHER, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ABRIL DE 2000.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Por cumplido el período de lista de que trata el artículo 2443 del Código

Judicial, en los casos de recursos extraordinarios de casación en materia penal, la Secretaría de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha pasado el expediente contentivo del juicio seguido a ALEJANDRO INTI GONZÁLEZ FLETCHER quien fue condenado por delito contra la salud pública, mediante la sentencia de 13 de octubre de 1999, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, para que se resuelva sobre la admisibilidad del recurso.

En primer lugar, se observa que el recurso fue dirigido al Magistrado Presidente de esta Sala de conformidad con lo normado en el artículo 102 del Código Judicial, además ha sido interpuesto por persona hábil, promovido dentro del término establecido por las normas de procedimiento penal contra una resolución que efectivamente admite este tipo de recurso extraordinario, y por delito cuya sanción es superior a 2 años de prisión.

En lo referente a la historia concisa del caso, se observa que el casacionista hace un relato en forma innecesariamente extensa, obviando que esta sección debe ser suscinta y objetiva, de manera que resalten los principales hechos de los cuales se desprendan prima facie los cargos de injuridicidad contra la sentencia que se impugna, sin incurrir en el detalle de resumir las distintas diligencias, actuaciones y medios probatorios que reposan en el expediente, por tanto se incumple con lo dispuesto en el artículo 2443 numeral 3, literal a, Código Judicial.

El casacionista señala como causal única del recurso, "por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal en el concepto de violación directa por comisión"(numeral 1, artículo 2434 del Código Judicial).

Es oportuno señalar que en materia de casación, el concepto de violación directa se presenta como causal y como concepto de infracción de las disposiciones legales. En el segundo supuesto, el casacionista debe señalar si la norma fue transgredida por comisión o por omisión, no cabe hacer dicha mención cuando se trata de la causal.

A renglón seguido, el letrado desarrolla en cinco párrafos un sólo motivo que sustenta la precitada causal, cuya lectura da la impresión de que se trata de tres motivos que sustenta la causal única.

Aunado a lo anterior, se advierte que el letrado desatiende la técnica casacionista al incluir apreciaciones subjetivas en el motivo, cuando debió hacer una exposición sucinta, clara y expresa de la situación jurídica creada por la sentencia que se objeta, destacando el vicio de injuridicidad que da origen a la causal.

Con relación a las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción, el recurrente cita y transcribe en forma íntegra el artículo 260 del Código Penal pero no indica el concepto de infracción sino que señala que se violenta el segundo párrafo de la norma.

A continuación el recurrente cita y transcribe el artículo 904 del Código Judicial, indicando que fue violado en forma directa por comisión, y el artículo 972 del citado Código, señalando que la transgresión se dio "por violación directa por falta de aplicación u omisión".

La Sala debe señalar que las normas pueden ser infringidas en los siguientes conceptos: 1. Violación directa, ya sea por omisión o comisión; 2. Interpretación errónea; y, 3. Indebida aplicación. No es adecuado al rigor de este tipo de recurso extraordinario atacar un fallo argumentando violación directa por falta de aplicación, pues este concepto no está reconocido en la ley.

De otro lado, al invocar la causal de violación directa de la ley sustancial ello supone de plano que se excluyen las normas adjetivas de carácter procesal, por lo que resulta inadecuada la cita de los artículos 904 y 972 del

Código Judicial.

Con base en lo anterior, la Sala Penal estima que el presente recurso no cumple con los requisitos establecidos en el numeral 3, literales a, b y c, y el numeral 4 del artículo 2443 del Código Judicial, por lo que resulta improcedente su admisión.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo promovido por la defensa técnica de ALEJANDRO INTI GONZÁLEZ FLETCHER.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A YUKIO KAIVANO MURILLO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ABRIL DE 2000.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce de la admisibilidad del Recurso de Casación en el fondo, impetrado por la firma forense SITTON SITTON & ASOCIADOS, representada por el Licdo. SIDNEY SITTON URETA, apoderado judicial de EUGENIO ORTEGA VILLAVICENCIO, en contra de la sentencia de 26 de octubre de 1999 dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Corresponde entrar al examen del contenido del libelo con el fin de determinar si el escrito cumple con los requisitos del artículo 2443 del Código Judicial.

En primer lugar, se observa que el recurso fue dirigido a los Magistrados de la Corte Suprema, Sala de lo Penal, contrario a lo normado en el artículo 102 del Código Judicial, el cual preceptúa que los escritos presentados ante las Salas que integran la Corte, deberán dirigirse al Magistrado Presidente.

Por otra parte, el recurso ha sido interpuesto por persona hábil, promovido dentro del término establecido por las normas de procedimiento penal, contra una resolución proferida por un Tribunal Superior en segunda instancia y por delito cuya sanción es superior a 2 años de prisión.

En la historia concisa del caso, el casacionista hace un relato extenso, en el que hace mención de los momentos procesales, citando fragmentos de declaraciones indagatorias y de un salvamento de voto, con indicación de las fojas en que constan, sin embargo de toda esa narración no se infiere cargo de injuridicidad contra la sentencia recurrida.

El Tribunal de Casación debe señalar que, de acuerdo a los parámetros jurisprudenciales, en esta primera parte del recurso el recurrente debió ser concreto y claro, y resaltar de manera específica los cargos de injuridicidad que le formula a la sentencia de segunda instancia.

En lo concerniente a las causales que fundamentan el recurso, se observa

que el casacionista invoca el "error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que implica infracción de la ley sustancial" (Artículo 2434, numeral 1, Código Judicial). La denominación correcta de esta causal es: "error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial".

Cabe destacar que cuando se invoca la precitada causal, los motivos deben recoger con precisión el error en que incurrió el Tribunal, anotando los folios de la prueba que, apareciendo en el proceso, no ha sido evaluada, o señalando claramente la que se afirma que no existe, pese a ser parte integrante del expediente; o si en la sentencia censurada se le asigna un valor probatorio a un elemento de convicción que no tiene existencia material del proceso. (Fallo de 13 de mayo de 1997), o bien si se le asigna valor probatorio a una prueba que no reúne o no cumple con las formalidades y requisitos que debe revestir para que se tenga como tal.

La Sala al examinar el contenido de los dos motivos en que se sustenta la primera causal, observa que se alude a declaraciones juradas que reposan en el expediente, con indicación de la foja, pero no se indica cual es el vicio de injuridicidad que se endilga al fallo que se pretende impugnar, lo que contradice la técnica casacionista.

En cuanto a las Disposiciones legales infringidas, se citan y transcriben los artículos 904 y 905 del Código Judicial, pero no se indica el concepto de infracción. Además, no señala cuáles son las normas sustantivas que han sido violadas ha consecuencia de la transgresión de las normas adjetivas o procesales.

Por otra parte, el casacionista evoca una segunda causal Causal que es el "error de derecho en la apreciación de la prueba que implica infracción de la ley sustancial" (numeral 1, artículo 2434 del Código Judicial). La correcta denominación de esta causal es: "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustantiva penal."

A renglón seguido se desarrollan dos motivos. En el primero, se alude a la declaración indagatoria hecha por YUKIO KAWANO MURILLO; en el segundo, se hace referencia a la ampliación de indagatoria de KAWANO MURILLO. En ambos casos, el casacionista omite expresar el cargo de injuridicidad que opera contra la sentencia del A-quem.

Respecto a las disposiciones legales infringidas, el casacionista cita y transcribe el artículos 883 del Código Judicial, el cual considera ha sido infringido en concepto de violación directa por omisión, porque "el juez al evaluar las pruebas no valoró la confesión realizada por el señor KAWANO en la cual libera de culpa al señor Ortega." (F. 328)

La jurisprudencia de la Corte ha sostenido el criterio que al invocar el error de derecho en la apreciación de la prueba no puede aducirse que no se valoraron las pruebas, pues esta causal requiere que el juzgador haya estimado o valorado el medio probatorio. El argumento del casacionista, resulta contradictorio en sí mismo porque por un lado afirma que el juez evaluó las pruebas para luego señalar que no valoró la confesión de KAWANO, correspondiendo esto último a la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba.

Otra norma que se estima infringida es el artículo 884 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, la cual ha sido sustentada en armónica relación con la causal aludida.

Finalmente, al invocar causales probatorias corresponde al casacionista mencionar la disposición sustantiva que fue violada por el fallo, así como explicar el concepto de infracción, requisito fundamental que ha sido incumplido por el recurrente también en esta segunda causal.

Por lo anterior, la Sala concluye que no procede la admisión del presente recurso toda vez que el recurrente falta a la técnica de casación, y por tanto a la correcta observancia de los numerales 3, literales a, b y c, y 4 del artículo 2443 Código Judicial.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el presente recurso de casación en el fondo, promovido por el Licdo. SIDNEY SITTON URETA, en calidad de apoderado judicial de EUGENIO ORTEGA VILLAVICENCIO.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SE ADMITE RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A REYNALDO XAVIER MCLEAN MAXWELL Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Licda. MIRIAM H. JAÉN DE SALINAS, abogada defensora de oficio de REYNALDO XAVIER McLEAN MAXWELL, anunció y formalizó recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, el 26 de agosto de 1999, en que se condena a su patrocinado a la pena de cinco (5) años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual período, como responsable del delito de robo a mano armada.

Vencido el término de lista para que las partes interesadas tuvieran conocimiento del ingreso de este negocio a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, corresponde en este momento procesal, determinar si el medio de impugnación propuesto se adecúa a las exigencias externas e internas que establece la ley en esta materia.

Primeramente, se observa que el escrito está dirigido al Presidente de la Sala de lo Penal conforme a lo preceptuado en el artículo 102 del Código Judicial. Aunado a lo anterior, el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno, por la persona facultada legalmente para hacerlo y contra sentencia emitida por un Tribunal Superior en calidad de Tribunal de alzada, en un proceso penal por delito cuya sanción es superior a dos años de prisión.

En cuanto a la concurrencia de las exigencias normativas que establece el artículo 2443 del Código Judicial, se puede apreciar que en la historia concisa del caso la recurrente hace una relación sucinta de los hechos, pero trae a colación el contenido de declaraciones juradas e indagatorias, con indicación de la foja en que se encuentran. Sin embargo, se desprende de la lectura el cargo de injuridicidad que se endilga al fallo emitido por el A-Quem.

Por otro lado, advierte esta Corporación de Justicia que la causal que fundamenta el recurso no fue invocada en la forma que exige la jurisprudencia, pues se transcribe de la siguiente manera "error de derecho en la apreciación de la prueba que implica infracción de la ley sustancial penal y que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado". Esta causal debe invocarse así: error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del

fallo y que implica violación de la ley sustantiva penal.

La casacionista expone a continuación un motivo único cuyo contenido guarda relación con la causal seleccionada.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción, se tiene que la recurrente enuncia y transcribe los artículos 905, 909 del Código Judicial y el artículo 186 del Código Penal, indicando y explicando el concepto de la infracción.

La Sala concluye que las fallas advertidas en el libelo de casación son de tipo formal y no inciden en aspectos de fondo sobre la viabilidad de este recurso.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, representada por la suscrita Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de REYNALDO XAVIER McLEAN MAXWELL y DISPONE, correr traslado del expediente al señor Procurador General de la Nación, para que emita concepto en el término de cinco días, tal cual lo establece el artículo 2445 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JULIO ENRIQUE BARRIA SINDICADO POR EL DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL EN PERJUICIO DE DALHAIRA FUENTES CORONADO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado VALENTIN JAEN COCHERAN de la firma forense JAEN Y ASOCIADOS, en su condición de apoderado judicial de JULIO BARRIA, ha promovido recurso de casación en el fondo contra la resolución de 21 de octubre de 1999, pronunciada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que confirma la sentencia No 58 de 22 de abril de 1999, mediante la cual el Juzgado Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial condena al procesado a la pena de 4 años de prisión, por la comisión de un delito contra el pudor y la libertad sexual en perjuicio de DALHAIRA FUENTES CORONADO.

Vencido el término de lista que establece el artículo 2443 del Código Judicial, para que las partes tengan conocimiento del ingreso de la causa al tribunal de casación, corresponde examinar el escrito de formalización a objeto de determinar si cumple con los presupuesto establecidos para su admisibilidad.

En este orden, se observa que en el apartado destinado a la historia concisa del caso, el recurrente transcribe parte del contenido de la evaluación médico legal practicada a la menor ofendida, situación que es contraria a las reglas que gobiernan la estructuración de esta sección del libelo.

La causal invocada es la de error de derecho en la apreciación de la prueba, que implica infracción de la ley sustancial. Pero observa la Sala que aun cuando el casacionista inicialmente denomina correctamente la causal, incurre en

el error de transcribir a continuación, la totalidad del contenido del numeral 1ero del artículo 2434 del Código Judicial, que de acuerdo con profusa doctrina jurisprudencial sentada por la Corte Suprema, contiene 5 causales de casación en el fondo.

Con relación a los motivos en que se fundamenta la causal invocada, se advierte en relación con el primero, que el censor cuestiona la valoración del testimonio de GISSELL ENORIS CORONADO (fojas 5-12) señalando que el ad quem cometió error de derecho en su apreciación pero no se expresa concretamente en que consiste el vicio de injiuridicidad. De otro lado, en el segundo motivo el casacionista sostiene que el "Segundo Tribunal Superior de Justicia, comete error de derecho al no evaluar la prueba testimonial de la madre de la menor ...,", argumento este que no se compadece con la causal aducida sino con la de error de hecho sobre la existencia de la prueba.

A propósito de las disposiciones legales infringidas, el recurrente acusa la violación directa por omisión del artículo 904 del Código Judicial pero al desarrollar la explicación que sustenta en cargo de injuridicidad, plantea unas serie de argumentaciones subjetivas que se asemejan a alegatos de instancia de las que no es posible extraer con claridad el cargos de ilicitud que por vía de la infracción del artículo 904 ibídem se atribuyen al fallo censurado.

En adición a lo anterior, se advierte que el casacionista omite citar la norma sustantiva que a su juicio, resultó infringida como consecuencia de la violación de las disposiciones procesales relativas a la valoración de las pruebas.

En estas circunstancias, resulta evidente que la iniciativa procesal bajo examen carece de sustento lógico jurídico, situación que conduce a declarar su inadmisibilidad.

En mérito de lo expuesto, la SALA DE LO PENAL de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el presente recurso de casación.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALONSO E. TETE DUTARY SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS

La licenciada ROSARIO GRANDA DE BRANDAO, en su condición de defensora oficiosa de ALIANO TETE DUTARY, anunció y formalizó en tiempo oportuno recurso de casación en el fondo dentro del proceso penal seguido a su representado, por la comisión del delito de Posesión Agravada de Drogas, en la que fue sentenciado a sesenta meses de prisión por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, conforme a resolución judicial de 8 de julio de 1999.

Vencido el término de lista al que se refiere el artículo 2443 del Código Judicial, entra la Sala a examinar la admisibilidad de esta acción extraordinaria.

El examen del libelo permite advertir que la casacionista aduce como causal de fondo. "Cuando se haya incurrido en error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en el tipo ...", de allí que, seguidamente, se analizará el cumplimiento de los presupuestos y requisitos para la procedencia de este recurso.

El artículo 2443, numeral 3, literal "a" alude a la Historia concisa del caso, indicando que en esta sección el casacionista debe efectuar una narración concreta de la cual surjan los cargos de injuridicidad que le formula a la sentencia, lo que significa que no es permisible indicar las distintas etapas procesales, ni citar testimonios, ya que en otro apartado del recurso los mismos deberán ser expresados.

En el caso bajo examen, se aprecia que la técnica utilizada por la recurrente para sustentar esta sección impide que el Tribunal pueda identificar con claridad meridiana los vicios de injuridicidad, toda vez que se ha detenido a comentar la declaración indagatoria del procesado, y el testimonio de los agentes captores MIGUEL ANGEL DIEZ y SEBASTIAN PERALTA, sin aportar los cargos de injuridicidad que le atribuye a la sentencia de 8 de julio de 1999, contraviniendo de esta forma lo establecido en reiterada jurisprudencia que indica que: "... esta sección debe ser concreta y clara de la que deben surgir los cargos de injuridicidad que el casacionista le formula a la sentencia y que la hacen infractora de la ley sustancial penal". (Sentencia de 9/4/1997). La recurrente debe corregir lo pertinente en esta sección del recurso.

Con relación a la determinación de la causal o causales, la recurrente omitió indicar el numeral del artículo 2434 del Código Judicial en la que se encuentra contenida, pero al identificarla: "Cuando se haya incurrido en error de derecho al calificar el delito, sin la calificación ha debido influir en el tipo ..." permite al tribunal de casación ubicarla en el apartado correspondiente.

Con relación a los Motivos, estos tienen por finalidad sustentar la causal que se invoca, por lo que debe guardar estrecha relación con ésta y con la historia concisa.

Al confrontar el único motivo aducido por la casacionista la Sala observa que contiene un cargo de injuridicidad contra la sentencia de 8 de julio de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en la que se sanciona a ALIANO ENRIQUE TETE DUTARY a sesenta meses de prisión por habersele encontrado en posesión de 21.73 gramos de la droga conocida como Crack, ya que la cantidad posológica de la sustancia ilícita impide atribuirle el cargo de posesión agravada, tal como lo dispone el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal.

Debe el Tribunal observar, en consecuencia, que el motivo aducido en el que se sustenta el cargo de injuridicidad es cónsono y compatible con la causal anunciada por lo que la Sala concluye que ha sido redactado correctamente

Las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido, fueron redactados de manera autónoma, cumpliendo con las exigencias necesarias para la presentación de este medio impugnativo, ya que se transcribió el precepto vulnerado y se explicó el concepto de la norma jurídica transgredida.

Ahora bien, es claro que la recurrente ha cometido un desacierto en la elaboración del presente recurso, defecto que permite a este tribunal de Casación ordenar su corrección, en el sentido que la sección Historia concisa del caso sea redactada conforme lo determina la técnica casacionista, por lo que se procederá a ello.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la SALA SEGUNDA DE LO PENAL, CORTE SUPREMA, representada

por la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ORDENA LA CORRECCION del recurso de casación en el fondo interpuesto por la licenciada ROSARIO GRANDA DE BRANDAO a favor de ALIANO ENRIQUE TETE DUTARY en cuanto a la historia concisa del caso y DISPONE mantener el negocio en secretaría por un término de cinco (5) días hábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 2444 del Código Judicial.

Notifiquese.

fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MARCOS AURELIO MENDIETA OSORIO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Contra sentencia proferida el 15 de abril de 1999 por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial (fs. 255-260), por medio de la cual se ABSOLVIÓ al señor MARCOS AURELIO MENDIETA OSORIO de los cargos por los cuales fue llamado a juicio y se confirmó la de primera instancia en el sentido de condenar al señor ROLANDO BERMÚDEZ MENDOZA (a) "MEMIN", el licenciado Markel Iván Mora Bonilla, Fiscal Delegado Especializado en delitos relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos, anunció y formalizó recurso extraordinario de casación en el fondo.

Cumplidas las fases de admisión, sustanciación y celebrada la audiencia oral y pública, se procede a resolver el fondo del recurso presentado.

FUNDAMENTO DEL CASACIONISTA

El licenciado Mora Bonilla, al interponer el recurso de casación en el fondo solicita casar la sentencia recurrida con este recurso extraordinario y se condene al señor Marcos Aurelio Mendieta Osorio como cómplice secundario del delito de venta ilícita de drogas. Para ese efecto invoca dos causales de fondo con sus respectivos motivos y las disposiciones que estiman se han infringido.

Corresponde así, hacer un resumen del contenido del escrito presentado por el recurrente (fs. 274-283).

HISTORIA CONCISA

A través de una Operación Encubierta de Compra Vigilada de Drogas, los agentes de la Organización Regional Antidrogas de Herrera y Los Santos, el 13 de mayo de 1998, en el sector de Chitré capturaron a los señores Rolando Bermúdez Mendoza (a) "Memin" y Marcos Aurelio Mendieta Osorio, por el delito de venta ilícita de drogas, ocupando en posesión de los mismos el dinero que la Fiscalía había autorizado para dicho menester (fs. 17-26).

Al ser indagado Rolando Bermúdez Mendoza (a) "Memin" (fs. 72-76) refirió cargos contra el señor Marcos Aurelio Mendieta Osorio, en el sentido de que él, al montar al taxi del señor Mendieta Osorio le dijo que iban a conseguirle una droga al señor que nombró como Magdaleno, así como que el señor Mendieta Osorio lo llevó durante todo su recorrido hasta la venta de droga, por ser el mismo conocedor y participe en el acto ilícito en investigación, de lo que se ratificó (f. 77), situación que en concepto del casacionista, fue mal valorada por el Tribunal A Quo en el fallo censurado.

Al rendir declaración el señor Fernando Antonio García, quien actuó como Agente Encubierto, expresó que no se le llegó a pagar carrera con el dinero "Marcado" al señor Mendieta Osorio, así como que el mismo en su actuar se deducía el conocimiento del ilícito de venta de drogas porque estuvo presente en los encuentros para hacer contacto para la venta de drogas. Indica el recurrente que tales aseveraciones no fueron valoradas por el Tribunal de Segunda Instancia en su fallo.

Al ser llamados a responder en causa criminal, por la comisión de delitos contra la Salud Pública, los señores Bermúdez Mendoza y Mendieta Osorio fueron condenados por el delito de Venta Ilícita de Drogas, el primero como autor y el segundo como cómplice secundario.

Al ser apelada dicha decisión, el Tribunal Ad-Quem mantuvo la condena del señor Bermúdez Mendoza y absolvió a Mendieta Osorio, con lo cual a criterio del casacionista, se ha producido una violación de la Ley Sustancial Penal con dicho fallo.

PRIMERA CAUSAL

"Error de derecho en la apreciación de la prueba que implica violación de la Ley sustancial penal y ha influido decididamente en lo dispositivo de la sentencia recurrida" (art. 2434 ord. 1, inciso segundo del Código Judicial).

MOTIVOS

Un sólo motivo sustenta esta causal, en el cual el casacionista sostiene que la resolución atacada fundamenta la absolución del señor Mendieta Osorio sobre la base que no existe nada que lo incrimine como conocedor o de haber prestado un auxilio o cooperación al señor Bermúdez Mendoza en el ilícito de venta de drogas.

Explica que ello carece de fundamento, porque de la declaración y ratificación del señor Bermúdez Mendoza (fs. 72-76 y 77), se advierte que el señor Mendieta Osorio tenía conocimiento del delito que se cometía porque Bermúdez Mendoza le había dicho que iban a buscar una droga para un señor de nombre Magdaleno y a pesar de ello Mendieta Osorio le acompañó durante todo su viaje hasta el momento de la venta de drogas y su posterior captura. Situación que el recurrente estima como un auxilio, por lo que concluye que el fallo atacado valoró erradamente la prueba testimonial del señor Bermúdez Mendieta (fs. 72-76 y 77), ya que se le disminuyó la fuerza que dicho testimonio, el cual contenía cargos directos que incriminaban a Mendieta Osorio con el ilícito de venta de Drogas, y al ser mal valorados se incurrió decididamente en la violación de la ley sustancial penal.

NORMAS LEGALES INFRINGIDAS Y CONCEPTO EN QUE LO HAN SIDO

El casacionista manifiesta que ha sido violado en forma directa por omisión el artículo 904 del Código Judicial, dado que si el Tribunal Ad-Quem hubiese cumplido con lo expresado a la luz de la sana crítica no habría disminuido la fuerza del testimonio del señor Bermúdez Mendoza (fs. 72-76 y 77), quien sin interés de faltar a la verdad fue categórico al afirmar que el señor Mendieta Osorio tenía conocimiento de la actividad de venta ilícita de droga el día en que se suscitó el operativo que dio origen a sus detenciones, cuando éste a pesar de que sabía que iban a conseguir una droga llevó en su recorrido a Bermúdez Mendoza, hasta la venta de drogas y su captura posterior.

También considera infringido como consecuencia de lo anterior, el artículo 40 del Código Penal en forma directa por omisión, afirmando que los cargos formulados por Bermúdez Mendoza eran indicativos que Mendieta Osorio tenía conocimiento de los hechos de Venta de Drogas que suscitaron sus detenciones y prestó su auxilio a la realización de los mismos.

Agrega que la resolución impugnada infringe también el artículo 61 del Código Penal en forma directa por omisión , dado que si el Tribunal Ad-Quem hubiera cumplido con lo expresado a la luz de la sana critica no habría disminuido la fuerza del testimonio del señor Bermúdez Mendoza.

Por último, indica que el artículo 258 del Código Penal ha sido infringido en concepto de violación directa por omisión, porque según el testimonio de Bermúdez Mendoza (fs. 72-76 y 77), el señor Mendieta Osorio tenía conocimiento del ilícito, porque aquél le había dicho que iba a conseguir droga y consciente de esta situación, le llevó durante todo su recorrido, entendiendo todo lo referente al ilícito de venta de drogas, por el cual se les capturó y se ocuparon en su poder el dinero utilizado para la operación de compra vigilada de drogas.

Por lo que Mendieta Osorio prestó su auxilio para la ejecución de ese acto contrario al orden penal, violando la citada norma sustantiva al no aplicarla como correspondía a la responsabilidad como cómplice secundario del señor Mendieta Osorio.

SEGUNDA CAUSAL

"Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que implica violación de la ley sustancial penal y ha influido decididamente en lo dispositivo de la sentencia recurrida" (art. 2434 ord. 1 inciso segundo del Código Judicial).

MOTIVOS

Son dos los motivos que sustentan esta causal.

En el Primer Motivo afirma el recurrente que el Tribunal Superior no valoró el Acta de Allanamiento y Registro (fs. 17-19), toda vez que no la señala en la sentencia recurrida, por lo que no se percató que en poder del señor Mendieta Osorio se ubicó la suma de cinco balboas (B/.5.00) de los autorizados para la operación encubierta de compra vigilada, lo cual aunado con otras pruebas del proceso como la declaración del agente Antonio García, hacían plena prueba para deducir que, en efecto, los billetes ubicados en poder del señor Mendieta Osorio y que habían sido utilizados en la Operación Encubierta de Compra de Drogas, eran producto de su colaboración en el ilícito y no de una simple carrera como aseveró el fallador, violando con ello en forma trascendental la ley sustancial penal.

El Segundo Motivo sostiene que el Tribunal Superior no valoró la declaración jurada del señor Fernando Antonio García (fs. 143-146), ya que en la misma el citado agente categóricamente relata que luego de que el señor Bermúdez Mendoza tenía el dinero marcado, se retiró hacia el taxi y le dijo al conductor que ya tenía la plata, y éste le mando a cobrar nuevamente la carrera la cual se pagó con otro dinero que no era el marcado.

Agrega además, que el señor Mendieta Osorio estuvo presente en todos los contactos hechos para negociar la venta de sustancia ilícita, por lo cual, si el Tribunal Superior hubiera valorado dicho testimonio según las reglas de la sana crítica, en conjunto con el Acta de Allanamiento y Registro (fs. 17-19) hubiese deducido que los billetes autorizados, que fueron ubicados en poder del señor Mendieta Osorio, eran producto de su cooperación con el ilícito y no de una simple carrera.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

El licenciado Mora Bonilla señala que se ha violado el artículo 823 del Código judicial en concepto de violación directa por omisión, debido a que el Tribunal Superior si le hubiese dado valor probatorio de plena prueba al Acta de Allanamiento y Registro (fs. 17-19), en donde se certificaba el hallazgo del dinero producto de una compra vigilada de drogas en posesión del señor Mendieta Osorio, habría podido deducir su responsabilidad al prestar un auxilio para la

comisión del acto ilícito y por ende su participación en dicho delito.

También considera violado el artículo 904 del Código Judicial en forma directa por omisión, al sostener que si el Tribunal Superior hubiera valorado el testimonio de Fernando García (fs. 143-146) a la luz de la sana crítica habría deducido que el señor Mendieta Osorio sabía y entendía todo lo referente a la conducta punible de venta ilícita de drogas en la que participó prestando auxilio al señor Bermúdez Mendoza porque en su poder fue encontrado dinero autorizado o marcado.

Y como consecuencia, estima se ha vulnerado el artículo 40 del Código Penal en forma directa por omisión, porque del testimonio de Fernando García (fs. 143-146) y el Acta de Allanamiento y Registro (fs. 17-19) se podía establecer el conocimiento de los hechos de venta de drogas y el auxilio que prestó Bermúdez Mendoza al señor Mendieta Osorio para la venta de la sustancia ilícita, con lo cual se puede considerar cómplice secundario.

Igualmente afirma infringido el artículo 61 del Código Penal en concepto de violación directa por omisión, en razón de que no se aplicó la sanción que le cabía a Mendieta Osorio por su cooperación como cómplice secundario en el acto ilícito de venta de droga que había realizado el señor Bermúdez Mendoza.

Sostiene que de este modo, se ha vulnerado el artículo 258 del Código Penal en concepto de violación directa por omisión, debido a que del testimonio de Fernando García (fs. 143-146) y del Acta de Allanamiento y Registro (fs. 17-19), se deduce que el señor Mendieta Osorio tenía conocimiento del hecho punible porque estuvo presente en los contactos que había hecho el agente García con el señor Bermúdez.

Igualmente agrega que en poder de Mendieta Osorio fue encontrado el dinero autorizado para la Operación Encubierta de Compra Vigilada de Drogas, por lo que sabía y entendía todo lo referente al ilícito de venta de drogas por el cual se le capturó y en donde había prestado su auxilio para la ejecución de ese acto contrario al orden penal.

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Por medio de Vista N° 101 de 27 de octubre de 1999 (fs. (299-317), el licenciado José Antonio Sossa R., en respuesta al traslado que le hiciera la Sala Penal con respecto al presente recurso de Casación, recomienda casar la sentencia de 15 de abril de 1999 proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial, al considerar que se ha demostrado el quebrantamiento de la ley sustancial penal.

En cuanto a la Primera Causal y el único motivo que la sostiene, considera que en efecto, no se le reconoció el valor correspondiente a la declaración indagatoria de Rolando Bermúdez quien efectúa cargos contra Marcos Aurelio Mendieta Osorio. Estimando así, que se demuestra la concurrencia de un vicio de injuridicidad en la sentencia censurada.

Respecto a las disposiciones legales aducidas, también considera el señor Procurador que se ha dado la violación de las normas invocadas por el casacionista.

En lo que se refiere a la Segunda Causal y los dos motivos que la sustentan, estima el señor Procurador General de la Nación que se demuestran la existencia de un error que influye en el resultado de la sentencia. Igualmente considera que dado que el casacionista logró demostrar la infracción de varias normas procesales, resultan igualmente infringidas las normas penales.

FUNDAMENTO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

De conformidad con el artículo 2450 del Código Judicial se procederá a

examinar cada una de las causales invocadas con sus respectivos motivo.

1. Primera Causal:

> "Error de derecho en la apreciación de la prueba que implica violación de la Ley sustancial penal" (art. 2434 ord. 1 del Código Judicial).

Importante es señalar que esta causal surge cuando el juzgador le concede al medio probatorio un valor que no tiene, no le reconoce el valor que tiene o lo admite sin cumplir con los requisitos legales.

MOTIVO

Respecto al único motivo presentado, el casacionista afirma que fue mal valorada la declaración indagatoria del señor Rolando Bermúdez Mendoza (a) Memín y la ratificación de la misma (fs. 72-76 y 77), en el cual se incrimina al señor Mendieta Osorio.

En la sentencia examinada con este recurso extraordinario, se advierte que el Tribunal Ad-Quem realizó un análisis de lo declarado tanto por el imputado Mendieta Osorio como por el imputado Bermúdez Mendoza, concluyendo que opera a favor del primero el principio In Dubio Pro Reo, por lo que reformó la sentencia sometida a su consideración por medio del recurso de apelación.

Así, en el apartado de "Los Fundamentos Legales" específicamente del numeral tercero al octavo, el tribunal Superior aprecia lo declarado por ambos imputados. Veamos.

> "Tercero: El imputado Marco Aurelio Mendieta ha sostenido que él se concretó a realizar la carrera para que lo contrató Rolando Bermúdez quien le dijo que su taxi lo estaban lavando, que él le cobró la suma de cinco balboas que le pagó el propio Bermúdez por llevarlo de la Cantina de Llano Bonito a Monagrillo; de allí al Recreo; luego le indicó que lo pasara a recoger al Jardín Chitré y de allí lo llevó de nuevo al recreo.
>
> Cuarto: Que de conformidad con la tarifa para el cobro de carreras en el área de Chitré, la suma descrita por el imputado Mendieta se ajusta al recorrido.
>
> Quinto: El imputado Bermúdez afirma que él le pagó cinco dólares a Marco Aurelio Mendieta por la carrera, por lo que no es extraño que fueran los cinco dólares marcados encontrados en su poder, y no un billete como afirma su apoderado.
>
> Sexto: El imputado Marco Mendieta hizo del conocimiento de las autoridades que Bermúdez había dejado caer en el piso del vehículo otra suma de dinero que al recuperarse, se determinó que eran cuarenta balboas y uno de esos billetes que era de diez dólares resultó también marcado para la operación de compra controlada de drogas.
>
> Séptimo: El propio imputado Rolando Bermúdez quien trató de deshacerse de un billete de cinco dólares marcado para la operación, aceptó que, en efecto él colocó el dinero en el piso del auto como lo señaló Mendieta.
>
> Octavo: Nada indica que Marco Mendieta tuviera conocimiento de que estaba prestando auxilio o cooperación a Rolando Bermúdez para vender drogas, como tampoco se ha mostrado que se dedique al consumo de sustancias ilícitas" (fs. 258-259).

Ahora bien, advierte este Tribunal que el casacionista sostiene que Mendieta Osorio tenía conocimiento del delito que se cometía, porque Bermúdez Mendoza le había dicho que iban a buscar droga para un señor de nombre Magdaleno.

Consta en la declaración acusada como mal valorada, que el señor Bermúdez Mendoza explica que Magdaleno Solís le pidió que le consiguiera droga y que lo esperaba en el jardín El Recreo. Para ese efecto, buscó a su compañero, el señor Mendieta Osorio "porque supuestamente nos ibamos a ganar una plata" y se dirigen a buscar al señor Moki quien les entregó la droga.

De conformidad con el relato de la manera en que se desarrolló la acción ilícita, advierte este Tribunal que el imputado Bermúdez Mendoza habla en plural: fuimos, dijimos, nos entregó la droga, se la llevamos, etc.

No obstante lo anterior, si analizamos el razonamiento llevado a cabo por el Tribunal Ad-Quem, quien cotejó lo declarado por Bermúdez Mendoza con la declaración de Mendieta Osorio y las confrontó con otras pruebas, como se puede apreciar en la transcripción hecha de los Fundamentos Legales, ciertamente surgen dudas con respecto a la culpabilidad del señor Mendieta Osorio.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

El casacionista plantea como infringidos el artículo 904 del Código Judicial en forma directa por omisión. Esta norma adjetiva indica al juzgador que debe apreciar la prueba testimonial según las reglas de la Sana Crítica, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones.

Se refiere nuevamente el casacionista al testimonio del señor Bermúdez Mendoza (fs. 72-76 y 77), el cual como ya se explicó, al ser sujeto a una valoración crítica y racional junto con otros elementos de prueba, creó en el animo del Tribunal de Segunda Instancia dudas sobre la responsabilidad del señor Mendieta Osorio, llevándolo en consecuencia a absolverlo de los cargos por los cuales fue llevado a juicio.

Como consecuencia de la violación de la norma procedimental arriba citada, estima infringidos los artículos 40, 61 y 258 del Código Penal en forma directa por omisión. El primero de ellos define lo que se debe entender como cómplices secundarios; el segundo, establece la penalidad de los autores y los distintos participes en el hecho punible; y el último tipifica la compra, venta o traspaso de droga en su modalidad simple y agravada.

Este tribunal ha indicado que "cuando se invoca la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba y no se acredita la infracción de las normas adjetivas citadas, tampoco se da la violación de las normas sustantivas, que serían el efecto consecuente" (resoluciones de 4 de enero de 1996 y 10 de marzo de 1998).

En consecuencia, se declara no probada esta causal de fondo.

2. Segunda Causal:

"Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que implica violación de la Ley sustancial penal y ha influido decididamente en lo dispositivo de la sentencia recurrida" (art. 2434 ord. 1 del Código Judicial).

La causal invocada "se da cuando un medio probatorio que de manera oportuna ha sido allegado al proceso no es observado por el juzgador, es decir no es tomado en cuenta al momento de proferir la sentencia o cuando el tribunal de instancia le da valor probatorio a una pieza procesal que no existe o que no fue admitida" (Sala Penal 29 de junio de 1998).

MOTIVOS

En el primer motivo sostiene el casacionista que el Tribunal Superior, no valoró el Acta de Allamiento y Registro (fs. 17-19) porque no la señala en la sentencia recurrida, por lo que no se percató que en poder de Mendieta Osorio se ubicó la suma de cinco balboas de los autorizados en la operación encubierta de compra vigilada.

Ciertamente, que el Tribunal Ad-Quem no hace mención de la prueba alegada, pero no es cierto que hubiese ignorado que en poder del señor Mendieta Osorio se encontró los cinco balboas marcados ya que respecto a este dinero, la sentencia recurrida señala "que se ajusta al recorrido" de conformidad con la tarifa para el cobro de carreras en el área de Chitré.

En el segundo y último motivo afirma el recurrente que no se valoró la declaración jurada del señor Fernando Antonio García (fs. 143-146), de la cual se hubiera podido deducir que los billetes autorizados ubicados en poder del señor Mendieta Osorio eran producto de su cooperación con el ilícito y no de una simple carrera.

El señor Fernando Antonio García, es Cabo Segundo en la Sub-Dirección de Información e Investigación Policial (Sub-DIIP) de la provincia de Los Santos y según su declaración, sirvió como agente encubierto en el operativo.

Afirma que hizo el contacto con Bermúdez Mendieta (a) "Memin" a quien le entregó los billetes marcados por la Fiscalía, los cuales eran cinco de a uno, uno de diez y uno de cinco balboas; recibiendo a cambio dos sobrecitos de cocaína.

Explica el agente García "que nosotros le entregamos el dinero marcado, los B/.20.00 al señor MEMIN y él se fue con el dinero para el taxi y se dirigió al taxi, le informó al taxista que ya tenía la plata y entonces de una vez el taxista lo mandó nuevamente a donde estábamos nosotros a cobrar la carrera que tenía un costo de B/.5.00, que son éstos los que no estaban autorizados por la Fiscalía".

Sostiene que el señor Mendieta Osorio, estuvo presente las dos veces que hubo contacto con el señor Memín, o sea cuando se encontraron en el Jardín El Recreo y cuando Memín le llevó la droga.

Esta afirmación no fue negada por el procesado Mendieta Osorio, quien dijo que dejó a Bermúdez Mendoza en el Jardín El recreo, lo esperó, pero aquel salió acompañado de un señor y subió al carro de éste, pero antes le dijo que lo pasara a recoger al Jardín Chitré.

Luego realizó otra carrera al centro de la ciudad de Chitré y cuando llegó al Jardín Chitré vio a Bermúdez Mendoza hablando con un tal Moki, y luego subió nuevamente a su taxi para que lo llevara al Jardín El recreo (f. 66).

Cotejando las declaraciones rendidas, se tiene que contrario a lo afirmado por el agente García, al declarar Bermúdez Mendoza (a) Memín, afirma que después de entregar la droga y recibir el dinero, le dijo al comprador que tenía que pagar las carreras, y le entregó al señor Mendieta Osorio la suma de cinco balboas (f. 75). Lo que coincide con lo declarado por Mendieta Osorio.

Debemos agregar, que como bien lo señaló el Tribunal Superior en sus "Fundamentos Legales", la investigación se originó por información que indicaba que el conductor del taxi 6t-58 de la piquera Materiales Tito de nombre Rolando Bermúdez Mendoza (a) "Memín", se estaba dedicando a la venta de sustancias ilícitas.

Tal afirmación consta en la primera información recibida (f. 13) en donde además se señala que siempre usaba ese vehículo para hacer las entregas.

Por otra parte, el señor Mendieta Osorio afirma que se encontraba

trabajando en su taxi cuando por radio su compañero Bermúdez Mendoza le dijo que tenía su vehículo lavándolo y que lo pasara a recoger para hacer una carrera, e incluso lo llevó primero a Monagrillo donde el hermano de aquel, y fue después que se dirigieron al jardín El recreo (fs. 65-68).

Resumiendo, podemos señalar que si bien el Tribunal de Segunda Instancia no menciona la declaración de Fernando Antonio García, ello no le llevó a fallar equivocadamente la causa, porque en conjunto las pruebas y las circunstancias que rodearon la realización del ilícito, arrojan dudas sobre la participación del señor Mendieta Osorio en el caso bajo examen.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

El casacionista afirma que el artículo 823 del Código Judicial ha sido infringido en concepto de violación directa por omisión porque el Tribunal Ad-Quem no le dio valor de plena prueba al Acta de allanamiento y Registro donde consta que al señor Mendieta Osorio se le encontró en posesión de dinero producto de una compra vigilada de droga (fs. 17-19).

La norma adjetiva acusada de infringida guarda relación con el principio de presunción de legitimidad de las actuaciones de los servidores públicos dado que se refiere al valor que la ley le otorga a los documentos públicos.

Ciertamente que el Acta de Allanamiento y Registro consta que al señor Mendieta Osorio se le encontró en su poder cinco billetes de un balboa mismos que fueron marcados para ser utilizados en el Operativo Encubierta de Compra Vigilada de Drogas.

Sin embargo, tal prueba no fue ignorada por el Tribunal Ad-Quem, y tal como lo señala el casacionista, simplemente no le dio el "valor de plena prueba", por tanto si la valoró, si la consideró.

Así, se advierte que el análisis de los "Fundamentos Legales" del fallo, se centra en el dinero que le fuera encontrado al procesado Mendieta Osorio, concluyendo que el mismo se ajusta a la "tarifa para el cobro de carreras en el área de Chitré" (f. 258).

Luego entonces, el Tribunal Ad-Quem no dejó de apreciar el medio probatorio citado por el casacionista, por lo que se debe recordar que una de las formas como se origina la causal de error de hecho en la existencia de la prueba surge "cuando un medio probatorio allegado oportunamente al proceso no es tomado en cuenta al momento de proferir la sentencia" (Sala Penal. Agosto 5 de 1993).

También se afirma violado en forma directa por omisión el artículo 904 del Código Procesal que se refiere a que el juzgador, al momento de ponderar la prueba testimonial debe apreciar, según las reglas de la sana crítica, los motivos y circunstancias que corroboren o disminuyan las fuerzas de las declaraciones.

El casacionista sostiene que si el Tribunal Ad-Quem hubiera valorado el testimonio de Fernando García (fs. 143-146) que está relacionado con el Acta de Allanamiento y Registro (fs. 17-19) hubiese concluido que el señor Mendieta Osorio, sabía y entendía todo lo referente a la venta ilícita de drogas en la que participó.

Al respecto debemos indicar que la norma adjetiva acusada de infringida, parte del supuesto que el Tribunal de Segunda Instancia toma en consideración la prueba testimonial, la valora, pero yerra al determinar el mérito que le corresponde de conformidad con los hechos probados en el proceso y bajo el prisma de la sana crítica.

Siendo ello así, el casacionista al sustentar tal afirmación debe exponer las razones por las cuales la apreciación o valoración que el juez dio a la

prueba está alejada de las reglas de la sana crítica. Situación que se ajusta de manera específica a la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba.

Finalmente como consecuencia de la infracción de las normas adjetivas, se estiman infringidos los artículos 40, 61 y 258 del Código Penal cada uno en concepto de violación directa por omisión, los cuales se refieren a la definición de cómplices secundarios, penalidad de los mismos y al delito de compra, venta y traspaso de droga, respectivamente.

Siendo que se está ante una causal de naturaleza probatoria, la infracción de la norma sustantiva se produce necesariamente de manera indirecta. De modo tal, que al no producirse la violación de las normas adjetivas, no ha logrado el postulante acreditar la causal de error de hecho en la apreciación de la prueba.

En conclusión, al no acreditarse las causales alegadas, ni la infracción de las disposiciones legales, no procede casar la sentencia recurrida.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA el fallo impugnado por el licenciado Markel Iván Mora Bonilla, Fiscal Delegado Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JAIME ADRIAN MARTINEZ Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Licdo. JAVIER ANTONIO QUINTERO RIVERA interpuso recurso de casación a favor de JAIME ADRIAN MARTÍNEZ y ALEX MARTÍNEZ, sancionados a la pena de 5 años de prisión por el delito de posesión agravada de drogas, mediante sentencia de 4 de agosto de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que confirma el fallo de 12 de febrero de 1999, emitido por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito.

Vencido el término de lista, a fin de que las partes tuvieran conocimiento del ingreso del caso al Tribunal de Casación, corresponde ahora examinar el escrito mediante el cual se formaliza este medio de impugnación extraordinario, para los fines de resolver su admisibilidad, al tenor de lo previsto por el artículo 2443 del Código Judicial.

Los recursos fueron presentados por persona hábil, promovidos dentro del término establecido por las normas de procedimiento penal, contra resolución emitida por un Tribunal Superior en segunda instancia, el cual admite este tipo de recurso extraordinario y por delito cuya sanción es superior a 2 años de prisión.

RECURSO DE CASACIÓN A FAVOR DE JAIME ADRIAN MARTÍNEZ

En cuanto a la historia concisa del caso, el recurrente hace una breve relación de los hechos, en forma clara y objetiva, pero no indica el cargo de injuridicidad que opera contra la sentencia recurrida.

El casacionista señala como causal única del recurso, la contenida en el numeral 8, artículo 2434 del Código Judicial: "cuando se cometa error de derecho al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal".

Como se observa, el casacionista se refiere a una parte del precitado numeral 8 sin tener en cuenta que la Corte ha manifestado en distintos fallos que es necesario desglosar las causales que se encuentran reproducidas en esta norma, invocando aquella que se adecue al caso en concreto, pues este numeral se refiere al:

a) Error de derecho al admitir los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal;
d) Error de derecho al calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad penal.

Seguidamente, de conformidad con la estructura del recurso, el letrado enuncia un motivo único. Cabe señalar que la jurisprudencia uniforme de esta Sala ha sostenido que es necesario que los motivos se relacionen con la causal seleccionada por el recurrente, pero en este caso el casacionista no ha precisado cuál es la causal que fundamenta el recurso, error que no permite que el Tribunal de Casación entre a hacer algún tipo de análisis sobre los hechos presentados.

Respecto a las disposiciones legales infringidas, el casacionista cita y transcribe el numeral 5 del artículo 66 del Código Penal, así como el artículo 69, señalando el concepto de la infracción y explicando en qué consiste la transgresión de la norma.

Como quiera que el error advertido en el recurso de casación interpuesto a favor de JAIME ADRIAN MARTÍNEZ recae sobre un requisito esencial del recurso resulta improcedente su admisión.

RECURSO DE CASACIÓN A FAVOR DE ALEX MARTÍNEZ

Con relación a la historia concisa, se aprecia que el casacionista hace una relato sucinto, concreto y objetivo de los hechos, pero no se advierte el cargo de injuridicidad que se le formula a la sentencia.

La causal invocada por el recurrente es la contenida en el numeral 1, Artículo 2434 del Código Judicial: "Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que implica infracción de la ley sustancial penal y ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado".

En la jurisprudencia patria se ha señalado que los motivos deben ser desarrollados en forma tal que cada uno contenga, de manera independiente, un cargo de injuridicidad y además, deben ser formulados en forma precisa, clara y concreta, en congruencia con la causal invocada, lo que se observa en el motivo único que sustenta el recurso en examen.

En otro orden de cosas, se tiene que el casacionista indica que las disposiciones legales infringidas son los artículos 769, 972 del Código Judicial y el 260 del Código Penal, transcribe en forma íntegra los textos de las normas, con expresión del concepto de la infracción y explicando cómo se ha producido, guardando relación con la causal y los motivos que la sustentan.

Habiéndose cumplido a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 2443 del Código Judicial, relativo a la admisibilidad del recurso de casación en este caso, procede decretar su admisión.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE:

-ADMITE el recurso de casación interpuesto a favor de ALEX MARTÍNEZ y DISPONE, correr traslado del expediente al señor Procurador General de la Nación, para que emita concepto en el término de cinco días, tal cual lo establece el artículo 2445 del Código Judicial.

-NO ADMITE el recurso de casación interpuesto a favor de JAIME ADRIAN MARTÍNEZ.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JOSE JORGE AGUIRRE SALDAÑA Y OTRO, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Licdo. ARTURO PANIZA LARA, en su condición de defensor de oficio de MARIO ANEL GUILLER SERRANO, anunció y formalizó oportunamente recurso de casación en el fondo contra la sentencia fechada 20 de agosto de 1999 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que confirma la resolución emitida por el Juzgado Cuarto del Circuito Penal de Chiriquí.

Corresponde en este momento procesal, determinar si el escrito de formalización del recurso extraordinario de casación presentado, cumple con las exigencias normativas que contiene el artículo 2443 del Código Judicial que permiten su admisibilidad y consiguiente sustanciación.

Al examinar los folios correspondientes se advierte que el recurso de casación en estudio fue dirigido al Magistrado Presidente de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el texto del artículo 102 del Código Judicial.

El escrito reúne los requisitos de oportunidad, legitimación activa y material, por tratarse de un negocio penal por delito cuya pena privativa de libertad es superior a los dos años.

En cuanto a la historia concisa del caso, nuestra jurisprudencia ha establecido que debe ser una relación lacónica, objetiva y precisa, y deben aparecer todos los puntos relevantes del negocio penal, pero no debe traerse a colación medios probatorios, lo que incumple el Licdo. BERNAL toda vez que en este apartado presenta un relato extenso de cuatro fojas, en el que hace referencia al contenido de declaraciones indagatorias e informes, indicando el número del infolio en que se encuentran.

En el escrito se enuncia una sola causal: "Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal en cuanto al error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba". (numeral 1, artículo 2434 del Código Judicial)

Se debe indicar que en reiterada jurisprudencia de esta Sala se ha explicado que el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial consagra cinco

causales y la manera como se debe alegar la causal que propone el recurrente es la siguiente:

> "Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal".

La causal única se sustenta en cinco motivos, de los cuales no se infiere cargo de injuridicidad alguno, pues el recurrente enuncia en el primer motivo, la génesis del hecho punible; en el segundo, se refiere a la declaración indagatoria del procesado y la declaración jurada de un testigo presencial que corrobora lo dicho por el primero; en el tercer motivo, indica que el A-quem confirmó la sentencia de primera instancia.

El cuarto motivo fue desarrollado a manera de alegato y en el quinto aduce que el Tribunal Superior "no valoró la declaración de Eustaquio Samudio Moreno limitándose a indicar que carecía de elementos de juicio, además de ser vaga e imprecisa". (F. 294)

La técnica casacionista exige que los motivos deben ser cónsonos con la causal invocada y se deben exponer en forma clara, objetiva y concisa, indicando el cargo de injuridicidad de que adolece el fallo de segunda instancia , así como las fojas en que aparecen las pruebas cuya valoración se reputa errada, y el casacionista no ha cumplido con estos requisito.

El recurrente cita textualmente las disposiciones legales infringidas, considerando como tales el artículo 905 del Código Judicial, referente al testigo único e indica y explica el concepto de infracción que es la violación directa por omisión.

En cuanto a la norma sustantiva que estima violada, cita y transcribe el artículo 186 del Código Penal, indicando que la infracción se ha producido por violación directa por comisión, pero no explica en qué consiste la transgresión de la norma.

Como se puede apreciar, el casacionista ha errado en varios puntos importantes en la formalización del recurso, lo que hace que el mismo sea inadmisible.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado contra la sentencia 20 de agosto de 1999 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE

INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, PRESENTADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE VIRGILIO OLMOS APARICIO, INVESTIGADO POR EL DELITO DE INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDOR PÚBLICO COMETIDO EN PERJUICIO DE EVANGELINA GONZÁLEZ DE MARÍN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema del incidente de recusación contra el licenciado Edwin Alvarez, en su condición de Fiscal Superior del Tercer Distrito Judicial, interpuesto dentro de las sumarias que investigan a Virgilio Olmos Aparicio, Rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí, por la comisión del delito de infracción de los deberes de servidores públicos

Resulta importante señalar que, con anterioridad, el Procurador General de la Nación había remitido el expediente principal con la solicitud de que se ordenara el correspondiente archivo, petición que fue acogida por esta Corporación mediante resolución de 9 de julio de 1999.

Si tomamos en consideración que fue el 20 de marzo del 2000 que el Tribunal Superior remitió el cuaderno de incidente de recusación a los estrados de la Sala Penal, se infiere con facilidad que la incidencia no pudo ser dirimida antes de que se ordenara el archivo del expediente principal.

En síntesis, si el incidente de recusación consiste en una cuestión accesoria surgida en un proceso y este ya ha sido cerrado mediante resolución judicial, deviene manifiestamente improcedente por lo que es del caso rechazarlo de plano.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el incidente de recusación contra el licenciado Edwin Alvarez, en su condición de Fiscal Superior del Tercer Distrito Judicial, interpuesto dentro de las sumarias iniciadas por denuncia presentada por Evangelina González de Marín, quien acusa Virgilio Olmos Aparicio, Rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí, por la comisión del delito de infracción de los deberes de servidores públicos.

Notifiquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR ALBERTO RODRÍGUEZ SANCIONADO POR DELITO DE ROBO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El señor CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ CASAS, mediante manuscrito remitido desde el Centro Penitenciario La Joya, y recibido el 31 de enero de 2000 en la Sala Penal de esta Corporación de Justicia, solicitó revisión de la sentencia fechada 2 de julio de 1998, que lo condenó a la pena de 60 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, por el Delito de Robo.

Cumplidos los trámites de reparto, se dispuso mediante proveído de nueve (9) de febrero de 2000, correr traslado del negocio a la licenciada MIRIAM DE SALINAS, Defensora de Oficio, para que asistiera al recurrente en la correcta

formalización del recurso interpuesto, si hubiera causa legal que lo fundamente. (f. 4)

Al respecto, la Defensora de Oficio, mediante informe calendado veintisiete (27) de marzo de 2000 expresó lo siguiente:

> "... el recurso invocado por nuestro representado no es el adecuado en cuanto a la causal que les grime (sic) porque no es a través de un recurso de revisión sino de casación donde se discute si las pruebas fueron valoradas correctamente por el funcionario A-quo.
> ...
> Es por (sic) otro lo anteriormente expuesto, que consideramos que no tenemos causal para formalizar el presente Recurso." (fs. 5-9).

Del informe transcrito, observamos, que en la solicitud de revisión formulada por el señor RODRÍGUEZ CASAS, no hay causal para formalizar el presente recurso. Esta Sala Penal, en reiteradas ocasiones, ha señalado, que la revisión, debe ajustarse a alguna de las causales estrictamente establecidas en el artículo 2458 del Código Judicial, puesto que es un requisito indispensable para que sea admitido.

En vista de lo anterior, no procede la solicitud formulada por el señor RODRÍGUEZ CASAS, toda vez que no hay causal que fundamente la presente solicitud de revisión.

PARTE RESOLUTIVA

Por los motivos anteriormente expuestos, la SALA SEGUNDA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DESESTIMA la solicitud de revisión presentada por el señor CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ CASAS.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ALBERTO H. GONZÁLEZ
Secretario Ad-Hoc

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISION SOLICITADO POR VICTOR JAVIER PINO, SANCIONADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGIASTRADA P0NENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución 10 de diciembre de 1999, esta Superioridad admitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Licdo. DANILO MONTENEGRO, abogado defensor de oficio de VÍCTOR JAVIER PINO, contra la sentencia de 9 de abril de 1999, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que declaró responsable y condenó a su patrocinado a la pena principal de 19 años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual período, como autor de los delitos de homicidio agravado, robo y asociación ilícita para delinquir en perjuicio de JUAN PEÑA ALVAREZ.

En dicha resolución se dispuso abrir el proceso a pruebas, según lo establecido en el artículo 2460 del Código Judicial. (F. 18)

Concluido ese trámite, se corrió traslado al Procurador General de la Nación y al recurrente por el término de 15 días; las partes presentaron escrito

de alegatos, por lo que corresponde a la Sala de lo Penal proferir la sentencia de rigor sobre el fondo del recurso extraordinario de revisión en comento.

EL REVISIONISTA

El Licdo. DANILO MONTENEGRO explica en su escrito que los motivos por los cuales considera viable el recurso tienen fundamento en que el Segundo Tribunal Superior condenó al procesado por los delitos de homicidio, robo y asociación ilícita, y al proceder a la individualización judicial de la pena, señaló que la sanción por el delito de homicidio debía ser fijada en 15 años de prisión, ya que la intención era robar el arma de reglamento de PEÑA (el hoy occiso); por el delito de robo aplicó la pena de 6 años de prisión, ya que fue ejecutado por dos personas y utilizaron armas de fuego; y por el delito de asociación ilícita, se estableció la sanción en 2 años de prisión ya que el hecho fue planeado con antelación. (F. 15)

Continúa indicando que el Tribunal Superior aplicó la pena de 15 años de prisión por el delito de homicidio y al sumarle la mitad de las otras dos sanciones, que representan 4 años de prisión, dio una totalidad de 19 años de prisión que debe cumplir el procesado. (F. 15)

Es por ello que el Abogado Defensor de Oficio estima que se está violentando el debido proceso y el principio de legalidad al calificar el homicidio como agravado y por otro lado imponer la sanción penal por el delito de robo agravado, e indica que debió tenerse en cuenta los numerales 5 ó 6 del artículo 132 del Código Penal.

Por otra parte, el letrado cuestiona la aplicación del tipo penal de asociación ilícita para delinquir, que exige que tres personas o más se asocien con el propósito de cometer delitos, y sin embargo en la sentencia se deja expuesto que el hecho fue ejecutado por dos personas. (F. 15)

En cuanto a la causal invocada, se tiene que el recurrente cita y transcribe el numeral 5° del artículo 2458 del Código Judicial que establece que habrá lugar a la revisión "cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que, por sí mismo o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición penal menos severa."

A renglón seguido, el abogado manifiesta que el procesado "se hace merecedor a una condena menos rigurosa por la aplicación de una disposición penal menos severa, ya que la sentencia incurre en errores que vulneran el debido proceso y el principio de legalidad."

Expresa el revisionista en el alegato de conclusión que le parece injusto que por no encuadrar la situación planteada exactamente en una de las causales de revisión que señala el artículo 2458 del Código Judicial se permita la violación al debido proceso como es el caso de haberse llamado a juicio y condenado por asociación ilícita sin que este delito se hubiese configurado y además se pase por alto reiteradas sentencias de la Corte Suprema de Justicia que categóricamente señalan que no se puede aplicar los tipos penales de homicidio y robo al mismo tiempo, peor aún si se aplica el homicidio agravado por el robo y el robo agravado por el uso de arma con la cual se cometió homicidio. (F. 30)

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Licdo. JOSÉ ANTONIO SOSSA RODRÍGUEZ, Procurador General de la Nación, indicó que el revisionista no aportó ninguna prueba o hecho novedoso, sino que cuestiona la individualización judicial de la pena impuesta a VICTOR JAVIER PINO; específicamente, que se le condenó por el delito de asociación ilícita para delinquir, tipo penal que exige la asociación de 3 o más personas y que ante la comisión de un delito de homicidio y robo, no es factible el aplicar ambos tipos penales al mismo tiempo.

Señala el funcionario que el planteamiento formulado por el Defensor de Oficio de VÍCTOR JAVIER PINO pudiese ser tomado en consideración en otras instancias del proceso, frente a este recurso extraordinario el mismo no reviste la calidad de nuevo hecho que pueda dar lugar a una revisión de la sentencia, por lo que solicitó a la Sala, salvo mejor criterio, no acceder a la revisión de la sentencia en comento. (F. 29)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Examinados los planteamientos del revisionista, la Corte advierte que éste no ha suministrado los hechos nuevos descubiertos luego de la condena de su patrocinado, sólo se ha limitado a señalar que de admitirse el recurso se tenga como prueba el expediente principal (F. 16), cuya materia ha sido objeto de análisis por el Tribunal de la causa.

La Sala debe señalar que comparte la opinión del señor Procurador en el sentido que no se ha comprobado la causal que prevé el numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial.

Sin embargo, esta Superioridad no puede pasar por alto la gravedad de los hechos que relata el revisionista, toda vez que la sentencia cuya revisión se demanda ha violentado el debido proceso que consagra el artículo 32 de la Constitución Nacional y el artículo 1968 del Código Judicial, pues el tribunal Superior sancionó a los procesados RODRIGO URIBE CASTROVERDE y VÍCTOR JAVIER PINO por el delito de asociación ilícita para delinquir cuando este tipo penal exige que "tres o más personas se asocien con el propósito de cometer delitos ..." (Artículo 242 del Código Penal)y ello no se ha dado en el presente caso. (Fojas 502-509 del expediente principal)

De otra parte, el Tribunal Superior sancionó a los procesados por los delitos de robo agravado y homicidio agravado, quebrantando el principio del "non bis in idem", regulado en el artículo 4 del Código Penal y en el artículo 1969 del Código Judicial, el cual impide sancionar doblemente a una persona por una sola conducta ilegal.

La Corte en reiterados fallos ha expresado que sancionar al sujeto activo por el delito de robo y por el delito de homicidio, que viene a ser el delito medio para la comisión del primero, y, por tal motivo conlleva una agravación de la pena, representa un doble castigo para el procesado.

De igual manera se ha señalado que no es factible aplicar el delito de homicidio y el robo a la vez, cuando uno sirve de medio para la ejecución del otro, porque el legislador al tipificar el homicidio agravado por razón de la comisión de delitos conexos -artículo 132 ordinal 5 del Código Penal- subsume ese otro, es decir el robo, para que no se sancione dos veces el mismo hecho.

Esta situación todavía puede corregirse de oficio, como se ha explicado en la Jurisprudencia patria: "tratándose de una revisión de sentencias penales, por lo que la Corte está en la obligación de aplicar el ordenamiento jurídico vigente aunque el mismo no haya sido alegado por el interesado" (Sentencia de 9 de mayo de 1997).

Es por ello que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2458, numeral 8 del Código Judicial, que establece que habrá lugar al recurso extraordinario de revisión "cuando una persona hubiere sido juzgada dos veces por el mismo delito", causal que se adecúa al caso en examen, se procede a ordenar la revisión de la causa seguida contra VICTOR JAVIER PINO, pero con fundamento en un derecho distinto del planteado por el defensor de oficio del sentenciado, ya que como fuera expuesto en jurisprudencia de esta Sala "tratándose de normas de orden público y sin la existencia de una prohibición expresa como la prevista para la casación, en donde no se pueden apreciar causales distintas de las alegadas, debe interpretarse y aplicarse el Código Judicial en todo aquello que es favorable al sujeto, siempre que ello sea conforme al principio 'favor libertatis' que está

implícito en el artículo 1972 del Código Judicial". (Ibid).

PARTE RESOLUTIVA

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACCEDE a la revisión solicitada por el abogado defensor de oficio de VÍCTOR JAVIER PINO y ORDENA que el expediente sea remitido al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial para que efectúe la revisión correspondiente.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR SAMUEL PÉREZ MONTERO CONDENADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de recurso de revisión solicitado por SAMUEL PÉREZ MONTERO, quien fuera condenado a sesenta (60) meses de prisión en sentencia de 24 de febrero de 1999, proferida por el Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Veraguas y confirmada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en fallo de 18 de agosto del mismo año, por delito contra el patrimonio (robo).

Conforme lo normado por el artículo 2050 del Código Judicial, esta Sala corrió traslado del presente negocio a la Licenciada María Estenia De Gracia, Defensora de Oficio, a fin de que formalizara adecuadamente, de existir causal para ello, la revisión demandada por el procesado, presentando oportunamente la profesional asignada para tal efecto, el escrito de formalización correspondiente.

La recurrente invoca como fundamento de este recurso extraordinario, la causal contenida en el numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial que se refiere a la existencia de "nuevos hechos que por sí mismos o combinados con las pruebas anteriores, pueden dar lugar a la absolución del acusado o una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición penal menos severa". Y aduce que "el informe preliminar levantado de la Policía Técnica Judicial, radica en un supuesto levantamiento de fracmentos (sic) de huellas en el lugar de los hechos sin que se determine la realidad de los hechos o mejor dicho la veracidad de este procedimiento ...". (fs. 11).

En este sentido, la jurisprudencia se ha pronunciado en innumerables ocasiones señalando que no pueden considerarse como hechos nuevos piezas procesales que fueron incorporadas al cuaderno penal antes de la condena del imputado, tal y como pretende la recurrente.

Por otra parte, de la lectura del recurso propuesto, se observa que la revisionista cuestiona el sentido interpretativo que le dio el juzgador a las normas aplicadas al proferir su decisión, al igual que también advierte el hecho de que no se consideró al fijar la pena "que la declaración de Sergio Ureña Castillo ubica la participación secundaria de Samuel Pérez Montero ...", argumentaciones propias para una sustentación de apelación, pero que en forma alguna constituyen nuevos hechos que permitan acceder a la revisión demandada.

Nuestra jurisprudencia se ha pronunciado, en innumerables ocasiones, en el sentido de que este recurso no es una tercera instancia y no es posible ordenar la revisión de una sentencia, si no se han cumplido con los requisitos que exige la ley. Así se señala en fallo de 30 de abril de 1997:

> "No se han individualizado los nuevos hechos que, después de dictada la sentencia condenatoria puedan por sí mismos o unidos a las pruebas existentes, justificar la revisión de una sentencia ejecutoriada. No debe olvidarse que este es un recurso extraordinario, que pretende debilitar o anular el principio de cosa juzgada, y seguridad jurídica que emana de las decisiones judiciales ejecutoriadas y por ello, la exigencia de la ley debe acatarse y de allí que sólo proceda la revisión cuando se plantea, y presenta un hecho auténticamente novedoso, no analizado ni considerado por los Tribunales en las instancias correspondientes".

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión presentado por la Licenciada María Estenia De Gracia en contra de la sentencia de 24 de febrero de 1999, proferida por el Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Veraguas.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO EDILBERTO KOOCSSY P. EN FAVOR DE SAÚL ABEL DELGADO RODRÍGUEZ CONDENADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Licenciado Edilberto Koocssy P., en representación de SAÚL ABEL DELGADO RODRÍGUEZ, interpuso ante la Sala Penal de la Corte Suprema recurso de revisión contra la sentencia No.37 de 3 de junio de 1997, dictada por el Juzgado Tercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Advierte la Sala, en primer lugar, que el recurso no se ajusta a los requisitos de forma establecidos en los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial. En efecto, por una parte, el recurrente incumple con lo preceptuado en el inciso primero del artículo 2458, pues no ha demostrado que la sentencia que impugna se encuentre debidamente ejecutoriada y, por otro lado, el escrito de revisión no viene acompañado de prueba alguna que pueda servir de fundamento a la iniciativa procesal, según exigencia del artículo 2459 citado.

La causal invocada por el recurrente es la contemplada en el numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial que exige la existencia de nuevos hechos; no obstante se limita a hacer un análisis de la declaración jurada que durante el proceso rindiera DELGADO RODRÍGUEZ, lo que no constituye en modo alguno hechos nuevos que se "hayan descubierto después de la condenación".

El escrito se dedica a cuestionar la valoración probatoria realizada por el tribunal, pretendiendo convertir este recurso en una tercera instancia, lo cual es inadmisible. En reiterados pronunciamientos esta Corporación ha definido lo que debe entenderse por "nuevo hecho", al respecto es la sentencia de 17 de

octubre de 1994, esta Sala señaló:

> "Considera esta Corporación de Justicia que no es viable el presente recurso de revisión, toda vez que el fundamento del mismo no se adecua apropiadamente al numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial, que señala el "descubrimiento de nuevos hechos" después de ejecutoriada la sentencia, situación que no se cumple en este recurso toda vez que el mismo se basa en consideraciones sobre la valoración que los juzgadores hicieron de hechos ya existentes en el sumario; por consiguiente, se deduce que no se han "descubierto nuevos hechos" que fuesen desconocidos en el proceso que pudiesen atenuar o extinguir la responsabilidad de ..., en el negocio que nos ocupa".

De todo lo anterior se concluye que el recurso presentado no cumple con las condiciones y requisitos restrictivos señalado en nuestra ley procesal, por lo que no se puede acceder a la pretensión del postulante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión presentado por el Licenciado Edilberto Koocssy P., contra la sentencia No. 37 de 3 de junio de 1997, dictada por el Juzgado Tercero de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR WILLIAM GONZÁLEZ VIVEROS CONDENADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEITICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la solicitud de revisión presentada por WILLIAM GONZÁLEZ VIVEROS, condenado por delito contra la salud pública.

Cumplido lo normado por el artículo 2050 del Código Judicial -que impone a la Sala Penal de la Corte Suprema la obligación de poner en conocimiento del Instituto de Defensoría de Oficio los recursos de apelación, casación y revisión ingresados a esta Superioridad a fin de que estos interpongan dichos recursos a favor de los reos que carecen de abogado que los represente-, esta Colegiatura corrió traslado de este negocio al Licenciado Roummel G. Salerno, Defensor de Oficio, quien en escrito visible a fojas 6-7 señala que "después de considerar la lectura correspondiente del mencionado proceso hemos arribado a la conclusión que el mismo no da cabida y de acuerdo a nuestro procedimiento penal vigente al señalado Recurso de Revisión que fuera solicitado por el Señor WILLIAM GONZÁLEZ VIVEROS".

En ese orden, conforme a la información proporcionada por el profesional designado para que formalizara la revisión, no procede la acogida de la iniciativa procesal pretendida por GONZÁLEZ VIVEROS.

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA la

solicitud de revisión formulada por WILLIAM GONZÁLEZ VIVEROS y, por consiguiente, ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

PROCESO SEGUIDO A DENIS JOSE MONTENEGRO CHAVARRIA Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia de 10 de agosto de 1999, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial condenó a ABDIEL CÁCERES MUÑOZ a la pena de cinco (5) años de prisión y la accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo período, por considerarlo responsable del delito de Homicidio en grado de tentativa, en perjuicio de CARLOS EDUARDO CONCEPCIÓN.

La precitada resolución judicial fue apelada por el Licdo. ERNESTO MUÑOZ GAMBOA, abogado defensor de oficio de CÁCERES MUÑOZ; el recurso fue sustentado en tiempo oportuno y fue concedido en el efecto suspensivo.

Así las cosas, se le dio traslado del libelo al Fiscal Segundo Superior del Primer Distrito Judicial, Licdo. MANUEL A. SUCCARI, quien presentó escrito de oposición a la apelación.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

Indica el abogado defensor de oficio que su patrocinado fue vinculado a la comisión del homicidio en grado de tentativa por los señalamientos realizados por dos testigos que admiten no haber estado presentes en el lugar de los hechos y no haber visto nada. Aunado a ello, se practicaron dos diligencias de reconocimiento: en una participó el lesionado, CARLOS EDUARDO CONCEPCIÓN y en la otra participó el testigo DENIS JOSÉ MONTENEGRO CHAVARRÍA, ambas diligencias dieron resultado negativo para la identificación del imputado. (F. 383)

Por otra parte, el agraviado en su declaración jurada excluye a CÁCERES MUÑOZ de la participación en el hecho punible y considera el recurrente que en forma objetiva no existe ningún elemento probatorio ni graves indicios que vinculen al procesado con la comisión del ilícito. (F. 384)

Señala la defensa técnica de CÁCERES MUÑOZ que el Tribunal A-quo al momento de dosificar la pena consideró que no existían atenuantes a favor de éste y no tomó en cuenta el numeral 8 del artículo 66 del Código Penal, que hace referencia a que el Tribunal puede aplicar como atenuantes circunstancias no preestablecidas por la ley, en este caso alega que el procesado solicitó un Juicio en Derecho. (F. 384)

El apelante concluye solicitando que se dicte una sentencia absolutoria por no existir suficientes elementos de prueba para condenar a su patrocinado o en su defecto se disminuya la pena impuesta tomando en cuenta el numeral 8 del artículo 66 del Código Penal. (F. 385)

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Fiscal Segundo Superior del Primer Distrito Judicial manifestó que existen suficientes elementos de prueba que vinculan a CÁCERES CRUZ con la comisión de los delitos imputados y por los cuales fue condenado en primera instancia, siendo estas piezas procesales las declaraciones juradas de los oficiales de policía GUSTAVO ERIC RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ FELIX UREÑA GIL, ERIC ALBERTO GONZÁLEZ, el testigo ISAAC LORENZO PEÑA RODRÍGUEZ, la declaración indagatoria de DENIS JOSÉ MONTENEGRO CHAVARRÍA, así como la declaración jurada del señor LORENZO PEÑA PÉREZ, padre del testigo ISAAC PEÑA. (Fs. 388-389)

En opinión del representante del Ministerio Público, no se configura ninguna de las circunstancias atenuantes comunes reguladas en el artículo 66 del Código Penal. Expresa el funcionario que comparte con el Tribunal Superior la sentencia dictada y la pena aplicada en base a los parámetros del artículo 56 del Código Penal, por lo que solicita a esta Superioridad que confirme el fallo recurrido. (Fs. 389-390)

FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA

Consta en las sumarias que en horas de la madrugada del 5 de octubre de 1996, el señor CARLOS EDUARDO CONCEPCIÓN, quien vive en Villa Grecia, salió de su residencia para comprar licor en la cantina "Calle 8". Cuando iba de regresó a su domicilio fue atacado por tres sujetos que intentaron robarle y lo hirieron.

Se observa en el dictamen médico forense que las heridas inferidas fueron por proyectil de arma de fuego y pusieron en peligro la vida del agraviado, a quien se le dio una incapacidad definitiva de 60 días a partir del incidente. (Fs. 52 y 70 respectivamente)

El Tribunal A-quo sentenció como responsable del hecho punible a ABDIEL ALBERTO CÁCERES MUÑOZ, señalando en la resolución que las lesiones inferidas a CARLOS E. CONCEPCIÓN pusieron en peligro su vida, todo ello en virtud de un intento de robo; por ende la conducta penal llevada a cabo se enmarca dentro del homicidio doloso agravado en grado de tentativa, tipificado por el artículo 132 numeral 5, en relación a los artículos 44 y 60 del Código Penal. Por tanto la pena oscila entre 4 años que representa un tercio (1/3) de la pena mínima y trece (13) años tres (3) meses que corresponde a los dos tercios (2/3) de la pena máxima, por lo que se le impuso la pena base de cinco (5) años de prisión.

La Corte pasa de inmediato a resolver la alzada sólo sobre los puntos a que se refiere el recurrente, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 2428 del Código Judicial.

La defensa técnica de CÁCERES MUÑOZ centra su inconformidad con el fallo de primera instancia en que no existe ningún elemento probatorio ni indicios graves contra su patrocinado que sustenten los cargos por los que éste fue sancionado.

La Sala advierte que, contrario a lo planteado por el recurrente, en las constancias procesales operan indicios graves que vinculan al procesado al caso subjúdice. Veamos.

En declaración jurada, GUSTAVO ERIC RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, miembro de la DIIP de Alcalde Díaz, manifestó haber participado en la capturada de uno de los sospechosos del hecho en comento, indicando que unidades del DIIP se apersonaron a la cantina "Calle 8" ubicada en la entrada de Villa Grecia e hicieron una redada donde apartaron a DENIS JOSÉ MONTENEGRO, al que se le notaba nervioso, y al menor de edad ISAAC LORENZO PEÑA. Estas personas fueron trasladadas a la oficina del DIIP y al tomarseles la declaración señalaron que el autor de las lesiones del señor CARLOS CONCEPCIÓN es el señor ALBERTO ABDIEL CÁCERES (a) "Betín" quien utilizó una pistola calibre 25 con la que hizo 5 detonaciones. (F. 17)

Por su parte, DENIS JOSÉ MONTENEGRO CHAVARRÍA, rinde declaración indagatoria luego de ser aprehendido en la redada que hiciera la DIIP, y expresó que venía en compañía de ISAAC PEÑA, que es menor de edad, cuando de repente unas personas que venían detrás de ellos comenzaron a correr. Ellos escucharon cinco detonaciones y salieron corriendo hacia una vereda, iban hacia la casa cuando les salió al paso ABDIEL CASTRO, quien portaba un revólver, y ANEL; éstos les dijeron que caminaran junto a ellos porque le habían disparado a una persona.

Señala MONTENEGRO CHAVARRÍA que se negaron a acompañar a ABDIEL y ANEL porque no querían ser involucrados en el asunto. ABDIEL sacó el revólver y se lo puso a ISAAC en la cabeza, y les dijo que ellos lo conocían a él y que eran unos miedosos. MONTENEGRO CHAVARRÍA le agarró la mano a ABDIEL y comenzaron a forcejear, éste le "chasqueó" el revolver en el hombro, y como se le encasquilló comenzó a montarlo nuevamente, ellos aprovecharon y se fueron corriendo. (F. 31)

De fojas 33 a 34 consta declaración jurada de MONTENEGRO CHAVARRÍA en la que se afirma y ratifica de lo expuesto en la indagatoria y de los cargos formulados contra terceros.

De otra parte, mediante declaración jurada DE CARLOS EDUARDO CONCEPCIÓN, quien es el agraviado, manifestó a las autoridades que, cuando estaba en el hospital, el papá de "Betín" fue a visitarlo y conversó con su esposa YACIRE. Días después, ésta se encontró con el señor CÁCERES en la entrada de Villa Grecia y éste le dijo que se había enterado que su hijo "Betín" le había disparado a su esposo y que le quería ayudar económicamente con los gastos que ocasionara la incapacidad. (F. 67)

El señor CONCEPCIÓN rindió ampliación de la declaración jurada en la que señaló que el papá del imputado le ofreció pagarle los tres meses de incapacidad, lo único que tenía que hacer era decir que no podía reconocerlo y que no hiciera cargos contra su hijo.

Agrega el agraviado que la persona que le disparo fue ABDIEL CÁCERES pues los dos muchachos que detuvieron (MONTENEGRO CHAVARRÍA y PEÑA RODRÍGUEZ)se lo dijeron a él y a su esposa, y eso lo sabe el padre de ABDIEL. (Fs. 219-220)

Mediante declaración jurada, DE JOSÉ FELIX UREÑA GIL, Cabo I de la Policía Nacional, con 11 años de servicio en la Institución, y quien participó en los operativos que se realizaron el día de los hechos, expresa que detuvieron alrededor de 12 a 15 personas para entrevistarlos, entre estos MONTENEGRO CHAVARRÍA y estando en la estación se le escuchó hablar sobre el herido y se le interrogó, señalando el entrevistado que esa noche escuchó tres detonaciones y la persona que las hizo es "Betín". MONTENEGRO señaló que venía con ISAAC y "Betín" venía delante de ellos con otros tres sujetos (F. 85)

Por su parte, ISAAC LORENZO PEÑA RODRÍGUEZ, quien es menor de edad y estaba caminado con MONTENEGRO CHAVARRÍA por Villa Grecia ya que iban para la casa, explica que el señor CONCEPCIÓN venía detrás de ellos, ANEL lo agarró y le hizo el "chino", éste empezó a forcejear con ANEL y gritaba algo así como cuñado. En ese momento "Betín" le hizo tres disparos en el cuerpo.

PEÑA RODRÍGUEZ señala que comenzó a correr junto con MONTENEGRO CHAVARRÍA y tomaron por un camino que sale a Alcalde Díaz. Detrás de ellos iban "Betín" y ANEL. "Betín" les dijo que se fueran con él para calle "J" de San Miguelito pero ellos no quisieron y éste con el arma en la mano intentó disparar al aire pero ya se le habían acabado las balas. (F. 96)

Se le preguntó al menor si sabía los motivos por el cual le dispararon al señor CONCEPCIÓN y éste explicó que era para robarle. (F. 96)

PEÑA RODRÍGUEZ dijo en ampliación de declaración jurada, que MONTENEGRO CHAVARRÍA y él vieron que ANEL no pudo con el señor CONCEPCIÓN y en el forcejeo vino ABDIEL CÁCERES y le hizo los tres disparos al agraviado.

Por otro lado, mediante declaración jurada, LORENZO PEÑA PÉREZ, padre del testigo ISAAC PEÑA RODRÍGUEZ, informó que su hijo estuvo detenido por un mes y tres semanas y cuando salió fue amenazado por ABDIEL ALBERTO CÁCERES (a) "Betín" porque lo había mencionado en su declaración, por tanto responsabilizaba a CÁCERES de cualquier daño que le ocurriera a sus hijos.

Agrega que el profesor CÁCERES, padre del imputado, habló con él y le pidió cooperación para que hablara con el ofendido para que retirara denuncia, dándole a entender que su hijo estaba metido en el asunto y le pidió ayuda económica. (Fs. 192-193)

CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL

Tal como se observa, al valorar estas declaraciones en su conjunto, se desprende que ABDIEL ALBERTO CÁCERES CRUZ es la persona que le ocasionó las heridas a CONCEPCIÓN y el móvil del hecho fue para robarle, por lo que no se comprueba lo señalado por el apelante.

El abogado defensor de oficio indica que su patrocinado fue vinculado a la comisión del ilícito por los señalamientos realizados por dos testigos que admiten no haber estado presente en el lugar de los hechos y no haber visto nada.

Si bien el recurrente no precisa cuáles son estos testigos, se infiere de la lectura del cuaderno penal que hace referencia al testimonio vertido por MONTENEGRO CHAVARRÍA quien manifestó que no estaba muy cerca del lugar en que le hicieron daño a CONCEPCIÓN pero que escuchó los disparos (F. 31).

No obstante, MONTENEGRO CHAVARRÍA señaló que el imputado le manifestó que le había disparado a una persona.

El otro testigo es PEÑA RODRÍGUEZ quien sí señaló que vio cuando le dispararon a CONCEPCIÓN, como se dejó expuesto en las líneas que anteceden, de allí que la Sala estima que no prospera el argumento del apelante.

El recurrente expresa que las diligencias de reconocimiento en las que participaron CARLOS EDUARDO CONCEPCIÓN y DENIS JOSÉ MONTENEGRO CHAVARRÍA, dieron resultado negativo para la identificación del imputado.

Sin embargo, coherente con dicho resultado, la Sala observa que el ofendido manifestó que al momento de ser atacado estaba bastante tomado y por eso no pudo reconocer al que le disparó, pero sí sabía que la persona que le disparó fue ABDIEL CÁCERES, pues MONTENEGRO CHAVARRÍA y PEÑA RODRÍGUEZ se lo dijeron a él y a su esposa. (F. 219)

Por su parte MONTENEGRO CHAVARRÍA dijo que "Betín" es vecino y los había amenazado, además temía que lo detuvieran a él y a "Betín" porque éste lo iba a matar (F. 32), por lo que ante lo señalado por el Fiscal en el sentido que MONTENEGRO CHAVARRÍA podía reconocer a CÁCERES MUÑOZ perfectamente, pero no quiso hacerlo, esta Superioridad estima que existen elementos que sugieren que MONTENEGRO CHAVARRÍA pudo haberse inhibido de reconocer al agresor, por temor a represalia.

Por otra parte, el recurrente estima que tras la determinación de la pena base se debió reconocer al procesado una rebaja de la sanción tomando en cuenta el contenido del numeral 8 del artículo 66 del Código Penal, que reconoce como atenuante común "Cualquier otra circunstancia no preestablecida por la ley, que a juicio del Tribunal deba ser apreciada por su analogía con las otras anteriores o por peculiaridades condiciones del ambiente".

Lo anterior fue fundamentado en que el procesado propuso la realización de la audiencia en derecho, decisión que "le ahorra a la institución el desgaste de Recursos Económicos y Humano que redundan en beneficio de la Justicia Penal, permitiendo que los recursos existentes puedan distribuirse en otras causas, que

ameriten tales gastos." (F. 384)

La Sala debe advertir que la renuncia del procesado al derecho a ser juzgado por Jurado de Conciencia y acogerse al Juicio en Derecho no puede reconocerse como una atenuante.

La disminución de la sanción a la que alude el apelante ha sido aplicada en diversas ocasiones por el Tribunal Superior siendo esta una interpretación analógica del citado numeral 8 con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 1 del 3 de enero de 1995 que adiciona el Capítulo VIII, al Título IX del Libro II del Código Judicial integrado por varios artículos, dentro de los cuales se encuentra el 2528-D que dispone que los casos que se sigan mediante el proceso abreviado si resulta pena de prisión, ésta puede ser disminuida entre 1/6 y una 1/3 parte.

El artículo 57 del código punitivo de manera clara determina que "No se pueden aumentar ni disminuir las penas, sino de conformidad con una disposición expresa de la ley". Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte ha señalado en sentencia de 12 de junio de 1998 y 9 de noviembre de 1999 lo siguiente:

> "En tal sentido, el Título IV del Libro III del Código Judicial denominado Juicios con Intervención de Jurado, en ninguna de sus normas establece que si el imputado renuncia al derecho de ser juzgado por jurados (art. 2331), ello le beneficiará para rebajarle la pena de prisión en caso de resultar culpable de alguno de los delitos que son competencia de los jurados de conciencia (art. 2320).
>
> Al respecto no existe norma dentro de dicho título que permita disminuirle al procesado la pena si se acoge al juicio en derecho. Lo que sería un contrasentido que el ejercicio de un derecho pueda ocasionarle perjuicio a su titular."

En consecuencia, la solicitud del apelante es improcedente, máxime por cuanto que la materia regulada por la citada Ley 1 va dirigida específicamente al Juicio Abreviado que se sigue en la esfera circuital y municipal, que no es el caso presente.

Tras el análisis realizado, la Sala concluye que no se encuentran fundados los reparos formulados por el recurrente y al no observar visos de ilegalidad en la decisión del A-quo, en aras de la independencia judicial, nos corresponde respetar dicha discrecionalidad, por lo que es del caso mantener la sanción impuesta a ABDIEL ALBERTO CÁCERES CRUZ.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y pro autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 10 de agosto de 1999, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) HUMBERTO A.COLLADO
(fdo.) ALBERTO H. GONZÁLEZ
Secretario Ad-Hoc

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A ROY ALCIDES ARIAS CASTAÑEDAS POR DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO Y A MICHAEL ALBERT SPEARS BULGIN POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO, EN PERJUICIO DE

ROBERT L. MESSMER. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia de 18 de agosto de 1999, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial condenó a ROY ALCIDES ARIAS CASTAÑEDAS a la pena de doce (12) años de prisión por el delito de homicidio y a MICHAEL ALBERT SPEARS BULGIN a la pena de cinco (5) años de prisión por el delito de Robo, e inhabilitación por el mismo término para ejercer funciones públicas; ambos delitos fueron cometidos en perjuicio de ROBERT L. MESSMER.

La Licda. GUILLERMINA McDONALD DE OTTEY, Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial y el procesado ROY ALCIDES ARIAS CASTAÑEDA anunciaron que apelaban la resolución y sustentaron los recursos en tiempo oportuno, por lo que se les concedió en el efecto suspensivo.

DISCONFORMIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial señaló que al momento de la dosificación de la pena, el Tribunal Superior partió por la pena mínima del homicidio y robo agravado, dejando de percibir aspectos de mucha valía que ordena el artículo 56 del Código Penal, toda vez que en los antecedentes penales de ambos procesado reflejan que estos tiene una proclividad hacia la actividad criminal, a tal punto que ROY ALCIDES ARIAS CASTAÑEDA fue examinado por el Psicólogo Forense quien determinó que éste refleja una personalidad psicopática.

Por su parte, MICHAEL ALBERT SPEARS BULGIN con gran facilidad utilizó nombres y apellidos distintos a los propios, en aras de ocultar su identidad y por ende confundir la investigación, corroborando una conducta totalmente antisocial de su parte. (F. 1128)

Por lo anterior, la Fiscal solicita que se aumente la pena fijada a ARIAS CASTAÑEDA y SPEARS BULGIN.

DISCONFORMIDAD DEL PROCESADO

La Licda. MATILDE ALVARENGA DE APOLAYO, Abogada Defensora de Oficio de ROY ALCIDES ARIAS CASTAÑEDA, formalizó el recurso de apelación que éste anunció y solicitó que se le tome en cuenta la atenuante de la confesión, toda vez que el procesado aceptó desde la diligencia indagatoria que había ingresado al barco de los esposos MESMER y relató cómo ocurrió la lamentable muerte del señor ROBERT L. MESSMER, reiterando su confesión en el acto de audiencia. (F. 1132)

Igualmente, solicita que se le reconozca al procesado ARIAS CASTAÑEDA el beneficio del artículo 2112 del Código Judicial porque en sus declaraciones indagatorias esclareció la investigación puesto que no se sabía lo sucedido, ni el número exacto de partícipes. (F. 1132)

Por otra parte, la Licda. ALVARENGA DE APOLAYO tiene a su cargo la defensa del procesado MICHAEL ALBERT SPEARS BULGIN, por lo que en el memorial de apelación se refirió a su situación procesal indicando que éste fue absuelto por homicidio pero condenado por robo y se le impuso la pena de 5 años de prisión, la cual prácticamente ha cumplido, pues se encuentra detenido desde el 3 marzo de 1995 y no apeló porque en marzo del presente año pagaría completamente su pena por el delito de robo. (Fs. 1132-1133)

Finalmente, solicita la abogada que se revoque la sentencia de ROY ALCIDES ARIAS y se le conceda la atenuante de confesión, así como el beneficio del Artículo 2112 del Código Judicial.

OPOSICIÓN A LA APELACIÓN

La defensa técnica de ARIAS CASTAÑEDA y SPEARS BULGIN presentó escrito de oposición a la apelación indicando que objeta la solicitud que hace la Fiscal Superior en el sentido que se aumente la pena de sus patrocinados. La letrada considera que la pena impuesta a los procesados se basó fundamentalmente en la realidad procesal de la investigación del hecho y ello les hace merecedores de la atenuante de confesión a su favor.

Seguidamente, manifiesta la letrada que ARIAS CASTAÑEDA fue juzgado en derecho por los cargos de homicidio y robo, declarándose confeso de éstos ilícitos y siendo condenado por homicidio doloso agravado, cuya pena oscila entre los 12 y 20 años de prisión, por lo que los Magistrados del Tribunal Superior fijaron la pena base en 12 años basándose estrictamente en lo que indica el artículo 56 del Código Penal, valorando los aspecto objetivos y subjetivos del hecho punible, la conducta posterior al hecho punible toda vez que los imputados sostuvieron conversaciones tanto con los Magistrados y con conocimiento del Ministerio Público, en donde colaboraron en la localización de los otros partícipes. (F. 1138)

En relación al procesado SPEARS BULGIN, señaló que éste se sometió a juicio con intervención de Jurado de Conciencia, en el que fue absuelto del cargo de homicidio, pero fue condenaron por el delito de robo y los Magistrados le impusieron la pena de 5 años de prisión, sin otorgarle ningún tipo de atenuantes o agravantes, valorando igualmente su colaboración en este caso.

En cuanto a los exámenes psicológicos a que se refiere la Fiscal, señala que estos no constituyen de por sí una agravante como se indica en los incisos del Artículo 67 del Código Penal. (F. 1139)

Por último, la Licda. MATILDE ALVARENGA DE APOLAYO manifiesta que MICHAEL ALBERT SPEARS BULGIN explicó que se cambio el nombre cuando ingreso al centro penitenciario, pero en el transcurso de la investigación al ver lo delicado del caso manifestó de manera voluntaria a las autoridades cual era su verdadero nombre y pidió que fueran llamados sus familiares para que corroboraran lo que les manifestó. (F. 1139)

FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA

Corresponde a la Sala examinar el contenido de la sentencia objeto de impugnación, observando solamente los puntos a que se han referido los recurrentes en sus escritos de apelación, tal como lo preceptúa el artículo 2428 del Código Judicial.

La presente causa criminal trata sobre el robo y muerte violenta de ROBERT L. MESSMER, hecho ocurrido el día 19 de febrero de 1995, en la embarcación Lambda Nu, en aguas adyacentes a la Isla Ranchería, Corregimiento de Bahía Honda, Distrito de Soná, Provincia de Veraguas.

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial determinó que los responsables de la acción ilícita son los señores ROY ALCIDES ARIAS CASTAÑEDAS y MICHAEL ALBERT SPEARS BULGIN, conclusión a la que llegó tras el siguiente análisis:

> "Es evidente que el homicidio del ciudadano norteamericano ROBERT L. MESSMER, de acuerdo con la confesión, fue cometido por VICENTE ROY THOMAS (SIC: léase ROY ALCIDE ARIAS CASTAÑEDAS) (a) PERLITA, ... Sin embargo, por otro lado está claro que la intención del o los autores del hecho no fue el de cometer el homicidio, sino el de procurarse medios para culminar la fuga desde la isla-presidio.-
>
> Este hecho ubica el homicidio perpetrado como homicidio doloso agravado, con sanción de doce (12) a veinte (20) años de prisión ...

> ubicando lo actuado dentro de lo presupuestado en el artículo 132 en su numeral 5 del Código Penal. Asimismo hay que tener en cuenta que fue efectuado con auxilio de otras personas, tomando como tales personas a los otros dos (2) evadidos que abordaron la nave asaltada y que no fueron capturados; esto, reforzado con el resultado del protocolo de necropsia que indica que la víctima tenía múltiples lesiones en ambos lados de su cabeza, de su tórax y piernas, lo cual determinó que había sido atacado por varias personas.En cuanto al delito de robo, se declaró confeso el imputado ROY ALCIDES ARIAS CASTAÑEDAS (a) PERLITA y el jurado de conciencia declaró culpable al ciudadano MICHAEL ALBERT SPEARS BULGIN. Este delito en cuanto a la situación legal de ARIAS CASTAÑEDAS, es una condicionante para catalogar el homicidio doloso como agravado ... En cuanto a SPEARS BULGUIN(SIC) el robo calificado fue resultado circunstancial de los hechos y se impondrá la sanción mínima de cinco (5) años de prisión por este delito.-El delito de homicidio será penado con una sanción de doce (12) años de prisión, sin agravantes ni atenuantes. (F. 1117)

Antes de entrar al análisis del caso, la Sala observa que en la parte motiva de la sentencia se indica que quien cometió el homicidio fue VICENTE ROY THOMAS cuando en las sumarias consta que el responsable por ese hecho punible es ROY ALCIDES ARIAS CASTAÑEDAS, lo cual revela que el Tribunal A-quo, incurrió en un error que provoca que la sentencia resulte incoherente en cuanto a la persona responsable del homicidio.

Como ya se dijo, la Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial difiere del criterio del Tribunal A-Quo en cuanto a la pena base impuesta, porque dejó de percibir aspectos que ordena el artículo 56 del Código Penal, refiriéndose específicamente a las condiciones personales de los procesados, pues señala que ambos tienen proclividad a la actividad criminal, por lo que con base en ello solicita el aumento de la pena.

No obstante, como se observa en lo transcrito, el Tribunal Superior estableció la pena base de conformidad con lo normado en el artículo 56 del Código Penal, que permite al juzgador imponer la pena entre el mínimo y el máximo contenido en el tipo penal infringido, pero sujeto a los criterios que la citada normativa penal contempla.

La Sala ha manifestado que "corresponde al Tribunal del conocimiento tomar en cuenta las circunstancias del artículo 56 del Código Penal al fijar la pena base en abstracto, y que la misma debe ser respetada por el Tribunal de alzada en aras de la independencia judicial y la discrecionalidad que tienen los jueces de instancia al momento de la dosificación de la pena, sin perjuicio de que existan otras circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que deben ser aplicadas al momento de la concretización de la pena." (Agosto 2 de 1996)

En ese orden de ideas, también se ha señalado en la jurisprudencia que por la interpretación del artículo 56, la pena base impuesta no es modificable cuando no se observen visos de ilegalidad manifiesta. (Junio 18 de 1999)

Así las cosas, la Corte advierte que El Tribunal Superior al momento de fijar la pena base al procesado ARIAS CASTAÑEDA, que fue juzgado en derecho, señaló en forma diáfana que la norma penal vulnerada lo era el artículo 132 del Código Penal, que regula el homicidio doloso agravado, lo que es coherente con los hechos que constan en el cuaderno penal en examen y se tuvo en cuenta los aspectos de que trata el artículo 56 citado, aplicándose la pena mínima para este delito que es 12 años de prisión, dentro del intervalo penal señalado para ese hecho punible. Además el A-quo indicó que no concurren circunstancias agravantes ni atenuantes, criterio que comparte esta Superioridad. (F. 1117)

En el caso del procesado SPEARS BULGIN debe señalarse que se acogió al juicio con intervención de jurados de conciencia y el Presidente de la Audiencia

sometió a consideración de los jueces legos, dos cuestionarios. El objeto de los mismos fue que determinaran si SPEARS BULGIN era culpable o inocente, primero, de haber participado en la muerte del señor ROBERT L. MESSMER, y segundo, de haber participado en el robo perpetrado en contra de éste. En el primero se determinó su inocencia y en el segundo su culpabilidad. (Fs. 982 y 983 respectivamente)

Esta Corporación de Justicia hace un llamado de atención al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, pues ya ha indicado la jurisprudencia, que en los casos que se presenta el homicidio como delito medio para la comisión de otro hecho punible, como es el robo, al emitir el auto de llamamiento a juicio, no es procedente la apertura de causa criminal por ambos delitos sino que basta que se exprese que el o los imputados son presuntos transgresores de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título I, del Libro II del Código Penal, es decir el delito de homicidio doloso y, de ser encontrados culpables, al momento de realizar la individualización judicial de la pena, el juzgador debe tener en cuenta que la situación jurídica no se rige por los postulados del concurso real de delito, sino que la misma debe ser calificada como delito de homicidio doloso agravado y establecer el grado de participación criminal que le cabe a cada uno de los procesados. (cfr. Sentencias de 18 de abril de 1997; 27 de septiembre y 30 de noviembre de 1999)

No obstante, en esta etapa procesal, como quiera que la responsabilidad de SPEARS BULGIN fue decidida por un Jurado de Conciencia, la misma no puede ser modificada por medio de este recurso ordinario.

En otro orden de ideas, la defensa técnica de ARIAS CASTAÑEDA plantea que a éste debe reconocersele la atenuante común prevista en el numeral 5 del artículo 66 del Código Penal, es decir, la confesión oportuna y espontánea del agente, la que se configura cuando "se ha hecho en el momento procesal adecuado, cuando la confesión es la única forma de conocer la verdad material del hecho, y por tanto deviene en una colaboración importante para el funcionario de instrucción". (Septiembre 13 de 1996; Febrero 12 de 1999)

La Sala considera que no concurre la atenuante invocada por la recurrente, toda vez que en las sumarias consta que ARIAS CASTAÑEDA fue recapturado el 23 de febrero de 1995 (F. 75), seis días después de la comisión del hecho punible y ya se contaba con el testimonio de la señora VICKY LEE MESSMER, quien fuera esposa del hoy occiso y rindió declaración jurada el día en que se cometió el ilícito, manifestando a las autoridades que su esposo y ella se encontraban en su yate Lambda Nu cuando fueron atacados por cuatro sujetos y a uno de estos sujetos le decían PERLI o PERLITA que era como el jefe y permanecía siempre adelante del bote. (Fs .60-61;67)

Al ser capturado ROY ALCIDES ARIAS CASTAÑEDAS, las autoridades se percataron de que éste que se encontraba reseñado en los archivos del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial y se le conocía con el alias de "PERLITA". (F. 121)

Por otra parte, el procesado fue entrevista por el detective EDWIN G. NÚÑEZ, miembro de la Policía Técnica Judicial, el 24 de febrero de 1995, pero no dijo nada referente al caso. (F. 122)

En Informe de Balística fechado 8 de marzo de 1995, se determinó que el arma con que se le causó la muerte a ROBERT MESSMER presentaba varias huellas digitales y se dictaminó que:

> "Al ser comparados los cuatro fragmentos latentes con las impresiones dactilares de las personas arriba anotadas, encontramos que el fragmento #4, de tipo palmar, corresponde a la región hipotenar de la mano derecha del ciudadano ROY ALCIDES ARIAS CASTAÑEDAS, reseñado en los archivos con el A-50173." (F. 287)

En cuanto a la declaración indagatoria de ARIAS CASTAÑEDAS, no fue sino hasta el 17 de junio de 1996, un año y tres meses después de la comisión del hecho, que manifestó al agente de instrucción que estaba arrepentido de haber estado con sus compañeros y dijo que no había matado a nadie. (Fs. 698-699)

El procesado ARIAS CASTAÑEDA se declaró confeso y arrepentido en el Acto de Audiencia en Derecho de la comisión del homicidio y robo en perjuicio de ROBERT L. MESSMER. (F. 1094-1110)

Como se observa, independientemente de que el procesado hubiese aceptado su participación en este hecho ante el Tribunal A-quo, su autoría se habría determinado por los otros medios de prueba allegados al proceso y que son utilizados por el Ministerio Público para la investigación y comprobación de los diversos delitos.

Con respecto al procesado SPEARS BULGIN, la defensora de oficio indica que éste cumplía la pena el 3 de marzo del año en curso, motivo por el cual no apeló.

Se observa en la encuesta penal que SPEARS BULGIN fue recapturado el 23 de febrero de 1995 (F. 75), y como quiera que desde esa día está privado de libertad por el caso subjúdice, se tiene que a la fecha ha excedido la pena impuesta por el Tribunal Superior, motivo por el cual la Sala accede a lo pedido por la defensa técnica.

Luego de las consideraciones expuestas, considera esta Sala que el fallo apelado debe ser reformado parcialmente y a ello procede.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la sentencia de 18 de agosto de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, solo en el sentido de ORDENAR la inmediata libertad de MICHAEL ALBERT SPEARS BULGIN de no tener otra causa pendiente, y CONFIRMA en lo demás.

Notifíquese, Cúmplase y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUSTRACCIÓN DE MATERIA

SUSTRACCIÓN DE MATERIA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A NANCY SAAVEDRA POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA Y CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA, mediante escrito presentado 11 de enero del presente año, solicitó la extinción de la pena de cincuenta y dos (52) meses de prisión impuesta a su representada, NANCY SAAVEDRA por el Juzgado Tercero de Circuito penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, por haber sido encontrada culpable de delitos CONTRA LA FE PUBLICA.

Esta solicitud se fundamenta en el indulto otorgado a su representada a través del Decreto Ejecutivo No. 201 de 30 de agosto de 1999.

OPINION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

El licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA RODRIGUEZ, al emitir su opinión, es del criterio que este Tribunal Colegiado debe negar la solicitud y en consecuencia no debe declarar extinguida la pena de NANCY SAAVEDRA porque el referido Decreto Ejecutivo fue derogado por el Decreto Ejecutivo No. 213 de 3 de septiembre de 1999, que revocó en todas sus partes los indultos que aquél concedía.

SITUACION PROCESAL

La Sala advierte, que la presente solicitud se presentó mientras se surtía recurso de Casación en el Fondo interpuesto por el apoderado judicial de NANCY SAAVEDRA, licenciado CARLOS EUGENIO CARRILLO por lo que la petición contenida en el presente escrito fue resuelta en el recurso de Casación aludido.

Razón por la cual no procede la solicitud presentada por el referido letrado, ya que nos encontramos ante el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA SUSTRACCIÓN DE MATERIA en el presente asunto penal.

Notifiquese,

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN SEGUIDAS POR LA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, COMETIDO EN PERJUICIO DE PEDRO AÑINO AGRAZAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su mérito legal, el Procurador General de la Nación ha enviado a la Sala Penal de la Corte Suprema las sumarias, en las que se investiga el homicidio culposo cometido en perjuicio de Pedro Añino Agrazal, y en las que está presuntamente involucrado Arturo Ulises Vallarino Bartuano.

La Sala estima que es necesario examinar la competencia para conocer la situación jurídica de un Vicepresidente de la República. Sobre este tema la Corte ha señalado en base al numeral 2 del artículo 87 del Código Judicial, "que el conocimiento de las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los Vicepresidentes de la República, le corresponde igualmente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia" (Cfr. Sentencia del Pleno de 4 de junio de 1992).

Como se observa la Sala Penal carece de competencia para resolver el presente negocio. En consecuencia, lo procedente es inhibirse del conocimiento del proceso y remitirlo al Pleno de esta Superioridad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SE INHIBE de conocer este negocio y lo REMITE al Pleno de la Corte Suprema de

Justicia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ALBERTO H. GONZALEZ H.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL

ABRIL DE 2000

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS MOORE EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES LOS ACUERDOS NOS. 16 DE 14 DE ABRIL DE 1998, EL N° 21 DE 16 DE JUNIO DE 1998, AMBOS EXPEDIDOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA, (APROBACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN ENTRE LA EMPRESA SUFI INTERNACIONAL (PANAMA) Y EL MUNICIPIO DE LA CHORRERA). MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Moore, actuando en representación del PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declaren nulos por ilegales, los Acuerdos Nos. 16 de 14 de abril de 1998 y el N° 21 de 16 de junio de 1998, ambos expedidos por el Consejo Municipal del Distrito de La Chorrera, (aprobación del Contrato de Concesión entre la Empresa SUFI INTERNACIONAL (PANAMA) y el MUNICIPIO DE LA CHORRERA).

La Sala advierte que la parte actora ha presentado una solicitud especial con el fin de que sean suspendidos provisionalmente los efectos del acto impugnado, en los siguientes términos:

> **"Pido a los Honorables Magistrados de la Sala Tercera, se sirvan decretar la suspensión provisional del Acuerdo N° 21 de 16 de junio de 1998 y el Acuerdo N° 32 de 5 de noviembre de 1998.**
>
> **Se funda la petición en que el Honorable Consejo del Distrito de la Chorrera no ha cumplido con el procedimiento de las normas que se refiere a la Ley 56 de 1995 y la Ley N° 5 de 15 de abril de 1988, modificada por la Ley N° 31 de 30 de diciembre de 1994. En consecuencia se debe suspender el efecto del Acuerdo N° 21 de 16 de junio de 1998." (Ver foja 107 del expediente)**

Esta Superioridad pasa a examinar los argumentos planteados por la parte actora para decidir, conforme a derecho, si procede o no dicha solicitud de suspensión provisional. El Artículo 73 de la Ley 135 de 1943 faculta al Pleno de la Sala Tercera (Contencioso Administrativo) para suspender los efectos del acto impugnado "si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave".

Para resolver la petición de Suspensión Provisional de los actos impugnados, la Sala ha realizado un detenido examen del material incorporado al proceso, y ha llegado a la conclusión de que hasta este momento no se han acreditado motivos o circunstancias que justifiquen decretar con carácter de urgencia la citada medida cautelar.

En lo que atañe al denominado "fumus bonis iuris" (apariencia de buen derecho) que es el primer presupuesto de procedibilidad de la medida cautelar de Suspensión, no se observa la presencia de una prueba sumaria que de modo ostensible, claro e incontestable acredite a simple vista los cargos de ilegalidad expuestos por el demandante. En este sentido, no se cuenta, en esta fase incipiente del proceso, con los elementos probatorios necesarios para que ésta Corporación, efectúe un ponderado y ecuánime análisis de las violaciones jurídicas alegadas.

Por su lado, en lo que respecta al llamado periculum in mora (peligro o amenaza que puede afectar los intereses en conflicto por la demora natural de los procesos judiciales), la Sala conceptúa, que en las condiciones de incertidumbre

en que se encuentra la impugnación promovida por el demandante, la Suspensión Provisional impetrada no tutelaría el interés general, ya que, de adoptarse la misma, podría afectarse la prestación de un importante servicio público como lo es la recolección y disposición final de la basura en el Distrito de La Chorrera.

En definitiva, ésta Corporación es del criterio que con la documentación que reposa en Autos no existen mayores y fundados elementos, que, en las actuales circunstancias, justifiquen ordenar con carácter de urgencia, la Suspensión Provisional de los actos que son objeto de impugnación.

Es importante destacar finalmente que, las consideraciones que preceden en nada comprometen o afectan el fondo de la cuestión controvertida, la cual en su momento será analizado ampliamente por ésta Corporación al estudiar y decidir sobre los cargos de ilegalidad invocados por el promotor de la presente demanda de nulidad.

En mérito de los anteriores señalamientos, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión provisional del Acuerdo N° 21 de 16 de junio de 1998 y el Acuerdo N° 32 de 5 de noviembre de 1998.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE, EN REPRESENTACIÓN DE EXPANSIÓN EXTERIOR, S. A. Y DE ICASUR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 03772 DE 26 DE JULIO DE 1999, DICTADA POR LA MINISTRA DE SALUD, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE , actuando en representación de las sociedades EXPANSIÓN EXTERIOR, S. A. e ICASUR, S. A., ha presentado dentro de la presente demanda contencioso administrativa y por segunda ocasión, Solicitud de Suspensión Provisional de los efectos de la Resolución No. 03772 de 26 de julio de 1999, dictada por la entonces MINISTRA DE SALUD.

La parte actora sustenta su solicitud de suspensión provisional en los siguientes términos:

> "1. Las accionantes EXPANSIÓN EXTERIOR, S. A. e ICASUR, S. A., sufrirán daños económicos irreparables, a pesar de que se decrete eventualmente la ilegalidad y consiguiente nulidad del acto administrativo acusado, si durante el lapso que falta para que este tribunal contencioso administrativo emita sentencia, el Ministerio de Salud procede a formalizar los contratos correspondientes con ICUATRO, S. A. y TECNOVE, S. A. En este caso, si esta Sala de la Corte Suprema de Justicia reconociere que las propuestas económicas presentadas por las accionantes EXPANSIÓN EXTERIOR, S. A. e ICASUR, S. A., son las más favorables para los intereses del Estado, y procediese a decretar la nulidad del acto cuestionado, la sentencia resultaría ilusoria en la práctica, ya que no existiría objeto sobre el cual realizar nuevas contrataciones.

> Es preciso anotar que, en el presente caso, el acto administrativo acusado lleva en sí mismo la prueba de su violación y la prueba de los daños irreparables que se causarían a las personas a quienes afecta, si dicho acto se llegare a ejecutar. En efecto, el examen de la misma Resolución No. 03772 de 26 de julio de 199 permite apreciar que los Renglones No.1 y No. 2 de la Licitación Pública Internacional No. 005 no fueron adjudicados a nuestras representadas EXPANSIÓN EXTERIOR, S. A. e ICASUR, S. A., y que por tanto éstas perderían las oportunidades de negocio que representan proporcionar al Estado los bienes y servicio de que tratan los dos renglones que fueron objeto del acto público. Lo anterior es a nuestro juicio tan obvio, que el tribunal puede apreciar por sí mismo, sin necesidad de acudir al dictamen de peritos.
>
> 2.- En el presente caso, resulta ostensible y clara, prima facie, la violación del artículo 45 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, sobre Contratación Pública, el cual manda adjudicar, mediante resolución motivada, la licitación pública al proponente que haya obtenido la mayor ponderación de acuerdo con la metodología de ponderación de propuestas señaladas en el pliego de cargos. En efecto, mediante la Resolución No. 03772 de 26 de julio de 1999, que no contiene motivación alguna, se adjudicaron definitivamente los renglones No. 1 y No. 2 de la Licitación Pública Internacional No. 005 a las empresas que en ambos casos quedaron en segundo lugar, desconociendo el hecho de que la Comisión Técnica Evaluadora asignó la mayor ponderación a las propuestas presentadas por el Consorcio EXPANSIÓN EXTERIOR, S. A. -ICASUR, S. A.
>
> Es urgente, por parte, suspender provisionalmente los efectos del acto acusado, para evitar que se irroguen daños irreparables a las accionantes y al Estado.” (Fs. 63 a 64).

Los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) pasan a examinar, en esta segunda oportunidad, los argumentos planteados por la parte actora para decidir conforme a derecho si procede o no dicha solicitud de suspensión provisional.

El objeto principal de la medida cautelar que se solicita, es el evitar un perjuicio grave, de acuerdo a lo indicado en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943 y como lo ha indicado la Sala en reiteradas ocasiones también se pretende con esta medida preservar la existencia del acto administrativo objeto de la demanda contencioso administrativa que se instaura.

La Sala Tercera de la Corte Suprema, ha establecido que en los casos en que se pretenda obtener la medida de suspensión provisional en las demandas contencioso administrativas, pueden tener procedencia siempre y cuando se evidencie que de no accederse a la medida cautelar, se estará produciendo un daño o perjuicio grave, notorio, de difícil o imposible reparación, y cuando de un examen prima facie de los elementos aportados, la Sala pueda formarse la opinión de que, pese a encontrarnos en una etapa incipiente del proceso, el demandante posea lo que la doctrina denomina el “fumus boni iuris” o apariencia del buen derecho, es decir, que el acto administrativo de cuyos efectos se requiera la suspensión, esta rodeado de ciertos elementos que pudiesen afectar su legalidad.

En el presente caso, observamos que no estamos frente a un perjuicio notoriamente grave, y de difícil o imposible reparación, por lo que consideramos, no procede decretar la medida cautelar solicitada.

En consecuencia, La Sala Tercera (Contencioso Administrativa), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la Solicitud de Suspensión Provisional de los efectos de la Resolución No. 03772 de 26 de julio de 1999, expedida por la entonces MINISTRA DE SALUD, dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada

por la firma forense ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE, en representación de las sociedades EXPANSIÓN EXTERIOR, S. A. e ICASUR, S. A..

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA PATTÓN, MORENO & ASVAT, EN REPRESENTACIÓN DE COMUNIDAD ARABE DE PANAMA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 201-2142 DE 31 DE DICIEMBRE DE 1996, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Pattón, Moreno & Asvat, actuando en representación de la COMUNIDAD ARABA DE PANAMA, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 201-2142 de 31 de diciembre de 1996, expedida por el Director General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante la Resolución N° 201-2142 de 31 de diciembre de 19996, expedida por el Director General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, se resuelve "rechazar la inscripción de la COMUNIDAD ARABE DE PANAMA, con R.U.C. 3244-0015-C-12078, como entidad que pueda recibir donaciones deducibles del Impuesto sobre la Renta. En Resolución N° 201-291 de 3 de marzo de 1997, expedida por el Director General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, se mantiene en todas sus partes la mencionada Resolución N° 201-2142. Mediante Resolución N° 133 de 18 de agosto de 1997, expedida por el Ministro de Hacienda y Tesoro, se resuelve confirmar en todas sus partes la Resolución N° 201-2142 de 31 de diciembre de 1996 y su acto confirmatorio contenido en la Resolución N° 201-291 de 3 de marzo de 1997.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión consistente en una petición para que la Sala Tercera, declare que es nula por ilegal la Resolución N° 201-2142 de 31 de diciembre de 1996, expedida por el Director General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, como también sus actos confirmatorios. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro está obligada a inscribir como entidad autorizada para recibir donaciones deducibles del Impuesto sobre la Renta a la asociación sin fines de lucro, denominada Comunidad Arabe de Panamá, toda vez que cumple fielmente con los requisitos de ley para ser beneficiaria de dicha autorización y consiguiente inscripción.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción la firma Pattón, Moreno & Asvat, parte señalando que la Comunidad Arabe de Panamá cuenta con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Gobierno y fue reconocida por el Ministerio de Educación, como una institución educativa sin fines de lucro, relevantes aspectos que a su criterio no se tomaron en cuenta al expedirse el acto demandando. Se opone a las consideraciones expuestas por la Administración para rechazar la solicitud planteada, en cuanto a que no se demuestra sus ejecutorias en beneficio de la comunidad como una tarea constante, ya que dicha

asociación se mantuvo al margen de proyectarse como asociación sin fines de lucro y realizar actividades de cualquier tipo, al encontrarse pendiente de ser reconocida por todas las instituciones competentes. También se destaca que la Dirección General de Ingresos ha autorizado para recibir donaciones deducibles del Impuesto sobre la Renta, a asociaciones cuyos fines y objetivos se encaminan a grupos limitados, no obstante, su ámbito de acción está dirigida a la comunidad panameña en general; tal es el caso del Centro Cultural Chino-Panameño, Unión Cultural Panamá-Brasil, y la Asociación China de Panamá. Como disposiciones legales infringidas, la firma Pattón, Moreno & Asvat, invoca el parágrafo uno, literal a), del artículo 697 del Código Fiscal, así como el artículo 708 ibidem; el literal b) del artículo 47 del Decreto Ejecutivo N°170 de 1993; el artículo 1 del Código Civil; y el artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, adoptada mediante Ley N°15 de 28 de octubre de 1977, que son del tenor siguiente:

"ARTICULO 697:...

Parágrafo Uno: Serán también deducibles los gastos o erogaciones siguientes:

a) Las donaciones a instituciones educativas o de beneficencia del país sin fines lucrativos, siempre y cuando se trate de instituciones previamente aprobadas para tal fin por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social o por el Ministerio de Salud, según sea el caso; y las donaciones destinadas para el programa de Acción Cívica de la Guardia Nacional ..."

"ARTICULO 708: ...

d) Las rentas de los asilos, hospicios, orfanatos, iglesias, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro reconocidas como tales, siempre que tales rentas se dediquen exclusivamente a la asistencia social, la beneficencia pública, la educación o el deporte ..."

"ARTICULO 47; Son deducibles para el contribuyente los gastos o erogaciones en concepto de donaciones en dinero o en especie a:
...
b) iglesias de cualquier culto o seminarios conciliares y sociedades religiosas o de beneficencia, asilos, hospicios, orfanatos, instituciones educativas y fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, expresamente reconocidas por la Dirección General de Ingresos, la que para otorgar tal reconocimiento deberá tomar en consideración que las mismas hayan sido previamente aprobadas para esos fines por el Ministerio Competente. También son deducibles las cuotas pagadas por el contribuyente en concepto de afiliación a las referidas entidades."

"ARTICULO 1: La Ley obliga tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes o transeúntes en el territorio de la República; y una vez promulgada, la ignorancia de ella no sirve de excusa."

"ARTICULO 24: Todas las personas son iguales ante la Ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección ante la Ley."

En opinión del recurrente, el parágrafo Uno, literal a, del artículo 697 del Código Fiscal ha sido infringido por interpretación errónea, por cuanto que la Dirección General de Ingresos negó la solicitud de COMUNIDAD ARABE DE PANAMA, en el supuesto incumplimiento de los requisitos establecidos por ley, y pasó por alto el claro sentido de la disposición legal en referencia, de la cual se

infiere que la inscripción como entidad autorizada para recibir donaciones deducibles del Impuesto Sobre la Renta depende, "exclusivamente", de la aprobación como institución sin fines de lucro por la autoridad competente.

El literal b) del artículo 47 del Decreto Ejecutivo N°170 de 1993, que desarrolla el artículo 697 del Código Fiscal, en opinión del recurrente se violó en el concepto de interpretación errónea, pues, esta disposición claramente prevé como deducible del Impuesto Sobre la Renta, las donaciones que haga el contribuyente, entre otras, a las asociaciones no lucrativas que hayan sido reconocidas por la Dirección General de Ingresos y para tal reconocimiento, dicha autoridad debe tomar en consideración única y exclusivamente, que tales instituciones benéficas "hayan sido previamente aprobadas para esos fines por el Ministerio competente", en este caso, el Ministerio de Educación. Afirma quien recurre, que el precepto no exige más requisitos que el previo reconocimiento del Ministerio respectivo, por lo que cualquier exigencia adicional es contraria a la Ley.

También se señala como violado el artículo 1 del Código Civil de forma directa por comisión, ya que la Dirección General de Ingresos, al negarle a su representada su derecho a inscribirse como entidad autorizada para recibir donaciones deducibles del Impuesto Sobre la Renta y, al mismo tiempo reconocérselo a otras asociaciones sin fines de lucro, cuyas características son similares, en situaciones idénticas o prácticamente iguales, vulneró su derecho a la no discriminación o a un tratamiento ante la ley en condiciones de igualdad que implícitamente consagra el artículo primero del Código Civil. Basados en el mismo planteamiento, también invoca la violación del artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptado mediante la Ley N° 15 de 28 de octubre de 1977, en el concepto de forma directa por comisión.

II. El informe explicativo de conducta rendido por el Director General de Ingresos y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

En Nota N° 201-1281 de 26 de noviembre de 1997, el Director Regional de Ingresos, expuso que a pesar de que los estatutos de la COMUNIDAD ARABE DE PANAMA establecían que esa asociación no perseguía fines lucrativos, y que había sido aprobada para tal fin por el Ministerio de Educación, la petición no reunía a satisfacción los requisitos exigidos por las normas jurídicas que regulan esta materia, ya que la misma no demostró sus ejecutorias en beneficio de la comunidad como una tarea constante, como tampoco aportó evidencias de acciones continuas y recientes que mostraran un beneficio de interés social, cultural o educativo. A ello se añade, que de sus propios estatutos se dedujo claramente que dicha asociación no se proyectaba hacia la comunidad panameña en general, sino que sus objetivos estaban dirigidos a beneficiar solamente la integración y los intereses de la comunidad árabe. Esta postura se mantuvo al resolverse el recurso de reconsideración y apelación en subsidio.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 31 de 3 de febrero de 1998, que es visible de fojas 41 a 55 del expediente, se opuso a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. En su opinión, la clasificación de la asociación "sin fines de lucro" por parte del Ministerio competente, no es el único requisito exigible por la Dirección General de Ingresos para inscribirla como asociación autorizada para recibir donaciones deducibles del Impuesto sobre la Renta. A ello añade, que en el expediente judicial ni en el expediente administrativo, reposa prueba alguna que demuestre lo aseverado por el demandante, dado que el único fundamento para sostener tal postura, consiste en hacer mención de las resoluciones emitidas por la Dirección General de Ingresos a otras asociaciones sin fines de lucro.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

Mediante la Resolución N° 201-2142 de 31 de diciembre de 1996, expedida por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, se resuelve rechazar la inscripción de la Comunidad Arabe de Panama, con R.U.C. 3244-0015-C-12078, como entidad que pueda recibir donaciones deducibles del Impuesto sobre la Renta. En esa oportunidad, la Dirección Regional de Ingresos consideró, luego del estudio y análisis de la solicitud y la documentación presentada por el solicitante, que aún cuando los estatutos manifiestan que la COMUNIDAD ARABE DE PANAMA no persigue fines lucrativos como fue aprobado por el Ministerio de Educación, al momento de la solicitud no se reunía a satisfacción con los requisitos establecidos en las normas jurídicas, pues, no se demostró sus ejecutorias en beneficios de la comunidad como una tarea constante, ni se aportaron evidencias de acciones contínuas y recientes que muestren un beneficio de interés social, cultural o educativo, aunado a que no se proyecta hacia la comunidad panameña, ya que entre sus objetivos el beneficio es solamente para la integración e intereses de la Comunidad Arabe.

Al analizar las violaciones alegadas y el resto de la documentación que reposa en el expediente, la Sala estima que la razón no le asiste a la parte actora. Ello es así, puesto que el artículo 697 del Código Fiscal es diáfano al contemplar los principios generales que deberán ser aplicados para los efectos de las deducciones del Impuesto sobre la Renta, y, a su vez, autoriza al Organo Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Tesoro, para establecer las normas reglamentarias de dichos principios. En virtud de lo anterior, el Organo Ejecutivo expidió el Decreto Ejecutivo N° 170 de 1993, a fin de reglamentar las disposiciones del Impuesto sobre la renta contenidas en el Código Fiscal y, el artículo 47 de esa disposición reglamentaria, regula lo concerniente a las donaciones, indicando en su literal b), que son deducibles los gastos o erogaciones en concepto de donaciones ya sea en dinero o en especie a las asociaciones sin fines de lucro, que expresamente hayan sido reconocidas por la Dirección General de Ingresos, la que para otorgar tal reconocimiento, deberá tomar en consideración que las mismas hayan sido previamente aprobadas para esos fines por el Ministerio competente. De la expuesto se infiere que la Dirección General de Ingresos no está obligada a inscribir a una asociación, por el sólo hecho de habar sido clasificada "sin fines de lucro" por el Ministerio respectivo, como asociación autorizada para recibir donaciones deducibles del Impuesto sobre la Renta, pues, para ello deberá tomar en consideración otros elementos de juicio, que sujetos a su discreción, deberán contemplar que la medida no transgreda el orden público o interés social. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia se pronunció al respecto en sentencia de 24 octubre de 1992, e incluso enfatizó la inconveniencia de reclamar tal beneficio como un derecho legalmente reconocido.

Siendo así, se aprecia que la Dirección General de Ingresos al efectuar el estudio y análisis de la documentación presentada por el solicitantes, efectuó una valoración subjetiva y estimó, a juicio de la Sala, de manera acertada que aun cuando los estatutos de la Comunidad Arabe no persiguen fines lucrativos, entre los objetivos principales figura el de propiciar y fomentar todo lo concerniente a los intereses de la Comunidad Arabe de Panamá, y ello es limitativo de los objetivos de asistencia social y de beneficencia de las asociaciones a que se contraen los artículos 39 de la Constitución Política, 64 y siguientes del Código Civil y 14 de la Ley 33 de 1984, que deben ir dirigidos al bienestar de la Comunidad Nacional en general, sin distingo de clases, de creencias religiosas, ni de consideraciones étnicas. A ello se añade que, efectivamente, como se deja anotado en el acto demandado, dentro del expediente no se demuestran ejecutorias en beneficio de la comunidad como una tarea constante, ni evidencias de acciones continuas de hagan ver un beneficio de interés social, cultural o educativo. En razón de ello, la Sala desestima las violaciones de los artículos 697, páragrafo 1, literal a) y 708 literal d) del Código Fiscal y el artículo 47 literal b) del Decreto Ejecutivo N° 170 de 1993.

Con relación a la violación del artículo 1 del Código Civil, la Sala se abstiene de efectuar mayores consideraciones, toda vez que al sustentar la violación alegada, se hace con fundamento en normas constitucionales y ello es

competencia exclusiva, como en reiteradas ocasiones se ha expresado, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, con respecto a la violación que se señala al artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Sala disiente de lo aseverado por el demandante, en cuanto a que hubo discriminación contra su representada en relación a otras asociaciones a las que sí se les reconoció ese derecho ante iguales circunstancias, pues, no se demostró de manera fehaciente que ello se configuró, salvo que sólo se mencionó a otras asociaciones a las cuales se le otorgó la autorización para recibir donaciones deducibles del Impuesto sobre la Renta. Se desestima este cargo.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 201-2142 de 31 de diciembre de 1996, expedida por el Director General de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, como tampoco lo son sus actos confirmatorios.

Notifiquese y Cumplase

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA EL LCDO. ELIECER PRADO EN REPRESENTACIÓN DE MARCOS DOMINGUEZ URRIOLA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA ACCIÓN DE PERSONAL N° 1498 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1997, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Eliécer Prado, actuando en representación de MARCOS DOMINGUEZ, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal, la Acción de Personal N° 1498 de 19 de noviembre de 1997, expedida por la Directora General del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto acusado, se destituye al señor MARCOS DOMINGUEZ del cargo de Analista de Facturación en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, por infringir el artículo 41, numerales 7 y 11 del Reglamento Interno de Personal y el artículo 18 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión consistente en que la Sala Tercera declare que es nula por ilegal la Acción de Personal N° 1498 de 19 de noviembre de 1997, expedida por la Directora del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, y que como consecuencia de esa declaración, el señor MARCOS A. DOMINGUEZ debe ser restituido en el cargo de ANALISTA DE FACTURACION II y se le pague los salarios dejados de percibir desde el momento en que fue separado de su posición a la fecha de su reintegro, y también otras prestaciones económicas y derechos derivados del cargo.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción, se destaca que con la Resolución N° 1498 de 19 de noviembre de 1997, en la que se destituye del cargo de Analista de Facturación II, al señor MARCOS DOMINGUEZ URRIOLA, se

conculca y viola el derecho a ser oído por cuanto que no se requirió ninguna declaración ni explicación sobre los hechos señalados como supuesta causal de la medida en cuestión. Se afirma que el señor Domínguez siempre cumplió a cabalidad con sus atribuciones y deberes y no incurrió en ninguna causal que justifique la remoción.

Como disposiciones legales infringidas figuran el artículo 32 de la Constitución Nacional; el artículo 41, literales b), c) y d) numerales 7 y 11 del Reglamento Interno de Personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, cuyos textos se transcriben:

> "ARTICULO 32: Nadie será juzgado por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."
>
> "ARTICULO 41: Para que la Institución pueda llevar a cabo la importante misión de servicio público es imprescindible también que todos sus empleados observen las siguientes normas de conducta a fin de asegurar un eficiente servicio a los usuarios:
> a...
> b. El jefe inmediato deberá tomar las medidas preventivas que considere adecuadas dentro de las normas existentes, incluyendo las orientaciones que considere necesarias antes de recurrir a la imposición de las correctivas.
>
> c. Cuando las medidas preventivas no den resultado y se violen las normas o reglas de la Institución, se aplicarán las sanciones que correspondan, en estos casos, el jefe inmediato determinará las medidas correctivas a aplicar, que proveen en este Reglamento, tomando en consideración las circunstancias del caso. El jefe inmediato tendrá la obligación de comunicar al empleado la sanción impuesta y de advertirle su de derecho de apelación cuando la acción del empleado se considere irregular y de tal naturaleza que se presuma un delito notificará el casos a las autoridades competentes.
>
> d) Las medidas disciplinarias que corresponden a las faltas o violaciones de las reglas de la Institución, se establecen en la tabla que forma parte de este artículo.
> 1...
> ...
> 7. Desobediencia y falta de cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que se adopten.
> 1a. sanción: Amonestación por escrito.
> 2a. sanción: Sanción disciplinaria de tres días
> Máximo: Despido
> Período Aplicable: 1 año.
> ...
> Conducta que menoscabe y afecte el prestigio y la imagen de la Institución.
> 1a samción: Mínimo: Amonestación por escrito.
> Máximo: Despido
> 2a sanción: Mínimo: Sanción disciplinaria de tres días.
> Máximo: Despido
> 3a sanción: Mínimo: Sanción disciplinaria de cinco días
> Máximo: Despido
> Período aplicable: 1 año."

En opinión del demandante, el artículo 32 de la Constitución Nacional se violó de forma directa por omisión, puesto que con el acto demando, se desconoció el nombramiento de su representado y fue destituido sin haber incurrido en causa alguna para su remoción y sin instruírsele expediente disciplinario tal como lo ordena la norma.

En cuanto a los literales b), c) del artículo 41 del Reglamento Interno de Personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, considera el apoderado judicial de la parte demandante fueron violados de manera directa por omisión, dado que no se surtió el procedimiento que allí se prevé, al no aplicarse los pasos ordenados y lógicos que en él se enumeran a efectos de prevenir, corregir y sancionar las posibles faltas de los funcionarios del I.D.A.A.N. en la prestación de sus servicios.

Finalmente, el demandante aduce como violado de forma directa por comisión, el literal d), numerales 7 y 11 del artículo 41 del Reglamento Interno de Personal del I.D.A.A.N., porque de un sólo golpe el acto administrativo impugnado confiere o impone la más severa de las sanciones contempladas, según la causal invocada, desconociendo que precedentemente se encuentran establecidas sanciones previas que por orden lógico deben gradualmente imponerse en la medida que se reitera la falta, siempre dentro del período de aplicabilidad de tales sanciones, establecido por el propio reglamento.

II. El informe explicativo de conducta expedido por la Directora Ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

La Directora Ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales rindió el respectivo informe explicativo de conducta, el cual es visible de fojas 28 a 31 del expediente. En el informe se señala que la Acción de Personal N° 1498 de 19 de noviembre de 1997, es producto de un Informe de Auditoría Interna N° 052-97 y que al señor Domínguez Urriola se le llamó la atención con respecto a las irregularidades que cometió como funcionario y por ello se adjuntó al expediente el memorando que dio inicio a la investigación debidamente autenticado por la Dirección de Servicios Administrativos.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 251 de 6 de julio de 1998, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala procede a resolver la presente controversia.

Mediante el acto demandado se destituye al señor MARCOS DOMINGUEZ URRIOLA del cargo de ANALISTA DE FACTURACION II, en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales por haber infringido el artículo 41 del Reglamento Interno de Personal del I.D.A.A.N. que impone la destitución como sanción cuando se menoscabe y afecte el prestigio de la Institución, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961, que faculta al Director Ejecutivo, entre otras atribuciones, para imponer sanciones conforme a los reglamentos.

Ante todo, no se demostró en el expediente que el señor MARCOS DOMINGUEZ URRIOLA hubiese participado en concurso de mérito alguno para optar por el cargo de Analista de Facturación II, por lo que su posición era de libre nombramiento y remoción de la autoridad nominadora. Tampoco la Sala aprecia desviación de poder, que sería el vicio de ilegalidad que podría invocarse en el caso de servidores públicos que no tienen estabilidad en el cargo.

En cuanto a la violación al artículo 32 de la Constitución Nacional, la Sala se abstiene de efectuar consideraciones, pues, ello es competencia exclusiva del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Se desestima este cargo.

La Sala advierte que la destitución del señor MARCOS DOMINGUEZ se apoyó en el Informe de Auditoría N° 051-97AL de 24 de octubre de 1997, que es visible en el expediente administrativo, y que está relacionado con "Evaluación de Controles" y donde se deja plasmado "la falta de cuidado en el aplicación de sus

funciones por parte de los analistas". En dicho informe se hace un análisis a cuatro empresas con el fin de señalar las deficiencias dentro del Departamento de Facturación, y entre ellas figura Inv. Hotelaras Plaza, S. A., cuyo analista era el señor Domínguez.

La investigaciones demostraron que la empresa Inv. Hoteleras Plaza S. A., estaba siendo mal facturada, pues, reportaba 2188 M3 como tarifa residencial, dando un monto de B/.446.40 y luego del cambio a tarifa comercial solicitado por los auditores del I.D.A.A.N. con el promedio 2188M3 de consumo, ascendió el monto a pagar a B/ 937.81, todo lo cual evidencia, que, en efecto, la conducta del señor Domínguez afectó la imagen y prestigio de la institución. El señor Domínguez debió oportunamente advertir a la institución que la empresa Inv. Hoteleras Plaza, S. A. debía facturar como empresa comercial y no residencial. En virtud de ello, no prospera la violación que se aduce al artículo 41 del Reglamento Interno de Personal, en sus literales b), c) y d) numerales 7 y 11.

Por las razones anotadas, lo procedente es, pues, no acceder a las pretensiones formuladas.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Acción de Personal N° 1498 de 19 de noviembre de 1997, mediante la cual se destituye del cargo como Analista de Facturación II en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales al señor MARCOS DOMINGUEZ URRIOLA.

Notifiquese y Cumplase

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDWIN A. SALAMÍN EN REPRESENTACIÓN DE MANUEL JAEN SORIANO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA S/N DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Edwin Salamín, en representación del señor MANUEL JAEN SORIANO, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota S/N de 1 de noviembre de 1999, expedida por la Directora Nacional de Personal del Ministerio de Obras Públicas, y para que se haga otras declaraciones.

Al examinar la presente demanda para determinar si cumple con los requisitos para ser admitida, se observa que adolece de varios defectos.

En primer lugar, la parte actora, tal como se lee a fojas 16 y siguientes del expediente, al exponer el concepto en que el acto impugnado infringe las normas citadas como violadas, no explica debidamente las causas o los motivos por los que, en su opinión, se ha producido dicha infracción. La Sala ha expresado en reiterados fallos que, para cumplir con el requisito de expresar el concepto de la infracción, se debe explicar en forma detallada y lógica las razones o

motivos en que se fundamenta las infracciones al ordenamiento jurídico.

Por otro lado, observa la Sala que entre las disposiciones que el demandante cita como violadas, figuran los artículos 17 y 32 de la Constitución. Al respecto esta Superioridad ya ha indicado, en reiterados casos, que las demandas contencioso administrativas no son la vía para impugnar violaciones a disposiciones de carácter constitucional.

También observa esta Alta Corporación de Justicia que la parte actora no dirige su demanda a la Magistrada Presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, incumpliendo así con lo exiguido por el artículo 102 del Código Judicial.

Por las razones expuestas, no debe dársele curso a la presente demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Edwin Salamín, en representación de MANUEL JAEN SORIANO, para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota S/N de 1 de noviembre de 1999, expedida por la Directora Nacional de Personal del Ministerio de Obras Públicas, y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ GÓMEZ EN REPRESENTACIÓN DE MOISÉS QUINTERO SANTANA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 1060 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADO POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado José Gómez, en representación de MOISÉS QUINTERO SANTANA, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N° 1060 de 24 de septiembre de 1999, dictado por el Ministro de Gobierno y Justicia, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda incoada, a fin de determinar si la misma cumple o no con los presupuestos legales exigidos para su admisión.

En este sentido, observa esta Superioridad que el actor, a pesar de haber aportado el acto acusado de ilegal debidamente autenticado, el mismo no contiene constancia de su notificación. (ver foja 1). De igual forma, el Resuelto N° 492-R-149 de 15 de diciembre de 1999, mediante el cual se resuelve el recurso de reconsideración presentado por el señor MOISÉS QUINTERO SANTANA, fue aportado como prueba, pero en copia simple sin estar debidamente autenticado, y sin constancia de su notificación, visible a fojas 2 y 3 del expediente. Esta situación está en evidente contradicción con la exigencia prevista en los artículo 44 de la Ley 135 de 1943 y 820 del Código Judicial, que preceptúan lo siguiente:

> "Artículo 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución. según los casos."
>
> "Artículo 820. Los documentos se aportarán al proceso en originales o en copias, de conformidad con lo dispuesto en este Código. Las copias podrán consistir en transcripción o reproducción mecánica, química o por cualquier otro medio científico. Las reproducciones deberán ser autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original, a menos que sean compulsadas del original o en copia auténtica en inspección judicial y salvo que la ley dispone otra cosa." (Subrayado del Ponente)

Este Tribunal advierte que este requisito es imprescindible, a efectos de poder determinar si la acción ha sido ejercida oportunamente, pues el no cumplimiento de esta formalidad da lugar al rechazo del libelo.

En adición a la deficiencia arriba señalada, el suscrito observa que el recurrente no cumplió con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946, toda vez que omitió señalar las disposiciones que estima violadas y el concepto de la violación. El actor debe tener presente que es necesario que se señalen los artículos o disposiciones legales que se consideran transgredidos, además de explicar clara y detalladamente en qué concepto han sido presuntamente quebrantados los mismos.

La Jurisprudencia constante de este Tribunal de Justicia ha sostenido que este es un requisito indispensable que debe cumplir toda demanda contencioso administrativa a fin de que esta Superioridad pueda analizar el fondo de las causales o motivos de ilegalidad invocados por el actor.

En atención al número de defectos arriba señalados, no queda otra alternativa que negar la admisión de la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por el Licenciado José Gómez en representación de MOISÉS QUINTERO SANTANA, para que se declare nulo por ilegal el Resuelto N° 1060 de 24 de septiembre de 1999, dictado por el Ministro de Gobierno y Justicia, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO NELSON ROJAS, EN REPRESENTACIÓN DE GILBERTO PARILLÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 28-99 D. DE 4 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Nelson Rojas, actuando en representación de GILBERTO PARILLÓN, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia,

demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 28-99 D. de 4 de octubre de 1999, dictada por la Dirección General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda, y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante escrito fechado el 15 de marzo de 2000, visible a foja 22 del expediente, la parte actora presentó desistimiento de la acción contencioso administrativa interpuesta contra el mencionado acto administrativo, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por el recurrente es procedente y debe acogerse, conforme a lo perceptuado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, el cual es del tenor siguiente:

> "Artículo 66. En cualquier estado del juicio es admisible por declaración expresa, el desistimiento del recurso contencioso-administrativo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el Licenciado Nelson Rojas, en representación de GILBERTO PARILLÓN, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALBERTO BARRÍA, EN REPRESENTACIÓN DE JOSE JERONIMO HUC CASTILLO, PARA QUE SE DECLAREN NULAS, POR ILEGALES, LAS RESOLCUIONES NO. 468-D-136 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1999 Y LA NO. 519-R-157 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1999, AMBAS DICTADAS POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL 2000.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Luis Alberto Barría, actuando en nombre y reprsentación de JOSE JERONIMO HUC CASTILLO, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demadna contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declaren nulas, por ilegales, las resoluciones No. 468-D-136 de 15 de noviembre de 1999 y la No. 519-R-157 de 30 de diciembre de 1999, ambas dictadas por el Ministro de Gobierno y Justicia, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos procesales mínimos para su admisión.

Observa quien suscibe que la demanda no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943, debido a que la copia del acto acusado, así como la del acto confirmatorio, no se encuentran debidamente autenticadas, ni tampoco hay constancia en la misma de que se formuló la petición a la cual se refiere el artículo 46 de la mencionada Ley. La Sala ha señalado en distintos fallos que la autenticación del acto impugnado es un requisito de importancia exigido por la ley. Todo acto impugnado requiere su autenticación en vías de verificar la notificación o ejecución del mismo, y por ende, el agotamiento de la vía gubernativa.

Como el demandante omitió el requisito mencionado, su demanda no debe admitirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del mismo cuerpo legal.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Luis Alberto Barría, actuando en nombre y reprsentación de JOSE JERONIMO HUC CASTILLO para que se declare nula, por ilegal, las resoluciones No. 468-D-136 de 15 de noviembre de 1999 y la No. 519-R-157 de 30 de diciembre de 1999, ambas dictadas por el Ministro de Gobierno y Justicia, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARISTIDES COLLAZOS, EN REPRESENTACIÓN DEL CLUB DE BOTES DE PEDRO MIGUEL, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLCUIÓN NO. 378-98 DE 22 DE JUNIO DE 1998, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Aristides Collazos, actuando en nombre y representación del CLUB DE BOTES DE PEDRO MIGUEL, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la resolución No. 378-98 de 22 de junio de 1998, dictada por el Administrador General de la Autoridad de la Región Interoceánica, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala Tercera el 20 de marzo de 2000, visible de fojas 71 a 72 del expediente, la parte actora presentó desistimiento de la solicitud de ejecución de sentencia, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por la parte actora es procedente y debe acogerse, conforme a lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, que permite el desistimiento en cualquier estado del proceso, y los artículos 1073 y 1080 del Código Judicial que recogen el mismo principio.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el licenciado Aristides Collazos, actuando en nombre y representación del CLUB DE BOTES DE PEDRO MIGUEL, DECLARA que ha terminado el proceso contencioso administrativo y ORDENA el archivo del expediente.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO LUQUE GARAY, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MARINE RECOVERY INC., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 135, DE 19 DE AGOSTO DE 1998, EXPEDIDA POR EL ENTONCES MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Julio Luque Garay, en nombre y representación de la empresa Marine Recovery Inc., de quien es apoderado general, ha comparecido a esta Sala con el propósito de interponer demanda de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 135, de 19 de agosto de 1998, expedida por el entonces Ministro de Hacienda y Tesoro, y para que se hagan otras declaraciones.

I. Contenido del acto impugnado:

A través del acto impugnado, la Administración resolvió administrativamente el Contrato No. 35 suscrito entre el Ministro de Hacienda y Tesoro y la empresa Marine Recovery Inc., mediante su representante legal, señor Peter Lau, el día 22 de marzo de 1996, contrato cuyo objeto según se aprecia en sus primeras cláusulas, radica en la exploración y estudios de toda clase, así como la búsqueda y salvamento de restos de buques y otros materiales varios abandonados; pero, específicamente, consistente en la "localización y salvamento de los bienes nacionales a que se refiere el Artículo Primero del Decreto de Gabinete No. 364 de 26 de noviembre de 1969, en particular los cables depositados en los años 1941 y 1943 abandonados en el fondo del mar ...", dentro de un área detallada en el referido contrato. (Cfr. cláusulas primera y segunda, fojas 34 y 35 del expediente administrativo).

El mencionado contrato fue publicado en la Gaceta Oficial No. 23,011, de 9 de abril de 1996, conforme copia simple que reposa a fojas 42 y siguientes del expediente administrativo.

II. Disposiciones legales que se aducen infringidas y su concepto:

De acuerdo afirma el demandante, el acto acusado ha infringido los artículos 105 y 106 de la Ley 56, de 27 de diciembre de 1995, sobre contratación pública.

El demandante asegura que la primera de estas disposiciones legales ha sido violada de manera directa. La norma en mención tiene el siguiente tenor literal:

> **"Artículo 105. Resolución por incumplimiento del contratista.**
>
> **El incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, dará lugar a la resolución administrativa del contrato, la cual se efectuará por medio de acto administrativo debidamente motivado. La entidad contratante notificará a la fiadora el incumplimiento del contratista, la que dispondrá de un término de treinta (30) días calendario, siguientes a la notificación de incumplimiento, para ejercer la opción de pagar el importe de la fianza, o de sustituir sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones, siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta de la fiadora y a cuenta y riesgo de ésta, tenga la capacidad técnica y financiera, a juicio de la entidad pública contratante.**
>
> **En estos casos, el contratista se hará merecedor de las sanciones de**

> inhabilitaciones previstas en el artículo 12 de esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil correspondiente derivada del incumplimiento contractual. La entidad contratante ejecutará las fianzas de cumplimiento consignadas, previo cumplimiento de las formalidades de rigor".

La infracción se ha producido porque la Administración no comunicó a la empresa contratista su intención de, mediante acto administrativo debidamente motivado, "reclamar o advertir en cuanto a un posible incumplimiento de contrato". Agrega que esta notificación debe ser previa a la "rescisión del contrato" y concede a la empresa afectada un período de treinta (30) días para tomar las medidas y subsanar omisiones que "reflejen un posible incumplimiento de contrato" (foja 20).

El segundo artículo que se invoca violado preceptúa lo que a continuación se deja transcrito:

> "Artículo 106. Procedimiento de resolución.
> La resolución administrativa del contrato se ajustará a lo establecido en el Artículo 105, con sujeción a las siguientes reglas:
>
> 1. Cuando exista alguna causal para la resolución administrativa del contrato, la entidad pública adelantará las diligencias de investigación y ordenará la realización de las actuaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, que pudiesen comprobar o acreditar la causal correspondiente.
>
> 2. Si la entidad licitante considera resolver administrativamente el contrato, se lo notificará personalmente al afectado o a su representante, señalándole las razones de su decisión y concediéndole un término de cinco (5) días hábiles, para que conteste y, a la vez, presente las pruebas que considere pertinentes.
> ..."

En opinión de la parte demandante, este artículo ha sido infringido también de manera directa, y en lo medular aduce que la norma transcrita presupone el inicio de un proceso que debe ser notificado a la parte afectada; proceso que implica una investigación a su juicio omitida, evaluación y posible medida que favorezcan la "implementación del contrato". Añade que "se supone que el Estado, al contratar obras; prestaciones de servicios o simples concesiones administrativas tiene el cívico interés de que los mismos se concreticen para beneficio del país en general. Por ello la Ley contempla y adelanta la facultad incluso de extender los términos pactados, que en nuestro caso sería el plazo de inicio de unas exploraciones cuya demora en nada afectaban ni afectan el bienestar general ni los intereses económicos o fiscales del país" (foja 21).

Asimismo, el demandante expresa su objeción a la cancelación del bono de cumplimiento prestado en la celebración del contrato, si la empresa Marine Recovery Inc. no ha derivado beneficio alguno de "la firma o ejecución parcial de dicho contrato".

Adedmás, alega que la actuación de la entidad pública desalienta la inversión, que busca el crecimiento y recuperación económica del país (foja 22).

III. El informe de conducta rendido por la entidad estatal demandada:

En informe visible de fojas 26 a 29, remitido a esta Sala por el entonces denominado Ministerio de Hacienda y Tesoro, a través de Nota No. 101-01-780DMHyT, fechada el 23 de noviembre de 1998, dicha institución explica el fundamento de su actuación y se opone a la pretensión de la parte actora, ya que en lo que respecta a la supuesta violación del artículo 105 de la ley 56 de 1995 señala que

esa afirmación es inaceptable, porque el mismo licenciado Julio Luque Garay es apoderado y fiador de la empresa contratista, como consta a fojas 43 del expediente administrativo. Añade que este letrado presentó una petición de sustitución del Bono IPA X No. 0011, con un valor de B/.10,000.00 emitido por el Tesoro Nacional, en reemplazo del Bono ED-XN-No. 025 por el mismo valor, conocido como "Bono de Electrificación", Serie "D" 1969-1999 al 6% de interés, por lo que "mal puede alegar el recurrente la falta de conocimiento por la fiadora que a su vez es la contratista, fungiendo el apoderado legal como el representante de la fiadora". (foja 28).

Con relación a la infracción que se afirma contra el artículo 106 de la misma Ley, responde que la Administración nunca pudo determinar el inicio de una fase de exploración por parte del contratista y que hubo un abandono absoluto de sus obligaciones por un término en exceso al pactado; se procede luego al inicio del trámite de resolución para que el contratista demuestre lo contrario a través de alegatos y pruebas; sin embargo, transcurrieron más de seis "nuevos meses" "...sin que nos aporten una prueba fehaciente, señalando algún indicio de haber iniciado la fase exploratoria, menos aún, que hubiesen demostrado la irrealidad del abandono a las obligaciones pactadas" (foja 28).

IV. Opinión jurídica de la Procuraduría de la Administración:

Mediante Vista Fiscal No.516, de 24 de diciembre de 1998, la Procuraduría de la Administración contesta la demanda de plena jurisdicción bajo examen y se opone a las pretensiones contenidas en la misma, coincidiendo en líneas generales con los planteamientos esgrimidos en el Informe de Conducta ut supra.

V. Consideraciones y decisión de la Sala:

La Sala procede a resolver la presente controversia no sin antes plasmar las siguientes consideraciones.

A juicio de este Tribunal, no le asiste razón a la parte demandante al exponer el concepto en que han sido transgredidos con la emisión del acto demandado los artículos 105 y 106 de la Ley 56 de 1995. A esta conclusión arriban los que esta sentencia suscriben porque en autos, y en el expediente administrativo que registra las actuaciones previas y posteriores a la resolución administrativa del Contrato No. 35 de 22 de marzo de 1996, acordado entre Marine Recovery Inc. y el Estado a través del Ministro de Hacienda y Tesoro de la época, existen pruebas del requerimiento que hizo al ahora demandante el Estado respecto de la mora en que estaba inmerso y consiguiente incumplimiento del Contrato cuyo objeto fue anteriormente detallado.

Abordamos de seguido los dos cargos de infracción señalados y que explica el demandante.

El artículo 105 de la Ley 56 de 1995 prevé la facultad a cargo de la Adminitración de declarar resuelto un contrato por incumplimiento del contratista, evento ante el cual la entidad estatal debe notificar al fiador tal incumplimiento y concederle un término de treinta (30) días calendarios, para que pague la fianza o sustituya al contratista original en la ejecución del objeto contractual de que se trate.

El actor alega que esta norma fue violada porque no medió acto administrativo debidamente motivado, para dicha comunicación. Estima la Sala, que el demandante ha interpretado erróneamente la norma analizada porque cuando ella se refiere a un acto administrativo motivado debe entenderse que se trata de la resolución que da por terminado administrativamente el contrato y no a la comunicación que debe hacerse al fiador, si éste existe, sobre la decisión de la Administración de resolver el contrato por incumplimiento del contratista principal.

A fojas 60 del dossier administrativo consta copia de la Nota No. 801-01-

123, de 18 de marzo de 1997, dirigida por la autoridad pública al licenciado Julio Luque Garay, en su condición de apoderado legal de la empresa Marine Recovery, por medio de la que se le informa que la Administración se propone inciar el trámite de resolución administrativa del contrato, con fundamento en el numeral 2 del artículo 106 de la Ley de contratación pública y la cláusula decimotercera del Contrato No. 35 de 22 de marzo de 1996. En el aparte respectivo de dicha nota se expresa lo siguiente:

> "Se desprende del contexto anterior, que el término para iniciar operaciones de exploración se venció en el mes de octubre del año pasado, sin que, hasta la fecha, la empresa haya informado oficialmente el incio de actividades de exploración, ni las razones de su incumplimiento.
>
> Ante lo expuesto, y de conformidad con la legislación vigente, se le concede a la empresa MARINE RECOVERY INC., un término de de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la entrega de la presente misiva para que conteste y a la vez, presente las pruebas que considere pertinentes". (Subraya la Sala).

A esta misisva respondió el apoderado legal de la empresa, Julio Luque Garay, mediante Nota fechada 24 de marzo de 1997, en la que entre otras cosas, expone lo siguiente:

> "...
> Em primer lugar, debo señalar que la empresa se dirigió al Ministro del ramo, mediante comunicación de 9 de agosto de 1996, en la cual le informaba sobre las gestiones que la empresa realizaba hasta ese momento para dar inicio a las exploraciones.
>
> Por otra parte, los trabajos se han iniciado en la fase de sondeos preliminares. En esta fase no se extrae material alguno por lo que no se considera prudente el empleo del inspector.
>
> A su vez, la empresa trajo de los Estados Unidos un equipo Magnetómetro, con sus accesorios, para los fines indicados en el párrafo anterior. Este equipo fue introducido temporalmente al país y ya fue devuelto luego de cumplir el propósito de su ingreso.
>
> Señor Director: Lamentamos no haberle incluído una copia de la comunicación dirigida al Señor Ministro y tampoco haberlo mantenido al corriente de los trabajos preparatorios que la empresa MARINE RECOVERY, INC. ha venido realizando".

Ante tal contexto, en el documento citado, también se pide la reconsideración del contenido de la Nota previamente dirigida por la Administración antes reseñada.

Como se observa de los autos, la comunicación oficial fue hecha a quien tenía la capacidad de representar a la empresa; según certificación del Registro Público, visible a fojas 18 del expediente contencioso, el licenciado Julio Luque Garay tiene poder general de representación de la empresa citada "desde el 04 de diciembre de 1995", y el Contrato de marras fue suscrito el 22 de marzo de 1996, es decir, posterior a la fecha de dicho poder general. La citada Nota No. 801-01-213, de 18 de marzo de 1997, incluso conforme se lee a pie de página fue remitida con copia al señor Presidente de la sociedad, Peter Lau (foja 59).

Por otra parte, tampoco es procedente la argumentada falta de notificación al fiador de que habla el artículo 105 analizado en función del cargo de violación que afirma el demandante, porque como bien lo anota la institución pública demandada, a fojas 43 de los autos se desprende que la propia empresa otorgó un bono de cumplimiento en garantía del Contrato por monto de B/.10,000.00, y el señor licenciado Julio Luque Garay en esa constancia procesal

pide a la Administración el reemplazo del Bono IPA-X No. 0011 (Bono de Inversiones Públicas 1988-1998) en custodia de la Contraloría General de la República, por el Bono de Electrificación, Serie D 1969-1999, ED X No. 025, por valor de B/.10,000.00, al 6% de interés. De esto se desprende que el contratista -Marine Recovery Inc.- y el fiador, eran una misma persona, conclusión que a juicio de la Sala se corrobora a través de la cláusula decimosegunda del Contrato No. 35, ya que como textualmente allí se deja constancia, "Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA está obligado a constituir una fianza a favor del Tesoro Nacional por valor de DIEZ MIL BALBOAS..." (foja 32 del expediente administrativo), situación jurídica que lógicamente hace inocua e innecesaria la obligación a cargo de la Administración establecida en el artículo bajo examen.

Las razones anteriores inclinan a la Sala a desestimar el cargo de infracción del artículo 105 de la Ley 56 de 1995, por el acto impugnado.

La segunda infracción alegada dice relación con el procedimiento a seguir en miras a la resolución administrativa del contrato, procedimiento contenido en el artículo 106 de la indicada Ley que el demandante afirma no fue observado por la Administración.

A juicio de la Sala, el procedimiento administrativo de resolución contractual sí ha sido cumplido por el Ministerio de Hacienda y Tesoro, a través de la Dirección de Bienes Patrimoniales. Una vez la autoridad se percató que el contratista no había empezado las tareas exploratorias según el objeto del comentado negocio jurídico, dentro del término convenido, se configuró la causal prevista tanto en la Ley como en el Contrato para dar por terminada unilateralmente el vínculo negocial entre el Estado y la empresa Marine Recovery Inc.

El artículo 68 del Código Fiscal en su numeral sexto dispone como causal de resolución administrativa del contrato "El incumplimiento del contrato", y el artículo 104 de la Ley 56 de 1995, en el parágrafo que le acompaña preceptúa que "Las causales de resolución administrativa del contrato se entienden incorporadas a éste por ministerio de esta Ley, aun cuando no se hubiesen incluido expresamente en el contrato". Igual contenido normativo posee el párrafo final del artículo 68 del Código antes citado.

La cláusula decimotercera del Contrato No 35 de 1996 establece lo siguiente:

> "DECIMOTERCERA: El Estado se reserva el derecho de resolver administrativamente el presente contrato por cualquiera de las causales señaladas en el artículo 68 del Código Fiscal, y además, por las siguientes causas:
>
> 1o. Si EL CONTRATISTA no inicia las operaciones de exploración dentro de los seis (6) meses contados a partir de la firma del presente contrato. ..."

Desde la firma del contrato el día 22 de marzo de 1996 transcurrieron más de seis meses sin que el contratista informara a la Administración de los avances en materia de estudios, sondeos, es decir, hechos que reflejen el inicio palpable de la fase exploratoria de que habla la cláusula pactada, estando obligado a ello.

Aunque en autos (foja 52) reposa la Nota de 9 de agosto de 1996 que dirigiera el Presidente de Marine Recovery Inc. al entoces Ministro de Hacienda y Tesoro sobre gestiones preparatorias de esa empresa para el cumplimiento de lo pactado, éstas no constituyen la ejecución de hechos materiales de exploración a la que alude el numeral copiado de la cláusula decimotercera que enuncia las causales para proceder a la resolución administrativa del contrato.

A juicio de la Sala, el contratista, ahora demandante, no ha probado que inició la fase material exploratoria dentro del término establecido contraltualmente, que es Ley entre la partes, ni tampoco ha aportado una justificación o pruebas válidas para que la Administración evalúe los motivos razonables de su falta de cumplimiento.

El artículo 106, numeral 1, in fine, establece, cuando sea factible, que la entidad contratante le otorgue al contratista "... un plazo para que corrija los hechos que determinaron el inicio del procedimiento" administrativo de resolución contractual; plazo que fue concedido según se aprecia a fojas 60 del expediente administrativo.

La Sala considera que el procedimiento contenido en el artículo 106 examinado no fue transgredido por la Administración al declarar la resolución administrativa del cuestionado contrato. Además, en las investigaciones efectuadas por la entidad pública ésta no pudo "determinar el inicio de una fase de exploración" por parte del obligado a ello, según explica a página 3 de su Informe de Conducta.

Este Tribunal coincide con la opinión de la entidad acusada en el sentido que si bien se requiere incentivar la inversión de capitales extranjeros en el país, esto debe ajustarse a los parámetros legales, lo que significa que de las concesiones administrativas sobre bienes patrimoniales del Estado resulta un beneficio para el sector privado, pero la actuación de éste y de la Administración debe desenvolverse dentro del marco de la legalidad y de los pactos convenidos.

En consecuencia, debemos rechazar también este cargo por improcedente.

De consiguiente, la Sala Tercera Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que NO ES ILEGAL la Resolución No. 135, de 19 de agosto de 1998, expedida por el entonces Ministro de Hacienda y Tesoro, mediante la que, entre otras cosas, se resolvió administrativamente el Contrato de concesión suscrito el 22 de marzo de 1996 entre dicha entidad estatal y la empresa Marine Recovery, Inc., y NIEGA las demás pretensiones contenidas en el libelo de demanda.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALVARO MUÑOZ FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE DAYSI FLORES AROSEMENA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 15-872-J.D. DE 2 DE MARZO DE 1998, DICTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Alvaro Muñoz Fuentes, actuando en nombre y representación de DAYSI FLORES AROSEMENA, presentó demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 15,872 J.D. de 2 de marzo de 1998, dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y para que se haga otras declaraciones.

Admitida la demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración, quien se opuso a las pretensiones de la parte actora mediante su Vista Fiscal N° 271 de 16 de julio de 1998. Además, se requirió al funcionario demandado que rindiera un informe de conducta, y así lo hizo a través de Nota suscrita por el señor José Simiti, Presidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, legible de fojas 16 a 19 del expediente del proceso contencioso administrativo.

I. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO

Por medio de la Resolución N° 15,872-98 J.D. de 26 de marzo de 1998, emitida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, se resolvió revocar la Resolución N° 936-96 de 25 de septiembre de 1996, mantenida por la Resolución N° 1259-96 de 26 de diciembre de 1996, ambas dictadas por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, y en su lugar conceder a la señora DAYSI FLORES AROSEMENA una pensión por incapacidad parcial permanente por la suma mensual de cincuenta y ocho balboas (B/.58.00), por el término de dos años, por razón del accidente de trabajo ocurrido el 19 de agosto de 1993, mientras laboraba con el patrono Bananera Santa Cecilia.

Además, se decidió someter a la asegurada a exámenes de control antes del vencimiento de la pensión provisional otorgada, con el objeto de determinar si subsiste la incapacidad laboral.

II. NORMAS IMPUGNADAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCION

La parte actora considera violado el artículo 23 del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970, en el cual se establece que:

> "Artículo 23. Se entiende por incapacidad permanente absoluta la producida por alteraciones orgánicas o funcionales incurables, o de duración no previsible, que impidan al asegurado desempeñar cualquier clase de trabajo remunerado."

Al explicar el concepto de la infracción de la norma transcrita, el abogado de la parte actora señaló que la norma fue violada en forma directa, por comisión. Por cuanto que la resolución impugnada sólo le otorga a su poderdante, quien según su concepto está incapacitada de manera absoluta, un 40% de incapacidad parcial permanente.

También considera que se ha infringido el artículo 27 del precitado decreto, en el que se indica que:

> "Artículo 27. El incapacitado permanente absoluto tendrá derecho a una pensión mensual equivalente al 60% del salario."

Estima que éste ha sido violado en forma directa, por comisión, en virtud de que la suma que se le otorga es tan sólo de B/.58.00 equivalente a un 40% de incapacidad parcial permanente (fs. 9-10 del expediente del proceso contencioso administrativo).

III. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

El funcionario demandado al rendir su informe de conducta, indicó que :

> "La señora DAYSI FLORES AROSEMENA ... sufrió accidente de trabajo el día 19 de agosto de 1993, mientras laboraba con el patrono BANANERA SANTA CECILIA ...
>
> La Comisión Médica Calificadora evaluó a la asegurada y mediante informe de 11 de julio de 1996, diagnóstico que padece de hernia discal L4-L5 operada y otorgó un 20% de incapacidad parcial permanente para realizar sus labores habituales.

La Comisión de Prestaciones mediante Resolución N° R.P. 936-96 de 25 de septiembre de 1996, resolvió conceder a la señora DAYSI FLORES AROSEMENA una indemnización total por la suma de Mil Cuarenta y Cuatro Balboas (B/.1,044.00), por el accidente ocurrido el día 19 de agosto de 1993, mientras laboraba con el patrono BANANERA SANTA CECILIA, notificándose la interesada el 14 de octubre de 1996.

Mediante escrito presentado el 21 de octubre de 1996, la asegurada sustenta oportunamente recurso de reconsideración con apelación en subsidio.

En atención al recurso interpuesto, la Comisión Médica Calificadora, evaluó nuevamente a la asegurada y mediante informe de 5 de diciembre de 1996, dictaminó que: "ésta paciente fue evaluada e indemnizada por el artículo 21 acápite 304 con 20% de incapacidad".

Por medio de la Resolución R.P. N° 1259-96 de 26 de diciembre de 1996, la Comisión de Prestaciones decidió mantener la resolución R.P. 936-96 de 25 de septiembre de 1996, notificándose la interesada el día 3 de febrero de 1997.

A través de escrito recibido el 7 de febrero de 1997, la Comisión Asesora Técnica de Riesgos Profesionales e Invalidez, conoció el caso de la asegurada y acordó solicitar que fuese evaluada por el Servicio de Medicina de Trabajo y posteriormente por la Comisión Médica Calificadora, en base al informe de los especialistas.

El servicio de Medicina de Trabajo, el día 26 de septiembre de 1997, dictaminó que "la condición de la paciente ha empeorado", que su estado es "bueno para la vida pero reservado para laborar".

En el informe de 30 de octubre de 1997, la Comisión Médica Calificadora le concede a la asegurada un 405 de incapacidad laboral en total, basado en la Tabla de Evaluación del Reglamento de Prestaciones del Seguro de Riesgos Profesionales vigente (acápite 304-20%, por analogía acápite 298-10% y acápite 327-10%), que es la tabla conforme a la cual, según el artículo 24 del Decreto de Gabinete 68 del 31 de marzo de 1970, se determinarán los grados de incapacidad permanente; con un diagnóstico de "secuela de aplastamiento de L5, síndrome de latigazo y deficiencia en el movimiento de ambas caderas".

Los artículos 22 y 26 del Decreto de Gabinete 68 de 1970, definen como incapacidad permanente parcial la producida por alteraciones incurables o de duración no previsible, que disminuya la capacidad de trabajo del asegurado, sin que produzcan incapacidad permanente absoluta y se señala que el incapacitado tendrá derecho a una pensión de acuerdo al porcentaje de valuación de la incapacidad.

El reglamento de las Comisiones Médicas Calificadoras, aprobado por la Junta Directiva mediante la Resolución N° 83775-93-J.D. del 19 de agosto de 1993, y promulgado en la Gaceta Oficial N° 22,494 del 14 de octubre de 1993, establece que la Comisión Médica Calificadora esta conformada por un mínimo de 3 y un máximo de 5 médicos idóneos, de los cuales 2 pertenecerán a las patologías que generen mayor demanda en el área, y son apoyados por un Trabajador Social con derecho a voz, quien aportará los aspectos sociales que los comisionados consideren para su deliberación, acuerdos y decisiones. Por otro lado, previo a la evaluación por parte de la Comisión Médica Calificadora, el asegurado pasa por exámenes preliminares e informe del especialista consultado, entre otros aspectos.

El mismo Reglamento dentro de las funciones de las Comisiones

Médicas Calificadoras entre otras establece que estos son los organismos encargados de evaluar y dictaminar el grado de incapacidad permanente, parcial o absoluta en los casos de Riesgos Profesionales.

De conformidad a todo lo expresado, la Comisión Médica Calificadora, es el único organismo capacitado y designado por la Ley para clasificar y establecer el tipo y grado de incapacidad de un determinado paciente examinado. La señora FLORES fue examinada en varias ocasiones por la Comisión Médica Calificadora y se determinó que cuenta solamente con un 40% de incapacidad total, que corresponde a la suma de varios problemas de salud con porcentajes menores específicamente señalados y que se ajustan a una incapacidad permanente parcial. Las alteraciones de salud que padece la señora FLORES, no corresponden ni en tipo ni en porcentaje, a las específicamente designadas por el Reglamento General de Prestaciones de Riesgos Profesionales en su artículo 20, como alteraciones que determinan incapacidad permanente absoluta.

Debido a lo expuesto anteriormente, la Comisión Asesora Técnica de Riesgos Profesionales e Invalidez en sesión celebrada el 27 de enero de 1998, recomendó conceder a la asegurada una pensión por incapacidad parcial permanente, en base al dictamen de la Comisión Médica Calificadora, de los especialistas y de las normas legales respectivas contenidas en el Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970 y el Reglamento General de Prestaciones del Seguro de Riesgos Profesionales.

Por lo anterior la Comisión Asesora Técnica de Riesgos Profesionales e Invalidez, solicitó al Departamento de Administración y Contabilidad de Riesgos Profesionales, el cálculo de la pensión por incapacidad parcial permanente a que tiene derecho la asegurada y la fijó en la suma de Cincuenta y Ocho balboas (B/.58.00).

Por todo lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social resolvió mediante Resolución N° 15,872-98-J.D. de 26 de marzo de 1998, REVOCAR la Resolución N° 939-96 de 25 de septiembre de 1996, mantenida por la Resolución N° 1259-96 de 26 de diciembre de 1996, ambas de la Comisión de Prestaciones y en su lugar, CONCEDER a la señora DAYSI FLORES AROSEMENA...una pensión por incapacidad parcial permanente por la suma mensual de Cincuenta y Ocho balboas (B/.58.00), por el término de dos (2) años, por razón del accidente de trabajo ocurrido el día 19 de agosto de 1993, mientras laboraba con el patrono BANANERA SANTA CECILIA ..." (fs. 16-19)

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La señora Procuradora de la Administración expresó su concepto, respecto a las disposiciones legales que la demandante estima violados, en su Vista Fiscal N° 271 de 16 de julio de 1998.

En este sentido, manifestó disentir del criterio expuesto por el apoderado de la señora DAYSI FLORES AROSEMENA, puesto que previo a una evaluación sobre su condición física, la Comisión Médica Calificadora expresó en el Informe de 11 de julio de 1996 que la misma padece de hernia discal L4-L5 operada, por lo que se le otorgó un 20% de incapacidad permanente para realizar sus labores habituales, motivo por el cual se le concedería una indemnización total de B/.1,044.00.

Señala que esto motivó que la demandante presentase recurso de reconsideración con apelación en subsidio, razón por la cual la Comisión Asesora de Riesgos Profesionales e Invalidez acordó solicitar, nuevamente, la evaluación de la señora DAYSI FLORES AROSEMENA por el Servicio de Medicina del Trabajo y por

la Comisión Médica Calificadora. Así, la primera de éstas, dictaminó que la condición de la paciente había empeorado, siendo su estado "bueno para la vida pero reservado para laborar". Por su parte, la Comisión Técnica de Riesgos Profesionales opina que existe "secuela de aplastamiento de Ls, síndrome de latigazo, y deficiencia en el movimiento de ambas caderas", por lo que sólo se debe conceder un 40% de incapacidad laboral en total, con fundamento en la Tabla de Evaluación del Reglamento de Prestaciones del Seguro de Riegos Profesionales.

Agrega que por ello, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social expidió la Resolución N° 15,872-98-J.D. de 26 de marzo de 1998, mediante la cual revocó las resoluciones anteriores, y decidió concederle una pensión por incapacidad parcial permanente por el término de dos años, por el accidente de trabajo ocurrido el 19 de agosto de 1993.

Indica la señora Procuradora que la decisión adoptada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, mediante dicha resolución, se fundamenta en la recomendación de la Comisión Técnica de Riesgos Profesionales e Invalidez.

Sostiene, además, que debe tenerse presente que es a la Comisión Médica Calificadora a quien le corresponde establecer el estado de la incapacidad de asegurados activos, inactivos, beneficiarios; grado de incapacidad permanente, pensión absoluta en caso de riesgos profesionales y la condición médica del beneficiario inválido.

Manifiesta que en atención a lo anterior, la Comisión Médica Calificadora llevó a cabo varios exámenes a fin de determinar la condición invalidante de la señora DAYSI FLORES AROSEMENA, por lo que se decidió que ésta sólo presenta un 40% de incapacidad laboral, por lo que el Departamento de Administración y Contabilidad de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social calculó la pensión por incapacidad, en base a ese 40%, concluyendo que sólo debe percibir B/.58.00 mensuales por dos años.

Por todo ello, la Procuraduría considera que deben rechazarse las pretensiones de la señora DAYSI FLORES AROSEMENA (fs.20-25 del cuadernillo del proceso contencioso adminstrativo).

V. DECISION DE LA SALA

El presente proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción tiene su génesis en el accidente de trabajo que sufrió la señora DAYSI FLORES AROSEMENA, jornalera de la Finca Bananera Santa Cecilia, el 19 de agosto de 1993.

En efecto, a foja 1 del expediente administrativo de la señora DAYSI FLORES AROSEMENA, reposa un informe patronal de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales fechado 23 de agosto de 1993, en el cual se indica que: "La trabajadora manifiesta que cuando se dirigía a su residencia habitual, en su bicicleta, al subir una loma su pie se resbaló del pedal haciéndola perder el equilibrio provocándole su caída, ocasionando con esto el accidente".

También reposan en dicho expediente un buen número de certificados de incapacidad extendidos a favor de la señora FLORES, en el período comprendido del 20 de agosto de 1993 al 16 de julio de 1996 (Ver fojas a 47). Vale la pena destacar, que de la lectura de los mismos se deduce que la demandante prácticamente fue incapacitada mensualmente, desde la fecha en que se accidentó, por cuanto que sus dolencias le impedían volver a sus actividades laborales normales.

Estos certificados fueron suscritos por facultativos de distintas especialidades (Neurocirujanos, Especialistas en Medicina de Trabajo, Especialistas en Salud Ocupacional, Ortopedas, etc.), quienes diagnosticaron que la señora FLORES padece de cervicalgia, lumbalgia crónica, pinzamientos múltiples discados por escoliosis, síndrome de latigazo y aplastamiento L5.

Por otra parte, se observa a foja 8 del expediente clínico de la demandante, que fue operada el 1 de diciembre de 1994, por un diagnóstico de lumbalgia por discopatía L4-L5 y L5-S1.

Lo antes expuesto sirvió de base a su médico tratante, el doctor RICARDO WILLIAMS, para solicitar a la Comisión Médica Calificadora de la Caja de Seguro Social, mediante interconsulta de 23 de abril de 1996, "establecerle su pensión permanente" (f. 61).

Dicha Comisión, previa la realización de los exámenes correspondientes, dictaminó concederle a la señora DAYSI FLORES AROSEMENA, una incapacidad parcial permanente del 20% en base al artículo 21, numeral 304 del acuerdo N° 1 de 29 de mayo de 1995, dictado por la Caja de Seguro Social (G.O. 22.805 de 15 de junio de 1995).

Partiendo de dicho dictamen la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, mediante Resolución N° 936-96 de 25 de septiembre de 1996, resolvió concederle a la asegurada, una indemnización de mil cuarenta y cuatro balboas (B/.1044.00) por el accidente sufrido el día 19 de agosto de 1993.

De esta resolución se notificó la demandante el 6 de noviembre de 1996 e interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio el 21 de octubre de ese año.

En el escrito en que interpuso dichos recursos la demandante manifestó que consideraba injusta la decisión de la Caja de Seguro Social, por cuanto que:

> "...
> La apreciación hecha por la Comisión Médica ha dejado de considerar que las molestias que tengo producto del accidente son graves ya que se me adormecen las dos piernas y las manos, siento calambres en la pierna derecha ...
>
> Añado a lo anteriormente expuesto, que producto de la operación de la columna he quedado sufriendo de dolores de espalda, calambres, dolores de cabeza, no puedo apoyar mi cuerpo en la pierna derecha." (fs.75-76 del expediente administrativo)

Ante esto, la Comisión Médica Calificadora volvió a conocer el caso de la señora DAYSI FLORES AROSEMENA, acordando en sesión de 5 de diciembre de 1996, mantener su dictamen anterior. En consecuencia, la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social mediante Resolución R.P. 1259-96 de 26 de diciembre de 1996, resolvió mantener en todas sus partes la Resolución N° 936-96 de 25 de septiembre de 1996, donde se le concede a la Señora FLORES, una indemnización por la suma de mil cuarenta y cuatro balboas con 00/100 por el accidente sufrido el 19 de agosto de 1993, mientras laboraba para la Bananera Santa Cecilia.

La demandante se notificó de esta resolución el 3 de febrero de 1997, sustentando el recurso de apelación interpuesto en subsidio, el 7 de febrero de ese año.

En dicho escrito la señora FLORES solicitó a las autoridades de la Caja de Seguro Social reevaluar su caso a fin de que le fuera otorgada una pensión de invalidez y no una indemnización, ya que el accidente sufrido en 1993 le había dejado graves secuelas, que habían influído en su actividad profesional. (fs.87-88 del expediente administrativo).

Posteriormente la Comisión Asesora Técnica de Riesgos Profesionales e Invalidez, conoció el caso de la demandante, y acordó solicitar que fuese evaluada por el Servicio de Medicina del Trabajo y por la Comisión Médica Calificadora.

La señora DAYSI FLORES fue evaluada por la doctora Gydia Novoa, del

Servicio de Medicina del Trabajo, quien en informe de 26 de septiembre de 1997, diagnosticó que la paciente sufre de lumbalgia crónica, hernia de disco L5-S1 y escoliosis. También manifestó que el estado de la paciente ha empeorado, sin embargo le dio a la paciente un pronóstico bueno para la vida pero reservado para laborar.

Por su parte, la Comisión Médica Calificadora, al entrar a evaluar por tercera vez el caso de la señora FLORES, remitió al doctor Ricardo Williams, la Nota N° CMC 76-97 de 30 de octubre de 1997, en la cual indicó lo siguiente:

> "La señora Daysi Flores ... ha solicitado Pensión de Invalidez y la COMISION MEDICO CALIFICADORA DE RIESGOS PROFESIONALES, no tiene suficientes elementos para dar un dictamen final, razón por la cual le solicito muy respetuosamente evalúe al paciente desde el punto de vista de su especialidad. ...
>
> Deseamos que se haga hincapié en el diagnóstico, tratamiento y si el paciente puede o no trabajar. Si no puede, por cuanto tiempo." (f.110 del expediente administrativo)

A ésta nota respondió el doctor Willims ese mismo día, manifestando que la señora ameritaba pensión definitiva (Ver contracara de la foja 110 del expediente administrativo).

Posteriormente, la Comisión Médica Calificadora diagnosticó que la señora padecía de secuela de aplastamiento de L5 + síndrome de latigazo y déficit en los movimientos de ambas caderas. En consecuencia le reconoció una incapacidad del 40% en base a los numerales 298, 304 y 327 del artículo 21 del Acuerdo N° 1 de 29 de mayo de 1995 de la Caja de Seguro Social.

Con base a ese dictamen, la Comisión Asesora Técnica de Riesgos Profesionales e Invalidez, recomendó conceder a la señora FLORES una pensión parcial permanente, así como la revocación de la Resolución N° 936-96 de 25 de septiembre de 1996, mantenida por la Resolución N° 1259-96 de 26 de diciembre de 1996, ambas de la Comisión de Prestaciones.

De ahí que la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social dictase la Resolución N° 15,872-98-J.D., de 26 de marzo de 1998, a través de la cual resolvió revocar dichas resoluciones y conceder a la señora DAYSI FLORES, una pensión por incapacidad parcial permanente por la suma mensual de cincuenta y ocho balboas (B/.58.00), por el término de dos (2) años.

La asegurada se notificó de esa resolución el 13 de abril de 1998 e interpuso demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción el 26 de mayo de 1998.

En dicha demanda, la parte actora solicita que se declare que la Resolución N°15,872-98-J.D. de 26 de marzo de 1996 es nula por ilegal, por haber infringido los artículos 23 y 27 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970, y que en consecuencia la señora FLORES tiene derecho a que se le reconozca una pensión absoluta permanente por riesgo profesional.

De la lectura del expediente se deduce que en efecto la señora DAYSI FLORES AROSEMENA está imposibilitada para trabajar y por tanto su condición actual se ajusta a lo establecido en el artículo 23 del precitado decreto, es decir, la demandante tiene una incapacidad permanente absoluta porque padece una alteración incurable que le impide desempeñar cualquier clase de trabajo remunerado y por tanto tiene derecho a una pensión mensual equivalente al 60% del salario, tal como lo establece el artículo 27 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970.

A ésta conclusión se llega después de analizar los informes rendidos por los doctores Ricardo Williams (informe de 30 de octubre de 1997) y Gydia Novoa (informe de 26 de septiembre de 1997) a la Comisión Médica Calificadora, así como

los criterios expuestos por esta última en su declaración de 8 de septiembre de 1999, cuya parte medular reproducimos a continuación por considerarlo de interés para la resolución de esta causa:

> "PREGUNTADA: Diga si sabe qué padecimiento surge DAYSI FLORES en la columna. CONTESTO: Si ella sufre de lumbalgia crónica (operada de hernia del disco L4-L5, además hernia de disco L5-S1 no operada); asmática; hipertensión arterial; alergia respiratoria. PREGUNTADA: Diga si puede explicar el dictamen dado por usted en el que dijo: "La condición de la paciente ha empeorado, que su estado es bueno para la vida, pero reservado para laborar y que no puede realizar su trabajo en forma definitiva. CONTESTO: Considerando que la paciente fue operada por hernia de disco L4-L5, siguió con sus síntomas en forma persistente y continua que no mejoraba a pesar del tratamiento quirúrgico y conservador por lo que se le realizaron exámenes: tomografía computarizada posterior a la operación donde se diagnosticó que tenía alteraciones desde L3 a S1, bajo este contexto la paciente definitivamente para realizar las labores cotidianas de trabajo no está apta. PREGUNTADA: Explique por qué usted ha dicho que DAYSI FLORES no puede trabajar. CONTESTO: Por lo anteriormente expuesto la paciente no puede desempeñar las funciones propias de su puesto laboral, ya que implicaría mantener sintomática a la paciente." (fs.53-54, el subrayado es de la Sala)

Además, visible a fojas 67-68 del expediente del proceso contencioso administrativo se observa el informe pericial rendido por el doctor Ricaurte Hernández Muñoz, especialista en Medicina Física y Rehabilitación, quien expresó lo siguiente:

> "IMPRESION DIAGNOSTICA:
> *Lumbalgia Crónica, por compresión radicular L5-S1 Derecha.
> *Perdida de la Capacidad Adquisitiva de empleo secundaria a su lumbalgia.
>
> COMENTARIO:
> Si se toman en cuenta los antecedentes laborales por tratarse de un accidente laboral, que únicamente se sabe desempeñar en posición de pie, en funciones que involucran esfuerzo de columna lumbar y que esto empeora su cuadro de dolor lumbar, que después de la cirugía se tiene un T.A.C. que evidencia compresión de raíz lumbar, que según nuestro examen físico afecta incluso L3, soy del criterio que esta señora se debe pensionar por invalidez."

Ahora bien, del examen de lo antes expuestos ésta Superioridad ha concluido que la Resolución impugnada en el presente proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, viola los artículos 23 y 27 del Decreto de Gabinete 68 de 1970, debe declararse su ilegalidad y restituirse el derecho violado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES NULA, POR ILEGAL, la Resolución N° 15,872-J.D. de 2 de marzo de 1998, dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y DECLARA QUE LA SEÑORA DAYSI FLORES AROSEMENA, con seguro social N° 37-8714 y cédula de identidad personal N° 4-123-1795, tiene derecho a que se le reconozca una pensión mensual por incapacidad permanente absoluta causada por riesgo profesional y ORDENA a la Caja de Seguro Social le otorgue la pensión a que tiene derecho a partir de la fecha de la Resolución anulada.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JAIME FRANCO PÉREZ, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS VILLAMIL, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 067 DE 7 DE ABRIL DE 1997, EXPEDIDO POR EL GERENTE DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Jaime Franco Pérez, en representación de CARLOS VILLARREAL ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N° 067 de 7 de abril de 1997, expedido por el Gerente General del Instituto Panameño de Turismo, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Como consecuencia de la anterior declaración, el apoderado judicial pide que se ordene el reintegro del señor CARLOS VILLARREAL a sus labores en la institución con un salario igual al que devengaba al momento de ser destituido y que se le paguen los salarios caídos y demás prestaciones económicas derivadas de su condición de funcionario público, desde que fue despedido hasta que se haga efectivo el reintegro.

Por medio del Decreto impugnado el señor CARLOS VILLARREAL fue separado del cargo que desempeñaba como Administrador Provincial en el Instituto Panameño de Turismo.

I. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

El Gerente General del Instituto Panameño de Turismo remitió su informe de conducta mediante la Nota N° 112-357-97 de 20 de octubre de 1997, indicando que destituyó al demandante "debido a evidentes faltas administrativas, las cuales fueron detectadas por la Contraloría General de la República ..." Agregó que el IPAT como institución vigilante de la buena administración de sus recursos financieros y humanos, debe sancionar las faltas administrativas en que incurra su personal, independientemente de los procesos sobre responsabilidad patrimonial y penal que puedan instaurarse.

II. NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

A juicio del apoderado judicial de la parte actora, el acto que se impugna expedido por el Gerente General del Instituto Panameño de Turismo es nulo, porque vulnera los artículos 100, 101 de la Resolución N° 61 de 22 de mayo de 1996 y los artículos 2, 3, 5, 10 del Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990. El texto de las normas citadas es el siguiente:

"RESOLUCIÓN N° 61 DE 22 DE MAYO DE 1996
REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO

ARTICULO 100. Son causales de destitución las siguientes:

...
d. Incurrir en faltas graves de probidad, conducta inmoral o comisión de hechos delictivos que perjudiquen el buen funcionamiento de la Institución.

ARTÍCULO 101. Todo funcionario administrativo a quien se le comunique la posible imposición de una sanción de suspensión o

destitución tendrá derecho a presentar en primera instancia ante su jefe inmediato la petición de forma verbal o escrita en un término no mayor de cinco (5) días hábiles contados previa a la aplicación de la medida en donde se le escuchará su versión de los hechos, presentará las pruebas que considere pertinentes y solicitará las investigaciones que sean necesarias para demostrar su inocencia, cuando las mismas sean procedentes.

DECRETO DE GABINETE N° 36
DE 10 DE FEBRERO DE 1990.

"Por el cual se crea dentro de la Contraloría General de la República la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y se adopta su procedimiento."

ARTÍCULO 2. Corresponde a los Magistrados de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, decidir mediante Resolución, previo el cumplimiento del procedimiento establecido en este Decreto de Gabinete y en el reglamento que en su desarrollo dicte el Contralor General de la República, sobre la responsabilidad patrimonial que frente al Estado le pueda corresponder a los agentes y empleados de manejo de bienes y fondos públicos por razón de su gestión; a los agentes y empleados encargados de su fiscalización; a las personas que a cualquier título o sin él, al haber tenido acceso a fondos o bienes públicos, se hubiesen aprovechado indebidamente de los mismos, en su beneficio o en beneficio de un tercero; a las personas que hayan figurado como empleados públicos y en esta condición hayan recibido salarios o emolumentos pagados con fondos públicos, sin haber prestado los servicios al Estado, cuya retribución se pretendía con los salarios o emolumentos recibidos; a las personas que por sí o por medio de personas jurídicas, hayan sido beneficiarias de pagos hechos con fondos públicos, sin haberle prestado servicios ni brindado contraprestaciones al Estado o que el valor reconocido a las mismas guarde una desproporción notoria respecto del servicio efectivamente prestado y a las personas que hubiesen adquirido títulos valores del Estado de cualquier clase de un modo indebido y a los indebido y a los funcionarios que voluntariamente lo hubieren propiciado.

...
ARTÍCULO 3. El procedimiento indicado en el artículo anterior se iniciará en los siguientes casos:

a. Cuando surjan reparos al momento de la rendición de cuentas de un agente o empleado de manejo de fondos o bienes públicos, o a consecuencia de un examen, auditoría e investigación efectuados por la Contraloría General de la República.

b. En los demás casos, cuando por razón de un examen, una auditoría o una investigación efectuada por la Contraloría General de la República, hechos con ocasión de información recibida de cualquier fuente o por cualquier otro motivo, si del resultado de ese examen, auditoría o investigación se desprende que hay méritos suficientes para iniciar tal procedimiento.

El examen, auditoría o investigación a los que se alude este literal, pueden ser iniciados también por solicitud formulada por escrito al Contralor General de la República, por cualquier de los Magistrados de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.

ARTÍCULO 5. En los casos mencionados en el Artículo 3 de este Decreto de Gabinete, los funcionarios que hicieron el examen, la auditoría o la investigación, prepararán un informe de antecedentes

que presentarán, junto con las evidencias del caso, ante la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.

En la elaboración de este Informe tiene además que participar un abogado al servicio de la Contraloría General de la República.

Sin perjuicio de lo que disponga el reglamento, el informe de antecedentes identificará con sus nombres y apellidos y cédula de identidad personal, a los sujetos a quienes se les pueda exigir responsabilidad, con indicación de los cargos que desempeñen o hubiesen desempeñado al momento de incurrir en la irregularidad, si fuere el caso; la cuantía estimada del perjuicio económico y en su defecto el modo de establecerlo; contendrá además una descripción o una referencia a los hechos, contratos, actividades, operaciones y sus circunstancias, de los cuales se pueda desprender la posible responsabilidad patrimonial.

También puede incluir la mención de cualquier elemento de juicio que se estime adecuado para contribuir al esclarecimiento de las irregularidades advertidas, o de los hechos, actos u omisiones invocados.

ARTÍCULO 10. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación de la Resolución a que se refiere el artículo 8 de este Decreto de Gabinete, el sujeto llamado a responder patrimonialmente podrá presentar por medio de apoderado debidamente constituido, en las oportunidades y por las veces que estime necesario, las pruebas documentales que a bien tuviere. Si no las tuviere en su poder, puede señalar el despacho público donde las mismas reposen, pero en el escrito en que se haga esta indicación deberá dar la información indispensable para la adecuada identificación de los documentos invocados. Dentro del mismo término puede presentar también por medio de apoderado, todos los escritos explicativos y de descargo que estime convenientes. Luego del vencimiento de los dos (2) meses mencionados en este inciso, el sujeto llamado a responder patrimonialmente por medio de su apoderado puede dentro del mes siguiente y que comenzará a correr a partir del vencimiento de los dos (2) meses anteriores, presentar todos los alegatos, escritos explicativos y de descargo que estime convenientes.

Si dentro de los dos (2) primeros meses señalados el sujeto llamado a responder patrimonialmente hubiere advertido la existencia de documentos que reposan en otros despachos públicos y de los mismos no se hubiese aportado copia auténtica, esta copia se podrá aportar al expediente dentro del mes siguiente de que trata el inciso anterior.

La expedición de copias auténticas no causará derecho alguno. ..."

El demandante considera que el literal d) del artículo 100 del Reglamento Interno del IPAT fue violado porque la conducta que se le imputa al señor CARLOS VILLARREAL no constituye una falta administrativa sino la comisión de un delito, razón por cual debió iniciarse una investigación penal que le permitiera ejercer su derecho de defensa, antes de proceder a sancionarlo administrativamente (f.91).

Señala el demandante que el acto administrativo impugnado viola, además, el artículo 101 del Reglamento Interno del IPAT, porque a su representado no se le siguió el procedimiento legal establecido para la imposición de una sanción como lo es la destitución (f.91).

Finalmente, señala la parte actora, que se han violado los artículos 2, 3, 5 y 10 del Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990 porque un servidor

público que lesione el patrimonio del Estado por medio de un acto delictivo, como el que se le imputa a su representado, no puede ser destituido sin que antes la Dirección de Responsabilidad Patrimonial determine la responsabilidad del funcionario a través del respectivo procedimiento legal, pues de lo contrario "sería una forma subjetiva de sancionar sin garantizar el debido proceso y el derecho de defensa que tiene el inculpado" (fs.92-93).

IV. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante su Vista Fiscal N° 578 de 31 de diciembre de 1997, la señora Procuradora de la Administración contestó la demanda, se opuso a las pretensiones del demandante y solicitó que se declare legal el acto impugnado (fs. 109 a 122).

Manifestó que existe una gran diferencia entre las sanciones de las jurisdicción ordinaria penal y/o civil y la patrimonial y administrativa, aplicables respectivamente por la comisión de delitos y de faltas administrativas. En el presente caso, la medida impuesta al señor CARLOS VILLARREAL es de naturaleza disciplinaria y esta no representa un impedimento para que éste pueda ser sancionado por la responsabilidad patrimonial y penal derivada de la correspondiente investigación, toda vez que se trata de distintas y autónomas jurisdicciones.

La representante del Ministerio Público, en cuanto a la petición de pago de los salarios caídos, agregó que no procede según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, salvo que este derecho lo consagre un Ley formal.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Los aspectos primordiales que motivan la controversia que se examina son dos: primero, si la destitución del señor CARLOS VILLARREAL es consecuencia de la comisión de una falta administrativa establecida en el Reglamento Interno de la Instituto Panameño de Turismo y segundo, si los cargos que se hacen al demandante son el resultado de una investigación; y si se le dio la oportunidad de defenderse en el transcurso de dicho proceso.

Los artículos 50, 51 y los numerales 1, 8, 9 del artículo 52 del Reglamento aludido disponen que son deberes de los empleados del Instituto Panameño de Turismo los siguientes:

> "ARTÍCULO 50. Todo servidor público deberá cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Las disposiciones del presente Reglamento Interno, las medidas de seguridad e higiene y demás disposiciones que se adopten.
>
> ARTÍCULO 51. Todo servidor público es responsable por el buen cumplimiento de las funciones y deberes a él asignados.
>
> ARTÍCULO 52. ... Son deberes de los servidores públicos, además de los que se consignan en la descripción de sus puestos o descripción de sus funciones, los siguientes:
>
> 1. Realizar personalmente el trabajo convenido dentro o fuera de la Institución, cual fuese el caso, aportando el máximo de su rendimiento, cuidado y eficiencia;
> ...
> 7. Vigilar y salvaguardar los intereses del Estado y del Instituto Panameño de Turismo.
>
> 8. Responder por el uso y la conservación de los documentos, materiales, útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su custodia o administración."

El literal d) del artículo 91 del Reglamento Interno del Instituto Panameño

de Turismo, establece que la destitución del cargo es la medida aplicable a las faltas más graves, y la causal de destitución que fundamentó el acto impugnado, se encuentra en el literal d) del artículo 100 de dicho Reglamento, que señala como tal el incurrir en faltas graves de probidad, conducta inmoral o comisión de hechos delictivos que perjudiquen el buen funcionamiento de la Institución.

Consta de fojas 6 a 8 del cuadernillo del "Informe de Auditoría Especial de la Contraloría General de la República Relativo al Análisis del Pago de Viáticos, adquisición de bienes y servicios y gastos en Ferias Nacionales e Internacionales por parte de funcionarios de la Institución"; y la Nota fechada 14 de abril de 1997 dirigida por un Supervisor y tres auditores de la Contraloría General de la República, al licenciado Aristides Romero, Contralor en dicha entidad para ese entonces, en la que se le informa lo siguiente:

> "Como resultado de nuestra labor se determinaron irregularidades en el Instituto Panameño de Turismo que causaron lesión al Tesoro Nacional por la suma de B/.21,596.44 ...
>
> Se determinaron fallas en la estructura de control interno, entre las cuales podemos señalar la ausencia de control para los pagos directos, deficiencia en las contrataciones públicas, no se confeccionan contratos para el alquiler de flotas vehiculares y ausencia de controles administrativos que prevengan las duplicidades de pagos.
>
> Entre los hechos irregulares, podemos señalar una serie de cheques girados a nombre de algunos funcionarios del IPAT para cubrir gastos de ferias nacionales y en el extranjero. Una vez concluidos los eventos, estos funcionarios presentaban facturas para sustentar los gastos efectuados; sin embargo algunas facturas son recibos hechos a mano o facturas comunes de librería, con el agravante que se falsificaron las firmas de las personas que supuestamente debían recibir dichos pagos nos han manifestado que las veces que prestaron sus servicios, no recibieron la cuantía indicada en los recibos, y en otra ocasiones no recibieron el pago ni prestaron el servicio ...
>
> Vinculados a estas irregularidades se encuentran los funcionarios: Vielka Edith Oro de Torrijos, ex Subgerente General del IPAT; Brenda Aracelly Tejera Carrasco, ex Secretaria de la Subgerente; Carlos Villareal, Hirám Martín Filós, Gitza Bonilla y los particulares Irving Carrasco, Horacio Kelly Filós y Giovanni Pulice. ..." (el resaltado es de la Sala).

Como prueba de lo anterior, a foja 45 del informe de auditoría, está legible la fotocopia de la factura correspondiente al pago en concepto del alquiler de una carreta, un trapiche y otros enseres típicos por un monto de doscientos cincuenta dólares. No obstante, según la declaración voluntaria del señor Dimas Caballero (fs. 48-49), quien cedió la carreta temporalmente para su exhibición en la Feria de Azuero en el año de 1996, él no recibió pago alguno por ello y el nombre y número de cédula que aparece en la mencionada factura no corresponde a la suya.

También, la señora Lidia Tello de Batista se refirió a la factura legible a foja 61 del informe de auditoría, expresando que "a sus manos nunca llegaron esos B/.350.00 ..." en concepto de pago por la presentación en la Feria de Azuero de parrampanes, diablicos sucios, torito guapo, conjunto típico y mini Sandra y Sammy. Además, afirmó que ella no hizo esa factura; que el nombre que ahí consta, no es su nombre correcto y que el número de cédula no corresponde al de su identidad personal.

Cabe señalar que, el señor Carlos Iván De León también afirmó mediante declaración voluntaria, que la factura legible a foja 40 del informe de auditoría, no fue confeccionada por él y que la firma y la numeración de la

cédula que ahí constan no corresponden a las suyas, a pesar de que la cantidad de dinero sí equivale al monto recibido (Cfr. fs. 43-44).

Aunado a lo anterior, el señor Mario Córdova Torres afirmó que él no firmó la factura legible a foja 45 del informe de auditoría, pero que el señor CARLOS VILLARREAL le había notificado que iba a confeccionar una factura "por la cantidad que yo le había solicitado." (fs.56,59,-60)

En el precitado informe de auditoría, también consta que por medio de las Notas N° 82-DPCLS (f.47), 26 DPCH. DP. (52), 23 DPCLS (f.55), DPCCH/4-12-97 (fs.58), emitidas por la Dirección Provincial de Cedulación de Herrera y Chiriquí, la Oficina de Control Fiscal Regional de Los Santos, comprobó que las firmas y números de cédulas, que aparecen en varias de las facturas presentadas por el señor CARLOS VILLARREAL para sustentar el desembolso de los gastos efectuados para el montaje del pabellón del IPAT, en la Feria Internacional de Azuero celebrada del 11 al 21 de abril de 1996, no corresponden al de las personas registradas.

Esta actitud del demandante, en opinión de la Sala constituye una grave falta al desempeño y cuidado de su trabajo como administrador estatal.

Durante el proceso de investigación el señor CARLOS VILLARREAL, por medio de la Nota fechada 4 de febrero de 1997, se dirigió al Contralor General de la República, expresando lo siguiente:

> "A continuación presento aclaración de las facturas del evento ferial, razón por el cual se me investiga.
>
> Deseo aclarar que al momento de adquirir los servicios de cada una de las personas, no contaban con facturas disponibles. Al regreso, a (sic) solicitar las firmas correspondientes, las personas que se encontraban y no es mi culpa si las personas que firmaron pusieron nombres cualquiera con números de cédula que no concuerdan. ..." (fs. 70-71 del informe).

Es evidente para esta Sala que la anterior respuesta denota, no sólo una conducta omisiva intencional del deber de administrador del demandante en relación con los servicios contratados para la representación del IPAT en la Feria Internacional de Azuero de 1996, sino la posible comisión de un delito.

Por otro lado, a juicio de la Sala no es exacta la aseveración de la parte actora de que no se hizo una investigación dentro de un proceso que permitiera descargos de parte del señor CARLOS VILLARREAL. Al examinar el Informe presentado el 14 de abril de 1997, al señor Contralor General de la República por los supervisores y auditores de esa institución (señores Liborio Caballero, Rolando Solís, Oldemar Guerra y Aneth Torres), la Sala ha constatado que sí se investigó el asunto minuciosamente, y a fojas 70 y 71 de dicho informe consta la declaración voluntaria del demandante en la que hace sus descargos y explica su versión de los hechos como justificación de su conducta. Por tanto, la Sala estima que como el demandante no justificó su conducta, se le aplicó la sanción de destitución.

En lo concerniente a la violación de los artículos 2, 3, 5 y 10 del Decreto de Gabinete 36 de 1970, la Sala estima pertinente señalar al demandante que el procedimiento disciplinario es independiente y de igual manera, puede ser procesado penal y/o patrimonialmente. Esta Corporación de Justicia, se ha pronunciado sobre el particular, de la siguiente forma:

> "Es preciso aclarar que cuando el artículo 32 de la Constitución dice que nadie será juzgado más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria, lo que establece es que una persona no puede ser juzgada más de una vez penal, policiva o disciplinariamente. El precepto no impide, pues, que alguien sea

> sancionada disciplinariamente y que lo sea también penalmente o viceversa. Así, puede ocurrir que un Ministro o un Director de una institución autónoma destituya a un empleado porque ha cometido un delito; pero esta sanción disciplinaria no impide, ni mucho menos, que la persona sancionada sea luego juzgada y penada por la autoridad jurisdiccional competente.
>
> De ahí que SAYAGUEZ LASO se exprese a este respecto en los siguientes términos:
>
> Hemos señalado antes que las responsabilidades penal y disciplinaria no se excluyen una a la otra y que, por lo tanto, un mismo hecho puede motivar la aplicación de sanciones penales y disciplinarias (SAYAGUES LASO, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, 5a. ed., Montevideo, 1987, p. 337)." ... (Sentencia de 16 de octubre de 1996. Registro Judicial de octubre de 1996. Págs. 380-387) (el resaltado es de la Sala).

Por todo lo expuesto, a juicio de la Sala, la acción de personal impugnada se ajustó a derecho porque en el negocio en examen se ha probado, mediante una minuciosa investigación, que la conducta de CARLOS VILLARREAL configuró una causal de destitución contemplada en el Reglamento Interno de la Institución y que el señor VILLARREAL tuvo la oportunidad de defenderse de los cargos que se le imputan.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES, el Resuelto N° 017 DRH de 7 de abril de 1997, la Resolución N° 49 de 17 de junio de 1997 y la Resolución N° 43 de 28 de julio de 1997, dictados por el Gerente General y la Junta Directiva del IPAT, respectivamente, y NIEGA las demás declaraciones pedidas por el licenciado Jaime Franco, en representación de CARLOS VILLAREAL, en el presente proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINSTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FERNANDO SOLORZANO EN REPRESENTACIÓN DE MARGARITA ESILDA SOLORZANO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA DECISIÓN DE 22 DE MAYO DE 1998, DE LA COMISIÓN DE FONDO COMPLEMENTARIO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado FERNANDO SOLORZANO, actuando en nombre y representación de la señora MARGARITA ESILDA SOLORZANO, ha interpuesto ante esta Corporación de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declaren nulas, por ilegales, la Decisión de 22 de mayo de 1998 dictada por la Comisión de Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos de la Caja de Seguro Social, la Nota FCFyC. 053-98 de 28 de mayo de 1998, emitida por la licenciada Rosa Rodríguez Arcia, Secretaria de dicha

comisión; la negativa tácita por silencio administrativo a reconsiderarar el acto impugnada; y para que se haga otras declaraciones.

Admitida la demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración, quien se opuso a las pretensiones de la parte actora mediante su Vista Fiscal N° 177 de 29 de abril de 1999. Además, se requirió al funcionario demandado que rindiera un informe de conducta, y así lo hizo a través de su Nota s/n de 31 de diciembre de 1998.

I. CONTENIDO DE LOS ACTOS IMPUGNADOS

La Comisión de Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos, en reunión celebrada el día 22 de mayo de 1998, luego del análisis del expediente de la asegurada Margarita Solorzano acordó contestar, por medio de nota, que los montos que ella alude haber recibido por medio de títulos prestacionales no han sido pagados ni acreditados a la cuenta individual y por lo tanto mientras estas cuotas no sean pagadas a la Caja de Seguro Social y acreditadas a su cuenta individual no procede el ajuste del monto de la jubilación.

Dicha decisión le fue comunicada posteriormente a la señora SOLORZANO, mediante nota N° FCFyC. 053-98 de 28 de mayo de 1998, firmada por la Secretaria de la comisión, licenciada Rosa Rodríguez Arcia.

II. NORMAS IMPUGNADAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCION

La parte actora considera que los actos administrativos impugnados han violado en forma directa por omisión, el artículo 28 de la Ley 1 de 6 de enero de 1954, el cual establece que:

> "Artículo 28. Las enfermeras al servicio del Estado, Instituciones municipales, u oficiales autónomas o semi-autónomas tendrán derecho a ser jubiladas cuando además de haber cumplido 50 años de edad comprobaren haber trabajado durante 25 años de servicios consecutivos o treinta años no consecutivos acumulados indistintamente. La jubilación será por el último sueldo devengado."

Al explicar el concepto de la infracción, el apoderado de la demandante señaló que se ha incurrido en la omisión de lo preceptuado por cuanto que a la señora SOLORZANO, no se le ha reconocido el último sueldo que devengó, es decir la suma de B/.1,040.00 mensual, habida cuenta que la propia Caja de Seguro Social, con posterioridad a resolver la jubilación hizo efectivo el pago, por medio de títulos prestacionales, del ajuste salarial que le adeudaba del 16 de mayo al 30 de noviembre de 1989, en razón de su ascenso a la X categoría.

También alega el apoderado judicial de la señora SOLORZANO, que los actos administrativos impugnados violan directamente, por omisión, el artículo 73 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954, el cual preceptúa que:

> "Artículo 73. Las prestaciones en dinero concedidas por la Caja podrán ser revisadas por causa de errores de cálculo, falta en las declaraciones, alteración en los datos pertinentes, falsificación de documentos o por cualquier error u omisión en el otorgamiento de tales prestaciones. Cuando de la revisión resultaren reducidas tales prestaciones o revocadas las ya concedidas, los beneficiarios no estarán obligados a devolver las sumas recibidas en exceso, a menos que hubieren sido pagadas a base de documentos, declaraciones o reclamos fraudulentos o falsos. En este caso la Caja exigirá la devolución de las cantidades ilícitamente percibidas, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar."

El abogado de la parte actora considera que el caso de su mandante contituye un claro ejemplo de omisión en el otorgamiento de las prestaciones, ya

que la jubilación por antigüedad de servicios que le fue concedida solamente tomó en cuenta el monto del último cheque recibido a la fecha de su retiro de funciones (B/.980.00), pero nunca el monto que legalmente le correspondía, o sea B/.1,040.00, en razón de su ascenso a la X categoría profesional desde el 16 de mayo hasta el 30 de noviembre de 1989, un día antes de su retiro de servicio, cuya diferencia fue finalmente cancelada mediante la Planilla Especial N° 40807 antes mencionada.

Considera el abogado, que la violación alegada radica precisamente en la negativa de la Caja de Seguro Social de efectuar el ajuste solicitado, ignorando que de acuerdo al artículo 73 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, dicha Institución posee una facultad revisora de las jubilaciones otorgadas y que había mérito para tal revisión debido a que la jubilación concedida a su representada por Resolución N° 838 de 27 de septiembre de 1989 de la Comisión de Fondo Complementario, OMITIO cotizaciones adeudadas por la misma CAJA DE SEGURO SOCIAL como empleadora, que más tarde se pagaron al expedirse los títulos prestacionales 625702 a 625721 correspondientes a las prestaciones adeudadas por el cambio de categoría.

También estima el apoderado judicial de la señora SOLORZANO, que se han violado directamente, por omisión, los artículos 2 y 8 del Decreto de Gabinete N° 50 de 25 de noviembre de 1992, que a la letra dicen:

> "Artículo Segundo: LOS TITULOS PRESTACIONALES se emitirán exclusivamente para cancelar las siguientes obligaciones:
>
> a) Las que el Estado adeude o llegue a adeudar hasta el 31 de diciembre de 1992, a los servidores públicos en concepto de sobresueldos, aumentos por cambios de categoría, permanencias, reclasificaciones y demás incrementos salariales debidamente reconocidos.
>
> b) Los que el Estado adeude o llegue a adeudar hasta el 31 de diciembre de 1992 a los exservidores públicos, en concepto de vacaciones."
>
> "Artículo Octavo: Las prestaciones que se paguen por medio de LOS TITULOS PRESTACIONALES estarán sujetas a las cuotas y aportes del Seguro Social, por lo que se practicarán las retenciones correspondientes antes de emitirlos. La Caja de Seguro Social, de común acuerdo con la Contraloría General de la República, establecerá la forma en que dichas cuotas y aportes serán canceladas."

Señala el apoderado de la señora MARGARITA SOLORZANO, que de acuerdo con esas normas, los títulos prestacionales tienen como finalidad la cancelación de las obligaciones que tiene el Estado con servidores y exservidores públicos. Agrega que en su concepto cancelar dichas obligaciones no puede ser una acción diferida para los efectos de los controles administrativos y de seguridad social que lleva el Estado. De allí la finalidad del artículo 8 ibidem que no establece por ningún lado que esas cuotas y aportes del Seguro Social ingresarán a cada cuenta individual cuando se rediman los títulos.

Finalmente el abogado de la parte actora señaló que se han violado directamente, por omisión, los artículos 35-B y 58 del Decreto Ley 14 de 27 de agosto de 1954, Orgánica de la Caja de Seguro Social, los cuales establecen lo siguiente:

> "Artículo 35-B: Los patronos o empleadores estarán obligados a deducir a sus trabajadores las cuotas a que se refiere el literal a) del artículo 24, de la presente Ley. Igualmente, estarán obligados a pagar en efectivo a la Caja de Seguro Social, las cuotas obrero patronales dentro del mes siguiente al que correspondan, según las

fechas que se establezcan en el reglamento que dictará la Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social determinará si aplica el sistema de planillas o cualquier otro, en la recaudación de las cuotas de los asegurados y patronos o empleadores y, reglamentará las sanciones que ocasiona el incumplimiento del sistema, por parte del patrono.

La Caja de Seguro Social estará obligada a informar a los asegurados que lo soliciten, el número y monto de las cuotas que a nombre de ellos haya recibido."

Señala el abogado que la decisión expresa emitida por la Comisión y su Secretaría de no conceder el ajuste solicitado porque los títulos prestacionales no han sido pagados ni acreditados a la cuenta individual de su mandante por estar pendientes de redención, es contraria a las normas citadas, puesto que con esa decisión elude su responsabilidad primaria como empleadora, como ente obligado a depositar las cuotas obrero patronales que retiene de sus trabajadores, y como despacho público encargado de la administración de la seguridad social en Panamá (fs.20-25).

III. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

Mediante nota de 31 de diciembre de 1998, el funcionario demandado rindió su informe de conducta en el cual expresó lo siguiente:

"Mediante formulario presentado a la Institución el 9 de mayo de 1989, la señora MARGARITA SOLORZANO BONILLA, solicitó se le reconociera una jubilación por antigüedad de servicios.

A través de la Resolución N° C.F.C. 838 de 27 de septiembre de 1989, la Comisión del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales, resolvió reconocer a la asegurada una jubilación por antigüedad de servicios; por la suma mensual de Novecientos Ochenta Balboas con 00/100 (B/.980.00), a partir de la presentación del cese de labores, siendo notificada el 6 de noviembre de 1989.

En escrito presentado mediante apoderado legal el 11 de mayo de 1998, la asegurada solicita se le conceda un aumento de su jubilación por antigüedad de servicios en consideración al ajuste de la escala salarial a que tenía derecho en el mes de abril de 1989, pero que no se le pagó antes de que se resolviera su derecho a jubilación.

La Comisión de Fondo Complementario de Prestaciones Sociales, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 1998 ... acordó contestar mediante nota que los montos que la asegurada alude haber recibido por medio de títulos prestacionales, no han sido pagados ni acreditados a su cuenta individual. Por tanto, mientras estas cuotas no sean pagada a al Caja de Seguro Social, y acreditadas a su cuenta individual, no procede el ajuste del monto de la jubilación.

Mediante Nota FCFyC. 053-98, la Comisión le da contestación a la asegurada MARGARITA ESILDA SOLORZANO, quien por medio de Apoderado Legal, presenta en fecha 11 de junio de 1998, formal recurso de reconsideración con apelación en subsidio, donde alega entre otras cosas, que el hecho que los títulos prestacionales no han sido pagados y acreditados a la cuenta individual de su mandante no es su responsabilidad y que la Institución está incumpliendo como patrono con esta obligación, por tanto concluye solicitando que se revoque la negativa expresada en la Nota FCFyC. 053-98 de 28 de mayo de 1998, y se ordene el ajuste solicitado.

La Comisión de Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los

Servidores Públicos, en sesión celebrada el día 26 de junio de 1998 ... acordó remitir el expediente a la Dirección de Asesoría Legal, a fin de que se preparase providencia en la cual se declarase improcedente el recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra la Nota N° FCFyC.053-98. Además, redactar nota explicativa, indicando que cualquier reclamo que tenga que hacer a la Caja de Seguro Social por salarios, como patrono, no puede ser atendido por esta Comisión, porque la Comisión de Fondo Complementario sólo atiende las prestaciones que otorga el Fondo Complementario de los Servidores Públicos.

La Comisión de Fondo Complementario, mediante providencia de 28 de agosto de 1998, manifiesta que según lo dispuesto en los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, las actuaciones administrativas susceptibles de ser objeto de impugnación son las resoluciones, por lo que no es viable interponer recurso alguno en contra de una nota. En razón de lo antes expuesto DECLARA IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración con apelación en subsidio presentado el 11 de junio de 1998 en contra de la nota N° FCFyC-053-98 de 28 de mayo de 1998, emitida por la Comisión de Fondo Complementario.

En nota de 28 de agosto de 1998, la Comisión de Fondo Complementario acordó informarle a la asegurada, que cualquier reclamo por asuntos de salarios que desee hacerle a la Caja de Seguro Social como patrono, no es competencia ni puede ser atendido por la Comisión de Fondo Complementario, toda vez que dicha comisión trata solamente los asuntos referentes a las prestaciones de dinero que otorga el Fondo Complementario, toda vez que dicha Comisión trata solamente los asuntos referentes a las prestaciones de dinero que otorga el Fondo Complementario de los Servidores Públicos, a dichos funcionarios.

El 14 de agosto de 1998, el apoderado legal de la señora MARGARITA ESILDA SOLORZANO, solicita se confirme acuse de recibo de solicitud y recursos promovidos; y si han sido resueltos.

Mediante Nota CdeF. 086-98 de fecha 2 de septiembre de 1998, la Comisión de Fondo Complementario, le contesta al licenciado Fernando A. Solorzano, representante legal de la asegurada MARGARITA ESILDA SOLORZANO, que mediante Nota FCFyC. 053-98 del 28 de 1998, se le indicó a su representada que las cuotas a que ella alude para su ajuste de jubilación, no han sido pagadas ni acreditadas a su cuenta individual, por lo tanto no existe fundamento para revisar el monto de la jubilación concedida, que el recurso de reconsideración interpuesto contra dicha nota fue declarado improcedente, y que se encuentra pendiente de notificación.

Si bien es cierto la Caja de Seguro Social canceló por medio de Títulos Prestacionales, las prestaciones laborales que adeudaba a sus funcionarios, entre ellos, a la señora MARGARITA ESILDA SOLORZANO, esto no significa que la Institución le canceló al Fondo Complementario con estos títulos, las obligaciones que le adeudaba por este concepto.

A foja 127 del expediente, aparece visible la hoja de trámite de la Secretaria de la Comisión del Fondo Complementario, al jefe de Departamento de Pensiones y Subsidios, de fecha 2 de septiembre de 1998, a fin de que se notifique a la asegurada la nota C.F.C. 086-98 y la providencia adjuntas a la misma.

A foja 128 del expediente aparecen visible la nota Bugaba de 15 de septiembre de 1998, por medio del cual el Agente Administrativo y la

encargada de Pensiones y Subsidios de Bugaba, devuelven el expediente sin la notificación correspondiente toda vez que el apoderado legal de la asegurada indicó que iría personalmente al Edificio Bolívar a ventilar el caso.

Mediante escrito recibido el 21 de septiembre de 1998, el apoderado legal de la asegurada, solicitó que se le certificaran varios hechos, entre ellos: que el 11 de mayo solicitó un ajuste a la jubilación de la Sra. Solorzano, que se emitió una nota mediante la cual se comunica la negación de ajuste, que el 11 de junio se interpuso un recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra esa nota, y finalmente que a esa fecha habían transcurrido 2 meses sin que se hubiesen resuelto los recursos interpuestos.

Se emite la Nota CdeF 099-98 del 2 de octubre de 1998, mediante la cual se brinda respuesta a la solicitud anterior, y en la misma se le indica que ya se le había dado respuesta anteriormente mediante la Nota CdeF 086-98 a la información requerida, y que los recursos fueron atendidos mediante providencia de la cual él no se notificó sino que en su lugar indicó que vendría personalmente al Edificio Bolívar a ventilar su caso, reiterándole en esta comunicación, que el expediente se encuentra pendiente de que él se notifique de la Nota CdeF 086-98, así como de la providencia que da respuesta a los recursos incoados.

En principio resulta oportuno señalar que la Resolución C.F.C. 838 del 27 de septiembre de 1989, que otorgó a la Sra. MARGARITA ESILDA SOLORZANO BONILLA, una jubilación especial por la suma de novecientos ochenta balboas (B/.980.00), se encuentra debidamente ejecutoriada, situación que ocurrió cuando después de haber sido notificada el día 6 de noviembre de 1989 transcurrieron 5 días hábiles sin que se interpusiera recurso gubernativo alguno contra la misma.

El artículo 73 de la Ley Orgánica, es la única disposición que permite modificar una resolución ejecutoriada, estrictamente bajo las condiciones establecidas en dicha norma. Cuando existe mérito para modificar o revocar una resolución que se notifica a la parte interesada, concediéndosele todos los recursos de Ley.

Cuando no existe mérito para hacer uso de esta facultad que la Ley le otorga a la Caja de Seguro Social, y que el artículo 30 de la Ley 16 de 1975, hace extensivo al Fondo Complementario, tal situación se informa en una nota a la persona interesada con la debida explicación, nota esta que no es susceptible de recurso alguno, ya que no es posible que una vez ejecutoriado el acto principal, se presenta un supuesto reclamo sin mérito alguno, con el objeto de reabrir un caso que se encuentra en firme.

Sin la aportación de las cuotas correspondientes a los títulos prestacionales pagados a la asegurada, no es posible revisar el monto de la jubilación a la Sra. Solorzano, ya que estas deben se pagadas y acreditadas a la cuenta individual para tales efectos, toda vez que proceder al ajuste sin la existencia de tales aportes, sería una actuación ilegal por parte de la Comisión del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales, en virtud de que como se indica en el artículo 31 de la Ley 15 de 1975, en concordancia con el 2 de la Ley 16 de 1975, tales cuotas forman parte de los recursos para el financiamiento de las prestaciones de éste fideicomiso.

Por otro lado, el solicitante confunde la función de la COMISION DEL FONDO COMPLEMENTARIO DE PRESTACIONES SOCIALES, que según lo dispone el artículo 31 de la Ley 16 de 1975, no es otra que la de decidir el

otorgamiento de las prestaciones concedidas conforme lo dispuesto en dicha Ley, no así la de resolver los problemas de la asegurada con su patrono CAJA DE SEGURO SOCIAL, por la no aportación de las cuotas provenientes de los títulos prestacionales.

Finalmente debemos advertir que no existe el silencio administrativo al cual alude el apoderado legal de la asegurada, ya que toda vez que la Nota 053-98 del 28 de mayo de 1998, no es susceptible de recurso alguno, por no existir en este momento mérito para hacer uso de la facultad revisora a la cual alude el artículo 73 de la Ley Orgánica, la Comisión de Fondo Complementario emitió la Providencia respectiva, de la cual el Lic. Solorzano no ha querido notificarse.

Por otro lado, en cuanto a la responsabilidad que según indica el Lic. Solorzano le cabe a la Caja de Seguro Social como patrono, debemos señalar que esta Institución posee su representante legal, que en modo alguno lo es la Comisión del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales, por lo que este último organismo no es competente para dar respuesta a las situaciones que corresponden a la Caja de Seguro Social como entidad autónoma, y por otro lado las propias normas legales que regularon lo concerniente a los valores del estado denominados títulos prestacionales ... dispusieron que la Caja de Seguro Social de común acuerdo con la Contraloría General de la República establecerían la forma en que las cuotas y aportes derivados de los títulos prestacionales serían cancelados, toda vez que según se desprende de los considerandos del Decreto de Gabinete 50 de 1992, se trataba de una deuda del Estado por la suma aproximada de ciento sesenta millones de balboas ... correspondientes a ejercicio fiscales anteriores a 1990 ... por lo que no es una simple omisión de la Caja de Seguro Social como patrono, sino una situación que involucra decisiones que, reiteramos, no son competencia de la Comisión de Fondo Complementario." (fs.53-60)

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La señora Procuradora de la Administración se opuso a las pretensiones de la parte actora, mediante su Vista Fiscal N° 177, de 29 de abril de 1999.

En este sentido manifestó oponerse a los planteamientos expuestos por el apoderado de la demandante al considerar que se ha infringido el artículo 28 de la Ley 1 de 1954, por cuanto que en dicho artículo no se indica que una vez concedida una jubilación, si se hace una modificación en la categoría, deba ajustársele el salario.

Con respecto a la presunta violación del artículo 73 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, expresó que el ajuste o revisión a que se refiere dicho artículo, únicamente es pertinente, cuando se acredita fehacientemente el derecho alegado.

Con respecto a la supuesta violación de los artículos 2 y 8 del Decreto de Gabinete N° 50 de 25 de noviembre de 1992 y de los artículos 35-B y 58 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, expresó que en el caso en que efectivamente se hubiese pagado a la demandante a través de títulos prestacionales, el patrono debió cumplir el artículo 8 del Decreto de Gabinete N° 50 de 25 de noviembre de 1992, y en consecuencia hacer las retenciones de las cuotas y los aportes del Seguro Social, para que la demandante pudiera acceder al derecho de jubilación, acorde con el último salario (fs.61-71).

V. DECISION DE LA SALA

Mediante formulario recibido por la Caja de Seguro Social el día 9 de mayo de 1989, La señora MARGARITA SOLORZANO solicitó a dicha Institución, le fuese

reconocido su derecho a jubilación por antigüedad de servicios (f.1 del expediente administrativo).

La Comisión de Fondo Complementario de los Servidores Públicos de la Caja de Seguro Social, mediante Resolución N° C.F.C. 836 de 27 de septiembre de 1998 visible a foja 41 del expediente administrativo, resolvió reconocer a la asegurada SOLORZANO una jubilación por la suma mensual de novecientos ochenta balboas (B/.980.00).

De esta Resolución se notificó la asegurada el 6 de noviembre de 1989 y el 9 de noviembre de ese año presentó renuncia del cargo de enfermera jefe inicial IX que desempeñaba en la Policlínica Pablo Espinosa de la Caja de Seguro Social, a partir del 1° de diciembre de ese año.

Posteriormente, mediante escrito presentado ante la Secretaría General de la Caja de Seguro Social el 11 de mayo de 1998, la señora MARGARITA SOLORZANO, solicitó le fuese concedido un ajuste en su jubilación por antigüedad de servicios que le fue resuelta mediante Resolución N° C.F.C. 838 de 27 de septiembre de 1989, de novecientos ochenta balboas mensuales a mil cuarenta balboas mensuales, como corresponde al ascenso a la X Categoría a la que ella tenía derecho desde el 16 de mayo de 1989 (fs.99-101 del expediente administrativo).

La Comisión de Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos, en reunión celebrada el día 22 de mayo de 1998, luego del análisis del expediente de la asegurada Margarita Solorzano acordó contestar por medio de una nota que las cuotas correspondientes a los montos que ella alude haber recibido por medio de títulos prestacionales no han sido pagados ni acreditados a la cuenta individual y por lo tanto mientras estas cuotas no sean pagadas a la Caja de Seguro Social y acreditadas a su cuenta individual no procede el ajuste del monto de la jubilación.

Dicha decisión le fue comunicada posteriormente a la señora SOLORZANO, mediante nota N° FCFyC. 053-98 de 28 de mayo de 1998, firmada por la Secretaria de la comisión, licenciada Rosa Rodríguez Arcia (f.107 del expediente administrativo).

De esta nota se notificó el abogado de la demandante y presentó recurso de reconsideración con apelación en subsidio mediante escrito que fue recibido en la Secretaría General de la Caja de Seguro Social, el 1° de junio de 1998.

El 14 de agosto de 1998, el licenciado Solorzano solicitó a la Comisión de Fondo Complementario de la Caja de Seguro Social, confirmase:

1. Acuso recibo de la solicitud, que el 11 de mayo de 1998, promovió a favor de su representada;

2. Que la Secretaría de la Comisión emitió la Nota FCFyC. 053-98 de 28 de mayo de 1998;

3. Que el 11 de junio de 1998 se promovió recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra dicha nota;

3. Que habían transcurrido más de dos meses sin que se hubiese resuelto el recurso en mención (f.123 del expediente administrativo).

La Comisión de Fondo Complementario de la Caja de Seguro Social le dio respuesta al escrito del licenciado Solorzano de 11 de junio de 1998, mediante resolución de 28 de agosto de 1998, en donde manifestó que dicho recurso de reconsideración con apelación en subsidio, era improcedente (fs.119-120 del expediente administrativo).

Igualmente, mediante Nota de 28 de agosto de 1998, suscrita por la

licenciada Rosa Rodríguez Arcia, Secretaria de la Comisión de Fondo Complementario, se le comunicó a la asegurada que cualquier reclamo para asuntos de salarios que desee hacerle a la Caja de Seguro Social como patrono, no es competencia ni puede ser atendido por la Comisión de Fondo Complementario (f.121 del expediente administrativo).

Mediante nota CdeF. 086-98 de 2 de septiembre de 1998, suscrita por la licenciada Rodríguez Arcia, la Comisión de Fondo Complementario le dio respuesta a la solicitud que el licenciado Solorzano formulase el 14 de agosto de 1998, en donde expresó que consta en el expediente de la asegurada, que el día 11 de mayo de 1998 ésta solicitó un ajuste en su jubilación especial; que mediante Nota FCFyC. 053-98 del 28 de mayo de 1998 se le indicó a la asegurada que las cuotas correspondientes a la suma a la que ella alude no han sido pagadas ni acreditadas en su cuenta individual, por lo cual no existe fundamento para revisar el monto de la jubilación concedida; que contra la nota anterior se promovió recurso de reconsideración con apelación en subsidio, a pesar que contra la misma no cabe recurso alguno, ya que la resolución que resolvió la jubilación de la asegurada se encuentra formalmente ejecutoriada, y que la Nota FCFyC. 053-98 del 28 de mayo de 1998, es una simple comunicación que no es suceptible de reabrir la vía gubernativa ya agotada y que en virtud de lo anterior, la Comisión de Fondo Complementario aprobó la providencia que declara improcedente el recurso de reconsideración con apelación en subsidio presentado y el mismo se encuentra para su notificación (f.126 del expediente administrativo).

El licenciado Solorzano reiteró su solicitud de 14 de agosto de 1998, mediante escrito de 22 de septiembre de 1998 al que le dio respuesta la Comisión de Fondo Complementario, a través de la Nota C de F. 099 de 2 de octubre de 1998, en donde se le indicó que ya él había presentado la misma solicitud mediante escrito de 14 de agosto de 1998 y que a ésta se le había dado respuesta a través de la Nota CdeF 086-98 del 2 de septiembre de ese año.

En dicha nota la Comisión de Fondo Complementario también le reiteró al licenciado Solorzano que el expediente de su representada se encontraba pendiente de que él se notificase de la Nota CdeF 086-98 y de la Providencia de 28 de agosto de 1998 (fs.133-134 del expediente administrativo).

Posteriormente el representante judicial de la señora MARGARITA ESILDA SOLORZANO interpuso demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declaren nulas, por ilegales, la Decisión de 22 de mayo de 1998 de la Comisión de Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos de la Caja de Seguro Social y la Nota FCFyC. 053-98 de 28 de mayo de 1998 emitida por la licenciada Rosa Rodríguez Arcia, Secretaria de dicha comisión; el acto confirmatorio por negativa tácita silencio administrativo al recurso de reconsideración promovido; y para que se haga otras declaraciones.

Antes de entrar a decidir la presente causa, esta Corporación de Justicia estima conveniente aclararle a la Comisión de Fondo Complementario de la Caja de Seguro Social que no le asiste la razón al considerar que la Nota FCF.053-98 no puede se impugnada, por cuanto que no es cierto que solamente las actuaciones administrativas susceptibles de ser objeto de impugnación sean las resoluciones. De hecho, siempre que se trate de un acto o resolución de la administración donde ésta exprese, de un modo definitivo, su posición respecto al problema planteado por el particular en su demanda, éste será susceptible de ser recurrido en la vía contencioso administrativa.

Tal es el caso de la nota FCF. 053-98, ya que mediante ésta se decide de manera definitiva la petición que la señora MARGARITA SOLORZANO elevó a la Comisión de Fondo Complementario, con el objeto de que le fuese ajustado el monto de su jubilación. Esta decisión, contrario a lo que alega la Institución demandada, es impugnable mediante los recursos gubernativos de reconsideración y apelación en subsidio.

Ahora bien, luego de examinar las constancias procesales, esta Superioridad

ha concluido que dicha nota no violenta el contenido del artículo 73 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, por cuanto que con ella no se está desconociendo el derecho de la asegurada a que se le revise dicha prestación económica, sino que simplemente se está condicionando la revisión solicitada a que se haga efectivo el pago al Fondo Complementario de las cuotas que corresponden al incremento salarial a que tuvo derecho desde el 16 de mayo de 1989 y que le fue pagado mediante títulos prestacionales en enero de 1994.

Por otro lado, considera esta Superioridad que la Nota FCF.053-98 tampoco infringe el artículo 28 de la Ley 1 de 6 de enero de 1954 que consagraba, hasta fecha reciente, el derecho de las enfermeras al servicio del Estado a jubilarse por el último sueldo devengado, porque la Comisión de Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos de la Caja de Seguro Social reconoció a la asegurada MARGARITA SOLORZANO una jubilación por el monto de novecientos ochenta balboas (B/.980.00), suma que concuerda con el último salario que esta percibió, tal como consta en las acciones de personal visibles de fojas 119 a 121 del expediente de personal de la actora.

Con respecto a los artículos 35-B y 58 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, así como a los artículos 2 y 8 del Decreto de Gabinete N° 50, de 25 de noviembre de 1992, esta Superioridad considera que los mismos no han sido violados, por cuanto que no son aplicables a éste caso.

Esto es así porque dichos artículos hacen relación a ciertas obligaciones que deben ser cumplidas por el empleador, principalmente en lo que concierne a la retención y posterior pago de cuotas obrero patronales.

En la presente causa la autoridad demandada no es la empleadora de la demandante y en consecuencia no se le puede responsabilizar de la obligación de retener y pagar las cuotas correspondientes al incremento salarial con el que la señora SOLORZANO fue beneficiada.

Esta responsabilidad recae exclusivamente sobre la entidad empleadora de la asegurada que es en este caso precisamente la Caja de Seguro Social, y es a ella a quien se le debe reclamar su cumplimiento. La decisión que esta entidad emita es impugnable en la jurisdicción contencioso administrativa, previo agotamiento de la vía gubernativa.

No está demás destacar que la Ley N° 60 de 1999, publicada en la Gaceta Oficial N° 23,960 de 3 de enero de 2000, adicionó al Código Penal el artículo 195D, mediante el cual se sanciona la retención indebida de las cuotas obrero-patronales.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES, la Decisión de 22 de mayo de 1998 dictada por la Comisión de Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos de la Caja de Seguro Social, la Nota FCFyC. 053-98 de 28 de mayo de 1998 emitida por la licenciada Rosa Rodríguez Arcia, Secretaria de dicha comisión; y la negativa tácita por silencio administrativo a reconsiderarar el acto impugnado.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR POR LA FIRMA BARRANCOS & HENRIQUEZ S.P.C., EN REPRESENTACIÓN DE DIMAS DIAZ Y DANIEL J.

PEREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN D.E. N° 02/98 DE 19 DE ENERO DE 1998, DICTADA POR EL INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Barrancos & Henríquez, actuando en representación de DIMAS DIAZ y DANIEL PEREZ, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nula por ilegal, la Resolución N° D.E. N°02/98 de 19 de enero de 1998, dictada por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto demandado se sanciona al grupo de personas denominado Nuevo Amanecer, representado por los señores DIMAS DIAZ y DANIEL PEREZ, con la multa de mil balboas (B/.1,000.00) por usar de manera prohibitiva la denominación Cooperativa, en el desarrollo y ejecución de actos de comercio sin la debida autorización del IPACOOP, en violación al artículo 10 de la Ley 17 de 1° de mayo de 1997.

II. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión consistente en que la Sala Tercera, declara que es nula por ilegal, la Resolución D.E. N° 02/98 de 19 de enero de 1998, dictada por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo y sus actos confirmatorios contendidos en la Resolución D.E. N°.03/98 de 19 de febrero de 1998, expedido por la Directora Ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo y la Resolución N° J.D. N° 01-98 de 30 de abril de 1998, expedida por la Junta Directiva de esa misma entidad.

Como disposiciones legales alegadas como infringidas, figura el artículo 135 de la Ley 17 de 1 de mayo de 1997 y el artículo 9 de la Ley N°24 de 21 de julio de 1980 que son del tenor siguiente:

> "ARTICULO 135: Las sanciones aplicables por el IPACOOP por violaciones contempladas en esta Ley, SEGUIRAN EL ORDEN DE PRELACION SIGUIENTE:
> 1. Amonestación escrita
> 2. Imposición de multa hasta de mil balboas (B/1,000.00)
> 3. Orden de disolución y liquidación de la Cooperativa, con la correspondiente disolución de la personalidad jurídica."
>
> "ARTICULO 9: En ningún caso podrá ser Director Ejecutivo quien fuese miembro de la Junta Directiva."

En cuanto al artículo 135 de la Ley 17 de 1 de mayo de 1997, se afirma que fue violado en la medida que no se aplicó el orden de prelación, para los efectos de las sanciones que contempla la norma. A juicio del recurrente, la amonestación escrita es preferente y tiene prelación frente a la multa de los B/. 1,000.00, y, además, sólo cuando ésta haya sido emitida y continúen los actos que han motivado esa sanción, el IPACOOP podrá aplicar las siguientes sanciones.

El artículo 9 de la Ley N°24 de 21 de julio de 1980, a criterio del apoderado judicial de la parte demandante, se violó toda vez que la mencionada disposición es diáfana al contemplar, que "está terminantemente prohibido" que la persona que desempeñe el cargo de miembro de la Junta Directiva del IPACOOP, desempeñe, a su vez, la posición de Director General. En este caso, la señora Luzmila Angulo S. en su rol de Directora Ejecutiva, firmó las Resoluciones D.E. N°s 02/98 y 03/98 de 19 de enero y 19 de febrero de 1998; de igual manera advierte que la señora Luzmila Anguló, firmó en calidad de Secretaria Ejecutiva de la Junta Directiva, la Resolución N° 01/98 de 30 de abril de 1998, que

confirma las anteriores. Por tanto, la Resolución N° D.E. N°02/98 de 19 de enero de 1998 es nula e ilegal por el simple hecho de haber emanado de autoridad que carecía de competencia.

I. El informe explicativo de conducta expedido por la Directora Ejecutiva del IPACOOP y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

Mediante nota de 22 de agosto de 1998, la Directora Ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, rindió el respectivo informe explicativo de conducta, mismo que es visible de fojas 30 a 33 del expediente. En su informe la Directora Ejecutiva del IPACOOP, claramente señala que, contrario a lo expuesto por el recurrente, sí se les había notificado formalmente que estaban violando el artículo 10 de la Ley 17 de 1° de mayo de 1997, y siguieron ejecutando dichos actos sin importar con los llamados de atención hechos por el IPACOOP.

Por otro lado, igualmente afirma que la señora Luzmila Angulo, mediante Decreto Ejecutivo N° 77 de 11 de noviembre de 1994, fue designada Directora Ejecutiva del IPACOOP. A ello añade que el artículo 4 de la Ley 24 de 1980, establece taxativamente quiénes son los miembros de la Junta Directiva, y el artículo 10 en sus literales ch) y e) del mismo cuerpo legal, contempla entre las atribuciones de la Directora Ejecutiva del IPACOOP, la de asistir a la sesiones de la Junta Directiva con derecho a voz y que puede desempeñar cualquier otra función que le asigne la Ley, la Junta Directiva y los Reglamentos.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 392 de 9 de octubre de 1998, que es visible de fojas 34 a 46 del expediente, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

El acto demandado lo es la Resolución D.E. N° 02/98 de 19 de enero de 1998, dictada por el Instituto Panameño de Turismo Autónomo Cooperativo, y mediante el mismo se resuelve sancionar a un grupo de personas denominado Nuevo Amanecer representado por los señores Dimas Díaz y Daniel Pérez, con la multa de mil balboas (B/.1,000.00) por usar de manera prohibitiva la denominación de Cooperativa en el desarrollo y ejecución de actos de comercio sin la debida autorización del IPACOOP, en violación del artículo 10 de la Ley 17 de 1° de mayo de 1997. Entre las consideraciones formuladas por la Dirección de la IPACOOP para la expedición del acto que se demanda, figura que en misiva enviada al grupo de personas interesadas en la conformación de la Cooperativa el 5 de junio de 1997, la oficina regional del IPACOOP con sede en la ciudad de Las Tablas, les notificó que los documentos presentados no satisfacían los requisitos contemplados en el artículo 15 de la Ley 17 de 1° de mayo de 1997, razón por las que se les devolvió la documentación a fin de que cumplieran con las exigencias requeridas por la Ley Cooperativa. A partir de esa fecha, no se recibió ninguna otra documentación o solicitud, no obstante, se dedicaron a ejercer actos de comercio, donde utilizaron indistintamente el nombre de Cooperativa y Pre-Cooperativa en el Distrito de Guararé, sin haber solicitado, como ya se indicó, la debida autorización del IPACOOP.

Al analizar las violaciones alegadas y los argumentos que la sustentan, conjuntamente con el resto de la documentación que reposa en el expediente, la Sala concluye que la razón no le asiste a la parte actora. Ello es así, pues, se evidencia que el grupo "Nuevo Amanecer" representado por los señores Dimas Díaz y Daniel Pérez, no había obtenido la personería para fungir como cooperativa, y aun así se dedicó a ejercer actos de comercio utilizando el nombre de "cooperativa" y "pre-cooperativo", hecho que no fue desvirtuado por el demandante, sin estar debidamente autorizado, todo lo cual riñe con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 10 de 1 de 0mayo de 1997, que claramente prohíbe el

uso de esa denominación o abreviaturas alusivas, a entidades no constituidas conforme a la Ley. Es evidente entonces, que ante una falta como la que se le imputa a esa agrupación, no se haya considerado imponerle una amonestación escrita como hace ver el demandante.

En cuanto a la falta de competencia para la expedición del acto demandado por parte de la Directora Ejecutiva del IPACOOP, pues, es parte integrante de la Junta Directiva, en el informe explicativo de conducta claramente se justifica su actuación en lo previsto en la Resolución N° 1-81 fechada 20 de octubre de 1981, que aprueba el Reglamento Interno del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, mediante la cual se faculta a la Directora Ejecutiva de esa institución, a concurrir a todas la sesiones de la Junta Directiva como Secretaria. A juicio de la Sala, es claro entonces, que la Directora Ejecutiva del IPACOOP, estaba plenamente facultada para firmar como Secretaria de la Junta Directa, por tanto su actuación se ajustó a derecho.

Por las razones anotadas, no prosperan las violaciones alegadas, razón por la que lo procedente es, pues, no acceder a las pretensiones formuladas.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° D.E. N°02/98 de 19 de enero de 1998, expedida por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, como tampoco lo son sus actos confirmatorios.

Notifiquese y Cumplase

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA TILE Y ROSAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA MARQUETING SERVICES AND PRODUCTS, INC, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 213-1802, DE 19 DE MAYO DE 1997, EXPEDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma de abogados Tile y Rosas, actuando en nombre y representación de la empresa Marketing Services and Products, Inc., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 213-1802, de 19 de mayo de 1997, emitida por la Administración Regional de Ingresos de Panamá, la negativa tácita por silencio administrativo, y para que se hagan otras declaraciones.

I. Disposiciones legales que se estiman violadas y su concepto:

Según el demandante, el acto administrativo acusado ha violado el segundo párrafo del artículo 694, literal a), del Código Fiscal, en el concepto de interpretación errónea. Esta disposición tiene el siguiente texto literal:

> "Artículo 694: Es objeto de este impuesto la renta gravable que se produzca, de cualquier fuente, dentro del territorio de la República de Panamá sea cual fuere el lugar donde se perciba.

Contribuyente, tal como se usa el término en este Título, es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que percibe la renta gravable objeto del impuesto.

PARAGRAFO 1. Se considerará producida dentro del territorio de la República de Panamá, la renta proveniente del trabajo personal cuando consista en sueldos y otras remuneraciones que el Estado abone a sus representantes diplomáticos o consulares o a otras personas a quienes encomienda la realización de funciones fuera del país.

PARAGRAFO 2. No se considerará producida dentro del territorio de la República de Panamá, la renta proveniente de las siguientes actividades:

a. Facturar, desde una oficina establecida en Panamá, la venta de mercancías o productos por una suma mayor de aquella por la cual dichas mercancías o productos han sido facturados contra la oficina establecida en Panamá siempre y cuando que dichas mercancías o productos se muevan únicamente en el exterior;

b. Dirigir, desde una oficina establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior; y,

c. Distribuir dividendos o participaciones de personas jurídicas cuando tales dividendos o participaciones provienen de rentas no producidas dentro del territorio de la República, incluyendo las rentas provenientes de las actividades mencionadas en los literales a y b de este parágrafo.

El Organo Ejecutivo establecerá las normas y procedimientos para determinar la porción de la renta total que se considerará renta gravable del contribuyente que perciba rentas gravables además de las rentas exentas a que se refiere este parágrafo, dentro de un término no mayor de seis (6) meses". (Destaca este Despacho).

Para el demandante la infracción se produce porque la Administración pretende gravar en Panamá operaciones que se efectuaron en la ciudad de Miami, Estados Unidos de Norteamérica, como lo expresa la Resolución acusada en su página 3; afirma que dichas tansacciones "escapan de la obligación establecida por los tributos locales" (foja 9).

Agrega sobre este supuesto cargo, que la Administración hace de esta norma una interpretación que "pugna a todas luces contra su letra o su espíritu" (sic), y que se aplica el impuesto sobre una base ajena al principio de territorialidad vigente en nuestro país; que el cobro se pretende hacer sin haberse obtenido utilidad alguna en la jurisdicción fiscal panameña por haber sido hechas las operaciones "al mismo precio de adquisición", o las mismas se perfeccionaron en el exterior, porque los bienes "fueron entregados por el proveedor del contribuyente fuera de la jurisdicción fiscal de la República de Panamá, es decir, directamente en la ciudad de Miami, al contratista que realizaba la obra en Panamá, para las distintas Agencias del Gobierno Norteamericano, del cual nuestro representado actúa en calidad de un sub-contratista".

La segunda norma invocada es el artículo 10 del Decreto Ejecutivo 170, de 27 de octubre de 1993, "por el cual se reglamentan las disposiciones del impuesto sobre la renta", que posee igual texto que el artículo 694 copiado. El demandante afirma que esta disposición también ha sido conculcada por interpretación errónea reiterando lo alegado en el concepto de violación anterior.

La tercera disposición jurídica esgrimida es el artículo 697 del Código Fiscal que preceptúa:

"Artículo 697: Se entiende por gastos o erogaciones deducibles, los gastos o erogaciones ocasionados en la producción de la renta y en la conservación de su fuente; en consecuencia, no serán deducibles, entre otros, aquellos gastos, costos o pérdidas generados o provocados en negocios, industrias, profesiones, actividades o inversiones cuya renta sea de fuente extranjera. ..."

Para el actor, esta norma fue violada de manera directa por omisión, porque la Administración Regional de Ingresos no ha reconocido como deducibles erogaciones, gastos y costos hechos por el contribuyente para la producción de la renta y conservación de su fuente (foja 11), sin especificar los gastos y erogaciones a los que se refiere.

También se aduce violado el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 170 de 1993, que establece lo siguiente en el extracto pertinente que destaca el impugnante:

"Artículo 19. Principios generales.
El contribuyente podrá deducir los costos y gastos en que incurra en el año fiscal, necesarios para la producción de la renta de fuente panameña o para la conservación de su fuente.

Son gastos para la conservación de la fuente de ingresos los que se efectúen para mantenerla en condiciones de trabajo, servicio o producción, sin que la fuente aumente de valor por razón del gasto. ..."

El recurrente afirma que esta norma jurídica reglamentaria ha sido infringida de manera directa por omisión, ya que la Administración no admite la deducibilidad de gastos y costos incurridos por el contribuyente que tiene su base en la disposición copiada y no admite "discusión alguna" (fojas 12).

Los artículos 21 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993 y 698 del Código Fiscal se aducen infringidos ambos de manera directa por comisión. Estas disposiciones contienen un texto similar en la parte que se afirma violada. Reproducimos a continuación el artículo 698:

"Artículo 698: Cuando por cualquier causa el contribuyente deje de deducir gastos correspondientes a un (1) año gravable, éstos no podrán deducirse de la renta de ningún año posterior. Se exceptúan los gastos que por su propia naturaleza no fueran determinables con exactitud en el año en que debieron ser deducidos. En este caso, el gasto puede ser deducido únicamente en el año en que se determina el monto exacto del mismo. ..."

El demandante fundamenta la supuesta infracción de este artículo en que la Resolución impugnada no reconoció los gastos incurridos como deducibles de la renta en un período fiscal, "que por su naturaleza no pudieron ser determinados en dicho ejercicio fiscal, sino en el período en que es determinable el gasto".

El artículo 123 del Decreto regalmentario también se afirma violado, norma que preceptúa lo que a seguidas se deja transcrito:

"Artículo 123: Determinación del impuesto en el caso de construcciones.

En el caso de empresas de construcción o de empresas que realicen trabajos sobre inmuebles y cuyas operaciones generadoras de renta afecten a más de un año fiscal, el contribuyente podrá, a su opción, aplicar cualquiera de los siguientes métodos:

a) asignar a cada año fiscal la renta gravable que resulte de aplicar sobre los importes efectivamente recibidos en dicho año, el porcentaje de ganancia neta calculada para toda la obra. Este

> porcentaje podrá ser modificado por la parte correspondiente a los años fiscales siguientes, en caso de evidente modificción del cálculo efectuado.
>
> b) asignar al valor de la obra ejecutada en cada año fiscal, el porcentaje de ganancia calculado sobre el valor total de la obra y de ese resultado deducir los costos y gastos efectivamente incurridos en el respectivo año fiscal.
>
> c) asignar al año fiscal en que se termine la obra la totalidad de las rentas brutas y los gastos y costos respectivos.
>
> En los casos de los literales a) y b), la diferencia que se obtenga en definitiva al comparar la ganancia neta al final de la obra con la establecida mediante cualesquiera de los procedimientos indicados en dichos literales, incidirá en el año fiscal en que la obra concluya. En el caso del literal c), la renta gravable que se tomará en cuenta será la que corresponda a la totalidad de la obra".

El actor afirma que esta disposición ha sido transgredida de manera directa por comisión ya que el acto impugnado no permitió al contribuyente, quien se acogió al literal b) del copiado artículo, "aplicar la deducción de un costo diferido, en el año en que concluyó la obra", y añade que esta actuación le ha impedido declarar la ganancia de las obras realizadas por el actor (foja 14).

La última norma legal cuya infracción es alegada por el actor es el artículo 1185 del Código Fiscal, que preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 1185: No deberá exceder de dos meses el tiempo que transcurra desde el día en que se presente una solicitud o se interponga cualquier recurso, hasta aquél en que se dicte resolución que ponga término a la solicitud o al recurso.
>
> Cuando el recurso interpuesto sea el de reconsideración no deberá exceder de quince días el término de que trata el inciso anterior.
>
> No obstante, podrán excederse los plazos señalados en este artículo si median causas extraordinarias, debidamente justificadas que impidiesen observarlos".

A juicio del impugnante, esta norma fue infringida de manera directa por omisión, porque la Administración, sin que mediara "causa o justificación excepcional", no falló el recurso de reconsideración con apelación en subsidio presentado el día 16 de junio de 1997, y desde entonces han transcurrido más de dos meses generándose así el silencio administrativo.

Esta omsión en resolver el asunto "se traduce en mayores intereses para el cotribuyente, haciéndose excesivamente oneroso la supuesta obligación exigida" (foja 15).

II. El Informe explicativo de conducta:

En Informe rendido a esta Superioridad mediante Nota No. 213-L-1935, de 11 de diciembre de 1997, que corre de fojas 33 a 37, el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá relata las razones que fundamentan lo actuado por esa dependencia pública en el asunto bajo examen.

El documento en mención contiene varias partes o rubros que explican los ajustes o alcances hechos por la Administración a la empresa Marketing Services and Products, Inc., a saber: "ingresos gravables", "costos y gastos" y "otros costos". En el rubro atinente a los ingresos gravables, el documento indica que para los períodos 1993, 1994 y 1995, el contribuyente declaró ingresos de fuente extranjera por las sumas de B/.288,085.79, B/.279,520.85 y B/.533,326.60,

respectivamente, y al realizar la verificación mediante los registros contables, facturas de ventas, compras y contratos, se determinó que los mismos se dedican a contratar con empresas contratistas del área canalera los trabajos de suministro e instalación de ventanas de aluminio y sus correspondientes accesorios.

Agrega que el contribuyente utiliza dos tipos de facturas: el primero para facturar las ventas o suministros de materiales, los cuales son registrados como operaciones de fuente extanjera. Con las otras facturas son registradas las operaciones gravables (servicio de instalación); aunque, para el año 1995, gran parte de este servicio fue facturado como operaciones extranjeras.

Las mercancías objeto de estas facturaciones extranjeras son aquiridas a través de sus proveedores en los Estados Unidos, quienes se encargan de facturar a nombre del contribuyente tanto F.O.B. Miami, como C.I.F. Panamá y éste a su vez refactura a las empresas contratistas o a las Agencias del Gobierno Americano, con el fin de tramitar la exoneración de los impuestos de introducción (Aduanales).

El Informe cita el artículo 694 del Código Fiscal contentivo del principio de territorialidad en materia tributaria que sigue nuestro ordenamiento jurídico, de lo que deduce que el contribuyente registró como operaciones de fuente extranjera las refacturaciones de materiales efectuadas a los contratistas del área canalera, a la Comisión del Canal o a las Agencias del gobierno norteamericano ubicadas en ese sector, contraviniendo lo dispuesto por los artículos 694 mencionado y 10 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, ya que el área canalera es parte del territorio nacional y la mercancía objeto de refacturación es introducida a esa área por el propio contribuyente. Adicionalmente, el servicio de instalación de ese material es facturado y registrado como operaciones gravables (Cfr. fojas 33-34).

III. Opinión jurídica de la Procuraduría de la Administración:

Mediante Vista Fiscal No. 198, de 28 de mayo de 1998 (fojas 56 a 68, inclusive), la Procuraduría de la Administración contesta la presente demanda contencioso administtrativa de plena jurisdicción, oponiéndose, como lo ordena la Ley, a las pretensiones contenidas en ésta, y sigue en general lo expresado por la entidad estatal demandada a través de su Informe de Conducta.

En lo medular el argumento opositor de la Agencia del Ministerio Público consiste en que como claramente dispone el acto administrativo acusado, en función del principio de territorialidad, está especificado cuándo los ingresos no son de fuente panameña, "lo que no ocurre en el caso subjúdice, donde se ha demostrado que las operaciones que realizaba el contribuyente, se encontraban sujetas a la jurisdicción tributaria panameña".

Con relación a los costos y gastos declarados por el contribuyente como imputables a operaciones de fuente extranjera por monto de B/.247.060.57, B/.246,039.44 y B/.358,783.38, que corresponden en ese orden a las declaraciones de los años 1993, 1994 y 1995, cita un fallo de esta Corporación de Justicia, fechado el 5 de septiembre de 1997, en el que la doctrina legal de este Tribunal reitera el deber del contribuyente de comprobar "fehacientemente" que los gastos incurridos son necesarios en la producción de la renta y conservación de su fuente.

Por último, en punto a la supuesta infracción del artículo 1185 del Código Fiscal, la Procuradora de la Administración Suplente señala que en el presente caso concurren circunstancias extraordinarias cuya dilucidación se ha trasladado al Ministerio Público para que investigue la denuncia penal por falsedad interpuesta por la Administración Regional, mediante apoderado judicial, respecto al "sello en la copia del poder, el cual dejó de utilizarse en el año 1996, así como lo relativo a la firma que aparece en el sello de goma, que no corresponde a la funcionaria que supuestamente recibió el documento" (foja 67).

Dentro del término de alegatos tanto la Procuraduría de la Administración como la parte actora presentaron sus respectivos escritos que abundan respecto de la posición jurídica que cada parte sostiene y defiende en el presente proceso.

IV. Consideraciones y decisión de la Sala:

Luego de este recuento, la Sala pasa a desatar la presente controversia, no sin antes establecer las siguientes consideraciones de hecho y de derecho, basadas en la jurisprudencia, la Ley y las constancias procesales.

Con relación al primer cargo de infración, la Sala estima que no le asiste razón al demandante, toda vez que en autos ha quedado establecido que la fuente de ingresos percibida por el Contribuyente Marketing Services and Products, Inc. no es extranjera.

El principio de territorialidad del que suele hablarse refiriéndose "al país de origen o al país de la fuente en el que se obtienen los rendimientos de un patrimonio" (PEREZ DE AYALA, José L. et al. Curso de Derecho Tributario, T. I, 5a. edición, Edit. de Derecho Financiero, Madrid, España, 1989, p. 81) consignado en el Código Fiscal establece, entre otras cosas, los supuestos o actividades generadoras de ingresos (renta) que no se reputan o consideran de fuente extranjera. De lo que se desprende que una vez comprobada la naturaleza u origen de la renta habrá de aplicarse el régimen tributario o exención que proceda de acuerdo con la Ley.

La Sala observa que el demandante pretende beneficiarse del segundo párrafo, literal a), del artículo 694 del Código Fiscal; sin embargo, en autos no consta que las mercancías o productos de las operaciones o actividades comerciales del Contriuyente se movieron o desplazaron "únicamente en el exterior", es decir, fuera del territorio de la República, aspecto que tiene singular importancia en la presente controversia al tomar en cuenta que Marketing Services and Products, Inc., actuó como subcontratista para la ejecución de obras en el área canalera, y que la Administración logró determinar que las mercancías y productos empleados para la ejecución de las obras en Panamá eran introducidas al país previo embarque desde Miami por Marketing Services and Products, Inc. (Miami) y "entregados en los puertos panameños" a los contratistas, según se lee a fojas 272 de los autos, en respuesta dada al apoderado de la parte actora por los Peritos de la Administración.

En el expediente principal reposan sendos informes periciales rendidos por peritos propuestos por la parte actora y por la Procuraduría de la Administración, cuyo contenido corre de fojas 98 y siguientes de los autos, y a fojas 165 y siguientes del expediente. El material o documentación que sirvió de base para el peritaje fue proporcionado por la empresa demandante y las constancias del expediente administrativo acopiado por la Administración Regional de Ingresos; no obstante, en el Informe de los peritos de la Administración se afirma que no se les suministró los libros oficiales de contabilidad ni registro auxiliar de operaciones de la empresa recurrente. (fojas 99 y 103).

En respuesta a la pregunta No. 8 del cuestionario aportado por la parte actora en el sentido de que "si los materiales requeridos por los distintos contratistas, y en especial los requeridos en el contrato que realizó Mil Colores, S.A. fueron adquiridos y entregados por la empresa proveedora-consolidadora directamente en la ciudad de Miami a dicho contratista (MIL COLORES, S. A.) o a otros contratistas", la respuesta ofrecida por los facultativos de la Administración reseña que "En la revisión de los documentos aportados por la empresa Marketing Services and Products, Inc. (Panamá), tales como factura de venta, bill of lading, certificación de carga exención de los Derechos Aduanales, control de transporte de mercancía no nacionalizadas (sic) y la declaración de Aduana-Fuerza de los Estados Unidos; se determinó que los materiales requeridos por los distintos contratistas fueron enviados y consignados directamente a ellos mismos. Sin embargo los materiales requeridos

para el sub-contrato con Mil Colores, S. A. fueron facturados directamente a la empresa Marketing Services and Products Inc. (Panamá) por los proveedores; según consta en fojas No. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 116, 117, 118, 119 y 120 de las hojas de trabajo confeccionadas por los auditores del Departamento de Auditoría Integral de la Dirección General de Ingresos, las cuales adjuntamos". (foja 101).

Posteriomente, a fojas 263, las Peritas de la Administración, ante cuestionamiento hecho por el apoderado judicial de la actora, aclaran que la frase subrayada a ellos mismos contenida en su informe se refiere a "... los contratistas que suscribieron contratos directamente con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Basándonos en la documentación suministrada, la cual fue muy escasa, con respecto a quién iban (sic) consignados los materiales". Esta respuesta es coincidente con la que hacen a la misma pregunta los Peritos de la parte demandante, punto H, (foja 167).

De esto se desprende que no existió infracción del principio de territorialidad, porque no fueron gravados ingresos o rentas procedentes de fuente extranjera. Además, la mercancía objeto de refacturación utilizada dentro de su giro de actividad por Marketing Services and Products, Inc. (subcontratista) no se desplazó exclusivamente en el extranjero, sino en el área canalera, que es territorio panameño; además que en cuanto al mérito técnico contable de las deficiencias imputadas a la empresa Marketing Services and Products, Inc. por el Fisco a las declaraciones de los años 1993, 1994 y 1995, de acuerdo a la pregunta No.1 del cuestionario, los Peritos propuestos de la parte actora expresan que la empresa incluyó ingresos, gastos y costos que correspondían a otra empresa y que, de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, esto "no es normal, ni correcto"; a criterio de estos expertos, hubo una mal interpretación del "concepto de fuente extranjera" (fojas 267-268), razón justificada para que la Sala proceda a desestimar este primer cargo de infracción analizado.

En cuanto a la contravención del artículo 10 del Decreto Ejecutivo 170 de 1993, la Sala procede a desestimarlo también, ya que esta norma reglamentaria se aduce violada igualmente por interpretación errónea y se refiere a la misma materia jurídica regulada por el artículo 694 del Código Fiscal.

Con relación al artículo 697 de este Código, que norma los gastos y costos deducibles a causa de la producción de la renta o su conservación, la Sala es del criterio que no le asiste razón al demandante, sobre todo porque éste se limita a hacer alusión a supuestos gastos y costos incurridos sin especificar los mismos. Sobre este punto, la doctrina jurisprudencial de la Sala es clara en exigir que el Contribuyente debe probar fehacientemente los gastos y costos que ha hecho para la producción de la renta o la conservación de su fuente, a objeto de reclamar el correlativo derecho contenido en la Ley a que se le reste o deduzcan de la renta gravable que aquél ha generado u obtenido. (Cfr. también sentencias de 23 de julio de 1993, 3 de mayo de 1996 y de 5 de septiembre de 1997).

Como la parte actora no ha comprobado debidamente los gastos y costos que supuestamente hizo para la producción de la renta o la conservación de su fuente, la Sala debe desestimar el pretendido cargo de violación del artículo 697 del Código Fiscal, lo mismo que aquella alegada sobre el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 170 de 1993 reglamentario, por tener igual contenido normativo que la primera.

También se afirma violado el artículo 123 del decreto reglamentario que establece las reglas a seguir para la determinación del impuesto sobre la renta tratándose de construcciones. Con relación a este pretendido cargo de infracción directa por comisión, la Sala es del criterio que no tiene fundamento por cuanto la Administración no ha impedido al contribuyente hacer la declaración que conforme a la Ley constituye una obligación para el sujeto pasivo del tributo; todo lo contrario, la presente causa tiene como antecedente un alcance adicional,

en concepto de impuesto sobre la renta, efectuado a la empresa demandante con relación a sumas adicionales por deficiencias que el Fisco detectó no habían sido sufragados por éste en las declaraciones correspondientes a los años 1993, 1994 y 1995. Cuando el literal b) del artículo invocado establece un principio de determinación del impuesto referido consistente en "asignar al valor de la obra ejecutada en cada año fiscal, el porcentaje de ganancia calculado sobre el valor total de la obra y de ese resultado deducir los costos y gastos efectivamente incurridos en el respectivo año fiscal", estima la Sala que se trata de un mecanismo técnico contable para efectos impositivos, que la Administración fiscal ha provisto para cuantificar o tasar el tributo en este tipo de rubros respecto de la renta que se estima producirá la obra, y de allí, establecido ese monto global de ingresos que generará la construcción, descontar lo invertido "efectivamente" por el contribuyente en concepto de costos y gastos.

La Sala examinando las constancias procesales no ha encontrado cómo o en qué forma la Administración ha impedido u obstaculizado al contribuyente aplicar la regla comentada a lo que él denomina un "costo diferido" al tiempo en que concluyó la obra y ello le ha dificultado declarar la ganancia correspondiente. La regla que el demandante afirma haber escogido (literal b del parágrafo 2) es a la inversa, y no como lo expresa en el concepto de infracción, o sea, lo correcto a tenor de la norma es: determinar primero el monto global de la ganancia o renta a obtener, de lo que se deberá deducir los costos y gastos reales.

Estas son las razones por las que el cargo no es procedente y, por ende, es desechado.

Con relación al artículo 1185, última norma que se esgrime violada por omisión, la Sala estima que la abstención incurrida por la Administración al no resolver el recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra la Resolución No. 213-1802, de 19 de mayo de 1997, dentro de los términos por esa disposición establecida, es decir, en quince (15) días tratándose de reconsideración y de dos (2) meses cuando se trate de apelación, no es de por sí capaz de generar la nulidad de la Resolución impugnada.

La abstención de la Administración conocido como silencio administrativo ha ocasionado que se repute confirmado el acto administrativo recurrido en la vía gubernativa, fenómeno que no es motivo de nulidad sino una de las formas como se agota esa esfera de competencia, para dar paso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tal cual es previsto en el numeral 3, artículo 36, de la Ley 135 de 1943.

En el presente negocio jurídico es aplicable la regla general contenida en el título preliminar del Código Civil, según la cual "Los actos que prohibe la ley son nulos y de ningún valor, salvo que ella misma disponga otra cosa o designe expresamente otro efecto que el de la nulidad para el caso de contravención". Ese otro efecto a que se refiere la norma en el presente asunto, como ya dijimos, es el agotamiento de la vía administrativa y no la nulidad del acto.

Debemos recordar que la Sala admitió la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción y, además, confirmó dicha admisión, luego que la Procuraduría de la Administración apeló el auto admisorio, basándose, al igual que la entidad demandada, en que no podía resolverse la impugnación en la vía administrativa por "causa extraordinaria", consistente en una presunta falsedad relacionada con la presentación en tiempo oportuno del poder así como de los recursos respectivos, la legitimidad del sello de goma estampado en la recepción del aludido poder y otras circunstancias, que fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes del Ministerio Público para que procedieran conforme a lo de lugar.

Este Tribunal estima que la institución demandada omitió dar cumplimiento a las normas contenidas en los primeros párrafos de la disposición legal

invocada, por considerar que existía una causa extraordinaria que la habilitó para "exceder los plazos señalados", según permite el propio artículo 1185 in fine, tal como explica en su Informe dicha entidad estatal.

De todo lo explicado se desprende que el proceder de la Administración no ha violado el artículo comentado ni las demás disposiciones legales y reglamentarias ya analizadas, y así debe declararse.

De consiguiente, la Sala Tercera Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que no es ilegal la Resolución No.213-1802, de 19 de mayo de 1997, emitida por la Administración Regional de Ingresos, mediante la cual hace un alcance adicional a la empresa Marketing Services and Products, Inc., respecto de sus declaraciones de rentas de los años 1993, 1994 y 1995, y NIEGA, las demás pretensiones contenidas en la demanda.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMETERIO MILLER EN REPRESENTACIÓN DE D & N ASOCIADOS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° GG-27-97 DE 18 DE ABRIL DE 1997, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Emeterio Miller, actuando en nombre y representación de la sociedad D & N Asociados, S. A., ha interpuesto, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° GG-27-97 de 18 de abril de 1997, dictada por el Gerente General del Banco Nacional de Panamá, los actos confirmatorios y para que se haga otras declaraciones.

I. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO

Mediante el acto impugnado, el Gerente General del Banco Nacional, resolvió con fundamento en el artículo 48 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, adjudicar definitivamente el contrato para la remodelación de la sucursal del Banco Nacional de Panamá en Tonosí, provincia de Los Santos, a la empresa Construcciones Universales, S. A., por la suma de B/.100,054.70.

II. NORMAS INVOCADAS COMO VIOLADAS Y CONCEPTO DE SU VIOLACION

Afirma la parte demandante que el acto impugnado viola, en forma directa por omisión, los artículos 9 numeral 1, 16 numeral 6, 44 y 45 de la Ley N° 56 de 1995, los cuales son del siguiente tenor literal:

> "ARTICULO 9. Derechos y obligaciones de las entidades estatales contratantes.
>
> Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior,

serán obligaciones de las entidades contratantes:

1. Obtener el mayor beneficio para el Estado o los intereses públicos, cumpliendo con las disposiciones de la presente ley, su reglamento y el pliego de cargos.
...

ARTICULO 16. Principio de transparencia.

En cumplimiento de este principio, se observarán las siguientes reglas:
...
6. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley; igualmente, les será prohibido eludir procedimientos de selección de contratistas y los demás requisitos previstos en la presente Ley.
...

ARTICULO 44. Criterios de evaluación.

Las comisiones y las entidades contratantes deberán aplicar los criterios, requisitos o procedimientos enunciados en la documentación de precalificación de haberla, y en el pliego de cargos en las especificaciones. En ningún caso podrán aplicar criterios distintos a los enunciados en la presente disposición.

ARTICULO 45. Adjudicación de la licitación pública, del concurso o de la solicitud de precios.

El jefe de la entidad contratante, o el funcionario en quien se delegue, si considerase que se han cumplido las formalidades establecidas por ley, mediante resolución motivada adjudicará, en un plazo perentorio, la licitación pública, el concurso o la solicitud de precios, o lo declarará desierto en los casos señalados en el Artículo 46. La adjudicación se hará a quien haya propuesto el mejor precio, si éste constituye el único parametro de adjudicación, o al proponente que haya obtenido la mayor ponderación de acuerdo con la metodología de ponderación de propuestas señalada en el pliego de cargos. ..."

La parte actora manifiesta que la resolución impugnada viola directamente los artículos 9, 16 y 44 de la Ley 56 de 1995, porque es claro que las entidades estatales deben cumplir con las disposiciones de esta ley, su reglamento y el pliego de cargos. Señala que a pesar de ello, al dictarse el acto impugnado, no se aplicaron correctamente los criterios contenidos en el pliego de cargos, que dispone claramente que la solicitud de precios en cuestión se adjudicará al proponente que haya obtenido la mayor ponderación dentro del análisis de la Comisión Evaluadora y el mayor puntaje fue obtenido por D & N Asociados, S. A. con 91 puntos sobre los 90 puntos obtenidos por la empresa Construcciones Universales, S. A., a la cual le fue adjudicada la solicitud de precios N° 60-96 por el Gerente General del Banco Nacional de Panamá, quien desvió y eludió la verdadera y real aplicación del procedimiento de selección al no honrar lo señalado en el pliego de cargos.

Al explicar de qué manera se produjo la violación directa del artículo 45 de la Ley 56 de 1995, el representante de la actora señaló, en lo que respecta al argumento de la entidad licitante de que se reserva el derecho de rechazar una o todas las propuestas o de aceptar la que más convenga a sus intereses, que el mismo no es aceptable en términos absolutos, porque se estarían violando las normas de transparencia, objetividad y de responsabilidad al no permitírsele a los participantes la seguridad del cumplimiento y respeto de las reglas del juego establecidas, y por tanto, la entidad licitante debe garantizar el cumplimiento

de esos fines.

III. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO.

El Gerente General del Banco Nacional de Panamá, mediante su Nota N° 97 (03000-01)97 de 1° de septiembre de 1997, presentó su informe de conducta requerido y se opuso a las pretensiones de la parte actora, argumentando en favor de los actos impugnados lo siguiente:

> "... La recurrente pretende concederle fuerza definitiva y vinculante a la ponderación realizada por la Comisión Evaluadora de la Solicitud de Precios N° 60-96, cuando el Artículo 42 de la Ley 56 de 1995, es terminante al señalar que dicha Comisión no puede recomendar a la entidad licitante a quién se le debe adjudicar la solicitud; luego entonces, si no puede recomendar, menos su dictamen puede obligar a la Administración del Banco Nacional de Panamá.
>
> ... La adjudicación que efectuó el Banco Nacional de Panamá, se hizo sobre la base de que hay un margen de diferencia de un punto entre uno y otro proponente, mientras que el segundo en puntuación, 'Construcciones Universales, S. A.', en su propuesta demostró tener un mayor grado de experiencia en las remodelaciones de sucursales bancarias. Luego entonces, no se trata de una adjudicación antojadiza, sino el de proteger los mejores intereses del Banco a un menor precio y conjuntamente con la búsqueda de un mejor acabado en la remodelación.
>
> ... Aceptar el criterio de la recurrente sería dejar indefenso a las entidades públicas ante un criterio errado de la Comisión Evaluadora, pues no le quedaría más remedio a la Administración de la entidad licitante que atenerse y respetar el criterio de dicha Comisión.
>
> ... el Artículo 48 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, sólo obliga a la entidad Licitante a celebrar el Contrato cuando la Resolución que adjudica el Acto Público, se encuentra ejecutoriado; lo que confirma la opción discrecional de la entidad licitante de rechazar y de aceptar la propuesta que más convenga a los intereses públicos según el Jefe de la entidad que convocó al Acto Público, o según el criterio del funcionario en quien se delegue el ejercicio de esa facultad (ver Artículo 45 de la misma Ley).
>
> ... También hay que observar, que el dictamen de la Comisión Evaluadora no es final ni definitivo, pues de conformidad con el Artículo 42 de la Ley 56 de 1995, el mismo queda sujeto a las observaciones que le hagan los proponentes que participaron en el Acto Público. Luego entonces, si los proponentes que tienen un interés subjetivo pueden objetar el dictamen de la Comisión Evaluadora, con más razón la Administración de la entidad licitante tiene el deber de velar objetivamente por los intereses públicos, y tiene el derecho de adjudicar la contratación al proponente que en una diferencia mínima de un punto, con una mayor experiencia en las obras que es motivo del acto público y a un menor precio, resulta el proponente que representa los mejores intereses públicos." (fs. 250 y 251)

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La señora Procuradora de la Administración, mediante su Vista Fiscal N° 502 de 12 de octubre de 1997 (fs. 256 a 263), opinó que no le asiste la razón a la empresa demandante, ya que la Resolución de la Gerencia General N° GG-27-97 de 18 de abril de 1997, que adjudica definitivamente el contrato para la remodelación de la sucursal del Banco Nacional de Panamá en Tonosí, Provincia de

Los Santos, a la empresa Construcciones Universales, S. A., se dió conforme a los parámetros legales establecidos y porque representaba los mejores intereses para la entidad bancaria, tal como lo contempla el artículo 48 de la Ley 56 de 1995, que le reserva el derecho a la entidad licitante de rechazar una o todas las propuestas o de aceptar la que más convenga a sus intereses.

Dice la señora Procuradora que ha quedado debidamente acreditado en el proceso que el Banco Nacional adjudicó difinitivamente el acto público a la Empresa Construcciones Universales, S. A., porque comprobó que tenía mayor experiencia en las remodelaciones de sucursales bancarias, por ello la adjudicación no fue hecha caprichosamente, sino en consideración a los mejores intereses del Banco a un menor precio y con los mejores acabados, de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 48 de la Ley 56 de 1995.

Manifiesta que la entidad bancaria cumplió con el numeral 1 del artículo 9 y con el numeral 6 del artículo 16 de la Ley 56 de 1995 y en cuanto a las supuestas infracciones de los artículos 44 y 45 de esta ley, indicó que no se dieron, porque la Comisión Evaluadora aplicó los criterios de ponderación establecidos en el pliego de cargos y especificaciones.

Agregó que el dictámen de la Comisión Evaluadora no fue final ni definitivo, ya que según el artículo 42 de la Ley 56, queda sujeto a las observaciones que hagan los proponentes y a que la administración adjudique la contrtatación al proponente que represente los mejores intereses para la entidad bancaria, como sucedió en este caso con la empresa Construcciones Universales, S. A., quien demostró tener más experiencia que D & N Asociados, S. A., aunque ésta tenía a su favor en la ponderación, una diferencia mínima de un punto.

Por último, la representante del Ministerio Público manifestó que el mismo artículo 42 de la Ley 56 de 1995, establece que la comisión no puede recomendar la adjudicación del acto público a ningún proponente en particular, es por ello que su ponderación tampoco es obligante para la autoridad contratante, porque de ser así, quedarían indefensas en caso de que tenga algún error el criterio de la Comisión Evauladora.

V. CONSIDERACIONES Y ANALISIS DE LA SALA

El artículo 3 de la Ley N° 56 de 1995, define la adjudicación como el acto por el cual la entidad licitante determina, reconoce, declara y acepta, en base a la ley, reglamentos y el pliego de cargos, la propuesta más ventajosa a los intereses del Estado, poniendo fin al procedimiento precontractual.

Según la ley de contratación pública, los actos públicos de ésta índole tienen como finalidad crear y propiciar una competencia entre los oferentes y la ponderación es el resultado de esa competencia.

Los numerales 19 y 20 del artículo 3 de la ley, relativo a las definiciones, establecen que la solicitud de precios es un procedimiento de selección de contratista que se hace cuando el precio oficial es mayor de diez mil balboas (B/.10,000) y no excede la suma de doscientos cincuenta mil balboas (B/.250,000.00).

El procedimiento administrativo de selección de contratista es aquél por el cual el Estado, previa convocatoria, selecciona entre varias personas naturales o jurídicas, en igualdad de oportunidades, la propuesta que reúne los requisitos que señalan la ley, los reglamentos y el pliego de cargos.

El primer derecho y obligación de las entidades contratantes establecido en el artículo 9 de la Ley 56 de 1995 es obtener el mayor beneficio para el Estado o los intereses públicos, cumpliendo con las disposiciones de dicha ley. Este principio es reiterado en el artículo 10 de la Ley 56 de 1995.

El numeral 6 del artículo 16 establece entre los principios de

transparencia, que las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley; igualmente, les será prohibido eludir procedimientos de selección de contratistas y los demás requisitos previstos en la ley de contratación pública.

Por su parte, el artículo 21 establece el deber de selección objetiva y justa, que es responsabilidad de los funcionarios y que consiste en escoger la propuesta más favorable a la entidad y a los fines que ésta busca, con base en los estipulado en el pliego de cargos.

Es cierto que el artículo 45 de la Ley 56 de 1995 establece que la adjudicación se hará al proponente que haya obtenido la mayor ponderación, de acuerdo con la metodología de ponderación de propuestas señalada en el pliego de cargos, pero el artículo 48 de la Ley 56 de 1995, posterior al antes citado, le confiere a la autoridad responsable una facultad discrecional, que consiste en que el Estado se reserva el derecho de rechazar una o todas las propuestas o de aceptar la que más convenga a sus intereses. Sin embargo, estima esta Sala que dicha facultad o derecho reservado, debe ejercerse sólo y únicamente cuando esta decisión garantice al Estado, sin lugar a dudas, un mejor y mayor beneficio. Dicho de otro modo, en caso que se decida rechazar las propuestas, se haga porque definitivamente ninguna de ellas representa el mejor interés y beneficio para el Estado; o en caso que se escoja la propuesta considerada más ventajosa, se haga porque dicha condición es notoria, evidente, sustentable y representa la mejor oferta posible para el Estado.

Esta discrecionalidad es ejercida por la autoridad encargada de adjudicar el acto público o contratación y sobre dicho funcionario recae la gran responsabilidad de seleccionar al proponente que considere mejor, con suma cautela y previsión, cuidando por todos los medios a su alcance, que se garantice al Estado un mayor beneficio.

Podría decirse que el derecho que el Estado se reserva, y que está establecido en el artículo 48 de la Ley 56 de 1995, es la excepción a la regla de adjudicación contenida en el artículo 45 de la propia Ley 56 y es así como debe ser interpretado por esta Sala y por los funcionarios responsables de las contrataciones públicas. Como toda excepción, debe ser ejercida cautelosamente y en casos especiales.

En el presente caso, un estudio del expediente administrativo, de las constancias procesales y de las resoluciones impugnadas, demuestra a esta Sala que el funcionario demandado hizo uso de la facultad discrecional contenida en el precitado artículo 48 de la Ley 56 de 1995, en beneficio de los intereses del Estado o entidad contratante, en este caso, del Banco Nacional de Panamá. Veamos por qué:

De fojas 21 a 137 del expediente consta copia autenticada del pliego de cargos de la Solicitud de Precio N° 60/96 para la remodelación de la Sucursal del Banco Nacional de Panamá en Tonosí, Provincia de Los Santos, confeccionado por la Gerencia Ejecutiva de Servicios Generales del Departamento de Servicios Administrativos. Este pliego de cargos establece los requisitos administrativos y técnicos para la participación de los proponentes.

De fojas 9 a 20 reposa copia autenticada del dictamen de la Comisión Evaluadora de la Solicitud de Precios N° 60-96 conformada por dos funcionarios del Banco Nacional y por dos profesionales independientes, un arquitecto y un ingeniero.

Este dictamen detalla las seis propuestas recibidas, entre las que se encuentran las de D & N Asociados, S. A. y Construcciones Universales, S. A., señalandose que el Ingeniero Gilberto Villalaz retiró la fianza de propuesta.

De acuerdo a las condiciones especiales establecidas en el pliego de cargos de la solicitud de precios N° 60-96, para la evaluación de las propuestas se

establecieron los siguientes términos y criterios con sus respectivos porcentajes:

1. Perfil financiero y económico	10%	
2. Perfil administrativo y técnico	25%	
3. Equipo y maquinaria	20%	
4. Experiencia en trabajos similares	25%	
5. Precio		20%

Al analizar las diferentes propuestas presentadas, la Comisión Evaluadora concluyó que Multiservices Investment Corp., S. A. obtuvo 81%, Sebastian Peralta obtuvo 40%, D & N Asociados, S. A. obtuvo 91%, Constucciones Universales, S. A. obtuvo 90% y Distribuidora América Int., S. A. obtuvo 85%.

Las dos mejores ponderaciones corresponden a D & N Asociados, S. A., con 91% y a Construcciones Universales, S. A. con 90%. La distribución de los puntajes respectivos de estas dos sociedades, atendiendo a cada perfil, fue la siguiente:

Económico: D & N Asociados, S. A. 10%; Constucciones Universales, S. A. 5%.

Administrativo técnico: D & N Asociados, S. A. 25%; Construcciones Universales, S. A. 25%.

Equipo y maquinaria: D & N Asociados, S. A. 20%; Construcciones Universales, S. A. 18%.

Experiencia: D & N Asociados, S. A. 20%; Construcciones Universales, S. A. 25%.

Precio: D & N Asociados, S. A. 17% y Construcciones Universales, S. A. 20%.

Lo anterior fue analizado por la entidad demandada, conjuntamente con las evaluaciones y comentarios de la Comisión Evaluadora para llegar a la conclusión de los porcentajes adjudicados a cada proponente. En este sentido, tenemos que en el perfil de la experiencia en trabajos similares (f. 14), señaló:

> "DyN Asociados, S. A.:
> Se visitaron en la ciudad de Chitré dos obras terminadas en 1992, un edificio de dos pisos de residencia de planta alta y local comercial en la planta baja a un costo de B/.120.0M.
>
> Un edificio para restaurante de un costo de B/.150.0M se observó un buen acabado con una arquitectura moderna, fue entregado a satisfacción no presentó problemas en el plazo.
>
> Construcciones Universales, S. A.:
> De esta empresa sólo visitamos dos obras en Aguadulce, por la similitud del trabajo que el Banco Nacional requiere en esta Solicitud de Precios, estas obras fueron:
>
> Remodelación de fachada y área de plataforma y caja en la Caja de Ahorros, construcción y remodelación del edificio dos plantas del Colabanco (Probanco).
> ...
> Estas dos obras reflejan la calidad del trabajo que se requiere en una institución bancaria. Sus detalles y acabados son excelentes y dignos de observar.
>
> Sus entregas fueron dentro de lo estipulado sin ningún contratiempo." (f. 16)

Por su parte, a foja 17 del informe de la Comisión Evaluadora, se dejó

establecido que Construcciones Universales, S. A. ofreció el segundo precio más bajo, seguido por D & N Asociados, S. A. quien ofertó B/.2,231.10 por encima del precio de Construcciones Universales, S. A.

Tal como se explicó, la autoridad demandada, con fundamento en el artículo 48 de la Ley 56 de 1995, tomó la decisión de adjudicar la solicitud de precios N° 60-96 a Construcciones Universales, S. A. luego de analizar el informe de la Comisión Evaluadora y llegar a la conclusión de que esta era la oferta más ventajosa para el Estado. Esta decisión fue tomada en relación a la capacidad y experiencia de los proponentes y fue debidamente fundamentada, tanto fáctica como legalmente en la resolución administrativa aquí impugnada, según se observa a continuación:

"RESUELVE:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 48 de la ley 56 de 27 de diciembre de 1995, adjudicar definitivamente el contrato para la Remodelación de la Sucursal del Banco Nacional de Panamá en Tonosí, Provincia de Los Santos, a la empresa Construcciones Universales, S. A., por la suma de B/.100,054.70, basado en las siguientes consideraciones:

a) De todas las empresas participantes, Construcciones Universales, S. A., presenta una vasta experiencia en obras del tipo requerido por el Banco, ya que remodelaron las sucursales de la Caja de Ahorros y Colabanco en la Ciudad de Aguadulce, siendo sus acabados excelentes y dignos de observar.

b) Cumplió con los requisitos más relevantes del pliego de cargos.

c) La oferta de Construcciones Universales, S. A. es más económica que la de D & N Asociados, S. A. (B/.100,054.70 vs B/.102,285.80).

d) Es la segunda mejor oferta en precio.

e) La empresa Distribuidora América Internacional, S. A., primera en precio, no presentó ninguna referencia bancaria bajo su razón social y obtuvo en experiencia un puntaje de 15% de un 25%." (f. 2)

Igualmente, al resolver el recurso de reconsideración interpuesto por D & N Asociados, S. A., el Gerente General del Banco Nacional de Panamá manifestó lo siguiente:

"a) Si bien es cierto que D & N Asociados, S. A. obtuvo la más alta ponderación, también es cierto que el Artículo 48 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, le concede a la Entidad Licitante la facultad de Adjudicar el Acto Público a la empresa que más convenga a sus intereses, y por tanto, por ser esta norma de carácter posterior no es imperativo la aplicación del Artículo 45 de la misma Ley.

b) Con base a la norma citada, esta Gerencia decidió adjudicar la Solicitud de Precios N° 60-96 a Construcciones Universales, S. A., por ser el precio ofrecido por dicha empresa, inferior en B/.2,231.10 a la suma cotizada por D & N Asociados, S. A.; y por haber realizado Construcciones Universales, S. A., obras similares a otros Bancos, en donde la Comisión Evaluadora observó excelentes acabados. Esto no niega que D & N Asociados, S. A., haya realizado trabajos similares, pero su ponderación con respecto a la adjudicataria, resultó inferior en cinco (5) puntos.

c) No es cierto como lo afirma la Recurrente que la falta de referencias bancarias, fueron ponderadas al evaluar el precio; dicha ponderación se hizo con respecto al perfil financiero y económico de la empresa, en donde se le restó cinco puntos del puntaje máximo."

(f. 3 y 4)

Igualmente, la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá confirmó los actos anteriores impugnados, por considerar que:

> "... la facultad discrecional que le concede el Artículo 48 de la Ley 56 de 1995, para adjudicar la contratación a la propuesta que más convenga a los intereses de la entidad Licitante, es compatible con lo que disponen los artículo 42, 44 y 45 de la misma Ley, por lo que conforme a lo externado, no es viable acceder a lo solicitado por D & N Asociados, S. A." (f. 8)

Esta Sala observa que la entidad demandada fundamentó su elección de la propuesta de Construcciones Universales, S. A. en la facultad discrecional conferida por el artículo 48 de la Ley 56 de 1995, y considera que en este caso en particular, la decisión estuvo bien motivada y responde a los mejores intereses del Estado, puesto que Construcciones Universales, S. A. demostró tener experiencia específicamente en la clase de trabajo que se requería en la solicitud de precios y adicionalmente a la mayor experiencia, ofreció un menor precio que la sociedad D & N Asociados, S. A.

Debemos reiterar que la facultad discrecional del Estado de rechazar una o todas las propuestas o de escoger la que mejor convenga a sus intereses debe ser ejercida con cautela y únicamente en los casos en los que evidentemente representen el mayor beneficio para la entidad contratante y para el interés público, tal como la Sala ha considerado que ocurrió en el presente caso.

Dicho lo anterior, corresponde declarar que las resoluciones administrativas impugnadas con la presente demanda no violaron los artículos 9 numeral 1, 16 numeral 6, 44 ni 45 de la Ley 56 de 1995.

Por consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES la Resolución N° GG-27-97 de 18 de abril de 1997, dictada por el Gerente General del Banco Nacional de Panamá y sus actos confirmatorios y NIEGA las demás declaraciones pedidas por la sociedad D & N Asociados, S. A., dentro de la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ EN REPRESENTACIÓN DE FERNANDO LEWIS PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 213-3528 DE 6 DE AGOSTO DE 1996 DICTADA POR EL ADMINITRADOR REGIONAL DE INGRESOS, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Galindo, Arias y López, actuando en nombre y representación de FERNANDO LEWIS NAVARRO, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 213-3528 del

6 de agosto de 1996, dictada por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, actos confirmatorios; y para que se haga otras declaraciones.

Admitida la demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración, quien se opuso a las pretensiones de la parte actora mediante su Vista Fiscal N° 129 de 8 de abril de 1997. Además, se requirió al funcionario demandado que rindiera un informe de conducta, y así lo hizo a través de Nota N° 213-L-239 de 21 de febrero de 1997.

I. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO

Por medio de la Resolución N° 213-3528 de 6 de agosto de 1996, dictada por la Administración Regional de Ingresos, se resolvió expedir liquidación adicional a nombre del contribuyente FERNANDO LEWIS NAVARRO R.U.C. 8-228-972 por deficiencias en su declaración de impuesto sobre la renta para el año 1983, como sigue:

	1993	
Renta Neta Declarada	B/.12,960.65	
Aumento según investigación	B/.68,998.66	
Renta Neta Gravable		B/.81,959.31
Impuesto Básico Según Tarifa	B/.20,951.57	
Menos:		
Impuesto según declaración original	B/.-1,218.50	
Sub-total		B/.19,733.07
Seguro Educativo	B/.---233.20	
Sub-total		B/.19,966.63
Más: 10% de Recargo		B/.-1,996.63
Impuesto a Pagar	B/.21,962.90	

Además, en dicha resolución se señaló que las sumas adicionales que contiene esta Resolución se han liquidado con los recargos de que trata el Artículo 728 del Código Fiscal y que los intereses serán liquidados a la presentación de esa Resolución para su pago.

II. DISPOSICIONES VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCION

La parte actora considera que se ha infringido el primer párrafo del artículo 697 del Código Fiscal, el cual preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 697: Se entiende por gastos o erogaciones deducibles, los gastos o erogaciones ocasionados en la producción de la renta y en la conservación de su fuente; en consecuencia, no serán deducibles, entre otros, aquellos gastos, costos o pérdidas generados o provocados en negocios, industrias, profesiones, actividades o inversiones cuya renta sea de fuente extranjera. El Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, establecerá las normas reglamentarias para la aplicación de los principios contenidos en este artículo."

Al explicar el concepto de la infracción indicó que en el presente caso el contribuyente dedujo como pérdidas, aquellas que efectivamente sufrió en la venta de las acciones de la Sociedad de Inversiones Ixtapa, S. A, de las que era propietario.

Agrega que ésta pérdida proviene de una actividad cuya renta es de fuente netamente panameña y por ello el contribuyente estaba plenamente facultado a deducir dichas pérdidas en su declaración correspondiente al ejercicio fiscal de 1993, razón por la cual esta norma fue violada en forma directa por omisión.

También considera que se ha infringido el literal "d" del parágrafo 1, del artículo 697 del Código Fiscal. Sin embargo, esta Superioridad observa que transcribió el literal "f" del parágrafo 2 de dicho artículo, el cual señala que:

> "Parágrafo 2: No son gastos o erogaciones ocasionados en la producción de la renta o en la conservación de su fuente y, por lo tanto, no son deducibles los siguientes:
>
> f. Cualquier otro gasto, que aunque deducible, no pueda ser comprobado satisfactoriamente cuando su prueba sea exigida por la Dirección General de Ingresos."

Al explicar el concepto de la infracción, el apoderado judicial de la parte actora señaló que la norma transcrita ha sido violada por omisión, puesto que la misma no fue tomada en cuenta para los efectos de las evaluaciones realizadas por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá y confirmadas por la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos.

Igualmente, considera que se ha violado el artículo 5 del Decreto N° 60 de 28 de junio de 1965, el cual estaba vigente al momento que el contribuyente realizó las deducciones por razón de la pérdida sufrida por éste en la venta de acciones de la Sociedad de Inversiones Ixtapa, S. A.

Dicho artículo establece lo siguiente:

> "Artículo 5. Cuando la Dirección General de Ingresos lleve a cabo las investigaciones de contribuyentes cuyos ingresos sean de fuente panameña y de fuente extranjera, podrá exigir que informen sobre el monto de ambos tipos de ingresos y gastos para establecer correctamente la renta gravable.
>
> A falta de elementos suficientes de prueba que pueda aportar el contribuyente, y si su contabilidad y documentación no revelare claramente la proporción o el monto de los ingresos y gastos que corresponda atribuir a una y otra fuente, la Dirección General de Ingresos podrá utilizar, como elemento de juicio principal para la determinación de la verdadera cuantía de la renta de fuente panameña, los resultados obtenidos por empresas independientes que se dediquen a una actividad identica o similar. Si pese a tales investigaciones no fuera posible determinar con exactitud tales elementos, la Dirección General de Ingresos no aceptará como deducibles aquellos gastos que el contribuyente no pueda comprobar como correspondientes a ingresos de fuente panameña y estimará como de fuente panameña aquellos ingresos que el contribuyente no pueda comprobar como de fuente extranjera."

Considera el abogado de la parte actora que dicha norma fue violada por omisión, puesto que la administración no tomó en cuenta, al momento de expedir la liquidación adicional, las pruebas aportadas por el contribuyente.

Finalmente, el apoderado judicial del demandante, señaló en su escrito que considera que se ha infringido el artículo 29 del Decreto N° 60 de 28 de junio de 1965, el cual transcribimos a continuación:

> "Artículo 29. (Principios Generales).
> Además de los mencionados en el Parágrafo uno del artículo 697 del Código Fiscal, los gastos o erogaciones cuya deducción de la renta bruta se autoriza son aquellos gastos de conservación o de producción de renta de fuente panameña, efectivamente pagados o incurridos en el año fiscal.
>
> Se entiende por gasto de conservación de una fuente de renta, aquel en que se tenga que incurrir necesariamente para mantenerla en

condiciones de trabajo, servicio o producción, sin que adquiera aumento de valor por razón del gasto.

Se entiende por gastos de producción de la renta, las demás erogaciones indispensables para obtener los productos o para percibir la ganancia.

Cuando el gasto o erogación sea pagado e incurrido para obtener indistintamente renta sujeta al impuesto e ingresos de fuente extranjera y/o ingresos exentos sólo será admisible su deducción en la proporción respectiva, conforme a los comprobantes y contabilidad del contribuyente. A falta de estos o en el caso de que la contabilidad no reflejara un resultado acorde con la realidad o por cualquier otro motivo las proporciones no pudieran determinarse con claridad según tales comprobantes, la porción deducible se establecerá proporcionalmente a los ingresos totales de ambos tipos de rentas.

Conforme a las disposiciones de este Artículo, no serán deducibles aquellos gastos, costos o perdidas generados o provocados en negocios, industrias, profesiones, actividades o inversiones de capital cuya renta sea de fuente extranjera o esté exenta. Tampoco serán deducibles los gastos en que incurra con posterioridad a la obtención de las rentas, motivados por el empleo o destino que se le da a la renta después de obtenida, ni los gastos incurridos o pagados para mantener o desarrollar actividades de entretenimiento, recreo o expansión del contribuyente."

Al explicar el concepto de la infracción de la norma transcrita, el apoderado del señor LEWIS señaló que la misma fue violada por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, al no tomar en consideración las pérdidas sufridas por el contribuyente en el ejercicio fiscal de 1993, como gastos para la conservación de la renta (fs.21-24).

II. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

El funcionario demandado rindió su informe de conducta, mediante la Nota N° 213-L-239, de 21 de febrero de 1997, visible de fojas 29 a 34 del expediente, en donde indicó lo siguiente.

"POSICION DE LA ADMINISTRACION:
Luego de una serie de investigaciones realizadas por el Departamento de Auditoría Integral de la Dirección General de Ingresos con base a lo establecido en los Artículos 719 y 720 del Código Fiscal y 12 del Decreto de Gabinete N° 109 de 7 de mayo de 1970 se determinó que el contribuyente FERNANDO LEWIS NAVARRO, con cédula N° 8-228-972, presentó deficiencias comprobadas que aumentaron la renta gravable.

Como consecuencia de la citada investigación, esta Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá mediante Resolución N° 213-3528 de 6 de agosto de 1996, resolvió expedir liquidación adicional a nombre del contribuyente FERNANDO LEWIS NAVARRO, con cédula de identidad personal N° 8-228-972 por deficiencias en su declaración de impuesto sobre la renta para el año de 1993 ...

De esta resolución anteriormente citada, se notificó el contribuyente el 12 de agosto de 1996 y el 3 de septiembre de 1996 la firma de abogados GALINDO, ARIAS Y LOPEZ, actuando en su calidad de apoderados especiales del contribuyente FERNANDO LEWIS NAVARRO, sustentó formal recurso de reconsideración con apelación en subsidio, en contra de la Resolución N° 213-3528 de 6 de agosto de 1996.

Posteriormente, la Administración Regional de Ingresos mediante Auto fechado el 16 de septiembre de 1996, resolvió acoger el escrito presentado y la prueba aducida, ordenando la práctica de un examen pericial contable en los libros del contribuyente.

Luego de haber presentado los respectivos informes, la Administración Tributaria realizó los siguientes señalamientos:

GASTOS DE COMISIONES, SERVICIOS PRESTADOS:

Para el año 1993, el contribuyente se dedujo en concepto de gastos de comisiones y servicios prestados la suma de B/.250.00, pero al solicitarle la sustentación de la misma, no aportó prueba alguna, lo que dio como resultado que se objetara y se adicionara a la renta neta gravable del contribuyente.
...

OTROS GASTOS (Pérdidas en la Venta de Acciones y Otros):

En el período 1993, el contribuyente se dedujo en este concepto la suma de B/.67,319.49, conformado por B/.58,360.50 en concepto de pérdida en venta de acciones y B/.8,958.99 registrados por el contribuyente como otros gastos (sub-cuenta).

En cuanto a la suma declarada en concepto de pérdida en venta de acciones, a pesar de todas las investigaciones realizadas por lo auditores fiscales, no se pudo verificar el precio en que fueron adquiridas las acciones por el contribuyente FERNANDO LEWIS NAVARRO, por lo que siendo esta una información fundamental, para establecer si hubo pérdida o ganancia en esta transacción, no se aceptó la deducción de la suma declarada como pérdida en venta de acciones.

Además de la pérdida en venta de acciones, el contribuyente, como ya mencionamos, declaró la suma B/.8.958.99, la cual registró como "otros gastos"...

Durante la investigación el contribuyente no aportó la documentación de respaldo, ni la incidencia de este gasto en la producción de la renta y conservación de su fuente, por lo que objetó la suma antes mencionada y se adicionó a la renta neta gravable del contribuyente para el período de 1993.
...

GASTOS MEDICOS:

Para el año 1993, el contribuyente FERNANDO LEWIS NAVARRO, se dedujo en este concepto B/.3.846.80. Al examinar las pruebas aportadas para la sustentación de dichos gastos, sólo se comprobó la suma de B/.2,417.63 resultando así una diferencia sin justificar de B/.1,429.17, la cual fue objetada y se adicionó a la renta neta gravable del contribuyente.

...
Conforme a los hechos establecidos, esta administración tributaria consideró necesario mantener el alcance debido a que el contribuyente no presentó los documentos para justificar la diferencia objetada.

Como consecuencia, esta Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, resolvió, a través de la Resolución N° 213-5364 de 17 de octubre de 1996, mantener en todas sus partes la Resolución N° 213-3528 de 6 de agosto de 1996, mediante la cual se expidió liquidación adicional a nombre del contribuyente FERNANDO LEWIS NAVARRO ... por deficiencias en su declaración del impuesto sobre la

renta para el año 1993, y se le concedió a la vez el recurso de apelación correspondiente.

De esta Resolución N° 213-5364 de 17 de octubre de 1996 se notificó el apoderado del contribuyente, el 24 de octubre de 1996.

Que el día 8 de noviembre de 1996, el contribuyente FERNADO LEWIS NAVARRO, con cédula de identidad personal N° 8-288-972, a través de sus apoderados GALINDO, ARIAS Y LOPEZ, sustentó recurso de apelación contra la Resolución N° 213-5364 de 17 de octubre de 1996, solamente sobre el rubro de deficiencias denominado PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES.

POSICION DE LA COMISION DE APELACIONES

Que la Comisión de Apelaciones estudió las alegaciones del recurrente y conforme a las pruebas del mismo consideró lo siguiente:

Del análisis del capital accionario de la sociedad Inversiones Ixtapa, S. A., se pudo observar sin lugar a dudas que dicha empresa no emitió acciones a nombre de personas naturales, sino a nombre de las sociedades anónimas, hecho que está comprobado a través de los registros contables asentados en el libro oficial Diario General.

El perito del contribuyente en su informe pericial señaló que se le informó que las acciones de la Sociedad de Inversiones Ixtapa, S. A., le correspondieron sólo a los señores EDUARDO Y FERNANDO LEWIS NAVARRO, lo que indicó que el costo de la adquisición fue de B/.103,025.00 para cada uno.

Al respecto tenemos que señalar que cuando en una sociedad anónima se dan este tipo de transacciones, las mismas deben estar debidamente documentadas, situación que no se da el caso que nos ocupa, ya que el perito del contribuyente no aportó elementos probatorios que nos indiquen con certeza al existencia de tal transacción, es más, él mismo reconoce que se le informó de la transacción, de lo cual se infiere que la información que suministró en su experticia, no tiene asidero en documentos probatorios.

Esta afirmación, por si sola, no constituye medio de prueba que los permitieran establecer el costo de las acciones supuestamente compradas por el contribuyente, ya que en el expediente y en los registros contables de la Sociedad Inversiones Ixtapa S. A., no existe evidencia de que el señor FERNANDO LEWIS NAVARRO haya adquirido acciones de la misma.

En cuanto a la afirmación que hizo el abogado recurrente en el sentido de que el contribuyente adquirió acciones de la Sociedad Inversiones Ixtapa, S. A., en pago de obligaciones que le adeudaba a la Sociedad Inversiones Leganchi, S. A., tenemos que manifestarle que en el expediente tampoco existe evidencia de tal compromiso, es más, de acuerdo a los archivos que se tienen en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, la Sociedad Inversiones Leganchi, S. A., declaró sin operaciones desde el año 1984 hasta el año 1994.

Al examinar las declaraciones de rentas par los períodos mencionados, la Comisión de Apelaciones se percató igualmente de que la sociedad mencionada no declaró para esos años ni activo ni pasivo, ni capital, entonces mal pudiera existir deuda alguna con el señor FERNANDO LEWIS NAVARRO; y de existir dicha deuda, la misma no está acreditada según se lee en el expediente. Adicionalmente, el

abogado recurrente no explicó en su escrito cuál fue la naturaleza de esta supuesta deuda, contraída por la Sociedad Inversiones Leganchi, S. A., que durante diez años ha declarado sin operaciones.

Por lo expuesto, la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos mediante Resolución N° 205-137 de 19 de noviembre de 1996, resolvió confirmar la Resolución N° 213-3528 de 6 de agosto de 1996 y la Resolución N° 213-5364 de 17 de octubre de 1996, la cual confirmó en todas sus partes a la primera, ambas expedidas por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, en contra del contribuyente FERNANDO LEWIS NAVARRO ...

De esta Resolución N° 205-137 de 19 de noviembre de 1996 se notificó el apoderado del contribuyente, el 5 de diciembre de 1996 ..." (fs.29-34)

III. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La señora Procuradora de la Administración expresó su opinión respecto a la presente causa a través de su vista fiscal N° 129 de 8 de abril de 1997, visible de foja 35 a foja 44.

Al referirse a la supuesta violación del artículo 697 del Código Fiscal y de su literal "f", manifestó no compartir el criterio vertido por el demandante, toda vez que en el período fiscal de 1993, el contribuyente, FERNANDO LEWIS, se dedujo bajo el concepto de pérdida en la transacción de venta de acciones la suma de B/.58.360.90, lo cual no se encuentra fehacientemente comprobado en los libros y demás documentos de contabilidad.

También señaló que a través de la auditoría realizada por el Fisco, y por la cual se expidió un alcance adicional al contribuyente, la administración Regional de Ingresos, al no encontrar debidamente registrada y documentada la información financiera y contable requerida, no pudo verificar el valor de la venta de las acciones enajenadas por el contribuyente, aspecto fundamental para establecer si hubo o no pérdida en la mencionada compraventa de acciones, por lo que no se debe aceptar la deducción de la suma declarada por el contribuyente como pérdida en la venta de las mismas.

Considera que no existe evidencia del valor de las acciones vendidas para establecer con certeza la pérdida que se aduce.

Tampoco considera la Procuraduría de la Administración que se hayan violado los artículos 5 y 29 del Decreto 60 de 28 de junio de 1965, puesto que contrario a lo argumentado por el abogado del contribuyente, éste no suministró los documentos mediante los cuales se pueda demostrar la deducibilidad de las pérdidas ocacionadas por la venta de las acciones de la Sociedad Inversiones Ixtapa, de las cuales él era propietario, a la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza.

IV. DECISION DE LA SALA

Al resolver la presente controversia, esta Corporación de Justicia observa que el señor FERNADO LEWIS ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra la Resolución N° 213-3528 de 6 de agosto de 1996, dictada por el Administrador Regional de Ingresos, mediante la cual se resolvió expedir liquidación adicional en su contra por deficiencias en su declaración del Impuesto sobre la Renta para el año fiscal 1993.

El recurrente basa su reclamación fundamentalmente en su disconformidad con la decisión adoptada por la Administración Regional de Ingresos de Panamá adicionar a la renta neta gravable del período 1993, la suma de cincuenta y ocho mil trescientos sesenta balboas con 50/100 (B/.58,360.50) que él dedujo de su declaración de renta en concepto de pérdida en venta de acciones.

De acuerdo con el abogado de la parte actora, esta pérdida declarada por el contribuyente proviene de la venta en el ejercicio fiscal de 1993, de ciertas acciones de la sociedad Inversiones Ixtapa de las que era propietario y las cuales vendió a un valor inferior al de su adquisición.

Ahora bien, ésta Corporación de Justicia considera que en el expediente ha quedado demostrado: 1. Que el señor FERNANDO LEWIS adquirió de la sociedad Inversiones Ganges en el año 1992, ciertas acciones de la empresa Sociedad de Inversiones Ixtapa; y 2. Que el demandante vendió dichas acciones en el año 1993 a la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) por la suma de ciento cinco mil balboas (B/.105,000.00).

Sin embargo, en el expediente no hay ninguna prueba que acredite cuánto pagó el señor LEWIS al adquirir las acciones en cuestión.

En consecuencia esta Superioridad no puede declarar como probado el gasto alegado por el demandante.

Cabe recordar, que los actos administrativos se presumen legales hasta que no se pruebe su ilegalidad, es decir, gozan de legitimidad mientras no sean declarados nulos, y corresponde al demandante probar los hechos que alega.

A juicio de la Sala como el demandante no probó los gastos que dedujo en su declaración, en concepto de pérdida por la venta de acciones, estos no deben ser aceptados como deducibles por la Administración Regional de Ingresos.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 213-3528 de 6 de agosto de 1996, dictada por el Administrador Regional de Ingresos de Panamá y NIEGA las demás declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTECIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BENEDICTO DE LEÓN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ALVARO MUÑOZ FUENTES, PARA QUE EL ESTADO LE CANCELE LA SUMA DE B/.5,000.00, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO, PRESTADOS AL ESTADO A SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS DE LA ÉPOCA, LICENCIADO RODRIGO AROSEMENA DE ROUX. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Benedicto De León, actuando en nombre y representación del licenciado Alvaro Muñoz Fuentes, ha presentado ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que el Estado, a través del hoy denominado Ministerio de Economía y Finanzas, le sufrague la cantidad líquida de B/.5,000.00, en concepto de servicios profesionales supuestamente prestados al Estado, a solicitud de quien fungiera como Director General de Aduanas, licenciado Rodrigo Arosemena De Roux. (Cfr. foja 7 de la demanda).

Expuesta la pretensión del demandante, la Sala considera oportuno reseñar

que el presente asunto proviene, por vía de declinatoria, de la esfera civil ante el proceso sumario de cobro de honorarios profesionales que promoviera contra el licenciado Rodrigo Arosemena de Roux, el licenciado Alvaro Muñoz Fuentes, el día 1 de julio de 1994, basado en los servicios profesionales que éste prestó a requerimiento del primero a favor del señor Hilario Villarreal a causa de un asunto penal en que estuvo involucrado Villareal por la supuesta participación en el delito de homicidio cometido en perjuicio de Andrés Rodríguez Guevara, acción que quedó radicada para su conocimiento en el Juzgado Séptimo de Circuito Civil, de este Circuito. Este Tribunal ordinario denegó mediante Sentencia No. 23, de 7 de marzo de 1996, la pretensión del demandante (fojas 45-51 del expediente civil), apoyándose entre otras motivaciones en que en el asunto subjúdice "no se colige la vinculación entre acreedor (Licdo. Muñoz) y el supuesto deudor, Licdo. AROSEMENA DE ROUX, al considerar las posiciones de los litigantes (demandante y demandado) en relación al material probatorio". (foja 50).

Posteriormente, ante la alzada promovida por el actor contra esa resolución, el Primer Tribunal Superior de Distrito Judicial confirmó la misma mediante sentencia de 31 de julio de 1996 (fojas 69-78). Luego, fue incoado un recurso extraordinario de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que casó la sentencia, y entre otras cosas dispuso la anulación de lo actuado y la declinatoria de competencia (fojas 121-130, ibídem).

I. De las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la infracción según el demandante.

A juicio del licenciado Benedicto De León, la omisión de la Administración de pagar la cifra dineraria antes indicada a su cliente es violatoria de los artículos 976 y 986, ambos del Código Civil. Veamos:

> "Artículo 976: Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos".

El demandante asegura que esta disposición ha sido violada de manera directa por omisión porque la entidad pública demandada "... niega el pago de los honorarios profesionales adeudados al Licenciado ALVARO MUÑOZ FUENTES, por haber prestado servicios solicitados por una institución del Estado que es la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro ... Se trata de un acto administrativo celebrado entre el Director de Aduanas y en particular (sic), que en este caso es el Licenciado ALVARO MUÑOZ FUENTES, que se rige por el derecho común" (foja 9).

La segunda norma jurídica invocada preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 986: Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas".

La parte que demanda asegura que la actitud del Ministerio de Hacienda y Tesoro está "causando daños y perjuicios a mi representado por su negligencia al hacer caso omiso a un Acto Administrativo plenamente comprobado y, en el que como dice la Corte Suprema de Justicia el Estado recibió un beneficio por la actuación del Licenciado ALVARO MUÑOZ FUENTES, por tanto, debe obligársele a pagar" (foja 9).

Agrega que una de las características de los contratos administrativos es el interés público, y para ello cita al autor Jorge Escola, quien tras hacer una comparación entre estos negocios jurídicos y los contratos de derecho privado expresa que los contratos administrativos no tienen otra finalidad "que la satisfacción y el logro del interés público", de ello se desprende su naturaleza como tales, sus efectos y consecuencias que les son propios. (Cfr. foja 10).

El demandante reitera las opiniones vertidas al explicar los conceptos de violación antes señalados en su escrito de alegato de conclusión (fojas 50-55).

II. El Informe de Conducta rendido por la entidad pública demandada.

En informe explicativo de conducta, remitido a esta Sala mediante Nota No. 101-01-497 DMHyT, fechada el día 13 de julio de 1998 (fojas 13-16), el entonces Ministro de Hacienda y Tesoro, Miguel Heras Castro, se opone a la pretensión del demandante. Este documento también incluye la opinión legal de la Asesoría Jurídica de la institución demandada expresada a través de Memorándum S/N, de 13 de agosto de 1993, en el sentido que se niegue la petición de marras, ya que el señor Hilario Villarreal, según consta en autos, otorgó poder al licenciado Muñoz Fuentes, contrato que se reputa de derecho civil, con el que el Ministerio de Hacienda y Tesoro no tiene relación. El dictamen funda este criterio en los artículos 1130 y 1131, inciso 5o., del Código Civil y artículo 611, inciso 2o., del Código Judicial.

Como último punto destacable del Informe se expresa que el apoderado judicial del licenciado Alvaro Muñoz Fuentes consideró el contenido del memorándum antes mencionado como una negativa de su petición, y lo procedente era que requiriera una resolución al respecto que una vez le fuese notificada pudiera impugnarla en la esfera administrativa, actuación que no hizo sino que recurrió a la esfera ordinaria a través de proceso sumario, con lo que se observa que no agotó la vía administrativa por silencio administrativo.

III. Dictamen jurídico de la Procuraduría de la Administración.

Mediante Vista No. 388, de 11 de agosto de 1999, esta Agencia del Ministerio Público dio contestación a la presente demanda y se opuso a la pretensión.

En concreto argumenta la Procuraduría que la solicitud hecha por el entonces Director de la Dirección General de Aduanas para contratar los servicios profesionales de Alvaro Muñoz Fuentes no constituye un contrato administrativo, pues no cumple con los requisitos legales, entre éstos cita el refrendo de la Contraloría General de la República (foja 42), es por el contrario, "una decisión administrativa que se dio sin autorización previa del Ministerio de Hacienda y Tesoro" (fojas 39-40), y agrega que el exdirector de esa dependencia se excedió en el ejercicio de sus funciones.

Opina que la responsabildad derivada del hecho delictivo que involucra al señor Hilario Villarreal debían ser asumidos personalmente y no por el Director General de Aduanas, puesto que Villareal incurrió en falta de "competencia y moralidad en el ejercicio de sus funciones", según lo preceptúa el artículo 295 de la Constiución de la República.

Coincide con el argumento del Informe Explicativo de Conducta que afirma que la relación jurídica entre el licenciado Muñoz Fuentes y el señor Villarreal, quien otorgó poder al primero para su defensa, es un acto de carácter civil y no de Derecho Administrativo.

IV. Consideraciones y decisión de la Sala.

Luego del recuento de las principales piezas procesales, la Sala pasa a resolver la presente controversia no sin antes plasmar las siguientes consideraciones.

A juicio de este Tribunal, no le asiste razón a la parte demandante cuando asegura que viola los artículos 976 y 986 del Vódigo Civil el no pago por parte del Ministerio de Hacienda y Tesoro de la suma de B/.5,000.00, en concepto de honorarios profesionales, al licenciado Alvaro Muñoz Fuentes por servicios prestados al señor Hilario Villarreal para su defensa en la esfera penal a causa del hecho punible que costó la vida de una persona.

Por estar íntimamente vinculados los cargos de violación que se hacen al acto impugnado, la Sala pasa a estudiarlos conjuntamente, y en ese sentido coincide con los argumentos que expresa el entonces Ministro de Hacienda y Tesoro en su Informe Explicativo de Conducta quien afirma: que mediante Nota No. 701-01-1287, de 17 de diciembre de 1992, el licenciado Rodrigo Arosemena de Roux, en su calidad de Director General de Aduanas, solicitó la contratación directa del licenciado Alvaro Muñoz Fuentes, a fin de cubrir una cuenta de honorarios profesionales por la suma de B/.5,000.00, por su gestión en defensa del señor Hilario Villarreal involucrado en un hecho delictivo donde perdió la vida un ciudadano panameño. Esta solicitud fue reiterada al Ministerio -agrega el Informe- mediante Nota No. 701-01660, de 21 de junio de 1993 (fojas 13-14).

Además, se afirma que "No consta en los archivos de este Ministerio que se haya contratado los servicios profesionales del Lic. MUÑOZ FUENTES para que asumiera la defensa de uno de sus empleados ..."; al igual que prescribió su derecho a reclamar conforme el artículo 1705, numeral 1, del Código Civil. (Cfr. fojas 15-16).

Vale apuntar que al contestar el hecho cuarto de la demanda sumaria corregida para el cobro de honorarios profesionales, el apoderado del demandado Rodrigo Arosemena De Roux, luego de negar el hecho respectivo señala que su patrocinado "... no contrató en ninguna forma los servicios del Lic. Alvaro Muñoz Fuentes sino que sólo recomendó al Sr. Hilario Villarreal para que nombrara defensor al licenciado Fuentes a fin de evitar responsabilidad al Estado conforme al Artículo 1645 cuarto párrafo del Código Civil. Se ofreció a hacer todo lo posible para que el Tesoro Nacional cancelara dichos honorarios y en efecto realizó los trámites pertinentes para que se hicieran efectivos. El no haberlo conseguido no lo hace responsable de los mismos". (Ver fojas 36-37 de los antecedentes).

La Sala estima que las consecuencias dañosas de la acción de un agente de la Administración en cuanto no sean producto de un ejercicio legítimo de sus funciones públicas no pueden afectar negativamente a ésta y menos ocasionarle responsabilidad civil, caso de que un tercero por acción u omisión cometa un hecho punible como el cuestionado en autos.

Ni en el expediente surtido en la esfera civil ni el acopiado en ésta existe constancia de que se haya formalizado un contrato administrativo para cubrir el gasto demandado entre Alvaro Muñoz Fuentes y una autoridad pública competente del Ministerio de Hacienda y Tesoro o una de sus dependencias, específicamente la Dirección General de Aduanas.

Sobre el requisito de autoridad competente para celebrar el contrato, el artículo 70 del Código Fiscal preceptúa:

> "Artículo 70o. La celebración de los contratos corresponde al Ministro o representante legal de la entidad pública autónoma o de una entidad pública con capacidad para contratar por disposición de la Ley".

La Ley 16, de 29 de agosto de 1979, por la cual se crea la Dirección General de Aduanas, establece en su artículo 6 las atribuciones del Director General de esa institución adscrita al Ministerio de Hacienda y Tesoro, disposición que no prevé como facultad de dicho funcionario celebrar contratos administrativos.

Es oportuno recordar que las disposiciones legales sobre contratación pública son de orden público por lo que no están sujetas al criterio discrecional o voluntario de los agentes públicos; en otras palabras, éstos no pueden decidir a su libre albedrío si las cumplen o dejan de cumplir. Esto además de ser una clara emanación del principio de legalidad que fluye de nuestra Constitución Política (artículos 17 y 18), tiene amplio fundamento en las normas de transparencia, moralidad, eficiencia y mejor beneficio para la sociedad

contenidas en los principios que orientan la contratación con las entidades estatales.

Para la fecha de ocurrencia de los hechos regían las disposiciones del Código Fiscal, Capítulo IV, Título I, Libro I, sobre contratación con el Estado, debidamente reglamentadas por el Decreto Ejecutivo No. 33, de 3 de mayo de 1985. Vale copiar los considerandos segundo y tercero de este Decreto Reglamentario:

> "Que la Licitación Pública, el Concurso de Precios y la Solicitud de Precios constituyen procedimientos administrativos, previos a la celebración de contratos con el Estado, los cuales permiten un relativo control sobre la selección del Contratista más idóneo y del aspecto económico de la operación.
>
> Que el cumplimiento de las reglas que rigen los procedimientos antes señalados garantizan la eficiencia y moralidad administrativa, pues permiten a la administración y adjudicar la propuesta que le ofrezca mayores ventajas para contratar y la mayor justicia para los participantes". (Subraya la Sala).

En el presente asunto no ha sido probado que se haya seguido el procedimiento administrativo previo a la celebración de un contrato por servicios profesionales con el Estado, o, en todo caso, una contratación directa como medio excepcional, según está concebida por el artículo 42 del Decreto Ejecutivo 33 de 1985, lo que nos hace concluir que no se han cumplido los requisitos procedimentales requeridos por las normas jurídicas vigentes en aquella época para estos casos. Contrario a lo que afirma el demandante, no existe contrato administrativo.

No cabe la afirmación del abogado de la parte actora que al considerar la existencia de una relación administrativa entre el Estado y el licenciado Alvaro Muñoz Fuentes, afirma que esa relación tiene como finalidad el interés público. A juicio de la Sala, y con ello reiteramos lo antes expuesto, no existió contrato administrativo según las formalidades de la Ley, entre Alvaro Muñoz Fuentes y la Administración, de ahí que, obviamente, tampoco pudo existir incumplimiento del mismo, de lo que resulta que ésta no está obligada a reparar daños y perjuicios. Es así como la Sala desestima la afirmación del demandante al exponer el cargo de la supuesta infracción cometida contra el artículo 986 del Código Civil (foja 9).

En punto a la excepción de prescripción invocada en el Informe Explicativo de Conducta, rendido por el señor Ministro de Hacienda y Tesoro, la Sala considera que cabe declararla probada, ya que ha transcurrido en exceso el término previsto legalmente para que los abogados puedan exigir judicialmente el pago de honorarios por servicios prestados, ya que desde el 21 de enero de 1992, fecha en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la prestación de sus servicios por parte del licenciado Alvaro Muñoz fuentes, en favor del señor Hilario Villarreal, a solicitud del exdirector de la Dirección General de Aduanas, al día de la presentación de la demanda ocurrida el 1o. de julio de 1994, transcurrieron aproximadamente dos años y cinco meses. (Cfr. fojas 4 y 31 del expediente civil, hecho séptimo tanto de la demanda inicial como la corregida en la esfera de lo civil).

Al respecto, el artículo 1705, numeral 1, dispone lo siguiente:

> "Artículo 1705: Por el transcurso de dos años prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
>
> 1. La de pagar a los abogados ... sus honorarios y derechos, y gastos de desembolsos que hubieren realizado en el despacho de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obligaciones se refieran;
> ...
> ..."

En mérito de lo expuesto, la Sala concluye que no han sido infringidos los artículos 976 y 986 del Código Civil, y lo que procede es declarar prescrita la acción.

De consiguiente, la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara prescrita la acción para el cobro de honorarios profesionales promovida por el licenciado Alvaro Muñoz Fuentes, a través de apoderado judicial, consistente en que el Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Tesoro (hoy Ministerio de Economía y Finanzas), le cancele la suma líquida de B/.5,000.00, en concepto de honorarios profesionales, prestados al señor Hilario Villarreal a solicitud del exdirector de la Dirección General de Aduanas, licenciado Rodrigo Arosemena De Roux.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE GERALDA DE RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL RESUELTO N° R. D. 001-2000 DE 5 DE ENERO DE 2000, DICTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Ayala ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de GERALDA DE RODRÍGUEZ, para que se declare nulo por ilegal, el acto administrativo contenido en el Resuelto N° R. D. 001-2000 de 5 de enero de 2000, dictado por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria, y para que se hagan otras declaraciones.

Acompaña a la demanda, una solicitud especial mediante la cual se requiere que previo el trámite de admisión de la misma, el Magistrado Sustanciador solicite a la entidad demandada, copia autenticada del acto impugando y de los actos confirmatorios, ambos con constancia de su notificación.

A foja 4 del libelo, se aprecia la solicitud de certificación con fecha de 17 de marzo de 2000, dirigida al Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria.

Considera quien sustancia que el actor cumplió con la exigencia consagrada en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, el cual dispone taxativamente lo siguiente:

> "Artículo 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda."

Como la petición del demandante se ajusta a lo establecido en el artículo

supra citado, y que los documentos detallados prueban que el demandante realizó las gestiones pertinentes a obtener los documentos solicitados, lo procedente es acceder a lo pedido.

En consecuencia, el suscrito Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE que, por Secretaría, se solicite al Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria, remita copia autenticada del acto administrativo contenido en el Resuelto N° R. D. 001-2000 del 5 de enero de 2000 y de los actos confirmatorios, para certificar el silencio administrativo, ambos con constancia de su notificación.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CÉSAR RUILOBA, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN ALFONSO LÓPEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 77-99 DE 6 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL COMANDANTE PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de la Sala Tercera de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el Licenciado César Ruiloba en representación de JUAN ALFONSO LÓPEZ, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 77-99 de 6 de octubre de 1999, dictada por el Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá y para que se hagan otras declaraciones.

La demanda incoada no fue admitida por la Magistrada Sustanciadora, mediante Auto de 9 de marzo de 2000, basándose en los siguientes argumentos:

> "... El referido documento omite las siguientes exigencias legales: no expone el concepto en que supuestamente fueron infringidas por el acto acusado, las disposiciones legales y reglamentarias invocadas; y el acto que confirma la Orden General N° 77-99 de 6 de octubre de 1999, o sea, la Orden General N° 84 de 15 de noviembre de 1999 (fojas 3-4), carece de constancia de que ha sido notificado al interesado."

De acuerdo a lo anterior, considera este Tribunal ad-quem que efectivamente la parte demandante no aportó la Orden General N° 84 de 15 de noviembre de 1999, la cual resuelve el recurso de reconsideración, con constancia de su notificación, visible a fojas 3 y 4 del expediente.

Es importante aclararle al actor que este dato es necesario, a efectos de que esta Superioridad pueda determinar si la demanda bajo estudio fue presentada oportunamente o si por el contrario, el recurrente dejó de precluir el término de formalización de la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, que es de dos (2) meses contados a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto recurrido. Este requisito sine qua non está recogido en el artículo 44 y 42b de la Ley 135 de 1943, los cuales son del tenor siguiente:

"Artículo 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del

> acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos." (El resaltado es nuestro)
>
> "Artículo 42b. La acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos subjetivos prescribe, salvo disposición legal en contrario, al cabo de dos meses, a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho o la operación administrativa que causa la demanda."

Por otro lado, el demandante no precisó el concepto de la violación de la norma alegada como infringida, tal como lo consagra el artículo 26 de la Ley 135 de 1943, el cual expresa taxativamente lo siguiente:

> "Artículo 26. Los motivos de ilegalidad comprenden tanto la infracción literal de los preceptos legales como la falta de competencia o de jurisdicción del funcionario o de la entidad que haya dictado el acto administrativo, o el quebrantamiento de las formalidades que deben cumplirse y la desviación de poder."

En virtud de lo anterior, se advierte que en el libelo de demanda el actor omitió indicar el concepto de la violación alegada así como los motivos de ilegalidad del acto administrativo. La demanda de plena jurisdicción no expone con la claridad y detalle que la ley exige los cargos concretos de ilegalidad a fin de que la Sala pueda analizar el fondo de los mismos.

Frente a lo señalado, este Tribunal de Segunda Instancia estima que no debió admitirse la presente demanda, y así debe declararse en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

En mérito de lo expuesto, el resto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN el Auto de 9 de marzo de 2000, que decidió NO ADMITIR la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por el Licenciado César Ruiloba, en representación de JUAN ALFONSO LÓPEZ, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 77-99 de 6 de octubre de 1999, dictada por el Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JORGE FÁBREGA P.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO JOVANÉ DEL CID, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN S/N DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL MINISTRO DE ASUNTOS DEL CANAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado JULIO JOVANÉ DEL CID, actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la Resolución S/N de 2 de septiembre de 1999, dictada por el Ministro de Asuntos del Canal, la negativa tácita por silencio

administrativo, y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante escrito fechado el 23 de marzo de 2000, visible a foja 14 del expediente, la parte actora presentó desistimiento de la acción contencioso administrativa interpuesta contra el mencionado acto administrativo, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por el recurrente es procedente y debe acogerse, conforme a lo consagrado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, el cual es del tenor siguiente:

> "Artículo 66. En cualquier estado del juicio es admisible por declaración expresa, el desistimiento del recurso contencioso-administrativo."

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el Licenciado JULIO JOVANÉ DEL CID, en su propio nombre y representación, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA EDILIA CEDEÑO DE MONTÚFAR, EN REPRESENTACIÓN DE MIRKA MORÁN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN N° 262-99 (D) DE 8 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ASÍ COMO SU ACTO CONFIRMATORIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Edilia Cedeño de Montúfar en representación de MIRKA MORÁN, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 262-99 (D) de 8 de octubre de 1999, expedida por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, así como su acto confirmatorio.

Esta demanda fue corregida por la parte actora y presentada en la Secretaria de la Sala el 10 de abril del presente año, es decir, antes de notificársele el Auto fechado 31 de marzo de 2000 mediante el cual no se le admitió la demanda por no constar en autos el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo.

En la demanda corregida, la demandante solicita a la Magistrada Sustanciadora que, antes de admitirla, solicite a la Junta Directiva del Banco Hipotecario Nacional, que certifique si ha sido resuelto o no el recurso de apelación en subsidio sustentado el 17 de diciembre de 1999, contra el acto impugnado, para probar el agotamiento de la vía gubernativa (Cfr. f. 22).

El demandante prueba que solicitó la mencionada certificación, mediante los escritos de fojas 3 y 17 en los que se aprecia el sello de recibido de la Gerencia del Banco Hipotecario Nacional.

Ante esta realidad procesal, quien suscribe procede a atender la solicitud

previa, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que dispone que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo pida el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, cuando no ha sido publicado o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre su publicación, y el petente prueba que gestionó la obtención de dicha certificación.

Con fundamento en las disposiciones citadas y como la demandante comprobó que solicitó a la autoridad demandada la certificación pertinente, cuya expedición le fue negada, es procedente acceder a lo pedido.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, representada en la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA por Secretaría se solicite al Despacho de la Junta Directiva del Banco Hipotecario Nacional, que en el término de cinco días expida y envíe: 1 Certificación de si ha sido o no resuelto el recurso de apelación sustentado contra la Resolución N° 262-99 (D) el 17 de diciembre de 1999, y en caso afirmativo, copia de la resolución dictada y la constancia de su notificación.

Notifíquese.

MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROLANDO PALACIOS EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 29-97 "D" DE 14 DE FEBRERO DE 1997, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS :

El licenciado ROLANDO PALACIOS actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto, ante este Tribunal, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulos, por ilegales, la Resolución N° 29-97 "D" de 14 de febrero de 1997, dictada por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, el acto confirmatorio; y para que se haga otras declaraciones.

Admitida la demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración, quien se opuso a las pretensiones de la parte actora mediante su Vista Fiscal N° 388 de 3 de septiembre de 1997. Además, se requirió al funcionario demandado que rindiera un informe de conducta, y así lo hizo a través de nota s/n que fue recibida en la Secretaría de la Sala el 25 de julio de 1997.

I. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO

Por medio de la Resolución N° 29-97 de 14 de febrero de 1997, el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional resolvió destituir al señor ROLANDO PALACIOS del cargo de Jefe del Departamento Legal de esa institución, por tener una alta morosidad en la solución de los problemas legales, conducta violatoria incurrido en la violación del numeral 6 del artículo 69 del Reglamento Interno del Banco Hipotecario Nacional.

II. DISPOSICIONES VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCION

La parte actora considera que se han infringido los acápites h) y ñ) del artículo 13 de la Ley 39 de 8 de noviembre de 1984, por la cual se reorganiza el Banco Hipotecario Nacional.

Dichos artículos establecen lo siguiente:

"ARTICULO 13. Serán deberes y atribuciones del Gerente General:

a)...
b)
...
h) Ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones y acuerdos de la Junta Directiva;
...
ñ) Las demás atribuciones y deberes que señale esta Ley y los reglamentos del Banco."

Al explicar el concepto de la infracción indicó que el acto acusado ha violado dichas disposiciones en forma directa por comisión, porque el Gerente General del Banco Hipotecario, al destituirlo, no ejecutó adecuadamente las resoluciones y acuerdos de la Junta Directiva y los reglamentos del Banco Hipotecario Nacional, que regulan lo concerniente al pago de indemnizaciones a aquellas personas que son despedidas como parte del plan de reducción de personal.

También considera que se ha infringido el artículo 70 del Reglamento Interno del Banco Hipotecario del Nacional el cual señala que:

"ARTICULO 70. PROCEDIMIENTO DE DESTITUCION

Siempre que ocurran hechos que puedan producir la destitución directa del servidor público, se le formularán cargos por escrito. La Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos realizará una investigación sumaria que no durará más de cinco (5) días hábiles, y en la cual se le dará al servidor público la oportunidad de defensa y se le permitirá estar acompañado por un asesor de su libre elección.

Concluida la investigación la Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos y el superior jerárquico presentarán un informe a la Gerencia General en que expresarán su recomendación.

Para fallar, la Gerencia General dispondrá de un término de hasta diez (10) días a partir de la presentación de los cargos. Si estimare probada la causal y la responsabilidad del servidor público, de acuerdo a los informes a ellos presentados, y a su mejor saber y entender, ordenará la destitución del mismo o alguna otra sanción disciplinaria que estime conveniente.

La decisión será notificada personalmente mediante resolución motivada por las causales que producen la destitución.

El servidor público contará con un término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la destitución, para hacer uso del recurso de reconsideración ante el Gerente General y el de apelación ante la Junta Directiva de la Institución.

La Gerencia General de la Institución dispondrá de un término no mayor de diez (10) días hábiles luego de presentado el recurso de reconsideración por parte del afectado para emitir el fallo.

La Junta Directiva de la Institución dispondrá de un término no mayor de treinta (30) días hábiles luego de presentado el recurso de

apelación por parte del afectado para emitir el fallo definitivo."

Al explicar el concepto de la infracción, el licenciado PALACIOS señaló que la resolución impugnada "fue dictada por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional quebrantando las formalidades legales e incumpliendo el procedimiento especial establecido en el Artículo 70 del Reglamento Interno del Banco HIpotecario Nacional, previas a la expedición y notificación del mismo, incumpliéndose el debido proceso dispuesto en esa norma."

Finalmente, considera que se ha violado el artículo 847 del Código Administrativo. Dicho artículo establece lo siguiente:

> "ARTICULO 847. Los empleados públicos deberán sujetarse estrictamente a los reglamentos que dicte la autoridad competente para el buen servicio interior de las respectivas oficinas."

Considera el abogado de la parte actora que dicha norma fue violada directamente por comisión, porque el Gerente del Banco Hipotecario no se sujetó a los reglamentos de la institución, desconociendo con ello derechos del funcionario destituido.

II. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

El funcionario demandado rindió su informe de conducta mediante nota s/n recibida en la Secretaría de la Sala el 25 de julio de 1997. En este informe expresó lo siguiente:

> "ANTECEDENTES:
> El Banco Hipotecario Nacional, adquirió los servicios del señor ROLANDO PALACIOS y a la fecha de su destitución a través de la resolución recurrida, se desempeñaba como jefe del Departamento de Asesoría Legal del Banco Hipotecario Nacional.
>
> Desde julio de 1996, el Gobierno Nacional designó al gerente General del Banco Hipotecario Nacional la reestructuración de las funciones, principalmente del área de cobro y recuperación de cartera.
>
> Dado el cúmulo de expedientes por atender y resolver en el Departamento de Asesoría Legal del Banco Hipotecario Nacional, y en planteamiento previo de la problemática que se presentaba en dicho departamento se conversó personalmente como el licenciado PALACIOS.
>
> La situación se mantenía igual en el Departamento Legal incluso después de haber conversado con el licenciado PALACIOS, razón por la cual se ordenó un inventario al Departamento Legal, de todos los expedientes que se encontraron en dicho departamento, y que el mismo fuera ejecutado por la Auditoría Operativa.
>
> Como resultado de dicho inventario, La Gerencia General obtuvo información verbal, y en base a esa información (que refleja la existencia de ochocientos expedientes en el Departamento Legal, en diferentes etapas procesales y acumulados con mora, la mayoría de ellos) se procedió.
>
> Habiendo tantos expedientes en el Departamento Legal, (800) no nos explicamos, porque el Licenciado PALACIOS, solo tenía 2 expedientes en su escritorio, y como jefe del Departamento Legal era el responsable de esa mora.
>
> Se podrá observar igualmente que la destitución tiene fecha de 14 de febrero del año en curso y el informe de Auditoría Operativa, se inició el 17 de febrero; es decir posterior a la destitución, pero ya el Gerente General de la Institución, conocía de la situación que

> presentaba el Departamento Legal y no quiso dilatar más el asunto, porque desde hacía varios meses anteriores, ya se había detectado el problema, como podrá observarse en los diversos informes de Auditoría de una comisión que se creo para tal fin.
>
> Una vez ... que el Gerente toma la decisión de destituir al licenciado PALACIOS, lo hace fundamentado en razones válidas, aunque si reconocemos, que debió darse mucho antes, y más, si se tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el Departamento Legal.
>
> Esta mora ha causado y está causando repercusiones negativas a nivel operativo del Banco, ya que existe disconformidad por parte de nuestros clientes, que dicho sea de paso son personas de bajos recursos ..."(Cfr. fs.75-77)

III. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La señora Procuradora de la Administración expresó su opinión respecto a la presente causa a través de su vista fiscal N° 388 de 3 de septiembre de 1997, visible de foja 78 a foja 89.

Al referirse a la supuesta violación de los literales h) y ñ) del artículo 13 de la Ley N° 39 de 1984 manifestó que considera que no le asiste la razón al demandante y que la decisión adoptada por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional al destituirlo fue la correcta, ya que no existe excusa que justifique la negligencia con la que éste actuó en el desempeño de sus labores como Jefe del Departamento Legal de dicha institución.

Tampoco considera la señora Procuradora de la Administración que se haya infringido el artículo 70 del Reglamento Interno del Banco Hipotecario Nacional. En este sentido manifestó no compartir el criterio esgrimido por el demandante al sostener que en su caso se ha violentado el debido proceso.

En cuanto al criterio expresado por la parte actora al explicar el concepto de la infracción del artículo 847 del Código Administrativo, señaló:

> "La parte demandante, ha manifestado que tiene derecho a una indemnización, porque el Reglamento Interno así lo establece, no puede obviarse el hecho, de que para que ello se de, el mismo debe estar integrado a un sistema de Carrera Administrativa, no debe haberse aprobado una ley que privatice la Institución, la cual al momento de la destitución no existía.
>
> Tal como lo señaláramos en párrafos anteriores, la autoridad nominadora tiene la facultad discrecional de nombrar, suspender y destituir, ya que no existe una estabilidad, ni una Carrera Administrativa, en la cual el funcionario haya ascendido o permanezca estable en su cargo, por haber participado en un concurso de mérito."

IV. DECISION DE LA SALA

Al resolver la presente controversia esta Corporación de Justicia observa que el señor ROLANDO PALACIOS ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra la Resolución N° 29-97 de 14 de febrero de 1997, dictada por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, mediante la cual se resolvió destituirlo del cargo de Jefe del Departamento Legal de dicha entidad.

A juicio de la Sala, los funcionarios que laboran en el Banco Hipotecario Nacional son de libre nombramiento y remoción. Estos funcionarios no gozan de estabilidad porque no existe una ley especial que se las dé y en la fecha en que se dictó el acto impugnado el Banco Hipotecario Nacional no había sido

incorporado al sistema de carrera administrativa como lo ordena el artículo 198 de la Ley 9 de 1994. Tal como lo ha expresado la Sala en múltiples fallos, ninguna norma de inferior jerarquía a la Ley, por ejemplo un Reglamento, puede otorgar estabilidad a un funcionario público, de conformidad con los artículos 297 y 300 de la Constitución Nacional que reserva a la ley, el desarrollo de la carrera administrativa para garantizar a los servidores públicos un sistema de nombramiento, ascenso, suspensión, traslado, destitución, cesantía y jubilación. Por tanto, el Reglamento Interno del Banco Hipotecario Nacional que regula las causales y el procedimiento de destitución en esa institución es contrario a la Constitución y no debe aplicarse en este caso, de conformidad con el artículo 15 del Código Civil, el cual preceptúa que las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno, expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria no tienen fuerza obligatoria y no deben aplicarse cuando sean contrarias a la Constitución o a las leyes.

En el presente caso, el señor ROLANDO PALACIOS, quien inició labores en el Banco Hipotecario Nacional el 17 de marzo de 1983, fue destituido del cargo de Jefe del Departamento Legal como consecuencia del proceso de reestructuración que se estaba llevando a cabo en dicha institución.

Además, en la resolución mediante la cual se le destituye se indica que el mismo mantenía una alta morosidad en la solución de los problemas legales, con lo cual había incurrido en la violación del numeral 6 artículo 69 del Reglamento Interno del Banco Hipotecario.

Dicha destitución fue ordenada con fundamento en las facultades que la propia ley otorga al Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, lo cual equivale en otros términos, a una declaratoria de insubsistencia del nombramiento.

Al respecto, ya la Sala ha dicho que la declaratoria de insubsistencia de los nombramientos, es una facultad discrecional de la autoridad nominadora o de quien en su momento tenga la atribución legal para decretarla, que no tiene que ser necesariamente motivada, sólo basta que se considere su conveniencia y oportunidad.

Como el demandante no era funcionario de carrera administrativa, la declaratoria de insubsistencia, denominada en la Resolución impugnada "destitución" era una facultad discrecional de la autoridad nominadora, el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional.

Es conveniente resaltar que al impugnar la Resolución de Gerencia que lo separó del cargo, ROLANDO PALACIOS ejerció su derecho de defensa y presentó sus descargos por medio de los recursos de reconsideración y apelación.

En cuanto a la indemnización económica a la cual el demandante estima que tiene derecho, esta Superioridad considera necesario aclararle que la misma es improcedente, ya que es inaplicable cualquier reglamento o acuerdo en el que pretenda reglamentarse cualquier asunto relativo a Servidores Públicos relacionado con nombramientos, destituciones, declaraciones de insubsistencia, compensaciones económicas o indemnizaciones.

Esta Alta Corporación de Justicia ha manifestado reiteradamente, que prerrogativas tales como el derecho a la compensación económica por destitución y el derecho a salarios caídos, "están reservados a la condición objetiva o Ley en sentido formal." (Ver fallo de 10 de septiembre de 1999, bajo la ponencia del Magistrado Edgardo Molino Mola en el caso de Edgar José Candanedo contra el Banco Hipotecario Nacional).

Por lo expuesto, la Sala debe desestimar los cargos de violación de los literales h) y ñ) del artículo 13 de la Ley Orgánica del Banco Hipotecario Nacional, del artículo 70 del Reglamento Interno de esa institución y del artículo 847 del Código Administrativo.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución de Gerencia N° 29-97 "D" de 14 de febrero de 1997, dictado por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional de Panamá y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE DONADO RAMOS EN REPRESENTACIÓN DE DEYANIRA CHANIS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 65-00 DE 14 DE ENERO DE 2000, DICTADO POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Jorge Donado Ramos en representación de DEYANIRA CHANIS, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N° 65-00 de 14 de enero de 2000, dictado por el Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario, y para que se hagan otras declaraciones.

Al examinar la presente demanda para determinar si cumple con los requisitos para ser admitida se observa que adolece de varios defectos.

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, con toda demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción debe presentarse copia autenticada del acto acusado con "constancia de su notificación". Sin embargo, en el presente caso, la parte actora sólo presentó copia autenticada del acto impugnado y en el mismo, no consta que haya sido notificado (fs. 1).

Cabe señalar a la demandante, que la constancia de la notificación del acto impugnado es necesaria para que la Sala compruebe si la acción intentada está o no prescrita, toda vez que en el caso en estudio, la demanda contencioso-administrativa se interpuso el día 31 de marzo de 2000, es decir, más de dos meses después de la expedición del acto impugnado.

La parte actora tampoco expresa las normas que estima violadas ni expone el concepto de la infracción, según exige el numeral 4° del artículo 43 de la citada Ley.

Y por último, la actora dirigió su demanda en forma genérica a los "Magistrados de la Sala Tercera" y no a la Magistrada Presidenta de la misma, según establece el artículo 102 del Código Judicial.

Por los anteriores motivos y, con fundamento en el artículo 50 de la Ley N° 135 de 1943, la Magistrada Sustanciadora estima que a la presente demanda no debe dársele curso.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Jorge Donado

Ramos, en representación de DEYANIRA CHANIS, contra la Resolución N° 65-00 dictado por el Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE DONADO RAMOS EN REPRESENTACIÓN DE EMERITA MORENO DE DE LEÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 01-00 DE 3 DE ENERO DE 2000, DICTADO POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Jorge Donado Ramos en representación de EMERITA MORENO DE DE LEÓN, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N° 01-00 de 3 de enero de 2000, dictado por el Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario, y para que se hagan otras declaraciones.

Al examinar la presente demanda para determinar si cumple con los requisitos para ser admitida se observa que adolece de varios defectos.

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, con toda demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción debe presentarse copia autenticada del acto acusado con "constancia de su notificación". Sin embargo, en el presente caso, la parte actora sólo presentó copia autenticada del acto impugnado y en el mismo, no consta que haya sido notificado (fs. 1).

Cabe señalar a la demandante, que la constancia de la notificación del acto impugnado es necesaria para que la Sala compruebe si la acción intentada está o no prescrita, toda vez que en el caso en estudio, la demanda contencioso-administrativa se interpuso el día 31 de marzo de 2000, es decir, más de dos meses después de la expedición del acto impugnado.

La parte actora tampoco expresa las normas que estima violadas ni expone el concepto de la infracción, según exige el numeral 4° del artículo 43 de la citada Ley.

Y por último, la actora dirigió su demanda en forma genérica a los "Magistrados de la Sala Tercera" y no a la Magistrada Presidenta de la misma, según establece el artículo 102 del Código Judicial.

Por los anteriores motivos y, con fundamento en el artículo 50 de la Ley N° 135 de 1943, la Magistrada Sustanciadora estima que a la presente demanda no debe dársele curso.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Jorge Donado Ramos, en representación de EMERITA MORENO DE DE LEÓN, contra la Resolución N° 01-00 de 3 de enero de 2000 dictado por el Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ GUTIÉRREZ EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS ALVAREZ FRANCO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO N° 149 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1999, EXPEDIDO POR LA SUBJEFA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José Gutiérrez, en representación de CARLOS ALVAREZ FRANCO, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulos, por ilegales, el Decreto N° 149 de 22 de noviembre de 1999 dictado por conducto del Ministro de Economía y Finanzas, así como el Memorandum 406-02-4006 de 25 de noviembre de 1999, expedido por la Subjefa de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas; y para que se haga otras declaraciones.

Al examinar la presente demanda para determinar si cumple con los requisitos para ser admitida se observa que adolece de varios defectos.

En primer lugar, observa esta Superioridad que la parte actora dirige su demanda contra el Decreto N° 149 de 22 noviembre de 1999 dictado por conducto del Ministro de Economía y Finanzas, y contra el Memorandum 406-02-4006 de 25 de noviembre de 1999, expedido por la Subjefa de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas.

No obstante, si bien es cierto que ambos actos se encuentran íntimamente relacionados, es importante destacar que el acto que causa estado, es el contenido en el Decreto N° 149 de 22 de noviembre de 1999, ya que se trata de un acto definitivo que pone término a una actuación administrativa.

Siendo esto así el demandante debió acompañar a su demanda copia auténtica de dicho acto con constancia de su notificación, sin embargo, no lo hizo incumpliendo de esta forma con el requisito establecido en el artículo 44 de la ley 135 de 1943, el cual señala que:

> "Artículo 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos."

En segundo lugar, el demandante no transcribió las disposiciones que estima violadas ni expresó el concepto de la infracción. Al respecto, esta Sala ya ha manifestado lo siguiente:

> "La expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación de las mismas, constituyen requisito esencial para la admisión de las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción, tal como lo establece el numeral 4, del artículo 43 de la Ley 135 de 1943 y lo ha indicado la Sala de lo Contencioso-Administrativo en reiterados pronunciamientos.
>
> La Sala ha expresado, que para cumplir con los requisitos

anteriores, deben transcribirse las disposiciones legales que se estiman violadas, para que de la confrontación con el acto administrativo impugnado, con la norma que se considera violada, se pueda apreciar la violación aducida. Además, debe explicarse el concepto en que se considera que la norma ha sido violada por el acto impugnado y señalar por cuál de los motivos de ilegalidad que establece el artículo 26 de la Ley 135 de 1943, considera el demandante que se ha consumado la violación." (Registro Judicial de febrero de 1997, pág. 258).

Por otra lado, se aprecia que el actor en su demanda no designa a las partes y a sus representantes tal como lo exige el numeral 2 del articulo 43 de la ley 135 de 1943.

En este sentido vale destacar que el demandante debió designar a la señora Procuradora de la Administración como representante de la parte demandada, puesto que ella actúa como tal en los procesos contencioso administrativos de plena jurisdicción, de conformidad con el ordinal 2° del artículo 348 del Código Judicial.

Finalmente, observa esta alta Corporación de Justicia que el demandante incumplió con lo preceptuado en el artículo 102 del Código Judicial, porque no dirigió la demanda a la Magistrada Presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Por las razones expuestas, no debe dársele curso a la presente demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado José Gutiérrez, en representación CARLOS ALVAREZ FRANCO, para que se declare nulos, por ilegales, el Decreto N° 149 de 22 de noviembre de 1999, dictado por conducto del Ministro de Economía y Finanzas, así como el Memorandum 406-02-4006 de 25 de noviembre de 1999, expedido por la Subjefa de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas; y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA MONCADA & MONCADA, EN REPRESENTACIÓN DE JACOBO WRIGTH, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 37-99 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, VEINTISEIS (26) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Moncada y Moncada, actuando en nombre y representación de JACOBO WRITGH, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 37-99 de 24 de noviembre de 1999, expedida por el Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá, y para que se hagan otras

declaraciones.

Al resolver sobre la admisibilidad de la demanda, el Magistrado Sustanciador considera que la misma no debe admitirse, toda vez que la parte actora dirige equivocadamente su acción contra la Resolución N° 37-99 de 24 de noviembre de 1999, expedida por el Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá, pues, la misma confirma la Resolución N° CJ-07-99 de 19 de agosto de 1999, mediante la cual se destituye a Jacobo Wright de su cargo en la Librería Universitaria. Al respecto, el artículo 29 de la Ley 33 de 1946 dispone que no solamente no es necesario dirigir la demanda contra los actos confirmatorios, sino que es un requisito sine qua non para la admisibilidad de la demanda dirigirla contra el acto administrativo original, que a juicio de la parte actora, es ilegal.

Por otro lado, quien suscribe observa que la demanda no cumple con el requisito previsto en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que requiere que en aquélla se exprese el concepto de la violación. En este caso el demandante no expresa las modalidades en que se ha producido la infracción literal de los preceptos legales la cual puede darse por violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación, según se ha señalado en jurisprudencia constante de esta Sala.

Como la actora omitió los requisitos mencionados, su demanda no debe admitirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del mismo cuerpo legal.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Moncada y Moncada, actuando en nombre y representación de JACOBO WRITGH, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 37-99 de 24 de noviembre de 1999, expedida por el Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese,

(fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA VIOLA MENDIETA DE DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE AILEEN BAYLESS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 286-99 (D) DE 15 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Licenciada Viola Mendieta de De León, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de AILEEN BAYLESS, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 286-99 (D) de 15 de octubre de 1999, dictada por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Acompaña a la demanda, una solicitud especial mediante la cual se requiere que previo el trámite de admisión de la misma, el Magistrado Sustanciador solicite a la entidad demandada que certifique, si ha recaído alguna decisión

sobre el recurso de apelación presentado, a efecto de acreditar el silencio administrativo, como medio de agotamiento de la vía gubernativa, y comprobar si la demanda ha sido interpuesta en tiempo oportuno.

A foja 10 del expediente, se aprecia la solicitud de certificación con fecha de 20 de febrero de 2000, dirigida a los Miembros de la Junta Directiva del Banco Hipotecario Nacional.

Considera quien sustancia que el actor cumplió con la exigencia consagrada en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que taxativamente señala lo siguiente:

> "Artículo 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expe-dición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda."

Como la solicitud del demandante se ajusta a lo contemplado en el artículo supra citado, y que los documentos detallados confirman que el actor llevó a cabo las gestiones pertinentes a obtener los documentos solicitados, es dable acceder a lo pedido.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE que, por Secretaría, se solicite a la Junta Directiva del Banco Hipotecario Nacional que certifique si ha recaído decisión alguna sobre el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución N° 286-99 (D) de 15 de octubre de 1999, y la Resolución de Gerencia N° 377-99 de 16 de noviembre de 1999, a fin de acreditar el silencio administrativo.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ-RUÍZ & ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DRP NO. 348-98, DE 18 DE AGOSTO DE 1998, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Icaza, González-Ruíz & Alemán, actuando en nombre y representación BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra la Resolución DRP No. 348-98, de 18 de agosto de 1998, dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, invocando su ilegalidad.

Admitida la presente demanda, se corrió en traslado al Magistrado Sustanciador de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y a la señora Procuradora de la Administración.

LO QUE SE DEMANDA

El demandante solicita a la Sala que declare que es nula, por ilegal, la Resolución DRP N° 348-98 de 18 de agosto de de 1998, mediante la cual la Dirección de Responsabilidad Patrimonial ordenó al BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD. y a Manuel Antonio Noriega el reintegro al Tesoro Nacional de US $7,603,606.34, por lesión al patrimonio del Estado, por la sustracción indebida de fondos públicos procedentes de las cuentas del Banco Nacional de Panamá, identificadas como No. 04-69-0302-1 del Fondo de Operaciones de la Guardia Nacional de Panamá, No. 04-82-0092-3 y No. 04-82-0093-1 del Fondo Especial y del Fondo Rotativo IPAT-BID del Ministerio de la Presidencia, respectivamente, por el pago de los gastos de financiamiento ocasionado por las transferencias realizadas a las cuentas de Manuel Antonio Noriega y por el pago de préstamos otorgados por el Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd. a las Fuerzas de Defensa, cuyos montos no ingresaron a las cuentas de la institución, según consta en el Informe de Antecedentes No. 12-04-98/DNAG-DEAE.

HECHOS Y OMISIONES FUNDAMENTALES DE LA ACCIÓN

El demandante arguye que el procedimiento que precedió la emisión de la Resolución DRP No. 348-98, de 18 de agosto de 1998, pretermitió las normas contempladas en el Decreto de Gabinete No. 36 de 10 de febrero 1990, dejando al afectado sin oportunidad de contraprobar, de debatir las pruebas en su contra, alegar y presentar de descargos. En síntesis, la omisión del trámite establecido en este Decreto, por parte de la entidad demandada, le cercenó el derecho de legítima defensa.

Asegura la parte actora que al interponer el recurso de reconsideración, la entidad demandada, sin analizar los hechos expuestos ni rebartirlos, mantuvo en todas sus partes la decisión original.

DISPOSICIONES QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

El demandante considera que el acto impugnado vulnera el contenido de los artículos 8, 9, 10 y 11 del Decreto de Gabinete No. 36 de 10 de febrero de 1990, cuyos textos reproducimos a continuación:

Decreto de Gabinete No. 36 de 10 de febrero de 1990

"Artículo 8: Si los Magistrados de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial consideraren que hay razones fundadas para ello, dictarán Resolución motivada en donde dejarán constancia de las mismas y ordenarán el inicio del trámite para determinar y establecer esa responsabilidad. Esta resolución debe cumplir además con los requisitos exigidos para el Informe de antecedentes.

Artículo 9: Si se conociere el domicilio del sujeto llamado a responder patrimonialmente o su lugar de trabajo, se le notificará personalmente la Resolución mencionada en el artículo anterior. Si dicho sujeto se negare a recibir la notificación personal, no pudiere ser localizado en su domicilio, se ignorase la ubicación de éste o se sospechare o supiere que ha radicado su domicilio en el exterior, se publicará por cinco (5) días consecutivos en un diario de amplia circulación nacional, un edicto de notificación de la Resolución. En este edicto bastará indicar la existencia de la Resolución y la naturaleza de la misma; además se identificará al sujeto por su nombre y apellido con indicación de su cédula de identidad personal. También se advertirá al sujeto llamado a responder patrimonialmente que la Resolución se tendrá por notificada a partir del día siguiente de la última publicación del edicto.

Sin perjuicio de recurrir en cualquier momento a la notificación por edicto de que trata el inciso anterior, si el sujeto llamado a

responder patrimonialmente se encontrare en el exterior y su paradero fuere conocido, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial podrá intentar la notificación, si lo considera conveniente mediante el auxilio de la vía diplomática. Si se logra la notificación por esa vía, el sujeto llamado a responder patrimonialmente en el acto de notificación, sin otra formalidad que hacerlo constar por escrito, puede constituir como apoderado a cualquier persona. Si el apoderado constituido no fuere idóneo para ejercer la abogacía en la República de Panamá, o siéndolo no tuviese domicilio en la ciudad de Panamá, no podrá ejercer este poder por sí mismo, por lo que se entenderá necesariamente que está facultado para designar uno o varios apoderados de su propia escogencia. La notificación se entenderá hecha en el momento en que el exhorto respectivo, debidamente diligenciado, reingrese al despacho de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.

Si la notificación se hubiere hecho mediante el edicto de que trata el inciso primero de este artículo, luego de transcurridos diez (10) días hábiles, contados a partir de la última publicación del mismo, sin que el sujeto llamado a responder patrimonialmente se hubiere apersonado al procedimiento, o si habiéndosele notificado por la vía diplomática no hubiese constituido apoderado del modo como se expresa en el inciso anterior, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial le designará un defensor de ausente en cuyo caso los términos que se señalan en el artículo siguiente comenzarán a correr a partir de la fecha de diligencia de la toma de posesión del defensor de ausente respectivo, con cuya audiencia, salvo el caso de remoción o renuncia, se continuará el procedimiento hasta su conclusión.

La remuneración del defensor de ausente será cubierta por el Estado y tanto su monto como forma de pago serán fijados por el Contralor General de la República, lo que se deberá hacer antes de que se practique la diligencia de toma de posesión respectiva. En ningún caso se tomará en consideración la cuantía envuelta en el procedimiento de determinación de reponsabilidad patrimonial para la fijación del monto de la remuneración del defensor de ausente. En la diligencia de toma de posesión, el defensor de ausente dejará constancia de su conformidad con relación al monto y a la forma de pago de la retribución fijados por el Contralor. En el reglamento se señalaran (sic) la forma y causa de remoción de los defensores de ausente, así como las causas de renuncia.

Si en adición a las resoluciones que se mencionan en este Decreto de Gabinete, la Dirección necesitare dictar otras de diferente naturaleza, dichas resoluciones se notificarán mediante edicto que podrá ser fijado al día siguiente de dictada la respectiva resolución, en lugar visible de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial. El edicto permanecerá fijado por un término de dos (2) días hábiles y la notificación se entenderá hecha a partir del momento de su desfijación. Estas resoluciones serán suscritas únicamente por el Magistrado Sustanciador.

Artículo 10: Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notifiación de la Resolución a que se refiere el artículo 8 de este Decreto de Gabinete, el sujeto llamado a responder patrimonialmente podrá presentar por medio de apoderado debidamente constituido y en las oportunidades y por las veces que estime necesario, las pruebas documentales a bien tuviere (sic). Si no las tuviere en su poder, puede señalar el despacho público donde las mismas reposen, pero en el escrito en que haga esta indicación deberá dar la información indispensable pra la adecuada identificación de los documentos invocados. Dentro del mismo término puede presentar también por

medio de apoderado, todos los escritos explicativos y de descargo que estime convenientes. Luego del vencimiento de los dos (2) meses mencionados en este inciso, el sujeto llamado a responder patrimonialmente por medio de su apoderado puede dentro del mes siguiente y que comenzará a correr a partir del vencimiento de los dos (2) meses explicativos y de descargo que estime convenientes.

Si dentro de los dos (2) primeros meses señalados el sujeto llamado a responder patrimonialmente hubiere advertido la existencia de documentos que reposan en otros despachos públicos y de los mismos no se hubiese aportado copia auténtica, esta copia se podrá aportar al expediente dentro del mes siguiente de que trata el artículo anterior.

La expedición de copias auténticas no causará derecho alguno.

Aparte de la prueba documental, se aceptará además como prueba, el examen de documentos, con la asistencia de peritos, cuando el descargo del sujeto se funde en explicaciones de naturalez contable. Si esta prueba no hubiese sido practicada dentro de los dos (2) meses iniciales, se podrá practicar dentro del mes siguiente ya mencionado. Los informes de los peritos se entenderán hechos bajo la gravedad del juramento.

Sólo cuando se trate de hechos que por su naturaleza no deban constar en documentos, se admitirán todos los demás medios de pruebas contemplados en el Código Judicial. Estas otras pruebas deberán ser aducidas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación a la cual se refiere el artículo anterior.

Todas las actuaciones en este procedimiento se harán en papel simple.

Artículo 11: Luego de vencido el término de tres meses señalado en el artículo anterior, el asunto pasará a ser decidido por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial."

El demandante estima que se ha violado el artículo 8 del Decreto de Gabinete No. 36 de 10 de febrero de 1990, por falta de aplicación, porque la norma de manera imperativa ordena que se dicte una resolución motivada con la formulación de los cargos, que dan inicio al trámite para determinar la responsabilidad patrimonial, lo que no se hizo en este caso.

Considera también infringido el artículo 9 del mismo articulado, porque esta disposición ordena que la resolución motivada sea notificada personalmente al demandante, y se procedimiento tampoco se cumplió.

Como consecuencia de la transgresión de las normas anteriormente citadas, se violó el artículo 10 de este Decreto, ya que los encausados no tuvieron oportunidad de presentar pruebas a su favor ni los escritos de descargos a que alude esta norma.

Producto de las anteriores violaciones, se pretermitió la aplicación del artículo 11 del mismo Decreto, porque el asunto fue decidido por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial sin que hubieran vencido los tres meses que condiciona la norma.

INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

Al corrérsele traslado de la demanda, el Magistrado Sustanciador rindió el informe de conducta solicitado, mediante el Oficio No. 1452-DRP-98-C-50 de 25 de noviembre de 1998.

El funcionario demandado manifestó en el informe que su actuación tuvo su fundamento en el Informe de Antecedentes No. 12-04-987/DNAG-DEAE, "relacionado con los fondos provenientes del Estado Panameño (Fuerzas de Defensa y Ministerio de la Presidencia de la República de Panamá) despositados en cuentas bancarias en el Bank of Credit and Commerce International (BCCI), en Panamá y Londres", que refleja una lesión patrimonial en perjuicio del Estado por la cantidad de siete millones seiscientos tres mil seiscientos seis balboas con treinta y cuatro centésimos (B/.7,603,606.34).

Sobre el contenido del informe de antecedentes, el representante de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial en este caso, relata lo siguiente:

> "De acuerdo con el Informe de Antecedentes, las cuentas bancarias que Manuel Antonio Noriega mantenía en el Bank of Credit and Commerce International (BCCI), tanto en Panamá como en Londres, reflejaron un movimiento de diecisiete millones quinientos siete mil ciento sesenta y cuatro balboas con noventa y un centésimos (B/.17,507,164.91), de los cuales se probó, de manera fehaciente, que cinco millones quinientos setenta y nueve mil novecientos dos balboas con cincuenta y cuatro centésimos (B/.5,579,902.54) fueron a parar a las cuentas privadas del ex General Noriega. También se probó que con fondos del Estado se pagaron dos (2) préstamos por un monto total de cuatrocientos ochenta mil balboas (B/.480,000.00), otorgados a las Fuerzas de Defensa por el BCCI, los que no ingresaron al Fondo de Operaciones. El resto de la lesión comprobada, correspondió a los gastos de financiamiento ocasionados por las transferencias realizadas a las cuentas de Noriega, todo lo cual arrojó un total de siete millones seiscientos tres mil seiscientos seis balboas con treinta y cuatro centésimos (B/.7,603,606.34)."

El funcionario también asegura en su informe que el Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd., estuvo en todo momento consciente de la procedencia de los fondos depositados por Manuel Antonio Noriega y que a pesar de ello, abrió una cuenta para "fondos secretos" de una institución del Estado, que fuera manejada únicamente por instrucciones del General Manuel Antonio Noriega. Explicó además, que el Gerente General del Banco, Sr. Amjad Awan, recibió cheques de cuentas oficiales, expedidos a su nombre y los transfirió posteriormente a las cuentas privadas de Manuel Antonio Noriega, así mismo facilitó todas las operaciones involucradas en estas transacciones.

El Magistrado Sustanciador alega que los artículos citados por el demandante son aplicables una vez se inicia el proceso con la Resolución de Reparos y en el presente caso no se dictó la Resolución de Reparos, sino la Orden de Reintegro, por tanto, el procedimiento amparado en dichas disposiciones no es aplicable.

El funcionario demandado hace la observación que el demandante objeta sólo la parte formal del proceso y no el fondo del asunto.

VISTA FISCAL DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración solicitó a la Sala denegar las peticiones del demandante, por considerar que no le asiste la razón.

En este sentido, la funcionaria del Ministerio Público no comparte los argumentos esbozados por el demandante, en cuanto al cargo de violación endilgado al artículo 8 del Decreto de Gabinete No. 36 de 1990, ya que el artículo 43 de este Decreto permite a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial expedir la Orden de Reintegro, sin más trámite, si es evidente la lesión patrimonial y en este caso el agravio es palmario.

En torno al cargo de violación enderezado contra el artículo 9 del Decreto

que crea en la Contraloría General de la República, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, la representante del Ministerio Público manifestó que la Resolución DRP No. 348 de 18 de agosto de 1998, fue debidamente notificada el 20 de agosto de 1998, por lo que considera incongruente que se alegue la falta de notificación personal.

A su parecer, el actor confunde la resolución de inicio de trámite para determinar la responsabilidad patrimonial (resolución de reparos) con la resolución a que se refiere el artículo 43 del Decreto 36. Y recordó a la parte actora que la DRP podía obviar el trámite estatuido en el artículo 8, y emitir inmediatamente la orden de reintegro.

Como no le es aplicable a este proceso por responsabilidad patrimonial el artículo 8, consecuentemente carece de fundamento la invocada transgresión del artículo 10 del citado decreto, señaló la señora Procuradora de la Administración. Además, el demandante hizo uso oportunamente del recurso de reconsideración, en esa etapa procesal podía el encausado presentar pruebas de descargo, como lo ampara el artículo 44 del Decreto No. 65 de 1990, por el cual se reglamenta la determinación de responsabilidad, recalcó la funcionaria.

Sobre el cargo de infracción endilgado contra el artículo 11, la Procuradora de la Administración puntualizó lo siguiente:

> "...
> Además, somos del criterio que, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial cumplió con el plazo estipulado en el artículo 44 del Decreto No. 65 de 1990, cuando dio respuesta al Recurso de Reconsideración interpuesto por la parte actora; de suerte que, nos parece extraño que señala a ese Honorable Tribunal de Justicia que el caso pasó a ser decidido antes de que venciera el término de tres meses."

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Presentado el alegato de conclusión por la parte demandante, la Sala entra a conocer el fondo de la controversia.

En el caso que nos ocupa el demandante considera que la Resolución DRP No. 348-98 transgrede el contenido de los artículos 8, 9, 10 y 11 del Decreto de Gabinete No. 36 de 10 de febrero de 1990, que se refieren a la Resolución de Reparos que da inicio al procedimiento ante la Dirección de Responsabilidad Patrominial para determinar la responsabilidad y el trámite subsiguiente, en cuanto a la notificación, término probatorio y la aportación de pruebas. Por tanto, dado que las normas que se estiman infringidas están estrechamente vinculadas en cuanto a la materia que regulan, la Sala las evaluará en su conjunto, no sin antes hacer las siguientes consideraciones.

El acto impugnado es la Resolución No. 348-98, emitida por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República el 18 de agosto de 1998 (fs. 1762 a 1784 del Tomo 4 del Expediente C-50. Publicada en la Gaceta Oficial No. 23,636 de 23 de septiembre de 1998), en la investigación seguida a Manuel Antonio Noriega, Felicidad Siero de Noriega, Thays Noriega Sieiro, Lorena Noriega Sieiro y Sandra Noriega Sieiro, así como la sociedad anónima Lorsantha, S. A.

Este acto tiene su génesis en la Resolución No. 176-95 de 15 de junio de 1995, expedida por el Contralor General de la República, mediante la cual ordenó a la Dirección General de Auditoría la elaboración de un Informe sobre la apertura cualesquiera cuentas bancarias, ya fuera en la República de Panamá o en el extranjero, en las que figuren como titulares o con derecho a firma, las personas mencionadas en el párrafo anterior (ver fs. 1 a 3 del Tomo 1 del Expediente C-50).

La investigación dio como resultado, para el caso que nos concierne, la

vinculación de Manuel Antonio Noriega, ex General de las Fuerzas de Defensa, quien utilizó indebidamente fondos del Estado panameño para su enriquecimiento. Además, la averiguación arrojó que el Bank of Credit and Commerce International (Overseas), Ltd. Panamá (BCCI-Panamá), en adelante BCCI, participó directa y activamente en la comisión del hecho.

La utilización indebida de los fondos del Estado se hizo contra las cuentas No. 04-69-0302-1, correspondiente al Fondo de Operaciones de la Guardia Nacional de Panamá (Fuerzas de Defensa), No. 04-82-0092-3 del Fondo Especial y 04-82-0093-1, del Fondo Rotativo IPAT-BID del Ministerio de la Presidencia (ver Informe a fojas 1067 a 1108 del Tomo 3.

Grosso modo el modus operandi consistía en girar cheques al BCCI, Amjad Awan (Gerente del Banco) y la empresa ARJ y Asociados, S. A., a cargo del Proyecto 732-82, para la remodelación del Casco Viejo y para cancelar préstamos otorgados a las Fuerzas de Defensa, por Bank of Credit and Commerce International -Grand Cayman, cuyos montos fueron depositados en dicho banco y transferidos a cuentas personales de Manuel Antonio Noriega, en la sucursal del Banco en Londres.

Con fundamento en la investigación surtida, se decretó la cautelación y puesta fuera de comercio de los fondos depositados en el Banco Nacional de Panamá, a nombre del Bank of Credit and Commerce International (Overseas), Ltd. Panamá (BCCI-Panamá), Cuenta No. 231-04, depósitos a plazo de bancos locales, hasta la concurrencia de siete millones seiscientos tres mil seiscientos seis balboas con treinta y cuatro centésimos (B/.7,603,606.34). Ver Resolución No. 93-98 de 4 de marzo de 1998, de fojas 1472 a 1475, Tomo 4 del Secuestro, Expediente C-50.

De esta serie de operaciones bancarias se levantó el Informe de Antecedentes No. 12-04-98/DNAG-DEAE, contentivo del detalle pormenorizado de dichas transacciones, que cubrió el período comprendido entre el 19 de enero de 1982 y el 31 de diciembre de 1988 (ver de foja 1349 a 1756 del Tomo 4 del Expediente C-50).

Con vista en los resultados del Informe fue emitida el 18 de agosto de 1998, la Resolución No. 348-98, que ordena a Manuel Antonio Noriega y al BCCI el reintegro al Tesoro Nacional de la suma de siete millones seiscientos tres mil seiscientos seis balboas con treinta y cuatro centésimos (B/.7,603,606.34), por razón de lesión evidente ocasionada al patrimonio del Estado, por la sustracción indebida de fondos públicos procedentes de las cuentas del Banco Nacional de Panamá, identificadas como No. 04-69-0302-1, del Fondo de Operaciones de la Guardia Nacional de Panamá (Fuerzas de Defensa), No. 04-82-0092-3 y No. 04-82-0093-1 del Fondo Especial y del Fondo Rotativo IPAT-BID del Ministerio de la Presidencia, respectivamente; por el pago de los gastos de financiamiento ocasionado por las transferencias realizadas a las cuentas de Manuel Antonio Noriega y por el pago de préstamos otorgados por el BCCI a las Fuerzas de Defensa, cuyos montos no ingresaron a las cuentas de la institución, según consta en el Informe de Antecedentes No.12-04-98/DNAG-DEAE.

Se desprende claramente de los hechos expuestos en el libelo de la acción incoada y de los cargos de violación endilgados que el demandante confunde la resolución de reparos, cabeza del proceso de responsabilidad patrimonial, con la orden de reintegro.

La resolución de reparos es el acto motivado, que se emite cuando existen méritos suficientes o razones fundadas, que tienen su fundamento en el Informe de Antecedentes, sobre presuntas irregularidades en cuanto al manejo de fondos del Erario Público, para dar inicio al trámite a fin de esclarecer la responsabilidad del o los implicados. Y se encuentra consagrada en el artículo 8 del Decreto de Gabinete No. 36 de 10 de febrero de 1990, precisamente una de las normas que el demandante considera infringida.

Por el contrario, la Orden de Reintegro se expide cuando la lesión patrimonial en perjuicio al Estado es tan evidente, que no requiere dar inicio al trámite para determinar dicha responsabilidad, ya que se desprende claramente del Informe de Antecedentes, tanto el mal uso del dinero como su autoría, y encuentra sustento en el segundo párrafo del literal b) del artículo 4 y en el artículo 43 del Decreto No. 65 de marzo de 1990.

Las disposiciones legales cuya infracción cita el demandante no son aplicables a la resolución que se acusa de ilegal. Esto es así, toda vez que, como señalamos en los párrafos anteriores, la Orden de Reintegro tiene su fundamento en el segundo párrafo del literal b) del artículo 4 y en el artículo 43 del Decreto No. 65 de marzo de 1990, reglamentario del Decreto de Gabinete No. 36 de 10 de febrero de 1990.

Estos artículos, como ya explicamos, permiten que se emita la orden de reintegro, cuando fuere tan evidente el perjuicio causado al Estado, que no requiere de la emisión de la Resolución de Reparos que da inicio al procedimiento para determinar la responsabilidad patrimonial del o los involucrados, sino que se les exige la devolución de los fondos sustraídos indebidamente.

Cualquier omisión de la Orden de Reintegro debe ser evaluada a la luz de las artículos 4 y 43 del Decreto No. 65.

No siendo aplicables al acto impugnado, las disposiciones que el demandante cita como infringidas, corresponde a la Sala declararlo en el presente fallo.

En mérito a lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL LA RESOLUCIÓN DRP No. 348-98, DE 18 DE AGOSTO DE 1998, dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA VIRGINIA SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE RUBÉN REYNA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL DECRETO EJECUTIVO NO. 200, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADO POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DE LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Virginia Sánchez, en nombre y representación de RUBÉN REYNA, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo No. 200, de 30 de noviembre de 1999, dictado por la Presidenta de la República, por conducto de la Ministra de la Presidencia, y para que se hagan otras declaraciones.

Al examinar la presente demanda, el Despacho observa que el actor no ha aportado copia autenticada del acto impugnado, que es el Decreto Ejecutivo No. 200, de 30 de noviembre de 1999 (fs. 1), con sus correspondientes constancias de notificación.

Según el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, es requisito indispensable el que se acompañe copia autenticada del acto impugnado, en este caso el Decreto Ejecutivo No. 200, o en su defecto, se solicite al magistrado sustanciador que requiera de la oficina donde repose el original su autenticación, siempre que conste en el expediente que el actor gestionó infructuosamente la obtención del documento, de conformidad con el artículo 46 de la misma ley. En el presente caso se aprecia que no consta el cumplimiento de las precitadas exigencias.

Sobre el particular, ha sido constante la jurisprudencia de la Sala sobre la importancia de que, no sólo el acto impugnado, sino cualesquiera otros documentos de valor probatorio estén debidamente autenticados, requisito que encuentra su sustento en el ya citado artículo 44 de la Ley N° 135 de 1943 y en el artículo 820 del Código Judicial. Al respecto en Resolución de 30 de diciembre de 1998, esta Sala expuso lo siguiente:

> "En primer lugar, la demandante no cumplió con la formalidad de presentar copia autenticada del acto impugnado, con las constancias de su notificación, tal como lo preceptúa el artículo 44 de la Ley N° 135 de 1943. De conformidad con esta norma toda demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción debe acompañarse con copia autenticada del acto acusado en el cual debe aparecer la respectiva "constancia de su notificación". Sin embargo, en el presente caso, la parte actora sólo presentó copia simple del acto impugnado y sin constancia de su notificación (fs. 1 y 2).
>
> La copia del acto impugnado y de todos los documentos que se alleguen al proceso deben estar autenticados para que tengan valor probatorio de acuerdo con el artículo 820 del Código Judicial, y la Ley exige que el acto impugnado esté notificado y así conste en autos para que pueda comprobarse la vigencia de la acción intentada."
> (Resolución de 30 de septiembre de 1998).

En igual orientación se pronunció este Tribunal de Justicia en resolución de 18 de enero de 1999:

> "La Sala ha repetido que de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley N° 135 de 1943, toda demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción debe acompañarse con copia autenticada del acto acusado en el cual debe aparecer la respectiva `constancia de su notificación'.
>
> La copia del acto impugnado y de todos los documentos que se alleguen al proceso deben estar autenticados para que tengan valor probatorio de acuerdo con el artículo 820 del Código Judicial, y la Ley exige que el acto impugnado esté notificado y así conste en autos para que pueda comprobarse la vigencia de la acción intentada.
>
> Además, el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, dispone que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, copia del acto impugnado, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia, pero el recurrente debe solicitarlo e indicar la oficina correspondiente, además, ha sido criterio reiterado de la Sala que el petente debe probar que gestionó la obtención de dicha copia.
>
> El demandante gestionó la obtención de los documentos debidamente autenticados, tal como se aprecia a foja 161, pero no solicitó al Magistrado Sustanciador requerir al funcionario demandado los documentos autenticados, sino que se limitó a explicar por qué aportó las pruebas en copia simple.
>
> Por tanto, la parte actora incumplió este requisito instituido por

el artículo 46 de la Ley N° 135 de 1943."

Por otro lado, es oportuno advertir finalmente que la solicitud de certificación que se incluyó en la parte final del libelo de demanda, no se refiere al acto objeto de impugnación sino simplemente al establecimiento de si se dió o no decisión al recurso de reconsideración que propuso el recurrente a los fines de determinar el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo.

Por ello es que con apoyo en las razones anotadas, este tribunal en Sala Unitaria conceptúa que la demanda propuesta no reúne las exigencias técnico-formales necesarias para su admisibilidad y debe, por tanto, inadmitirla de conformidad con lo que preceptúa el artículo 50 de la Ley 135 de 1943 que a la letra dispone:

> "Artículo 50. No se dará curso a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción la acción".

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, representada por el Magistrado Sustanciador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la licenciada Virginia Sánchez, en representación de RUBÉN REYNA, para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en el Decreto Ejecutivo No. 200 de 30 de noviembre de 1999, dictado por la Presidenta de la República, por conducto de la Ministra de la Presidecia, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LIC. RAÚL E. RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ALFREDO MACHARAVIALLA Y CÉSAR ZEBEDE MACHARAVIALLA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 05-99 DE 19 DE FEBRERO DE 1999, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado RAÚL E. RODRÍGUEZ ARAÚZ, apoderado judicial del señor ALFREDO ELÍAS MACHARAVIALLA DÍAZ, sustentó ante el resto de la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación anunciado contra el Auto de 19 de julio de 1999, mediante la cual el Magistrado Sustanciador, no admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por el señor ALFREDO ELÍAS MACHARAVIALLA DÍAZ y el señor CÉSAR ZEBEDE MACHARAVIALLA, para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. 05-99 de 19 de febrero de 1999, expedida por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Cabe señalar que el término de oposición al recurso de apelación transcurrió sin que la señora Procuradora de la Administración hiciera uso del mismo.

El Magistrado Sustanciador no admitió la demanda porque, en primer lugar,

el actor no aportó el correspondiente escrito de poder otorgado, a su favor, por los señores CÉSAR ELIAS ZEBEDE MACHARAVIALLA y ALFREDO ELÍAS MACHARAVIALLA DÍAZ, para poder gestionar en nombre y representación de éstos ante la jurisdicción contencioso administrativo.

En segundo lugar, no se admitió la demanda porque la Resolución DRP No. 187-99 de 13 de abril de 1999, por la cual se resuelve confirmar en todas sus partes la Resolución final de Cargos DRP 05-99 de 19 de febrero de 1999, dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, no contiene constancia de notificación, por lo cual se hace imprescindible a efectos de poder determinar si la acción ha sido ejercida oportunamente.

Por su parte el recurrente manifiesta entre los hechos en que fundamenta su recurso lo siguiente:

> "SEGUNDO: El Magistrado Ponente determinó que la demanda incoada adolece de defectos que la hacen inadmisible. En primer lugar el honorable magistrado indica que no existe Escrito de Poder otorgado por ALFREDO ELÍAS MACHARAVIALLA DÍAZ y CÉSAR ELIAS ZEBEDE MACHARAVIALLA, para gestionar en su nombre y representación ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo.
>
> A foja No. 33 y 34 del expediente se aprecia copia autenticada del Poder debidamente otorgado por los señores ALFREDO ELÍAS MACHARAVIALLA DÍAZ y CÉSAR ELÍAS ZEBEDE MACHARAVIALLA, con lo cual se cumple taxativamente con la norma establecida en el segundo párrafo del Artículo 615 del Código Judicial, en los siguientes términos:
> "615...
> También se considerará constituido apoderado especial, sin necesidad de nuevo poder, cuando el que haya sido constituido apoderado especial en cualquier asunto o proceso administrativo o policivo lo continúe, recurra o demande ante la vía jurisdiccional. Bastará para acreditar el carácter de apoderado judicial la presentación de copia del poder o certificación en tal sentido".
>
> El argumento de la falta de Poder otorgado, como vicio para no admitir la Demanda Contencioso Administrativa, no es aplicable al Proceso que nos ocupa.
>
> TERCERO: El segundo argumento o supuesto vicio atribuido a nuestra demanda se fundamentó en que la Resolución DRP No. 187-99 de 13 de abril de 1999, por la cual se resuelve confirmar en todas sus partes la Resolución Final de Cargos DRP 05-99 DE 1999, no contiene constancia de su notificación.
>
> La Resolución No. DRP 187-99, antes identificada, fue notificada mediante Edicto DRP NO. 105-99, fijado en el Despacho del Tribunal de la DRP, el día veintinueve (29) de abril de 1999, a las 9:30 a.m. por un término de cinco (5) días hábiles; se desfijó el día 7 de mayo de 1999 a la 9:30 a.m., tal como se aprecia en el expediente identificado como B-32, de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República.
>
> La fecha para presentar la Demanda Contencioso Administrativa corre a partir del día siguiente de la desfijación del Edicto DRP No. 105-99, es decir desde el 8 de mayo, en consecuencia el 7 de julio de 1999 fecha en que presentamos nuestra demanda, el término de dos (2) meses que establece la Ley 33 de 1946 no había vencido y, por lo tanto, no había prescrito.
>
> CUARTO: La Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley 33 de 1946, permite el Recurso de Reconsideración, el cual suspende los efectos

de la Resolución recurrida hasta tanto éste se resuelva (Ver artículo 504 del Código Judicial). Tal como se puede observar en el expediente la Resolución DRP No. 187-99 de 13 de abril de 1999 Confirma en todas sus partes la Resolución NO. 05-99, de 19 de febrero de 1999, entonces es esta última Resolución la que agota la Vía Gubernativa, toda vez que mal puede proponerse una Demanda Contencioso Administrativa, mientras no esté ejecutoriada la Resolución que es recurrida.
..."
(fs.55-56)

El resto de los Magistrados de la Sala Tercera coinciden con la opinión del Magistrado Sustanciador, toda vez que no se ha acreditado la notificación de la Resolución DRP No. 187-99 de 13 de abril de 1999, por la cual se resuelve CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución Final de Cargos No. 05-99 de 19 de febrero de 1999. Por lo tanto, la demanda no cumple con lo preceptuado en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943 que señala que la demanda debe presentarse con copia debidamente autenticada de los actos que impugna y con la respectiva constancia de su notificación.

La Sala ha señalado reiteradamente que todo acto administrativo impugnado requiere no sólo su autenticación, sino también de la constancia de la notificación del mismo para demostrar el agotamiento de la vía gubernativa y si se ha propuesto dentro de los dos meses siguientes. En el caso que nos ocupa, tal como lo señala el numeral octavo de la Resolución Final de Cargos No. 05-99 de 19 de febrero de 1999, no era necesario la interposición del Recurso de Reconsideración para agotar la vía guberntiva, pero como consta que sí se presentó recurso de reconsideración, debió acompañarse no sólo copia autenticada de la Resolución DRP No. 187-99, de 13 de abril de 1999, sino también la constancia de su notificación, para que el Tribunal pueda conocer si la demanda está dentro del término o no de la prescripción.

Por otro lado, tal como lo señaló el Magistrado Sustanciador "si se toma como punto de partida para el cálculo del término de prescripción la fecha en que la Resolución recurrida le es notificada a los demandados (19 de febrero de 1999), veríamos que a la fecha en que se presenta la demanda bajo estudio, el día 7 de julio de 1999, ya había prescrito el derecho de los afectados a recurrir ante esta jurisdicción mediante la Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, en virtud de que la misma a tenor de lo dispuesto por el artículo 42b de la Ley 33 de 1946 sólo puede ejercerse dentro de los dos meses siguientes de la notificación o ejecución del acto." (fs. 47).

Por ser eminentemente formales las demandas contencioso administrativa de plena jurisdicción, la ley contencioso administrativa exige taxativamente en los artículos 44 y 46, que el actor acompañe copia del acto acusado con las constancias de su notificación o publicación, y que si se les denegare la expedición de las copias, se debe expresar en la demanda, a fin de que el Sustanciador antes de admitir la demanda, las solicite a la oficina donde reposa el original. En este caso en particular el actor no presentó copia de la notificación del acto y no solicitó en la demanda expresamente que el Magistrado Sustanciador la solicitara a la oficina donde se encuentra el original, por lo que este Tribunal, no puede suplir de oficio la omisión en la que incurrió éste.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Resolución de 19 de julio de 1999, que NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado Raúl E. Rodríguez Araúz, en nombre y representación de ALFREDO ELÍAS MACHARAVIALLA DÍAZ y CÉSAR ZEBEDE MACHARAVIALLA, para que se declare nula por ilegal la Resolución No. 05-99 de 19 de febrero de 1999, dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. EMETERIO MILLER, EN REPRESENTACIÓN DE GRAVA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA CERTIFICACIÓN DE 21 DE JUNIO DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MINIERALES DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Emeterio Miller, actuando en nombre y representación de GRAVA, S. A., ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución de 24 de agosto de 1999 que no admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la certificación de 21 de junio de 1999, expedida por el Director General de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador no admitió la demanda toda vez que la misma ha sido dirigida contra un acto que no es susceptible de ser impugnado ante esta jurisdicción de lo contencioso administrativo, puesto que el mismo en modo alguno le pone fin a una actuación administrativa.

El resto de los Magistrados que integran la Sala, observan que el apoderado judicial del apelante luego de notificarse de la Resolución que no admite la demanda, anunció recurso de apelación.

Reposa a foja 52 del expediente el informe secretarial en el cual se señala que vencido el término de apelación, no se presentó escrito de sustentación de la misma.

En virtud de lo anterior, como se trata de un recurso de apelación contra un auto y el mismo no fue sustentado, lo procedente es declarar desierto el recurso de apelación, tal como lo dispone el artículo 1122 del Código Judicial.

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Emeterio Miller, actuando en nombre y representación de GRAVA, S. A..

Notifiquese,

(fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS CARRILLO EN REPRESENTACIÓN DE ORCILA VEGA DE CONSTABLE, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL DECRETO EJECUTIVO N° 200 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADO POR LA PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA POR CONDUCTO DE LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Carrillo ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de ORCILA VEGA DE CONSTABLE, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 200 de 30 de diciembre de 1999, dictado por la Presidenta de la República por conducto de la Ministra de la Presidencia, y para que se hagan otras declaraciones.

En su demanda la parte actora solicita que antes de admitir la demanda, la Magistrada Sustanciadora pida a la Ministra de la Presidencia copia autenticada del Decreto Ejecutivo N° 200 de 30 de diciembre de 1999, del recurso de reconsideración presentado contra este acto y la certificación de que se ha resuelto o no dicho recurso.

El demandante prueba que solicitó los documentos antes descritos, mediante los escritos de fojas 19 y 21 en los que se aprecia el sello de recibido del Despacho de la Presidencia.

El artículo 46 de la Ley 135 de 1943, dispone que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo pida el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia y el petente prueba que gestionó la obtención de dicha copia.

El numeral 3 del artículo 36 de la Ley 135 de 1943 establece que se considera agotada la vía gubernativa por silencio administrativo, cuando transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier recurso interpuesto ante un funcionario o entidad pública autónoma o semiautónoma, contra un acto administrativo impugnable ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Con fundamento en las disposiciones citadas y como el demandante comprobó que solicitó a la autoridad demandada los documentos pertinentes, cuya expedición le fue negada, es procedente acceder a lo pedido.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, representada en la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA por Secretaría se solicite al Despacho de la Ministra de la Presidencia, que en el término de cinco días expida y envíe: 1. Copia debidamente autenticada del Decreto N° 200 de 30 de noviembre de 1999, dictada por la Ministra de la Presidencia, con la constancia de su notificación y 2. Certificación de si ha sido o no resuelto el recurso reconsideración promovido contra dicho acto 9 de diciembre de 1999, y en caso afirmativo, copia de la resolución dictada con la constancia de su notificación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA ARCIA, VARGAS & VELÁSQUEZ EN REPRESENTACIÓN DE SUSANA MELAIS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 10 DE 14 DE ENERO DE 2000, DICTADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA OTRAS

DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Arcia, Vargas & Velásquez en representación de la señora SUSANA MALAIS ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declaren nulas por ilegales, las Resoluciones N° 10 de 14 de enero de 2000 y N° 14-2000 de 8 de febrero de 2000, dictadas por el Ministro de Vivienda y, se hagan otras declaraciones.

En su demanda la apoderada judicial de la señora SUSANA MELAIS solicitó a esta Sala que, con fundamento en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, suspenda los efectos las resoluciones fechadas 14 de enero y 8 de febrero del año en curso, por considerarlas violatorios del ordenamiento legal vigente y contrarias al principio de la irrevocabilidad de los actos administrativos (fs. 15-16).

Para resolver, la Sala parte del hecho de que en el presente negocio lo que se impugna es una acción de personal, mediante la cual, el Ministro de Vivienda destituyó a la demandante del cargo de Secretaria Ejecutiva que ocupaba en la Unidad Administrativa de Dirección de Mejoramiento Habitacional (f. 1).

Según el numeral 1° del artículo 74 de la Ley N° 135 de 1943, en "las acciones referentes a cambios, remociones, suspensión o retiro en el personal administrativo", la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, sólo procede cuando se trata "de empleados nombrados por períodos fijos.

En el presente caso, la medida cautelar solicitada no procede porque la demandante no ha probado que su nombramiento en el cargo de Secretaria Ejecutiva se hizo por período fijo.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NIEGA la suspensión provisional de los efectos de la Resolución N° 10 de 14 de enero de 2000, dictada por el Ministro de Vivienda.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OLMEDO ARROCHA EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 190-C.CI DE 29 DE MAYO DE 1993, DICTADA POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, Y EL ACUERDO MUNICIPAL N° 12 DE 17 DE ENERO DE 1995, DICTADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado OLMEDO ARROCHA actuando en su propio nombre y representación ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 190-C.CI de 20 de mayo de 1993, dictada por el

Gobernador de la Provincia de Panamá, y el Acuerdo Municipal N° 12 de 17 de enero de 1995, dictada por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá.

I. LOS ACTOS ACUSADOS

La Resolución N° 190-C.CI de 20 de mayo de 1993 establece en su parte resolutiva lo siguiente:

> PRIMERO: Revocar la Resolución N° 547 de 21 de septiembre de 1992 y la 93 S.J. de 14 de enero de 1993, emitidas por la Alcaldía del Distrito de Panamá.
>
> SEGUNDO: Ordenar a la Alcaldía del Distrito de Panamá, el reintegro y pago de los salarios caídos al Sr. RAÚL AROSEMENA IGLESIAS, a su puesto de Jefe del Departamento de Planificación II, Dirección de Planificación y Presupuesto del Municipio de Panamá.

Por su parte, el Acuerdo N° 12 fechado 17 de enero de 1995, emitido por el Consejo Municipal de Panamá dispone en su parte resolutiva lo siguiente:

> ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el reintegro del Licdo. Raúl E. Arosemena I., como Jefe del Departamento de Planificación y el pago de sus salarios acumulados en base a los daños y perjuicios ocasionados por acto ilegal y de acuerdo al ordenamiento de la Resolución N° 190 de la Gobernación de la República de Panamá del 20 de mayo de 1993:
>
> | | |
> |---|---|
> | Sueldo | B/.800.00 |
> | Fecha de Destitución | 21-09-1992 |
> | Fecha de Reintegro | 15-11-1994 |
> | Tiempo por pagar | 24-01-0002 |
>
> ARTÍCULO SEGUNDO: Hacer frente a los adeudos de la partida Presupuestaria 5.76.050.01.01.097 de la siguiente forma:
>
> | | |
> |---|---|
> | Sueldo Acumulado por pagar | B/.20,640.00 |
> | XIII Mes | B/.---462.11 |
> | Prestaciones Patronales | B/.-2,755.84 |
> | Sub Total | B/.23,857.95 |
> | Menos Prestaciones del Empleado | B/.2,200.70 |
> | Total | B/.21,657.25 |
>
> ARTÍCULO TERCERO: Este Acuerdo comenzará a regir a partir de su promulgación.

II. LAS NORMAS INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La demandante considera que el acto impugnado viola los artículos 17, 44 y 51 de la Ley 106 de 1973, el numeral 22 del artículo 9 de la Ley 19 de 1992, el artículo 1726 del Código Administrativo y el artículo 40 de la Ley 33 de 1946, cuyo texto se transcribe a continuación:

> "LEY 106 DE 1973
> REFORMADA POR LA LEY 52 DE 1984.
>
> Artículo 17. Los Consejos Municipales tendrán competencia exclusiva para el cumplimiento de las siguientes funciones:
>
> 1. Formular, con la participación del Alcalde y la colaboración y asesoría del Ministerio de Planificación y Política Económica, la política de desarrollo del Distrito y de los Corregimientos.

2. Estudiar, evaluar y aprobar el presupuesto de rentas y gastos municipales, que comprenderá el programa de funcionamiento y el de inversiones municipales, que para cada ejercicio fiscal elabore el Alcalde con la colaboración del Ministerio de Planificación y Política Económica. El Programa de inversiones municipales será consultado con las Juntas Comunales respectivas.

3. Crear empresas municipales o mixtas para la explotación de bienes y servicios, en especial las que tiendan al desarrollo industrial, agrícola y pecuario; y fomentar la creación de empresas privadas, industriales y agrícolas.

4. Promover la celebración de contratos con entidades públicas o privadas, para la creación de empresas municipales o mixtas, cuya finalidad sea la explotación de bienes o servicios;

5. Crear Juntas o Comisiones para la atención de problemas específicos del Municipio, reglamentar sus funciones y aprobar sus presupuestos;

6. Crear y suprimir cargos municipales, y determinar sus funciones, períodos, asignaciones y viáticos, de conformidad con lo que dispongan la Constitución y las leyes vigentes;

7. Disponer de los bienes y derechos del Municipio y adquirir los que sean necesarios para la eficiente prestación de los servicios públicos municipales, con las limitaciones que establezca la Ley;

8. Establecer impuestos, contribuciones, derechos y tasas, de conformidad con las leyes, para atender a los gastos de la administración, servicios e inversiones municipales;

9. Reglamentar el uso, arrendamiento, venta y adjudicación de solares o lotes y demás bienes municipales que se encuentren dentro de las áreas y ejidos de las poblaciones, y de los demás terrenos municipales;

10. Crear y mantener empresas y servicios de utilidad pública en especial, agua, luz, teléfonos, gas, transporte, alcantarillado y drenaje; prestar estos, ya sea directamente o en forma de concesión y en este último caso preferentemente mediante licitación pública o mediante acuerdos con otras entidades estatales. También podrá municipalizar los servicios públicos para prestarlos directamente.

11. Autorizar y aprobar la celebración de contratos sobre concesiones y otros modos de prestación de servicios públicos municipales y lo relativo a las construcción y ejecución de obras públicas municipales;

12. Autorizar y aprobar la construcción de mataderos, mercados, crematorios, cementerios públicos y reglamentar sus servicios. La construcción de los mataderos estará sujeta a la reglamentación que dicte el Órgano Ejecutivo;

13. Autorizar y aprobar la construcción de plazas, parques, paseos y vías públicas municipales en base a los planos reguladores.

14. Establecer y reglamentar el servicio de aseo urbano y domiciliario de sus poblaciones; y procurar los medios para el aprovechamiento de los desechos y residuos;

15. Reglamentar lo relativo a las construcciones y servicios públicos municipales, teniendo en cuenta las disposiciones generales

sobre salubridad, desarrollo urbano y otras;

16. Ejercer las acciones constitucionales y legales a que haya lugar, en nombre del Municipio y en defensa de sus derechos;

17. Elegir de su seno a su presidente y su vicepresidente y elegir al secretario del Consejo Municipal, al Subsecretario cuando proceda, al tesorero, al ingeniero, agrimensor o inspector de obras municipales, y al abogado consultor del municipio.

18. Designar a su representantes ante los organismos municipales, nacionales e internacionales, según sea el caso;

19. Examinar las memorias e informes anuales que debe presentar al Alcalde y demás jefes de dependencias municipales, para adoptar las medidas más convenientes en beneficio del Distrito y los corregimientos;

20. Deslindar las tierras que formen parte de los ejidos del Municipio y del corregimiento con la cooperación de la Junta Comunal respectiva;

21. Dictar medidas a fin de proteger y conservar el medio ambiente;

22. Servir de órgano de apoyo a la acción del Gobierno Nacional en el Distrito.

23. Todas las demás señaladas por la Constitución, las leyes y su Reglamento.

Artículo 44. Los Alcaldes tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes de la República, los Decretos y órdenes del Ejecutivo y las Resoluciones de los Tribunales de Justicia ordinaria y administrativa. Los Alcaldes son jefes de policía en sus respectivos Distritos. Los Alcaldes cuando actúen como agentes del Gobierno, en desempeño de actividades ajenas a la autonomía municipal, quedarán subordinadas en tales casos, al Gobernador de la Provincia y a los organismos superiores de la jerarquía administrativa.

Artículo 51. Las Resoluciones y demás actos de los Alcaldes, cuando se relacionan con la gestión administrativa municipal, son impugnables ante los tribunales competentes. Contra las multas y sanciones disciplinarias que impongan los Alcaldes, cuando actúan como Jefe de Policía del Distrito, cabrá el recurso ante el Gobernador de la Provincia.

LEY 19 DE 1992.

Artículo 9. El artículo 4 de la Ley N° 2 de 2 de junio de 1987 queda así:

...
22. Conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones, multas y sanciones disciplinarias de policía, que impongan los alcaldes como funcionarios de primera instancia;

CÓDIGO ADMINISTRATIVO.

Artículo 1726. Las decisiones de los Jefes de Policía son apelables ante el inmediato superior, quien decidirá el recurso por lo que resulte de autos.

LEY 33 DE 1946.

> Artículo 40. En los asuntos municipales se aplicará el procedimiento de este capítulo, salvo cuando los recursos establezcan reglas especiales para negocios determinados."

A juicio de la parte actora, el artículo 44 de la Ley 106 de 1973, que establece que los alcaldes cuando actúen como agentes del Gobierno, en desempeño de actividades ajenas a la autonomía municipal, quedarán subordinados en tales casos, al Gobernador, fue violado por omisión, toda vez que los Gobernadores sólo son superiores a los Alcaldes cuando estos actúan como Jefes de Policía y, mediante la Resolución N° 547 de 21 de septiembre de 1992 y su acto confirmatorio, el Alcalde del Distrito Capital ejerció funciones como Jefe de la Administración Alcaldicia. Agregó que los Gobernadores no tienen facultad para conocer mediante un recurso de apelación los actos emitidos por el Alcalde cuando éste ejerce funciones relacionadas con la autonomía municipal.

El demandante también señaló que fue violado el artículo 51 de la Ley 106 de 1973, el cual establece que las resoluciones y demás actos de los Alcaldes, en el ejercicio de la gestión administrativa municipal se impugnan ante los Tribunales competentes. Considera que la violación se produjo porque el Gobernador de la Provincia de Panamá, quien sólo puede conocer mediante recurso de apelación de las actuaciones de los Alcaldes como Jefes de Policía, revocó una Resolución dictada por el Alcalde como Jefe de la Administración Municipal.

En cuanto al numeral 22 del artículo 9 de la Ley 19 de 1992, el demandante expresó que fue violado porque el Gobernador sólo puede conocer, mediante un recurso de apelación, de las decisiones del Alcalde como autoridad de policía.

El demandante también afirma que se ha violado el artículo 1726 del Código Administrativo por indebida aplicación, toda vez que en el caso en estudio el Gobernador carecía de competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra un acto emitido por el Alcalde como Jefe de la Administración alcaldicia y no como Jefe de Policía.

El actor expresó que se ha infringido el artículo 40 de la Ley 33 de 1946 porque, en el caso en estudio, mediante el recuso de reconsideración se agotó la vía gubernativa, razón por la cual no era viable que el Gobernador revocara la Resolución N° 547 fechada 21 de septiembre de 1992, dictada por el Alcalde de Panamá.

Finalmente, el apoderado judicial de la demandante manifestó que el acto impugnado contenido en la Resolución N° 190, violó el artículo 17 de la Ley Municipal ya que, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 106 de 1973, el Consejo Municipal no tiene facultades para reintegrar a un funcionario cuyo nombramiento y remoción le corresponde al Alcalde como tampoco para ordenar el pago de salarios caídos.

III. INFORME DE CONDUCTA

Mediante su Nota N° CMPP/150/98, el señor Presidente del Consejo Municipal de San Miguelito rindió el informe de conducta requerido por la Magistrada Sustanciadora, en los siguientes términos:

> "... según la Ley sólo el Consejo Municipal puede Crear o Suprimir cargos, por lo que mal podía la Alcaldesa Correa despedir al Licenciado Arosemena basándose en una declaración de insubsistencia del cargo cuando no existe ninguna solicitud efectuada a este Concejo para la supresión del mencionado cargo, sabemos que los funcionarios de la Administración Alcadicia únicamente pueden ser nombrados y destituidos por el Alcalde tal como lo señala el artículo 45 de la Ley 106, pero de igual manera el Alcalde debe respetar las funciones y competencias exclusivas de los Concejos.

> Adicional a esto, al momento en que se dictó el acuerdo atacado, todavía la Gobernación de la Provincia resolvía las apelaciones por destitución en las Alcaldías de Panamá y San Miguelito y dichas decisiones eran acatadas por los alcaldes como se hizo en este caso, sin embargo, es hasta hace poco que se sienta por parte de la Sala Tercera el criterio de que no eran viables las apelaciones de destituiciones emanadas de las alcaldías para ante las gobernaciones, pues se consideraba agotada la vía gubernativa cuando se resolvía la reconsideración ante la misma alcaldía, por lo que le quedaba al afectado asistir a lo Contencioso de Plena Jurisdicción. De allí la razón que este acuerdo no había sido impugnado hasta la fecha." (f. 57).

Por su parte, la Gobernadora de la Provincia de Panamá, mediante Oficio N° A.L. 401-98 fechado 7 de septiembre de 1998, decidió allanarse a la decisión de esta Corporación de Justicia.

IV. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración contestó la demanda mediante su Vista Fiscal N° 444 de 20 de noviembre de 1998, en la que solicitó a esta Sala que declare la nulidad de la Resolución N° 190-C.CI. de 14 de enero de 1993, dictada por el Gobernador de la Provincia de Panamá y del Acuerdo N° 12 fechado 17 de enero de 1995 emitido por el Consejo Municipal (fs. 55-74).

V. DECISIÓN DE LA SALA

A juicio de la Sala, se ha producido la alegada violación a los artículos 44 y 51 de la Ley 106 de 1973, al numeral 22 del artículo 9 de la Ley 19 de 1992 y, al artículo 1726 del Código Administrativo porque en ellos se establece que los Gobernadores sólo pueden conocer de las apelaciones de los Alcaldes cuando éstos últimos actúan como Jefes de Policía y, en el presente caso la Resolución revocada por la Gobernación, corresponde a un acto dictado por el Alcalde como Jefe de la Administración Municipal. Además, respecto al artículo 40 de la Ley 33 de 1946, esta Superioridad debe señalar que, esta normativa es diáfana al preceptuar que las leyes municipales se aplicaran preferentemente cuando regulen asuntos específicos, como lo es el estudiado.

Por tanto, es evidente que la Resolución N° 190-C.CI. de 20 de mayo de 1993 violó ostensiblemente los precitados artículos. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por medio de las Sentencias fechadas 11 de mayo y 16 de junio de 1998, se refirió a este tema así:

"SENTENCIA DE 11 DE MAYO DE 1998.

> ... el fondo del asunto está en determinar si la gobernadora tiene o no la competencia para conocer de las apelaciones de los alcaldes, a lo que esta superioridad concluye que los alcaldes realizan dos tipos de actuaciones como jefes de policía y como jefes de la administración municipal, y sólo cuando actúa como jefe de policía, la gobernadora es competente para conocer de las apelaciones. En cuanto a las normas en conflicto es decir la Ley 106 de 1973, la ley 19 de 1992 y lo que dispone la ley 125 de 1943, se evidencia que son claras las normas de interpretación que la propia ley contencioso señala en este sentido, así al existir leyes que regulan específicamente el tema de las apelaciones ante los gobernadores deben aplicarse dichas disposiciones.
>
> Ahora bien en lo referente a los artículos que se estiman infringidos podemos señalar que se producen las violaciones alegadas por el recurrente en cuanto a los artículos 44 y 51 de la ley 106 de 1973, artículo 9 numeral 22 de la ley 19 de 1992 y el artículo 1726 del Código administrativo. Como bien observa este Tribunal, los

artículos antes mencionados tienen un común denominador, ya que todos coinciden en señalar que los gobernadores tendrán competencia para conocer de las apelaciones de los Alcaldes, siempre y cuando estos actúen dentro de sus funciones como jefe de policía ...

SENTENCIA DE 16 DE JUNIO DE 1998.

Este Tribunal advierte que la controversia radica en determinar si la Gobernadora de la Provincia de Panamá tiene competencia para conocer las actuaciones administrativas de la Alcaldía de Panamá.

La Sala observa que la resolución No. P.Adm-010-96 de 29 de marzo de 1996, dictada por la Gobernación de la Provincia de Panamá, infringe los artículos 51 de la Ley 106 de 1973 y el numeral 22 del artículo 9 de la Ley 19 de 1992 que señalan las funciones de los Alcaldes y Gobernadores, ya que ambas normas concuerdan en señalar que los gobernadores conocen de las apelaciones de los alcaldes sólo cuando estos actúen dentro de sus funciones como Jefe de Policía, por lo que la gobernación no tenía competencia para resolver esta apelación.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que los alcaldes realizan dos tipos de funciones: una como jefes de policía y la otra como jefes de la administración municipal, y que cuando actúa como jefe de policía, la gobernación es competente para conocer de las apelaciones.

En este sentido, vale destacar que las normas de interpretación de la ley contenciosa administrativa, contenida en los artículos 39a y 40 de la ley 135 de 1943, son claras en señalar que al existir leyes que regulan específicamente las apelaciones ante los gobernadores, deben aplicarse dichas disposiciones." (Resalta la Sala)

De las normas impugnadas, interpretadas por la Sala en las sentencias citadas se desprende claramente que el Gobernador no tiene competencia para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las actuaciones de los Alcaldes como Jefes de la Administración Municipal.

Por otro lado, entre las atribuciones del Consejo Municipal consagradas en el artículo 17 de la Ley 106 de 1973, no está la del reintegro y el pago de salarios caídos a un funcionario cuyo nombramiento fue declarado insubsistente por el Alcalde. En cuanto a la competencia de la Gobernación, podemos señalar que sólo puede conocer de las apelaciones contra actuaciones de los Alcaldes cuando actúan como Jefes de Policía, y no contra los actos administrativos que estos emitan, como la Resolución N° 190-C.CI., dictada en calidad de Jefe de la administración alcaldicia.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NULA POR ILEGAL la Resolución N° 190-C.CI. de 20 de mayo de 1993, dictada por el Gobernador de la Provincia de Panamá y, el Acuerdo Municipal N° 12 de 17 de enero de 1995, dictado por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS EN REPRESENTACIÓN DE DIANA ROSAS CARLES ROVIRA Y RUBY CARLOS RIBA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO NO. 205 DE 9 DE JUNIO DE 1999, DICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Rosas y Rosas, en representación de DIANA ROSAS CARLES y RUY CARLOS RIBA CARLES, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto No. 205 de 9 de junio de 1999, dictado por la Director General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, y el Jefe de Departamento de Trámites de esta Dirección.

Seguidamente se destaca que los recurrentes han incluido una solicitud de suspensión provisional de los efectos de la resolución impugnada, la cual resuelve "aprobar cambio de Código de Zona de R2-B a R-E, con tolerancia en densidad del 25% + tolerancia de un piso adicional- Deberá contar con la cantidad de estacionamientos exigidos por la norma- Deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por las instituciones, tales como: Municipio, Salud, MOP, Oficina de Seguridad de los Bomberos entre otros." Esta petición deberá ser atendida antes del trámite de admisión de la demanda.

Los demandantes señalan que la ejecución de la resolución impugnada les ocasionará perjuicios notoriamente graves, en virtud que son propietarios de una residencia de una (1) sola planta en la finca vecina a aquella en la que se pretende construir un edificio de cuatro (4) plantas altas, más una (1) planta baja y un sub-sótano. Esta situación ocasionará además, consecuencias negativas para el resto de los vecinos del área.

A juicio de la parte actora, estos perjuicios se comprueban con una simple comparación de la situación existente en la actualidad en ésta área, donde imperan residencias de baja densidad muy inferior a la que autoriza el Resuelto No. 205 de 1999 que propiciará un aumento a 650 habitantes por hectárea, incluyendo el 25% de tolerancia.

La finca No. 33019 sobre la cual se autorizó el cambio de uso de suelo está ubicada en la Urbanización Los Angeles, en la Calle 62-D, Corregimiento de Bethania, con una cabida de 800 metros cuadrados. Al respecto, argumentan los demandantes que debido a la reducida superficie de la zona descrita, el cambio aprobado originara trastornos en el desenvolvimiento diario de los vecinos y afectara las estructuras viales, de alcantarillado y similares.

Finalmente, los recurrentes para fundamentar su petición hacen referencia a demandas de nulidad, en las que consideran, se han planteado situaciones jurídicamente idénticas a la presente, donde la Sala Tercera ha ordenado la suspensión de los efectos del acto impugnado.

Una vez examinada la petición incoada, la Sala advierte que no consta en el expediente prueba alguna, como se exige en estos casos, que compruebe las afirmaciones que formulan los demandantes en relación con los efectos que puede producir el cambio de zona para la finca No. 33019.

Como se ha manifestado en diversas ocasiones, el hecho que el demandante enuncie que puede sufrir un perjuicio notoriamente grave, no es suficiente para solicitar la aplicación de esta medida cautelar. La solicitud debe contener una explicación detallada y específica de los perjuicios aludidos, acompañadas de las pruebas que acrediten los razonamientos expuestos.

Como elemento importante, tenemos que la aplicación de la suspensión del

acto administrativo tiene como finalidad, evitar que se produzca un perjuicio, el cual debe ser grave, actual, patrimonial y de difícil reparación.

Esta Superioridad considera que si bien el cambio de zonificación de R2-B a R-E en la finca antes señalada, permite la construcción de un edificio de cuatro plantas altas, más una planta baja y un sub-sótano, debe tomarse en cuenta que de acuerdo a la información aportada, en la urbanización Los Angeles ya existen edificaciones de tres altos.

Otro argumento presentado por los demandantes es que del examen global de la resolución impugnada, se revela supuestamente que la misma está viciada de ilegalidad.

En tal sentido, la Sala debe observar que no existe hasta este momento prueba que acredite que la actuación de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Departamento de Trámites del Ministerio de Vivienda, al aprobar el Resuelto No. 205 de 1999, haya infringido de modo ostentible lo establecido en las disposiciones legales relacionada con esta materia.

En cuanto a la jurisprudencia sentada por esta Corporación, a la cual hace referencia la parte actora, debe aclararse que los pronunciamientos indicados por los demandantes no presentan las mismas condiciones que exhibe la solicitud en estudio, toda vez que en aquellas ocasiones la Sala accedió a decretar la medida cautelar de suspensión fundada en el hecho que el demandante aportó elementos probatorios que permitieron, demostrar, prima facie, la aparente existencia de vicios de ilegalidad. Lamentablemente esa es una situación muy distinta a la que acontece en el presente negocio, en el que, se repite, no existen los elementos de convicción que sirvan de soporte a la adopción de la medida cautelar impetrada.

De las razones anotadas, esta Superioridad concluye que las constancias aportadas no permiten comprobar a primera vista que existan motivos que hagan imperativo y urgente acceder a la suspensión provisional del acto acusado.

Por tanto, esta Corporación de Justicia, investida de la facultad discrecional que le confiere el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, considera que no es dable acceder a lo pedido.

Cabe recordar, que las apreciaciones vertidas por este Tribunal al momento de examinar la solicitud de suspensión del acto impugnado no son definitivas, y el examen de mérito lo realizará la Sala en la sentencia de fondo.

En consecuencia, la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión provisional de los efectos del Resuelto No.205 de 9 de junio de 1999, dictado por la Dirección General de Desarrollo Urbano y el Jefe de Departamento de Trámites del Ministerio de Vivienda.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ALMA L. CORTÉS A., EN REPRESENTACIÓN DE PRODUCTOS SONAEÑOS, S. A., SERVICIOS DE CARNES DE PANAMA, S. A. Y MATADERO CHIRIQUÍ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 223 DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DE LA MINISTRA DE SALUD. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE

DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Alma L. Cortés A., actuando en representación de Productos Sonaeños, S. A., Servicios de Carnes de Panamá, S. A. y Matadero Chiriquí, S. A., interpuso demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 223 de 5 de septiembre de 1996, dictado por el Presidente de la República por conducto de la Ministra de Salud.

Por medio del Decreto Ejecutivo N° 223 de 5 de septiembre de 1996, se dictan disposiciones sobre la inspección veterinaria en los distintos mataderos de sacrificio de animales que operan en el país y en las plantas de procesamiento de productos cárnicos y se dictan otras disposiciones, derogando en todas sus partes el Decreto de Gabinete N° 624 de 28 de mayo de 1970 que reglamentaba esta materia.

A juicio de la representante judicial de las sociedades actoras, el Decreto Ejecutivo N° 223 de 5 de septiembre de 1996 viola, en forma directa por comisión, el contenido del Decreto de Gabinete N° 624 de 18 de mayo de 1970, específicamente sus artículos segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo. Además considera que el acto impugnado también viola, de forma directa por comisión, el artículo 690 del Código Fiscal, los numerales 1 y 5 del artículo 90 del Código Sanitario y el artículo 15 del Código Civil.

Considera la parte actora que la violación al Decreto de Gabinete N° 624 de 1970 se produce, porque la jurisprudencia ha reiterado que los Decretos de Gabinete son actos con esencia legislativa, o sea que tienen fuerza de ley, y por tanto, es claro y notorio que están jerárquicamente por encima de los decretos ejecutivos, por ello señala que en este caso, contrario a lo establecido, se ha derogado un Decreto de Gabinete, el N° 624 de 1970, mediante un Decreto Ejecutivo, el N° 223 de 1996.

En atención al argumento presentado por la actora, la Sala considera conveniente señalarle lo mismo que dijo al resolver la solicitud previa de suspensión de los efectos del acto acusado, en el auto dictado el 27 de febrero de 1998, en el que señaló lo siguiente:

> "... el Decreto de Gabinete N° 624 de 28 de mayo de 1970 fue dictado por el Presidente y el Miembro de la Junta Provisional de gobierno en conjunto con el Ministro de Salud, y no por el Consejo de Gabinete en Pleno. Por tanto, no se trata de un Decreto de Gabinete que tiene fuerza de ley, como lo afirma el demandante y puede ser derogado por otro Decreto Ejecutivo como lo es el acto impugnado." (fs. 120 y 121)

Así las cosas, no prosperan los cargos de violación endilgados al Decreto Ejecutivo N° 223 de 1996 contra el Decreto de Gabinete N° 624 de 1970, puesto que éste último tiene el mismo rango legal que el decreto que lo derogó en su totalidad y que ahora es impugnado. En virtud de lo dicho, tampoco es procedente examinar las alegadas violaciones de los artículos segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo de referido Decreto de Gabinete N° 624 de 1970, puesto que dejaron de existir en el momento en que fueron derogadas por el Decreto Ejecutivo N° 223 de 1996.

Las otras normas legales que la parte actora considera infringidas son los artículos 690 del Código Fiscal, los numerales 1 y 5 del artículo 90 del Código Sanitario y el artículo 15 del Código Civil. Estas normas son del siguiente tenor literal:

"CODIGO FISCAL

Artículo 690: Las rentas nacionales provenientes de tasas y derechos se regulan por las respectivas disposiciones de los Libros I, II y III de este Código, y, en su caso, por las leyes complementarias."

"CODIGO SANITARIO

Artículo 90: Son actividades locales sanitarias en relación con los alimentos:

1° Reglamentar e inspeccionar los locales en que se fabriquen, transporten, guarden, o expendan, comestibles o bebidas de cualquier clase, tales como ferias, mataderos, mercados, almacenes, panaderías, fruterías, restaurantes, cantinas, hoteles, etc. Este control se extenderá a las materias primas para la elaboración. Las normas para valorar la composición y calidad de los alimentos serán establecidas en un código de alimentos, o en reglamentos especiales;
...
5° Mantener servicios de inspección veterinaria para mataderos, mercados, lecherías, etc.;
..."

"CODIGO CIVIL

Artículo 15: Las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno, expedidos en ejecicio de la potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria, y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución o a las leyes."

A juicio de la parte actora, el artículo 690 del Código Fiscal ha sido vulnerado, porque el Decreto Ejecutivo N° 223 de 1996, de naturaleza reglamentaria, ha establecido una tasa por el servicio de inspección veterinaria y esto, de acuerdo al Código Fiscal, sólo puede hacerse a través de una ley.

Señaló además que es directamente el Estado quien tiene que prestar el servicio de inspección veterinaria a través del Ministerio de Salud y en caso de que sea necesaria la creación de una tasa por el servicio, exigir el pago a través de una ley, como lo establece el artículo 690 del Código Fiscal, en resumen considera que los servicios de salud que presta el Estado en forma gratuita son financiados con fondos obtenidos del pago de los impuestos y no con fondos de los particulares.

Al explicar en qué forma se produjo la violación del artículo 90, numerales 1 y 5 del Código Sanitario, la parte actora señaló que de acuerdo al texto y al espíritu de los artículos 105 de la Constitución Política y del 87 del Código Sanitario, es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. Por ello, en cumplimiento de la obligación constitucional y legal de salubridad e higiene pública, se ha establecido en los numerales 1 y 5 del artículo 90 del Código Sanitario la competencia del Ministerio de Salud para reglamentar e inspeccionar los mataderos, mercados, lecherías, etc., y mantener los servicios de inspección veterinaria a los establecimientos de sacrificios de animales.

Manifiesta la apoderada judidicial de las demandantes que no hay conflicto al interpretar que el Estado es quien directamente está obligado a prestar el servicio de inspección veterinaria y si se decide la necesidad de establecer una tasa, deberá hacerse por ley, no obstante, ni en el Código Sanitario ni en los decretos que regulan esta materia, se ha establecido o desarrollado que el servicio de inspección veterinaria requiera el pago de una tasa.

La parte actora manifestó que la violación del artículo 15 del Código Civil se produjo, porque el Decreto N° 223 de 1996 es contrario a lo dispuesto en los artículos 690 del Código Fiscal, 90 del Código Sanitario y demás normas de hermenéutica legal, con lo cual se hace imposible su aplicación.

Finalmente la apoderada judicial concluye indicando que en el caso de la presente demanda de nulidad, el Organo Ejecutivo rebasó los límites de la potestad reglamentaria al dictar el Decreto Ejecutivo N° 223 de 5 de septiembre de 1996, y con el cual se está causando un notorio perjuicio a sus representados, ya que los obliga a la contratación de un servicio que más que un servicio es una función pública del Estado para asegurar la salud y bienestar de los asociados.

La autoridad demandada rindió el informe de conducta requerido, mediante su Nota N° 945-DMS-DAL de 13 de marzo de 1998, y en él indicó lo siguiente:

> "... los artículos 113 y 114 de la Ley 66 de 1947, regulan lo atinente a los Organismos Coordinados de Salud Pública, que comprende aquellos servicios en que la Dirección General de Salud Pública sólo tiene injerencia parcial administrativa, económica o mixta; por lo que se contempla la posibilidad de la delegación de actividades y de autoridad. Estos servicios coordinados están sujetos a la supervigilancia de la prenombrada Dirección, a la que -también- le corresponde aprobar previamente sus programas de trabajo y sus presupuestos.
>
> Para que pueda producirse la delegación de actividades y autoridad, en favor de un servicio coordinado, es necesario que se suscriba un Convenio escrito, en el que se consignen las normas técnicas y administrativas por las que se regirán las partes; así como el origen, forma de inversión y manejo de los fondos.
>
> En las reuniones celebradas entre el Ministerio de Salud y los dueños de las empresas propietarias de Mataderos, se acordó que se suscribiría un Convenio independiente con cada una de esas empresas, como forma de garantizar que -efectivamente- se presten los servicios de Inspección Veterinaria en cada uno de los Mataderos del país. ...
>
> El artículo 114 del Código Sanitario establece que los Convenios por servicios coordinados (como el de Inspección Veterinaria), caducan tácitamente cuando la parte contribuyente no aportare la cuota de gastos que le corresponde, durante dos meses seguidos. ...
>
> Siendo ello así, la disposición jurídica en referencia, establece la potestad del Ministerio de Salud para la creación de la Tasa en referencia." (fs. 125 a 130)

La señora Procuradora de la Administración, mediante su Vista Fiscal N° 154 de 23 de abril de 1998, solicitó a los Magistrados que desestimen las pretensiones de las actoras y que declaren que no es ilegal el Decreto N° 223 de 5 de spetiembre de 1996.

Explicó que el artículo 114 de la Ley 66 de 1947 o Código Sanitario, establece la potestad del Ministerio de Salud para la creación de la tasa de servicios de inspección veterinaria, pero como esta ley no enumeró los distintos servicios coordinados que puede prestar el Ministerio, fue necesario reglamentarla con fundamento en la potestad conferida al Organo Ejecutivo por el artículo 179, numeral 14 de la Constitución Política.

Agrega la señora Procuradora que esa reglamentación tampoco contiene las tarifas para el cálculo que debe pagarse por la inspección veterinaria en los mataderos del país, por lo que el Ministerio de Salud emitió la Resolución N° 301 de 11 de julio de 1997 "Mediante la cual se establecen las tablas, para el cálculo del servicio de inspección veterinaria en los mataderos del país ...", en la que se distinguen los gastos que deben hacerse, en concepto de servicios del Médico Veterinario, los aportes al Seguro Social, el seguro educativo, el impuesto sobre la renta, el riesgo profesional, el equipo y los materiales.

Señala la representante del Ministerio Público que la reglamentación contenida en el acto impugnado es cónsona con el principio de estricta legalidad, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Política, porque respetó los parámetros y límites establecidos por la ley del Código Sanitario, y porque se hizo en base a la potestad reglamentaria contenida en el artículo 179, numeral 14 de la Constitución, es por ello que el Decreto Ejecutivo N° 223 de 1996 se adecúa a las características que debe tener todo decreto reglamentario.

Dice la señora Procuradora que en el caso que nos ocupa, se observa que el Ministerio de Salud pretende cobrar una tasa por los servicios de inspección veterinaria que presta a los mataderos y que esto no es un capricho, sino que es necesario para efectuar tan importante función de garantizar que la carne que ingerimos esté en óptimas condiciones para el consumo y así evitar alteraciones al orden sanitario del país; todo lo cual la lleva a concluir que no hay duda que la función estatal de proveer salud sí puede ser delegada y que las tarifas que contempla el decreto reglamentario y la resolución que lo complementa, contentivo de las tablas en referencia, son acordes al ordenamiento jurídico y por ello no violan el artículo 690 del Código Fiscal.

En cuanto a la violación del artículo 90 del Código Sanitario, la señora Procuradora de la Administración, indicó que es precisamente esa norma el pilar fundamental de la legalidad del decreto impugnado, ya que el mismo se deriva del principio constitucional del derecho a la salud, desarrollado en el Código Sanitario y que eventualmente se traduce en una serie de decretos ejecutivos que lo complementan.

Por último, señaló que no se violó el artículo 15 del Código Civil, porque es esta norma la que le da valor al decreto reglamentario impugnado y la fuerza jurídica necesaria para que tenga carácter coercitivo y sea de obligatorio cumplimiento (fs. 131 a 153).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala considera que el acto administrativo impugnado no viola los artículos citados del Decreto de Gabinete N° 624 de 1970, puesto que ambos tienen la misma jerarquía normativa y por ello el Decreto Ejecutivo N° 223 de 1996 podía derogar otro decreto reglamentario anterior a él que posea el mismo rango legal, tal como ha sucedido en este caso.

Sin embargo, del estudio de los cargos de violación en contra de los artículos 690 del Código Fiscal, 90 numerales 1 y 5 del Código Sanitario y 15 del Código Civil, se desprende que sí se han producido las alegadas infracciones por las razones que a continuación se exponen.

El Organo Ejecutivo está facultado por el numeral 14 del artículo 179 de la Constitución Política, para reglamentar las leyes a través de los denominados decretos ejecutivos reglamentarios, esta facultad no puede rebasar el marco y límites establecidos por la propia ley que se reglamenta.

El Decreto Ejecutivo N° 223 de 1996, reglamenta los servicios de inspección veterinaria en los distintos mataderos y plantas de procesamiento de productos cárnicos del país y para ello establece la contratación de un servicio de inspección veterinaria oficial, con los médicos veterinarios del Ministerio de Salud mediante un convenio de servicios cuya prestación conlleva el pago de una tasa, o la contratación del servicio a organismos nacionales acreditados por el Ministerio de Salud, el cual será prestado por particulares debidamente autorizados y que debe ser remunerado por los mataderos o plantas, mediante un contrato de servicios profesionales debidamente registrado y refrendado por el Ministerio de Salud (artículo 28 del Decreto Ejecutivo N° 223 de 1996).

El artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 223 de 1996, establece que el servicio de inspección veterinaria prestado por el Ministerio de Salud, así como por particulares debidamente acreditados para ejercer esa función, es un servicio

oficial y tiene su fundamento, según el considerando del acto impugnado, en los artículos 113 y 114 del Código Sanitario, que facultan al Ministerio de Salud para reglamentar los servicios de salud en beneficio de la comunidad.

Los servicios coordinados de salud son, de conformidad con el artículo 113 del Código Sanitario, aquellos en que la Dirección General de Salud Pública sólo tiene ingerencia parcial administrativa o económica o mixta. Estos servicios serán vigilados por la autoridad de salud, quien además aprobará los programas de trabajo y sus presupuestos.

A continuación el artículo 113 del Código Sanitario prevé la delegación de las actividades y de la autoridad en favor de un servicio coordinado, supeditando el mismo a la celebración de un convenio escrito. Dichos convenios por servicios coordinados caducarán tácitamente cuando la parte contribuyente no aportare por dos meses seguidos la cuota de gastos que le corresponda (artículo 114 del Código Sanitario).

El artículo 90 del Código Sanitario faculta al Ministerio de Salud para reglamentar el servicio de inspección veterinaria, lo obliga a mantener este servicio en los mataderos del país y en su numeral 3 establece que son actividades sanitarias locales del Ministerio de Salud, en relación con los alimentos, "reglamentar y controlar los sitios de crianza, encierro o sacrificio de animales destinados a la alimentación;".

Según el artículo 87 del Código Sanitario, las actividades sanitarias locales en relación con los alimentos establecidas por el artículo 90 del Código Sanitario, son atribuciones y deberes del Ministerio de Salud (antes denominado Departamento Nacional de Salud Pública) con relación a la Salud Pública local. Aquél artículo literalamente establece lo siguiente:

> "Artículo 87. De acuerdo con la Constitución, es función esencial del Estado velar por la Salud Pública y los gobiernos locales deben cooperar en esta labor. Por lo tanto corresponderá al Departamento Nacional de Salud Pública desarrollar las actividades de higiene y policía sanitaria municipal, sin perjuicio de que pueda delegar el total o parte de estas funciones en los municipios que se encuentren técnica y económicamente capacitados para ello, según las normas de apreciación que se establecen en el Libro Primero, Título Quinto, Capítulo Primero de este Código." (el resaltado y subrayado es de la Sala)

Como bien lo señala el artículo transcrito, es función única del Estado, a través del Ministerio de Salud, velar por la salud pública. Los gobiernos locales o municipios deberán cooperar, e inclusive es delegable en ellos la función de desarrollar la higiene y policía sanitaria, pero sólo cuando estos tengan la capacidad técnica y económica para ello.

Por su parte, los llamados servicios coordinados de salud, reglamentados en los artículos 113 y 114 del Código Sanitario, sí son delegables a través de convenios escritos que conllevan el pago de un aporte o contribución de parte del beneficiario del servicio.

Visto lo anterior, queda claro que una función esencialmente estatal, que ha sido establecida como obligación por la ley, no puede convertirse a través de un decreto reglamentario en un servicio coordinado de salud, en el cual el Estado sólo tiene injerencia parcial administrativa o económica o mixta. Esto es lo que se pretende con el Decreto Ejecutivo N° 223 de 1996 aquí impugnado, puesto que los servicios de inspección veterinaria, como bien se explicó en el citado fallo del 29 de enero de 1999, al referirse a la Resolución N° 301 de 11 de julio de 1997, mediante la cual se establece la remuneración que debe pagarse al veterinario, técnico o inspector del Ministerio de Salud por los servicios que éstos deben brindar en los mataderos del país, hizo un análisis del contenido de los numerales 1, 3 y 5 del artículo 90 del Código Sanitario llegando a la

siguiente conclusión:

> "Como puede apreciarse, los preceptos legales citados no sólo facultan al Ministerio de Salud para reglamentar el servicio de inspección veterinaria, sino que, además, lo obligan a mantener este servicio en los mataderos del país, tal como se desprende del numeral 5° de la disposición legal transcrita. En otras palabras, la prestación del aludido servicio es responsabilidad directa y permanente del Ministerio de Salud.
>
> La resolución acusada, sin embargo, pretende que tan importante responsabilidad sea asumida por el Ministerio de Salud a través del llamado 'servicio coordinado de salud', regulado en los artículos 113 y 114 del Código Sanitario." (Registro Judicial de enero de 1999, pág. 533)

Por lo antes expuesto, esta Superioridad declaró que la delegación de la prestación del servicio de inspección veterinaria a los mataderos y plantas de procesamiento de productos cárnicos que ha hecho el Decreto Ejecutivo N° 223 de 1996 en organismos nacionales particulares, es ilegal porque dicha función es privativa del Estado por establecerlo así el artículo 90 del Código Sanitario, ley que regula la actividad sanitaria del país. En caso que se quiera delegar esta función o compartirla con entes ajenos al Ministerio de Salud o los Muncipios debidamente capacitados y equipados para ello, deberá modificarse la ley, específicamente el Código Sanitario, mediante otra ley que permita la delegación de esta función ahora meramente estatal.

En cuanto al cargo de violación del artículo 690 del Código Fiscal que remite a los Libros I, II y III de ese cuerpo legal para efectos de la regulación de rentas nacionales provenientes de tasas y derechos, observa la Sala que también fue infringida, conjuntamente con el artículo 90 del Código Sanitario, porque en el Libro II relativo a los servicios nacionales, se establece en los artículos 298 y 299 lo siguiente:

> "Artículo 298. Para los efectos de este Libro se entienden por servicios nacionales los que presta directamente el Estado a los particulares y dan lugar a la percepción, por parte de éste, de tasas o derechos, de ordinario inferiores al costo de tales servicios.
>
> El producto de estas tasas y derechos ingresará al Tesoro Nacional.
>
> Artículo 299. Las disposiciones de este Libro se contraen principalmente a la regulación del producto de tales servicios, pues las de su establecimiento, organización y funcionamiento corresponderán a los Códigos respectivos y a las leyes especiales." (El resaltado es de la Sala).

Observa esta Superioridad que ni en el Código Fiscal ni en el Código Sanitario ni ningún otro código o ley especial se establece el cobro de tasas o derechos por el servicio de inspección veterinaria a los mataderos o plantas de procesamiento de productos cárnicos. Siendo esto así, no puede el Estado establecer en un decreto reglamentario el cobro del servicio, y está por tanto obligado a prestarlo gratuitamente, a menos que legalice su cobro.

Igualmente, el Estado no puede delegar la función de inspección veterinaria en los mataderos y plantas de procesamiento de productos cárnicos en organismos particulares.

Al declarar nula la Resolución N° 301 de 11 de julio de 1997, mediante la sentencia de 29 de enero de 1999, a la cual ya hemos hecho referencia, esta Sala manifestó lo siguiente en cuanto al cobro de una tasa o derecho por los servicios prestados en concepto de inspección veterinaria en mataderos y plantas:

"La referida infracción al artículo 90 del Código Sanitario se dió, además, porque ni esta norma ni ninguna otra disposición de este cuerpo legal facultan al Ministerio de Salud para obligar a los usuarios del servicio de inspección veterinaria a pagar o a asumir parte de los costos derivados de la prestación del mismo. Si bien el Ministerio de Salud podría cobrar por este servicio, el mecanismo legal para establecer tal cobro, es la fijación de una tasa por medio de una Ley y no obligar a los usuarios a asumir parte de los costos, bajo la premisa de que se está frente a un servicio coordinado de salud, como se hace en la resolución que se acusa de ilegal.

En opinión de la Sala, los cambios que pretende introducir el Ministerio de Salud por medio de la Resolución impugnada, conllevan una modificación sustancial en el modelo de prestación del servicio de inspección veterinaria que hasta ahora venía brindando dicho Ministerio, cambios que debieron adoptarse por medio de una Ley formal expedida por la Asamblea Legislativa y no a través de una simple resolución ministerial, que usualmente se dicta para regular asuntos de menor importancia."

Iguales consideraciones a las expuestas en la cita, motivan a esta Superioridad a expresar que no puede, a través de un decreto reglamentario, imponerse y regularse el pago de tasas o contribuciones que la ley formal no ha establecido. Por ello, y en congruencia con el contenido del artículo 15 del Código Civil, que la parte actora también considera infringido, corresponde a esta Superioridad declarar que son inaplicables aquellas disposiciones del Decreto Ejecutivo N° 223 de 1996 que infringen los artículos 690 del Código Fiscal y 90 numerales 1 y 5 del Código Sanitario, y por tanto, debe declararlas nulas.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley:

1. DECLARA QUE SON NULOS POR ILEGALES los siguientes artículos del Decreto Ejecutivo N° 223 de 5 de septiembre de 1996, publicado en la Gaceta Oficial N° 23,125 de 18 de septiembre de 1996: Artículos 1 literla j), 3, 14, 15, 16, 24, 25, 26 y parágrafo, 27, 28 y 29; y

2. DISPONE REFORMAR Y ADICIONAR los artículos 1 literal i), 2, 5, 13, 18 y su parágrafo, y 23 del Decreto Ejecutivo N° 223 de 5 de septiembre de 1996, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 203 de la Constitución Política a la Sala Tercera. Estos artículos quedarán así:

"Artículo 1: En este Decreto los nombres y términos que aparecen a continuación, tendrán el siguiente significado:
...

i) Inspección Oficial: Es la realizada por los Médicos veterinarios del Ministerio de Salud en las plantas de sacrificio."

"Artículo 2: Todas las plantas que se dediquen al sacrificio o procesamiento de animales para el consumo humano, tienen la obligación de contar con un servicio de Inspección Veterinaria Oficial a través de Médicos Veterinarios del Ministerio de Salud."

"Artículo 5: El servicio de la Inspección Veterinaria queda obligado a regirse por la reglamentación sanitaria vigente y por las normas de procedimientos que dicte la División de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Ministerio de Salud."

"Artículo 13: El número de Médicos Veterinarios y auxiliares de Inspección queda sujeto en los casos de las empresas dedicadas al

sacrificio de animales y procesamiento de carnes, en atención a las facilidades que tenga la planta y el volumen de sacrificio y procesamiento diario de acuerdo a los parámetros diseñados por el Ministerio de Salud pra ese fin."

"Artículo 18: El horario de labores de una planta será en jornadas de ocho (8) horas diarias de lunes a viernes o dicho horario puede quedar condicionado al volumen de sacrificio diario.

PARAGRAFO: El horario del servicio de inspección, dado por el Ministerio de Salud, será fijado por la Institución y la empresa ya sea pública o privada, deberá acogerse al mismo."

"Artículo 23: Le corresponde al Ministerio de Salud a través de la División de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, en las plantas de proceso, prestar el servicio de mataderos que operan en el país."

Notifíquese y Publíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARNULFO A. PEÑALBA, EN REPRESENTACIÓN DE RODRIGO HERNAN AROSEMENA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° D.N.8-5-0403 DE 11 DE MARZO DE 1997, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Arnulfo A. Peñalba, actuando en representación de Rodrigo Hernán Arosemena, interpuso demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° D.N.8-5-0403 de 11 de marzo de 1997, dictada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

I. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO

Mediante el acto impugnado se resolvió adjudicar definitivamente una parcela de terreno baldío, a título oneroso, a Luis Miguel Ortega Lasso, ubicada en el Corregimiento de San José, Distrito de San Carlos, Provincia de Panamá, con una superficie de nueve hectáreas y ochocientos diecinueve metros cuadrados con cuarenta y cuatros decímetros cuadrados, comprendida dentro de los linderos generales que corresponden al Plano N° 808-09-12389 de 27 de septiembre de 1996, aprobado por la Dirección de Reforma Agraria.

II. NORMAS QUE SE CONSIDERAN VIOLADAS
Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

El demandante señaló como violados por el acto impugnado, los artículos 44 de la Constitución Nacional, 337 del Código Civil y 29 del Código Agrario.

El examen de la alegada violación del artículo 44 de la Constitución no es competencia de la Sala Tercera, sino del Pleno de la Corte Suprema de Justicia a través de los recursos y demandas procedentes en la jurisdicción

constitucional.

Las normas legales citadas establecen literalmente:

"CODIGO CIVIL.
ARTICULO 337. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.

El propietario tiene acción contra el poseedor de la cosa para reivindicarla.

CODIGO AGRARIO.
ARTICULO 29. Todas las personas naturales o jurídicas que tuvieren tierras en propiedad tienen el derecho a su uso, goce y disposición plena, con las limitaciones que impone la función social de la tierra y en tal condición deben recibir del Estado la protección necesaria y deben cumplir con lo establecido por las disposiciones constitucionales y legales vigentes."

Según la parte actora la Resolución D.N.8-5-0403 de 11 de marzo de 1997, violó en forma directa, por omisión, el artículo 337 del Código Civil al dejar de aplicarlo en claro desconocimieno de los derechos particulares.

A juicio del demandante el artículo 29 del Código Agrario fue violado directamente, por omisión, porque la Reforma Agraria inobservó su contenido y por tanto, no lo aplicó al proceso de adjudicación que concluyó con la resolución aquí impugnada, desconociendo los derechos de particulares en claro desafío a la certeza de los actos jurídicos y de la ley (f. 6).

Por último, y aunque el apoderado judicial de la parte actora no cita expresamente violado el artículo 56 del Código Agrario, al desingar la parte demandada, señaló que lo es "la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, quien debe explicar su conducta y proceder mediante informe, toda vez que mediante falsas declaraciones de LUIS MIGUEL ORTEGA LASSO, adjudica de manera inaudita el globo de terreno mencionado anteriormente, muy a pesar de que a la fecha de la solicitud respectiva, dicho terreno no constituía terreno estatal adjudicable tal como lo establece el artículo 56 del Código Agrario, sino finca titulada y registrada, circunstancia que por Ministerio (sic) de la Ley y mediante el mecanismo establecido por ésta debió ser verificado." (f. 5).

III. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

La Dirección Nacional de Reforma Agraria, rindió su informe de conducta, legible de fojas 13 a 18 del expediente, en los siguientes términos:

"... en la sustanciación de la solicitud de adjudicación de LUIS MIGUEL ORTEGA LASSO, se surtieron los trámites de rigor de los cuales hay que destacar la práctica de la inspección ocular, la mensura y confección del Plano demostrativo del terreno solicitado, la notificación de los colindantes, entre los que se incluye al colindante RODRIGO AROSEMENA con cédula de identidad N° 8-157-1592 y la publicación de los respectivos Edictos; los cuales aparecieron en el Diario Crítica los días 14, 15 y 16 de diciembre de 1996, cuyo término de 15 días señalados en el Código Agrario venció sin que se anunciase o interpusiese oposición ni administrativa ni judicial, en contra de la referida solicitud de adjudicación por tanto, concluído como quedó el procedimiento, se procedió a la expedición de la Resolución de adjudicación correspondiente.

...
El globo de terreno adjudicado tenía carácter de Estatal Rural Baldío, por tanto, su adjudicación era de competencia de la Reforma

Agraria y para tal efecto, observó el procedimiento establecido por la Ley 37 de 1962 o Código Agrario.
...
También debemos advertir que en ejercicio de la función distributiva de las tierras que es la adjudicación, la Reforma Agraria no garantiza la calidad de baldíos de los terrenos que adjudica y que por consiguiente, no está sujeta al saneamiento de la propiedad que transfiere en las adjudicaciones, conforme lo establece claramente el Artículo 71 del Código Agrario. En circunstancias como estas en la que se cumplieron con todas las formalidades legales y se presentasen reclamos fundados y legítimos, la referida excerta legal prevé el procedimiento y los mecanismos a observarse.
...

Sin embargo, en este caso específico, al proceder a la revisión de lo actuado, hemos observado lo siguiente:

1. El informe de la localización regional suministrado por el agrimensor que levantó el Plano demostrativo del terreno, demuestra una ubicación distinta y ajena al Plano levantado con anterioridad aspecto que impidió que se detectara el traslape o sobreposición que se ha presentado con la aprobación del Plano a nombre de LUIS MIGUEL ORTEGA LASSO.

2. Que el impugnante RODRIGO AROSEMENA, se notificó como colindante, sin embargo, no interpuso oportunamente la oposición.

3. Que esta Dirección Nacional no le consta que el peticionario LUIS MIGUEL ORTEGA LASSO tuviese tramitando la adjudicación a sabiendas de la titulación anterior. En el supuesto que la afirmación del demandante fuera cierto, no es menos cierto que éste también tenía conocimiento de los trámites de titulación que efectuaba LUIS MIGUEL ORTEGA LASSO, por ser la tierra que éste solicitaba, colindante con la que él ocupa sin que interpusiera oposición dentro del Proceso de Adjudicación o denunciara hechos que oportunamente esta Dirección hubiera investigado y solucionado." (fs. 13 a 18).

IV. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante su Vista Fiscal N° 15 de 21 de enero de 1998, la señora Procuradora de la Administración solicitó a esta Sala que declare que no es ilegal la Resolución N° D.N. 8-5-0403, de 11 de marzo de 1997, dictada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, porque en el presente caso se cumplió fielmente el procedimiento previsto en el Código Agrario.

La señora Procuradora explicó que, a pesar que en este caso se ha dado un traslape o sobreposición de la finca adjudicada, básicamente se siguieron los procedimientos establecidos en el Código Agrario para la expedición del acto administrativo de adjudicación de tierra ahora impugnado, entre los que se encuentran la notificación a los colindantes y la publicación de los edictos.

Destacó que el artículo 71 del Código Agrario establece que la Dirección Nacional de Reforma Agraria no garantiza la calidad de baldíos de los terrenos que adjudica y por consiguiente, no está sujeto al saneamiento de la propiedad que transfiere en las adjudicaciones, sin embargo, si habiéndose cumplido las formalidades legales para las adjudicaciones, se presentasen reclamos fundados de terceros que comprueben la propiedad del terreno adjudicado, la Dirección Nacional de Reforma Agraria procederá a expropiar las tierras del propietario original, manteniendo la validez de las adjudicaciones hechas.

La representante del Ministerio Público también indicó que la Sala Tercera, en sus fallos de 26 de abril de 1993 y de 8 de enero de 1997, explicó que esta norma persigue dar autenticidad a las adjudicaciones hechas a terceros (fs. 20

a 29).

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para determinar si la resolución atacada ha violado el ordenamiento jurídico aplicable a las adjudicaciones de terrenos por parte de la Reforma Agraria, se confrontará la actuación administrativa surtida con el procedimiento legal establecido en las normas relativas.

Los artículos del Código Agrario que describen el procedimiento para las adjudicaciones a particulares son los siguientes:

> "Artículo 96. Las solicitudes de adjudicación de tierras estatales a título gratuito u oneroso deberán ser dirigidas al Funcionario Provincial designado por la Comisión de Reforma Agraria, el cual las sustanciará y remitirá a la Dirección General de la Reforma Agraria. La solicitud se hará mediante formulario preparado al efecto por la Comisión de Reforma Agraria, cuyos formularios serán suministrados sin costo y no causarán derecho de timbre cuando se trate de solicitudes a título gratuito; se les adherirán timbres por valor de dos Balboas (B/.2.00), más el timbre de soldado de la Independencia cuando se trate de solicitudes a título oneroso.
> ...
> Artículo 98. Una vez presentada la solicitud, la Comisión de Reforma Agraria autorizará el peticionario para que abra las trochas respectivas, y por conducto del Alcalde o del Corregidor correspondiente, enviará comunicaciones a los colindantes a fin de que se notifiquen personalmente por escrito, en un término no mayor de quince (15) días y hagan valer sus derechos en el momento de la inspección o mensura.
> ...
>
> Artículo 100. Abiertas las trochas el interesado lo comunicará por escrito o verbalmente al Funcionario Sustanciador para que éste fije la fecha de la Inspección, la cual se hará en un término no mayor de quince (15) días a partir de la fecha en que se ha presentado la solicitud.
>
> Artículo 101. Previa constancia de las notificaciones a los colindantes, si los hubiere, y en la forma establecida en este Decreto Ley, así como de que las trochas han sido abiertas, la Comisión de Reforma Agraria, por medio de un Agrimensor bajo su dependencia, hará inspeccionar el terreno cuya mensura se solicita para establecer si las tierras solicitadas son o no adjudicables. En las solicitudes a título oneroso, siempre que sea posible, el Agrimensor privado que habrá de practicar la mensura, acompañará al Agrimensor de la Comisión de Reforma Agraria en esta inspección.
>
> Parágrafo. Durante la inspección a que se refiere el inciso anterior tendrá también lugar la conferencia de avenimiento a que se refiere el Artículo 103, sin perjuicio de la oposición que pueda instaurar posteriormente quien se crea perjudicado, según lo prescribe el Artículo 133 de este Código.
>
> Artículo 102. Si las tierras solicitadas son estatales adjudicables y no están ocupadas, el agrimensor de la Comisión de Reforma Agraria que haya efectuado la inspección, autorizará al agrimensor del peticionario para que lleve a efecto la mensura y prepare el plano correspondiente cuando se trate de una solicitud a título oneroso
> ...
>
> Artículo 103. Si alguno o varios colindantes se oponen a la mensura, el agrimensor de la Comisión de Reforma Agraria estudiará las quejas

presentadas con miras a una avenencia sobre el terreno.

Si no hubiere avenencia, el funcionario sustanciador, acompañado del agrimensor de la Comisión de Reforma Agraria, cuando se trate de título gratuito, y de éste y del Agrimensor privado, cuando se trate de título oneroso, practicará una inspección ocular con el fin de establecer a quién le asiste la razón. Los fallos de este funcionario serán apelables ante la Dirección de la Comisión de Reforma Agraria.

...

Artículo 105. Practicada la mensura, la oficina provincial de la Comisión de Reforma Agraria preparará el plano cuando se trate de una solicitud a título oneroso, el agrimensor privado levantará el plano correspondiente y lo presentará al funcionario sustanciador junto con un informe circunstanciado de la mensura.

En dicho informe se harán constar los linderos, la superficie, el nombre de los colindantes y ocupantes y cualquier otra información que considere conveniente.

Artículo 106. El funcionario sustanciador, una vez estudiado el plano, lo remitirá junto con el expediente a la Dirección General de la Comisión de Reforma Agraria para su estudio y aprobación.

Artículo 107. Si el plano es aprobado por la Dirección General de la Comisión de Reforma Agraria, ésta archivará el original y devolverá tres (3) copias al funcionario sustanciador junto con el expediente para que se tramite lo referente a la adjudicación.

Artículo 108. Recibido el expediente, el funcionario provincial de la Comisión de Reforma Agraria hará publicar la solicitud mediante la fijación de edictos en el Despacho de la Comisión de Reforma Agraria y en la Alcaldía o Corregiduría del lugar donde se solicita el terreno. Estos edictos serán publicados en un periódico diario de gran circulación durante tres (3) días consecutivos y una (1) vez en la Gaceta Oficial. Los edictos tendrán una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

Páragrafo. Para los efectos de la publicación de los Edictos en la Gaceta Oficial, bastará la presentación al Despacho de la Comisión de Reforma Agraria del recibo de pago de los derechos efectuados en la Dirección Provincial de Ingresos respectiva.

Artículo 109. Transcurrido este término, si no hay oposición el Funcionario Sustanciador enviará el expediente completo a la Dirección General de la Reforma Agraria para que ésta, si lo cree pertinente, proceda a dictar la Resolución de Adjudicación.

...

Artículo 114. La Comisión de Reforma Agraria, tomando en cuenta la cantidad de tierras de propiedad del solicitante, fijará los precios de venta de las tierras estatales que venda mediante los reglamentos de clasificación de tierras estatales que venda mediante los reglamentos de clasificación de tierras que adopte, pero el precio de venta a título oneroso no podrá ser menor de seis balboas (B/.6.00) por hectárea, valor que servirá de base para la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad.

...

Artículo 117. Cuando se trata de una adjudicación a título oneroso, la Comisión Agraria extenderá al comprador el título de propiedad correspondiente al efectuar el pago, mediante la Resolución de que trata el Artículo 110 ..."

En el expediente contentivo de la actuación administrativa de la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que culminó con la expedición de la Resolución N° 8-5-0403 de 11 de marzo de 1997 impugnada con la presente demanda contencioso administrativa de nulidad, se observan los siguientes documentos que acreditan el procedimiento administrativo seguido para emitir la resolución de adjudicación de tierras al señor Luis Miguel Ortega Lasso:

1. Formulario de 22 de julio de 1996 de solicitud de adjudicación a título oneroso del señor Luis Miguel Ortega Lasso, de una parcela de tierra de 9 hectáreas y 819 metros cuadrados en El Harino, Corregimiento de San José en el Distrito de San Carlos (f. 1 expediente administrativo).

2. Autorización del funcionario sustanciador de la Reforma Agraria de 22 de julio de 1996, para abrir las trochas correspondientes lo más pronto posible (f. 2 expediente administrativo).

3. El 22 de julio de 1996, el agrimensor Esteban Sánchez M., en asocio con el agrimensor Salomón Fernández R., informan que hicieron la mensura del globo de terreno ubicado en la comunidad de El Harino, Corregimiento de San José, Distrito de San Carlos, y que el mismo tiene un área de 9 hectáreas más 819.44 metros cuadrados con los siguientes linderos:

NORTE: Rodrigo Arosemena y Luis Miguel Ortega.
SUR: Ramón Fonseca.
ESTE: Ramón Fonseca y camino de acceso al terreno.
OESTE: Rodrigo Arosemena.

Dicho informe señala que al momento de hacer la mensura no hubo oposición de terceras personas, ni se encontró vestigios de yacimientos ni petróleo (f. 4 expediente administrativo).

4. El 22 de julio de 1996 se notifica la solicitud de adjudicación de la parcela mencionada a los colindantes, mediante diligencia de la Corregiduría de San Carlos. Entre los notificados se encuentra la firma del señor Rodrigo Arosemena con cédula N° 8-157-1592 (f. 6 expediente administrativo).

5. El levantamiento del plano N° 808-09-12389 de 27 de septiembre de 1996, fue hecho por el señor Salomón Fernández, revisado por el señor Cerrud y aprobado por el señor Julio Adames. El mismo establece que el globo de terreno cuya adjudicación se pide tiene un área de 9 hectáreas más 0.819.44 metros cuadrados.

6. El 6 de diciembre de 1996 se expidió el Edicto N° 218-DRA-96, en el cual el funcionario sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria en la Provincia de Panamá, hace saber que el señor Luis Miguel Ortega Lasso, solicitó, según el plano aprobado N° 808-09-12389, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra baldía nacional adjudicable, con una superficie de 9 hectáreas más 819.44 metros cuadrados, ubicada en El Harino, Distrito de San Carlos, conlindante al norte con Rodrigo Arosemena, al sur con Ramón Fonseca y Rodrigo Arosemena, al este con Luis Miguel Ortega Lasso, Ramón Fonseca y camino de tierra y al oeste con Rodrigo Arosemena. Este edicto fue fijado en lugar visible del despacho de la Reforma Agraria y en la Alcaldía del Distrito de San Carlos (según consta de los sellos de dichas instituciones impresos en el original y la copia del edicto) y se le entregaron las copias correspondientes al interesado para la publicación que ordena el artículo 108 del Código Agrario (fs. 8 y 9 expediente administrativo).

7. Foliadas 11, 12 y 13 en el expediente administrativo, resposan las publicaciones en el diario Crítica Libre, los días 14, 15 y 16 de diciembre de 1996, del edicto citado, y a foja 10 consta el original del pago en el Ministerio de Hacienda y Tesoro de la publicación por una vez del edicto 218-DRA-96 en la Gaceta Oficial.

8. Mediante el recibo N° 2626 expedido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, se deja constancia que el señor Luis Miguel Ortega Lasso, con cédula de identidad personal N° 8-216-170, pagó el 11 de diciembre de 1996, la suma de B/.60.00 por la tierra adjudicada en virtud de la solicitud N° 8-181-96 (f. 15 expediente administrativo).

Verificados los datos y requisitos necesarios para la adjudicación de la tierra solicitada (fs. 17 a 20 expediente administrativo) se emitió la Resolución N° 8-5-0403 de 11 de marzo de 1997, ahora impugnada (Artículos 109, 110 y 117 del Código Agrario).

En el expediente del proceso administrativo no se observa ninguna oposición al mismo y como la solicitud cumplió con todos los requerimientos legales de publicidad exigidos por el Código Agrario se expidió la resolución impugnada con la presente demanda.

Sin embargo, aunque se siguió con estricto apego el procedimiento formal para la adjudicación del terreno, esta Sala ha podido constatar que la resolución impugnada sí tiene vicios de ilegalidad, puesto que el procedimiento de adjudicación se inició con fundamento en la premisa falsa de que la finca solicitada constituía tierra estatal baldía y por ello era adjudicable.

De acuerdo con el informe pericial que más adelante se transcribe, el globo de terreno no era tierra estatal, y las 9 hectáreas más 0,819.44 metros cuadrados que forman la finca N° 158,641, nacida de la resolución de adjudicación N° 8-5-0403 de 11 de marzo de 1997, traslapan en su totalidad únicamente la finca N° 179,447 con 11 hectáreas y 6,893 m2, segregada de la finca N° 1545 mediante resoluciones dictadas por los tribunales jurisdiccionales competentes en el proceso de prescripción adquisitiva interpuesto por el señor Luis Miguel Ortega Lasso (fs. 97 a 119).

El citado informe pericial fechado el 21 de julio de 1999, fue rendido en el presente proceso contencioso administrativo de nulidad, por los peritos que participaron en la inspección judicial en el área, prácticada el 15 de julio de 1999, en los siguientes términos:

> "SEGUNDO: El acto de adjudicación del globo de terreno a que hacemos referencia en el primer punto, SE TRASLAPA INICIALMENTE sobre parte de la finca N° 1545, inscrita l Tomo 118, Folio 230, Reforma Agraria, Provincia de Panamá y que según constancias del Registro Público, esta finca (1545) es de propiedad de REYES ORTEGA LASSO Y JUNA ERNESTO RUIZ, a la cual hace referencia el plano N° 52-3927, aprobado por la Dirección Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda y Tesoro en el año de 1956.
>
> TERCERO: Que de igual manera la adjudicación realizada mediante la Resolución N° DN-8-5-0403, SE TRASLAPA ACTUALMENTE sobre la finca segregada de la finca N° 1545 (mencionada en el punto anterior), esto es, sobre la finca N° 179,447, inscrita al Rollo 32440, Documento 1, Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, constante de una superficie de once (11) Hectáreas y 6,893 M2, cuyo plano se distingue con el N° 80909-86511, aprobado por Catastro del Ministerio de Hacienda, como consecuencia de la inscripción por parte del Registro Público de la Sentencia del Juzgado Primero del Circuito de Panamá Ramo Civil, de fecha 29 de Julio de 1983, dictada a favor de LUIS MIGUEL ORTEGA LASSO, dentro del Proceso Ordinario de Prescripción Adquisitiva de Dominio propuesto por éste en contra de REYES ORTEGA LASSO Y JUAN ERNESTO RUIZ.
>
> CUARTO: Que como consecuencia de la Inscripción por parte del Registro Público de la sentencia a que se hace referencia en el punto primero de este informe, podemos concluir que ACTUALMENTE SE TRASLAPA UNICAMENTE sobre la finca 179,447, inscrita a Rollo 32,440,

Documento 1, Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, que se segregó como pudimos observar de la finca 1545, quedándole a ésta (1545) un resto libre de trece (13) Hectáreas y 7775 M2 y 16 DM2, según constancias del Registro Público." (fs. 81 y 82).

De conformidad con la prueba transcrita se cometió un error al considerar que las tierras solicitadas eran estatales adjudicables y que no estaban ocupadas, este error también fue admitido por el funcionario demandado en su informe explicativo de conducta transcrito, sin embargo, aunque el artículo 71 del Código Agrario, exime a la Comisión de Reforma Agraria de garantizar la calidad de baldíos de los terrenos que adjudica y, por consiguiente, del saneamiento de la propiedad que transfiere en las adjudicaciones, debe considerarse que no pueden coexistir dos o más títulos de propiedad simultáneos y de un mismo dueño sobre un mismo bien inmueble, porque traería como consecuencia la doble titulación.

En el presente caso ha ocurrido que se ha concedido un título de propiedad sobre un terreno que ya tenía un título de propiedad a favor de un particular, que resultó ser la misma persona a la cual Reforma Agraria le adjudicó la finca.

Mediante la sentencia de 29 de julio de 1983, el Juzgado Primero del Circuito Civil de Panamá declaró la prescripción adquisitiva de una porción de la finca 1545, trasladando el dominio al señor Luis Miguel Ortega Lasso de 11 hectáreas con 6,893 m2, y la nueva finca se inscribió en el Registro Público como la finca 179,447 inscrita al rollo 32,410, documento 1, Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá.

Las tierras patrimoniales estatales son bienes de propiedad privada cuyo dominio directo puede ser transferido por el Estado a través de la Reforma Agraria, a particulares, a título oneroso o gratuito mediante un procedimiento de adjudicación que culmina con la emisión de la resolución que constituye el título de propiedad, el cual debe ser inscrito en el Registro Público, para que pueda surtir efectos contra terceros (artículo 1761 del Código Civil). Sin embargo, el artículo 1762 del Código Civil señala que la inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley.

En el presente caso, el hecho de que la tierra adjudicada por Reforma Agraria no fuera estatal baldía, sino de propiedad privada no causó ningún perjuicio a su anterior propietario, porque el globo de terreno afectado es de propiedad del mismo solicitante, en virtud del título otorgado por la jurisdicción ordinaria en el proceso de prescripción adquisitiva, y por ello no es necesario que se le restituya al señor Luis Miguel Ortega Lasso el dinero que él mismo pagó a la Reforma Agraria por la adquisición a título oneroso de un globo de terreno que ya era de su propiedad, pero la adjudicación es ilegal, así como el título de propiedad que la misma le confirió a través de la Resolución N° D.N.8-5-0403 de 11 de marzo de 1997, porque la tierra no era estatal adjudicable, sino propiedad privada, título que ya estaba inscrito en el Registro Público.

Al confrontar el procedimiento de la adjudicación de la parcela de terreno solicitada por el señor Luis Miguel Ortega Lasso a la Reforma Agraria, con los artículos 337 del Código Civil y 29 del Código Agrario, la Sala llega a la conclusión que no se violaron los mismos, pero sí violó, en forma directa, por omisión, el artículo 56 del Código Agrario, según el cual las tierras estatales adjudicables que no estén comprendidas entre las ocupadas o parceladas serán de libre adjudicación de acuerdo con las formalidades de este Código y como en este caso la finca no era estatal adjudicable sino propiedad privada de una persona natural, no podía ser adjudicada mediante un nuevo título de propiedad.

Así las cosas, debe declararse la ilegalidad de la Resolución N° D.N.8-5-0403 de 11 de marzo de 1997.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia,

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULA POR ILEGAL, la Resolución N° D.N. 8-5-0403 de 11 de marzo de 1997, dictada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Notifíquese y Publíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA IRENE ABREGO, EN REPRESENTACIÓN DEL INGENIERO ROBERTO BARRAZA BENITEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL ACTA DE PROCLAMACIÓN DEL INGENIERO HÉCTOR MONTEMAYOR, COMO RECTOR ELECTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ PARA EL PERÍODO 1998-2003, EMITIDA POR EL GRAN JURADO DE ELECCIONES Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Irene Abrego, en representación del ingeniero ROBERTO BARRAZA BENITEZ, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, el Acta de Proclamación del ingeniero HECTOR MONTEMAYOR como Rector Electo de la Universidad Tecnológica de Panamá, emitida por el Gran Jurado de Elecciones de ese centro de estudios superiores.

Encontrándose el negocio en la etapa de resolver, los Magistrados que integran la Sala, con fundamento en el artículo 73 de la Ley N° 135 de 1943, estiman necesario dictar un auto para mejor proveer a fin de solicitar a la Secretaría General de la Asamblea Legislativa que remita a la Sala copia autenticada de las actas correspondientes al primer, segundo y tercer debate del proyecto de Ley adoptado como "Ley N° 57 del 26 de julio de 1996", por la cual se reforman varios artículos de la Ley N° 17 de 1984 (Orgánica de la Universidad Tecnológica de Panamá) y se dictan otras disposiciones.

Las copias autenticadas de las referidas actas son necesarias para conocer las discusiones legislativas concernientes al artículo 3 de la Ley N° 57 de 1996, por el cual se modificó el artículo 35 de la Ley N° 17 de 1984.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE que, por Secretaría de la Sala, se solicite a la Secretaría General de la Asamblea Legislativa copia autenticada de las actas correspondientes al primer, segundo y tercer debate del proyecto de Ley adoptado como "Ley N° 57 de 26 de julio de 1996", por la cual se reforman varios artículos de la Ley N° 17 de 1984 (Orgánica de la Universidad Tecnológica de Panamá) y se dictan otras disposiciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICDO. GABRIEL MARTINEZ GARCES, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES LOS ARTÍCULOS PRIMERO, TERCERO, QUINTO Y SEXTO DEL DECRETO N 194-LEG DE17 DE SEPTIEMBRE DE 1999, EXPEDIDO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Licenciada MAUREEN REY, actuando en nombre y representación de LA COMISIÓN DE LIBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR (CLICAC), ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contencioso administrativa de nulidad, para que declare nulo, por ilegal, la Resolución No. 1 de 8 de febrero del 2000, emitida por la Junta de Carnaval 2000 del Distrito de Penonomé y el Municipio de Penonomé.

La Licenciada Maureen Rey, junto con las pretensiones de la demanda, solicitó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 1 de 8 de febrero del 2000, expedida por la Junta de Carnaval 2000 del Distrito de Penonomé y el Municipio de Penonomé. Dicha solicitud de suspensión fue sustentada en los siguientes términos:

> **"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943 la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo podrá suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave. En el caso que nos ocupa, la Resolución No. 1 de 8 de febrero de 2000 es un Acuerdo de carácter administrativo que afecta a todos las personas naturales o jurídicas dentro del Distrito de Penonomé. En este caso, según la jurisprudencia de este Augusto Tribunal de Justicia, es de carácter general y, como se ha expuesto en párrafos anteriores, violenta el orden público económico y la integridad del ordenamiento jurídico, a la luz de las disposiciones contempladas en la precitada Ley 29 de 1996.**
>
> **Lo anterior tiene lugar, en virtud de que, el Resuelto lesiona de forma actual, inmediata y manifiesta el ordenamiento jurídico y el principio de legalidad toda vez que el mismo es manifiestamente incompatible con las disposiciones de la precitada Ley de competencia, cuya finalidad es proteger el interés superior del consumidor.**
>
> **SOLICITUD ESPECIAL:**
>
> **Solicitamos respetuosamente a los Honorables Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo que a fin de preservar el orden público económico y el ordenamiento jurídico se pronuncien sobre las violaciones resultantes de la Resolución No. 1 de 8 de febrero de 2000, toda vez que la variedad en productos, marcas, calidades y precios que los consumidores habrían podido tener a su disposición, en el caso de que se hubiera diseñado el proceso de concesión con el objetivo de garantizar la concurrencia de más de un agente económico en las actividades de expendio de cervezas durante los carnavales en los puestos provisionales en el Distrito de Penonomé, constituye una disminución del bienestar de los consumidores.**
>
> **Una de las manifestaciones directas de las condiciones de competencia y concurrencia en un mercado es el proceso de rivalidad, el que produce la diversidad que se ha nombrado." (fs. 15-16).**

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia puede suspender los efectos del acto, resolución o disposición acusada si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

La Sala en reiteradas ocasiones ha señalado que para que se procede a la solicitud de suspensión provisional de un acto administrativo impugnado, es necesario probar la existencia de un perjuicio notoriamente grave, pero debe tratarse de un perjuicio actual, es decir, presente, no pasado, ni hacia el futuro.

En el presente caso en estudio, no le es posible acceder a la petición de suspensión provisional, puesto que no existe el elemento de urgencia que debe sustentar la medida cautelar pedida, toda vez que la Resolución impugnada, Resolución No. 1 de 8 de febrero del 2000, expedida por la Junta de Carnaval de Municipio de Penonomé, surtió sus efectos durante los cuatro días del Carnaval de Penonomé del año 2000, es decir del día cuatro (4) al siete (7) de marzo del 2000, entonces en este momento, no estamos frente a un perjuicio actual, por lo que consideramos, no procede decretar la medida cautelar solicitada.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión provisional de la Resolución No. 1 de 8 de febrero del 2000, emitida por la Junta de Carnaval del Municipio de Penonomé y el Municipio de Penonomé.

Notifíquese.

(fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEJANDRO FERRER, EN REPRESENTACIÓN DE CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS LITERALES "D" Y "E" DEL ARTÍCULO PRIMERO Y EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ACUERDO N° 7 DE 26 DE AGOSTO DE 1999, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHAME. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Alejandro Ferrer en nombre y representación de CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A. ha propuesto demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo por ilegales los literales d y e del artículo primero y el artículo segundo del Acuerdo N° 7 de 26 de agosto de 1999, dictado por el Consejo Municipal del Distrito de Chame publicado en la Gaceta Oficial No. 23,996 de 22 de febrero de 2000.

SOLICITUD DE SUSPENSION PROVISIONAL

La petición de suspensión provisional esta fundamentada en los siguientes argumentos:

> "Es evidente que el perjuicio económico que causaría es grave, actual e inminente, como lo exige la Ley y la jurisprudencia para acceder a la suspensión, ya que el Acuerdo impugnado autoriza la imposición de un gravamen sobre actividades que ya han sido previamente gravadas por la Nación, y, de permitirse su ejecución,

> las empresas dedicadas a brindar este servicio público se verían obligadas a pagar un impuesto municipal en adición al tributo nacional que actualmente pagan al Ente Regulador de los Servicios Públicos ...
>
> ...
>
> En nuestro caso, la violación es clara, manifiesta y notoria por tres razones:
>
> Primero porque la imposición de un doble tributo está expresamente prohibida por la Ley; en segundo lugar, porque el acto impugnado, en manifiesta violación del numeral 8 del artículo 17 y del artículo 74, de la Ley No. 106 de 1973, está gravando actividades con incidencia fiscal extradistritorial, como lo es la de telecomunicaciones, sin que exista una Ley que específicamente autorice a los Municipios a la imposición de dicho tributo; y tercero, porque el artículo 3 de la Ley N° 26 de 29 de enero de 1996, modificado por el artículo 43 de la Ley N° 24 de 30 de junio de 1999, expresamente establece que la actividad de telecomunicaciones, así como los bienes dedicados a la prestación de los mismos no podrán ser gravados con tipo de tributo de carácter municipal, con excepción de los impuestos de anuncios y rótulos, placas para vehículos y construcción de edificaciones y reedificaciones".

CUESTIONES PREVIAS

Conforme al artículo 73 de la Ley N° 135 de 1943, la Sala Tercera puede suspender provisionalmente los efectos del acto, resolución o disposición acusada si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave. En las acciones contencioso-administrativas de nulidad, ese perjuicio está constituido por la violación ostensible o palmaria del ordenamiento jurídico.

Adicionalmente debemos señalar que la Sala puede suspender las acciones relativas al pago de tributos municipales, ya que, según lo ha interpretado esta Corporación de Justicia, el artículo 74 de la Ley 135 de 1943, que impide la suspensión provisional del pago de impuestos, contribuciones o tasas, no es aplicable en materia de tributos municipales. La Sala ha hecho una interpretación restrictiva de la norma y ha considerado que esta prohibición rige sólo respecto a tributos fijados por ley, y no a tributos creados mediante acuerdos municipales, acciones cuyos efectos sí están sujetos a la potestad discrecional de la Sala de ser suspendidos provisionalmente (ver Resoluciones de 19 de enero de 1996, de 9 de julio de 1993 y de 15 de enero de 1992).

DECISION DE LA SALA

La solicitante alega dentro de su demanda que su actividad de telecomunicaciones es considerado un servicio público y es además extradistrital y el Concejo Municipal del Distrito de Chame la está gravando con un impuesto en abierta violación del artículo 3 de la Ley N° 26 de 29 de enero de 1996, modificado por la Ley N° 24 de 30 de junio de 1999 que prohíbe a los municipios gravar con cualquier tributo, la actividad de las telecomunicaciones o de los bienes dedicados a la prestación de la misma, al indicar que los mismos solamente estarán gravados con tributos de carácter nacional.

Con arreglo al examen preliminar de este cargo de violación, pareciera deducirse que el Ente Municipal pudo haber desconocido la limitante que prevé la Ley antes citada, toda vez que, de las pruebas aportadas por el peticionario se desprende que la concesión administrativa otorgada a su mandante para la explotación del servicio de telecomunicaciones sobrepasa los límites, no sólo del Distrito de Panamá, si no de la Provincia de Panamá.

Por otro lado, alega la peticionaria que mediante el acto impugnado se ha producido la figura de la doble tributación. Según la demandante ya ha sido gravada por el Estado con un impuesto por el servicio público que presta,

mediante el artículo 3 de la Ley N° 26 de 1996, modificado por el artículo 43 de la ley N° 24 de 30 de junio de 1999 por la cual se crea el Ente Regulador de los Servicios Públicos, cuyo texto aquí transcribimos:

> "Artículo 43. El artículo 3 de la Ley 26 de 1996 queda así:
>
> Artículo 3. Competencia. El Ente Regulador ejercerá el poder de regular y controlar la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio, televisión, así como la transmisión y distribución de gas natural en adelante llamados servicios públicos, según lo establecen la presente Ley y las leyes sectoriales.
>
> Por tener incidencia de carácter nacional y por ende, extradistrital y para los fines legales correspondientes, los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, así como la transmisión y distribución de gas natural, y los bienes dedicados a la prestación de tales servicios, solamente estarán gravados con tributos de carácter nacional, entre ellos, la contribución nacional establecida en el artículo 5 de la presente ley. Por lo tanto, dichas actividades, servicios o bienes destinados a la prestación de los servicios públicos antes mencionados, no podrán ser gravados con ningún tipo de tributo de carácter municipal, con excepción de los impuestos de anuncios y rótulos, placas para vehículos y construcción de edificaciones y reedificaciones.
>
> La administración de los concesionarios que prestan los servicios públicos antes mencionados, no estará sujeta a ninguna medida cautelar.
>
> Adicionalmente, los bienes inherentes a la prestación de los servicios públicos de radio y televisión, tampoco serán sujetos a medidas cautelares, salvo que estos bienes garanticen obligaciones contractuales contraídas por sus propietarios"
> (El subrayado es de la Sala)

Frente a lo expresado por el solicitante de la medida cautelar previa, considera esta Corporación Judicial que prima facie se advierte una presunta transgresión al artículo 3 de la Ley N° 26 de 1996, modificado por el artículo 43 de la ley N° 24 de 30 de junio de 1999, dado que lo previsto en la disposición transcrita alude a que el servicio de telecomunicaciones, entre otros servicios públicos, sólo podrá ser gravado con impuestos nacionales, y no municipales. Esto evidencia, en principio, lo que la doctrina reconoce como fumus bonis iuris, es decir, apariencia de buen derecho en la pretensión de ilegalidad ejercitada por CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A.

Las situaciones antes anotadas obligan a0 esta Sala acceder a lo solicitado por la empresa afectada con el gravamen municipal, por lo es de lugar ordenar la suspensión de las normas pertinentes del Acuerdo N° 7 de 26 de agosto de 1999, dictado por el Consejo Municipal del Distrito de Chame. El tenor de los literales d y e del artículo primero y el artículo segundo del Acuerdo N° 7 de 26 de agosto de 1999, dictado por el Consejo Municipal del Distrito de Chame es el siguiente:

> "CODIGO 1. 1. 2. 5. 54 ESTUDIOS FOTOGRAFICOS TELEVISIVOS Y COMUNICACIONES.
>
> 1. Para el gravamen de los establecimientos anunciados, se tomará en consideración área del local, capacidad del equipo, volumen de operaciones, cobertura e ingreso brutos.
> ...
> d). Empresas de servicios de comunicación pagarán por mes: 500.00 a

5.000.00

e). Antenas receptoras y transmisoras comerciales pagarán por mes de 50.00 a 500.00"...

Hacemos la salvedad que las anteriores consideraciones, en modo alguno constituyen un criterio final o determinante para el pronunciamiento de fondo que en su momento será emitido por quienes integran esta Máxima Corporación de Justicia, misma que gira en torno a la legalidad o ilegalidad del gravamen de que han sido objeto CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A. por parte del Municipio de Chame.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SUSPENDE PROVISIONALMENTE los efectos de los literales d y e del artículo primero y el artículo segundo del Acuerdo N° 7 de 26 de agosto de 1999, dictado por el Consejo Municipal del Distrito de Chame publicado en la Gaceta Oficial No. 23,996 de 22 de febrero de 2000, pero sólo en relación a las empresas de servicio público dedicadas a la telecomunicaciones.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ZULAY L. ROSRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACION AMIGOS DE LOS ANIMALES, PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 Y 14 DE LA RESOLCUIÓN NO. 022 DE 28 DE ENERO DE 2000, DICTADA POR EL MINISTRO DE SALUD. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

VISTOS:

La licenciada Zulay L. Rodríguez, actuando en nombre y representación de la ASOCIACION AMIGOS DE LOS ANIMALES, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declaren nulos, por ilegales, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12,13 y 14 de la resolución No. 022 de 28 de enero de 2000, dictada por el Ministro de Salud.

En la parte final de su libelo, la licenciada Rodríguez solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado en los siguientes términos:

"A.- Existe un perjuicio notoriamente grave (periculum in mora) por cuanto que el perjuicio que se deriva del acto administrativo atacado como ilegal menoscaba los derechos de los animales, y de los dueños de las mascotas, lo cual repercute en un costo económico al establecerse que los mismos, deben ser trasladados a otros sitios en donde le sea permitido tenerlos o eliminarlos (asesinarlos) por cuanto pueden ser mascotas costosas, y/o que se encuentran bajo tratamientos veterinarios, por embarazo, u otras causas, y porque se pueden producir daños psicológicos y económicos para los niños, discapacitados, impedidos físicos y/o dueños de sus mascotas.

B.-Igualmente se debe tomar en cuenta que el acto administrativo, acusado de ilegalidad manifiestamente y de manera clara y notoria tiene una apariencia de ilegalidad (Fumus Boni Iuris) al atentar contra todos los principios humanitarios para con los animales, y el derecho de propiedad (de semovientes) de los humanos, sin que exista

justificación en riesgos de epidemias, con lo que la medida de suspensión es urgente." (fs. 93-94)

La suspensión en estos casos de nulidad procede si el acto administrativo infringe claramente el principio de separación de poderes o si puede entrañar un perjuicio a la integridad del ordenamiento jurídico por violar en forma manifiesta una norma jurídica de rango superior.

El artículo 73 de la Ley 135 de 1943 faculta a la Sala Tercera para suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, cuando, a su juicio, sea necesario para evitar un perjuicio "notoriamente grave". Esta medida cautelar tiene carácter provisional, motivo por el cual la Sala Tercera puede modificar la resolución judicial mediante la cual se decrete dicha medida siempre y cuando la Sala considere que existen razones suficientes para evitar aquella medida. En los procesos de nulidad, procede la suspensión del acto administrativo como medida cautelar para evitar no sólo perjuicios patrimoniales sino, sobre todo, cuando puede producirse una lesión al principio de separación de poderes o la integridad del ordenamiento jurídico.

La Sala observa que los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 y 14 de la resolución No. 022 de 28 de enero de 2000, dictada por el Ministro de Salud establecen lo siguiente:

"ARTICULO PRIMERO: Las siguientes disposiciones sanitarias, tienen como objeto regular la tenencia de animales en viviendas unifamiliares, apartamentos y condominios en áreas urbanas, con la finalidad de proteger la salud de la población y la del ambiente.

Capítulo I
De las Definiciones

ARTICULO SEGUNDO: Para los fines de estas disposiciones sanitarias se establecen las siguientes definiciones:

Mascotas: Especies de animales mantenidos en las viviendas utilizadas para entretenimiento personal y como elemento ligado a creencias y cábalas a la suerte y destino de sus propietarios.

Animales domésticos: Especies que han sido domesticadas por el hombre ya sean mascotas o para la explotación de la carne, leche, lana y otros.

CAPITULO II
De la clasificación de animales

ARTICULO TERCERO: Establecer que dentro de este conglomerado de animales quedan bajo reglamentación sanitaria por constituirse en riesgo de salud pública los siguientes: gallinas, patos, gansos, palomas o cualquier ave comestible, terneros, conejos, cabras, venados, iguanas o cualquiera de estas especies o de otras usadas en la alimentación de los seres humanos, las cuales no deben ser mantenidas en viviendas, apartamentos y condominios y en cualquier recinto que sirva de morada permanente o temporal a las personas en los sectores urbanos de población.

ARTICULO CUARTO: Quedan bajo reglamentación y control sanitario los animales utilizados comúnmente como mascotas y guardianes: perros, gatos, monos, culebras, hámster, cuis, loros, pericos, guacamayas y otras aves prensoras, gallos de riña, pájaros cantores y cualesquiera otras especie utilizadas, a fin de prevenir la transmición de enfermedades zoonóticas.

CAPITULO III
De la tenencia de animales

ARTICULO QUINTO: A todo inquilino o propietario que se le compruebe que mantiene las especies, objeto de estas disposiciones sanitarias enunciadas en el Artículo 3 de la presente resolución, en sus viviendas, están obligados a que en un plazo no mayor de tres (3) días las eliminen o trasladen a otros sitios en donde le sea permitido tenerlos.

ARTICULO SEXTO: Se prohibe la tenencia de especies de animales usados como mascotas y guardianes dentro de apartamentos, condominios, viviendas unifamiliares, dúplex ubicados en los núcleos urbanos en un número que ocasione riesgo a la salud y molestias de malos olores, ruidos, etc.

ARTICULO SEPTIMO: La tenencia de animales en peligro de extinción como mascotas están sujetas a las legislaciones sobre la materia.

ARTICULO OCTAVO: Unicamente se permitirán en un mismo hogar la existencia de 2 animales por especie y máximo de 2 especies de animales diferentes de las enumeradas en el artículo 4, de esta forma para limitar el riesgo epidemiológico.

CAPITULO V
Disposiciones Generales

...

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los que se nieguen a cumplir con la orden de la autoridad sanitaria haciendo caso omiso de las disposiciones de la presente resolución serán sancionados de acuerdo a lo establecido en el Código Sanitario (Capítulo Tercero, Artículo 221 y 222 y Capítulo Cuarto, Artículo 224).

ARTICULO DECIMO TERCERO: Las autoridades civiles y policiales deben prestar todo el apoyo al funcionario de Salud Pública en el cumplimiento de esta reglamentación.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Esta Resolución comenzará a regir a partir de su aprobación."

No obstante, el artículo 1201 del Código Administrativo señala que "la Policía prohibe los maltratamientos de animales domésticos en que se manifiesten crueldad". De igual forma el numeral 6 del artículo 1202 del mismo cuerpo legal preceptúa que es prohibido "cualquier otro accidente ejecutado contra un animal cuando en la opinión común se repute tal acto como cruel." Igualmente el artículo 3 del Decreto ejecutivo No. 355 del 25 de septiembre de 1990 establece que se debe "exhortar a todos los ciudadanos a practicar acciones de bondad hacia los animales, domésticos o silvestres, y a no ejecutar actos de maltrato." Estas normas prevén que está prohibido realizar actos de crueldad hacia los animales.

La Sala considera que lo procedente es decretar la medida cautelar solicitada, toda vez que un examen preliminar del acto acusado revela que éste parece contradecir, en sus artículos quinto y décimo segundo, de forma manifiesta lo previsto en la Ley al oponerse a normas de superior jerarquía, como lo son el artículo 1201 y numeral 6 del artículo 1202 del Código administrativo, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No.355 del 25 de septiembre de 1990. Esto es así porque dichas normas disponen que no se debe realizar actos de crueldad con los animales, lo cual se produciría en el presente caso, pues el acto impugnado señala que si no se pueden trasladar a los animales, deberán ser eliminados, lo que constituye un acto de crueldad hacia los animales.

En virtud de lo anteriormente expuesto, lo procedente es acceder a la petición de suspensión provisional formulada por la parte actora.

Es necesario señalar que esta medida precautoria no debe considerarse un pronunciamiento anticipado de esta Sala en relación a la pretensión de fondo del

recurrente, ya que sólo al resolverse la controversia se determinará la legalidad o ilegalidad del acto impugnado.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SUSPENDE PROVISIONALMENTE los efectos de la palabra "eliminen" contenida en el artículo 5 de la resolución No. 022 de 28 de enero de 2000 y el artículo 12 de la resolución No. 022 de 28 de enero de 2000, dictada por el Ministro de Salud.

Notifiquese,

(fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FÁBREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO EN REPRESENTACIÓN DEL PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. PRIBANCO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILECNCIO ADMINISTRATIVO, INCURRIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, AL NO CONTESTAR LA PETICIÓN POR ESCRITO DE 4 DE FEBRERO DE 1999, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración, licenciada Alma Montenegro de Fletcher, manifestó impedimento para conocer de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la firma Fábrega, Barsallo, Molino y Mulino, en representación del PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. (PRIBANCO), para que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo, incurrido por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, al no contestar la petición por escrito de 4 de febrero de 1999, y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora de la Administración sustentó su solicitud de impedimento de la siguiente forma:

> "La Directora General del Registro Público nos solicitó opinión jurídica sobre dos temas a saber:
>
> 1. "¿Puede el Registro Público afectar bienes de una empresa intervenida por comunicación (oficio) de la Superintendencia sin que medie resolución que decrete la afectación?".
>
> 2. "¿Puede el Registro Público cancelar la marginal si consta la Resolución que pone fin a la intervención, pero no indica la desafectación de los bienes?".
>
> Este Despacho procedió a emitir su opinión mediante Consulta N°107 de 14 de mayo de 1999, en virtud de la atribución de Consejera Jurídica de los funcionarios administrativos, conferida por el numeral 6, del artículo 346 del Código Judicial.
>
> Posteriormente, el Señor Magistrado Sustanciador nos corrió traslado de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción

interpuesta por la firma forense Fábrega, Barsallo, Molino y Mulino, acogida mediante Resolución de 8 de febrero de 2000, visible a foja 45 del cuadernillo judicial.

Al examinar las disposiciones legales referentes a los impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces, apreciamos que el artículo 388 del Código Judicial, estipula que:"serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público, las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces"

Por otra parte, el primer párrafo del artículo 754 de ese mismo cuerpo legal, establece que:

"El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causales expresadas en el artículo 749, debe manifestarse impedido para conocer del proceso dentro de los dos (2) días siguientes al ingreso del expediente a su despacho exponiendo el hecho que constituya la causal ..."

Aunado a esto, el numeral 5, del artículo 749 del Código Judicial, indica lo que a continuación se copia:

"Artículo 749: Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido, son causales de impedimento:

5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo ..." (lo resaltado es nuestro).

Lo expuesto nos evidencia que, el proceso sub júdice, en el cual nos corresponde intervenir en interés de la Ley, guarda relación directa con el dictamen jurídico emitido por nuestro Despacho, antes de la presentación del libelo contentivo de la demanda enunciada en el margen superior del presente escrito.

Por tanto, consideramos que nos encontramos alcanzados por la causal de impedimento contemplada en el numeral 5, del artículo 749 del Código Judicial, tal como lo ha reconocido, en casos similares, la jurisprudencia de ese Alto Tribunal de Justicia."

La Sala observa que la causal invocada por la Procuradora de la Administración consiste en "haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo".

Los Magistrados que integran la Sala Tercera advierten que, tal y como lo expone la Procuradora de la Administración, ella dio respuesta a las interrogantes vertidas por la Directora General del Registro Público, sobre la misma materia que se debate en esta Sala.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Sala considera que la actuación de la Procuradora de la Administración se ubica dentro de lo establecido en el ordinal 5 del artículo 749 del Código Judicial.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento invocado por la Procuradora de la Administración, licenciada Alma Montenegro de Fletcher, la separa del conocimiento del negocio interpuesto, y procede a llamar al Procurador Suplente

de la Administración para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACION, INTERPUESTA POR EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR LA JUNTA DE APELACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración, licenciada Alma Montenegro de Fletcher, manifestó impedimento para conocer de la demanda contencioso administrativa de interpretación, interpuesta por el Ministro de Economía y Finanzas, para que la Sala se pronuncie sobre la legalidad del acto administrativo contenido en la resolución de 6 de septiembre de 1999, expedida por la Junta de Apelación y Conciliación de la Carrera Administrativa.

La Procuradora de la Administración sustentó su solicitud de impedimento de la siguiente forma:

> "El Ministro de Relaciones Exteriores, nos elevó consulta mediante Nota D.M. No. 131/A.J. fechada 27 de enero de 1999, sobre: "el momento en que se adquiere el status de servidor público de carrera administrativa, y antes que ello ocurra, qué régimen o preceptos le son aplicables a quienes están en ese proceso".
>
> Este Despacho procedió a emitir su opinión en torno al tema, en la Consulta N°50 de 4 marzo de 1999, en virtud de la atribución de Consejera Jurídica de los funcionarios administrativos, conferida por el numeral 6, del artículo 346 del Código Judicial.
>
> Posteriormente, el Señor Magistrado Sustanciador nos corrió traslado de la demanda Contencioso Administrativa de Interpretación, interpuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas, acogida mediante Resolución de 3 de febrero de 2000, visible a foja 20 del cuadernillo judicial.
>
> Al examinar las disposiciones legales referentes a los inpedimentos y recusaciones, apreciamos que el artículo 388 del Código Judicial, estipula que: "serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público, las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces."
>
> Por otra parte, el primer párrafo del artículo 754 de ese mismo cuerpo legal, establece que:
>
> "El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causales expresadas en el artículo 749, debe manifestarse impedido para conocer del proceso dentro de los dos (2) días siguientes al ingreso del expediente a su despacho exponiendo el hecho que constituya la causal..."

Aunado a esto, el numeral 5, del artículo 749 del Código Judicial, indica lo que a continuación se copia:

"Artículo 749: Nigún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impediod, son causales de impedimento:

5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo..." (lo resaltado es nuestro).

Lo expuesto nos evidencia que, el proceso sub júdice, en el cual nos corresponde intervenir en interés de la Ley, guarda relación directa con el dictamen jurídico emitido por nuestro Despacho, antes de la presentación del libelo contentivo de la demanda enunciada en el margen superior del presente escrito.

Por tanto, consideramos que nos encontramos alcanzados por la causal de impedimento contemplada en el numeral 5, del artículo 749 del Código Judicial, tal como lo ha reconocido, en casos similares, la jurisdprudencia de ese Alto Tribunal de Justicia."

La Sala observa que la causal invocada por la Procuradora de la Administarción consiste en "haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo".

Los Magistrados que integran la Sala Tercera advierten que, tal y como lo expone la Procuradora de la Administración, ella dio respuesta a las interrogantes vertidas por el Ministro de Relaciones Exteriores, sobre la misma materia que se debate en esta Sala.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Sala considera que la actuación de la Procuradora de la Administración se ubica dentro de lo establecido en el ordinal 5 del artículo 749 del Código Judicial.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento invocado por la Procuradora de la Administración, licenciada Alma Montenegro de Fletcher, la separa del conocimiento del negocio interpuesto, y procede a llamar al Procurador Suplente de la Administración para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTO POR LA FIRMA ESKILDSEN & ESKILDSEN EN REPRESENTACIÓN DE CAFE SITTON, S. A, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA NOTIFICACIÓN N° 3554 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1998, EXPEDIDA POR LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera ha presentado solicitud para que se le declare impedida y, en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Eskildsen & Eskildsen, en representación de CAFE SITTON, S. A., para que se declare nula por ilegal la Notificación N° 3554 de 2 de septiembre de 1998, expedida por la Tesorería Municipal del Municipio de Panamá, sus actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Franceschi de Aguilera fundamenta su solicitud en el hecho de que antes de ser Magistrada actúo como apoderada judicial del demandante, por tanto, el artículo 78 de la Ley 135 de 1943, le prohibe entrar a conocer la presente controversia.

Un somero examen de las constancias de autos, pone de presente que no militan pruebas que acrediten que efectivamente la Magistrada de Aguilera intervino en el proceso o realizó gestiones, en calidad de apoderada, respecto a los hehos que dieron origen a la presente demanda, motivo por el cual no encontramos que exista un interés directo por parte de la Magistrada en la causa que le impida el estudio de la misma.

En razón de los motivos antes expuestos, esta Superioridad llega a la conclusión de que las circusntancias expuestas por la Magistrada de Aguilera, no se ajustan a ninguna de las causales de impedimento contempladas en el artículo 78 de la Ley 135 de 1943.

En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN QUE NO ES LEGAL el impedimento manifestado por la Lcda. Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera, en su condición de Magistrada Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JORGE FÁBREGA P.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL DOCTOR AURELIO CORREA ESTRIBÍ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDO POR LA COMISIÓN DE FONDO COMPLEMENTARIO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, AL NO CONTESTAR LA SOLICITUD FORMULADA EL 16 DE AGOSTO DE 1999 Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante su Vista N° 127 fechada 29 de marzo de 2000, la señora Procuradora de la Administración, licenciada Alma Montenegro de Fletcher, solicitó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que la declare impedida para conocer del proceso iniciado con la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el doctor Aurelio Correa Estribí, en su propio nombre y representación para que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo incurrido por la Comisión de Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de la Caja de Seguro Social, al no contestar su solicitud de reconocimiento de jubilación especial por el monto del último salario recibido

como Magistrado del Tribunal Electoral, formulada el 16 de agosto de 1999, y para que se haga otras declaraciones.

La señora Procuradora de la Administración manifiesta que emitió opinión sobre el acto acusado mediante la Consulta N° 40 de 22 de febrero de 1999, relativa a la interpretación y aplicación del artículo 1° de la Ley 8 de 1997, que crea el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), por lo que está impedida para conocer de este negocio, según lo prevé la parte final del numeral 5, del artículo 749 del Código Judicial, aplicable por orden del artículo 388 del mismo Código.

Las normas aludidas son del tenor siguiente:

"Artículo 749: Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el que esté impedido.

Son causales de impedimento:
1...
5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos, que dieron origen al mismo".

"Artículo 388: Serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces".

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES LEGAL el impedimento manifestado por la licenciada ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, Procuradora de la Administración y, en consecuencia, la separa del conocimiento de la demanda contencioso-administrativa de nulidad promovida por el doctor Aurelio Correa Estribí, en su propio nombre y representación, para que se declare nulo por ilegal, el silencio administrativo incurrido por la Comisión de Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de la Caja de Seguro Social, al no contestar la solicitud formulada el 16 de agosto de 1999 y para que se haga otras declaraciones, y DISPONE llamar a su suplente para que conozca del presente negocio.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. GABRIEL MARTINEZ GARCES, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES LOS ARTÍCULOS PRIMERO, TRERCERO, QUINTO Y SEXTO DEL DECRETO N° 194-LEG DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1999, EXPEDIDO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración, licenciada Alma Montenegro de Fletcher, manifestó impedimento para conocer de la demanda contencioso administrativa de nulidad, interpuesta por el licenciado Gabriel Martínez Garcés,

en su propio nombre y representación, para que se declaren nulos, por ilegales, los artículos primero, tercero, quinto y sexto del Decreto No. 194-Leg de 17 de septiembre de 1999, expedido por el Contralor General de la República.

La Procuradora de la Administración sustentó su solicitud de impedimento de la siguiente forma:

> "Mi solicitud la fundamento en el artículo 749, numeral 5, del Código Judicial, porque en nuestra condición de Procuradora de la Administración y Consejera Jurídica de los Servidores Públicos consignada en el artículo 348, numeral 4, del mismo Código, se me conmina a externar mi criterio en torno a los tópicos que se sometan a mi consideración.
>
> Los artículos 749, numeral 5 y 348, numeral 4, del Código Judicial, indican lo siguiente:
>
> "Artículo 749: Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido, son causales de impedimento:
>
> 5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo;"
>
> Artículo 348. Son atribuciones especiales del Procurador de la Administración: ...
>
> 4. Servir de consejero jurídico a los servidores públicos administrativos que consultaren su parecer respecto a determinada interpretación de la Ley o el procedimiento que debe seguir;"
>
> En el ejercicio de dicha atribución, emitimos un dictamen, por escrito, identificado como la Consulta N° 192 de 13 de julio de 1998, la cual se adjunta.
>
> la situación planteada, me obliga a solicitar un impedimento, porque intervine como asesora de la entidad demandada, fundamentada en el artículo 749, numeral 5 del Código Judicial ya citado.
>
> Por lo expuesto, reiteramos nuestra solicitud a los Señores Magistrados para que se me declare impedida para contestar la demanda en el proceso enunciado en el margen superior de la presente Vista y se me separe del conocimiento del mismo."

Advierte la Sala que la causal invocada por la Procuradora de la Administración se fundamenta en "haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo".

Los Magistrados que integran la Sala Tercera observan que, de conformidad a lo expresado por la Procuradora de la Administración, ella respondió a las interrogantes vertidas por la Superintendente de Seguros y Reaseguros, sobre la misma materia que se debate en esta Sala.

Por lo tanto, la Sala considera que la actuación de la Procuradora de la Administración se adecua a lo establecido en el ordinal 5 del artículo 749 del Código Judicial.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la

ley, DECLARA LEGAL el impedimento invocado por la Procuradora de la Administración, licenciada Alma Montenegro de Fletcher, la separa del conocimiento del negocio interpuesto, y procede a llamar al Procurador Suplente de la Administración para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE

INCIDENTE DE RECUSACIÓN PROMOVIDO POR EL DOCTOR DIÓGENES AROSEMENA, CONTRA EL MAGISTRADO ARTURO HOYOS, DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTO POR AQUÉL, CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 99-15-D DEL 20 DE JULIO DE 1999, DICTADA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor DIÓGENES AROSEMENA interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia incidente de recusación contra el Magistrado Arturo Hoyos, dentro del proceso contencioso-administrativo de plena jurisdicción promovido por aquél contra la Resolución N° 99-15-D de 20 de julio de 1999, dictada por el Rector de la Universidad de Panamá.

El doctor Arosemena considera que el Magistrado Hoyos debe ser separado del aludido negocio por dos razones, a saber:

> 1. El Magistrado HOYOS sostuvo en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que se me sancionara con B/.200.00 de multa (y se me sancionó) por haber expresado, públicamente, que, en el caso del CONTRALOR RUBEN CARLES que se dirimía en esos estrados a petición del entonces PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN por supuesto peculado, el Secretario de la Corte no había sido "veraz" en unas afirmaciones vertidas sobre lo actuado para su defensa que entonces representaba AROSEMENA Y AROSEMENA. El Magistrado ARTURO HOYOS fué (sic) el paladín, el más interesado en ese pleno para que se me sancionara.
>
> 2. Contra el Magistrado ARTURO HOYOS colaboré en la preparación y redacción de doce procesos, junto con PATRICIO JANSON (q. e. p. d.), Licdo. LUIS GUILLERMO ZÚÑIGA y Licdo ROGELIO CRUZ, denuncias que se presentaron a la Honorable ASAMBLEA NACIONAL para su tramitación." (fs. 27-30).

Según el doctor AROSEMENA, los hechos anotados configuran la causal de recusación prevista en el ordinal 15 del artículo 749 del Código Judicial, que se refiere a "La enemistad manifiesta entre el Juez o Magistrado y una de las partes."

Al contestar los hechos en que se fundamentó el incidente, el Magistrado Arturo Hoyos señaló lo siguiente:

> 1. No es cierto en la forma en que viene expuesto, y por lo tanto, lo niego. El actor alude a una sanción de "B/.200.00" (sic) de multa

que le impuso el Pleno de la Corte y que el suscrito era el "paladín", el más interesado en que se le sancionara.

Lo sucedido fue que el Pleno, mediante auto de 25 de junio de 1992 (Registro Judicial de junio de 1992, págs. 249-251), sancionó al Dr. Diógenes Arosemena con multa de B/.250.00 por "haber incurrido en comportamiento contrario a los deberes de lealtad y probidad que deben observar las partes y sus apoderado judiciales en todo proceso" (pág. 5 del auto de 25 de junio de 1992). La controversia giró en torno a la presentación de un poder y a declaraciones del Dr. Arosemena a las que se alude en la página 3 del citado auto, cuya copia autenticada adjunto. Yo fui ponente en dicha resolución judicial.

2. Este hecho no me consta y, por lo tanto, lo niego. Es cierto que el difunto Patricio Janson presentó denuncias en contra mía en la Asamblea Legislativa, pero no me consta que el actor haya sido colaborador en esas u otras denuncias en mi contra. Sin embargo, si, a juicio de los Honorables Magistrados, se acredita dicha participación, la misma debe ser seriamente evaluada al resolver la recusación, incluso a la luz del numeral 11 del artículo 749 del Código Judicial.

No me considero enemigo del Dr. Arosemena, pero no tengo interés personal alguno en este proceso judicial, por lo que solicito a los Honorables Magistrados resuelvan lo que en derecho corresponda atendiendo a los mejores intereses de la administración de justicia."

A juicio del resto de los Magistrados que integran la Sala, el incidente de recusación debe negarse porque los hechos que a juicio del incidentista configuran la causal de recusación invocada no han sido probados. Ello es así, primero, porque en autos no existe prueba de que el Magistrado Arturo Hoyos haya sido "el más interesado" en que al doctor AROSEMENA se le impusiera la sanción pecuaniaria a la que se alude en el punto 1 del libelo del incidente. Por el contrario, la sanción aludida la impuso el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y el Auto respectivo, fechado 25 de junio de 1992, lo firmaron todos los Magistrados que integraban el aludido cuerpo colegiado (Cfr. fs. 32-37).

En lo que concierne a la supuesta colaboración del doctor AROSEMENA en la preparación de las demandas interpuestas por el señor Patricio Janson (q.e.p.d.) contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante la Asamblea Legislativa, los Magistrados que suscriben observan que en autos tampoco existen pruebas de esta afirmación.

Es de anotar, además, que en el libelo de contestación del incidente, el Magistrado Hoyos afirma que no se considera enemigo del doctor AROSEMENA.

Por todos estos motivos, el resto de los Magistrados que integran la Sala consideran que debe negarse lo pedido por el incidentista.

De consiguiente, los Magistrados que integran el resto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN NO PROBADO el incidente de recusación promovido el doctor DIÓGENES AROSEMENA contra el Magistrado Arturo Hoyos y NIEGA la solicitud de separación del Magistrado Arturo Hoyos del proceso contencioso-administrativo de plena jurisdicción promovido por el doctor AROSEMENA contra la Resolución N° 99-15-D de 20 de julio de 1999, dictada por el Rector de la Universidad de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

EXCEPCION DE PRESCRIPCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA GÓMEZ, GIRALDO & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA DISCOTESCA J & J, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL JUZGADO EJECUTOR DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ LE SIGUE. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, TRECE (13) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Gómez, Giraldo & Asociados, actuando en nombre y representación de la DISCOTECA J & J, S. A., dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Municipio de Panamá le sigue.

Admitida la excepción de prescripción, mediante auto de 19 de agosto de 1999, se le corrió traslado de la misma tanto al Juez Ejecutor del Municipio de Panamá como a la Procuradora de la Administración.

La firma Gómez, Giraldo & Asociados sustentó la excepción de prescripción en los siguientes términos:

> PRIMERO: DISCOTECA J & J, S. A., nuestra mandante, es una empresa pequeña que opera en el Distrito Capital desde el año de 1990; dedicada a la venta de instrumentos y equipos de música al por menor; tributando al Municipio mediante No. de Contribuyente 02 1990 7632.
>
> SEGUNDO: Que en el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá se ha instruido Proceso de Cobro Coactivo y decretado Mandamiento de Pago en contra de nuestra representada; por considerar que ésta adeuda al Municipio de Panamá la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON SESENTA Y CINCO CENTESIMOS (B/.5,434.65), en concepto de impuestos municipales morosos.
>
> TERCERO: Que en ejercicio de nuestra defensa, hemos obtenido "Estado de Cuenta" que refleja mensualidades que en efecto, están prescritas, toda vez que el mismo comienza a reflejar desde el mes de enero de 1991 hasta junio de 1999.
>
> CUARTO: Que de conformidad con el artículo 96 de la Ley 106 del 8 de octubre de 1973; al Artículo 17 del Acuerdo No. 5 de 23 de enero de 1980; y el Artículo 18 del Acuerdo Municipal No. 56 del 9 de octubre de 1990, se establece lo siguiente: "Las obligaciones resultantes de los impuestos, tasas o contribuciones, prescriben a los cinco (5) años de haberse causado".
>
> QUINTO: Que en atención a las mencionadas disposiciones municipales, los impuestos mensuales que aparecen en el Estado de Cuenta actual de nuestra representada y relativos a los meses de julio de 1994 hacia atrás, se encuentran actualmente prescritas.
>
> SEXTO: Que en virtud de la mencionada prescripción, nuestra representada adeuda realmente al Municipio de Panamá la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON SESENTA Y CINCO CENTESIMOS (B/.5,434.65), por los que ha sido demandada; pues a esta

cantidad habría que descontarle en base a la prescripción, los impuestos mensuales correspondientes a los meses de julio de 1994 hacia atrás, los cuales totalizan la suma de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CINCO CENTESIMOS (B/.2740.05).

SEPTIMO: En consideración a los hechos expuestos, no cabe duda que en favor de mi mandante y por ministerio de la Ley ha operado una prescripción parcial del capital demandado en su contra por el Municipio de Panamá." (fs. 11-12)

Por su parte, la apoderada judicial del Juez Ejecutor del Municipio de Panamá le solicitó a la Sala que declare no probada la excepción de prescripción, puesto que el contribuyente no notificó el cierre de su establecimiento comercial como señala el artículo 86 de la Ley 106 de 1973 y por ende está obligado a pagar por todo el tiempo de la omisión.

La Procuradora de la Administración, por medio de la Vista No. 490 de 6 de octubre de 1999, solicitó que se declare parcialmente probada la presente excepción de prescripción, toda vez que ha prescrito la obligación resultante de los impuestos municipales causados antes del 26 de julio de 1994, pues el auto ejecutivo del Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá de 26 de julio de 1999, interrumpió la prescripción de los impuestos causados cinco años antes de dictado el mismo.

Decisión de la Sala:

Cumplidos los trámites legales, la Sala procede a resolver la presente controversia, previa las siguientes consideraciones.

Advierte la Sala que mediante auto de 26 de julio de 1999 (f.9 del expediente contentivo del proceso ejecutivo), el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá libra mandamiento de pago contra la Discoteca J & J, S. A., hasta la concurrencia de cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro balboas con sesenta y cinco centésimos (B/.5,434.65). Dicho auto fue notificado al señor Orlando Galindo C., representante legal de la Discoteca J & J, S. A., por medio de diligencia de notificación el día 30 de julio de 1999.

De igual forma se observa que sirvió de recaudo ejecutivo el estado de cuenta, fechado el 2 de agosto de 1999, correspondiente desde el mes de enero de 1991 hasta el mes de julio de 1999, visible de foja 2 a 6 del expediente.

Una vez efectuado un estudio del expediente, la Sala coincide con los argumentos expuestos por la Procuradora de la Administración, toda vez que se observa claramente que le ha prescrito la acción al Municipio de Panamá para cobrar parte de los tributos adeudados por la DISCOTECA J & J, S. A., tal como se infiere de lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 106 de 1973 que establece que la prescripción para el pago de impuestos municipales es de cinco años los cuales se computan desde que se causa la obligación. Esto es así, pues de las constancias procesales se advierte que desde el mes de enero de 1991 hasta la fecha en que se dicta el auto que libra mandamiento de pago, el 26 de julio de 1999, ha transcurrido más del término previsto en la disposición en referencia. Por lo tanto, se ha producido la prescripción alegada en relación a los impuestos municipales causados desde el mes de enero de 1991 hasta el mes de julio de 1994.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PROBADA la excepción de prescripción sólo en cuanto a los impuestos municipales comprendidos entre los meses de mayo de 1991 hasta julio de 1994.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) JORGE FABREGA P.

(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCION DE PRESCRIPCION, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARISOL MARÍN, EN REPRESENTACIÓN DE EDILMA CASTILLO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Marisol Marín, actuando en nombre y representación de EDILMA CASTILLO, ha interpuesto excepción de prescripción dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Municipio de Panamá.

Se trata de un proceso ejecutivo por cobro coactivo en el cual el Municipio de Panamá, persigue cobrar a la señora Edilma Castillo, la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE BALBOAS (B/.989.00) en concepto de impuestos y de recargos, motivo por el cual se libró mandamiento de pago ejecutivo el 8 de julio de 1999, utilizándose como recaudo ejecutivo el estado de cuenta correspondiente desde el mes de mayo de 1990 hasta el mes de enero de 1997, visible de foja 2 a 5 del expediente contentivo del proceso ejecutivo. La señora Edilma Castillo fue notificada del auto de mandamiento de pago, por medio de diligencia de notificación el 12 de julio de 1999.

Mediante el auto de 19 de julio de 1999, la Sala admitió la presente excepción de prescripción y le corrió traslado de la misma tanto al Juez Ejecutor del Municipio de Panamá y como a la Procuradora de la Administración.

La licenciada Marín sustentó la excepción de prescripción en los siguientes términos:

> "PRIMERO: Que en mayo de 1990 mi poderdante hizo una solicitud para instalar un negocio (kiosco), pero para el mes de julio de 1990, mediante escrito dirigido a su despacho hizo el cierre del mismo, por lo cual este negocio nunca funcionó.
>
> SEGUNDO: Que mi poderdante siempre que ha requerido un Paz y Salvo Municipal de este Distrito, lo ha recibido sin ninguna comunicación de que debía Impuestos Municipales.
>
> TERCERO: Que en el año 1997, al hacer el trámite para obtener su Paz y Salvo Municipal, se le informo (sic) que no se le podía otorgar porque tenía una deuda pendiente con el Municipio por Impuestos Municipales.
>
> CUARTO: Que estos Impuestos Municipales tienen más de cinco (5) años de haber sido grabados.
>
> QUINTO: Que los artículos 95 y 96, de la Ley Número 106 de 8 de octubre de 1973, los cuales dicen:
>
> "ARTICULO 95: El Tesorero Municipal está obligado a informar de inmediato al Alcalde y al Consejo Municipal de los Establecimientos Comerciales o Industriales que están en mora por tres (3) meses o más de sus impuestos. En estos casos El Tesorero Municipal adoptara (sic) las medidas para el cobro de los impuestos morosos, incluso el cierre de los establecimientos."
>
> SEXTO: Que presisamente (sic) mi poderdante quien se encuentra

registrado en su despacho como contribuyente No. 01-1985-5082, los Impuestos Municipales que se le pretenden cobrar se encuentra prescriptos (sic).

Por su parte, la apoderada judicial del Juez Ejecutor del Municipio de Panamá le solicitó a la Sala que declare no probada la excepción de prescripción, pues el contribuyente no le notificó al Municipio de Panamá el cierre de su establecimiento comercial como lo señala el artículo 86 de la Ley 106 de 1973 y, por ende, está obligado a pagar por todo el tiempo de la omisión.

La Procuradora de la Administración, mediante la Vista N°435 de 8 de septiembre de 1999, solicita a la Sala que declare parcialmente probada la excepción de prescripción, toda vez que los impuestos correspondientes a los años 1990, 1991, 1992, 1993, hasta el 11 de julio de 1994, se encuentran prescritos por haber transcurrido más de cinco (5) años desde que se causó el impuesto, hasta la fecha en que se expidió el auto que libra mandamiento de pago el 8 de julio de 1999.

Decisión de la Sala:

Una vez cumplidos los trámite que a ley corresponden, la Sala procede a resolver la presente controversia.

Cabe señalar que no consta en el expediente que la contribuyente hubiera cumplido con la obligación de notificar por escrito al Tesorero Municipal del cese en sus operaciones, tal como lo preceptúa el artículo 86 de la Ley 106 de 1973, por lo que deberá pagar los impuestos por todo el tiempo de esta omisión.

No obstante, la Sala concuerda con el criterio de la Procuradora de la Administración, toda vez que la presente excepción de prescripción, ha sido parcialmente probada conforme a lo que dispuesto en el artículo 96 de la Ley 106 de 1973, "Sobre Régimen Municipal", que prevé que el término de prescripción de las obligaciones resultantes de los impuestos municipales es de cinco años contados desde la fecha en que se han causado.

De las constancias procesales allegadas al proceso se colige que desde el mes de mayo de 1990 hasta la fecha en que se dicta el auto que libra mandamiento de pago, el 8 de julio de 1999, ha transcurrido más del término previsto en la disposición en referencia. Por ello, lo procedente es declarar prescritos los impuestos municipales correspondientes al término que excede a los años requeridos para el cobro de los mismos, es decir, desde mayo de 1990 hasta julio de 1994.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PROBADA, la excepción de prescripción sólo en cuanto a los impuestos municipales comprendidos entre los meses de mayo de 1990 hasta julio de 1994.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCION DE PRESCRIPCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ DEL CARMEN MURGAS, EN REPRESENTACIÓN DE MARITZA ESTELA DE BROWN, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José del Carmen Murgas, actuando en nombre y representación de MARITZA ESTELA BROWN DE TORRES, ha interpuesto ante la Sala Tercera excepción de prescripción dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Municipio de Panamá.

Mediante auto de 16 de marzo de 1999 se admitió la presente excepción de prescripción y se le hizo traslado de la misma tanto al Juez Ejecutor del Municipio de Panamá como a la Procuradora de la Administración.

La excepción de prescripción fue sustentada de la siguiente forma:

"PRIMERO: Mediante memorial presentado por nuestra representada, se le comunicó a la Tesorería Municipal del Distrito de Panamá el cierre de operaciones del negocio denominado RESTAURANTE Y CAFE ZAIRE, desde el 19 de julio de 1978, en base a que su esposo Luis Vásquez era la persona que atendía el mismo, pero al sufrir un accidente automovilístico, no podía seguir cumpliendo con dicha responsabilidad.

SEGUNDO: Dado lo anterior, nuestra representada, señora MARITZA BROWN DE TORRES, no tenía tiempo para atender el mismo, puesto que como funcionaria del Banco Nacional le era imposible cumplir con este nuevo compromiso, además que su situación económica era sumamente precaria.

TERCERO: Que mediante Resolución 797 de 7 de marzo de 1992, el Tesorero Municipal del Distrito de Panamá, decidió mantener el cobro de los impuestos a nuestra representada MARITZA BROWN DE TORRES del RESTAURANTE Y CAFE ZAIRE.

CUARTO: Que el hecho segundo y tercero de la Resolución 797 de 7 de marzo de 1992 ordenan retirar el registro de contribuyentes y la anulación de los recibos de impuestos expedidos a nombre del establecimiento comercial a nombre de nuestra representada a partir del mes de marzo de 1992.

QUINTO: Que desde el mes de marzo de 1992 a la fecha han transcurrido 7 años sin que se haya realizado gestión alguna para el cobro de los mismos, por lo que ha prescrito el mismo, tal como lo señala el artículo 96 de la Ley 106 de 1973, cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 96. Las obligaciones resultantes de los impuestos municipales prescriben a los 5 años de haberse causado."

Con fundamento en las anteriores consideraciones, es por lo que le solicitamos de manera respetuosa al señor Tesorero Municipal, se sirva Decretar la Prescripción del cobro de los impuestos causados por el Establecimiento Comercial propiedad de nuestra representada, tal como lo señala la norma arriba transcrita."

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista No. 185 de 4 de mayo de 1999, le solicitó a la Sala que declare prescrito los impuestos municipales que se le pretenda cobrar a la excepcionante porque los mismos datan de 1987 a 1992, lo que rebasa el plazo de cinco años que establece el artículo 96 de la Ley N° 106 de 1973.

Decisión de la Sala:

Una vez cumplidos los trámite que a ley corresponden, la Sala procede a resolver la presente controversia.

Observa la Sala que por medio del auto de 23 de febrero de 1999 (f. 10 del expediente contentivo del proceso ejecutivo), el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá libra mandamiento de pago contra la Maritza Estela Brown de Vásquez, hasta la concurrencia de seis mil doscientos siete balboas con cuarenta centésimos (B/.6,207.40). Dicho auto le fue notificado a la señora Maritza Estela Brown de Vásquez, mediante la diligencia de notificación el día 2 de marzo de 1999.

Sirvió de recaudo ejecutivo el estado de cuenta, fechado el 23 de febrero de 1999, correspondiente desde el mes de noviembre de 1987 hasta el mes de marzo de 1992, visible de foja 1 a 5 del expediente.

Advierte la Sala de fojas 6 a 8 del expediente una copia de la Resolución No. 797 de 3 de julio de 1992, por medio de la cual se resuelve mantener para su cobro los impuestos gravados a Maritza Brown, propietaria del negocio Cafeteria Zaire; retirar del Registro del Contribuyente a la señora Maritza Brown a partir del mes de marzo de 1992, anular los recibos de impuestos expedidos a nombre del citado contribuyente con posterioridad al mes de marzo de 1992 y comunicar lo resuelto a la Dirección de Administración Tributaria, Juzgado Ejecutor y Departamento de Contabilidad.

Del estudio del expediente, la Sala coincide con los argumentos expuestos tanto por el incidentista como por la Procuradora de la Administración, ya que se observa con claridad que le ha prescrito la acción al Municipio de Panamá para cobrar los tributos adeudados por la señora Maritza Estela Brown de Vásquez, tal como se infiere de lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 106 de 1973 que establece que la prescripción para el pago de impuestos municipales es de cinco años los cuales se computan desde que se causa la obligación. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias procesales se advierte que desde el mes de noviembre de 1987 hasta la fecha en que se dicta el auto que libra mandamiento de pago, el 23 de febrero de 1999, ha transcurrido más del término previsto en la disposición en referencia.

En virtud de lo anteriormente señalado, lo procedente es declarar probada la presente excepción de prescripción.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PROBADA la excepción de prescripción presentada por el licenciado José del Carmen Murgas, actuando en nombre y representación de MARITZA ESTELA BROWN DE TORRES.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. SIXTO ABREGO EN REPRESENTACIÓN DE LUIS MENDEZ O LUIS MENDEZ NAJERA, CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE JULIO DE 1998 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: LUIS MARIA MENDEZ ESPINOSA -VS- OCCIDENTAL LIFE COMPANY OF NORTH CAROLINA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El Lcdo. Sixto Abrego Camaño, actuando en representación del señor LUIS MARIA MENDEZ ESPINOSA o LUIS MENDEZ NAJERA, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 27 de julio de 1998, dentro del proceso laboral promovido por el señor LUIS MARIA MENDEZ ESPINOSA o LUIS MARIA MENDEZ NAJERA contra OCCIDENTAL LIFE COMPANY OF NORTH CAROLINA.

Se trata de un proceso laboral promovido por el señor Mendez contra la mencionada empresa a fin de que ésta sea condenada a pagar la suma de B/.17,500.00 en concepto de salarios básicos adeudados, B/.6,632.50 en concepto de décimos terceros meses adeudados, B/.6,632.50 en concepto de vacaciones adeudadas, más recargos legales e intereses. Por su parte, la empresa demandada se opone a las pretensiones del demandante por considerar que no existía entre ellos una relación de trabajo.

El juzgador de primera instancia absolvió a la demandada y el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial confirmó el fallo.

El Lcdo. Luis Shirley, de la firma Shirley y Asociados, se opuso, como apoderado judicial especial de la empresa demandada al recurso de casación en escrito visible de fojas 9 a 12 del expediente.

La Sala pasa a examinar los cargos que se formulan a la sentencia recurrida en el recurso de casación.

El recurrente sostiene que la sentencia por él impugnada ha infringido los artículos 62, 65, y 242 del Código de Trabajo.

La Sala pasa a examinar lo concerniente a la infracción del artículo 242 del Código de Trabajo, ya que de su existencia depende que se hayan producido o no las otras infracciones que se señalan en el recurso de casación.

Señala el casacionista que la norma citada ha sido violada por indebida aplicación, pues, "antes del 13 de agosto de 1995, era menester que concurriera en su caso particular, todas y cada una de las circunstancias que allí se disponen ... significa que en la medida que se demostrara que entre un corredor de seguros y la compañía demandada existió claramente uno de los elementos de la relación de trabajo, tenía que reconocerse la existencia de dicha relación legalmente ... Uno de dichos elementos es la dependencia económica, de tal manera que aún cuando no hubiera horario, ni tarjetas, ni se demostrara la dependencia económica había relación de trabajo".

El Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial sostiene que no existió relación de trabajo entre el demandante y la empresa demandada, por varias razones; entre ellas, porque en el proceso existen pruebas suficientes que determinan que el señor LUIS MARIA MENDEZ ESPINOSA o LUIS MENDEZ NAJERA con licencia de corredor de seguros colocaba pólizas de seguros para la sociedad demandada, pero también lo hacía para otras compañías aseguradoras; además se demostró que no estaba sujeto a horario de trabajo, ni a registro de asistencia y que la sociedad demandada no le exigía que únicamente vendiera pólizas para su compañía y que además, existe abundante material probatorio que determinan el porcentaje de comisiones como honorarios profesionales que devengaba LUIS MARIA MENDEZ ESPINOSA con la colocación de pólizas en distintas compañías de seguros.

En adición a lo antes señalado, el Juez Ad-quem, para argumentar su decisión se apoya en jurisprudencia de esta Sala tales como las sentencias de 30 de septiembre de 1983 y 7 de enero de 1991, en donde se establece que un corredor de seguros que percibe comisiones de múltiples compañías de seguros, además de la empresa demandada, y que al equiparar las sumas percibidas tanto por la compañía de seguros demandada como por las otras compañías, no se puede concluir que el demandante dependía económicamente de la compañía demandada.

Considera la Sala que el razonamiento del Tribunal Superior de Trabajo del

Primer Distrito Judicial en el caso in examine se ajusta a derecho, toda vez que resulta palmario que no existía relación de trabajo pues el demandante prestó sus servicios sin control, sin supervisión ni horario de asistencia y el mismo colocaba pólizas para varias compañías aseguradoras durante el período de reclamación laboral. En ese sentido, obran a fojas 770, 783, 786, 788, constancias de diferentes compañías aseguradoras que manifiestan que el demandante colocó pólizas en sus empresas durante el período 1986 - 1996. Estos hechos evidencian que no hubo dependencia económica entre las partes, toda vez que quedó demostrado que los honorarios profesionales recibidos por el señor Mendez no constituían su única o principal fuente de ingresos.

Por otro lado, constan a fojas 722, 725, 731 declaraciones de testigos tanto de la parte demandante como de la demandada, que manifiestan, entre otras cosas que, "al señor Mendez no se le exigió ni se le ha exigido horario de trabajo, ni control de horas de llegada y salidas"... "tienen conocimiento que el señor Mendez es un corredor independiente que ha colocado y continúa colocando negocios relacionados con seguros en otras compañías ... sin exigirle que solamente someta negocios con la Occidental Life".

Ante este escenario jurídico, la Sala arriba a la conclusión de que no existía relación de trabajo entre el demandante y la demandada, ya que no reúne los requisitos del artículo 62 del Código de Trabajo, por lo tanto, la sentencia de segunda instancia no ha infringido el artículo 242 del Código de Trabajo. La Sala considera que no es necesario entrar a examinar los otros cargos.

Como corolario de lo antes expresado, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 27 de julio de 1998, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del proceso laboral entablado por LUIS MARIA MENDEZ ESPINOSA o LUIS MENDEZ NAJERA -VS- OCCIDENTAL LIFE COMPANY OF NORTH CAROLINA.

Notifíquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA CARREIRA PITTI P. C. ABOGADOS, EN REPRESENTACIÓN DE EMILY DIOCADES QUIEN ACTUA EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO ENALD DIOCADES, CONTRA LA SENTENCIA DE 10 DE MARZO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: EMILY DIOCADES -VS- MITSUI O. S. K. LINES LTD. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOCE (12) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

La firma Carreira Pitti P. C. Abogados en nombre y representación de EMILY DIOCADES quien actúa en representación de su menor hijo ENALD DIOCADES ha propuesto recurso de casación contra el Auto de 10 de marzo de 2000 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del proceso laboral: EMILY DIOCADES en nombre de su menor hijo ENALD DIOCADES -vs- MITSUI O. S. K. LINES LTD. Y CAMELLIA CONTAINERS CARRIER, S. A. PROPIETARIO Y OPERADOR DE LA M/N ALLIGATOR COLUMBUS.

Esta Sala de Casación procede a revisar el referido recurso, para verificar si el mismo cumple con los elementos formales para que pueda ser admitido de acuerdo a lo establecido en los artículos 925, 926 y 928 del Código de Trabajo.

Se percata esta Corporación Judicial que el recurso de casación incoado no puede ser admitido, en virtud de que el presente caso trata de un secuestro que no fue concedido por el Tribunal Superior, decisión ésta que no pone fin al proceso, ni imposibilita su continuación, sino que resuelve una cuestión incidental dentro del caso de reclamo de prestaciones postmortem propuesto por EMILY DIOCADES en nombre de su menor hijo ENALD DIOCADES -vs- MITSUI O. S. K. LINES LTD. Y CAMELLIA CONTAINERS CARRIER, S. A. PROPIETARIO Y OPERADOR DE LA M/N ALLIGATOR COLUMBUS. En este sentido el artículo 925 del Código de Trabajo es claro al recoger en qué situaciones el empleador o el trabajador pueden incoar el recurso de casación y textualmente prevé lo siguiente:

> "Artículo 925. El recurso de casación puede interponerse contra las sentencias y los autos que pongan fin al proceso o imposibiliten su continuación, dictados por los Tribunales Superiores de Trabajo en cualquiera de los siguientes casos:
>
> 1. Cuando hubieran sido pronunciados en conflictos individuales o colectivos con una cuantía mayor de mil balboas;
>
> 2. Cuando se relacionen con la violación del fuero sindical, gravidez, riesgo profesional o declaratoria de imputabilidad de la huelga, con independencia de la cuantía;
>
> 3. Cuando se decrete la disolución de una organización social".

Por otro lado la jurisprudencia ha sido enfática al no admitir recursos de casación cuyo norte sea resolver cuestiones inherentes a medidas cautelares. En Resolución de 11 de mayo de 1998, la Sala al conocer de un recurso de casación dentro del juicio laboral JORGE DENIS -vs- INSTITUTO MARINA MERCANTE OCUPACIONAL DE PANAMÁ OESTE S. manifestó lo siguiente:

> "En primer lugar según el artículo 925 del Código de Trabajo, son susceptibles del recurso de casación laboral las sentencias o autos dictados por el Tribunal Superior de Trabajo que ponen fin al proceso o imposibilitan su continuación, y en el caso subjúdice el auto dictado por el Tribunal Superior de Trabajo el 27 de febrero de 1998, no pone fin al proceso, sino que resuelve una cuestión incidental de levantamiento de secuestro" ...

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran la Sala Tercera (Laboral), de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el Recurso de Casación Laboral propuesto por la firma Carreira Pitti P. C. Abogados en nombre y representación de EMILY DIOCADES quien actúa en representación de su menor hijo ENALD DIOCADES.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FABREGA PONCE
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ANÍBAL HERRERA PEÑA EN REPRESENTACIÓN DE EPIFANIO PALACIOS, CONTRA LA SENTENCIA DE 28 DE ENERO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S. A. -VS- EPIFANIO PALACIOS. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. (SALA TERCERA). LABORAL.

VISTOS:

El licenciado Aníbal Herrera en nombre y representación de EPIFANIO PALACIOS ha propuesto recurso de casación contra la Sentencia de 28 de enero de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Laboral: VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S. A. -vs- EPIFANIO PALACIOS.

Del recurso se le corrió traslado a la empresa de acuerdo a lo previsto en el artículo 927 del Código de Trabajo, y la misma no hizo uso de su derecho de oposición a este medio de impugnación extraordinario.

ANTECEDENTES DE ESTE RECURSO

La génesis de este recurso de casación descansa en un proceso de autorización de despido propuesto por la empresa Vigilancia y Seguridad, S. A. contra EPIFANIO PALACIO quien goza de fuero sindical, ya que es el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Privada.

Las razones que adujo la empresa para solicitar la autorización de despido del señor PALACIO tiene su fundamento en el artículo 213, Acápite A, ordinal 11 del Código de Trabajo, es decir la inasistencia del trabajador a sus labores sin el consentimiento del empleador durante dos lunes en el curso de un mes, seis en curso de un año, o tres días consecutivos o alternos en el período de un mes. Se tendrá como lunes, para los efectos de la norma, el día que siga a uno de fiesta o duelo nacional.

Frente a los hechos de esta acción especial de Trabajo, el Juez Cuarto de Trabajo de la Tercera Sección, por medio de la Sentencia N° 53 de 14 de diciembre de 1999 decidió la autorización de despido a favor de la empresa Vigilancia y Seguridad, S. A. y contra EPIFANIO PALACIO.

Disconforme el trabajador con la decisión del juzgador a-quo, propuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo.

DECISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO

El Tribunal Colegiado de Segunda Instancia al conocer de la alzada, emitió la Sentencia de 28 de enero de 2000 por medio de la cual confirmó la Decisión del Juez a-quo considerando lo siguiente:

> "Este Tribunal Superior una vez estudiadas las constancias procesales que obran en el expediente, considera en efecto se ha demostrado que el trabajador EPIFANIO PALACIOS, incurrió en la causa justificada de despido que se ha señalado en la solicitud de autorización de despido.
>
> Esta causa ha quedado acreditada mediante pruebas documentales y testimoniales que fueron debidamente presentadas, a saber, planillas, cheques Nos. 48345 y 48729 de 15 y 29 de junio de 1999 del BANCO TRASATLANTICO S. A.; comprobantes de pago donde se aprecian los descuentos hechos al trabajador por haberse ausentado los días 4, 6 Y 13 de junio de 1999 y los testimonios de los señores JOSE DE LOS REYES BARTUANO ALVARADO; NESTOR ALEXIS DIAZ QUINTERO Y ALDO BENJAMIN WALTER".

Este discernimiento jurídico, ha sido señalado como ilegal por parte del trabajador EPIFANIO PALACIOS, por medio de su procurador judicial, al considerar que el Tribunal Superior de Trabajo quebrantó el mandato contenido en los artículos 225, 883 y 991 todos del Código de Trabajo, supuesto éste que lo condujo a proponer el presente recurso de casación.

Encontrándose el recurso en este estado los Magistrados que integran la Sala proceden a resolver lo pertinente.

DECISION DE LA SALA

Cuestiones Previas

Antes de adentrarnos al conocimiento de fondo de este asunto laboral, esta Corporación de Justicia deja claro que el recurso extraordinario de casación, en concordancia con el artículo 924 del Código de Trabajo, tiene como objeto enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales de segunda instancia que hacen tránsito de cosa juzgada y en las que sin esta última circunstancia pueden acarrear graves e irreparables perjuicios.

También cabe reiterar que para la formalización del referido medio de impugnación extraordinario, el escrito del casacionista debe cumplir con ciertas formalidades estatuidas en los artículos 925, 926, y 928 ibídem, con los cuales cumple parcialmente el interesado.

Sostenemos que parcialmente se ha dado cumplimiento a las precitads exigencias, en vista de que el demandante ha señalado que la Sentencia de 28 de enero de 2000 presuntamente quebranta una norma, que ha sido calificada por la doctrina como disposición adjetiva o de procedimiento, como lo es el artículo 991, numeral 6 (procedimiento para la autorización de despido) del Código de Trabajo, y que no es revisable individualmente en esta vía procesal. Esta excerta preceptúa:

> "Artículo 991. En cualquier caso en que las normas substanciales exijan una autorización judicial previa para despedir o adoptar cualquier otra medida que afecte a un trabajador; en casos de reintegro a que se refiere el artículo 218, o en cualquier otro asunto para el cual la Ley disponga un trámite abreviado o sumario, se aplicarán las disposiciones sobre procesos comunes, sujetas a las siguientes normas especiales:
> 1. ...
> 2. ...
> 6. La prueba documental se presentará o aducirá con la demanda o con la contestación, salvo que hubiere justo motivo para presentarla en la audiencia" ...

Sobre este punto, la Corte ha manifestado en innumerables ocasiones, que las normas adjetivas, pueden servir de medio para demostrar la violación de disposiciones sustantivas. Estas últimas establecen los derechos, que de no haber sido reconocidos, pueden ser reclamados. En este sentido, las normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad, en caso de que se considere que aquellas han sido quebrantadas.

Cuando la acusación se refiere exclusivamente a normas de carácter adjetivo, como en el presente caso, el cargo o los cargos quedan incompletos y no alcanzan a producir los resultados que persigue el recurso de casación, ya que así lo dispone el párrafo final del artículo 928 ibídem. Esta disposición recoge lo siguiente:

> "Artículo 928. Recibido el expediente, el Tribunal de Casación Laboral rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que dispone el artículo 925. Lo mismo hará cuando el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales". (subrayado es nuestro)

El Tribunal de Casación conoce de errores in judicando y no de errores in procedendo (Ver Sentencias de 25 de enero de 2000, 28 de junio de 1999, 3 de marzo de 1998, 27 de febrero de 1998, de 24 de junio de 1997, 12 de junio de 1995, 19 de mayo de 1995 y 6 de julio de 1994).

Como corolario de la explicación vertida en párrafos anteriores, el análisis de los cargos planteados quedará limitada a los señalamientos que expone

el recurrente en relación a los artículos 225 y 883 del Código de Trabajo.

Fondo

La primera norma que estima infringida el casacionista es el artículo 225 del Código de Trabajo, cuyo tenor literal es el siguiente:

> "Artículo 225. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, si se tratase de contrato por tiempo indefinido cuya terminación fuese por despido injustificado o sin la autorización previa necesaria, el trabajador que opte por la indemnización cuando el juzgador haya resuelto al pago de ésta, tendrá derecho a recibir de su empleador una indemnización conforme a la siguiente escala:"

Según el casacionista, la Sentencia atacada hizo una incorrecta aplicación de la norma concerniente al proceso abreviado, por considerar que el derecho estatuido en el artículo 225 que se le concede al trabajador EPIFANIO PALACIOS, se ha visto afectado directamente, dado que al autorizarse su despido él pierde su derecho sustantivo de percibir el importe de la indemnización.

Frente al argumento esgrimido por la parte trabajadora, es dable señalar que no le asiste la razón en virtud de que precisamente el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial al revisar en segunda instancia el proceso surtido en el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, consideró de acuerdo a las pruebas aportadas, que la autorización de despido solicitada por la empresa Vigilancia y Seguridad, S. A. contra el señor EPIFANIO PALACIOS estaba fundamentada y por tanto era viable.

El derecho a la indemnización sólo es procedente cuando el juzgador lo reconoce a consecuencia de que la causal de despido no ha sido demostrada o se despide sin cumplir con el procedimiento recogido en la Ley para los casos que ella misma contempla. En el caso que nos ocupa, y sin entrar a valorar las apreciaciones del Tribunal Ad-quem, se determinó que el trabajador PALACIOS había incurrido en causales de despido, es decir no se presentó a su puesto de trabajo varios días alternos, y tampoco justificó dichas ausencias.

De acuerdo a las normas de procedimiento del Derecho del Trabajo, las valoraciones probatorias que vierte el juzgador laboral en sus decisiones están apegadas al principio de la sana crítica que conforme definió COUTURE, constituye `una categoría intermedia entre la prueba legal (tarifa legal) y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula, de regular la actividad intelectual del Juez frente a la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. El Juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento.' (COUTURE, Eduardo. citado por Jorge Fábrega en Estudios Procesales. Tomo I. Editora Jurídica Panameña. Panamá 1988 pág. 129) (subrayado es nuestro).

Salvo que exista error de hecho por parte del juez al momento de otorgarle validez a un documento (peritajes, planillas, informes, etc.) o declaración, en esta situación el Tribunal de Casación supliría las omisiones en que incurrió el funcionario judicial al decidir la causa laboral, con el propósito primordial de enmendar el proceso y sus resultados, circunstancia que a todas luces no se verificó en el presente caso de autorización de despido.

Las consideraciones antes expuestas nos obligan a no estimar favorablemente el cargo impetrado en relación con el artículo 225 del Código de Trabajo.

Por otro lado, en lo que concierne a la violación del artículo 883 del Código de Trabajo, el casacionista considera que la disposición ha sido infringida por la decisión adoptada por los Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dado que no se demostró en el transcurso del proceso laboral, cuya formalidad es reglada por el artículo 991 del mismo Cuerpo Legal, la causal de despido alegada por la empresa Vigilancia y Seguridad, S. A..

El artículo 883 del Código de Trabajo prevé en su parte pertinente lo siguiente:

> "Artículo 883. El Trabajador amparado por el fuero sindical no podrá ser despedido sin previa autorización de los Tribunales de Trabajo, fundada en una justa causa prevista en la Ley. El despido realizado en contra de lo dispuesto en este artículo constituye violación al fuero sindical" ...

En párrafos anteriores se subrayó que la autorización de despido decidida por el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección y confirmada por el Tribunal Superior de Trabajo, descansaba en justa causa prevista en la Ley, lo cual fue acreditado dentro del proceso, y así lo expuso el Tribunal Colegiado de Segunda Instancia, además de que se cumplió con el procedimiento previsto para tales efectos, en el artículo 991 del Código de Trabajo, puesse surtió la autorización previa de despido solicitada por la empresa Vigilancia y Seguridad, S. A. contra EPIFANIO PALACIOS bajo los parámetros del proceso sumario tal como se desprende claramente del expediente contentivo del proceso laboral in examine. En esta línea de ideas, de fojas 6 a 8 del antecedente descansan las pruebas presentadas con la demanda, y de las cuales se colige la causal de despido en que incurrió el trabajador demandado. En este orden de ideas podemos destacar las declaraciones o testimoniios rendidos por algunos trabajadores de la empresas (ver de fojas 23 a 27 del antecedente), los cuales al ser cotejados con las pruebas documentales, evidencian ineludiblemente las ausencias en el puesto de trabajo por parte del señor PALACIOS.

En conclusión, la Sala conceptúa que el artículo 883 del Código de Trabajo no sido quebrantado por la Sentencia de 28 de enero de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera (CASACION LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASAN la Sentencia de 28 de enero de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO SANTANA GONZALEZ ATENCIO, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE ENRIQUE SAMUDIO CONTRA LA SENTENCIA DE 20 DE AGOSTO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JORGE ENRIQUE SAMUDIO -VS- SEGURIDAD INDUSTRIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Santana González Atencio, actuando en representación de JORGE ENRIQUE SAMUDIO SALDAÑA, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial el 20 de agosto de 1998, dentro del proceso laboral promovido por el señor JORGE ENRIQUE SAMUDIO SALDAÑA contra la empresa SEGURIDAD INDUSTRIAL, S. A..

El casacionista persigue con este recurso que la Sala revoque la sentencia recurrida y, en su lugar, condene a la empresa demandada a todas las pretensiones de la demanda.

La parte demandada no presentó escrito de oposición al recurso de casación laboral.

Se trata de un proceso común de trabajo en el cual el demandante pide que la parte demandada sea condenada a pagarle la suma de B/.5,263.78 en concepto de vacaciones vencidas, décimo tercer mes vencido proporcional, horas extras, días feriados, domingos trabajados y días de descanso semanal obligatorio, más intereses, costas y gastos del proceso. El juzgador de primera instancia condenó a la demandada al pago de vacaciones dejadas de pagar y décimo tercer mes dejado de pagar, y el Tribunal Superior de Trabajo revocó dicha sentencia y absolvió a la empresa demandada de todos los reclamos formulados.

La Sala pasa a examinar los cargos que se formulan a la sentencia recurrida en el recurso de casación.

El actor señala que la sentencia de segunda instancia ha infringido los artículos 33, 41, 52 y 6 del Código de Trabajo; y el artículo primero del Decreto de Gabinete No. 221 de 18 de noviembre de 1971.

El recurrente sostiene que la sentencia por él impugnada ha infringido el artículo 33 del Código de Trabajo, en el concepto de violación directa, pues a su juicio, probaron que el trabajador laboró horas extras luego entonces le correspondía a la empresa demandada probar que estas habían sido debidamente pagadas, al no hacerlo, le correspondía al Tribunal Superior de Trabajo reconocer las mismas, ya que los archivos no los manejan los trabajadores, lo que indica que el Tribunal ha violado de manera directa esta norma al no exigir que la empresa pague horas extras trabajadas y no canceladas.

El Tribunal Superior de Trabajo estimó que "si bien la empresa no acreditó el pago de las mismas, tampoco se acreditó lo contrario a satisfacción del Tribunal, ya que los documentos aportados en copias no autenticadas no cumplen con los requisitos establecidos para su reconocimiento y para poder condenar por una prestación incierta, ajena a lo pactado, es necesario que se determine tanto su existencia como su cuantía de manera que no deje lugar a dudas, no existiendo en el proceso ninguna prueba en tal sentido".

La Sala coincide con el criterio vertido por el juzgador de segunda instancia, pues, esa ha sido nuestra posición al respecto, en el sentido de que la prueba sobre el trabajo en horas extras debe ser precisa, determinada y concreta, incumbiendo la carga de la prueba a la parte que afirma la existencia de hechos (artículo 735 del Código de Trabajo) como fundamento de su acción o excepción y no requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos o reconocidos por la contraria. Como en el presente caso no hay presunción legal a favor del trabajador que lo exima de la carga de la prueba, le corresponde a éste comprobar que, efectivamente, laboró horas extraordinarias (Cfr. sentencias de 8 de febrero de 1994 y 30 de diciembre de 1994).

En cuanto a las horas extras, supuestamente laboradas, éstas no constituyen un derecho adquirido, razón por la cual no le corresponde al empleador comprobar que fueron o no trabajadas y pagadas.

En ese sentido, el trabajador no aportó material probatorio idóneo a la luz de lo preceptuado por nuestro ordenamiento laboral, pues presentó, a través de una acción exhibitoria, copia simple, sin autenticar de una planilla aportada por la empresa demandada, la que mostraba dos columnas detallando el salario regular y las horas extras trabajadas, no obstante, a su vez, no constaba documentación sobre las horas reales laboradas que fueron pagadas, ni los días a que correspondían los pagos.

Se colige entonces, que no se ha acreditado en el proceso que fueron trabajadas horas extras y que las mismas no han sido canceladas, toda vez que el documento presentado como prueba por el trabajador no reúne los requisitos para que su ponderación sea válida.

Dentro de este contexto la Sala estima que el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial no ha transgredido la norma citada, por tanto, desestima el cargo.

Afirma el casacionista que el Tribunal Superior de Trabajo ha infringido el artículo 41 del Código de Trabajo, en el concepto de violación directa, al no condenar a la empresa a la reclamación de días feriados, domingos y descanso semanal obligatorio.

Sobre esta imputación, la parte actora ha presentado los mismos argumentos e igual material probatorio que para el cargo anterior, razón por la cual la Sala no entrará a su análisis individual toda vez que está comprendido en lo expresado en párrafos precedentes.

En cuanto a las violaciones del artículo 52 del Código de Trabajo y del artículo primero del Decreto de Gabinete No. 221 de 18 de noviembre de 1971, la Sala considera oportuno analizarlas en conjunto pues mantienen un fundamento en común consistente en que el pago de vacaciones y del décimo tercer mes son derechos adquiridos de los trabajadores, correspondiéndole al empleador la comprobación de su pago.

Estima el recurrente que dichas normas han sido infringidas porque al ser estos derechos adquiridos, tal como lo afirma el Juez A-Quo le correspondía al empleador demostrar el pago de los mismos, al no demostrar esto entonces se comprueba que el trabajador tenía derecho a sus vacaciones y al cobro del décimo tercer mes, los cuales no le fueron debidamente cancelados y al no reconocer esto el tribunal Ad-Quem está violando las citadas normas, ya que estas normas le exigen al juzgador que sean debidamente reconocidas pues constituyen derechos adquiridos.

El Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial en cuanto al pago de las vacaciones y del décimo tercer mes, sacó sus propias conclusiones e interpretó que dichas vacaciones y décimo tercer mes reclamados correspondían a las horas extraordinarias, días feriados, de descanso o domingos que se dicen trabajados, y que si estos derechos no fueron reconocidos en el proceso, mal se puede reconocer el derecho que deriva de ellos.

Se equivoca el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, pues, le asiste razón al recurrente al afirmar que el pago de vacaciones y de décimo tercer mes, constituyen derechos adquiridos del trabajador, y bajo esa óptica, esta Sala ha señalado a través de la jurisprudencia "que es al empleador a quien le corresponde demostrar el pago de los derechos adquiridos; agrega esta Sala que es simplemente porque es el empleador quien posee los medios para demostrar o justificar los pagos efectuados al trabajador, así como su cantidad, por medio de recibos de dinero, firmas en la planilla, nómina o listas" (Cfr. sentencia de 1 de febrero de 1994).

En ese sentido coincidimos plenamente con el juzgador de primera instancia, el empleador no demostró de forma alguna que realizó los pagos correspondientes a las vacaciones y al décimo tercer mes adeudados al trabajador Samudio durante

los períodos laborados. Frente a esta situación, la empresa demandada responde que hubo un incendio en las oficinas de la empresa, y por tal razón no hay constancia de los pagos, hecho que no se encuentra acreditado en el proceso.

Así las cosas, la Sala estima que, en efecto, el razonamiento del Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial no se ajusta a derecho, y por esa razón, la sentencia de segunda instancia ha conculcado el artículo 52 del Código de Trabajo y el artículo primero del Decreto de Gabinete No. 221 de 18 de noviembre de 1971.

Por último, el casacionista afirma que la sentencia de segunda instancia ha infringido el artículo 6 del Código de Trabajo en el concepto de violación directa, pues "el Tribunal en su fallo habla a contrario sensu, menciona presunciones pero siempre a favor en este proceso de la parte demandada. La violación es directa ya que en vez de interpretar todas las dudas de este juicio a favor del trabajador el Tribunal de Segunda Instancia se ha dedicado en este proceso a interpretar a favor del empleador".

Disiente la Sala de las apreciaciones esgrimidas por el recurrente, y en primer lugar, resulta relevante añadir que la norma que se considera conculcada contiene dos de las manifestaciones o reglas del conocido Principio Tuitivo o Pro Operario de gran relevancia en el Derecho Laboral, y que recoge nuestro derecho interno. Dichas reglas son la de la "norma más favorable" y propiamente el "In Dubio Pro Operario"; la primera cobra eficacia en caso de conflicto o colisión entre dos o más disposiciones de trabajo con categoría de Ley, Convención Colectiva o Reglamento; mientras que la segunda, se refiere a la duda razonable que puede surgir en el ánimo del juzgador o encargado en su momento de aplicar la norma también de prosapia legal, convencional o reglamentaria, supuesto ante el cual debe acogerse la interpretación que sea más beneficiosa para el trabajador. Aquélla es, pues, una regla de aplicación, mientras que ésta es una regla o criterio hermenéutico.

La Sala estima que en este asunto no se ha producido la violación del artículo invocado, toda vez que el juzgador de segunda instancia, falló sin abrigar duda sobre la interpretación de las normas aplicables al negocio ventilado, y tampoco se verificó un conflicto normativo, de allí que no hubo lugar a elegir la disposición que resultara más beneficiosa para el trabajador. Consecuentes con lo señalado, se desestima el cargo endilgado.

Como corolario de lo antes expresado, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 20 de agosto de 1998 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral entablado por JORGE ENRIQUE SAMUDIO SALDAÑA -VS- SEGURIDAD INDUSTRIAL S. A. y CONDENA a la empresa demandada al pago de la suma de OCHOCIENTOS NUEVE BALBOAS CON OCHENTA CENTESIMOS (B/.809.80) en concepto de prestaciones laborales desglosadas así:

B/.404.90	En concepto de vacaciones dejadas de pagar.
B/.404.90	En concepto de décimo tercer mes dejados de pagar.
TOTAL....B/.809.80	

Se añaden los recargos e intereses contemplados en los artículos 169 y 170 del Código de Trabajo. Las costas se fijan en un 15% y se confirma el fallo recurrido en todo lo demás.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) JORGE FABREGA P.

(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ALVARO MUÑOZ FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE AMELIA DEL CARMEN ORTEGA, CONTRA LA SENTENCIA DE 16 DE MARZO DE 2,000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: EMPRESAS ROMERO INC. -VS- AMELIA DEL C. ORTEGA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Alvaro Muñoz Fuentes, en nombre y representación de Amelia Del Carmen Ortega, interpuso recurso de casación laboral contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial el 16 de marzo de 2,000, dentro del proceso laboral de impugnación de reintegro por violación del fuero maternal, incoado por EMPRESAS ROMERO, INC. contra AMELIA DEL CARMEN ORTEGA.

La empresa solicitó a la jueza Primera de Trabajo, de la Tercera Sección, que suspendiera y revocara la orden de reintegro de Amelia del Carmen Ortega a su puesto de trabajo en Empresas Romero Inc., contenida en el Auto N° 183 de 22 de julio de 1999.

Presentado el escrito de oposición de la trabajadora a la solicitud de la empresa y celebrada la audiencia, la señora jueza de primera instancia revocó el mandamiento de reintegro, porque consideró probada la existencia y validez del contrato de trabajo que reposa a foja 30 del expediente del proceso laboral, suscrito entre la señora Amelia del Carmen Ortega y la empresa, cuya naturaleza era temporal mientras durara la remodelación del supermercado. Las firmas y contenido de dicho contrato fueron reconocidos en la audiencia por la trabajadora. En dicha sentencia quedó establecido que la terminación de la relación de trabajo no se dió por despido, sino por la culminación de la ejecución de la obra de remodelación del supermercado para la cual fue contratada la señora Ortega (fs. 88 a 94 proceso laboral).

Mediante la sentencia de 16 de marzo de 2,000, el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, al resolver el recurso de apelación presentado por el representante judicial de la trabajadora, confirmó la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:

> "Si bien, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 981-A del Código de Trabajo, luego de la reforma de la Ley 44 de 1995, en los casos en que la impugnación de reintegro se fundamente en la terminación por vencimiento del plazo o conclusión de la obra, el trabajador puede alegar y probar respecto de la ineficacia del pacto de duración temporal, en el presente caso la trabajadora demandante, no ha probado nada en tal sentido.
>
> No es suficiente alegar la ineficacia del contrato, es necesario además, aportar prueba que la sustente, ya que existe un documento firmado por la propia trabajadora, que nos indica que conocía previamente la duración temporal del contrato, por ser ella una persona con pleno discernimiento de sus actos.
>
> La propia trabajadora demandante ha manifestado reconocer el contrato en su firma y contenido, admitió además que la finalidad y duración del mismo era mientras durara la remodelación del Supermercado, manifestando que primero su trabajo era de guía, y que después atendía en el Almacén. Sobre la mencionada remodelación

explicó que simplemente se cambiaron las cosas de un lugar a otro, siendo su función la de vendedora.

En vista de la existencia de un contrato de duración temporal entre las partes, no se da el despido demandado, sino el vencimiento de su término conforme fue pactado, por lo cual no es aplicable el fuero de maternidad, ya que el mismo es una protección legal contra los despidos que se apliquen sin causa a mujeres en estado de gestación, siendo distinta la situación cuando exista un contrato con término fijo de duración en virtud del cual de antemano sabe la trabajadora el vencimiento del mismo, por lo que la decisión de la primera instancia debe confirmarse.
..." (fs. 120 a 125 del expediente del proceso laboral).

El apoderado de la trabajadora consideró que la sentencia recurrida violó en forma directa, por omisión, los artículos 75, 77 numerales 1 y 2, 79, 737 numeral 2 y 981-A del Código de Trabajo, cuyos textos literales establecen:

"ARTICULO 75. La clásula de duración de un contrato por tiempo definido, no podrá ser utilizada con el objeto de cubrir de una manera temporal un puesto de naturaleza permanente, salvo en los casos exceptuados en este Código.

La duración definida sólo será válida si consta expresamente en el contrato escrito, excepto en los casos señalados en el artículo 67 y en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Cuando lo permita la naturaleza del trabajo que constituye el objeto de la prestación;

2. Si tiene por objeto sustituir provisionalmente a un trabajador en uso de licencia, vacaciones o por cualquier otro impedimento temporal;

3. En los demás casos previstos en este Código.

La violación de este artículo determina que, de pleno derecho, la relación de trabajo sea de carácter indefinido."

ARTICULO 77. La relación de trabajo se considerará por tiempo indefinido:

1. Si vencido el término de un contrato por tiempo definido, el trabajador continúa prestando servicios;

2. Cuando se trate de un contrato para la ejecución de una obra determinada, si el trabajador continúa prestando las mismas tareas, luego de concluída la obra;
...

ARTICULO 79. Trabajo permanente, efectivo o de planta es aquél que constituye una ocupación o función de necesidad permanente en la empresa o establecimiento y que tiene por objeto actividades normales y uniformes del empleador, y corresponde al contrato por tiempo indefinido.

Trabajo de temporada es aquél que se ejecuta en una determinada época todos los años, en ciertas ramas de la actividad, formando parte del giro normal y uniforme de las actividades del empleador, y constituye una modalidad del contrato por tiempo indefinido. Se reconoce el régimen de estabilidad, para los efectos de la temporada cuando se hubieren trabajado dos temporadas completas consecutivas.

> ARTICULO 737. Sin perjuicio de las presunciones previstas en las disposiciones de este Código, o que se desprenden de las mismas, en las relaciones de trabajo regirán las siguientes presunciones:
> ...
> 2. Todo contrato de trabajo se presume por término indefinido, salvo que se pruebe conforme a este Código que es por obra o tiempo definido y que el objeto de la prestación permita este tipo de contrato;
> ...
>
> ARTICULO 981-A. La impugnación no suspende el cumplimiento de la orden de reintegro, salvo que se fundamente en que la terminación se debió a vencimiento del plazo o conclusión de la obra, y siempre que con la impugnación se acompañe un ejemplar del contrato escrito de trabajo, en el que conste la duración temporal de la relación laboral.
>
> En estos casos, y en todos los demás, en que la impugnación se fundamente en la terminación por vencimiento del plazo o conclusión de la obra, el trabajador podrá alegar y probar respecto de la ineficacia del pacto de duración temporal."

A juicio de la casacionista la sentencia de 16 de marzo de 2,000, violó el artículo 75 del Código de Trabajo al considerar que el contrato de trabajo era temporal, cuando realmente encubre una relación de tipo permanente y la empresa no probó que la obra tuvo una fecha de inicio y de terminación, ya que la trabajadora se desempeñaba como vendedora en una plaza permanente.

El representante de la trabajadora indicó que los numerales 1 y 2 del artículo 77 del del Código de Trabajo fueron violados, ya que la señora Ortega sólo laboró como guía en diciembre de 1998 y después se desempeñó como vendedora, plaza de carácter permanente, y porque la relación duró ocho meses hasta que la empresa se dió cuenta que estaba embarazada y decidieron aplicar el contrato. Agregó que según jurisprudencia, los contratos por plazo determinado pueden prorrogarse por un nuevo período o convertirse en indefinidos como ocurrió en este caso.

A juicio de la casacionista, la sentencia impugnada infringió el artículo 79 del Código de Trabajo, al no considerar que Amelia Del Carmen Ortega laboró en una plaza permanente como vendedora del almacén Romero.

Señaló que también fue violado el numeral 2 del artículo 737 del Código de Trabajo, porque la empresa no probó que dicho contrato era por obra determinada, sino que por el contrario, quedó establecido que la trabajadora laboró por ocho meses como vendedora del almacén Romero, y la empresa no desvirtuó mediante pruebas la presunción a favor de la trabajadora. Agregó que la labor de cambiar mercancía de un lado a otro no es una obra determinada y es una actividad que nunca puede durar ocho meses. Para sustentar esta afirmación el abogado de la trabajadora cita y transcribe una parte de un fallo de casación laboral dictado el 28 de junio de 1982, según el cual los contratos de trabajo por tiempo definido sólo son válidos cuando además de constar por escrito, el objeto de la prestación los permita, por lo que la casacionista considera que sin prueba de que era una relación por obra determinada, debía considerarse que era permanente.

Por último, indicó que el artículo 981-A del Código de Trabajo fue violado, ya que a pesar que: "se alegó y probó la ineficacia del pacto de duración temporal de la supuesta obra, se ha confirmado la resolución del Tribunal de primera instancia que señala que la obra terminó en junio de 1999 ..." (f. 7).

Luego de confrontar las normas que la parte actora aduce infringidas con la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, esta Sala de lo Laboral concluye que no se violaron y coincide plenamente con lo expresado por el tribunal de segunda instancia, quien aplicó

correctamente el derecho contenido en las normas legales citadas como violadas. A continuación la Sala explicará por qué razones no procede casar la sentencia de 16 de marzo de 2,000.

A foja 30 del expediente del proceso laboral reposa el original del contrato de trabajo por obra determinada firmado por la señora Amelia Del Carmen Ortega y por el señor Jorge Micolta, gerente de recursos humanos de las Empresas Romero, Inc., cuya cláusula primera señala que: "Declara EL TRABAJADOR que conviene en prestar sus servicios a EL EMPLEADOR para realizar una obra determinada, la cual consiste en lo siguiente: Ayudante general, guiar a los clientes dentro del supermercado, (mientras dure la remodelación del supermercado).", y la cláusula cuarta establece que: "Las partes hacen constar que este contrato se celebra por una obra determinada y termina en pleno derecho cuando la trabajadora complete la obra por la cual fue contratada.".

En la audiencia celebrada el 24 de septiembre de 1999, dentro del proceso de impugnación de la orden de reintegro, la señora Amelia Del Carmen Ortega rindió declaración de parte y reconoció el contenido y su firma en el documento que reposa a foja 30 y vuelta del expediente correspondiente al contrato de trabajo.

Las pruebas presentadas por la trabajadora en la solicitud de reintegro por violación del fuero de maternidad y con su demanda de oposición al escrito de impugnación de la orden de reintegro, fueron: carta de la empresa fechada 29 de junio de 1999 que pone fin a la relación laboral, certificación médica del embarazo, copia del contrato de trabajo y acta de comparecencia al Ministerio de Trabajo.

En el Acta de la Audiencia consta que el apoderado judicial de la trabajadora se ratificó de dichas pruebas documentales y no adujo ni presentó ninguna otra (f. 70 del expediente del proceso laboral).

Comprobada la relación de trabajo y el estado de embarazo de la trabajadora (fs. 5 y 30 del expediente del proceso laboral), el Tribunal Superior de Trabajo de la Segunda Sección confirmó la decisión del tribunal de primera instancia, coincidiéndo en el hecho de que la trabajadora no estaba protegida por el fuero de maternidad para efectos de mantenerse en su puesto de trabajo, porque ya no existían las razones de hecho que originaron la contratación de la señora Amelia Del Carmen Ortega por "obra determinada" o por el tiempo que durara la reubicación de la mercancía dentro del almacén y que se extendió hasta el mes de junio de 1999, comunicándole la empresa a la trabajadora el 29 de junio de ese año que el último día de su labor sería el 30 de junio de 1999.

El apoderado de la señora Ortega alegó la ineficacia del pacto de duración temporal, porque a su juicio la posición ocupada por su representada era de planta o de carácter permanente, pero no probó que en efecto la terminación de la relación laboral no se debiera al vencimiento del plazo que duró la remodelación o reubicación de la mercancía, durante el cual fue contratada su representada para prestar servicios generales y de guía a los clientes dentro del supermercado.

En este caso debe determinarse si la relación laboral se inició como una relación temporal, mientras durara una necesidad específica, y si finalizó con motivo de la terminación de esta. El contrato de trabajo presentado y reconocido por ambas partes en el proceso laboral acredita estos hechos, sin que el representante judicial de la trabajadora haya presentado pruebas para desvirtuarlos, por ello la sentencia impugnada con el presente recurso no violó el artículo 75 del Código de Trabajo, puesto que no se probó, tal como lo afirma el casacionista que la relación laboral contratada por tiempo definido encubrió una contratación de trabajo en una plaza permanente. Tampoco se violaron los numerales 1 y 2 del artículo 77 del Código de Trabajo, ya que en el caso de la señora Ortega no se probó que se configurara ninguno de los supuestos que contempla dicha norma, ni es aplicable a la relación de trabajo que mantuvo con

la empresa demandante la definición que establece el artículo 79 del Código de Trabajo, ya que el contrato dejó establecido que la relación laboral obedecía a una necesidad temporal de la empresa, mientras durara la remodelación del supermercado.

Debe entonces la Sala desestimar la violación de las normas sustantivas citadas como infringidas y concluir que el Tribunal Superior de Trabajo de la Segunda Sección aplicó correctamente el artículo 981-A del Código de Trabajo, según el cual corresponde al trabajador alegar y probar respecto de la ineficacia del pacto de duración temporal, en aquellos casos en los que la impugnación de la orden de reintegro se fundamente en la terminación por vencimiento del plazo o conclusión de la obra.

Así pues, en este caso no es aplicable la presunción del numeral 2 del artículo 737, porque con el contrato escrito de trabajo y las propias declaraciones de la señora Ortega, se ha comprobado que la relación laboral se inició con la intención de mantenerla temporalmente, mientras se ejecutaba la reubicación de mercancía en el supermercado. Ante esta realidad, la carga de la prueba de que la relación de trabajo era de carácter permanente o que se convirtió en una de esta índole, recaía en la trabajadora por disponerlo así el último párrafo del artículo 981-A del Código de Trabajo, lo que no llegó a probar la trabajadora en el proceso.

Cabe recordar que la jurisprudencia citada por la casacionista es anterior a la incorporación que la Ley 44 de 1995 hizo del artículo 981-A y que establece lo antes dicho en cuanto a la carga de la prueba.

En caso similar al presente, la Sala Tercera de lo Laboral, mediante su sentencia de 19 de junio de 1998, señaló lo siguiente:

> "La Sala coincide con la sentencia impugnada en cuanto a que la trabajadora no estaba amparada por fuero maternal para permanecer en el trabajo más allá del tiempo pactado, puesto que la relación de trabajo se extinguió al vencerse el término contractual, causal contemplada en el numeral 2 del artículo 210 del Código de Trabajo, y por tanto no procede reintegrar a la trabajadora a sus labores en la empresa Distribuidora Unisys Panamá, S. A., porque ésta manifestó que contrató a la trabajadora como recepcionista para cubrir la necesidad transitoria que se dió en ese puesto de la empresa (f. 25), y la señora Lina Lizbeth Mitre no acreditó en el proceso lo contrario.
> ...
> La apoderada judicial que representó a la trabajadora al momento de interponer el escrito de oposición a la impugnación de la orden de reintegro presentada por la empresa, señaló en la contestación del hecho décimo, que no lo aceptaba porque no es cierto que la posición fuera de carácter temporal para llenar una necesidad transitoria de la empresa, y que probaría en la audiencia que la actividad es de naturaleza permanente, efectiva o de planta (f. 34 del expediente del proceso penal).
> ...
> Lo anterior demuestra que la representación legal de la trabajadora sí alegó que la posición ocupada por la trabajadora dentro de la empresa era de planta o de carácter permanente y no de aquellas que permiten la contratación por tiempo definido, pero no aportó ninguna prueba que así lo sustentara, contrariamente a lo exigido por el artículo 981-A del Código de Trabajo." (Registro Judicial de junio de 1998, págs. a).

Por lo antes expuesto, la Sala considera que la resolución de 16 de marzo de 2,000, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, es conforme a derecho y no viola los artículos 75, 77 numerales 1 y 2, 79, 737 numeral 2 y 981-A del Código de Trabajo.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial el 16 de marzo de 2000, dentro del proceso laboral de impugnación de reintegro por fuero maternal incoado por EMPRESAS ROMERO INC. contra AMELIA DEL CARMEN ORTEGA.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD, EN REPRESENTACIÓN DE MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-0956-99 DE 14 DE JULIO DE 1999, EXPEDIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha presentado solicitud para que se le declare impedida y, en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Dra. Aura Feraud, en representación de MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ, para que se declare nula por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota N° RUTP-N-0956-99 de 14 de julio de 1999, proferido por el Rector de la Universidad Tecnológica, los actos confirmatorios, y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora de la Administración expresa que en su condición de Consejera Jurídica de los Servidores Públicos, consagrada en el artículo 348, numeral 4 del Código Judicial, emitió criterio respecto de los hechos que generaron el Proceso Contencioso Administrativo actual, mediante la Consulta N° 257 de 9 de noviembre de 1999, visible a fojas 23 a 28 del expediente.

El solicitante fundamenta su pretensión en los artículos 749, numeral 5, 388 y 754 del Código Judicial, los cuales son del tenor siguiente:

> "Artículo 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido.
>
> Son Causales de impedimentos:
> ...
> 5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyugue o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados en el proceso, como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o por haber dictaminado por escrito respecto de los hechos, que dieron origen al mismo ...
> (El Subarayado es nuestro)
>
> Artículo 388. Serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces.
>
> Artículo 754. El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las

causales expresadas en el artículo 749, debe manifestarse impedido para conocer del proceso dentro de los dos días siguientes al ingreso del expediente a su despacho, exponiendo el hecho que constituya la causal".

A juicio de los Magistrados de la Sala Tercera, las circunstancias presentadas hacen aplicables las normas transcritas referentes a las causales de impedimento, por lo que es procedente acceder a la petición invocada en este caso.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por la señora Procuradora de la Administración ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, por lo tanto la separan del conocimiento del presente negocio, y ORDENAN designar al suplente que le corresponda para que conozca del asunto.

Notifiquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

ABRIL DE 2000

CARTA ROGATORIA

CARTA ROGATORIA EMITIDA POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL BANCARIO, REFERENTE AL JUICIO POR COBRO DE BOLÍVARES SIGUE LA SOCIEDAD FINANCIERA BANCOR, C. A. Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA CONTRA FIELD REAL STATE CORPORATION. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO. PANAMÁ, CINCO (5) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Sub Directora General de Asuntos Jurídicos y tratados del Ministerio de relaciones Exteriores de la República de Panamá, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, exhorto librado por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario, referente el Juicio que por cobro de Bolívares sigue la SOCIEDAD FINANCIERA BANCOR, C.A. y la Procuraduría General de la república de Venezuela contra FIELD REAL STATE CORPORATION.

El presente exhorto tiene por finalidad la diligencia de notificar a la Sociedad Mercantil FIELD REAL STATE CORPORATION, domiciliada en Panamá, República de panamá, inscrita en el Registro Público, en la Sección de Micropelícula Mercantil a la finca No. 260038, imagen 0017, Rollo 35.440; en la persona del ciudadano LUIS CARLOS ZARAK DE LA GUARDIA, quien es Presidente de la referida empresa, domiciliado en Calle Primera El Carmen, Edificio Santa Fe, 9-B, ciudad de Panamá; o en su defecto, en la persona del ciudadano ABDIEL MANSFIEL, en su carácter de Secretario de la misma, domiciliado en Avenida 12 de octubre, Condominio Acapulco, Torre Norte, Apartamento 34, Ciudad de panamá, República de Panamá, para que comparezca ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Cuidad de Caracas, dentro de veinte (20) días de despacho siguiente a su citación, más cuarenta y cinco (45) días que se le concede como término de la distancia.

Con el presente suplicatorio se anexan los siguientes documentos:

1- Carta Rogatoria con fecha 29 de abril de 1999

2- Copia auténtica de la demanda Interpuesta por el Servicio Autónomo de Personería de la Procuraduría General de la República de Venezuela.

3- Resolución auténtica del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y mercantil Bancario con competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas, de fecha 6 de octubre de 1998, en la que resuelve admitir la presente demanda.

Al efectuar estudio de la presente carta rogatoria se puede apreciar, por razón del contenido de la legislación que regula la materia en Panamá, lo siguiente:

a) Que entre las Repúblicas de Panamá y Venezuela no existe Convención que regule la materia de exhortos o cartas rogatorias.

b) Que la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 101, numeral 3, del Código Judicial, le corresponde el conocimiento de estos asuntos para el cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país.

c) Que en los casos donde no existe una Convención entre los Estados, en acatamiento de las normas de derecho Internacional, se aplica el principio de reciprocidad, para los fines de una mejor cooperación judicial.

d) Que cuando el diligenciamiento de los exhortos o cartas rogatorias se realiza por la vía de la reciprocidad, es necesario que los documentos remitidos se encuentran debidamente autenticados por autoridad consular panameña acredita en el país requiriente, que no sean violatorios del orden público interno, y que estén debidamente traducidos al idioma español.

En el caso que no ocupa, la Sala observa que la carta rogatoria que se expide en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas, es tramitada a esta Superioridad por vía diplomática, y que en el caso de los países que han ratificado la Convención Americana en materia de exhortos, basta la tramitación por la referida vía.

Aunado a lo interior, esta Superioridad observa que los solicitado en la comisión rogatoria en cuestión, no vulnera nuestro ordenamiento jurídico interno, por lo que cabe darlo la cooperación a las autoridades venezolanas tendiente a contribuir con el proceso aludido.

Por lo anteriormente expuesto es permisible darle curso a la comisión rogatoria librada por el Tribunal Venezolano, dentro del proceso de notificación a la Sociedad Mercantil FIELD REAL STATE CORPORATION, mediante su presidente LUIS CARLOS ZARAK DE LA GUARDIA, o en su defecto a la persona de ABDIEL MANSFIEL, en su carácter de Secretario de la misma.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, LA SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARE VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional de la comisión rogatoria librada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, dentro del juicio que por COBRO DE BOLÍVARES (VÍA EJECUTIVA), sigue la SOCIEDAD FINANCIERA BANCOR, C.A., y PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, contra FIELD REAL STATE CORPORACIÓN, a fin que se notifique al Presidente o en su defecto al Secretario de la citada sociedad y ORDENA que por Secretaría de la Sala de Negocios Generales se efectúe la notificación atendiendo a este respecto las normas procesales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico interno y aplicables a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

INCIDENTE DE RECUSACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ALEJANDRO MONCADA CONTRA EL MAGISTRADO HUMBERTO COLLADO, DENTRO DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, PARA QUE LA SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES LE OTORGUE CONCEPTO FAVORABLE PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS AL DIRECTOR GENERAL Y AL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13 DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado ALEJANDRO MONCADA presentó incidente de recusación contra el Magistrado Humberto Collado, dentro de la solicitud formulada por el licenciado José Antonio Sossa, Procurador General de la Nación, para que la Sala Cuarta de

Negocios Generales, le otorgue concepto favorable para destituir de sus cargos al Director General y al Subdirector General de la Policía Técnica Judicial.

Manifiesta el incidentista que el Magistrado Collado es el padre del licenciado Humberto Collado, quien ocupa el cargo de Fiscal de Circuito de la Provincia de Los Santos, por lo cual, es funcionario del Ministerio Público, cuyo jefe es el licenciado José Antonio Sossa, Procurador General de la Nación.

Según el licenciado Moncada, como el Magistrado Collado forma parte del organismo que debe decidir si otorga o no concepto favorable a la solicitud de concepto previo presentada por el Procurador General de la Nación, "existe la posibilidad de que el Magistrado HUMBERTO COLLADO, en este caso, afecte la situación personal y laboral del fiscal de la Provincia de Los Santos, Licenciado HUMBERTO COLLADO, quien es su hijo y a la vez subalterno del Procurador General de la Nación, Licenciado JOSE ANTONIO SOSSA, por ser éste último Jefe del Ministerio Público" (fs. 1-3).

La causal de impedimento que el licenciado Moncada cita en apoyo de sus argumentos, es la contenida en el numeral 13 del artículo 749 del Código Judicial, que se refiere al hecho de "Estar vinculado el Juez o Magistrado con una de las partes por relaciones jurídicas susceptibles de ser afectadas por la decisión;".

Al contestar los hechos en que se fundamentó el incidente de recusación, el Magistrado Collado expresó lo siguiente:

> "Es cierto, como se expresa en el escrito de recusación que debo conocer de la referida solicitud de autorización como también es cierto que soy el padre del licenciado Humberto A. Collado Castillo, quien es funcionario del Ministerio Público al igual que es conocido que el licenciado José Antonio Sossa desempeña las funciones de Procurador General de la Nación.
>
> En cuanto a las razones de derecho que se expresan como fundamento para la recusación, debo señalar que ya con anterioridad, dentro de la querella penal interpuesta por el licenciado Alejandro Moncada Luna contra el licenciado José Antonio Sossa, proceso en que me correspondió la ponencia, el licenciado Moncada Luna presentó escrito -el 5 de agosto de 1999- donde solicitaba que me declarara impedido para conocer de esa causa, alegando precisamente como fundamento de derecho el numeral 13 del artículo 749 del Código Judicial, norma que es la misma que ahora también invoca, señalando en aquella ocasión, como lo hace en el presente, que el licenciado Jose Antonio Sossa ocupaba la posición de Procurador General de la Nación y mi hijo Humberto A. Collado Castillo, la de Fiscal de Circuito de Los Santos, situación que "pudiera interpretarse como una relación jurídica susceptible de afectar la decisión de esa augusta Corporación Judicial, sea cual fuere".
>
> En su oportunidad, en aquel proceso, formulé una manifestación de impedimento, con fundamento en el numeral 13 del artículo 749 del Código Judicial y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 14 de septiembre de 1999, después de formular las consideraciones pertinentes, declaró que "no es legal el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado Humberto Collado dentro de la querella presentada por el licenciado Alejandro Moncada contra el licenciado José Antonio Sossa". " (fs. 5-7).

Al entrar en el análisis de los argumentos en que el licenciado Moncada fundamentó su incidente de recusación, esta Sala observa que, tal como afirma el Honorable Magistrado Humberto Collado, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante Auto de 14 de septiembre de 1999, se pronunció sobre los mismos aspectos de hecho y derecho en que el licenciado Moncada fundamenta dicho incidente. La

parte pertinente del mencionado Auto expresó lo siguiente:

> "En concepto del Pleno de la Corte, el impedimento manifestado por el Magistrado Humberto Collado no es legal, porque aun cuando su hijo, el licenciado Humberto A. Collado Castillo, ocupa el cargo de Fiscal de Circuito en el Ministerio Público (provincia de Los Santos), ello no supone la existencia de relaciones jurídicas susceptibles de ser afectadas por la decisión que emita el Pleno al resolver el presente negocio, tal como señala la norma in comento.
>
> Lo anterior es así, con mayor razón, si consideramos el hecho de que la jurisprudencia sentada por la Sala Tercera de esta Corporación Judicial ha sostenido que, aun cuando los funcionarios judiciales y agentes del Ministerio Público no están amparados por la Carrera Judicial, el ejercicio de la facultad disciplinaria que sobre éstos se ejerza debe responder a un interés legítimo, es decir, conforme a la buena gestión de la administración de justicia y no a fines distintos, como serían, por ejemplo, los intentos de suplantación del criterio jurídico del funcionario inferior, la atribución arbitraria y caprichosa de conductas reprobables o indignas no probadas o la actuación del funcionario de jerarquía superior alentada por motivaciones ajenas al interés público (Cfr. Sentencia del 24 de abril de 1996, Caso: Cecilia López de Martin contra Fiscales Superiores del Primer Distrito Judicial de Panamá).
>
> De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES LEGAL el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado Humberto Collado dentro de la querella presentada por el licenciado Alejandro Moncada contra el licenciado José Antonio Sossa, Procurador General de la Nación."

En el presente caso, el resto de los Magistrados que integran la Sala Cuarta consideran que el incidente de recusación interpuesto por el licenciado Moncada debe declararse no probado, por las mismas razones que se expusieron en el Auto de 14 de septiembre de 1999, parcialmente transcrito.

De consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala Cuarta, de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia, DECLARA NO PROBADO el incidente de recusación interpuesto por el licenciado Alejandro Moncada contra el Magistrado Humberto Collado, dentro de la solicitud formulada por el licenciado José Antonio Sossa, Procurador General de la Nación, para que la Sala Cuarta de Negocios Generales, le otorgue concepto favorable para destituir de sus cargos al Director General y al Subdirector General de la Policía Técnica Judicial.

Notifíquese,

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA ZARAK
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA ROSA ARAÚZ DE DELGADO CONTRA EL LICENCIADO LEONEL URRIOLA CASTILLO, POR FALTAS A LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados ha ingresado a la Sala de Negocios Generales el expediente contentivo de la denuncia, que por faltas a la ética y la responsabilidad profesional del abogado, interpuso la señora ROSA ARAÚZ DE DELGADO contra el licenciado LEONEL URRIOLA CASTILLO; como quiera que, dicho tribunal, ha solicitado se decrete la citación a juicio del demandado.

ANTECEDENTES

Mediante manuscrito presentado ante el Colegio Nacional de Abogados, fechado 19 de febrero de 1999, la señora ROSA ARAÚZ DE DELGADO expuso los hechos que dieron motivo a su denuncia; quien en lo medular de su afirmación, señala:

> "... El 4 de mayo de 1998 consulté en David Chiriquí con el Lic. Leonel Urriola para que me representara sobre un problema de un secuestro a mi favor. El Sr. Urriola me pidió $535 para efectuar dicho secuestro y jamás realizo su trabajo y lo que hizo fué desaparecer con el dinero y jamas pude localizarlo por que me dió 6 números de teléfonos equivocados y dirección de una oficina en Pmá que jamas existió y cuando lo localice solo fue para decirme mentiras.
>
> Hace aproximadamente 8 días lo localicé porque su hermano Licenciado "Toti" Urriola me informó que ya el estaba cansado del mal proceder de su hermano y que no era la primera persona que la buscaba para localizarlo por estás actitudes de estafa del mencionado Sr. y fué él que me dió la dirección en "Villa Flor, Barriada San Antonio, Pmá.
>
> Ruégole encarecidamente Lic. Reyes, interponga sus buenos oficios a fin de que este Sr. me devuelva mi dinero ya que el aceptó que no me había hecho la diligencia por estar muy ocupado (Eso hace como un año)."

La demandante adjuntó como prueba de los hechos denunciados, copia autenticada, por el Tribunal del Colegio Nacional de Abogados, de un recibo fechado 17 de septiembre de 1998, firmado por el licenciado LEONEL URRIOLA, donde se establece la entrega de un dinero por la suma de B/.150.00 en concepto de devolución, quedando pendiente una deuda de B/.400.00. (v. fj. 6)

Además, aporta copia autenticada, en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, de un recibo donde se establece la entrega de un dinero por la suma de B/.360.00 para afianzar una diligencia de secuestro judicial (v. fj. 7).

Acogida la denuncia por el Tribunal de Honor, mediante providencia de 24 de febrero de 1999, se dispone, entre otras cosas, abrir la investigación a efecto de comprobar los hechos denunciados, la calidad profesional del denunciado y su relación con los hechos atribuídos a su conducta; correr traslado de la denuncia al licenciado LEONEL URRIOLA para que haga los descargos y alegaciones que estime; y, practicar las pruebas documentales, testimoniales y periciales que sean necesarias.

Mediante Nota de 24 de febrero de 1999 el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados solicitó a esta Sala, certificación sobre la condición de abogado para ejercer la profesión, el tiempo de ejercerla y los antecedentes disciplinarios del licenciado LEONEL URRIOLA. Dicha solicitud fue contestada mediante Certificación calendada 22 de marzo de 1999, expedida por el Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Carlos H. Cuestas C.

Por otro lado, a foja 14 del expediente, encontramos un informe secretarial en donde se hace constar que el día 17 de marzo de 1999, el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados envió nota a la oficina del licenciado Urriola para que realizara sus descargos. En dicho informe se establece que transcurrió más

de un mes sin que éste contestara a los hechos denunciados en su contra.

Luego de las investigaciones realizadas, y tomando en consideración: "1- Que en el expediente constan, como prueba, las fotocopias de los recibos firmados por el mismo abogado denunciado y en los cuales se acepta que efectivamente recibió las sumas de dinero manifestadas por el denunciante, que no efectuó las diligencias contratadas y que procedería a devolver el dinero. 2- Que el Tribunal de Honor ordenó correr en traslado la denuncia al abogado LEONEL URRIOLA CASTILLO, para que hiciese los descargos y alegaciones que estimase convenientes dentro del término de cinco (5) días, instancia esta, debidamente notificada y que no fue aprovechada por el denunciante al no aportar prueba alguna en su defensa; el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados decidió, como señalamos anteriormente, mediante escrito de 28 de septiembre de 1999, solicitar a esta Corporación se citara a juicio del licenciado LEONEL URRIOLA CASTILLO.

Recibido el negocio en esta Corporación de Justicia, mediante providencia de 26 de noviembre de 1999 se ordenó correr traslado del proceso instaurado, al demandado, por un término de cinco (5) días, para que presentara los escritos de excepciones y de oposición a la petición de llamamiento a juicio solicitada por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

Como se observa al reverso de la foja 22 del expediente, encontramos la notificación efectuada al Licenciado LEONEL URRIOLA, el día 26 de enero del año en curso. El demandado contestó y se opuso a los hechos denunciados en su contra, expresando en lo medular de su escrito, lo siguientes:

> "PRIMERO: En mayo de 1998, la Sra. ROSA ARAUZ DE DELGADO, contrató mis servicios profesionales para efectuar secuestro contra la Sra. DAYBY SANTAMARÍA RUIZ, hasta la suma de $2,370.00.
>
> SEGUNDO: La sra. Rosa Arauz de Delgado, el día 8 de mayo de 1998, me entregó $360.00 para afianzar el secuestro de la casa con derechos posesorios y de propiedad de la sra. Daybys Santamaría Ruíz.
>
> TERCERO: Posteriormente la sra. ROSA Araúz de Delgado me entregó $150.00 más para completar el dinero para el secuestro.
>
> CUARTO: El día 28 de mayo de 1998, a las 9.20 de la mañana presenté en el Juzgado Primeo del Circuito Civil de Chiriquí, conjuntamente con las señora Rosa Araúz de Delgado la acción de secuestro de la casa de la sra. Daybys Santamaría Ruíz, hasta la concurrencia de $2,370.00.
>
> QUINTO: El hecho que motivó para que como abogado presentara este secuestro fue una denuncia hecha por la sra. Rosa Araúz de Delgado el día 16 de febrero de 1998 contra la sra. Daybys Santamaría Ruíz, en la Fiscalía Segunda de Circuito de Chiriquí, en la cual hacía constar que la demandada le adeudaba a la sra. Rosa Araúz de Delgado, la cantidad en cuestión.
>
> SEXTO: El día 8 de junio de 1998 viajé a Chiriquí a efectuar el afianzamiento del secuestro y la sra. Rosa Araúz de Delgado me comunicó que la Fiscalía Segunda de Circuito de Chiriquí había fallado en una vista fiscal absolviendo en sobreseimiento definitivo a favor de la sra. Daybys Santamaría Ruíz.
>
> SEPTIMO: Leyendo como abogado la vista fiscal pronunciada por el fiscal Segundo Lic. Abdiel Samudio, en la cual establecía sobreseimiento definitivo en favor de la sra. Daybys Santamaría Ruíz, pero que se trataba de un asunto que se debía dilucidar civilmente por ser un incumplimiento de lo pactado e igualmente mantiene el fallo la Juez Tercera del Circuito de Chiriquí Ramo Penal, aduciendo que se trataba de un acto de comercio.

OCTAVO: Le comuniqué después de leído el fallo a la sra. Fosa Araúz de Delgado, que sí procedía el secuestro, porque se trataba de un acto de comercio y no de un delito; contestándome ella, que tenía miedo porque el fallo le daba sobreseimiento definitivo a la sra. Daybys Santamaría Ruíz, y que dejara el secuestro en ese estado y que no hiciera el depósito y la dejara consultar con su hijo y su nuera, que son abogados y viven en la ciudad de Panamá, y que dejara las cosas así, que ella se comunicaba conmigo al teléfono 239-4249. Ese mismo día ella me alquiló su camioneta, cobrándome $40.00 por el uso de la misma y los cuales le cancelé inmediatamente.

NOVENO: El día 15 de septiembre de 1998 fuí a Chiriquí, me comuniqué con la sra. Rosa Araúz de Delgado, en vista de que no me habíu (sic) llamado y fuí hasta su casa, entonces fue cuando ella me dijo que no quería seguir el trámite del secuestro en ese momento y le devolviera su plata. en ese momento le hice la devolución de $150.00, y le comuniqué que debía cancelar mis honorarios profesionales y mis gastas hasta ese día, ya que ella contrato mis servicios sabiendo que resido en la ciudad de Panamá, y que mis honorarios hasta ese momento eran de $200.00 y que tenía que cubrirme los gastos de dos viajes a Chiriquí, a razón de $100.00 por viaje. En ese instante se disgustó y me dijo que ya yo le había firmado un documento y que no me pagaría. Desde ese momento comenzó una campaña sucia de desprestigio en contra de mi persona; primeramente visitando la residencia del señor MIGUEL ANGEL VALDES y su esposa, ubicada en el IVU cementerio de David, calle principal; que eran clientes míos en ese momento, entregándoles papeletas y aduciendo en las misma que yo era un estafador. No conforme con esta situación se apersonó a la barriada donde resido en San Antonio, Villa Flor, Panamá, ha pegar en cada poste de tendido eléctrico - dos cuadras alrededor de mi casa estos afiches que presento como prueba, en los cuales dejaba el teléfono 232-8198, aduciendo que yo era un estafador y que me comunicara con ella.

DÉCIMO: Quiero señalar además, que esta señora está acostumbrada a presentar denuncias como la que presentó en el quinto punto."

El demandado adjuntó como prueba de sus descargos los siguientes documentos:

1- Copia del poder otorgado en su favor por la señora ROSA MARÍA ARAÚZ DE DELGADO y de la solicitud de secuestro en contra de la señora DAYBIS SANTAMARÍA RUÍZ; con acuso de recibo el día 28 de mayo de 1998.

2- Copia de la Vista Fiscal No. 142 de 15 de abril de 1998, emitida por el Fiscal Primero de Circuito de Chiriquí dentro de las sumarias iniciadas contra DAYBIS SANTAMARÍA por delitos contra el patrimonio en perjuicio de ROSA MARÍA SANTAMARÍA DE DELGADO.

3- Copia del Auto No. 287 de 28 de abril de 1998, dictado por el Juzgado Tercero de Circuito, Penal, de Chiriquí.

4- Copia del Edicto de Notificación No. 504 de 22 de mayo de 1998.

5- Tres carteles escritos con marcador rojo, donde se denuncia al Licenciado LEONEL URRIOLA CASTILLO como estafador.

6- Denuncia presentada por la señora Daybis Santamaría por delitos contra el patrimonio, en su perjuicio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La demandante basa su denuncia en el hecho de haber contratado los

servicios profesionales del licenciado URRIOLA para que la representara en acciones civiles a interponer y que éste nunca cumplió con lo acordado.

Para corroborar esta afirmación, la demandante presenta copias simples de los recibos y notas de crédito otorgados por el demandado. En relación al hecho manifestado por la demandante y sobre las pruebas aportadas, debemos tomarlas como ciertas, toda vez que el demandado, al momento de hacer sus descargos, reconoce el haber sido contratado por la señora ARAÚZ DE DELGADO. De igual manera acepta haber recibido dinero de ésta para iniciar los trámites acordados.

El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados consideró que el Licenciado LEONEL URRIOLA CASTILLO por infringir las normas de ética del abogado contenidas en los literales b y ch del artículo 34 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado; como lo señalaramos en párrafos anteriores. El Tribunal de Honor llegó a esta conclusión sin escuchar al demandado, ni estimar las contrapruebas que pudiera haber aportado, como lo hizo al momento de contestar los cargos que se le hacen.

En este orden de ideas, el licenciado Urriola Castillo, acompañó al escrito de contestación copia del poder y solicitud presentado ante el Juzgado de Circuito Civil, en Turno, de la Provincia de Chiriquí; quedando entablada la medida cautelar solicitada por la demandante. Por su parte la señora Rosa Araúz alega que luego de estas diligencias el licenciado Urriola Castillo no continuó con los trámites necesarios para llegar a hacer efectiva la medida; a lo que se opone rotundamente el demandado, ya que le adjudica, a aquella, la responsabilidad de no continuar con la medida cautelar a su cliente, quien le pidió no continuar con los trámites.

Ahora bien, el licenciado Urriola Castillo recibió un dinero de la señora Rosa Araúz para la interposición de la acción y su respectiva fianza; la acción fue interpuesta, más no afianzada, presumiblemente, por lo que el licenciado Urriola Castillo retuvo dineros destinados para el trámite de la acción cautelar; lo que contraviene el literal ch. del artículo 34 del Código de Ética del Abogado.

El demandado afirmó haber incurrido en gastos de viaje, al trasladarse a la ciudad de David, para interponer la acción de secuestro, por lo que, la demandante le adeuda la suma B/.200.00 Balboas. Consideramos que lo afirmado por el licenciado Urriola Castillo no le permite actuar contrario al Código de Ética del Abogado; mismo que establece como falta a la ética, retener dineros, bienes o documentos entregados con relación a las gestiones realizadas.

DECISIÓN

La Sala considera que la situación planteada por la demandante y la oposición manifestada por el demandado, deberán deslindarse en su oportunidad, como lo determinan las normas establecidas en la Ley 9 de 18 de abril de 1983, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, toda vez que encontramos suficientes méritos para elevar a juicio las investigaciones seguidas contra el licenciado LEONEL URRIOLA CASTILLO.

En consecuencia, la SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD FORMULADA POR EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO SOSSA, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, A FIN DE QUE LA SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LE OTORGUE CONCEPTO FAVORABLE PARA REMOVER DE SUS CARGOS DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, A LOS LICENCIADOS ALEJANDRO MONCADA Y RAMIRO JARVIS, RESPECTIVAMENTE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA RODRÍGUEZ, Procurador General de la Nación, solicitó a los Magistrados que integran la Sala Cuarta, de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia, que le otorguen concepto previo y favorable para remover a los licenciados Alejandro Moncada y Ramiro Jarvis, de sus cargos de Director y Subdirector de la Policía Técnica Judicial, respectivamente.

La solicitud elevada por el licenciado SOSSA a esta Sala tiene asidero jurídico en el artículo 20 de la Ley N° 16 de 1991, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 2 de 1999, el cual establece que "El Director y Subdirector de la Policía Técnica Judicial serán nombrados por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por un período de siete años, y sólo podrán ser suspendidos o removidos de sus cargos por el Procurador General de la Nación, previo concepto favorable de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia."

Básicamente, el licenciado SOSSA estima que ambos funcionarios incurrieron en graves violaciones a la Ley N° 16 de 1992 (Orgánica de la Policía Técnica Judicial), así como a las normas de Ética Judicial contenidas en el artículo 440 del Código Judicial. A continuación, la Sala expondrá cada uno de los cargos que el señor Procurador General de la Nación imputa a dichos funcionarios en su solicitud y los descargos del señor Director General de la Policía Técnica Judicial. Los descargos del licenciado Jarvis, se examinarán separadamente. Veamos:

1. El licenciado Jorge Mottley, en su condición de Jefe de la Oficina de INTERPOL-Panamá, con conocimiento del Director General de la Policía Técnica Judicial, remitió un mensaje a la oficina de INTERPOL-Roma, en el que informa que aquélla entidad ha realizado investigaciones sobre lavado de dinero que involucran al ciudadano Alfredo Oranges, sin que, en realidad, tales investigaciones se hayan hecho. De este modo, se produjo una prueba falsa para la resolución de conflictos ajenos a la administración de justicia.

Al presentar sus descargos mediante el escrito que consta de la foja 233 a la 288, el licenciado Moncada afirmó, que el escueto mensaje de INTERPOL-Panamá, bajo ningún concepto puede considerarse como una prueba falsa o inventada por esa oficina para incriminar al ciudadano Alfredo Oranges, toda vez que el informe de la Unidad de Investigación Financiera, cuya copia reposa a foja 637, contiene hechos concretos que detallan: nombres de países, cuentas bancarias, cifras millonarias, personas que firman las cuentas bancarias, cheques confeccionados y girados a favor de un sujeto, etc, que, en términos generales, prueban lo que aparece plasmado en el mensaje INTERPOL-Panamá.

El licenciado Moncada aclara que, en cumplimiento de las peticiones de asistencia policial internacional recibida a través de INTERPOL-Panamá, la Policía Técnica Judicial suele hacer investigaciones policiales de una amplia variedad, sin la necesidad de que exista un proceso penal o expediente en nuestro país. Estas actuaciones investigativas de asistencia policial internacional tienen su fundamento en el artículo 15 de la Ley 16 de 1991, Orgánica de la Policía Técnica Judicial.

Sostiene, finalmente, que no llegó a observar violación alguna de la Ley ni a disposiciones reglamentarias por lo que no llegó a formalizar lo que el

Procurador denomina "corregir las irregularidades procesales cometidas por el licenciado Jorge Mottley como Jefe de Interpol ...".

2. El licenciado Moncada suministró al diario La Prensa copia de dos oficios que sólo estaban en su poder, y en los cuales el Procurador solicitó al Gerente General de Cable & Wireless Panama, S. A. y al propio licenciado Moncada, la intervención del teléfono del Juez Jorge Luis Lao Cruz.

El licenciado Moncada niega esta afirmación porque uno de esos oficios no estaba dirigido a él, sino al Gerente General de la empresa Cable & Wireless Panama, S. A. y porque ambos oficios le fueron remitidos a él (Moncada) desde el Fax de la Secretaría General de la Procuraduría (fs. 643 y siguientes).

3. También el licenciado Moncada suministró al diario La Prensa una Nota en la que el Agregado Jurídico de la Embajada de los Estados Unidos le informó las sospechas que se tienen sobre las actividades realizadas por el norteamericano Marc Harris y su presunta vinculación con otros dos ciudadanos estadounidenses confesos del delito de narcotráfico en Estados Unidos. Siendo "el Señor Moncada el custodio de la citada nota, evidentemente fue él que se la suministró al diario La Prensa" (f. 63).

Al negar este cargo, el licenciado Moncada expresa que el Procurador desconoce que, así como los policías investigativos tienen informantes, los periodistas investigativos también los tienen, por lo que suelen disponer de una amplia variedad de fuentes, que bien podrían ser, inclusive, personal del Ministerio Público o personas allegadas a dicha institución. Se trata, agrega, de consideraciones especulativas (f. 241).

4. La presentación por parte del Director de INTERPOL-Panamá de una denuncia penal ante la Procuraduría de la Administración, contra del Procurador General de la Nación, acompañado por directivos y recursos de la Policía Técnica Judicial (f. 84).

Según el Director de la Policía Técnica Judicial, el Director de INTERPOL-Panamá, al presentar su denuncia penal contra el Procurador General de la Nación no hizo mas que ejercer un derecho que la Ley otorga a todo ciudadano que se sienta afectado por la comisión de un delito en su contra.

5. La publicación en todos los diarios de la localidad de un comunicado en el que se acusa al Procurador de no haber iniciado una investigación contra el ciudadano a Alfredo Oranges por su supuesta vinculación a una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero. En el penúltimo párrafo de dicho comunicado, se alude al caso Villanueva, que no se inició en el Despacho del Procurador (f. 111).

En sus descargos, el licenciado Moncada aceptó haber publicado el comunicado, pero con recursos ajenos a la Institución, para aclarar la posición asumida por la Policía Técnica Judicial en los casos de Oranges y Harris, como respuesta a la campaña de descrédito auspiciada por el Procurador General de la Nación contra dicha institución de investigación criminal (f. 244).

6. Desobediencia del Director General de la Policía Técnica Judicial y de sus subalternos, al incumplir órdenes legítimas impartidas por el Procurador General de la Nación, entre ellas, las siguientes:

6.a. El reemplazo de 5 de las 22 unidades que custodiaban bienes y dignatarios del Ministerio Público, que fueron retiradas una vez se inició la crisis entre esta entidad y la Policía Técnica Judicial. Al respecto, el Secretario General de la Procuraduría, mediante Oficio N° PGN-SG-101-99 del 3 de agosto de 1999, solicitó al Subdirector de la Policía Técnica Judicial, licenciado Ramiro Jarvis, el reemplazo de las unidades que fueron retiradas (Cfr. f. 121). Asimismo, solicitó el reintegro de dos unidades de la Policía Técnica Judicial que laboraban en la investigación de un caso en la Fiscalía Superior

Especial, que fueron retiradas sin justificación alguna. A la fecha, afirma el señor Procurador, estos requerimientos han sido ignorados (Cfr. f. 8 y f. 124).

A foja 124 el Subjefe de Seguridad del Ministerio Público, mediante Nota fechada 6 de enero del año 2000, informa al Secretario General de la Procuraduría que las unidades devueltas a la Policía Técnica Judicial, "aun no han sido reemplazadas a pesar de haber hecho la solicitud formal en reiteradas ocasiones". Agrega, que en varias ocasiones ha conversado con el Subdirector y el Secretario General de la Policía Técnica Judicial, sin que a la fecha haya recibido respuesta alguna.

Sobre estos cargos el licenciado Moncada, refiriéndose a la información que le brindó el licenciado Ramiro Jarvis, las cinco unidades a las que alude el Procurador no fueron retiradas de la Seguridad del Ministerio Público por iniciativa del Despacho Superior de la Policía Técnica Judicial. Dos de ellos fueron devueltos el 24 de mayo y 17 de julio de 1999 por el Jefe de Seguridad de la Procuraduría, quien prescindió de sus servicios y posteriormente, se asignaron tres nuevas unidades (Detectives Jorge Martez, Manuel Maya y Jaime Rodríguez), quienes, hasta el presente, permanecen laborando en la Seguridad del Ministerio Público.

En cuanto a las tres unidades faltantes (de las cinco), señala que, al recibirse la comunicación del 3 de agosto de 1999, el Detective Gilberto Atencio estaba de vacaciones y cuando regresó se reincorporó a la Seguridad del Ministerio Público; el otro Detective (Regino Moreno) fue separado del cargo por estar bajo investigación y el último renunció del cargo. "Como quiera que las vacantes producidas por la ausencia de estos dos últimos detectives no han podido ser llenadas, no hemos estado en capacidad de cubrirlas".

En lo que respecta a las dos unidades que colaboraban con la Fiscalía Superior Especial en algunas diligencias relacionadas con el homicidio del señor Alfredo Laine, éstas retornaron a su respectiva División, luego de prestar la asistencia que fuera requerida verbalmente por el citado Despacho (fs. 253-254).

No obstante los descargos ofrecidos por el licenciado Moncada, la Sala observa que este cargo, en realidad, consiste en una imputación directa contra el licenciado Ramiro Jarvis, por ser él la persona a quien estaba dirigido el Oficio N° Oficio N° PGN-SG-101-99 del 3 de agosto de 1999, cuyo incumplimiento cuestiona el Jefe del Ministerio Público. De allí, que la Sala examinará dicho cargo en el punto "B", relativo a los cargos formulados contra el Subdirector General de la Policía Técnica Judicial.

6.b. La inasistencia a las reuniones que deben celebrase los días lunes y jueves con el Fiscal Auxiliar de la República.

De acuerdo con el licenciado Moncada, las reuniones a las cuales alude el señor Procurador fueron suspendidas unilateralmente por el propio Fiscal Auxiliar. Por tal motivo, el Subdirector de la Policía Técnica Judicial le presentó un informe fechado 24 de septiembre de 1999, según el cual, el Secretario de la Fiscalía Auxiliar le informó a él (al Subdirector), que el Fiscal Auxiliar había dispuesto cancelar las aludidas reuniones hasta tanto el Director de la Policía Técnica Judicial le diera respuesta al Oficio N° 11910, del 10 de septiembre de 1999 (f. 695). Agrega que esta y otras situaciones fueron comunicadas al doctor Arturo Hoyos mediante Nota del 27 de septiembre de 1999, que consta a foja 699.

A foja 831 consta una Nota fechada 13 de octubre de 1999, en la que el licenciado Ramiro Jarvis le solicita al Fiscal Auxiliar de la República que le indique cuándo se reiniciarán las referidas reuniones.

6.c. La no presentación de los informes escritos y detallados de las investigaciones preliminares que adelanta la aludida entidad auxiliar del Ministerio Publico, así como de las denuncias que a diario se presentan.

Según el Director General de la Policía Técnica Judicial, esta afirmación del señor Procurador es falsa porque al trastocarse la estructura orgánica de la esta entidad, debido al nombramiento del señor Roniel Ortiz como nuevo Jefe del Centro de Recepción de Denuncias, la información contenida en el listado diario de las denuncias que se presenten ha ido a parar directamente en manos del señor Fiscal Auxiliar, quien ejerce control sobre el citado Despacho, por órdenes del señor Procurador. Como prueba de esta afirmación, el licenciado Moncada aportó copia del Oficio N° 1 del 22 de noviembre de 1999, mediante el cual el señor Roniel Ortiz comunicó al Director de la Policía Técnica Judicial su designación como Jefe del Centro de Recepción de Denuncias (f. 709).

6.d. La no adopción de las medidas de coordinación necesarias para hacer efectiva la designación del nuevo Jefe del Centro de Recepción de Denuncias, nombrado por el Procurador General de la Nación.

Sobre este cargo el licenciado Moncada explica, que por considerar ilegal la decisión del Procurador General de la Nación al designar él al Jefe del Centro de Recepción de Denuncias, procedió a interponer, en ejercicio de un derecho que le asiste a todo funcionario responsable, una acción contenciosa-administrativa de interpretación prejudicial, lo cual fue interpretado por el Jefe del Ministerio Público como un acto de desobediencia e insubordinación.

A foja 171 consta el Oficio N° DG-01-187-99 del 19 de noviembre de 1999, en el que el Director General señala al Jefe del Ministerio Público que no ejecutará las instrucciones que éste le había dado y a la vez informa, que interpuso formal demanda de interpretación prejudicial ante la Sala III.

6.e. La omisión, durante más de un mes, en el envió de información relativa a la persona que ocupaba el cargo de Jefe de INTERPOL-Panamá para 1998, al igual que toda la información relativa al caso Oranges por supuestas actividades de lavado de dinero. Dicha información fue solicitada por el Fiscal Auxiliar a través de Oficios fechados 2 y 26 de noviembre y 3 de diciembre de 1999.

En términos generales, el Director de la Policía Técnica Judicial afirma que él acostumbra cumplir sin dilaciones las órdenes; que dado el cúmulo de requerimientos, delega funciones en el Secretario General y que para la fecha en que este funcionario preparaba la información peticionada por la Fiscalía Auxiliar, se produce la diligencia de toma de declaración indagatoria al Director de la INTERPOL (celebrada el día 9 de noviembre de 1999, Cfr. f. 34), por haber falseado, supuestamente, información que incriminaba a Alfredo Oranges.

6.f. La omisión, durante más de dos meses, en dar respuesta a la solicitud que le hizo el Fiscal Superior Especial al Director de la Policía Técnica Judicial para que le brindara información sobre el listado de personas que habían sido sometidas al uso de polígrafo o detector de mentiras. Esta información fue solicitada por medio de los Oficios fechados 5 de octubre, 2 de noviembre y 2 de diciembre, todos de 1999. El Fiscal Superior Especial comunicó esta situación a la Sala II de la Corte Suprema de Justicia a fin de que ésta dispusiera lo que en derecho proceda, para poner término a la negativa injustificada que mantiene el Director de la Policía Técnica Judicial (Cfr. fs. 181-186).

Sobre estas aseveraciones del Jefe del Ministerio Público, el licenciado Moncada expresó que la información solicitada por el Fiscal Superior Especial no se había enviado debido a que se pedía un listado de nombres, con fechas en las que se utilizó el polígrafo, detalle de cada caso específico, que en realidad incluye, básicamente, a los aspirantes a detectives que en diversas ocasiones han pretendido ingresar a la Policía Técnica Judicial. Todo ello hace compleja la tarea de recabar dicha información, pues, ésta está archivada manualmente, en su mayor parte en el Departamento de Adiestramiento de Gamboa. Apenas se recopile en su totalidad se remitirá.

7. Se irrespetó la figura del Procurador General de la Nación al premiar con un ascenso a las unidades que participaron el día 8 de julio de 1999 en un

incidente frente a las instalaciones de la Policía Técnica Judicial, en el cual se impidió el paso al Jefe del Ministerio Público. Con relación a este punto, consta en autos la declaración del Detective José Elicio Ruisánchez, quien declaró que fue ascendido de rango el día 9 de julio de 1999 (f. 198).

También se ascendió al Inspector Reynaldo González Clifford el día 16 de diciembre de 1999, o sea, seis días después que éste presentó una declaración jurada calumniosa contra el Procurador General de la Nación ante el Notario Quinto de Circuito. Al respecto, pueden consultarse la copia de la declaración notarial jurada rendida el 10 de septiembre de 1999 por el Inspector González ante el Notario Quinto de Circuito, así como la resolución, que concede el ascenso y la acta de toma de posesión del Inspector González, fechadas 16 de septiembre 1999 (Cfr. fs. 212-217).

A foja 264 de los autos, el Director de la Policía Técnica Judicial niega que tales ascensos se hayan dado y agrega que el Procurador no ha aportado documentos tales como: planillas, talonarios, etc. que demuestren la existencia de esos ascensos. Para probar sus afirmaciones, aportó copia simple de la Nota fechada 19 de julio de 1999, mediante la cual el Supervisor de Control Fiscal de la Policía Técnica Judicial informa que a partir de 9 de julio de 1999 no se ha recibido ningún movimiento de planillas referente a ascensos en la Policía Técnica Judicial (f. 720). Igualmente, adjuntó copia simple de un memo fechado 23 de julio de 1999, en el que el Director Administrativo de la Policía Técnica Judicial informa que desde el 2 de enero de 1997, por directrices de la Procuraduría General de la Nación, las Unidades de Planillas y Presupuesto fueron trasladas físicamente a la Sede del Ministerio Público (f. 721).

En el caso específico del ascenso del Inspector Reynaldo González Clifford, el Director General acepta que dicho ascenso se dio, pero no en la forma que sostiene el señor Procurador. Aclara que, en realidad, el Inspector González fue ascendido al cargo de Inspector IV el día 22 de junio de 1999, mediante Boletín N° 047-99 (Cfr. f. 736), pero como no existía ninguna posición vacante en este rango, no devengaba el salario. El 15 de septiembre de 1999 se acogió a jubilación el Inspector IV, Ricardo Caballero, la cual se hizo efectiva a partir del 16 de septiembre 1999, de modo que automáticamente se le reconoció el salario al Inspector IV Reynaldo González Clifford. Para probar su afirmación, el licenciado Moncada aportó copia de una certificación del Jefe de Personal de la Policía Técnica Judicial (Cfr. f. 741).

8. La realización de operativos conjuntos de prevención entre unidades de la Policía Técnica Judicial y miembros de la agencia de seguridad Star Security, S. A., en el centro comercial Los Pueblos. Se trata, afirma el Procurador, de operativos de prevención ajenos a aquélla entidad, que están dirigidos a fortalecer la imagen comercial de dicha empresa, respaldándola con el hecho de tener a su disposición a las unidades de la Policía Técnica Judicial para atender situaciones especiales.

Al respecto, el señor Procurador aporta copia autenticada de una nota, fechada 19 de marzo de 1999, en la que el Jefe de Operaciones de la empresa Star Security, S. A., informa al Ministro de Gobierno y Justicia sobre la realización de un operativo "por parte de miembros de nuestra empresa en conjunto con la Policía Técnica Judicial", por razón de una ola de hurtos de vehículos que se daban en las últimas semanas en ese centro comercial (Cfr. f. 223). Asimismo, aporta copia del informe rendido en marzo de 1998, por tres Detectives de la Policía Técnica Judicial, en el cual reportan al Jefe de Vehículos, que se encontraban en el área de Los Pueblos con la finalidad de prevenir el hurto de vehículos y que hicieron un arresto en el local de Panafoto. Este local comercial, según sostiene el Procurador, tiene contrato con la agencia de seguridad privada Star Security, S. A. (f. 219).

En torno a este cargo, el licenciado Moncada expresa que lo que el Procurador pretende es desacreditar un operativo que tuvo como resultado la captura del antisocial Pablo Antonio Mures Loaiza, quien al momento de su captura

estaba acompañado por Rafael Aguila, quien a su vez tenía caso pendiente con la Fiscalía Auxiliar. Este operativo se dio a raíz de la comisión de un número plural de delitos cometidos en Los Pueblos. Además, estos operativos se realizan en otros centros comerciales. La Policía Técnica Judicial realiza operativos precedidos de diligencias de vigilancia de aquellas áreas consideradas de alto riesgo para la comisión de delitos.

Para fundamentar sus afirmaciones, aporta el licenciado Moncada copia del precitado informe de 13 marzo de 1999, en el cual se alude a la detención del ciudadano Pablo Antonio Mures Loaiza en el centro comercial Los Pueblos (f. 761); declaraciones juradas rendidas ante la Fiscalía Segunda Delegada por siete (7) detectives de la Policía Técnica Judicial, quienes niegan haber laborado en la sociedad Star Security, S. A. y haber recibido órdenes para encargarse de la seguridad del centro comercial Los Pueblos, como funcionario de esa entidad (Cfr. fs. 744-760). También aporta documentación ralacionada con el sindicado Mures Loaiza (fs. 763-768).

9. De lo expuesto en el punto anterior se evidencia un grave conflicto de intereses para el Director General, por cuanto que el mismo fungió como Presidente de la citada empresa desde que ésta fue fundada hasta el 22 de enero de 1996 y porque, actualmente, la esposa del Director General es Directora y Tesorera de Star Security, S. A. y su agente residente continúa siéndolo el citado funcionario.

Al respecto, el señor Procurador aporta copia autenticada de una certificación del Registro Público, fechada 17 de enero del año 2000, en la cual consta que la señora María del Pilar de Moncada es la Tesorera de la agencia Star Security, S. A. y el licenciado Alejandro Moncada es su agente residente. En dicha certificación se indica, además, que el licenciado Moncada ocupó el puesto de Presidente desde la constitución de la sociedad, el día 12 de diciembre de 1994, hasta el 22 de enero de 1996 (f. 227). La precitada certificación fue remitida al señor Procurador por la Subdirectora General del Registro Público, mediante Nota N° 79 DG/2000, del 17 de enero del presente año (f. 226).

En lo que concierne a este penúltimo cargo, el señor Director General de la Policía Técnica Judicial acepta que, como abogado que es, participó en la conformación de la nueva sociedad Star Security, S. A., más no en su fundación y que ejerció la Presidencia de dicha sociedad desde el 14 de diciembre de 1994 hasta el 16 de octubre de 1995, es decir, dos meses antes de que fuese nombrado Director General de esa entidad. Para probar estas afirmaciones aportó copia autenticada de la Escritura Pública N° 9928 del 30 de octubre de 1995, en la cual consta que fue Presidente de la sociedad Star Security, S. A., hasta el día 16 de octubre de 1995 y el original de una certificación del Registro Público fechada 2 de agosto de 1994, en la que consta que, para esa fecha, el Presidente de la aludida sociedad era el señor David Enrique Cubilla (fs. 772-778).

Finalmente, el licenciado Moncada no argumentó nada con relación a la afirmación que hizo el señor Procurador en el sentido de que aquél ocupa actualmente el cargo de Agente Residente de la sociedad Star Security, S. A.

10. Finalmente, mediante Nota fechada 30 de junio de 1999, los fiscales Rolando Rodríguez y Giovanni Olmos comunicaron al Procurador General de la Nación que el señor Julio Kennion, Jefe de Seguridad de Manzanillo International Terminal, les había informado que, en una ocasión, la Directora de la Policía Técnica Judicial de Colón se acercó a su oficina, para informarle que venía en nombre del Director de la Policía Técnica Judicial para ofrecerle los servicios de la agencia de seguridad Star Security, S. A. (f. 222).

Con relación a este último cargo, el licenciado Moncada expresa que el informe elaborado por los Fiscales Rolando Rodríguez y Giovanni Olmos constituye una prueba falsa dirigida a perjudicarlo, tal como lo demuestra el propio Jefe de Seguridad de la empresa Manzanillo International Terminal, Julio Kennion, quien en nota fechada 27 de enero del año 2000, niega que haya emitido concepto

alguno sobre la persona del Director de la Policía Técnica Judicial (f. 770).

CONSIDERACIONES DE LA SALA IV
DE NEGOCIOS GENERALES

Al adentrarnos en el estudio de los cargos expuestos por el Procurador General de la Nación contra el Director General de la Policía Técnica Judicial, esta Sala estima necesario citar algunos de los planteamientos expuestos por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en su Sentencia del 7 de mayo de 1999, con motivo de la acción contenciosa-administrativa de interpretación prejudicial interpuesta por el licenciado Alejandro Moncada, para que la Sala Tercera se pronunciara sobre el sentido y alcance de las órdenes contenidas en la Nota N° DPG-013-99, del 12 de enero de 1999, expedida por el Jefe del Ministerio Público.

En esa oportunidad, la Sala Tercera dejó claramente establecido que la Policía Técnica Judicial fue creada como una "dependencia" del Ministerio Público, tal como se lee en el título o encabezamiento de la Ley N° 16 del 9 de julio de 1991 (Orgánica de la PTJ) y en el contenido de su artículo 1°. La parte pertinente de esta sentencia dice lo siguiente:

> "De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, el vocablo "dependencia" se refiere, por un lado, a la subordinación a un poder mayor y, por otro, a la oficina pública o privada dependiente de otra (21ª Ed. Edit. Espasa-Calpe, S. A. Madrid. 1992. pág. 482). En el mismo sentido, Manuel Ossorio expresa que el referido vocablo alude a la oficina "pública o privada, dependiente de otra superior" (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, 21ª Ed. Edit. Heliasta, S.R.L. Buenos Aires. 1994. pág. 305)."
>
> El hecho de que la Policía Técnica Judicial haya sido creada como dependencia del Ministerio Público, encuentra respaldo jurídico en los numerales 2 y 4 del artículo 217 de la Constitución Política que señalan entre las atribuciones del Ministerio Público: "Promover el cumplimiento o ejecución de las Leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas" y "Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales y legales".
> ...
> Siendo la Policía Técnica Judicial una dependencia del Ministerio Público, está bajo la dirección, vigilancia y control de la Procuraduría General de la Nación, hecho que jurídicamente se fundamenta en los artículos 216 de la Constitución Política y 330 del Código Judicial, de los cuales se infiere que el Procurador General de la Nación es quien preside el Ministerio Público.
>
> De acuerdo con el mencionado Diccionario de la Lengua Española, el vocablo "dirección" significa guiar, gobernar, dar reglas para el manejo de una dependencia, aconsejar a quien realiza un trabajo; la "vigilancia", consiste en velar sobre una persona o cosa o atender exacta y cuidadosamente y el "control", significa comprobación, inspección, fiscalización.
>
> Las funciones de "dirección, vigilancia y control" que debe ejercer el Procurador General de la Nación sobre la Policía Técnica Judicial son complementarias entre sí y significan, según las acepciones dadas, que aquél funcionario puede dictar las pautas o directrices que sean necesarias para el mejor manejo de esta entidad, lo mismo que ejercer sobre ella una labor de inspección o fiscalización. Obviamente, tales funciones deben ser ejercidas en el marco de la Ley Orgánica y del Reglamento Interno de la Policía Técnica Judicial, instrumentos que contienen las normas básicas sobre su organización y funcionamiento.

> Como corolario de todo lo expuesto, puede afirmarse que, de esa relación de dependencia a la cual nos hemos referido surge necesariamente una relación de subordinación jurídica del Director de la Policía Técnica Judicial, respecto del Procurador General de la Nación que es, precisamente, lo que posibilita el cumplimiento de aquéllas funciones de dirección, vigilancia y control consignadas en la Ley. (Registro Judicial, págs. 421-428).

Dentro de este marco jurídico, la Sala Cuarta pasa a considerar el mérito de las imputaciones hechas por el señor Procurador General de la Nación contra el Director y Subdirector General de la Policía Técnica Judicial, no sin antes aclarar que examinará por separado los cargos endilgados a ambos funcionarios.

Esta Sala ha hecho un minucioso examen de cada uno de los cargos que el Jefe del Ministerio Público expuso en su solicitud contra el Director General de la Policía Técnica Judicial; ha estudiado los argumentos expuestos por éste en el libelo contentivo de los descargos y ha valorado todos los elementos probatorios incorporados a los autos, a instancia de cada una de las partes. Este complejo y exhaustivo examen no sólo reveló la grave crisis institucional que existe entre la Policía Técnica Judicial y diversas instancias del Ministerio Público (Procuraduría General, Fiscalía Auxiliar y otras Fiscalías), sino también, llevó a la Sala Cuarta al convencimiento de que algunos de los cargos endilgados por el licenciado JOSE ANTONIO SOSSA al licenciado Alejandro Moncada, constitutivos de faltas a la ética judicial, han sido debidamente probados.

Por razones de economía procesal, la Sala sólo se referirá en el siguiente análisis al estudio de los cargos que considera plenamente probados.

A. Los cargos formulados contra el licenciado Alejandro Moncada:

El primer aspecto que llama la atención de la Sala guarda relación con la publicación en la edición del diario El Panamá América del día lunes 13 de diciembre de 1999, de un comunicado fechado 10 de diciembre del mismo año, a nombre de la Policía Técnica Judicial (Cfr. f. 111). Del extenso contenido de dicho comunicado destacan fundamentalmente dos hechos: por un lado, la acusación pública que se hace al Jefe del Ministerio Público de negarse, en forma ilegal, a "iniciar cualquier investigación preliminar en torno al ciudadano estadounidense MARC HARRIS y sus empresas, aún cuando se le había notificado que la Oficina Federal de Investigaciones (F.B.I.), desde el 11 de diciembre de 1997, tenía interés en que nuestra institución investigara policialmente a dicha organización por sus vínculos con dos (2) sujetos estadounidenses detenidos y confesos en ese país por narcotráfico".

En torno a estas imputaciones, el Procurador General de la Nación argumentó, según consta en autos, que él envió a los Estados Unidos, por los canales diplomáticos, una solicitud de formalización de la Asistencia Judicial como requisito previo e indispensable para autorizar una investigación contra el señor Marc Harris, pero que hasta ese momento, no había recibido respuesta alguna. Según dicho informe, el Procurador agregó que, de no cumplirse este trámite, no se investigaría a Harris puesto que él (el Procurador) es respetuoso del debido proceso legal y su deber es el de salvaguardar la presunción de inocencia (Cfr. fs. 653-663)

El comunicado en mención indica, por otra parte, que "Otro ejemplo en donde la actitud del Procurador General de la Nación, Licenciado JOSE ANTONIO SOSSA, se manifiesta al margen de la Ley, lo es el caso del ciudadano ALFREDO ORANGES, en donde em igual forma, pese a que se le entregó un cúmulo de documentos que prueban la posible vinculación del señor ORANGES a una red internacional de narcotráfico y lacado de dinero proveniente de ese ilícito, con sede en Italia, el Licenciado JOSE ANTONIO SOSSA no solamente se negó a la apertura de una investigación que por Ley estaba obligado a realizar, para determinar la responsabilidad penal o no del señor ALFREDO ORANGES, sino que por el contario (sic) ha ordenado la instrucción de sumarias en contra del jefe de INTERPOL-

PANAMA, Inspector JOSE MOTTLEY, sometiémdolo ilegalmente a una diligencia indagatoria, por el solo hecho de haber brindado asistencia policial a las Autoridades Italianas en este proceso judicial seguido, entre otros, al cuidadano panameño ORANGES BUSTOS, cuyo abogado lo es el Licenciado GUILLERMO COCHEZ."

Para rebatir estas afirmaciones, el señor Procurador General de la Nación aportó un informe cronológico de todas las actuaciones que él realizó con ocasión de la solicitud de asistencia policial internacional formulada por el Tribunal de Roma, dentro del proceso penal seguido a Alfredo Oranges y a otros. Dicho informe alude a 37 diligencias, las cuales, según el Procurador, prueban ampliamente que lo señalado por el Director de la Policía Técnica Judicial no es cierto y que sólo forma parte de una campaña de insubordinación y desprestigio en su contre (fs. 113-119).

En sus descargos, el Director General de la Policía Técnica Judicial, además de que no niega haber participado en la elaboración y publicación del comunicado en mención, se refiere expresamente al "último párrafo de nuestro comunicado ..." (Subraya la Sala). De igual modo, acepta y sostiene que el mismo fue pagado en su totalidad con recursos ajenos a dicha entidad (Cfr. fs. 248-249).

La Sala considera que la publicación del aludido comunicado por parte del licenciado Moncada configura graves faltas contra la ética judicial. El solo hecho de difundir a través de los medios de comunicación tan serias imputaciones implica un claro acto de irrespeto hacia quien ostenta la calidad de "superior jerárquico" del licenciado Moncada y Jefe máximo del Ministerio Público.

El proceder del licenciadod Moncada es igualmente reprochable o censurable, por no ser acorde con el alto sentido de dignidad y decoro que debió prevalecer en todas sus actuaciones, no sólo por su condición de funcionario del Ministerio Público, sino también, por ostentar el más alto cargo dentro de la Policía Técnica Judicial. La conducta del licenciado Moncada, en opinión de la Sala, afectó sensiblemente la imagen y el prestigio del Ministerio Público, dado el negativo mensaje que se envió a la comunidad respecto de las actuaciones de funcionarios a los que se les ha encomendado la delicada tarea de perseguir e investigar los hechos delictivos.

La Sala estima, asimismo, que el licenciado Moncada, en lugar de ordenar la publicación del comunicado en mención, debió actuar con prudencia y mesura, valorando las graves consecuencias que semejante publicación ocasionaría a la buena imagen y al prestigio del que debe gozar el Ministerio Público y evitar, de este modo, el empleo de los medios de comunicación para ventilar problemas y asuntos inherentes a esta intedidad.

Más grave aún, es el hecho de que en el comunicado en mención se hace de conocimiento público hechos concretos, relacionados con el señor Alfredo Oranges y sus posibles vínculos con actividades del narcotráfico, los cuales, para la fecha en que éste fue publicado (13 de diciembre de 1999), eran objeto de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación, tal como se advierte en el informe cronológico de las actuaciones realizadas por el señor Procurador, con motivo de la solicitud de asistencia judicial internacional del Tribunal de Roma, relacionadas con el ciudadano Alfredo Oranges y otros (fs. 113-119). Este proceder del señor director de la Policía Técnica Judicial, sin duda alguna, violó el deber de "reserva" que el artículo 9 de la Ley N° 16 de 1991 impone a todos los miembros de la entidad que él dirige, respecto de las diligencias sumariales, incluídas las de investigación preliminar, en los siguientes términos:

> "Artículo 9. Las diligencias sumariales, incluídas las de investigación preliminar a cargo de la Policiía Técnica Judicial, son reservadas. Pero la parte y su defensor podrán conocerlas cuando se le haya recibido declarión indagatoria al imputado o si éste hubiese sido privado de su libertad durante el curso de las

investigaciones.

Salvo autorización motivada del funcionario de instrucción o del Juez, nadie podrá revelar o publicar por el medio que fuere, ni siquiera de manera parcial mediante extractos o resúmenes, el contenido de las diligencias sumariales.

Al autorizar la publicación, el funcionario competente garantizará, bajo su responsabilidad, que no afecte el resultado de las investigaciones, no lesione de las investigaciones, no lesione los derechos del imputado, ni atente contra la dignidad y la honra de las personas.

Los que infrinjan el deber de la reserva sumarial serán castigados conforme al artículo 170 del Código Penal.

El citado precepto está desarrolado por el literal "1" del artículo 29 de la Resolución N° 25-94 del 15 de noviembre de 1994, por la cual se aprueba el Reglamento Interno de la Política Técnica Judicial. Esta norma señala como un deber de los funcionarios de esta entidad el "Guardar la reserva y confidencialidad que requieran los asuntos relacionados con la naturaleza del trabajo que desempeña, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio a la Institución, en concordancia con el artículo nueve (9) de la Ley N° 16 de 1999.

Todos estos razonamientos llevan a la sala a considerar que el señor Director General de la Policía Técnica Judicial violó los cánomes de ética judicial contemplados en los numerales 1, 4, 6, 12 y 21 del artículo 440 del Código Judicial, que se transcriben a continuación:

"Artículo 440. Todos los funcionarios y empleados del Organo Judicial y los del Ministerio Público, cada uno según la naturaleza de las funciones de que está investido, están obligados a observar y cumplir las siguientes reglas de ética judicial, sin perjuicio de las demás que resulten de las disposiciones expresas de este Código:
...
1. A respetar y acatar la Constitución y las leyes de la República y mantenerlas en su plena integridad, sin que ningún temor los desvíe de la obligación de cumplir las garantías fundamentales y los derechos de los ciudadanos;
...
4. A ser mesurado, atento, paciente e imparcial, como corresponde a la altísima misión de administrar justicia;
...
6. A que su conducta no sólo en el tribunal y en el desempeño de sus funciones, sino también en los quehaceres de la vida diaria, esté por encima de todo motivo de reproche o censura;
...
12. No debe dejarse nunca influir por exigencias partidistas ni por el temor público o de notoriedad personal, ni por temor a críticas injustas;
...
21. Los asuntos judiciales deben ser conducidos con dignidad y decoro, ...";

Lo dispuesto en este artículo se aplica a los funcionarios del Ministerio Público en lo que corresponda." (Subraya la Sala)

Con relación a los hechos hasta aquí examinados, resulta pertinente expresar que, en oportunidad anterior, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia sancionó con la destitución del cargo a dos Magistrados del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial por incurrir en graves faltas contra la ética judicial, al publicar en el diario La Prensa un comunicado directamente relacionado con un

negocio penal que se tramitaba en ese Despacho.

En efecto, el día 22 de febrero de 1994, en la Plana 2 del Diario La Prensa, apareció publicado un comunicado suscrito por los Magistrados Mario Van Kwartel y Kel Arosemena, a través del cual daban respuestas a una noticia que el mismo diario publicó el día anterior, en la cual se indicaba que la sentencia del juicio de Héctor Gallegos estaba estancada. En ese comunicado, los entonces Magistrados Van Kwartel y Arosemena afirmaron que, en dicho Tribunal "los proyectos se estudian y analizan cuidadosamente por todos los magistrados, especialmente cuando provienen de tan enexperta Magistrada" (refiriéndose a la Magistrada Delia Carrizo de Martínez). Agregaron, que ellos se opusieron al cuestionario elaborado por la Magistrada Carrizo de Martínez, porque el mismo era "absurdo, antijurídico e ilegal"; que en ese momento decidieron salvar su responsabilidad sobre el mismo y ante las objeciones de las partes, la magistrada procedió a elaborar un cuestionario nuevo.

Sostuvieron, asimismo, que "es una grave falta de responsabilidad por parte de la Magistrada Carrizo de Martínez revelar a los medios noticiosos lo que ella crea puede ser la decisión de sus colegas con respecto al mencionado proyecto" y que las supuestas declaraciones emitidas por la Magistrada Carrizo de Martínez revelan "un pobre sentido de compañerismo y de lealtad hacia el resto de sus compañeros". Finalmente, el comunicado de los Magistrados Van Kwartel y Arosemena dice textualmente que "jamás en ningún Tribunal de la República, ningún magistrado ha salido a la palestra para poner en la picota pública, de tan injustificada y mala manera, a sus compañeros de labores, ni siquiera por las supuestas connotaciones públicas que pueda tener este caso Gallego o cualquiera otro."

Examina la conducta de los magistrados Van Kwartel y Arosemena y probada su autoría en la elaboración y publicación N° 48 del 28 de febrero de 1994, concluyó que dichos magistrados violaron las normas de ética judicial previstas en los numerales 4, 8, 12 y 21 del artículo 440 del Código Judicial y, con fundamento en los artículos 23 (numeral 4 y último párrafo), destituyó de sus cargos a los aludidos funcionarios. La parte pertinente de la motivación del Pleno en dicho Acuerdo señala lo siguiente:

> "Planteada la cuestión, y luego de una amplia discusión sobre el incidente suscitado y sus consecuencias negativas para la buena marcha de la administración de justicia y el prestigio que debe caracterizar al Organo Judicial a través de la conducta decorosa de todos los sevidores judiciales, sin excepción, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia consideró que los Magistrados Mario Van Kwartel y Kel Harmodio Arosemena del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial han incurrido en una grave falta contra la ética judicial.
> ...
> Del comunicado y de la conversación sostenida con el Magistrado Presidente de la Corte, tampoco resulta que los Magistrados Van Kwartel y Arosemena intentaran previamente conversar con su colega para aclarar cualquier malentendido, máxime cuando la misma no se encontraba en la ciudad de Penonomé ni tampoco pedir al superior jarárquico una investigación sobres estos hechos.
>
> Por el contrario, de manera impulsiva e irreflexiva, sin considerar las consecuencias ambos funcionarios remitieron a la prensa el comunicado de marras con expresiones denigratorias de su colega, conducta ésta completamente reñida con la dignidad y decoro de las funciones judiciales.
>
> Por último, al discutir y calificar en un comunicado de prensa el cuestionario formulado por la Magistrada Carrizo de Martínez en el proceso Gallego, que está pendiente de decisión, los magistrados Van Kwartel y Arosemena han obrado en contra de prohibiciones legales expresas y del más elemental deber de reserva sobre un proceso que

está aún por resolverse."

(Cfr. Entrada N° 122-94, Demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por los licenciados Mario Van Kwartel y Kel Harmodio Arosemena, para que se declare nulo, por ilegal, el Acuerdo N° 48 del 28 de febrero de 1994, expedido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia).

Otro hecho que también merece la censura de parte de esta Sala, lo constituye el incumplimiento de órdenes impartidas por agentes del Ministerio Público. Según consta probado de foja 176 a 179, el Fiscal Auxiliar de la República solicitó al Director de la Policía Técnica Judicial, a través de los oficios fechados 2 y 26 de noviembre y 3 de diciembre de 1999, información relacionada con las sumarias que se adelantaban contra el señor Jorge Mottley, sin recibir respuesta alguna.

En la parte medular de sus decargos, el licenciado Moncada arguye que él acostumbra cumplir sin dilaciones las órdenes recibidas de los agentes del Ministerio Público, pero que dado el cúmulo de requerimientos, delega funciones en el Secretario General y que, para la fecha en que este funcionario preparaba la información pericionada por la Fiscalía Auxiliar, se produce la diligencia de toma de declaración indagaroria al Director de la INTERPOL-Panamá, porque supuestamente falseó información que incriminaba al ciudadano Alfredo Oranges.

Con relación a los anotados argumentos, la Sala conceptúa que éstos no son suficientes para desvirtuar el cargo que en este caso formula el Procurador, fundamentalmente, porque la diligencia de declaración de declaración indagatoria del señor Jorge Mottley, se realizó el día 9 de noviembre de 1999 (Cfr. f. 34) y, posterior a esta fecha, el Fiscal Auxiliar remitió al Director General de la Policía Técnica Judicial dos nuevos oficios, fechados 26 de noviembre y 3 de diciembre de 1999, en los que reitera la solicitud de la información relacionada con las sumarias adelantadas, precisamente, contra el licenciado Jorge Mottley. Mal podría arguirse, entonces, que la diligencia de declaración indagatoria rendida por el licenciado Mottley de algún modo afectó el cumplimiento de lo ordenado por el Fiscal Auxiliar mediante los oficios antes citados.

Asimismo, consta probado en autos que el Director General de la Policía Técnica Judicial durante más de dos meses, omitió dar respuesta a la solicitud que le hizo el Fiscal Superior especial par que aquél le bindara información sobre el listado de personas que a la fecha habían sido sometidas al uso del polígrafo o detector de mentiras. Al respecto, reposa en autos copia auténtica de los Oficios fechados 5 de octubre, 2 de noviembre y 2 de diciembre de 1999, a través de los cuales el Fiscal Superior Especial solicitó la información relacionada con el uso del polígrafo (fs. 181-186).

Cabe anotar, que la negativa del licenciado Moncada motivó que el Fiscal Superior Especial, mediante Oficio N° 14 del 7 de enero del año 2000 (Cf. fs. 185-186), presentara una queja contra el Director General de la Policía Técnica Judicial ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la cual se mantiene en trámite (Cfr. Entrada N° 21-D-2000, Sala de lo Penal).

Em sus descargos el licenciado Moncada se refirió a las dificultades para obtener la información solicitada (Cfr. f. 261), sin embargo, la Sala conceptúa que tales argumentos no son suficientes para justificar que en un lapso de dos meses dicho funcionario no haya dado respuesta alguna al Fiscal Superior Especial, por lo menos, remitiéndole parte de la información recabada o explicándole los motivos de la demora en la remisión de la información que debía ser incorporada a un sumario que esta agencia de instrucción adelantaba.

Más grave aún es la situación al considerar el hecho de que, en el escrito de descargos presentado por el licenciado Moncada, fechado de 31 de enero del año 2000, éste afirma, refiriéndose a la información solicitada por el Fiscal Superior Especial, que "apenas se recopile en su totalidad, procederemos

inmediatamente a remitirla al antes citado despacho de instrucción." (f. 261). Es decir, que la información pedida por el Fiscal Cristóbal Arboleda tadavía no habia sido remitida.

De todos estos razonamientos, la Sala concluye que el licenciado Moncada, al incumplir injustificadamente las órdenes impartidas por el Fiscal Auxiliar de la República y el Fiscal Superior Especial, infringió el numeral 1° del artículo 2 de la Ley N° 16 del 9 de julio de 1991, que establece entre las funciones de la Policía Técnica Judicial la de "Cumplir sin dilación, las órdenes que les impartan los Agentes del Ministerio Público o las autoridades judiciales competentes para iniciar o adelantar diligencias de averiguación ...". Consecuentemente, infringió el canon de ética judicial contemplado en el numeral 1 del artículo 440 del Código Judicial, que obliga a todos los funcionarios del Organo Judicial, que obliga a todos los funcionarios del Organo Judicial y del Ministerio Público a "respetar y acatar la Constitución y las leyes de la República ...".

La Sala estima, asimismo, que el licenciado Moncada también incurrió en grave falta contra la ética judicial al decretar el ascenso del Inspector Reynaldo González Clifford seis días después que éste formuló declaraciones contra el Procurador General de la Nación. En efecto, de la foja 212 a la 217 consta una declaración notarial jurada rendida por el Inspector González Clifford ante la Notaría Quinta del Circuito de Panamá, en la cual brinda detalles de una reunión privada y confidencial, celebrada el 29 de julio de 1999 y en la cual participaron, además de él y el Procurador, el Fiscal Auxiliar de la República, el Director de Seguridad de la Firma de Marc Harris y el señor Gilberto Orrego, presidente de la empresa Caza Reconpenzas.

Según declara González Clifford, en dicha reunión el señor Procurador desligó a la Policía Técnica Judicial de la responsablidad de hacer efectiva cualquier orden de arresto contra el ciudadano Gilberto Boutin, por razón de los casos penales que contra él promovió el ciudadano Marc Harris, ya que su propio personal de seguridad se encargaría de hacer efectivas dichas órdenes de detención. Dicha declaración esta fechada 10 de septiembre de 1999.

Para probar el irrespeto en que incurrió el licenciado Moncada, el señor Procurador aportó copia auténtica de la Resolución N° 075 PER/ASCENSO, del 16 de septiembre de 1999, mediante la cual el Director General de la Policía Técnica Judicial ascendió a REynaldo González Clifford al cargo de Inspector IV (Cfr. F. 216). También consta la respectiva acta de toma de posesión con la misma fecha (Cfr. f. 217).

El licenciado Moncada aceptó que el ascenso del Inspector González Clifford se dio, pero no en la forma que señala el Procurador General de la Nación. Según él, González fue ascendido a Inspector IV el día 22 de junio de 1999, mediante Boletín N° 047-99, pero como para esta fecha no se contaba con ninguna posición vacante en este rango, éste no devengaba el respectivo salario. El 15 de sptiembre de 1999 se acogió a jubilación el Inspector IV, Ricardo Caballero, la cual se hizo efectiva a partir del 16 de septiembre de 1999, de modo que automáticamente se le reconoció el salario al Inspector IV Reynaldo González Clifford.

Para sustentar sus afirmaciones, el licenciado Moncada aportó copia autenticada del Boletín N° 047-99 del 22 de junio de 1999, en el cual se indica que el Inspector III, Reynaldo González Clifford, fue ascendido al grado de Inspector IV en esa fecha; copia de la Resolución N° 1479 del 6 de junio de 1999, mediante el cual se reconoce la jubilación del Inspector IV Ricardo Caballero, así como copia autenticada de su certificado de cese de labores, hecho efectiva a partir del 15 de septiembre de 1999 y certificación del Jefe de Personal de la Policía Técnica Judicial que reitera lo argumentado por el licenciado Moncada en sus descargos (Cfr. fs. 736-741).

Del examen de los argumentos y pruebas aportadas por cada una de las

partes, la Sala considera probado el cargo de irrespeto que arguye el señor Procurador. Ello es así, porque aun cuando el licenciado Moncada indica y trata de probar que el Inspector González clifford fue ascendido antes de sus declaraciones contra el Procurador General, esto es, el 22 de junio de 1999, la copia autenticada de la Resolución N° 075 PER/ASCENSO, que decretó el ascenso y la respectiva acta de toma de posesión revelan, sin lugar a dudas, que el Inspector clifford fue ascendido oficialmente al rango de Inspector IV el día 16 de septiembre de 1999.

A juicio de la Sala, la decisión adoptada por el Director General de la Policía Técnica Judicial no constituye, bajo ningún concepto, una actitud correcta y considerada hacia el Procurador General de la Nación, pues, en todo caso, ante el conocimiento de las declaraciones formuladas por el Inspector González contra el Jefe del Ministerio Público, lo adecuado era suspender los efectos del ascenso y ordenar la adopción de las providencias necesarias para el inicio de un proceso disciplinario contra dicho funcionario, por haber infringido el literal "1" del artículo 29 de la Ley N° 16 de 1991 que, como se ha expresado, obliga a todos los funcioncionarios de esta Institución a "Guardar la reserva y confidencialidad que requieren los asuntos relacionados con la naturaleza del trabajo que desempeña, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio a la Institución, en concordancia con el artículo nueve (9) de la Ley N° 16 de 1999".

Por razón de estos hechos, la Sala estima que el licenciado Moncada igualmente infringió el canon de ética judicial establecido en el numeral 4 del artículo 440 del Código Judicial.

Finalmente, la Sala desea referirse al supuesto "conflicto de intereses" que, según el Procurador, existe en la persona del licenciado Moncada, debido a su vinculación con la sociedad Star Security, S. A. La Sala ha estudiado el caudal probatorio aportado por las partes en torno a este cargo y considera probados tres hechos que, a su vez, determinan la estrecha vinculación que existe entre el licenciado Moncada y la sociedad Star Security, S. A. Estos hechos son los siguientes:

a. Que el licenciado Moncada ejerció el cargo de Presidente y Representante Legal de la sociedad Star Security, S. A., desde el 12 de diciembre de 1994 hasta el 22 de enero de 1996, tal cual consta en la certificación del Registro Público 1996, tal cual consta en la certificación del Registro Público fechada 17 de enero del año 2000 (Cfr. fs. 227).

Según sostiene el licenciado Moncada a foja 276, el cargo de Presidente lo ejerció desde el 14 de diciembre de 1994 hasta el 16 de octubre de 1995. Pese a esta afirmación, la certificación del Registro Público que aportó no prueba la fecha en que inició el ejercicio de dicho cargo, ya que está fechada 2 de agosto de 1994 (Cfr. 778). En cuanto a la fecha en que culminó el ejercicio de dicho cargo, la copia autenticada de la Escritura Pública N° 9,928 del 30 de octubre de 1995, ciertamente indica que fue reemplazado en ese cargo a partir del 16 de octubre de 1995, no obstante, la presentación del Acta contentiva de la Junta Extraordinaria en la que se dispuso el reemplazo del licenciado Moncada por el señor Pablo Ignacio Castrejón Bloise en el cargo de Presidente de Star Security, S. A, fue presentada al Registro Público para su inscripción el día 19 de enero de 1996 e inscrita, oficialmente, el 22 de enero de 1996 (Cfr. 776).

b. Que el licenciado Moncada es actualmente el Agente Residente de dicha sociedad, según la certificación del 17 de enero del año 2000, visible a foja 227. En sus descargos, el licenciado Moncada no niega este hecho, ni aportó pruebas para desvirtuarlo.

c. Que la esposa del aludido funcionario es actualmente la Tesorera de Star Security, S. A. (Cfr. f. 227). Este hecho tampoco ha sido negado ni desvirtuado por el licenciado Moncada.

La comprobación de los hechos anotados es fundamental, considerando que al licenciado Moncada se le imputa el hecho de haber ordenado la ejecución de un operativo conjunto en el centro comercial Los Pueblos, entre unidades de la Policía Técnica Judicial y miembros de la agencia de seguridad Star Security, S. A. Este hecho está plenamente probado en autos, primero, a través de la nota fechada 19 de marzo de 1999, en la cual el Jefe de Operaciones de la agencia de seguridad en mención informó al Ministro de Gobierno y Justicia, acerca del inicio de un operativo "por parte de miembros de nuestra empresa en conjunto con la Policía Técnica Judicial", que dio como resultado la captura de dos antisociales los días 6 y 14 de marzo de 1999, en horas de la noche (Cfr. 223). Segundo, mediante el informe fechado 13 de marzo de 1999, suscrito por tres detectives de la Policía Técnica Judicial, en el que igualmente aluden al operativo realizado en el centro comercial Los Pueblos, "con la finalidad de prevenir el hurto de vehículo (sic) en ese lugar", así como a la captura de los antisociales Pablo Mures Loaiza y Rafael Aguila (Cfr. f. 761).

Al referirse al mencionado operativo, el licenciado Moncada argumenta que lo que el señor Procurador pretende es desacreditar un operativo que se dio a raíz de la comisión de un número plural de delitos cometidos en Los Pueblos y que tuvo como resultado la captura de los antisociales Pablo Antonio Mures Loaiza y Rafael Aguila. Agrega, que la Policía Técnica Judicial realiza operativos de captura y aprehensión de ciudadanos que tienen casos pendientes con las autoridades, no sólo en el centro comercial Los Pueblos, sino también, en casi la totalidad de los centros comerciales del área metropolitana. Tales operativos, están precedidos de las diligencias de vigilancia de aquellas áreas consideradas de alto riesgo para la comisión de delitos, siendo dicho centro comercial, uno de los blancos favoritos de los malhechores (fs. 273-275). Como pruebas de estas afirmaciones, el licenciado Moncada aportó copia autenticada de los documentos que reposan de la fojas 743 a la 768.

La Sala considera que la ejecución conjunta de operativos de "vigilancia y prevención", como el mencionado, en el que participaron unidades de la institución que el licenciado Moncada preside y personal de seguridad de la empresa de la cual él es su Agente Residente, por un lado, no se ajusta a las funciones que según el artículo 1 de la Ley N° 16 de 1991, debe ejercer la Policía Técnica Judicial como "cuerpo auxiliar" del Ministerio Público y del Organo Judicial, "en la investigación, enjuiciamiento y sanción de los delitos, autores y participantes, así como en el cumplimiento de las órdenes y decisiones proferidas" por éste último. Y, por otro lado, afecta sensiblemente el "interés público" que debe guiar todas las actuaciones del licenciado Moncada como funcionario del Ministerio Público, particularmente, por la participación conjunta de unidades de Policía Técnica Judicial y del personal de seguridad de la sociedad de la cual el licenciado Moncada es Agente Residente.

En torno a este punto, la parte final del artículo 46 del Código Judicial, al regular lo relativo a las incompatibilidades de los cargos del Organo Judicial y del Ministerio Público con otros cargos y actividades, claramente establece que éstos son incompatibles con el ejercicio de cualquier cargo o actividad, aunque no sean retribuidos, que interfieran o sean contrarios con los intereses públicos confiados al cargo judicial o del Ministerio Público. De allí que, a juicio de la Sala, el licenciado Moncada violó los cánones de ética judicial contemplados en los numerales 1 y 6 del artículo 440 del Código Judicial, al actuar contra la prohibición expresa que aquél precepto legal contiene (art. 46 ibidem) e incurrir, consecuentemente, en una conducta motivo de censura o reproche.

Por las razones expuestas, la Sala estima que debe acceder a la solicitud formulada por el señor Procurador General de la Nación y otorgar el concepto favorable para destituir de su cargo de Director General de la Policía Técnica Judicial al licenciado Alejandro Moncada, pero sólo por la grave infracción de los cánones de ética judicial contemplados en los numerales 1, 4, 6, 12 y 21 del artículo 440 del Código Judicial.

B. Los cargos formulados contra el licenciado Ramiro Jarvis:

El licenciado Ramiro Jarvis presentó sus descargos mediante el escrito que reposa de la foja 785 a la 847. Del análisis de sus argumentos, así como de las pruebas aportadas por él y por el señor Procurador, la Sala arriba a la conclusión de que el licenciado Jarvis también incurrió en infracción de las normas de ética judicial.

En efecto, al examinar los cargos formulados contra el licenciado Jarvis, se aprecia que en el punto "d.2" a éste se le imputa el hecho de haber publicado, junto con el Director General de la Policía Técnica Judicial, un comunicado el cual acusan públicamente al Procurador General de la República de haberse negado, ilegalmente, a iniciar sendas investigaciones contra los señores Marc Harris y Alfredo Oranges, así como de ordenar el inicio de una instrucción sumarial contra el Inspector Jorge Mottley y de haberlo sometido, también ilegalmente, a una diligencia indagatoria "por el solo hecho de haber brindado asistencia policial a las Autoridades italianas ..." (Cfr. 7 y 111). Por tal motivo, afirma el Procurador, ambos funcionarios violaron el artículo 9 de la Ley N° 16 de 1991.

En la parte pertinente de sus descargos, consultable a fojas 791 y 792, el licenciado Jarvis no niega que participó en la publicación del comunicado en mención. Por el contrario, y al igual que lo hizo el licenciado Moncada, afirma con propiedad que "la publicación del Comunicado de la Policía Técnica Judicial, identificado como (PRUEBA N° 12), por el señor Procurador General de la Nación, fue pagada con recursos ajenos a nuestra entidad".

Ante estos hechos y por las mismas razones que se expusieron anteriormente en torno al licenciado Moncada, la Sala concluye que el licenciado Ramiro Jarvis también violó los cánones de ética judicial comprendidos en los numerales 1, 4, 6, 12 y 21 del Código Judicial.

Otro de los cargos endilgados directamente al licenciado Ramiro Jarvis, que a juicio de la Sala ha sido probado, está contemplado en el subpunto "e.1" del libelo de cargos, que se refiere al incumplimiento de órdenes impartidas por el Procurador General de la Nación, a través del Oficio N° PGN-SG-101-99 del 3 de agosto de 1999, suscrito por Secretario General. Concretamente, se le imputa el hecho de no haber cumplido con el reemplazo de cinco unidades de la Policía Técnica Judicial (Carlos Bernal, Falconeri Quiróz, Regino Moreno, Aristides Pujol y Gilberto Atencio) quienes, estando asignadas a la seguridad del Ministerio Público, fueron retiradas de forma temporal o indefinida. También se le imputa el no haber reemplazado o reintegrado a dos unidades que estaban asignadas a la Fiscalía Superior Especial para la investigación del homicidio del señor Alfredo Laine. En la parte final del cargo "e.1", el señor Procurador expresa que "A la fecha y de acuerdo a la certificación que adjunto, nuestros requerimientos a la Policía Técnica Judicial sobre esta materia, simplemente HAN SIDO IGNORADOS" (Cfr. fs. 8, 121-122).

Para probar el incumplimiento del licenciado Jarvis, el señor Procurador aportó copia autentica de una Nota fechada 6 de enero del año 2000, en la cual, el Subjefe de Seguridad del Ministerio Público, informó al Secretario General de esa entidad "que las unidades de la PTJ, las cuales fueron devueltas a la Policía Técnica Judicial, aún no han sido reemplazadas, a pesar de haber hecho la solicitud formal en varias ocasiones" (f. 124).

Con relación a esta imputación, el licenciado Jarvis afirma que, con posterioridad a la remisión del oficio citado, pudo informar al licenciado Castillo, en calidad de Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, lo siguiente:

> "El Detective Carlos Bernal fue enviado de regreso a la Sede Principal de la Policía Técnica Judicial, por la Jefatura de Seguridad del Ministerio Público el día 24 de mayo de 1999.
>
> El Detective Aristides Puyol, fue enviado de regreso a la Sede Principal de la Policía Técnica Judicial, por la Jefatura de

Seguridad del Ministerio Público el día 17 de julio de 1999.

Con relación a estos dos Detectives sus posiciones en el servicio de Seguridad en el Ministerio Público, fueron suplidas por los Detectives Jaime Rodríguez y Manuel Maya, quienes fueron asignados a ese servicio el día 15 de junio de 1999 en reemplazo de los funcionarios antes mencionados.

El Detective Regino Moreno, fue separado de su cargo como funcionario de la Policía Técnica Judicial, por razones administrativas. Adjunto como prueba copia autenticada de la Resolución de Separación del Cargo de este funcionario. (DOCUMENTO PROBATORIO N° 4)

El Detective Jorge Martez, reemplaza en servicio al Detective Moreno, el Detective Martez, se incorpora al Servicio de Seguridad en el Ministerio Público, el día 15 de junio de 1999.

Detective Falconeri Quiróz, presentó formal renuncia a su cargo como miembro de la Policía Técnica Judicial. Adjunto como prueba copias autenticadas del escrito de Renuncia y Resolución por la cual se aprueba la misma (DOCUMENTO PROBATORIO N° 5).

El Detective Gilberto Atencio, al momento de la comunicación hecha a través del Oficio PGN-SG-101-99 de fecha 03 de agosto de 1999, se encontraba haciendo uso de su derecho de vacaciones, a cuyo vencimiento, retornó a la Seguridad del Ministerio Público, donde hasta la fecha, presta servicio. Adjunto como Prueba, copias debidamente autenticadas de los listados de vacaciones del Personal de Seguridad de la Policía Técnica Judicial, en donde aparece el Detective Gilberto Atencio, con un período de vacaciones del 01 al 15 de agosto y otro del 16 al 30 de agosto de 1999. (DOCUMENTO PROBATORIO N° 6)

El licenciado Jarvis agrega, que no es cierto que el Despacho Superior de la Policía Técnica Judicial retiró a funcionarios de esta institución que estaban al servicio de la Seguridad del Ministerio Público. Dos de los cinco funcionarios mencionados, detectives Quiróz y Moreno, finalizaron sus servicios como miembros de la Policía Técnica Judicial otros dos detectives (Carlos Bernal y Aristides Pujol), fueron retirados de la seguridad de las instalaciones del Ministerio Público por iniciativa de la propia jefatura de la Seguridad de esta entidad y el último (Gilberto Atencio), nunca ha abandonado sus servicios en la seguridad de dichas instalaciones, sino que, al momento en que fue recibido el Oficio fechado 3 de agosto de 1999, estaba de vacaciones. Indica, asimismo, que los funcionarios Jorge Martez, Manuel Maya y Jaime Rodríguez, ingresaron al servicio de la seguridad del Ministerio Público a mediados de junio de 1999 para reforzarlo.

Como prueba de las anteriores afirmaciones, el licenciado Jarvis aportó copia auténtica del informe del Inspector Gustavo Chong Hon, fechado 5 de agosto de 1999 (f. 825), así como copia de otros documentos relacionados con el movimiento del personal, que consta de la foja 817 a la 823.

En lo que respecta a las dos unidades que fueron asignadas para la investigación del homicidio de Alfredo Laine, el licenciado Jarvis afirma que éstos retornaron a su respectiva División, luego de prestar la asistencia policial que le fuera requerida verbalmente.

En concepto de los Magistrados que integran la Sala, los argumentos expuestos y las pruebas aportadas por el licenciado Jarvis no prueban de forma fehaciente el cumplimiento de las órdenes impartidas por el Procurador General de la Nación, a través del Oficio N° PGN-SG-101-99 del 3 de agosto de 1999. Ello es así, fundamentalmente, por las inconsistencias que se desprenden tanto de los

descargos del licenciado Jarvis, como del propio informe rendido por el Jefe de la División de Seguridad de la Policía Técnica Judicial, que consta a foja 825.

En el Oficio N° PGN-SG-101-99, del 3 de agosto de 1999 el Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, por instrucciones del señor Procurador, pidió al licenciado Jarvis el "reemplazo" de las unidades Carlos Bernal, Aristides Pujol, Regino Moreno, Gilberto Atencio y Falconeri Quiróz, las cuales fueron retiradas de las labores de seguridad que prestaban en el Ministerio Público.

Según afirma el licenciado Jarvis, los detectives Carlos Bernal y Aristides Pujol, que devueltos a la Policía Técnica Judicial por iniciativa de la Seguridad del Ministerio los días 24 de mayo y 17 de julio de 1999, fueron reemplazados por los detectives Jaime Rodríguez y Manuel Maya, asignados ambos el día 15 de junio de 1999. Sin embargo, como se infiere de la comparación de estas fechas, el reemplazo del detective Pujol mal pudo darse antes de que fuera retirado de la seguridad del Ministerio Público, hecho ocurrido el 17 de julio de 1999. La misma observación cabe hacerle al informe del Jefe de la División de Seguridad de la Policía Técnica Judicial (Cfr. f. 825).

Igualmente, el detective Regino Moreno tampoco puedo ser reemplazado por el detective Jorge Martez porque la separación del primero se produjo el 7 de julio de 1999 (según consta a foja 817), mientras que el segundo, según afirma el licenciado Jarvis, se incorporó al servicio de Seguridad del Ministerio Público el 15 de junio de 1999. Inclusive, se observa en este punto una grave contradicción entre los licenciados Jarvis y Moncada, ya que el primero afirma a foja 793 que la vacante de Regino Moreno fue llenada por el detective Martez y el segundo sostiene, a foja 254, que "las vacantes producidas por la ausencia de los señores MORENO y QUIROZ, hasta hoy día, no han podido ser llenadas, no hemos estado en capacidad de cubrirlas".

En lo que concierne al detective Falconeri Quiróz, el licenciado Jarvis únicamente argumenta que éste renunció a su cargo, sin afirmar ni probar que envió el respectivo reemplazo, tal como se solicitó en el Oficio N° PGN-SG-101-99 ibidem. Además, debe observarse que la renuncia del señor Quiróz y su correspondiente aceptación se produjeron los días 18 y 19 de febrero de 1999, es decir, muchos meses antes de que se expidiera el citado Oficio del 3 de agosto de 1999.

En el caso del detective Gilberto Atencio, se arguye que al momento de recibirse el oficio en mención, éste gozaba de su derecho de vacaciones, lo cual, en concepto de la Sala, no justifica el incumplimiento de la orden de reemplazo de este funcionario, dada la necesidad de cubrir la posición y el turno que éste ocupaba en las instalaciones del Ministerio Público. Además, es evidente que al concederle vacaciones al detective Atencio las autoridades de la Policía Técnica Judicial debieron proveer de forma inmediata su respectivo reemplazo.

De todas estas anotaciones de la Sala se infiere, pues, que de las cinco unidades que se mencionan en el Oficio N° PGN-SG-101-99 del 3 de agosto de 1999, el licenciado Jarvis sólo ha probado que cumplió con el reemplazo de una de ellas, el detective Carlos Bernal. Por tanto, la Sala estima que el licenciado Jarvis, al no cumplir cabalmente las instrucciones que le fueron impartidas mediante el aludido oficio, violó el canon de ética judicial establecido en el numeral 6 del artículo 440 del Código Judicial.

En lo que concierne al resto de los cargos que formula el señor Procurador General de la Nación, la Sala considera innecesario su examen, habida cuenta de que todos ellos contienen imputaciones que aluden de forma exclusiva al licenciado Alejandro Moncada.

Ante el panorama procesal comentado, esta Sala estima que también existen razones de mérito para acceder a la solicitud de concepto favorable formulada por el señor Procurador General de la Nación respecto del Subdirector General de la

Policía Técnica Judicial.

Luego de todo el anterior análisis, la Sala estima pertinente expresar que las faltas graves a la ética judicial, como causales de destitución, son perfectamente aplicables al Director General y al Subdirector General de la Policía Técnica Judicial. Primero, porque la Ley N° 16 de 1991, orgánica de esta entidad, no establece las causales o motivos por las cuales se puede suspender o destituir de su cargo a estos funcionarios segundo, porque el propio artículo 440 del Código Judicial, preceptúa en su primer párrafo que las "reglas de ética judicial" que éste contiene, además de otras que resulten de disposiciones expresas del Código Judicial, deben ser observadas por "Todos los funcionarios y empleados del Organo Judicial y del Ministerio Público, cada uno según la naturaleza de las funciones de que esté investido" y el artículo 453 del mismo cuerpo legal, en concordancia con aquellas normas, establece que las faltas graves contra la ética judicial, son sancionables con la destitución del cargo, atendiendo las circunstancias personales del responsable y las atenuantes y agravantes que concurran. Estas faltas resultan aún más graves en el caso en estudio, en el cual el irrespeto y la indisciplina de los licenciados Moncada y Jarvis constituyen un escándalo en la comunidad y un mal ejemplo para los funcionarios de otras instituciones del Estado encargadas de velar por el orden y la seguridad.

Cabe agregar, que en Resolución del 15 de junio de 1999 esta Sala se pronunció sobre la aplicabilidad de las normas del Código Judicial a ambos funcionarios. La citada resolución, dictada a raíz de una solicitud de concepto favorable formulada por el señor Procurador General de la Nación para destituir al licenciado Moncada, expresa en su parte pertinente lo siguiente:

> "... con arreglo a la innovación normativa introducida al artículo 20 de la Ley 16 de 1991 por el artículo 1° de la Ley N° 2 de 6 de enero de 1999, la circunstancia de requerir el concepto favorable para que el Procurador General de la Nación pueda remover de su cargo al Director General de la institución auxiliar de la administración de justicia, le confiere a su titular a una singular posición de estabilidad en el cargo, puesto que sólo puede ser removido cuando media esta autorización o concepto favorable de la Sala. De allí que la conducta del titular de la Policía Técnica Judicial tenga especial relevancia, porque la decisión, de resultar favorable, permitiría la separación del cargo de un funcionario que ostenta estabilidad en el cargo, y que, como es natural, sólo puede ser destituido del mismo, cuando medien circunstancias especialmente graves consistente en conductas que tengan como consecuencia la expedición de este acto administrativo de administración de personal, en el estricto terreno del Derecho Administrativo, que es el ámbito en el cual se mueve la Sala Cuarta en el ejercicio de la emisión del concepto favorable requerido por el señor Procurador General.
>
> Una lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 16 de 1991 frustran el próposito de determinar si en dicha ley se encuentran causales de destitución del Director de la Policía Técnica Judicial. No obstante, se encuentran previstas conductas que ameritan la destitución las señaladas en el artículo 283 del Código Judicial. También se puede perder el cargo según lo dispuesto en el artículo 296 del Código Judicial."

Antes de concluir, esta Sala desea expresar su profunda preocupación y censurar la conducta de algunos Agentes del Ministerio Público quienes se refieren en algunas de sus comunicaciones (Ver foja 706) con expresiones peyorativas hacia los funcionarios de la Policía Técnica Judicial. El empleo de esta clase de expresiones con las que se califica al personal y al trabajo de la Policía Técnica Judicial no es propio de la relación de cortesía, respeto mutuo y profesionalismo que debe existir entre ambas entidades y contribuye

significativamente con el deterioro de dicha relación. De allí, que resulte necesaria la adopción, por parte del Jefe del Ministerio Público, de las medidas conducentes para evitar que tales prácticas se sigan suscitando.

Por las razones expuestas, la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia, OTORGA CONCEPTO FAVORABLE al señor Procurador General de la Nación para que destituya a los licenciados Alejandro Moncada y Ramiro Jarvis de los cargos de Director General y al Subdirector General de la Policía Técnica Judicial, respectivamente, por la infracción de los numerales 1, 4, 6, 12 y 21 del artículo 440 del Código Judicial.

Notifíquese,

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (SALVAMENTO)
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ROGELIO A. FABREGA Z.

El suscrito, Magistrado Rogelio A. Fábrega, estima que las infracciones que se dejan expuestas en el fallo, no están revestidas de la gravedad que amerite la imposición de la más grave de las medidas disciplinarias, la separación definitiva del cargo. Es de censurar la renuencia del Director de la Policía Técnica Judicial de acatar las instrucciones de los agentes del Ministerio Público. Se debe señalar que ambos servidores judiciales han escenificado por los medios de comunicación social un amplio debate sobre sus respectivas responsabilidades, que ponen en dificultades la capacidad de coordinar por parte del Ministerio Público las delicadas actividades que la ley le asigna, colaboración ésta que ha de requerirse que se lleve a cabo de manera urgente por ambos servidores judiciales, en benificio de la administración de justicia.

Se debe señalar, una vez mas, que le corresponde al Procurador General de la Nación la dirección y vigilancia de la Policía Técnica Judicial, y al Director General de ésta última, coordinar con el Procurador General de la Nación las labores de ambas dependencias, y al Director de la Policía Técnica Judicial, el debido acatamiento a las instrucciones de los agentes del Ministerio Público, deberes éstos que el suscrito Magistrado disidente se encuentra nuevamente precisado a reiterar, censurando la conducta desplegada.

No le corresponde al Director de la Policía Técnica Judicial escoger, a su libre arbitrio, qué órdenes de los agentes del Ministerio Público, debe obedecer, sino, en la medida en que se trate de órdenes que llevan dentro de sí un elemento incuestionable de racionalidad y de relación con las delicadas funciones del Ministerio Público, y compatibles con el régimen de descentralización que la Sala ha predicado de la Policía Técnica Judicial, la que, además, debe seguir los lineamientos que, para la debida coordinación de ambas dependencias, pueda ejercer el Procurador General de la Nación en su misión fiscalizadora del ente auxiliar de investigación, enjuiciamiento y sanción de los delitos y de sus participantes, como de manera clara y explícita señala el artículo 1° de la Ley 16 de 9 de junio de 1991.

No obstante, el suscrito estima que carecen de entidad suficiente para otorgar el concepto favorable solicitado por el señor Procurador General para que éste pueda separa de su cargo, de manera definitiva, al señor Director de la Policía Técnica Judicial. Como esa no es la posición de la mayoría, me veo precisado a salvar el voto, con todo respeto.

Panamá, 25 de abril de 2000.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=